

# Comentarios a la legislación cooperativa de Andalucía

**. Ley 14/2011 de 23 de diciembre de  
Sociedades Cooperativas Andaluzas**

**. Reglamento de la Ley 14/2011  
(Decreto 123/2014 de 2 de septiembre)**



FEDERACIÓN ANDALUZA DE EMPRESAS  
COOPERATIVAS DE TRABAJO



Esta publicación se realiza en el marco del Proyecto "**Análisis y valoración de la normativa andaluza sobre cooperativismo de trabajo**". Acción subvencionada por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en el marco de la convocatoria 2014 de la Dirección General de Economía Social de subvenciones con cargo a la medida "*Difusión y Promoción de la Economía Social*". Expediente: 453956.



Realiza: FAECTA (<http://www.faecta.coop>).



Asistencia técnica: Jarsia.



Colaboran: Autonomía Sur y Abogad@s en Red.



Fecha de realización: 2015/2016.

## PRÓLOGO

La Comunidad Autónoma Andaluza cuenta con una legislación en materia cooperativa que fue consensuada en su día con las organizaciones representativas del sector. Este acuerdo con las organizaciones implica el consenso con las propias empresas cooperativas. Se recogieron las demandas, inquietudes y perspectivas que surgían de las propias empresas.

Este trabajo conjunto Administración/Empresas, propició una ley que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía, una ley novedosa, una ley que permite un abanico de posibilidades más amplio y abierto de lo que cabría esperar de todos los trabajos previos que se produjeron.

Las ideas cooperativas funcionan, sin embargo, hay que explicarlo.

Explicación viene del latín “explicatio”, que quiere decir desplegar lo que estaba doblado y oculto, que no es visible, haciendo comprensible lo que en un primer momento no lo es. Para ello hay que dejar patente el qué, porqué y cómo de las cosas, pero sobre todo que cada uno de nosotros seamos portavoces del modelo y sintamos orgullo del mismo.

Y es verdad. Las ideas cooperativas funcionan pero la mayor parte de la gente, de la sociedad, no lo sabe. Nos falta visibilidad. Nos falta “Explicatio”.

El presente manual, pretende ser una herramienta que contribuya a la difusión de este modelo empresarial. Pretende ser un manual de consulta para las personas emprendedoras, para las cooperativas existentes, para que puedan desarrollarse societariamente y empresarialmente con una mayor claridad jurídica. También está dirigida a los/as profesionales del derecho y al resto de la sociedad.

Esa es nuestra gran pretensión, esperemos que el tiempo nos de la razón y el presente manual pueda contribuir al desarrollo de una forma de hacer empresa donde la persona es el centro de la misma.

Antonio Rivero López

Presidente de FAECTA

## **ÍNDICE GENERAL**

	Pág.
<b>EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .....</b>	<b>5</b>
<b>TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES (arts. 1 a 7) .....</b>	<b>16</b>
<b>TÍTULO PRIMERO. CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO</b>	
• <b>CAPÍTULO I. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA (arts. 8 a 12) .....</b>	<b>33</b>
• <b>CAPÍTULO II. RÉGIMEN SOCIAL (arts. 13 a 24) .....</b>	<b>62</b>
• <b>CAPÍTULO III. DEL INVERSOR O INVERSORA (art. 25) .....</b>	<b>97</b>
• <b>CAPÍTULO IV. ÓRGANOS SOCIALES (arts. 26 a 52) .....</b>	<b>101</b>
• <b>CAPÍTULO V. RÉGIMEN ECONÓMICO (arts. 53 a 71) .....</b>	<b>257</b>
• <b>CAPÍTULO VI. LIBROS SOCIALES Y AUDITORÍA DE CUENTAS (arts. 72 y 73) .....</b>	<b>310</b>
• <b>CAPÍTULO VII. MODIFICACIONES ESTATUTARIAS Y ESTRUCTURALES (arts. 74 a 78) .....</b>	<b>329</b>
• <b>CAPÍTULO VIII. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN (arts. 79 a 82) .....</b>	<b>379</b>
<b>TÍTULO II. TIPOLOGÍA DE COOPERATIVAS</b>	
• <b>CAPÍTULO I. CLASIFICACIÓN Y NORMAS GENERALES (art. 83) .....</b>	<b>397</b>
• <b>CAPÍTULO II. SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRIMER GRADO (arts. 84 a 107) .....</b>	<b>399</b>
• <b>CAPÍTULO III. COOPERATIVAS DE SEGUNDO O ULTERIOR GRADO Y OTRAS FORMAS DE INTEGRACIÓN (arts. 108 a 110) .....</b>	<b>489</b>



**TÍTULO III. ASOCIACIONISMO COOPERATIVO (arts. 111 a 114) ..... 502**

**TÍTULO IV. LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y LA ADMINISTRACIÓN**

- **CAPÍTULO I. FOMENTO Y PROMOCIÓN COOPERATIVA (arts. 115 a 117)..... 517**
- **CAPÍTULO II. REGISTRO DE COOPERATIVAS ANDALUZAS (arts. 118 y 119) ..... 529**
- **CAPÍTULO III. RÉGIMEN SANCIONADOR (arts. 120 a 125) ..... 564**
- **CAPÍTULO IV. DESCALIFICACIÓN (art. 126) ..... 571**

**DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS Y FINALES ..... 612**

**ÍNDICE ANALÍTICO ..... 615**

**BIBLIOGRAFÍA ..... 623**

## LEY 14/2011, de 23 de diciembre, de SOCIEDADES COOPERATIVAS ANDALUZAS (Boletín Oficial Andalucía 255/2011, de 31 de diciembre de 2011)

### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.- La Constitución Española establece en su art. 129.2 que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su art. 58.1.4.º atribuye competencias exclusivas a la Comunidad Autónoma en materia de fomento, ordenación y organización de cooperativas, y más específicamente la regulación y el fomento del cooperativismo; además, su art. 172.2 establece que serán objeto de atención preferente, en las políticas públicas, las cooperativas y demás entidades de economía social.

Con base en los textos referidos –en el caso del segundo, de su predecesor, el Estatuto de Autonomía para Andalucía de 1981– se promulgaron las Leyes 2/1985, de 2 de mayo, y 2/1999, de 31 de marzo, ambas, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

La necesidad de dotar a dicho sector de un nuevo texto legal transcurrido un periodo de tiempo relativamente breve, poco más de una década, requiere ciertamente una justificación. No cabe duda de que en dicho periodo tanto la realidad socioeconómica sobre la que operan los distintos agentes económicos como la normativa y políticas de la Unión Europea en relación con la pequeña y mediana empresa han cambiado notablemente. Pero, más allá de lo que puede considerarse una adaptación a la lógica evolución del entorno económico y normativo en que se insertan estas entidades, lo que justifica una ley de nueva planta es, junto a la profusión y heterogeneidad de las reformas, que estas afecten sensiblemente al modelo de empresa que se regula.

Las sociedades cooperativas son, en lo esencial, empresas democráticas y solidarias que hacen de la formación de sus integrantes y de la cooperación herramientas privilegiadas para su desarrollo. Sin embargo, junto a esos elementos identificadores coexisten todavía hoy en el ámbito cooperativo determinados postulados y categorías que no solo no integran o se derivan de los principios cooperativos sino que, además,

contribuyen a hacer una interpretación de dichos principios alejada de la cambiante realidad socioeconómica a la que toda empresa, cooperativa o no, debe adaptarse. A este respecto, es objetivo de la presente ley eliminar todos los obstáculos que impiden el desarrollo integral de las sociedades cooperativas con respeto a los valores que esencialmente las caracterizan. Sin perjuicio de su posterior reseña en los capítulos correspondientes, la reforma operada en este ámbito se extiende a aspectos tales como las distintas formas de organizar el órgano de administración de estas empresas; la pervivencia, o no, de ciertos órganos sociales; la compatibilidad del principio de puerta abierta con el establecimiento de un periodo de prueba societario; el eventual incremento de la aportación del nuevo socio; la libertad de transmisión de las participaciones sociales; la asunción de instrumentos financieros existentes en el mercado compatibles con la naturaleza de estas sociedades; el reajuste del importe y destino de los fondos sociales obligatorios; la reducción drástica de las autorizaciones administrativas, o la simplificación societaria y contable de estas sociedades. En el caso de determinadas clases de cooperativas, las de trabajo y las agrarias, concierne asimismo a cuestiones tales como la flexibilización del régimen del trabajo por cuenta ajena o el voto plural, respectivamente. Por lo demás, no es de extrañar que, en más de un supuesto, pautas comunitarias y necesidad interna de renovación coincidan plenamente.

Junto a ello, y en cierto modo en un sentido inverso, hay valores y principios que, sin formar parte expresa del ideario cooperativo inicial, entre otras, por razones cronológicas, se incardinan en la misma corriente de pensamiento progresista que en sus orígenes asumió dicho sector, hasta el punto de que en la actualidad forman parte del compromiso de buena parte del mismo. Es el caso de la igualdad de género, de la sostenibilidad empresarial y medioambiental, o del fomento del empleo. Incumbe ahora a la ley incorporarlos formalmente, en el convencimiento de que, lejos de tratarse de cuestiones pasajeras, constituyen aspiraciones de largo alcance que, como se ha dicho, se ajustan ejemplarmente a la naturaleza y objetivos de estas empresas, cumpliéndose además, en el caso de la igualdad de género, con la normativa en vigor al respecto.

En el plano formal merecen destacarse dos aspectos de la norma íntimamente ligados a su contenido. De una parte, se trata de un texto que, dada la complejidad de la materia que regula, es relativamente escueto, al contemplar un desarrollo reglamentario más extenso y de carácter general, inusual en el caso de normas precedentes sobre la materia. De otra, dicho texto contiene multitud de remisiones a los estatutos sociales, a fin de permitir el desarrollo autónomo de un buen número de materias con arreglo a las

necesidades singulares de cada empresa. Es vocación de toda norma de rango legal su permanencia en el tiempo, y ambas técnicas contribuirán en este caso a asegurarla habida cuenta de la realidad muy cambiante en que se inserta, que en el pasado ha obligado a sucesivas renovaciones de carácter general.

La presente ley se estructura en cinco títulos y consta de ciento veintiséis artículos, una disposición adicional, dos transitorias, una derogatoria y tres finales.

II.- En el título preliminar destaca la reformulación que se hace de los principios por los que habrán de regirse las sociedades cooperativas andaluzas. En general, el cotejo de los principios del art. 4 con los aprobados por la Alianza Cooperativa Internacional no revela tanto contradicción como reequilibrio o adaptación evolutiva.

III.- En el apartado dedicado a la constitución de la sociedad cooperativa destaca como novedad significativa la posibilidad de constituir una sociedad cooperativa andaluza sin necesidad de escritura notarial, con alguna excepción, siguiendo los principios auspiciados por la Unión Europea sobre la pequeña y mediana empresa relativos a simplificar la legislación existente o reducir las cargas administrativas que pesan sobre las empresas. Aunque, en principio, pudiera parecer que esta decisión resta garantías al proceso constitutivo, la configuración de un registro público, altamente especializado e íntegramente telemático, está en condiciones de asegurar garantías similares a las que presta la intervención de un fedatario público que, salvo en algún caso, se configura como opcional.

IV.- En lo que respecta al régimen social de estas empresas, destaca la potenciación de la figura del inversor o inversora, a los que se permite una mayor participación en el capital social, se modifica el límite de su capacidad de decisión y se diversifica su remuneración, de manera que su perfil resulte más atractivo y permita su ingreso en la sociedad para contribuir a solventar las necesidades de financiación. Especial relevancia cobra el incremento de su participación en el capital, por cuanto en ocasiones, durante la vigencia de la actual ley, una persona –especialmente jurídico-pública, pero también privada– ha estado en condiciones de aportar al proyecto empresarial cooperativo elementos estratégicos de gran valor, como terrenos o instalaciones, impidiendo dicha normativa que se lleve a efecto por exceder de los estrechos márgenes establecidos. Coherente con la promoción de esta figura, la ley le reserva un capítulo propio y prescinde del eufemismo «asociado» que el texto legal precedente utilizaba.



V.- Relativo todavía al régimen social de estas entidades pero extendiéndose asimismo a su régimen orgánico, destaca una de las novedades fundamentales de la presente ley, cual es la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Ello incluye tanto la relación de la entidad con sus personas socias como la constitución y funcionamiento de sus órganos sociales. Son innumerables las aplicaciones que estas tecnologías pueden tener en la vida societaria, facilitando su fluidez y salvando obstáculos de carácter físico, muy especialmente en el supuesto de sociedades de gran tamaño con una base social dispersa: desde el ejercicio del derecho de información, pasando por la convocatoria y desarrollo de las sesiones de los órganos colegiados de la entidad, hasta el mismo ejercicio del derecho al voto. Naturalmente, en este particular, compete a la ley autorizar el uso de las citadas tecnologías y exigir el cumplimiento de las garantías precisas para su ejercicio, difiriendo, en lo que respecta a este último extremo, su concreción a la norma reglamentaria al tratarse de una materia en continua evolución.

Continuando con el régimen orgánico de la entidad, deben reseñarse varias novedades en relación con su órgano de administración. En primer lugar, se procede a apurar su versatilidad, pues, si bien el órgano de administración natural de la sociedad cooperativa, con arreglo al art. 36, sigue siendo el Consejo Rector, se mantiene para las empresas de menor tamaño la figura del Administrador Único y se prevé también para estas la figura de los Administradores Solidarios. A esta variedad orgánica se une su flexibilidad funcional, dado que desaparece la obligatoriedad de reuniones predeterminadas por ley para ajustarse a las necesidades de cada sociedad, dentro de los imperativos mínimos que exigen sus obligaciones, muy especialmente la convocatoria de la Asamblea General para la aprobación anual de las cuentas sociales. Especial atención se ha prestado, no obstante, a que la reforma de este órgano no alcance, en modo alguno, a aquellos aspectos relacionados con su control societario que hacen inviables en estas sociedades prácticas de gestión incontroladas u orientadas al mero lucro de quienes las ejercen. Es por ello que, a pesar de contemplar su eventual remuneración cuando la naturaleza de sus funciones lo aconseje, se reserve a la Asamblea General su modalidad y cuantía, o que entre la diversidad morfológica prevista se excluyan supuestos que suponen la responsabilidad mancomunada de sus miembros y que restan garantías a las personas socias en relación con los que implican una responsabilidad de carácter solidario.

Otra novedad destacable del texto es la supresión, con el carácter de obligatoria, de una figura histórica del derecho cooperativo cual es la de los interventores. La aproximación progresiva al derecho general de sociedades y en especial la asunción de la

auditoría externa –que la presente ley extiende a más supuestos de los contemplados convencionalmente para las sociedades cooperativas– convierten a este órgano en algo superfluo e incluso extravagante. Además, el carácter altamente especializado de las tareas de fiscalización económica y contable que se les asignaban no se corresponde, en la gran mayoría de los casos, con la preparación de las personas elegidas para su ejercicio; preparación que, por otra parte, y esto es lo relevante, no se requiere para alcanzar un perfil ajustado de excelencia empresarial. Con todo, coherente con su carácter autonomista, la ley permite su asunción estatutaria por aquellas sociedades cooperativas de cierta envergadura que la consideren operativa y cuenten con personas adecuadas para su ejercicio.

Es de resaltar, asimismo, en el plano organizativo la creación de un nuevo órgano societario de carácter voluntario: el Comité Técnico. Diseñado especialmente para sociedades de gran tamaño, este órgano recoge y unifica algunas de las facultades que la ley que se deroga atribuyó a los interventores así como las que atribuía al Comité de Recursos.

En el apartado organizativo, por último, merece mencionarse la regulación que se hace de las secciones, orientada a dotarlas de un mayor grado de autonomía funcional.

VI.- En el apartado económico resalta, con carácter preliminar, el esfuerzo pedagógico de la norma a la hora de conceptuar las distintas acepciones del capital de estas empresas, pues junto a las distinciones clásicas entre capital mínimo –estatutario– y real –contable–, o aportaciones obligatorias y voluntarias a dicho capital, viene ahora a sumarse, por imperativo de la legislación comunitaria, la relativa al carácter reembolsable o no de dichas aportaciones. En parte, con distinta finalidad, se recoge en la ley otra medida que afecta, asimismo, al carácter reembolsable de las aportaciones sociales, al posibilitar conferirles el carácter de transmisibles a terceros. En efecto, de establecerse estatutariamente, las aportaciones al capital social podrán transmitirse por los socios y socias a personas ajenas a la entidad por el importe que acuerden libremente, sin más participación del órgano de administración que la de constatar que la persona adjudicataria reúne los requisitos de admisión y que se han observado los derechos de preferente adquisición establecidos al respecto. La contraprestación a este derecho de los socios y socias es que, en caso de baja, de no lograr transmitir su aportación, la sociedad puede denegar su reintegro. Riesgo empresarial y estabilidad de la sociedad están en la base de esta reforma. De una parte, se hace partícipe a la persona socia en el incremento

o pérdida patrimonial que ha contribuido a generar en la entidad a la que pertenece y, de otra, se refuerza la solidez de dicha entidad, que no resulta afectada por su salida.

Al respecto de las aportaciones de nuevo ingreso, la ley contempla dos medidas de signo opuesto que bien pueden considerarse complementarias. Voluntarias ambas, mediante su recepción estatutaria, la primera de ellas permite que la aportación que deba realizar la persona aspirante a socia se establezca en función del activo patrimonial o valor razonable de la empresa. La segunda autoriza al órgano de administración a acordar el ingreso de la persona aspirante con un desembolso menor al establecido, o incluso a no efectuar desembolso alguno, aplazando dicha obligación al recibo de anticipos o a la satisfacción de retornos.

También deben resaltarse en este apartado medidas encaminadas, de una parte, a la simplificación del diseño económico contable de estas entidades y, de otra, a su homologación financiera. En el primer caso, se reducen los distintos tipos de resultados exclusivamente a dos –cooperativos y extracooperativos–, que pueden llegar incluso a unificarse, de establecerse estatutariamente, con la aplicación de un régimen de estimación objetiva. En el segundo, se admite cualquiera de los instrumentos de financiación existentes en el mercado, con el único requisito de que no desnaturalicen el proyecto cooperativo, regulándose expresamente algunos, tales como los títulos participativos o las participaciones especiales.

Mención especial requieren los fondos obligatorios de estas empresas. Mención que habrá de hacerse de forma individualizada, pues distinto es el enfoque y valoración que de cada uno de ellos se hace y en consecuencia su regulación. En el caso del fondo de carácter social, hasta ahora llamado de Educación y Promoción, la ley persigue su consolidación, incluso, en algún supuesto, su realce, en la medida en que dicho fondo refleja aspectos tan relevantes para estas sociedades como son la formación de sus integrantes o la solidaridad con el entorno. Por otra parte, se diversifica su contenido pues, junto a finalidades tradicionales, es con cargo a este fondo como se han de materializar, con carácter mínimo, algunos de los nuevos principios, cuales son los de igualdad de género o sostenibilidad medioambiental. De ahí, la nueva denominación que recibe: Fondo de Formación y Sostenibilidad. En el caso del Fondo de Reserva Obligatorio, sin embargo, la perspectiva de la que se parte es muy distinta. Y no porque se estime que dicho fondo carezca de importancia. La existencia de un fondo de garantía y consolidación –función que le atribuye la normativa comparada– es para cualquier

empresa, también para la cooperativa, fundamental para un desarrollo estable. Pero en el caso de la sociedad cooperativa el sentido de dicho fondo está contaminado por determinados aspectos dogmáticos que es necesario analizar para entender la reforma que del mismo se opera. Tradicionalmente, la existencia de un fondo de reserva integrado por un elevado porcentaje de los resultados positivos, además de otros ingresos de la entidad, al que se reviste del carácter de irrepartible, representa la contrapartida exigible a estas empresas por las ayudas públicas que reciben, especialmente en el plano fiscal. Con independencia de que las citadas ayudas cada vez tienen una importancia relativa menor por imperativo de la política de la Unión Europea sobre defensa de la competencia, parece olvidarse que la aportación de estas empresas a la sociedad va mucho más allá de un cierto canon económico, debiéndose medir en aspectos más relevantes, tales como la democracia económica, la vertebración territorial o la cohesión social a la que contribuyen. Consecuentes con este planteamiento, se reducen los porcentajes de resultados, tanto cooperativos como extracooperativos, que necesariamente han de engrosar este fondo, hasta situarlos en parámetros similares al resto de las empresas convencionales, y se limita, asimismo, la parte del mismo que ha de ponerse a disposición de la Administración andaluza. En el primer caso, conviene insistir en el carácter de porcentaje mínimo obligatorio, por cuanto nada impide que la entidad, libremente, valore en cada ejercicio si conviene prestar solidez al proyecto intensificando el volumen de sus reservas, interesa invertir parte de esos resultados directamente en su ampliación o modernización, o conviene distribuir los resultados entre las personas socias. En el segundo, cabe señalar que dicho límite, articulado mediante un porcentaje cuyo importe ha de ponerse a disposición de la Administración para que esta lo destine íntegramente al movimiento cooperativo, pretende conciliar de manera equitativa la necesaria contribución a la solidaridad intercooperativa, en tanto rasgo definitorio de estas entidades, con la conveniencia de retribuir el esfuerzo de las personas socias que han contribuido a generar dicho fondo, en cuanto atributo propio de toda empresa.

VII.- En lo que respecta a la documentación social y contable, la ley prevé mecanismos para su agilización como son la reducción de los libros sociales necesarios o la posible contabilización única referida en el apartado anterior.

VIII.- En lo relativo a los procesos modificativos, se contemplan supuestos no previstos legalmente hasta ahora, cual es el caso de la fusión heterogénea o la cesión global del activo y pasivo de estas entidades, y, en el caso de la fusión, dada su trascendencia para la integración del tejido cooperativo, muy especialmente el agrario, se aborda con la



flexibilidad que dicho proceso está exigiendo actualmente.

IX.- La regulación de los procesos de disolución y liquidación está presidida por la necesidad de simplificar su tramitación, sin merma de las garantías esenciales correspondientes a todos los agentes intervinientes en el proceso.

X.- En lo que respecta a la regulación singular de cada una de las clases de sociedades cooperativas, cuya estructura se conserva desde la ley de 1985, resistiendo la tentación de convertir su clasificación en un mero catálogo como ocurre con la mayoría de las leyes sobre el sector, conviene empezar por las que resultan más numerosas en Andalucía: las cooperativas de trabajo. Sin ser lo más importante, pero sí llamativo, el cambio de denominación responde al esfuerzo de concisión presente a lo largo del texto legal. En las cooperativas de trabajo, el trabajo es siempre y por definición asociado, resultando, pues, superfluo como calificativo e implícito en el nombre.

De más calado resulta la previsión de un periodo de prueba societario para estas empresas, que se establece como opcional mediante su previsión estatutaria. Así como en las empresas convencionales, también en las cooperativas parece razonable que exista un periodo de prueba para verificar la aptitud y actitud del trabajador por cuenta ajena durante el cual se pueda resolver libremente el vínculo laboral entre ambas partes, además, en las sociedades cooperativas de trabajo, con independencia de dicho periodo, puede resultar primordial para las partes someter a prueba su relación puramente societaria.

Otro aspecto fundamental sobre el que la ley opera una reforma es el relativo al trabajo por cuenta ajena en estas sociedades. El régimen de la ley que la presente viene a sustituir se articulaba sobre una legitimación escalonada de dicho trabajo, que hasta un cierto porcentaje se consideraba, por definición, lícito. A continuación, se enumeraban determinados supuestos de hecho, por lo general regulados por contratos de carácter especial, que legitimaban, asimismo, dicho trabajo dentro de ciertos límites. Y, por último, el resto del trabajo por cuenta ajena, en principio ilícito, se sometía caso por caso a autorización administrativa, con la intervención, en su caso, del Consejo Andaluz de Cooperación. Dicho régimen se ha demostrado claramente ineficiente, muy especialmente en lo que respecta a la medida de las autorizaciones. No parece de recibo que el tráfico ordinario de una empresa deba estar sometido a la intervención continua de la Administración. La reforma opera liberalizando estas relaciones en un sentido parecido al

de otras legislaciones autonómicas y del Estado. Más allá de un porcentaje que se estima razonable, cincuenta por ciento, el volumen de trabajo que estas empresas podrán contratar por cuenta ajena se vuelve a referir a determinadas situaciones que la mutabilidad del mercado laboral y su normativa aconsejan que se determinen reglamentariamente, pero entre estas, y aquí radica la novedad, se reconoce el supuesto en que, habiéndose ofrecido el ingreso societario a la persona contratada, esta lo rehúse expresamente. Sobre la base de no dificultar el desarrollo de estas empresas, que con frecuencia pasa por el engrosamiento de sus plantillas, solo cabe establecer los mecanismos necesarios para que este se realice, preferentemente, ampliando su base social. De resultar, sin embargo, ello imposible, por el desinterés de sus integrantes en adquirir la cualidad de persona socia, la Administración no debe abocar a la entidad a cercenar su crecimiento o cambiar de forma societaria. Como contrapartida, el incumplimiento de la obligación de ofrecer a las personas trabajadoras el acceso a la condición de socio se considera falta muy grave. La existencia, por otra parte, en nuestra Comunidad Autónoma, de una Inspección específica para el sector cooperativo está en condiciones de controlar el trabajo por cuenta ajena en estas empresas más allá de los límites legales establecidos.

Por último, conviene resaltar dentro de esta clase a las sociedades cooperativas que la ley denomina de impulso empresarial, cuya finalidad es la de canalizar las inquietudes emprendedoras de sus eventuales socios y socias en cualquiera de las formas previstas en el art. 93, asumiendo, singularmente, el objetivo de contribuir desde el modelo cooperativo al afloramiento con carácter regular y colectivo de servicios que eventualmente se prestarían en el ámbito de la economía informal.

XI.- En lo que respecta a las sociedades cooperativas de consumo, cuya denominación también se abrevia, destaca especialmente el régimen establecido para las de vivienda. La finalidad perseguida en este ámbito ha sido la de establecer un régimen equidistante entre el anterior a la Ley de 1999, de perfil liberal, y el muy restrictivo instaurado por dicha norma. De esta manera, se conservan instituciones como la independencia entre las fases o secciones, o el aseguramiento de las cantidades entregadas por los socios a la entidad, que han contribuido a garantizar los derechos de las personas socias de estas entidades; pero, al tiempo, se reducen los requisitos en otras parcelas, como el relativo a las autorizaciones administrativas, sustituidas por la previsión de un registro de personas solicitantes de viviendas junto al establecimiento de un orden prelatorio.

XII.- En lo que se refiere a las cooperativas de servicios, destaca sobre las demás una novedad, incorporada a instancias de la asociación representativa de las sociedades cooperativas agrarias, que requiere especial justificación en la medida en que supone la ruptura del principio «una persona socia, un voto» en el seno del cooperativismo andaluz de primer grado. Conviene aclarar, para empezar, que el auténtico principio irreductible que inspira a las sociedades cooperativas en materia de generación de su voluntad social lo constituye el que el voto esté ligado a la actividad cooperativizada realizada, nunca al capital aportado. Sentado esto, resulta indudable que el carácter democrático propio de estas entidades parece, en principio, reacio a una distribución desigual del voto entre sus socias y socios. También parece incuestionable, sin embargo, que la igualdad a ultranza en este terreno resulta más coherente con la estructura de las sociedades cooperativas de trabajo que con las de servicio, pues, en las primeras, la aportación social de sus integrantes –el trabajo– suele ser similar o, al menos, no muy dispar, mientras que en las segundas, singularmente en las agrarias, la actividad cooperativizada –la aportación de producto para su transformación o distribución– puede diferir ostensiblemente. Lo cual, además de plantear problemas de desconexión estratégica entre los intereses de las personas socias en función de la envergadura de la aportación que realizan, puede entrañar un desajuste importante de la relación entre interés económico y capacidad de decisión, con menoscabo del propio carácter empresarial de la entidad. Sensible a estas eventuales dificultades, el legislador andaluz regula el voto plural, si bien velando por que dicha regulación no pierda de vista el carácter esencialmente personalista de estas empresas. En cualquier caso, lo esencial en esta materia, en términos de garantía para los socios y socias, es su establecimiento voluntario mediante asunción estatutaria, de modo que sea la Asamblea de cada sociedad la que, haciendo uso del voto simple –único válido por defecto–, adopte, en su caso, el acuerdo de distribuirlo de esta otra forma, por entender que, con arreglo a su peculiar estructura societaria, resulta más ajustado o equitativo.

Por último, en relación con las sociedades cooperativas agrarias de forma específica, se amplían sus finalidades y objetivos ajustándose a la multiplicidad de tareas que pueden realizar en su ámbito, se flexibiliza la inserción de la persona socia en la entidad de manera que esta pueda rentabilizar al máximo su capacidad y ganar operatividad, y se amplía el ámbito del trabajo por cuenta ajena en estas entidades a las explotaciones de las personas socias al objeto de facilitar a los jóvenes agricultores una reserva de tiempo para su desarrollo personal que posibilite el relevo generacional en este sector.

XIII.- En lo relativo a la intercooperación, es de reseñar la creación del grupo cooperativo, para contemplar todas las posibilidades de integración cooperativa, con una figura que podría denominarse «integración blanda», pues supone una asociación entre sociedades cooperativas y, en su caso, de otro tipo, que actúan en común sin llegar a vincularse en una entidad con personalidad jurídica independiente.

XIV.- En lo que respecta al asociacionismo cooperativo destaca la ampliación de sus funciones así como de su base asociativa, incluyendo la posibilidad de que la integren organizaciones y agrupaciones de productores agrarios en ciertas condiciones.

XV.- El fomento del cooperativismo tiene en nuestro Estatuto de Autonomía un fundamento específico, por cuanto su art. 163.2 establece que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma fomentarán las sociedades cooperativas. En este apartado, el texto legal, tras resaltar la importancia que para el desarrollo y vertebración territorial, así como para canalizar las inquietudes emprendedoras, tiene para la Comunidad Autónoma de Andalucía el apoyo a las empresas cooperativas y sus entidades representativas, establece determinadas prioridades en el ámbito de la innovación; en cooperación empresarial; en sostenibilidad medioambiental; en conciliación de la vida familiar y laboral; en igualdad de género; en nuevas tecnologías; en el sector sociosanitario; en otras de interés social como el medio natural, educacional y cultural; en vías de transformación que satisfagan un interés público o social; en su capacidad para generar empleo, en general, y, singularmente, en sectores con dificultades para el acceso al mercado laboral, o en su contribución al desarrollo armónico del territorio.

XVI.- En el caso del Registro de Cooperativas Andaluzas, las novedades más significativas son la de configurarlo en disposición de asumir la tramitación de los expedientes mediante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y la de reducir los plazos procedimentales incorporando con carácter general el silencio positivo.

XVII.- Por último, en cuanto al régimen sancionador, la reforma opera sobre la base de reducir las infracciones en que pueden incurrir estas sociedades, circunscribiéndolas a aquellas que tienen naturaleza cooperativa y se relacionan con aspectos fundamentales de esta forma organizativa. Como contrapartida, se eleva el importe de las sanciones previstas, impidiéndose que el beneficio obtenido compense la infracción de la norma.



## **TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES**

### **ARTÍCULO 1. OBJETO.**

*La presente ley tiene por objeto la regulación del régimen jurídico de las sociedades cooperativas andaluzas, así como el de sus federaciones y el de las asociaciones en las que estas se integran.*

**Concordancia con el artículo 1 del Reglamento de desarrollo.**

### **ARTÍCULO 1. OBJETO.**

*El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar las previsiones contenidas en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, en relación con:*

- a) La constitución y el régimen social, orgánico y económico de las sociedades cooperativas andaluzas así como los procedimientos de modificaciones estructurales, disolución, liquidación y reactivación.*
- b) La tipología de las sociedades cooperativas andaluzas.*
- c) El asociacionismo cooperativo.*
- d) La organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas Andaluzas y los procedimientos registrales.*
- e) La organización y funcionamiento de la Inspección cooperativa y la regulación del procedimiento sancionador y de descalificación en materia de cooperativas.*

### **Comentario del artículo 1 de la LSCA y del RLSCA.**

La nueva Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas se ocupa de diseñar el marco normativo por el que habrán de regirse tres tipos de realidades jurídicas: las sociedades cooperativas andaluzas, las federaciones de éstas y las asociaciones en las que aquellas

podieran estar integradas. En la derogada Ley 2/1999, de 31 de marzo no existía artículo dedicado exclusivamente al objeto, en su primer artículo únicamente delimitaba el ámbito de aplicación de la norma.

La nueva normativa de sociedades cooperativas presenta la siguiente estructura: la Ley regula los aspectos fundamentales, mientras que el posterior Reglamento se encarga de desarrollar aquel contenido que precisa de una regulación más detallada, concretando aspectos claves para la aplicación práctica de determinada materia.

Sin embargo, hay que resaltar que esta nueva Ley no se limita a regular únicamente el régimen jurídico de las sociedades cooperativas, sino que también trata de establecer un marco jurídico para otro tipo de entidades de las que éstas pueden formar parte.

¿Qué es una federación de sociedades cooperativas? Es un organismo o entidad resultante de la unión o asociación de varias cooperativas que actúa como agente social con la finalidad de prestar servicios de apoyo y asesoramiento a las cooperativas federadas. En Andalucía existen varias federaciones, como por ejemplo, FAECTA, una federación de cooperativas destinada al fomento del emprendimiento colectivo bajo el modelo de cooperativas de trabajo. O Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, cuyo objetivo es la representación y salvaguarda ante la Administración de los intereses de las cooperativas agroalimentarias de Andalucía, así como trabajar para que las cooperativas crezcan y sean capaces de posicionar sus productos de calidad en el mercado.

La disposición final segunda de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, habilitaba al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para aprobar su desarrollo reglamentario, necesario para que las previsiones contenidas en la misma pudieran desplegar todos sus efectos. Así, el Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Sociedades Cooperativas Andaluzas, da respuesta al mandato contenido en la disposición final segunda de la Ley. Se trata de una norma especialmente extensa y su finalidad es la de regular los aspectos más novedosos incorporados a la Ley que desarrolla.

El artículo 1 del RLSCA establece que se regirán por lo dispuesto en su cuerpo normativo las siguientes materias: la constitución y el régimen social, orgánico y económico de las sociedades cooperativas andaluzas así como los procedimientos de

modificaciones estructurales, disolución, liquidación y reactivación; la tipología de las sociedades cooperativas andaluzas; el asociacionismo cooperativo; la organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas Andaluzas y los procedimientos registrales; y la organización y funcionamiento de la Inspección cooperativa y la regulación del procedimiento sancionador y de descalificación en materia de cooperativas. De este modo se pone fin a la dispersión normativa existente hasta la fecha de su aprobación, puesto que cada una de estas materias se encontraba regulada en una norma distinta (Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, Decreto 267/2001, de 11 de diciembre, por el que se aprobó el reglamento de desarrollo de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas en materia registral y de autorizaciones administrativas, y Decreto 258/2001, de 27 de noviembre, por el que se regula la inspección y el procedimiento sancionador en materia cooperativa).

## **ARTÍCULO 2. CONCEPTO.**

*Las sociedades cooperativas andaluzas son empresas organizadas y gestionadas democráticamente que realizan su actividad de forma responsable y solidaria con la comunidad y en las que sus miembros, además de participar en el capital, lo hacen también en la actividad societaria prestando su trabajo, satisfaciendo su consumo o valiéndose de sus servicios para añadir valor a su propia actividad empresarial.*

### **Comentario del artículo 2 de la LSCA.**

El segundo artículo de la nueva Ley recoge la definición de la sociedad cooperativa andaluza. De acuerdo con el mismo, las cooperativas andaluzas son empresas que deberán reunir, necesariamente, las siguientes notas características:

- a) Organización y gestión democrática.
- b) Realización de su actividad económica de forma responsable y solidaria con la comunidad.
- c) Participación de sus miembros tanto en el capital, como en la actividad societaria aportando su trabajo a la misma, satisfaciendo su consumo o valiéndose de sus servicios para añadir valor a su propia actividad empresarial.

La sociedad cooperativa es una empresa de la economía social, esto es, una forma singular de organización de la iniciativa económica privada o libertad de empresa que, en fecha reciente, ha sido regulada e institucionalizada por el legislador estatal en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (LES). La Exposición de motivos LES destaca el *“sustrato jurídico”* que fundamenta a las entidades de la economía social, que está presente en la propia Constitución: *“en diversos artículos que hacen referencia, de forma genérica o específica, a alguna de las entidades de economía social como sucede en el artículo 1.1, en el artículo 129.2 o la propia cláusula de igualdad social del artículo 9.2, y otros artículos concretos como el 40, el 41 y el 47, que plasman el fuerte arraigo de las citadas entidades en el texto constitucional”*. Se destaca que el legislador constitucional menciona expresamente a las cooperativas *“los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas”* (Art.129.2 CE).

Por tanto, la nueva regulación de esta realidad empresarial tiene su fundamento en esta previsión constitucional relativa al fomento del cooperativismo y su ulterior plasmación en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 59.1.4º que atribuye competencias exclusivas a la Comunidad Autónoma en materia de fomento, ordenación y organización de cooperativas, y más específicamente la regulación y el fomento del cooperativismo. Además, su artículo 172. 2 establece que serán objeto de atención preferente, en las políticas públicas, las cooperativas y demás entidades de economía social.

La principal diferencia de este tipo de sociedades con respecto a las empresas convencionales son los valores inspiradores y los principios que informan su actuación en el mercado. En las empresas convencionales rige el principio de acumulación de capital mediante una organización empresarial –la empresa capitalista- donde el poder y la riqueza se distribuyen de forma proporcional al capital aportado. Sin embargo, la empresa cooperativa conforma una nueva forma de organizar y orientar la libertad de empresa de acuerdo con los principios de la economía social. En definitiva, las sociedades cooperativas son el prototipo o paradigma de las empresas de la economía social.

De acuerdo con el Dictamen 3/2014-CES de Andalucía *“las cooperativas constituyen un elemento de primera magnitud en la vertebración del espacio socioeconómico de Andalucía, y tienen una presencia activa en casi todas sus poblaciones, desempeñando una labor que beneficia no solo a sus socios y socias, sino también a la sociedad en*



*general, en los más variados sectores de producción, consumo y servicios.”* Es decir, que la nueva regulación del cooperativismo andaluz trae causa de la magnitud e importancia que esta realidad social comporta en nuestra Comunidad Autónoma.

### **ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.**

*La presente ley será de aplicación a aquellas sociedades cooperativas que desarrollen principalmente su actividad societaria en Andalucía.*

*Las sociedades cooperativas andaluzas, con arreglo a lo establecido en esta ley, podrán entablar relaciones con terceros y realizar actividades de carácter instrumental fuera del territorio andaluz.*

**Concordancia con el artículo 2 del Reglamento de desarrollo.**

### **ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.**

*Este Reglamento será de aplicación a las sociedades cooperativas andaluzas que desarrollen principalmente su actividad societaria en Andalucía, sin perjuicio de que las mismas puedan entablar relaciones instrumentales o con terceras personas en diferente ámbito territorial. Asimismo, es de aplicación a las federaciones de sociedades cooperativas andaluzas y sus asociaciones.*

### **Comentario del artículo 3 de la LSCA y del artículo 2 del RSCA**

El tercer artículo de la nueva Ley coincide con el artículo primero de su antecesora y viene a concretar con mayor claridad a qué sociedades les será de aplicación todo lo dispuesto en su cuerpo normativo. Será aplicable a todas aquellas sociedades cooperativas que desarrollen la mayor parte de su actividad en la Comunidad autónoma andaluza. La Constitución española no hace reserva legal a favor del Estado en materia de cooperativas en su artículo 149. 1. Tampoco se contiene una atribución expresa competencial a las Comunidades Autónomas en el artículo 148. La competencia de las CCAA para regular esta materia se deriva del artículo 149.3 de la CE en el que se dispone que *“las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos”*. Actualmente, el régimen jurídico del cooperativismo en España tiene una ley estatal y

dieciséis leyes autonómicas. Sólo falta la Comunidad Autónoma de Canarias por implementar su propia ley. Concretamente en Andalucía se asumieron competencias exclusivas a través del artículo 13. 20 del Estatuto de Autonomía, en el que se establece que la Comunidad Autónoma de Andalucía tendrá competencia exclusiva entre otras, en materia de cooperativas. Conforme a lo anterior se promulgó la Ley 2/1985, de 2 de mayo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, que posteriormente fue derogada por la Ley 2/1999, de 31 de marzo de 1999 de Sociedades Cooperativas de Andalucía, y que, la nueva Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas de 23 de diciembre de 2011 viene a suceder. En resumen, el régimen jurídico de las cooperativas actualmente vigente en España es el siguiente: cuando una cooperativa realice su actividad principal en una Comunidad Autónoma determinada le será de aplicación la normativa de cooperativas de dicha comunidad; mientras que si una cooperativa realiza su actividad principal en varias Comunidades Autónomas le será de aplicación la normativa estatal de cooperativas. Y podemos encontrarnos con un tercer supuesto, consistente en que una cooperativa realice su actividad principal en una Comunidad Autónoma determinada donde no exista normativa de cooperativas específica en cuyo caso también le será de aplicación la normativa estatal. El marco jurídico estatal de las sociedades cooperativas es el previsto en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. El legislador aprueba esta ley en aplicación del mandato constitucional del art. 129.2, que ordena a los poderes públicos al fomento de las cooperativas mediante una legislación adecuada. Su ámbito de aplicación es el previsto en el art. 2 de la misma que establece que la Ley estatal será de aplicación *“a las sociedades cooperativas que desarrollen su actividad cooperativizada en el territorio de varias Comunidades Autónomas, excepto cuando en una de ellas se desarrolle con carácter principal”*; así como *“a las sociedades cooperativas que realicen principalmente su actividad cooperativizada en las ciudades de Ceuta y Melilla”*. De esta manera queda resuelta la problemática sobre el ámbito de aplicación de las diferentes normas sobre cooperativas existente en España.

Por último, la posibilidad que brinda este artículo a las sociedades cooperativas de entablar relaciones con terceros y de carácter instrumental fuera de la comunidad permite su extensión económica y las sitúa en un plano de igualdad respecto a las sociedades que revisten otra forma jurídica. El Tribunal Constitucional, en su STC 72/83, de 29 de julio, parte de dos consideraciones jurídicas para delimitar el ámbito competencial de la CCAA en estos supuestos. Por un lado, estarían las relaciones societarias internas o típicas, es decir, aquellas que tienen lugar dentro del ámbito territorial de la Comunidad

Autónoma, como pueden ser las funciones típicas de las cooperativas, las relaciones de las cooperativas con sus socios, etc., que son competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Por otro lado, estarían las relaciones jurídicas externas con terceros son aquellas que no pueden encuadrarse dentro de las funciones típicas de las mismas y que tienen un valor instrumental y necesario para la consecución del fin social y que serán competencia del Estado o de la Administración Autonómica, atendiendo a su carácter instrumental, lo que deberá analizarse en cada caso concreto. En todo caso, dependerá de la Comunidad autónoma la concreción y delimitación de los términos “actividad societaria típica” y “relaciones de carácter interno”.

#### **ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS.**

*Los principios generales que informan la constitución y funcionamiento de las sociedades cooperativas andaluzas son los siguientes:*

- a) Libre adhesión y baja voluntaria de los socios y socias.*
- b) Estructura, gestión y control democráticos.*
- c) Igualdad de derechos y obligaciones de las personas socias.*
- d) Participación de los socios y socias en la actividad de la cooperativa, así como en los resultados obtenidos en proporción a dicha actividad.*
- e) Autonomía e independencia.*
- f) Promoción de la formación e información de sus miembros.*
- g) Cooperación empresarial y, en especial, intercooperación.*
- h) Fomento del empleo estable y de calidad, con singular incidencia en la conciliación de la vida laboral y familiar.*
- i) Igualdad de género, con carácter transversal al resto de principios.*
- j) Sostenibilidad empresarial y medioambiental.*

*k) Compromiso con la comunidad y difusión de estos principios en su entorno.*

## **Comentario del artículo 4 de la LSCA**

Las sociedades cooperativas se caracterizan porque su constitución y funcionamiento están sometidos a una serie de principios básicos que las hacen diferentes a cualquier otro tipo de empresa. En el artículo 4 de la nueva Ley encontramos cuáles son esos principios por los que toda cooperativa debe regirse y que a continuación vamos a definir:

*a) Libre adhesión y baja voluntaria de los socios y socias.* Este principio tiene una doble vertiente. Por un lado, la cooperativa no puede negar la entrada en la misma a todo el que usando ya los servicios cooperativos desee pertenecer a la sociedad (libre adhesión). Pero también se contempla la posibilidad de que el socio que considere que no necesita ya los servicios de la cooperativa pueda causar baja. Por otro lado, se prohíbe la utilización de argumentos de raza, religión, sexo, opinión o cualquier otro no relacionado con el objetivo económico y social de la cooperativa como causa para excluir de la sociedad a una persona que lo solicite. Además, conforme a este principio también se establece la obligación de que los socios de la cooperativa sean a su vez usuarios de la misma. La cooperativa tiene una finalidad mutualista por lo que los socios que se integran en la misma han de serlo con la finalidad de usar sus servicios, para lo cual desarrollan una actividad económica en sí mismo considerada. Sin embargo, no tiene sentido establecer la obligación contrapuesta, de que todo usuario haya de ser socio puesto que la cooperativa no tiene una actividad exclusivamente mutualista y es perfectamente posible que realice operaciones con terceros. Sin embargo, otra posibilidad a analizar es la de aquellos socios no usuarios de la cooperativa cuya finalidad sea obtener rentabilidad al capital invertido. Esta posibilidad ha sido introducida por la LSCA a través de su art. 25 que prevé la figura de la persona inversora, es decir una persona física o jurídica que realice aportaciones al capital y que no desarrolla la actividad cooperativizada. También nos encontramos con la posibilidad de que existan socios y socias colaboradores, es decir que suscriben la aportación inicial al capital social pero no tienen obligación de realizar otras aportaciones. Otra flexibilización de este principio la encontramos con la novedosa introducción por la LSCA de un periodo de prueba societario (art. 85). Todas estas figuras serán analizadas en su apartado correspondiente con mayor extensión.

*b) Estructura, gestión y control democráticos.* En la cooperativa ha de existir el régimen de “una persona, un voto” poniendo así el poder de las personas por encima del poder de los

capitales. Por lo tanto la toma de decisiones no está vinculada al capital aportado por cada socio. En la LSCA encontramos multitud de previsiones que atienden a este principio, por ejemplo el hecho de que en la Asamblea General de las cooperativas de primer grado cada socio tenga derecho a un voto. Este principio se ve matizado en las cooperativas de segundo o ulterior grado, así como en las de integración, donde los estatutos podrán establecer el voto plural. Otra excepción la encontramos en la nueva ley con la figura de la persona inversora, y que más adelante analizaremos.

*c) Igualdad de derechos y obligaciones de las personas socias.* A diferencia de lo que sucede en las sociedades de capital, donde en función del capital suscrito, cada persona socia tendrá un diferente estatuto jurídico, en las sociedades cooperativas las personas socias contribuyen de manera equitativa al capital social por lo que predomina una estructura horizontal de sus personas socias. Este es uno de los principios diferenciadores básicos de este tipo de sociedades, que en consonancia con el principio democrático persigue poner a las personas por encima del capital, disponiendo todas ellas un idéntico estatuto jurídico dentro de la sociedad cooperativa.

*d) Participación de los socios y socias en la actividad de la cooperativa, así como en los resultados obtenidos en proporción a dicha actividad.* Este principio está basado en la idea socialista de que las plusvalías generadas por el factor trabajo no deben de imputarse al factor capital. Éste último siempre tendrá en las cooperativas una función subordinada. En las sociedades cooperativas nos encontramos con la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital y este es el fundamento principal de la existencia de este principio. La cooperativa podrá distribuir con cierta flexibilidad el beneficio o excedente cooperativo entre Autofinanciación (Reservas) y Retornos cooperativos repartibles entre los socios. Sin embargo, la LSCA obliga a las cooperativas a constituir reservas obligatorias que serán irrepartibles. Y también prevé que los retornos que se acuerden distribuir se repartan de forma proporcional al conjunto o volumen de actividades que cada socio haya realizado con la cooperativa.

*e) Autonomía e independencia.* Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua y únicamente pueden ser controladas por sus miembros. En caso de alcanzar acuerdos con otras organizaciones o tener capital de fuentes externas, deberán garantizar el control democrático de sus miembros para mantener en todo momento la autonomía e independencia de la cooperativa. Todos estos aspectos serán extensamente

desarrollados en el apartado correspondiente al Capítulo V de la LSCA relativo al régimen económico de la sociedad cooperativa andaluza.

*f) Promoción de la formación e información de sus miembros.* Más allá de los objetivos económicos, la cooperativa ha de tener objetivos educativos y formativos que pueden ser tanto de índole general como de profundización en los propios ideales cooperativos. Los destinatarios de esta formación son tanto las personas socias como cualquier miembro de la comunidad donde la cooperativa desarrolle su actividad. Esta tarea formativa es actualmente asumida por la Administración conforme al Capítulo I del Título IV de la nueva LSCA que establece que la Junta de Andalucía tendrá la obligación de promover, desarrollar y estimular el cooperativismo como tarea de interés público (art. 115 LSCA). Sin embargo, hay que resaltar que este principio afecta en el plano financiero a la cooperativa puesto que ésta debe dotar un fondo de reserva para dedicarlos exclusivamente a fines formativos.

En relación al principio de información de sus miembros, aspecto añadido por la nueva LSCA, hay que ponerlo en relación con el derecho a la información previsto en el art. 21 del RLSCA que por primera vez prevé de forma exhaustiva este derecho de los socios y socias. Para dar cumplimiento a este principio y derecho respectivamente, la LSCA prevé la posibilidad de potenciar y permitir un mayor uso de las tecnologías en el seno de la sociedad cooperativa para facilitar el traslado de información entre personas socias.

*g) Cooperación empresarial y, en especial, intercooperación.* El marco europeo en el que han de desarrollar su actividad todas las empresas hace cada vez más aconsejable la colaboración transnacional entre éstas. La integración de las sociedades cooperativas en otras de ulterior grado u otras formas integradoras persiguen aumentar su capacidad económica para poder situarse en plano de igualdad con aquellas empresas no cooperativas que mediante fórmulas distintas alcanzan altos niveles de desarrollo y dimensión. El objetivo es acabar con la situación privilegiada de estas últimas respecto a las primeras. Las formas de integración que prevé la nueva LSCA son: cooperativas de segundo o ulterior grado, grupo cooperativo, y otras formas de asociacionismo previstas en el art. 110 de la LSCA.

*h) Fomento del empleo estable y de calidad, con singular incidencia en la conciliación de la vida laboral y familiar.* Estos valores y principios no han formado parte de manera expresa del ideario cooperativo inicial, entre otras razones, por motivos cronológicos. De



acuerdo con la Exposición de Motivos de la nueva LSCA, se produce ahora su incorporación formal *“por ser aspiraciones de largo alcance que se ajustan ejemplarmente a la naturaleza y objetivos de estas empresas”*.

*i) Igualdad de género, con carácter transversal al resto de principios.* Por el mismo motivo expresado en relación al principio anteriormente expuesto, se introduce de manera expresa este principio en la nueva LSCA y así se da debido cumplimiento a la normativa vigente en este ámbito. Debemos destacar que la propia ley se adapta a este principio utilizando en su redacción un lenguaje acorde con el mismo.

*j) Sostenibilidad empresarial y medioambiental.* Uno de los objetivos de las sociedades cooperativas es la de ofrecer beneficios a la comunidad donde realiza su actividad cooperativizada. La promoción del respeto medioambiental por parte de las cooperativas persigue este mismo objetivo por cuanto el cumplimiento de este principio redundará en un mayor beneficio para las comunidades en esta materia específica.

*k) Compromiso con la comunidad y difusión de estos principios en su entorno.* A diferencia de otras formas empresariales, las sociedades cooperativas tienen entre sus objetivos la de revertir beneficios sociales en la comunidad donde realizan su actividad. Además, la promoción del cooperativismo siempre ha sido una de las obligaciones de este tipo empresarial y como ya hemos indicado anteriormente, sus actividades formativas y de promoción están dirigidas tanto a personas socias como a cualquier otra persona de la comunidad donde se encuentre.

El antecedente histórico de estos principios hay que buscarlos en el cooperativismo de Rochdale, y su última versión vino de la mano de la Alianza Cooperativa Internacional. La característica fundamental de la actividad cooperativizada es que el objeto social no es cauce o medio para la obtención de excedentes que repartir entre los socios sino que el objeto es fin en sí mismo, y el desarrollo del mismo satisface las necesidades económicas, sociales, o de otra índole que mueven a los socios a constituirla.

El modelo empresarial cooperativo se caracteriza por una organización de los factores productivos y en la oferta de bienes y servicios al mercado, de forma o modo no especulativo para el factor capital. Precisamente lo contrario a la empresa capitalista donde el capital aportado asume el poder de decisión y los resultados económicos. Este ajuste a los valores y los principios cooperativos dota a la sociedad y a la empresa

cooperativa de una función social y de interés general. Sus fines no se limitan a los aludidos intereses económicos y sociales de su base social, sino también a los de otros colectivos en situaciones de subordinación o necesidad en el mercado, y a la atención de fines generales en beneficio de la comunidad donde actúa. El Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo señalan la utilidad social comprobada o el valor social añadido de las empresas de la economía social, cuyo paradigma es la empresa cooperativa. Sin embargo, como contrapartida de todo lo anteriormente expuesto nos encontramos con el problema de que el mantenimiento de los valores y los principios cooperativos conllevan unos costes de producción y administración derivados de la internalización de unos costes sociales, inherentes o connaturales a la consecución de fines sociales y de interés general. En términos económicos, estas utilidades sociales comprobadas son externalidades positivas fruto de una actuación empresarial, como es la de la sociedad-empresa cooperativa, que aporta beneficios sociales y económicos a otros agentes y a la sociedad. Y todo ello sin olvidar que este beneficio no supone mayores costes para estos otros agentes y para la sociedad, pues los costes son asumidos, internalizados, por la cooperativa.

El cooperativismo se articula como un ejercicio de una actividad económico-social para la mutua y equitativa ayuda entre sus miembros. Precisamente en la necesidad de cobertura de las necesidades de cada uno de los asociados estriba justamente el ideal cooperativo. La puesta en práctica de ese ideal cooperativo es la que permite desarrollar un modelo propio de actividad con rasgos de identidad propios, pero todo ello no sería posible sin unas determinadas reglas de actuación conformadas por los ya mencionados principios ordenadores básicos del cooperativismo.

## **ARTÍCULO 5. DENOMINACIÓN.**

*1. La denominación de la cooperativa incluirá, necesariamente, las palabras «Sociedad Cooperativa Andaluza» o su abreviatura «S. Coop. And.», y su uso será exclusivo de estas sociedades.*

*2. El régimen de uso y cualquier otra circunstancia relativa a la denominación de las sociedades cooperativas andaluzas se determinará reglamentariamente.*

*3. En lo no previsto en esta ley y en sus normas de desarrollo respecto de la denominación de las sociedades cooperativas, se estará a lo dispuesto en la legislación mercantil.*

## **Concordancia con el artículo 3 del Reglamento de desarrollo.**

### **ARTÍCULO 3. DENOMINACIÓN.**

*1. La denominación de las sociedades cooperativas andaluzas se ajustará a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y al desarrollo que de este se realiza en el presente artículo y en la Sección 2.ª del Capítulo VI del Título III, relativa a las denominaciones sociales.*

*2. La denominación «sociedad cooperativa andaluza» o su abreviatura S. Coop. And. no podrán ser utilizadas por ningún otro tipo de entidad. Tampoco podrá ser utilizada la palabra cooperativa ni ninguna otra que pudiera dar lugar a confusión en la denominación, título o subtítulo o el nombre o su abreviatura en ningún letrero, marca, etiqueta, cabecera o anuncio, ni en ningún tipo de documento, por ninguna persona, física o jurídica, que no sea una sociedad cooperativa.*

## **Comentario del artículo 5 de la LSCA y del artículo 3 del RLSCA**

En este Artículo, que no difiere del previsto en la derogada Ley de 1999, se establece el régimen de uso de la denominación sociedad cooperativa andaluza o su abreviatura “S. Coop. And.” Se prevé, asimismo, un régimen exhaustivo de prohibiciones en su segundo apartado.

En términos generales, la denominación social constituye un signo diferenciador de la empresa y además uno de los elementos de su patrimonio mercantil, con un valor económico y sustantividad jurídica.

Toda sociedad cooperativa tiene libertad a la hora de elegir el nombre. Sin embargo, debe cerciorarse de que no exista inscrita otra sociedad con denominación idéntica. Para ello, la sociedad cooperativa en constitución debe solicitar la correspondiente certificación negativa de denominación al Registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas (art. 163 LSCA).

Cualquier conflicto jurídico en relación con la denominación de la sociedad cooperativa habrá de resolverse conforme a las consideraciones legales, doctrinales y jurisprudenciales de aplicación a las sociedades de capital, al no existir aún compendio de normas, doctrina o jurisprudencia específicas en el supuesto específico de las cooperativas. La normativa de propiedad industrial de aplicación subsidiaria a las sociedades cooperativas comprende el Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929, por el que fue publicado el Estatuto de la Propiedad Industrial. Los principios constantes que justifican la existencia del derecho de propiedad industrial en España y en la Unión Europea son: *la distinción, como intento de evitar todo confusionismo, y el derecho de exclusiva que permite al titular de los derechos utilizarlos en el tráfico económico, estableciendo acciones civiles o penales contra quien lesione tal derecho*. También pueden ser de aplicación subsidiaria: la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes; la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad y la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

Asimismo, de acuerdo con la STS de 26-6-1995, la denominación social es un derecho de personalidad, que se caracteriza por ser oponible y protegible “erga omnes”, inestimable en dinero, de uso obligatorio para su titular, imprescindible, imprescriptible, irrenunciable, no susceptible de transmisión ni de ser objeto de transacciones civiles ni mercantiles, algo fuera del comercio de los hombres, es decir, inalienable.

## **ARTÍCULO 6. DOMICILIO SOCIAL.**

*La sociedad cooperativa establecerá su domicilio social en el municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía donde realice principalmente las actividades con sus socios y socias o centralice la gestión administrativa. No obstante, la sociedad cooperativa podrá establecer las sucursales que estime convenientes, previo acuerdo adoptado al efecto por el órgano de administración.*

### **Concordancia con el artículo 4 del Reglamento de desarrollo.**

## **ARTÍCULO 4. DOMICILIO SOCIAL.**

*1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la 14/2011, de 23 de diciembre, la sociedad cooperativa fijará su domicilio dentro del territorio andaluz en el municipio*

*donde realice principalmente las actividades con sus socios y socias o centralice la gestión administrativa.*

*2. La sociedad cooperativa deberá mantener actualizado el domicilio social que aparece inscrito en el Registro de Cooperativas Andaluzas, conforme a lo previsto en el artículo 74.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y el artículo 59 de este Reglamento, relativos a la modificación de estatutos.*

*En caso de discordancia entre el domicilio que consta en el Registro de Cooperativas Andaluzas y el que correspondería conforme al apartado anterior, las terceras personas podrán considerar como domicilio cualquiera de ellos.*

*3. La sociedad cooperativa andaluza podrá establecer sucursales en Andalucía o fuera de ella, previo acuerdo adoptado al efecto por el órgano de administración.*

*Se entiende por sucursal todo establecimiento secundario dotado de representación permanente y de cierta autonomía de gestión, a través del cual se desarrolle, total o parcialmente, el objeto social de la sociedad cooperativa.*

### **Comentario del artículo 6 LSCA y del artículo 4 del RLSCA.**

El domicilio será aquel donde la persona jurídica tenga sus órganos de dirección, gobierno, gestión o administración. Si aun así no se puede determinar el domicilio, éste será donde la persona jurídica realice sus principales actividades.

El domicilio debe preverse obligatoriamente en los estatutos sociales. Para determinarlo existen dos opciones: el domicilio social podrá ser el lugar donde se halle establecida su representación legal; o bien, allí donde ejerza las actividades propias de su objeto social.

Especial relevancia tiene la determinación del domicilio social en materia tributaria por cuanto que en España no existe unificación fiscal y el régimen tributario de la cooperativa variará según el domicilio social de ésta. En este sentido, el artículo 3 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de Régimen Fiscal de Sociedades Cooperativas establece que “*el domicilio fiscal de las Sociedades Cooperativas será el del lugar de su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección empresarial. En otro caso se atenderá al lugar en que radique dicha gestión y dirección.*”

Una de las novedades de la nueva ley es la expresa mención a la posibilidad de implantación de sucursales, oficinas periféricas dependientes, donde la sociedad cooperativa podrá realizar actividades no decisivas relacionadas con su objeto social. La sucursal puede prescindir de las tres características que debe reunir el domicilio principal de la sociedad cooperativa: unidad, inalterabilidad y determinación. La principal diferencia de la sucursal con respecto a la filial es que aquella no causa inscripción registral independiente y además carecen de personalidad jurídica propia.

El apartado primero del artículo 4 del Reglamento reitera lo ya expuesto en la Ley. Sin embargo, en el Reglamento se concreta el régimen normativo en cuanto al domicilio social de las sociedades cooperativas y establece una serie de obligaciones que habrá de cumplir la sociedad. Éstas son:

- Fijar su domicilio dentro del territorio andaluz. La cooperativa podrá optar entre fijar su domicilio en el municipio donde realice principalmente las actividades con sus socios y socias; o establecerlo allí donde centralice toda su gestión administrativa.
- Mantener actualizado el domicilio social en el Registro de Cooperativas Andaluzas. Cuando existan discordancias entre el domicilio que consta en el Registro y el real, las terceras personas podrán dirigirse a cualquiera de ellos.

Además, como ya dispuso la ley, se prevé la posibilidad para las cooperativas de crear sucursales en Andalucía o fuera de ella, siempre y cuando exista un acuerdo previo del órgano de administración. El Reglamento define la sucursal como todo establecimiento secundario dotado de representación permanente y de cierta autonomía de gestión, a través del cual se desarrolle, total o parcialmente, el objeto social de la sociedad cooperativa.

## **ARTÍCULO 7. OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS.**

*Las sociedades cooperativas podrán realizar con terceras personas las actividades y servicios que constituyan su objeto social, sin más limitaciones que las establecidas en la presente ley, en otras disposiciones de carácter sectorial que les sean de aplicación o en sus propios estatutos.*



## Comentario del artículo 7 de la LSCA.

Este artículo brinda la posibilidad a toda sociedad cooperativa de efectuar operaciones con terceros, es decir personas no socias. La importancia de esta previsión normativa reside en la posibilidad que tiene así la cooperativa de alcanzar un volumen suficiente de actividad económica que le permita así mantener su competitividad en el mercado. Por parte de ciertos sectores, se ha intentado calificar de incompatible esta previsión con el principio mutualista según el cual la cooperativa únicamente puede realizar actividades y prestaciones de servicios a favor de sus socios. Sin embargo, este principio de exclusividad no ha sido proclamado por la Alianza Cooperativa Internacional y en el derecho comparado es aplicado de manera muy flexible.

En el supuesto de que una sociedad cooperativa andaluza realice operaciones con terceros fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma seguirá siendo de aplicación la regulación andaluza aunque sean actos que puedan producir efectos más allá del ámbito territorial de aplicación de la norma. Así lo ha declarado el TC en sentencia de 16-11-1981 al establecer que *“la unidad política, jurídica, económica y social de España impide su división en compartimentos estancos y, en consecuencia, la privación a las Comunidades Autónomas de la posibilidad de actuar cuando sus actos pudieran originar consecuencias más allá de sus límites territoriales equivaldría necesariamente a privarlas, pura y simplemente, de toda capacidad de actuación.”*

Por otro lado, la nueva redacción de este artículo en la LSCA establece como únicas limitaciones las establecidas en la propia ley, las que dispongan normas de carácter sectorial o las previstas en los estatutos sociales. Se trata de permitir a las cooperativas mantener relaciones con otras personas, ya sean jurídicas o físicas, que no sean socias de la misma, con la finalidad de mantener un volumen de actividad adecuado que facilite su viabilidad económica.

## **TÍTULO I. CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.**

### **CAPÍTULO I. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA.**

#### **ARTÍCULO 8. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA.**

*1. Las personas promotoras de la sociedad cooperativa celebrarán Asamblea constituyente de la que se levantará la correspondiente acta, que será firmada por todas ellas. Dichas personas, o los gestores y gestoras designados de entre ellas en la Asamblea constituyente, actuarán en nombre de la futura sociedad y deberán realizar todas las actividades necesarias para su constitución.*

*2. Reglamentariamente se regularán los extremos que deben figurar en el acta referida en el apartado anterior, que incorporará los estatutos sociales aprobados por la propia Asamblea, los trámites de la constitución, así como el régimen de la sociedad cooperativa que, transcurrido el plazo de seis meses desde la celebración de la mencionada Asamblea, no se haya inscrito en el Registro de Cooperativas Andaluzas.*

**Concordancia con el artículo 5 y 6 del Reglamento de desarrollo.**

#### **ARTÍCULO 5. PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN.**

*1. Las personas promotoras de la sociedad cooperativa celebrarán Asamblea constituyente para su constitución de la que se levantará acta y, en su caso, se elevará a escritura pública, que deberá ser inscrita en el Registro de Cooperativas Andaluzas. Dichas personas, o los gestores y gestoras designados de entre ellas en la Asamblea constituyente, actuarán en nombre de la futura sociedad y deberán realizar todas las actividades necesarias para su constitución.*

*Los gastos devengados por la constitución correrán de cuenta de la sociedad cooperativa.*

2. *Con arreglo a lo establecido en el artículo 119.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, la sociedad cooperativa elevará el acta de constitución a escritura pública cuando las aportaciones al capital social consistan en bienes inmuebles, así como cuando se trate de bienes muebles afectados con cargas reales. También se realizará dicha formalización cuando se trate de la constitución de una cooperativa de crédito o de seguros.*

3. *Cualquiera de las personas promotoras de la sociedad cooperativa o, en su caso, de las personas gestoras designadas al efecto en la Asamblea constituyente, solicitará del Registro de Cooperativas Andaluzas la inscripción de la constitución, en el plazo de seis meses desde la celebración de la Asamblea constituyente o, si se prescinde de esta, desde el otorgamiento directo de la escritura pública de constitución por la totalidad de las personas promotoras.*

4. *Hasta que no se produzca la inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas, la sociedad cooperativa deberá añadir a su denominación las palabras «en constitución».*

## **ARTÍCULO 6. ACTA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.**

*El acta de la Asamblea constituyente, que será firmada por todas las personas promotoras de la sociedad cooperativa, deberá contener:*

*a) La relación de las personas promotoras con los siguientes datos: si son personas físicas, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de identificación fiscal y domicilio; si son personas jurídicas, nombre o razón social, nacionalidad, código de identificación fiscal y domicilio social; nombre, apellidos y número de identificación fiscal de su representante legal.*

*b) Manifestación de las personas promotoras sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para adquirir la condición de persona socia de la sociedad cooperativa, de acuerdo con las normas establecidas en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, en el presente Reglamento, y en los respectivos estatutos.*

*c) La voluntad de las personas promotoras de constituir una sociedad cooperativa y la clase de cooperativa de que se trate.*

*d) La aprobación de los estatutos sociales que han de regir la futura sociedad cooperativa, debiendo incorporarse dichos estatutos al acta de la Asamblea constituyente. En todo caso, los estatutos sociales deberán regular, al menos, las materias fijadas por el artículo 11 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*e) La total suscripción del capital con el que se constituye la sociedad cooperativa, que deberá incluir, al menos, el establecido estatutariamente y el desembolso de, al menos, el cincuenta por ciento de aquel, conforme a lo establecido en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, incorporándose al acta los documentos acreditativos del depósito del mismo en una entidad de crédito, cuando se haya efectuado en metálico.*

*f) Valoración de las aportaciones no dinerarias, realizada con arreglo a lo establecido en el artículo 43, acompañada, en su caso, del informe o informes emitidos por expertos independientes designados, asimismo, conforme a dicho artículo.*

*g) Identificación de la persona o personas gestoras para que actúen en nombre de la futura sociedad, de procederse a su nombramiento.*

*h) Determinación de las personas que ejercerán los cargos sociales una vez inscrita la sociedad cooperativa en el Registro de Cooperativas Andaluzas, figurando en el acta la aceptación de sus respectivos cargos por las personas designadas, así como la declaración de las mismas de no hallarse incursas en ninguna de las incapacidades, prohibiciones e incompatibilidades del artículo 48 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*i) Declaración de que no existe otra entidad, con denominación coincidente o semejante, conforme al certificado de denominación no coincidente, expedido por el Registro de Cooperativas Andaluzas en la forma determinada en el artículo 163.*

*j) Tratándose de sociedades cooperativas de viviendas, se incorporará documento acreditativo de que el número de personas socias comunes que la constituyan sea igual o superior al veinticinco por ciento de las viviendas promovidas por la entidad, supeditándose el aumento del número de viviendas en promoción, con posterioridad a la constitución, al mantenimiento de dicha proporción.*

*k) Todos los pactos y condiciones que se juzguen convenientes establecer, siempre que no se opongan a las leyes o contradigan los principios configuradores de las sociedades cooperativas.*

### **Comentario del artículo 8 de la LSCA y de los artículos 5 y 6 del RLSCA.**

El Capítulo I del Título I de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas regula el procedimiento a seguir para la constitución de cooperativas.

El primer paso que debe efectuarse para constituir una cooperativa consiste en la celebración de una Asamblea constituyente por las personas promotoras en la que se levante la correspondiente acta de constitución. Es indispensable que el acta esté firmada por todos los promotores y promotoras. A partir de este momento, las personas promotoras ya pueden actuar y realizar todos los trámites y gestiones necesarios para constituir la sociedad. Sin embargo, los promotores o promotoras también tienen la posibilidad de delegar estas tareas en gestores o gestoras designados por ellos.

Es necesario establecer una clara distinción entre personas administradoras, gestoras y socias. Las primeras realizan actos y celebran contratos porque son los que representan a la sociedad cooperativa en formación, aún no inscrita, inician la actividad del ente social en fase de constitución aunque no lleva aparejada el efecto propio del órgano de la sociedad cooperativa. Los segundos, abarcan los supuestos de mandatarios en la fase de formación de la sociedad, con mandato ad hoc, es decir, la voluntad de los socios se encamina y encauza por el mencionado contrato.

En definitiva, para la constitución de una cooperativa son necesarios tres elementos:

- d) Un grupo de personas interesadas en crearla.
- e) Una necesidad o un interés común a satisfacer mediante la actividad cooperativa.
- f) Unos recursos materiales suficientes para llevar a cabo dicha actividad.

El segundo apartado del artículo 8 remite al Reglamento los requisitos que deberá reunir el acta de constitución para que la misma tenga plena validez. Si bien, establece que se deberán incorporar, necesariamente, los estatutos sociales aprobados por la Asamblea constituyente, los trámites de constitución, y el régimen de la sociedad cooperativa que no

se haya inscrito en el Registro de Cooperativas Andaluzas dentro de los seis meses siguientes a la celebración de la Asamblea. Los asuntos que pueden ser abordados en la Asamblea constituyente son: el establecimiento de la cifra de capital social necesario para iniciar la actividad y, consecuentemente, de las aportaciones individuales a realizar, así como, en su caso, la aprobación de la valoración de las no dinerarias; la aprobación de los estatutos sociales; y la elección de la estructura y los miembros del primer órgano de administración.

Este artículo dedicado a la constitución de la sociedad cooperativa introduce como novedad significativa la posibilidad de constituir una sociedad cooperativa andaluza sin necesidad de escritura notarial. De esta forma la Ley atiende a los principios auspiciados por la Unión Europea tendentes a simplificar la legislación existente o reducir las cargas administrativas que pesan sobre las pequeñas y medianas empresas. El «Programa de Mejora de la Reglamentación y de Reducción de Cargas Administrativas», aprobado en cumplimiento del «Programa de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas en la UE», puesto en marcha a principios de 2007 por la Comisión Europea, preveía la creación de un Grupo de Alto Nivel, presidido por el MAP, que se encargaría de redactar un «Plan de Acción de Reducción de Cargas Administrativas». El Plan se aprobó en 2008, mencionando expresamente la participación de España en el proceso europeo y fijando el objetivo explícito de reducir en el 30 por 100, antes de 31 de diciembre de 2012, las cargas administrativas impuestas a las empresas españolas por la normativa vigente, un “objetivo de ambición” comparable al establecido para la UE -el 25 por 100 del total en el mismo período-. Los principios han sido definidos en la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 24 de enero de 2007, dentro del «Programa de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas en la Unión Europea» [COM (2007) 23 final - no publicada en el Diario Oficial] y son los siguientes:

- reducir la frecuencia de las declaraciones obligatorias a los niveles mínimos necesarios;
- verificar que no se impone varias veces la misma obligación de información;
- promover la recogida de información a través de Internet;



- reducir las exigencias impuestas a las pequeñas y medianas empresas, e introducir umbrales para los requisitos de información;
- centrarse específicamente en los operadores más expuestos a los costes administrativos en determinados sectores;
- reducir o suprimir los requisitos de información impuestos en relación con exigencias legislativas que hayan desaparecido o que entretanto hayan sido modificadas;
- facilitar una aclaración sobre aquellos actos legislativos complejos que pudieran ralentizar la actividad empresarial.

Aunque, a priori, pudiera parecer que esta decisión resta garantías al proceso constitutivo, la configuración de un registro público, altamente especializado e íntegramente telemático, está en condiciones de asegurar garantías similares a las que presta la intervención de un fedatario público. Las excepciones a esta regla general vienen recogidas en el Reglamento de desarrollo de la Ley y serán expuestos a continuación.

El Título I del Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se encarga de la regulación del régimen de las sociedades cooperativas, desarrollando su estructura jurídica general, definida en la Ley, y que afecta a cuestiones relacionadas con la constitución, modificación y disolución de la sociedad cooperativa y con su régimen social, orgánico y económico. Y, concretamente, en su Capítulo I se regula la constitución de cooperativas.

El primer párrafo del artículo 5 reitera lo ya expuesto en el artículo 8 de la Ley. Si bien, introduce que los gastos devengados por la constitución correrán a cargo de la Sociedad Cooperativa.

En el segundo apartado se establecen los tres supuestos en los que deberá elevarse el acta de constitución a escritura pública. En primer lugar, cuando las aportaciones al capital social consistan en bienes inmuebles. El segundo supuesto se dará cuando se trate de aportaciones que consistan en bienes muebles afectados con cargas reales. Por último, también será necesaria escritura notarial cuando se trate de la constitución de una cooperativa de crédito o de seguros.

En el tercer apartado se designa a las personas promotoras o, en su caso, gestoras como las encargadas de solicitar del Registro de Cooperativas Andaluzas la inscripción de la constitución. Para ello disponen de un plazo de seis meses desde la celebración de la Asamblea constituyente, o desde el otorgamiento directo de la escritura pública de constitución por la totalidad de las personas promotoras.

Por último, se establece la obligación que tiene la cooperativa de añadir a su denominación las palabras “en construcción” hasta tanto no se produzca la debida inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas.

El artículo 6 del Reglamento introduce una novedad al no exigir documentos que la Administración, mediante la incorporación de las técnicas telemáticas se obliga a obtener, por sí misma, como pueden ser el certificado de denominación coincidente o el documento acreditativo del pago del ITPAJD. Este artículo establece una relación exhaustiva de todos los aspectos que deberá contener necesariamente el Acta de la Asamblea constituyente. Además, dispone que ésta tendrá que estar obligatoriamente firmada por todas las personas promotoras de la sociedad.

Sumariamente, el Acta debe incluir entre otros aspectos los siguientes:

- g) La identificación de las personas promotoras así como, en su caso, que cumplen los requisitos para ser socias
- h) Un ejemplar de los estatutos por los que se va a regir la cooperativa
- i) La efectiva suscripción y desembolso del capital social mínimo que se ha fijado estatutariamente
- j) La valoración de las aportaciones no dinerarias acompañadas, en su caso, del informe o informes emitidos por expertos independiente independientes
- k) Identificación de la persona gestora que actúa en nombre de la futura sociedad
- l) Determinación de las personas que ejercerán los cargos sociales una vez inscrita la sociedad
- m) Declaración de que no existe otra entidad, con denominación idéntica o semejante

- n) Todos aquellos pactos que estimen convenientes las personas promotoras

## **ARTÍCULO 9. PERSONALIDAD JURÍDICA, RESPONSABILIDAD CONSTITUYENTE E INICIO DE ACTIVIDAD.**

*1. Las sociedades cooperativas deberán inscribir el acta de la Asamblea constituyente y demás documentos que se determinen reglamentariamente, o, en su caso, la escritura pública de constitución, en el Registro de Cooperativas Andaluzas. Desde el momento en que tenga lugar dicha inscripción, la sociedad cooperativa gozará de personalidad jurídica.*

*2. Las personas gestoras responderán solidariamente ante la sociedad cooperativa de las actividades realizadas para la constitución, de las que darán cuenta dentro del plazo de un mes siguiente a la inscripción. La Asamblea General deberá pronunciarse sobre la aceptación o no de los actos y contratos realizados o celebrados en su nombre dentro del plazo de dos meses desde la inscripción de la sociedad, debiendo aceptar, en todo caso, los realizados o celebrados por las personas gestoras indispensables para su inscripción, así como aquellos que respondan a un mandato específico de la Asamblea constituyente. De los actos y contratos aceptados responderá la sociedad con el patrimonio formado por las aportaciones de las personas socias hasta el límite de lo que se hubieran obligado a aportar.*

*3. Las sociedades cooperativas podrán iniciar la actividad en que consista su objeto social desde el momento en que celebren la asamblea constituyente, si bien hasta su inscripción registral, que deberán solicitar en el plazo máximo de seis meses desde la celebración de la citada asamblea, deberán acompañar en sus relaciones con terceros, la expresión «en constitución» y durante este período, la responsabilidad de las personas socias por la actividad desplegada será ilimitada y solidaria.*

*En cualquier caso, las sociedades cooperativas deberán iniciar su actividad, conforme a sus estatutos, en el plazo máximo de un año desde su inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas. Transcurrido este plazo sin haber iniciado la actividad, incurrirán en causa de disolución con arreglo a lo establecido en el artículo 79.*

Número 3 del artículo 9 redactado por el apartado uno del artículo 10 de la Ley [ANDALUCÍA] 3/2014, 1 octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas («B.O.J.A.» 9 octubre). Vigencia: 10 octubre 2014.

### **Concordancia con el artículo 7 y 8 del Reglamento de desarrollo.**

#### **ARTÍCULO 7. ELEVACIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.**

*1. Las personas promotoras de la sociedad cooperativa podrán elevar a escritura pública el acta de constitución, debiendo hacerlo en los supuestos establecidos en el artículo 5.2.*

*La escritura pública de constitución deberá ser otorgada por dichas personas o, en su caso, por aquella o aquellas personas gestoras designadas por la Asamblea constituyente, en el plazo máximo de dos meses desde que se celebró la citada Asamblea.*

*2. La escritura pública de constitución deberá recoger, previa manifestación de la persona o personas otorgantes y bajo su responsabilidad, las altas y bajas producidas respecto de la relación de las personas promotoras contenida en el acta de la Asamblea constituyente, si ésta hubiera tenido lugar, en cuyo caso, el número de altas no podrá superar el cincuenta por ciento del número de las personas promotoras que participaron en la Asamblea constituyente y no han causado baja.*

*3. Podrá prescindirse de la celebración de Asamblea constituyente, otorgándose directamente la escritura pública de constitución por la totalidad de las personas promotoras de la sociedad cooperativa que expresará el contenido establecido en el artículo anterior para el acta de la Asamblea constituyente.*

#### **ARTÍCULO 8. SOCIEDAD COOPERATIVA IRREGULAR.**

*1. Transcurridos seis meses, desde la celebración de la Asamblea constituyente o, si se prescinde de esta, desde el otorgamiento directo de la escritura pública de constitución por la totalidad de las personas promotoras, sin que se haya solicitado la inscripción de la sociedad en el Registro de Cooperativas Andaluzas, o bien antes de dicho plazo, si se ha verificado la voluntad de no inscribirla, todo socio o socia podrá instar la disolución de*

*la sociedad en constitución y exigir, con la liquidación del patrimonio social, la restitución de las aportaciones que haya efectuado.*

*2. Si la sociedad cooperativa ha iniciado o sigue realizando la actividad de su objeto social sin haber solicitado su inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas, una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el apartado anterior, o verificada la voluntad de no inscribir la sociedad, los socios y socias responderán, de manera definitiva, de los actos y contratos realizados en nombre de la sociedad cooperativa, personal, ilimitada y solidariamente. No obstante, dichos socios y socias podrán reclamar contra aquellas personas que no hubiesen cumplido el deber de inscripción.*

### **Comentario del artículo 9 de la LSCA y de los artículos 7 y 8 del RLSCA.**

Las sociedades cooperativas adquirirán personalidad jurídica mediante la inscripción del acta de la asamblea constituyente o la escritura pública de Constitución, en su caso, en el Registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas. La personalidad jurídica supone capacidad para ser titular del conjunto de derechos y obligaciones atribuidos a un mismo ente y determina su capacidad para relacionarse jurídicamente. De ahí que dentro de la personalidad podamos diferenciar dos tipos de capacidades, la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica convierte a la sociedad cooperativa en sujeto de derecho, ya que atribuye la titularidad de derechos y obligaciones. Sin embargo, la capacidad de obrar implica la capacidad de actuar jurídicamente, cuáles son las acciones jurídicas que los sujetos pueden realizar. En consecuencia, la capacidad jurídica se refiere a la titularidad, mientras que la capacidad de obrar se refiere al “ejercicio” de derechos y deberes. Por todo ello, la adquisición de personalidad jurídica permita a la cooperativa establecer un patrimonio separado y adquirir capacidad de obrar en el mundo jurídico.

Por otro lado, la necesidad de inscripción viene dada por la necesidad de poner a disposición de cuantas personas puedan tener interés en su conocimiento, los actos con trascendencia jurídica o las características de la sociedad cooperativa como pueden ser: el capital social, personas que ocupan cargos sociales, domicilio social, contenido de los estatutos, etc. Y todo ello con el fin de garantizar la seguridad jurídica en el tráfico jurídico. Por ello, la información a publicar debe reunir suficientes garantías de veracidad y legalidad. Para ello, se constituye el Registro de Sociedades Cooperativas, cuya función primordial será la de recibir información, verificarla y organizarla de forma que pueda ser consultada por quienes tengan interés en ella. Serán las leyes de cooperativas las

encargadas de regular los Registros públicos así como los actos que se deben inscribir. En el caso de la normativa andaluza, no se hace referencia ni en la Ley ni en el Reglamento a este aspecto. Por ello, vamos a analizar lo dispuesto en la Ley 27/1999, de cooperativas del Estado. Dicha ley establece un mandato, en su disposición final primera al Gobierno para que elaborase un Reglamento del Registro de sociedades cooperativas. Dicho Reglamento se promulgó en virtud de Real Decreto 136/2002.

Las personas gestoras responden solidariamente<sup>1</sup> de sus actuaciones para la constitución de la sociedad frente a la misma. En el plazo de un mes desde la inscripción deberán dar cuenta de toda la actividad realizada. La Asamblea General aceptará o rechazará los actos y contratos celebrados en su nombre dentro del plazo de dos meses desde la inscripción. En todo caso, deberá aceptar aquellos realizados o celebrados por las personas gestoras relacionados con la inscripción al igual que los que han sido celebrados o realizados bajo mandato específico de la Asamblea constituyente.

La sociedad cooperativa responderá de los actos y contratos aceptados con el patrimonio formado por las aportaciones de las personas socias hasta el límite de lo que se hubieran obligado a aportar.

La sociedad cooperativa puede realizar la actividad de su objeto social a partir de la celebración de la asamblea constituyente. Sin embargo, en todas sus relaciones con terceros anteriores a la inscripción deberán acompañar la palabra “en constitución”. Durante este periodo regirá el régimen de responsabilidad ilimitada y solidaria de todas las personas socias. En cualquier caso, la inscripción deberá producirse en el plazo máximo de seis meses desde que se celebró la asamblea constituyente.

Por último, las sociedades cooperativas cuentan con el plazo de un año desde la inscripción para iniciar su actividad. Si no es así, se hallarán en causa de disolución conforme al artículo 79.

Aunque como hemos dicho, con la inscripción la cooperativa ya adquiere personalidad jurídica y puede realizar toda clase de actos con transcendencia jurídica, en muchos casos será necesario llevar a cabo otra serie de trámites.

---

<sup>1</sup> La responsabilidad solidaria implica que todos responden conjuntamente. Así, las acciones de responsabilidad podrán dirigirse contra cualquiera de las personas gestoras indistintamente o contra todas ellas a la vez.



Por otro lado, la cooperativa tiene que obtener el Código de Identificación Fiscal. Se puede solicitar un CIF provisional con la copia simple de la escritura de constitución. Este documento sirve para identificar a la sociedad a efectos fiscales, a diferencia del empresario individual que se identifica con su NIF. En un principio se otorga un CIF provisional para empezar a funcionar. Los documentos a presentar son: Impreso modelo 036, copia simple de la escritura de constitución (en caso de existir) o acta de la asamblea constituyente, fotocopia del DNI del solicitante si es un socio o fotocopia del poder notarial si es un apoderado. Estos documentos deben presentarse en la Administración o Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondiente al domicilio fiscal de la sociedad. Es imprescindible solicitar el CIF definitivo una vez inscrita la cooperativa.

También es necesario que realice la oportuna comunicación del inicio de actividad y de obligaciones fiscales periódicas ante la Agencia Tributaria que le corresponda según el domicilio fiscal, se procede a comunicar el inicio de la actividad, indicando el tipo, el epígrafe IAE, el lugar de realización, etc. Además, se procede a la comunicación de las obligaciones tributarias: IRPF, IVA, IS...

Finalmente, al inicio de la actividad la cooperativa habrá de darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, aunque también de la mayoría de los casos estará exenta de su pago.

En el ámbito laboral, la cooperativa debe darse de alta como empresa en la Tesorería General de la Seguridad Social, acompañando el alta en la Mutua de Accidentes de Trabajo. Afiliará y dará así mismo de alta a quienes vayan a prestar su trabajo en la realización de la actividad cooperativizada, ya sea en calidad de personas trabajadoras por cuenta ajena, ya sea como personas socias trabajadoras (en las cooperativas de trabajo asociado) o socias de trabajo. Además, se habrá de declarar en la apertura de cada centro de trabajo y legalizar el correspondiente Libro de Visitas.

En otros ámbitos administrativos pueden requerirse otro tipo de trámites. Por ejemplo, licencia de apertura en aquellos casos en que la actividad requiera de establecimiento abierto al público. Por otro lado, la titularidad de los inmuebles de la sociedad cooperativa deberá estar inscrita en el correspondiente Registro de la Propiedad.

Uno de los aspectos más novedosos de la nueva regulación de las sociedades cooperativas andaluzas se encuentra precisamente en este artículo. Se trata de la posibilidad de constituir una sociedad cooperativa sin necesidad de escritura pública. Sin embargo, se prevé una excepción a esta regla general para aquellos casos en los que se realicen aportaciones al capital social de bienes muebles afectados con cargas reales y que junto con la previsión legal de aportaciones de bienes inmuebles, cierran la relación de excepciones a dicha regla. Estas dos excepciones obedecen a la necesidad de dar cumplimiento al principio de seguridad jurídica que exige que el tráfico de dichos bienes esté siempre controlado por nuestros fedatarios públicos. Y es por todo ello que el artículo 7 del Reglamento regula de forma más sucinta el régimen de elevación a escritura pública puesto que ahora la mayor parte del contenido se hallará recogido en el acta de constitución que podrá elevarse o no a escritura pública con posterioridad.

El artículo 8 del Reglamento posibilita desarrollar la actividad cooperativizada antes de inscribirse en el Registro y adquirir personalidad jurídica. Se regula por primera vez el régimen de la sociedad cooperativa irregular en aras de alcanzar una mayor seguridad jurídica en estos supuestos. Se da esta situación cuando transcurridos seis meses, desde la celebración de la Asamblea constituyente o, si se prescinde de esta, desde el otorgamiento directo de escritura pública de constitución por la totalidad de las personas promotoras, sin que se haya solicitado la inscripción de la sociedad en el Registro de Cooperativas Andaluzas, o bien antes de dicho plazo, si se ha verificado la voluntad de no inscribirla. En estos supuestos todo socio o socia podrá solicitar la disolución de la sociedad en constitución y exigir, con la liquidación del patrimonio social, la restitución de las aportaciones que haya efectuado.

Además, en el apartado segundo del Artículo 8 se prevé el régimen de responsabilidades en caso de que la cooperativa haya iniciado o siga realizando la actividad de su objeto social sin haber solicitado su inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas transcurridos seis meses. En estos supuestos, serán los socios y socias los responsables de los actos y contratos realizados en nombre de la cooperativa, de forma personal, ilimitada y solidariamente. Sin embargo, estos socios podrán reclamar contra aquellos que incumplieron el deber de inscripción.

En general, los actos y contratos celebrados en nombre de la cooperativa antes de su inscripción responden solidariamente quienes los hubieran celebrado (art. 9. 2 LSCA). Tras su constitución, será la cooperativa la que decida en un plazo establecido al efecto,

si decide asumirlos como propios relevando su responsabilidad solidaria a quienes los hubieren realizado.

## **ARTÍCULO 10. NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS SOCIAS.**

*De conformidad con la clasificación establecida en el Título II, las sociedades cooperativas de primer grado deberán estar integradas, al menos, por tres personas socias comunes, y las de segundo grado por, al menos, dos cooperativas de primer grado. Las cooperativas de grado ulterior estarán integradas por un mínimo de dos sociedades cooperativas de grado inmediatamente anterior.*

### **Comentario del artículo 10 de la LSCA.**

Para la constitución de una sociedad cooperativa es requisito indispensable que la misma esté compuesta por al menos tres personas socias. Deberán ser todos ellos socios comunes. Las sociedades cooperativas de segundo grado deberán estar integradas como mínimo de dos cooperativas de primer grado. Y las sociedades cooperativas de ulterior grado deberán estar integradas, a su vez, por dos cooperativas de grado inmediatamente anterior. En cualquier caso, las cooperativas de trabajo únicamente pueden estar integradas por personas físicas que mediante su trabajo realicen la actividad económica que constituya el objeto social.

## **ARTÍCULO 11. ESTATUTOS SOCIALES.**

*Los estatutos de las sociedades cooperativas deberán regular, como mínimo, las siguientes materias:*

- a) La denominación, el domicilio social, la duración y la actividad o actividades que desarrollarán para el cumplimiento de sus fines sociales.*
- b) El ámbito principal de actuación y la fecha de cierre del ejercicio económico.*
- c) El capital social estatutario.*

*d) La aportación obligatoria inicial para ser persona socia y la parte de la misma que debe desembolsarse en el momento de la suscripción, así como la forma y plazos de desembolso del resto de la aportación.*

*e) Los requisitos objetivos para la admisión de socios y socias.*

*f) La participación mínima obligatoria de la persona socia en la actividad cooperativizada, conforme a los módulos que se establezcan estatutariamente.*

*g) Las normas de disciplina social, el establecimiento de infracciones y sanciones, el procedimiento disciplinario, el régimen de recursos y el régimen de impugnación de actos y acuerdos.*

*h) Las garantías y límites de los derechos de los socios y socias.*

*i) Las causas de baja justificada, cuando excedan de lo establecido en la presente ley.*

*j) La convocatoria, el régimen de funcionamiento y la adopción de acuerdos de la Asamblea General.*

*k) El régimen de las secciones que se creen en la cooperativa, en su caso.*

*l) La determinación del órgano de administración de la sociedad cooperativa, su composición y la duración del cargo, así como la elección, sustitución y remoción de sus miembros.*

*m) El régimen de transmisión, y reembolso o rehúse, de las aportaciones.*

*n) Cualquier otra exigida por la normativa vigente.*

### **Comentario del artículo 11 de la LSCA.**

Los estatutos sociales son una norma jurídica interna básica de la cooperativa, en la que se fijan las reglas esenciales de su funcionamiento, a respetar por todas las personas socias.

A continuación vamos a realizar un análisis comparativo de la regulación actual respecto a la anterior, resaltando las novedades introducidas en este concreto artículo por la nueva ley.

En la Ley 2/1999, de 31 de marzo en su artículo 12 se establecía en sus apartados 1º, 2º y 3º que los estatutos sociales debían regular: Denominación de la sociedad cooperativa; Domicilio social; y La actividad o actividades que desarrollará la cooperativa para el cumplimiento de su fin social. Todo ello se regula ahora en el primer apartado del artículo 11 a) de la nueva ley.

Por otro lado, la Ley 2/1999 establecía en el apartado 4º la duración. En la nueva ley no se dispone nada en cuanto a la duración, si bien establece la obligación de regular estatutariamente el ámbito principal de actuación y la fecha de cierre del ejercicio económico.

La derogada ley de sociedades cooperativas de 1999 establecía que debía regularse estatutariamente la participación mínima obligatoria del socio en la actividad cooperativizada. Con la nueva ley sigue siendo obligatorio regular la participación mínima obligatoria de las personas socias en la actividad cooperativizada. Estatutariamente también deberán regularse los módulos de participación en la actividad cooperativizada de cada tipo de persona socia.

En la nueva ley se elimina la referencia a la regulación estatutaria del órgano de gestión, siendo obligatoria únicamente la del órgano de administración de la sociedad.

Por último, se hace alusión en el artículo 10 m) a la necesidad de regular estatutariamente el rehúse de aportaciones, aspecto este, una vez más novedoso en relación con la regulación anterior que no hacía alusión a ello.

El contenido de los estatutos sociales ha de poder ser conocido por todas las personas socias y cualquier otra interesada en la actividad de la cooperativa (trabajadores por cuenta ajena). Además, el derecho de información de las personas socias incluye siempre la obligación por parte de la cooperativa de facilitarle un ejemplar de los estatutos sociales y de sus eventuales modificaciones.

## **ARTÍCULO 12. SECCIONES.**

*1. Los estatutos podrán prever la constitución y funcionamiento de secciones, con autonomía de gestión y patrimonio separado, en el seno de la sociedad cooperativa, a*

*fin de desarrollar actividades económicas específicas o complementarias a su objeto social, de conformidad con esta ley y sus normas de desarrollo. Del cumplimiento de las obligaciones contraídas específicamente por cada sección responderá, en primer lugar, su patrimonio separado, sin perjuicio de la responsabilidad general y unitaria de la entidad, que dispondrá de acción de repetición contra los socios y socias que integren dicha sección.*

*2. La reunión de los socios y socias de la sección constituye su Junta de personas socias, que podrá elegir de entre ellos un órgano de administración colegiado, el Consejo de Sección, o unipersonal, la Dirección de Sección.*

*3. Las secciones no tendrán personalidad jurídica independiente, sin perjuicio de la independencia patrimonial prevista en el artículo 98.e) para las pertenecientes a sociedades cooperativas de viviendas.*

*4. El órgano de administración de la sociedad cooperativa podrá acordar la suspensión de los acuerdos de la Junta de personas socias, de considerarlos lesivos para los intereses generales de la sociedad cooperativa. El acuerdo de suspensión tendrá efectos inmediatos y deberá constar en el orden del día de la primera Asamblea General que se celebre, que podrá dejar, definitivamente, sin efecto el acuerdo suspendido, o ratificarlo, considerándose ratificado de no pronunciarse al respecto.*

*5. Reglamentariamente se regularán las particularidades del régimen de constitución, organización y funcionamiento de las secciones, especialmente sus relaciones con los órganos generales de la sociedad cooperativa, su régimen contable, así como las especificidades propias de las secciones de crédito.*

## **Concordancia con los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Reglamento de desarrollo**

### **ARTÍCULO 9. CONSTITUCIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO.**

*1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, se podrán constituir en el seno de la sociedad cooperativa secciones sin personalidad jurídica independiente, para realizar una actividad económica específica o complementaria a su objeto social, y que los estatutos de la entidad incorporen su regulación.*



*2. Asimismo, los estatutos de la sociedad cooperativa regularán el procedimiento de incorporación de los socios y socias a la sección, la publicidad y control de las personas socias que, por sus características, la integran, así como sus derechos, obligaciones y responsabilidades.*

*3. Las secciones iniciarán su actividad en el mismo momento de su creación con base en los estatutos de la sociedad cooperativa, salvo que se prevea en estos la necesidad de la adopción posterior de un acuerdo específico al respecto, que deberá emitir el órgano de administración de la entidad.*

*No obstante, cuando se trate de una sección de crédito será necesario, en todo caso, la adopción de dicho acuerdo.*

*4. Salvo disposición estatutaria en contra, la distribución de excedentes, la imputación de pérdidas a las personas socias, o ambas operaciones, se harán de forma diferenciada por secciones.*

*5. Las secciones llevarán necesariamente contabilidad independiente, sin perjuicio de su integración en la contabilidad general de la entidad, que deberá someter anualmente su estado financiero a auditoría externa.*

## **ARTÍCULO 10. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.**

*1. Estatutariamente se preverá la existencia de una Junta de personas socias de la sección, integrada por los socios y socias adscritos a la misma, en la que podrán delegarse competencias propias de la Asamblea General sobre aquellas materias que no afecten al régimen general de la sociedad cooperativa. Los acuerdos adoptados serán incorporados al libro de actas de la Junta de personas socias de la sección, que obligarán a todas las personas inscritas en esta, incluso a las disidentes y a las no asistentes.*

*2. Los acuerdos de la Junta de personas socias de la sección serán impugnables en los términos señalados en el artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*El órgano de administración de la sociedad cooperativa podrá acordar la suspensión de los acuerdos de la Junta de personas socias de la sección haciendo constar los motivos por los que los considera impugnables. El acuerdo de suspensión tendrá efectos*

*inmediatos, sin perjuicio de su impugnación de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 35. Tanto el acuerdo de suspensión como el de impugnación, en su caso, deberán constar en el orden del día de la primera Asamblea General que se celebre tras el acuerdo de suspensión, en la que se decidirá sobre la anulación o no del acuerdo impugnado.*

*3. Las secciones podrán contar con un Consejo de Sección o una Dirección de Sección, cuyos miembros serán designados por la Junta de personas socias de la sección de entre sus componentes. La competencia de estos órganos de gestión se extenderá a los asuntos concernientes al giro o tráfico ordinario de la sección, ajustándose a las directrices definidas por el órgano de administración de la sociedad cooperativa, en desarrollo de la política acordada por la Junta de personas socias de la sección y la Asamblea General de la entidad. Asimismo, en el ejercicio de su competencia estarán sujetos a las limitaciones previstas para la Dirección en el artículo 47.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*De existir Consejo o Dirección de Sección, les será de aplicación supletoria lo previsto para el órgano de administración en la citada Ley y en el presente Reglamento.*

*4. La Junta de personas socias de la sección, designará a la persona que represente a la sección en el órgano de administración de la sociedad cooperativa, conforme a lo establecido en el artículo 35.2.*

*A su vez, el órgano de administración de la sociedad cooperativa designará entre uno y tres de sus miembros para que sean debidamente convocados a las reuniones del Consejo de Sección, debiendo estos asistir a la celebración de las mismas e informar al resto de miembros del Consejo Rector sobre las cuestiones debatidas y los acuerdos adoptados.*

## **ARTÍCULO 11. ALCANCE Y OBJETO.**

*1. Las sociedades cooperativas que no sean de crédito podrán regular estatutariamente la existencia de secciones de crédito, debiendo hacerlo, necesariamente, siempre que realicen regularmente operaciones de intermediación financiera con sus personas socias.*

*2. Las secciones de crédito tendrán como objeto alguno o varios de los siguientes fines:*

- *Contribuir a la financiación de las operaciones de la sociedad.*
- *Contribuir a la financiación de las actividades de las personas socias vinculadas a la actividad de la sociedad.*
- *Gestionar de manera conjunta las disponibilidades líquidas de las personas socias y de la propia entidad.*

*3. Dichas secciones limitarán sus operaciones activas y pasivas al seno de la entidad y a sus personas socias, exclusivamente, sin perjuicio de la facultad de rentabilizar sus excedentes de tesorería a través de entidades financieras o en secciones de crédito de entidades cooperativas en las que aquella esté integrada.*

*4. Quedan exceptuadas del apartado anterior las personas socias colaboradoras que revistan dicho carácter en función de su participación en actividades accesorias de la entidad, que solo podrán realizar operaciones pasivas con la sección.*

*En todo caso, el número de personas socias colaboradoras a que se refiere este apartado no podrá ser superior al de las que integren la entidad en calidad de socios y socias comunes y el importe de los depósitos de aquellas no podrá superar el veinticinco por ciento de los depósitos correspondientes a las personas socias comunes.*

## **ARTÍCULO 12. DENOMINACIÓN.**

*1. Las sociedades cooperativas con sección de crédito no podrán incluir en su denominación las expresiones «cooperativa de crédito», caja rural u otra análoga, ni sus abreviaturas.*

*2. El término sección de crédito solo podrá ser utilizada por las sociedades cooperativas que ajusten la constitución y funcionamiento de dichas secciones a las disposiciones de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y al presente Reglamento.*

*3. Las sociedades cooperativas con sección de crédito incluirán dicha expresión en cualquier referencia documental que hagan de dicha sección.*

## **ARTÍCULO 13. ÓRGANOS DE LA SECCIÓN DE CRÉDITO.**

*1. Las secciones de crédito podrán contar o no, con un Consejo o Dirección de Sección a los que se refieren los artículos 12.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y 10.3 del presente Reglamento. Con independencia de ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 47.1 de la citada Ley, dichas entidades deberán contar con un Director o Directora general o cargo equivalente, con dedicación permanente.*

*2. Los titulares de la citada Dirección o Gerencia profesional deberán reunir las condiciones de capacidad, preparación técnica y experiencia para desarrollar las funciones propias del cargo, y serán designados por el órgano de administración de la entidad. A menos que estatutariamente se establezca lo contrario, la designación de la Dirección o Gerencia Profesional se realizará a propuesta del Consejo o Dirección de Sección, de existir este. De no existir, el nombramiento se hará directamente sin propuesta alguna.*

*Las funciones del Consejo o Dirección de Sección y de la Dirección o Gerencia profesional, de coexistir, deberán delimitarse claramente en los estatutos de la entidad.*

*3. Las condiciones económicas aplicables a las operaciones activas y pasivas de la sección de crédito deberán acordarse por el órgano de administración de la sociedad, salvo las que vengan atribuidas expresamente por la Ley 14/2011, de 23 de diciembre o el presente Reglamento a la Asamblea General.*

*Cada operación que la entidad realice con cargo a los recursos de la sección de crédito requerirá el acuerdo del órgano de administración de la propia entidad o del titular de la Dirección o Gerencia profesional en que se haya delegado expresamente esta facultad.*

## **ARTÍCULO 14. IGUALDAD Y TRANSPARENCIA.**

*1. Las condiciones económicas aplicables a las operaciones activas y pasivas de la sección de crédito se ofrecerán en términos de no discriminación a las personas socias.*

*2. Las citadas condiciones deberán anunciarse en un lugar visible de la entidad o de cualquier otra forma prevista en los estatutos que garantice a las personas socias la posibilidad efectiva de conocer la existencia y el contenido de los acuerdos adoptados*

*sobre las mismas, en especial, en lo referente a los tipos de interés, comisiones y gastos por los servicios prestados por la sección.*

*En todo caso, deberá incluirse, de manera destacada, en el anuncio de las condiciones aplicables a las operaciones pasivas que los depósitos efectuados en la sección de crédito no se encuentran garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, conforme a lo previsto en el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y su normativa de desarrollo.*

## **ARTÍCULO 15. REGULACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA.**

*1. La actividad de las secciones de crédito no podrá tener una dimensión de tal envergadura que constituya de hecho la actividad principal de la sociedad cooperativa.*

*Se entiende que la actividad de la sección de crédito constituye la actividad principal de la sociedad cooperativa cuando los ingresos ordinarios de la sección excedan de la mitad del resto de los ingresos ordinarios de la entidad durante más de dos ejercicios cerrados consecutivos y su activo total supere en más de un cincuenta por ciento al del conjunto de activos consolidados del balance de la sociedad cooperativa.*

*2. En orden a salvaguardar un adecuado nivel de solvencia en las sociedades cooperativas con sección de crédito, el volumen de las operaciones activas de crédito de la sección no podrá superar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.1 para los anticipos de pago por el desarrollo de la actividad cooperativizada, el cincuenta por ciento de los recursos de la propia sección de crédito.*

*3. Las sociedades cooperativas con sección de crédito deberán mantener un coeficiente de disponibilidades líquidas que no podrá ser inferior al quince por ciento del volumen de depósitos de la sección de crédito.*

*Los activos líquidos computables para la cobertura del citado coeficiente serán el efectivo en caja más los saldos mantenidos en instrumentos financieros de elevada liquidez y calidad crediticia, que deberán estar, en todo momento, plenamente disponibles para su uso y depositados en entidades de crédito.*

*4. A fin de realizar una mejor gestión de los fondos depositados, las sociedades cooperativas con sección de crédito podrán colocar sus excedentes de tesorería en las entidades a que se refiere el artículo 11.3, en cuyo caso, habrán de hacerlo en activos de elevada calidad crediticia que garanticen, al menos, la recuperación a su vencimiento del capital invertido y que respondan a criterios suficientes de seguridad, solvencia y liquidez.*

*5. Los activos afectos a la sección de crédito no se podrán aportar en garantía ni ser objeto de pignoración. Tampoco los inmovilizados pertenecientes a la entidad podrán aportarse en garantía ni ser objeto de pignoración mientras estén siendo financiados con cargo a la sección de crédito.*

*6. Las sociedades cooperativas con sección de crédito no podrán, en ningún caso, imputar pérdidas con cargo a los depósitos de dicha sección.*

## **ARTÍCULO 16. OPERACIONES CON LA SOCIEDAD COOPERATIVA.**

*1. En el supuesto de operaciones con la sociedad cooperativa, el porcentaje establecido en el artículo 15.2, relativo al volumen de las operaciones activas de crédito de la sección, podrá incrementarse, mediante acuerdo de la Asamblea General, hasta un máximo del setenta y cinco por ciento, siempre que la finalidad de la operación concertada sea anticipar el pago a las personas socias por los servicios y productos entregados a la entidad para el desarrollo de la actividad cooperativizada, y su plazo de devolución no sea superior a un año.*

*El interés establecido para las operaciones crediticias con la propia sociedad cooperativa no podrá resultar inferior al interés legal del dinero.*

*2. Del importe global invertido en la sociedad cooperativa, solo se podrá destinar a inversiones de inmovilizado una cifra no superior al veinticinco por ciento de los recursos de la sección de crédito.*

*3. Las sociedades cooperativas no podrán aplicar los recursos de la sección de crédito en la creación o financiación de sociedades o empresas cuya forma jurídica no sea de economía social, a excepción de las entidades mercantiles que se integren en un grupo cooperativo.*



## **ARTÍCULO 17. OPERACIONES CON PERSONAS SOCIAS.**

*1. Las sociedades cooperativas con sección de crédito podrán conceder préstamos y créditos a las personas socias para contribuir a la financiación de actividades propias siempre que estas estén vinculadas a las de la entidad.*

*2. Las sociedades cooperativas con sección de crédito no podrán conceder operaciones a una persona socia, o a un grupo de estas que por su especial vinculación mutua constituyan una unidad de riesgo, cuando su volumen exceda del dos y medio por ciento de los recursos totales de la cooperativa, si esta fuera de primer grado, o del diez por ciento, si se trata de una cooperativa de segundo o ulterior grado. A este efecto computarán por la mitad de su importe los préstamos que estén cubiertos suficientemente por garantías reales.*

*Se considera que forman una unidad de riesgo las personas titulares de operaciones de riesgo que tengan una relación de consanguinidad o afinidad en primer grado, así como aquellas que conjuntamente destinen los préstamos o créditos recibidos a la misma aplicación, o aporten la misma garantía. Cuando, aún encontrándose en alguna de las circunstancias indicadas, dos o más personas no constituyan, en función de su independencia económica y a juicio del titular de la Dirección o Gerencia profesional, una unidad de riesgo, este podrá exceptuar la regla a que se refiere este apartado.*

*Las sociedades cooperativas con sección de crédito no pueden instrumentar por medio de la sección de crédito riesgos de firma con personas socias.*

*3. La concesión de un préstamo o crédito con cargo a la sección de crédito a una persona que sea miembro de cualquier órgano ejecutivo o de control de la entidad o de la sección de crédito, incluidos la Dirección o Gerencia profesional, o que bien guarde relación de parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con aquella, requerirá acuerdo del órgano de administración en el que no participará, en su caso, la persona implicada, que se considerará en conflicto de interés. Si esta es titular de la administración única, la concesión del préstamo o crédito requerirá acuerdo de la Asamblea General de la entidad.*

## **ARTÍCULO 18. INFORMACIÓN Y AUDITORÍA.**

*1. De conformidad con lo previsto en el artículo 117 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las sociedades cooperativas con sección de crédito deberán remitir semestralmente a la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas información de carácter económico y financiero de la sección de crédito. A este fin, la citada Consejería establecerá mediante orden los datos que deberán facilitarse y aprobará los modelos de formularios necesarios para su cumplimentación.*

*Asimismo, las sociedades cooperativas con sección de crédito estarán obligadas a remitir a la Consejería competente en materia de cooperativas toda aquella información sobre su actividad y gestión, relacionada con la sección de crédito, que ésta les solicite expresamente.*

*2. Con arreglo al artículo 73.1.d) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las sociedades cooperativas que cuenten con sección de crédito deberán someter a auditoría externa, en los términos establecidos por la Ley de Auditoría de Cuentas y sus normas de desarrollo, las cuentas anuales y demás documentos necesarios conforme a la normativa general contable o cualquier otra disposición de obligado cumplimiento. Dicha auditoría incluirá un informe complementario específico referido a la actividad financiera de la sección de crédito, que se elaborará de acuerdo con las normas técnicas dictadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y con el contenido mínimo, que en su caso, establezca la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas.*

*3. Las personas auditoras o las sociedades de auditoría de las cuentas anuales de las sociedades cooperativas con sección de crédito estarán obligadas a comunicar por escrito a la Consejería competente en materia de cooperativas, en un plazo máximo de diez días desde el momento en que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones, cualquier hecho o acuerdo sobre la entidad auditada que pueda:*

*a) Constituir una violación grave de las disposiciones legales o reglamentarias reguladoras de las secciones de crédito.*

*b) Perjudicar la continuidad de la explotación o afectar gravemente a la estabilidad o solvencia de la entidad.*

*c) Implicar una opinión desfavorable o denegada o impedir la emisión del informe de auditoría.*

*La referida comunicación deberán realizarla simultáneamente a la entidad que, a su vez, contará con un plazo máximo de diez días para trasladarla a la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, junto con todas aquellas alegaciones que estime convenientes para su defensa.*

### **Comentario del artículo 12 de la LSCA y de los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Reglamento de desarrollo.**

El Reglamento de Sociedades Cooperativas Andaluzas dedica un capítulo en exclusiva a las secciones, en especial, las secciones de crédito. Es la primera vez que se aborda en profundidad su régimen en la legislación cooperativa andaluza debido a la creciente importancia que dichas secciones están cobrando en la estructura económica de las cooperativas, especialmente en las agrarias. Como novedades cabe destacar el establecimiento de una mayor autonomía funcional. Y también, el establecimiento de un régimen de previsión más estricto en lo que respecta al régimen económico y de control de las de crédito ya que su actividad puede afectar a la capacidad económico financiera de la sociedad y sus personas socias. Esta limitación puede obligar en algunos casos a que la cooperativa tenga que acudir a financiación externa, lo que en un momento de crisis como el actual sin que se atisbe su final, supone uno de los mayores obstáculos para las empresas en general y en particular, para las cooperativas agrarias, sus agricultores y ganaderos, lo que representa un freno a la actividad de la cooperativa y a la de sus personas socias, al encontrar dificultades para obtener financiación o, en caso de conseguirla, un importante incremento de los costes financieros.

Hasta ahora las secciones no han tenido regulación específica en Andalucía. Con el Reglamento se establece una estricta normativa que regula, entre otras cuestiones, el volumen de operaciones que la sección de crédito puede realizar con sus socios y socias, e incluso con la propia cooperativa. Todas aquellas sociedades cooperativas que no sean de crédito podrán crearlas estatutariamente. En cualquier caso, será obligatoria su previsión estatutaria cuando realicen regularmente operaciones de intermediación financiera con sus personas socias.

A través de los estatutos sociales la cooperativa podrá crear secciones con autonomía de gestión y patrimonio separado para el desarrollo de actividades económicas específicas o complementarias a su objeto social. La nueva regulación de las secciones de la cooperativa y la gran diferencia con la normativa preexistente es que ahora no existen dos clases de secciones, con o sin afectación de un patrimonio a resultados de sus operaciones. Siempre resulta afectado dicho patrimonio, con lo cual, no se requiere la inscripción de dicha afectación que opera desde que en los estatutos las prevén.

El régimen de responsabilidad de dichas secciones es el siguiente:

- a) Cada sección responderá del cumplimiento de las obligaciones contraídas específicamente en su seno.
- b) De no ser así, responderá la sociedad cooperativa en su conjunto que dispone de la acción de repetición contra los socios y socias que integren la sección que contrajo específicamente la obligación.

Una de las novedades que introduce el Reglamento es que necesariamente ha de existir una Junta de socios de la sección (antes optativa); Que puede elegirse un órgano de gestión de la sección (antes prohibido); y que el órgano de administración de la cooperativa ha de designar a determinadas personas que asistan a las reuniones de dicho órgano de gestión.

La Junta de personas socias estará formada por el conjunto de socios y socias que componen la sección y será la encargada de elegir el tipo de órgano de administración. El órgano de administración podrá ser colegiado, el Consejo de Sección, o unipersonal, la Dirección de Sección. Sus miembros serán elegidos por la Junta de entre los socios que la conforman.

El órgano de administración tiene entre otras, la potestad para acordar la suspensión de los acuerdos, con efectos inmediatos, de la Junta de personas socias si los considera lesivos para los intereses generales de la sociedad cooperativa. Dicho acuerdo deberá tratarse en la primera Asamblea General que se celebre para así adoptar una de las siguientes decisiones:

- a) Dejar sin efecto el acuerdo suspendido.

b) Ratificarlo.

c) Si no se pronunciase al respecto se entenderá ratificado.

El artículo 13 del Reglamento regula los órganos de la sección de crédito y su característica esencial es que abre la posibilidad de regular un órgano ejecutivo colegiado con la necesidad de contar con un Director o gerente profesional con dedicación permanente.

En el artículo 15 del Reglamento se realiza una regulación económico-financiera de estas secciones muy garantista para los socios, resaltando los límites a su envergadura en relación con la actividad principal de la entidad, a las operaciones pasivas, a los coeficientes de disponibilidad, a la prohibición de que con estos fondos se puedan imputar pérdidas o puedan aportarse en garantía o pignoración.

El artículo 16 del Reglamento regula el aspecto de más importancia para las cooperativas agrarias, sobre las secciones de crédito que, por lo demás, son las que disponen de este tipo de secciones. Concretamente, hablamos de los anticipos de campaña, que es la cantidad que la cooperativa puede adelantar a cuenta de la liquidación del ejercicio, anticipo que resulta muy difícil de satisfacer sin recurrir a los fondos de la sección de crédito. Teóricamente se articula como un crédito de la sección a la cooperativa que a su vez lo destina a esta finalidad. En este apartado es donde los porcentajes utilizados son más generosos, toda vez, que se hacen sobre los productos concretos que aportan para su comercialización los socios. Quiere decirse que se trabaja con una muy sólida garantía.

En el artículo 17 del Reglamento se regulan los créditos puntuales que la cooperativa puede conceder a los socios. Y en este particular la norma es sumamente restrictiva. Para empezar, los créditos tienen que estar siempre relacionados con la actividad profesional. Por otra parte, se establecen unos porcentajes muy reducidos y que afecten tanto a socios individuales como a grupos de socios que puedan constituir unidades de riesgo. Y, por último, se establecen garantías específicas para el caso de que los créditos se concedan a miembros de los órganos de la cooperativa o familiares. También se define la unidad de riesgo como la formada por personas titulares de operaciones de riesgo que tengan una relación de consanguinidad o afinidad en primer grado, así como aquellas que conjuntamente destinen los préstamos o créditos recibidos a la misma aplicación, o

aporten la misma garantía. De este modo se establece una limitación en las operaciones que puede realizar una persona socia o una unidad de riesgo con la misma del 2,5 % de los recursos totales de la cooperativa. Dicha limitación se amplía para las cooperativas de segundo o ulterior grado al 10% (Dictamen 3/14-CES de Andalucía).

El artículo 18 del Reglamento establece más controles. A la información que toda cooperativa tiene que facilitar a la Consejería anualmente, se suma una específica sobre la sección de crédito, de carácter semestral. Además, se obliga a toda cooperativa con sección de crédito a que se audite con informe específico sobre la sección. Los auditores a su vez quedan obligados a transmitir a la Consejería cualquier irregularidad detectada, con independencia de la auditoria.

Ciertamente, uno de los motivos de crítica de la previsión legal de las secciones de crédito ha sido la indeterminación que provoca la expresión “intermediación financiera”, por cuanto resulta difícil dar una definición rotunda de qué tipo de operaciones pueden ser consideradas como tal. Así, en el Dictamen 3/14 del Consejo Económico y Social de Andalucía se advierte de que dicha indeterminación puede provocar una grave inseguridad jurídica.

Las secciones de crédito se crean con la finalidad de proteger los depósitos reembolsables que las personas socias realizan en la cooperativa. Por este motivo, el mencionado Dictamen recomendó una redacción alternativa del Artículo 11. 1 y es la siguiente:

*“Las sociedades cooperativas que no sean de crédito podrán regular estatutariamente la existencia de secciones de crédito, debiendo hacerlo, necesariamente, siempre que las personas socias depositen regularmente en ella fondos dinerarios reembolsables para los fines establecidos en el punto dos de este artículo.”*

Las personas socias colaboradoras sólo podrán realizar operaciones pasivas con la sección de crédito pero se establecen dos limitaciones. Por un lado, que su número no sea superior al de personas socias comunes que integren la entidad. Y por otro, que el importe de los depósitos de las colaboradoras no supere el 25% de los depósitos correspondientes a las personas socias comunes.

En la disposición transitoria segunda, se establece que las secciones de crédito existentes a la entrada en vigor del Decreto 123/2014 dispondrán de un periodo de dos años a partir



de la entrada en vigor de este para adaptar su régimen económico a lo dispuesto en los artículos 15, apartados 1, 2 y 3, y 16 de este Reglamento.

## **CAPÍTULO II. RÉGIMEN SOCIAL**

### **ARTÍCULO 13. CUALIDAD Y CLASES DE PERSONAS SOCIAS.**

- 1. Podrá ser socia de una sociedad cooperativa toda persona física o jurídica, pública o privada, así como las sociedades civiles y las comunidades de bienes y derechos, con las especialidades previstas para algunos tipos de cooperativas en esta ley y su desarrollo reglamentario.*
- 2. En las sociedades cooperativas pueden existir, con carácter general, las siguientes clases de personas socias: comunes, de trabajo, inactivas y colaboradoras.*

### **Concordancia con el artículo 19 del Reglamento de desarrollo**

### **ARTÍCULO 19. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS PERSONAS SOCIAS.**

- 1. En ningún caso pueden constituirse sociedades cooperativas de primer grado formadas únicamente por sociedades cooperativas.*
- 2. Los estatutos de las cooperativas mixtas, de explotación comunitaria de la tierra, de integración social y de servicios públicos, además de las de trabajo, no podrán prever la admisión de socios y socias de trabajo.*
- 3. Las entidades públicas podrán ser socias de las sociedades cooperativas para prestar servicios o realizar actividades relacionadas con su función.*

### **Comentario del artículo 13 LSCA y del artículo 19 RLSCA.**

De acuerdo con este artículo podrán ser personas socias las siguientes:

- a) Personas físicas.
- b) Personas jurídicas.

c) Personas públicas.

d) Personas privadas.

e) Sociedades civiles.

f) Comunidades de bienes y derechos.

Sin embargo, existen ciertas especialidades previstas tanto legal como reglamentariamente.

Las condiciones o requisitos que hay que cumplir para ser socio se establecerán estatutariamente.

#### **ARTÍCULO 14. PERSONA SOCIA COMÚN.**

*Se entenderá por persona socia común aquella que realiza plenamente la actividad cooperativizada, siéndole de aplicación, íntegramente, el régimen general de derechos y obligaciones contenidos en el presente capítulo.*

#### **Comentario del artículo 14 de la LSCA.**

En la Ley de Sociedades Cooperativas se prevé la existencia de cuatro clases de personas socias. La persona socia común es aquella que realiza la actividad prevista en el objeto social de la cooperativa y que consistirá en trabajar, prestar un servicio, utilizar los servicios de la cooperativa, consumir o comprar, según el tipo de cooperativa en la que se encuentre. A éste tipo de persona socia se le aplica el régimen general de derechos y obligaciones.

#### **ARTÍCULO 15. PERSONA SOCIA DE TRABAJO.**

*1. Estatutariamente, las cooperativas de primer grado, salvo las de trabajo y las especiales que reglamentariamente se determinen, así como las de segundo o ulterior grado, podrán prever la existencia de socios y socias de trabajo, cuya actividad cooperativizada consistirá en la prestación de su trabajo personal.*

*2. Los estatutos sociales fijarán los criterios que aseguren la participación equilibrada de estas personas socias con las demás en lo relativo al ejercicio de sus derechos y obligaciones.*

*3. Serán de aplicación a los socios y socias de trabajo las normas establecidas en esta ley para las personas socias trabajadoras de las cooperativas de trabajo en todo lo que les sea de aplicación con arreglo a su naturaleza y, en su caso, con arreglo a la legislación estatal aplicable.*

### **Comentario del artículo 15 de la LSCA.**

La persona socia de trabajo es aquella que aporta como actividad cooperativizada su trabajo personal. Para que pueda existir este tipo de persona socia deberá estipularse así en los estatutos sociales. Además, únicamente podrá existir este tipo de persona socia en todas las cooperativas de primer grado menos en aquellas que sea exclusivamente de trabajo y aquellas excluidas reglamentariamente. También podrán existir este tipo de socios en las cooperativas de segundo o ulterior grado.

Como ya se expuso con anterioridad, para que exista este tipo de persona socia deberá preverse así en los estatutos sociales. De igual modo, estatutariamente se deberán fijar una serie de criterios tendentes a asegurar el equilibrio entre los derechos y obligaciones de este tipo de socios y los de los demás. Los estatutos de las cooperativas que prevean la admisión de socios de este tipo deben fijar criterios que aseguren su equitativa y ponderada participación en las obligaciones y derechos de naturaleza social y económica.

La legislación aplicable a este tipo de socios es la misma que la prevista para las personas socias trabajadores de las cooperativas de trabajo.

### **ARTÍCULO 16. PERSONA SOCIA INACTIVA.**

*1. Los estatutos podrán prever, en los casos y con los requisitos que estos determinen, que el socio o socia que deje de realizar la actividad cooperativizada o de utilizar sus servicios sea autorizado por el órgano de administración para mantener su vinculación social en concepto de persona socia inactiva.*

*2. Los estatutos establecerán el tiempo mínimo de permanencia en la sociedad cooperativa, en ningún caso inferior a tres años, para que una persona socia pueda acceder a la situación de inactiva y determinarán su régimen de derechos y obligaciones, sin que el conjunto de sus votos pueda superar el veinte por ciento del total de los votos sociales.*

*3. Si la inactividad estuviera provocada por jubilación u otra causa que, siendo jurídicamente relevante, esté prevista en los estatutos, el interés abonable por sus aportaciones al capital podrá ser superior al de los socios o socias en activo, respetándose siempre el límite máximo señalado con carácter general en esta ley.*

*4. El régimen aplicable a la persona socia inactiva será el establecido para la persona socia común, salvo previsión en contra de esta ley.*

#### **Comentario del artículo 16 de la LSCA.**

La persona socia inactiva es aquella que deja de realizar la actividad cooperativizada o de utilizar sus servicios. La posibilidad de existencia de este tipo de socio deberá estar prevista en los estatutos sociales. Éstos deberán concretar los casos y requisitos que deberán darse como presupuesto de su existencia. Además, la vinculación como socio inactivo deberá ser autorizada por el órgano de administración.

El tiempo mínimo de permanencia en la sociedad para que una persona socia pueda acceder a la condición de inactiva será el previsto en los estatutos sociales, si bien nunca podrá ser inferior a tres años. A través de los estatutos sociales también se preverá el régimen de derechos y obligaciones. Sin embargo, el artículo 16. 2 in fine dispone que nunca que el conjunto de sus votos podrá superar el veinte por ciento del total de los votos sociales.

En los casos en que se acceda a la condición de socio inactivo por jubilación u otra causa así prevista en los estatutos, el interés abonable por las aportaciones al capital podrá ser superior al de los socios o socias en activo. Sin embargo, en este tipo de supuestos deberá respetarse siempre el límite máximo señalado con carácter general en la ley de sociedades cooperativas.

Por último, establece el artículo 16. 4 que el régimen aplicable a los socios y socias inactivos será el previsto para los socios comunes a menos que se estipule algo distinto en otro precepto de la misma ley de cooperativas.

## **ARTÍCULO 17. PERSONA SOCIA COLABORADORA.**

*1. Si los estatutos sociales lo prevén, podrán formar parte de las sociedades cooperativas como personas socias colaboradoras aquellas personas susceptibles de ser socias conforme al artículo 13.1 que, sin realizar la actividad cooperativizada principal, contribuyan a la consecución del objeto social de la cooperativa o participen en alguna o algunas de sus accesorias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104.2 sobre el principio de exclusividad.*

*Cuando las personas socias colaboradoras realicen actividades accesorias, los estatutos sociales o el reglamento de régimen interior deberán identificar cuáles son y en qué consisten.*

*2. Los estatutos determinarán el régimen de admisión y baja, así como sus derechos y obligaciones, si bien el conjunto de sus votos no podrá superar el veinte por ciento de los votos sociales. Las personas socias colaboradoras podrán elegir un representante en el Consejo Rector, pudiéndose condicionar, estatutariamente, esta designación a su número en relación con el resto de las personas socias o a la cuantía de sus aportaciones al capital social.*

*3. Las personas socias colaboradoras suscribirán la aportación inicial al capital social que fijen los estatutos, pero no estarán obligadas a realizar nuevas aportaciones obligatorias, si bien pueden ser autorizadas por la Asamblea General a realizar aportaciones voluntarias. La suma de sus aportaciones no podrá superar el veinte por ciento del total de las aportaciones al capital social y deberán contabilizarse de manera independiente a las del resto de socios o socias.*

*4. El régimen aplicable a la persona socia colaboradora será el establecido para la persona socia común, salvo previsión en contra de esta ley.*

## **Comentario del artículo 17 de la LSCA.**

La persona socia colaboradora es aquel que no participa en la actividad cooperativizada pero colabora con la consecución del objeto social aportando capital o desarrollando algún tipo de actividad complementaria dependiente de la principal.

Cuando haya personas socias colaboradoras que realicen actividades accesorias, los estatutos sociales deberán especificar cuáles son esas actividades y en qué consisten.

Los estatutos sociales también preverán cuáles son sus derechos y obligaciones. No obstante, en ningún caso el conjunto de los votos de este tipo de persona socia podrá superar el veinte por ciento de los votos sociales. Además, las personas socias colaboradoras tienen derecho a elegir un representante en el Consejo Rector. Este derecho se podrá restringir estatutariamente atendiendo al número de personas socias colaboradoras o a la cuantía de sus aportaciones al capital social.

Las personas socias colaboradoras deben realizar la aportación inicial al capital social, pero no tendrán que hacer nuevas aportaciones obligatorias posteriormente. Si la Asamblea General así lo decide, podrán hacer aportaciones voluntarias. En ningún caso sus aportaciones podrán superar el veinte por ciento del total de las aportaciones al capital social. Las aportaciones de las personas socias colaboradoras se contabilizan de manera independiente a las del resto de personas socias.

## **ARTÍCULO 18. ADMISIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE SOCIO O SOCIA.**

*1. Los estatutos establecerán los requisitos objetivos para la admisión de socios o socias.*

*2. La solicitud de admisión se formulará por escrito al órgano de administración, que deberá resolverla, así como publicar y notificar el acuerdo en la forma que estatutariamente se determine, en el plazo máximo de tres meses desde su presentación. Cuando el órgano de administración sea el Consejo Rector, los estatutos sociales podrán prever la delegación de la facultad de admisión en una Comisión Ejecutiva cuyo régimen será el establecido en el artículo 40. Transcurrido el citado plazo*



*sin que medie notificación del acuerdo expreso sobre la solicitud, esta se entenderá aceptada.*

*3. Notificado el acuerdo de admisión o transcurrido el citado plazo sin que medie notificación, la persona aspirante a socio o socia contará con un plazo de un mes para suscribir y desembolsar las aportaciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 55 y 58, reguladores de las aportaciones obligatorias y de nuevo ingreso, respectivamente, así como para satisfacer la cuota de ingreso exigida, en su caso. Satisfechas las citadas obligaciones económicas, la persona aspirante adquirirá la condición de socio o socia. Todo ello, sin perjuicio de lo establecido para el desembolso aplazado de las aportaciones en el artículo 58.3.*

*4. La denegación expresa de la solicitud de admisión habrá de estar motivada y vinculada a la existencia de una causa justificada dispuesta en los estatutos sociales o en una disposición normativa, o a la imposibilidad técnica derivada de las condiciones económico-financieras, organizativas o tecnológicas de la entidad.*

*5. La impugnación de los acuerdos adoptados en esta materia se regulará reglamentariamente.*

**Concordancia con el artículo 20 del Reglamento de desarrollo.**

## **ARTÍCULO 20. ADMISIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE PERSONA SOCIA.**

*1. El procedimiento de admisión de la persona socia se ajustará a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y en los estatutos de la sociedad cooperativa, siendo competente para su resolución el órgano de administración, sin perjuicio de que dicha facultad pueda ejercerse, mediante delegación, por una Comisión Ejecutiva, en los términos y con las condiciones establecidas en el apartado 2 del citado artículo.*

*2. El acuerdo denegatorio podrá ser recurrido por la persona solicitante en el plazo de un mes, a contar desde el día de recepción de la notificación del acuerdo, ante el Comité Técnico o, en su defecto, ante la Asamblea General.*

*3. Tanto el acuerdo de aceptación como el denegatorio podrán ser recurridos por el cinco por ciento de las personas socias ante el Comité Técnico o, en su defecto, ante la*

*Asamblea General, en el plazo de un mes, a contar desde la publicación en el medio de comunicación social establecido estatutariamente o desde que transcurrieran tres meses sin resolver expresamente el órgano de administración sobre la solicitud de admisión.*

*4. Los recursos a los que se refieren los dos apartados anteriores deberán ser resueltos por el Comité Técnico en el plazo de un mes, a contar desde el día en que se presentaron, o en defecto de aquel, por la primera Asamblea General que se celebre, sea ordinaria o extraordinaria.*

*Si el recurso se interpone por personas interesadas distintas a la persona aspirante a socio o socia, se le dará traslado a esta para que en el plazo de diez días alegue lo que estime conveniente a su derecho. De venir atribuida la competencia para resolver el recurso a la Asamblea General, siempre que el acuerdo recurrido sea favorable al ingreso de la persona aspirante, se decidirá sobre su admisión como primer punto del orden del día, sin que puedan participar en el acuerdo las personas cuya admisión como socio o socia se está cuestionando.*

*En el supuesto de que el órgano competente no se pronuncie sobre los expresados recursos, se entenderán estimados, salvo cuando se planteen contra el acuerdo de admisión en cuyo caso el silencio tendrá efecto desestimatorio. Si el recurso contra el acuerdo de admisión es estimado, la sociedad cooperativa deberá efectuar el reembolso de las cantidades aportadas en el plazo de un mes desde que se resolviera el recurso.*

*Contra el acuerdo que los resuelva expresamente o transcurrido el plazo para hacerlo sin que se haya resuelto, quienes conforme a los dos apartados anteriores están legitimados para impugnar los acuerdos del órgano de administración, podrán acudir a la jurisdicción competente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

### **Comentario del artículo 18 de la LSCA y del artículo 20 RLSCA.**

En este apartado se regula el procedimiento de admisión del aspirante a socio en la entidad de forma similar a la normativa anterior. Solo se introducen dos diferencias: por un lado, se sustituye el antiguo Comité de Recursos por el Comité Técnico, órgano, este último con más competencias que el anterior, pues no se limita al asunto de los recursos. Y, cambia el sentido del silencio en la resolución de los recursos, de negativo a afirmativo,

al entender que este último es más acorde con el principio de puerta abierta en una cooperativa.

El procedimiento de admisión se inicia mediante escrito dirigido al órgano de administración. En el plazo de máximo de tres meses éste deberá resolver y notificar el acuerdo adoptado. Si el órgano de administración es un Consejo Rector, los estatutos permiten que éste delegue la facultad de admisión en una Comisión Ejecutiva. El silencio será entendido de manera positiva, es decir la petición se considerará aceptada en caso de ausencia de resolución en plazo.

Cuando le haya sido notificado el acuerdo de admisión o haya sido admitida su solicitud por silencio, la persona aspirante a socia tendrá un mes para suscribir y desembolsar las aportaciones. También dispondrá de este plazo para satisfacer la cuota de ingreso exigida si la hubiera. Tras dar cumplimiento a las obligaciones mencionadas la persona aspirante ya puede ser considerada socio o socia de pleno derecho.

La resolución que deniegue la admisión deberá estar debidamente motivada y deberá expresar una causa justificada dispuesta en los estatutos sociales o en una disposición normativa, o a la imposibilidad técnica derivada de las condiciones económico-financieras, organizativas o tecnológicas de la entidad.

La persona aspirante a socia podrá recurrir la denegación de admisión en el plazo de un mes desde que recibió notificación del acuerdo. También podrán recurrir este acuerdo el 5% de las personas socias ante el Comité Técnico, o ante la Asamblea General, también en plazo de un mes desde que fue publicado o si transcurridos tres meses no se ha adoptado acuerdo alguno.

En última instancia, estas mismas personas estarán legitimadas para impugnar los acuerdos del órgano de administración en la vía jurisdiccional competente de acuerdo con el art. 34 LSCA en caso de no obtener respuesta positiva a sus pretensiones con los recursos anteriormente expuestos.

## **ARTÍCULO 19. DERECHOS DE LOS SOCIOS Y SOCIAS.**

*1. A la persona socia le corresponderán los siguientes derechos:*

- a) Participar en la actividad económica y social de la cooperativa sin ninguna discriminación y en los términos que establezcan los estatutos sociales.*
- b) Elegir y ser elegible para los cargos sociales.*
- c) Asistir y participar con voz y voto en la adopción de acuerdos de la Asamblea General y demás órganos sociales de los que forme parte.*
- d) Obtener información sobre cualquier aspecto de la marcha de la cooperativa en los términos que reglamentariamente se establezcan, sin más limitación que la prevista en el apartado 2.*
- e) Participar en los resultados positivos en proporción a la actividad desarrollada en la cooperativa, apreciada según los módulos que establezcan los estatutos.*
- f) Percibir intereses cuando proceda y obtener la actualización del valor de sus aportaciones en los términos previstos en esta ley y en los estatutos sociales.*
- g) Participar en las actividades de formación y cooperación empresarial, en especial de intercooperación.*
- h) Causar baja en la cooperativa cumpliendo los requisitos legales y estatutarios.*
- i) Percibir el importe de la liquidación correspondiente a su aportación en los supuestos y términos legalmente establecidos.*
- j) Cualesquiera otros previstos en esta ley o en los estatutos sociales.*

*2. El órgano de administración solo podrá denegar, motivadamente, la información solicitada cuando su difusión ponga en grave peligro los intereses legítimos de la cooperativa, sin que proceda dicha excepción cuando la información solicitada haya de proporcionarse en el acto de la Asamblea General y la solicitud sea secundada por más de la mitad de los votos presentes y representados. En todo caso, la negativa del órgano de administración a facilitar la información interesada o su silencio al respecto podrán*

*ser impugnados por los solicitantes mediante el cauce procesal previsto en el artículo 35, agotando o no, previamente, los recursos internos que procedan.*

## **Concordancia con el artículo 21 del Reglamento de desarrollo.**

### **ARTÍCULO 21. DERECHO DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS SOCIAS.**

*1. Con arreglo a lo previsto en el artículo 19.1.d) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, a la persona socia le corresponderá el derecho a obtener información sobre cualquier aspecto de la marcha de la sociedad cooperativa en los términos previstos en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, en el presente Reglamento, en los estatutos de la sociedad cooperativa o en los acuerdos de la Asamblea General. Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19.2 de la citada Ley, respecto a los límites del derecho de información de la persona socia.*

*2. El acceso a la información de la sociedad cooperativa podrá realizarse por cualquier medio técnico, informático o telemático que permitan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, si así se establece en los estatutos sociales, debiendo garantizarse en dicha comunicación la identidad y, en su caso, cuando se trate de materia, considerada por el órgano de administración, de especial trascendencia para la sociedad cooperativa, su confidencialidad y autenticación. En las sociedades cooperativas que cuenten con más de quinientas personas socias se procurará que el acceso a la información de aquellas se facilite por los citados medios.*

*3. En todo caso, la persona socia tendrá derecho a:*

*a) Recibir una copia de los estatutos de la sociedad cooperativa y, en su caso, del reglamento de régimen interno, así como de sus modificaciones.*

*El órgano de administración entregará copia de los estatutos en el plazo de un mes desde que se constituyó la sociedad cooperativa o, en su caso, desde el momento que es admitida la persona socia. De cualquier modificación estatutaria se dará traslado a las personas socias en el plazo de un mes desde que se inscriba en el Registro de Cooperativas Andaluza con entrega de copia de la citada modificación.*

*En el plazo de un mes desde la aprobación por la Asamblea General del reglamento de régimen interno o, en su caso de su modificación, el órgano de administración entregará copia del citado reglamento, o en su caso, de su modificación.*

*La persona socia que no haya recibido la citada documentación dentro de los plazos fijados, tendrá derecho a obtenerla del órgano de administración en el plazo de un mes desde que la solicite, con independencia de las eventuales responsabilidades en que hayan podido incurrir los miembros del órgano de administración por no cumplir la obligación expresada en esta letra.*

*b) Examinar el libro registro de personas socias y de aportaciones al capital social de la sociedad cooperativa y el libro de actas de la Asamblea General. Estatutariamente se establecerá el procedimiento por el que las personas socias puedan obtener copia de aquél y de los acuerdos adoptados en ésta, mediante solicitud motivada ante el órgano de administración.*

*c) Recibir información por el órgano de administración de las infracciones de carácter cooperativo cometidas por alguno de los integrantes de los órganos ejecutivos o de control de la entidad en el plazo máximo de un mes tanto desde la fecha de imposición de la sanción como desde la fecha en que la resolución sancionadora adquiera firmeza.*

*d) Recibir, si lo solicita, del órgano de administración, copia certificada de los acuerdos del citado órgano que les afecten individual o particularmente, en el plazo de un mes desde su solicitud.*

*e) Ser informado por parte del órgano de administración, en el plazo máximo de un mes desde que lo solicite, del estado de su situación económica en relación con la cooperativa.*

*f) Examinar en el domicilio social y en aquellos centros de trabajo que determinen los estatutos, salvo que la sociedad cooperativa opte por el acceso electrónico previsto en el apartado 2 de este artículo y el apartado 5 del artículo 29, en el plazo comprendido entre la convocatoria de la Asamblea y su celebración, los documentos que vayan a ser sometidos a la misma y en particular las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de distribución de resultados y si procediera, y según los casos, el informe de la intervención o el informe de la auditoría, con arreglo a lo establecido en el artículo 29.4 relativo a la convocatoria de la Asamblea General.*

*g) Solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Asamblea, o verbalmente en el transcurso de la misma, la ampliación de cuanta información considere necesaria en relación con los puntos contenidos en el orden del día, también conforme a lo establecido en el artículo 29.4.*

*Los estatutos deberán regular el plazo mínimo de antelación a la Asamblea, en ningún caso inferior a cinco días hábiles, para presentar en el domicilio social la solicitud por escrito, así como el plazo máximo en el que el órgano de administración pueda responder fuera de la Asamblea, por la complejidad de la petición formulada, sin que en ningún caso pueda exceder de quince días.*

*h) Solicitar por escrito al órgano de administración las aclaraciones e informes que considere oportunos sobre cualquier aspecto de la marcha de la sociedad cooperativa, que deberán ser contestados por el citado órgano en el período comprendido entre la presentación del escrito y la celebración de la próxima Asamblea General, siempre que, al menos, medien quince días entre uno y otro acontecimiento. No obstante, podrán proporcionarse estos informes y aclaraciones en el acto de la referida Asamblea.*

*i) Cuando el diez por ciento de las personas socias en las sociedades cooperativas de más de mil, el quince por ciento en la de más de quinientas y el veinte por ciento en las restantes, soliciten por escrito al órgano de administración la información que considere oportuna, éste deberá proporcionarla por escrito, en un plazo no superior a un mes.*

*4. No obstante lo anterior, cuando el órgano de administración aprecie, en función de las circunstancias concurrentes, la existencia de un abuso manifiesto en el ejercicio del derecho de información por la persona solicitante, podrá instar a ésta a que revise la documentación interesada y extraer, en su caso, la información deseada mediante su oportuna lectura o análisis, pudiendo tomar anotaciones y extraer apuntes sobre la misma, así como acompañarse de una persona asesora. De igual modo, si la persona socia dispone de los medios técnicos necesarios, podrá obtener copia de la documentación interesada en las propias dependencias de la cooperativa, salvo que el órgano de administración opte por facilitarle copia de toda o parte de la documentación solicitada.*

*5. Aquellas sociedades cooperativas que sean socias de otra sociedad cooperativa, de primero, segundo o ulterior grado, o de otras clases de entidades vendrán obligadas a*



*facilitar información a sus personas socias, acerca de su participación en éstas, dentro de los límites que permita la legislación social aplicable a cada tipo de entidad. Dicha obligación de informar deberá realizarse, al menos, con carácter anual, proporcionándose en Asamblea General y debiendo constar como punto específico del orden del día.*

*Cuando la participación se produzca en cooperativas de segundo o ulterior grado, sus representantes tendrán derecho a asistir a la Asamblea General o el órgano de administración de las cooperativas socias con la finalidad de participar e informar en aquellos puntos del orden del día en que se traten asuntos relacionados con dicha participación. Para cumplir con esta finalidad, la cooperativa de segundo o ulterior grado deberá ser convocada a las reuniones de los órganos sociales mencionados de igual manera que las personas socias de la entidad convocante.*

### **Comentario del artículo 19 de la LSCA y del artículo 21 del RLSCA.**

El art. 19 de la LSCA establece de manera exhaustiva los derechos de los socios y socias. A continuación definiremos cada uno de ellos:

*a) Participar en la actividad económica y social de la cooperativa sin ninguna discriminación y en los términos que establezcan los estatutos sociales.* Este derecho plasma el ideal cooperativo, que es el de satisfacer una necesidad o interés propio, pero común al de otras personas, a través del desarrollo conjunto y cooperativizado, de la actividad empresarial, configurándose esta actividad como obligación de hacer y como derecho al resultado obtenido como consecuencia de ese hacer.

*b) Elegir y ser elegible para los cargos sociales.* Todo socio, por el mero hecho de serlo tiene derecho a votar en elecciones. Rige el principio “un socio, un voto”. El derecho a ser elegido también viene atribuido a toda persona socia en plano de igualdad, independientemente del tiempo que lleve en la cooperativa y de su aptitud para desempeñar el cargo.

*c) Asistir y participar con voz y voto en la adopción de acuerdos de la Asamblea General y demás órganos sociales de los que forme parte.* Se entienden implícitos los derechos de asistencia y de formular propuestas en los de participar con voz en la adopción de acuerdos. La forma de ejercitar estos derechos vendrá determinada por la Ley, el Reglamento y los estatutos sociales.

d) *Obtener información sobre cualquier aspecto de la marcha de la cooperativa en los términos que reglamentariamente se establezcan, sin más limitación que la prevista en el apartado 2.* No sólo tendrá derecho a recibir la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, el socio además tendrá pleno derecho a solicitar cualquier tipo de información sobre aspectos que atañen a la cooperativa y a su marcha. La persona socia podrá ejercitar este derecho por cualquier medio técnico, informático o telemático que permitan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, cuando así lo prevean los estatutos sociales. En dicha comunicación debe garantizarse en todo caso, la identidad. Pero además, cuando a criterio del órgano de administración se trate de materia de especial trascendencia para la sociedad cooperativa, deberá garantizarse también la confidencialidad y autenticación.

En cualquier caso en virtud de la regulación expuesta, las personas socias tienen derecho a:

- Recibir copia de los estatutos sociales y en su caso del reglamento de régimen interno, al igual que todas las modificaciones de estos.
- Examinar libro registro de personas socias y de aportaciones al capital social de la sociedad cooperativa y el libro de actas de la Asamblea General. En los estatutos sociales se establecerá el procedimiento por el que las personas socias puedan obtener copia del libro registro y de los acuerdos adoptados en la Asamblea. En cualquier caso, el procedimiento regulado estatutariamente deberá prever que la obtención de copia de estos libros siempre vaya precedida de una solicitud motivada previa dirigida al órgano de administración.
- Recibir información por el órgano de administración de las infracciones de carácter cooperativo cometidas por alguno de los integrantes de los órganos ejecutivos o de control de la entidad.
- Previa solicitud, recibir del órgano de administración, copia certificada de los acuerdos del citado órgano que les afecten individual o particularmente.
- Ser informado por parte del órgano de administración del estado de su situación económica en relación con la cooperativa.

- Examinar en el domicilio social y en aquellos centros de trabajo que determinen los estatutos (salvo que esté previsto el acceso electrónico) los documentos que vayan a ser sometidos a la Asamblea General y en particular las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de distribución de resultados y si procediera, y según los casos, el informe de la intervención o el informe de la auditoría.
- Solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Asamblea, o verbalmente en el transcurso de la misma, la ampliación de cuanta información considere necesaria en relación con los puntos contenidos en el orden del día.
- Solicitar por escrito al órgano de administración las aclaraciones e informes que considere oportunos sobre cualquier aspecto de la marcha de la sociedad cooperativa.
- Cuando las sociedades cooperativas sean socias de otra sociedad cooperativa, de primero, segundo o ulterior grado, o de otras clases de entidades tendrán la obligación de facilitar información sobre esta participación a sus personas socias. Asimismo, cuando la cooperativa participe en cooperativas de segundo o ulterior grado, sus representantes tendrán derecho a asistir a la Asamblea General o el órgano de administración de las cooperativas socias con la finalidad de participar e informar en aquellos puntos del orden del día en que se traten asuntos relacionados con dicha participación.

En definitiva, el derecho de información del socio en la cooperativa es uno de los derechos clave y por ello tiene un artículo específico en el nuevo RLSCA, pero su regulación no varía en lo esencial de la normativa anterior. Sin embargo, sí podemos destacar como novedad que el órgano de administración de la cooperativa sea el encargado de valorar que se está procediendo a un obstruccionismo por parte de determinados socios con peticiones generalizadas y repetitivas de información y que también pueda acordar que sea el socio el que se desplace a la entidad y poner a su disposición la información.

## **ARTÍCULO 20. OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS Y SOCIAS.**

*La persona socia tendrá las siguientes obligaciones:*

- a) Cumplir lo establecido en los estatutos sociales, el reglamento de régimen interior y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la cooperativa.*
- b) Participar en la actividad cooperativizada que desarrolla la entidad para el cumplimiento de su fin social en la forma estatutariamente determinada, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.1 para la persona socia inactiva.*
- c) Cumplir con las obligaciones económicas que le correspondan.*
- d) No realizar actividades de la misma índole que las propias de la cooperativa ni colaborar con quien las realice, salvo autorización expresa del órgano de administración, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.d), relativo a la competencia sobre autorización de la Asamblea General.*
- e) Guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos de la cooperativa cuya divulgación pueda perjudicar los intereses legítimos de esta.*
- f) Aceptar los cargos sociales para los que fuese elegida, salvo causa justificada que impida su ejercicio.*
- g) Cumplir con el resto de obligaciones legal o estatutariamente establecidas.*

### **Comentario del artículo 20 de la LSCA.**

La enumeración de las obligaciones del artículo 20 LSCA no es exhaustiva y así se comprueba con la previsión de la letra g) del mismo. Dicha previsión última comprende la posibilidad de que los reglamentos de régimen interior, o incluso los órganos sociales, como la Asamblea o el Consejo Rector, puedan imponer concretas obligaciones de los socios. Asimismo, se podrán introducir obligaciones vía estatutaria. Sin embargo hay que señalar que tanto la Ley como los estatutos actúan como límite de los reglamentos de régimen interior o de los órganos sociales en la imposición de obligaciones a los socios, así la ley también es límite de los estatutos en esa misma imposición. Además, las obligaciones que se impongan estatutariamente siempre deberán cumplir los requisitos de objetividad, igualdad de aplicación y congruencia con la actividad cooperativizada, al igual

que no cabe imponer obligaciones arbitrarias, artificiales, desconexas del fin mismo de la cooperativa, ni discriminatorias.

Además, se configurará el régimen de derechos y obligaciones específico de cada tipo de socio de acuerdo con la regulación existente sobre ellos tanto en la Ley como el Reglamento. Por lo tanto, no todas las obligaciones previstas en el artículo comentado son de aplicación a todos los tipos de socios, sino sólo a los socios comunes.

A continuación examinamos cada una de las obligaciones contenidas en el art. 20 LSCA:

*a) Cumplir lo establecido en los estatutos sociales, el reglamento de régimen interior y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la cooperativa.* La obligatoriedad de cumplir con los acuerdos sociales incluye aquellos que el socio considere que no han sido válidamente adoptados. Éstos producen efectos desde el momento en que han sido adoptados, y desde entonces obligan al socio, sin perjuicio de la posibilidad de éstos de impugnarlos con las consecuencias legalmente previstas en caso de que sean calificados nulos o anulables.

*b) Participar en la actividad cooperativizada que desarrolla la entidad para el cumplimiento de su fin social en la forma estatutariamente determinada, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.1 para la persona socia inactiva.* Se trata de la obligación más característica de este tipo societario por cuanto que sólo existe para las sociedades cooperativas. La actividad cooperativizada es aquella formada por el objeto social de la sociedad. Se trata de una obligación de participación amplia que se extiende a la totalidad de actividades que realice la cooperativa para la consecución de su fin social y los matices o las excepciones serán los previstos estatutariamente. El supuesto del socio inactivo no es una matización, ni una excepción a esta obligación sino un régimen específico que se rige por lo previsto en el art. 16.1 LSCA.

*c) Cumplir con las obligaciones económicas que le correspondan.* Esta obligación no estaba prevista en la Ley anterior, aunque ello no significara que no existiera de facto. La Ley estatal sí la contiene y ciertamente su inclusión es un acierto del legislador por cuanto clarifica la existencia de la misma. Y no comprende únicamente la obligación de aportación inicial, sino también las obligaciones acordadas con posterioridad impuestas o voluntariamente asumidas por las personas socias.

d) *No realizar actividades de la misma índole que las propias de la cooperativa ni colaborar con quien las realice, salvo autorización expresa del órgano de administración, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.d), relativo a la competencia sobre autorización de la Asamblea General.* En consonancia con su obligación de realizar la actividad cooperativizada, el socio no podrá realizar actividades idénticas o similares ni colaborar con quien las realice fuera de la cooperativa. La nueva Ley atribuye a la Asamblea General la competencia para autorizar a la persona socia a incumplir esta obligación, mientras que la anterior dejaba esta potestad en manos del Consejo Rector.

e) *Guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos de la cooperativa cuya divulgación pueda perjudicar los intereses legítimos de esta.* Con esta obligación se trata de evitar daños a la cooperativa, aunque no es imprescindible que se produzca el perjuicio para que el comportamiento sea sancionable. Y es que si además de incumplir con la obligación, la persona socia produce un daño a consecuencia del mismo, habrá de resarcirlo e indemnizarlo. Por interés legítimo habrá de entenderse los que guarden relación con el fin social o sirvan a su realización. La carga de la prueba de la comisión de la infracción de la obligación corresponde en todo caso a la cooperativa, mientras que la de la inexistencia de incumplimiento por falta de relevancia de la información revelada para afectar los intereses legítimos de la cooperativa corresponde a la persona socia.

f) *Aceptar los cargos sociales para los que fuese elegida, salvo causa justificada que impida su ejercicio.* La aceptación de los cargos para los que la persona socia fuese elegida es obligatoria. La causa justificada que impida su ejercicio habrá de darse en la persona socia y deberá ponderarse en función de las circunstancias personales de la misma y del cargo para el cual haya sido elegida. Por ello para determinar si existe justificación para excusar a la persona socia de su obligación habrá de estarse a cada caso concreto. Si es apreciada la causa justificada la persona socia podrá solicitar su baja por causa justificada. La apreciación de la causa justificativa corresponde al órgano que efectúa el nombramiento. Y por último, la denegación de la causa justificada podrá ser recurrida según las reglas generales de impugnaciones de los acuerdos del órgano correspondiente.

El socio cooperativista debe cumplir con una serie de obligaciones como consecuencia de su relación social. Una de sus obligaciones principales es la de cumplir con lo dispuesto en los estatutos sociales, pero también con el reglamento de régimen interior y con todos aquellos acuerdos sociales adoptados en el seno de la cooperativa. Además de esto,

deberá cumplir con el resto de obligaciones previstas en el artículo 20 de la Ley, así como con aquellas que se prevean mediante una ley o a través de los estatutos sociales.

## **ARTÍCULO 21. RÉGIMEN DISCIPLINARIO.**

*1. Los estatutos de cada cooperativa fijarán las normas de disciplina social. Las personas socias solo pueden ser sancionadas en virtud de las faltas previamente recogidas en los estatutos. Las sanciones que pueden ser impuestas a los socios o socias por cada clase de falta se fijarán en los estatutos, y podrán ser de amonestación, económicas, de suspensión de derechos o de exclusión*

*2. Los estatutos fijarán el procedimiento disciplinario y los recursos que correspondan, respetando, en cualquier caso, las siguientes normas:*

*a) La facultad disciplinaria es competencia indelegable del órgano de administración, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 86.2 sobre faltas cometidas en la prestación del trabajo, en relación con las cooperativas de trabajo.*

*b) La persona socia que se encuentre incurso en un procedimiento disciplinario no podrá tomar parte en la votación del órgano correspondiente.*

*c) En todos los supuestos será preceptiva la audiencia previa de las personas socias interesadas, cuyas alegaciones, en caso de producirse, deberán realizarse por cualquier medio que permita su almacenamiento y acreditación, en los supuestos de faltas graves y muy graves.*

*d) La sanción de suspender a la persona socia en sus derechos solo podrá preverse por los estatutos para el supuesto de que no esté al corriente de sus obligaciones económicas o no participe en las actividades cooperativizadas en los términos establecidos en los estatutos, no alcanzando, en ningún caso, al derecho de información, al de asistencia a la Asamblea General con voz, al devengo de intereses por sus aportaciones al capital social, ni a la actualización de dichas aportaciones. La suspensión finalizará en el momento en que la persona socia normalice su situación con la sociedad.*



*Solo cabrá recurso cuando así se prevea en los estatutos sociales o cuando exista Comité Técnico, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 86.3.c) sobre su inadmisibilidad para el caso de las cooperativas de trabajo.*

*3. Los estatutos sociales podrán prever el nombramiento de un instructor o instructora para la tramitación de los expedientes sancionadores.*

*4. El régimen de la persona instructora, la prescripción de infracciones y sanciones, así como la impugnación de acuerdos en esta materia, se regularán reglamentariamente.*

## **Concordancia con los artículos 22 y 23 del Reglamento de desarrollo.**

### **ARTÍCULO 22. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.**

*1. Las normas de disciplina social se fijarán por los estatutos de la sociedad cooperativa de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y el presente Reglamento.*

*2. Los estatutos de la sociedad cooperativa podrán establecer la separación en el procedimiento disciplinario entre una fase instructora y otra sancionadora.*

*Cuando los estatutos de la sociedad cooperativa recojan dicha separación, el órgano de administración designará, para cada caso concreto, a una persona instructora del procedimiento disciplinario, que elaborará la propuesta de acuerdo al citado órgano, con carácter preceptivo y no vinculante. Podrá nombrarse persona instructora a una persona socia o un tercero con reconocida cualificación profesional o experiencia técnica.*

*La identidad de la persona instructora se comunicará a la persona presuntamente responsable, que tendrá la obligación de abstenerse de participar en la fase sancionadora si es miembro del órgano de administración.*

*La persona instructora podrá ser recusada por la persona presuntamente responsable en un plazo de cinco días a contar desde la notificación del inicio del procedimiento disciplinario, resolviéndose la recusación por el órgano de administración en los cinco días siguientes. El procedimiento disciplinario quedará en suspenso desde la presentación de la recusación hasta su resolución, que no será recurrible, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la causa de recusación al impugnar el acuerdo sancionador.*

*3. La resolución del procedimiento disciplinario sólo será recurrible por la persona socia sancionada cuando así se prevea en los estatutos sociales o cuando exista Comité Técnico. El recurso se acomodará a las siguientes reglas:*

*a) El plazo para interponer el recurso será de un mes a contar desde el día de la recepción de la notificación.*

*b) Cuando el órgano ante el que se recurra el acuerdo sancionador sea el Comité Técnico, este tendrá que pronunciarse necesariamente en el plazo de un mes, a contar desde el día en que se presentó el recurso.*

*c) En caso de previsión estatutaria de la vía de recurso y de no existir Comité Técnico, el recurso habrá de someterse inexcusablemente a decisión de la primera Asamblea General que se celebre, sea ordinaria o extraordinaria, que se convocará y se celebrará dentro del plazo que estatutariamente se establezca, incluyéndose este asunto como primer punto del orden del día. La Asamblea General resolverá en votación secreta y notificará el acuerdo a la persona socia sancionada en el plazo de un mes desde su celebración.*

*d) En tanto que el Comité Técnico o, en su defecto, la Asamblea General resuelva o haya transcurrido el plazo sin haberse interpuesto el recurso, dicho acuerdo no será ejecutivo, a menos que, de forma expresa, se disponga estatutariamente lo contrario. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, a propósito de la exclusión.*

*e) El acuerdo que ratifique la sanción será ejecutivo y podrá ser impugnado por la persona socia responsable por el cauce procesal del artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. De no recibir contestación en los plazos legalmente establecidos o, en su caso, de no haberse convocado y celebrado Asamblea General dentro del plazo establecido, podrá también la persona socia sancionada impugnar la denegación presunta por el citado cauce.*

*4. De no existir Comité Técnico o de no prever los estatutos de la sociedad cooperativa que el acuerdo del órgano de administración pueda ser recurrido, contra el acuerdo del citado órgano sólo cabrá el ejercicio de las acciones judiciales conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

## **ARTÍCULO 23. PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.**

*1. Las infracciones leves prescriben a los tres meses, las graves a los seis meses y las muy graves a los doce meses.*

*El plazo de prescripción empezará a contarse desde el día en que el órgano de administración tenga conocimiento de la comisión de la infracción y, en todo caso, a los dos años de haberse cometido. El plazo se interrumpirá por la incoación del procedimiento disciplinario, pero sólo en el caso de que en el mismo recayese acuerdo y fuese notificado en el plazo de seis meses desde su iniciación.*

*2. Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán a los tres meses, las impuestas por faltas graves a los seis meses y las impuestas por faltas muy graves a los doce meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que el acuerdo sancionador sea firme.*

### **Comentario del artículo 21 de la LSCA y de los artículos 22 y 23 del RLSCA.**

El régimen disciplinario de las sociedades cooperativas será el fijado en los estatutos sociales. Sólo se podrá sancionar a las personas socias por comisión de faltas previamente recogidas en los estatutos sociales. Las sanciones, que también habrán de estar debidamente recogidas en los estatutos sociales podrán ser: amonestación, económicas, suspensión de derechos o exclusión.

El procedimiento disciplinario sancionador será el fijado en los estatutos sociales pero éstos deberán respetar en todo caso las siguientes normas:

- o) La competencia en materia disciplinaria es del órgano de administración. Aunque en relación con la prestación del trabajo en las cooperativas de trabajo, esta facultad puede ser delegada en personas que tengan encomendadas funciones de control y dirección en la estructura laboral de la empresa.
- p) La persona socia incurso en un procedimiento disciplinario no podrá tomar parte en la votación del órgano correspondiente.
- q) Es preceptiva la audiencia previa de las personas socias interesadas, cuyas alegaciones, en caso de producirse, deberán realizarse por cualquier medio que

permita su almacenamiento y acreditación si se trata de faltas graves o muy graves.

- r) La sanción de suspensión de persona socia en sus derechos sólo podrá preverse por los estatutos para el supuesto de que no esté al corriente de sus obligaciones económicas o no participe en las actividades cooperativizadas en los términos establecidos en los estatutos, no alcanzando, en ningún caso, al derecho de información, al de asistencia a la Asamblea General con voz, al devengo de intereses por sus aportaciones al capital social, ni a la actualización de dichas aportaciones. La suspensión finaliza cuando la persona socia normalice su situación con la sociedad.

En cuanto a los recursos, se prevén tres situaciones diferentes. En primer lugar, cabrá recurso cuando así lo hayan establecido los estatutos sociales. En segundo lugar, también cabrá recurso cuando exista un Comité Técnico. Y en tercer lugar, habrá casos en que el recurso es inadmisibile como el previsto para las cooperativas de trabajo en el art. 86.3 c) LSCA.

El nombramiento de instructor o instructora para la tramitación de los expedientes sancionadores será en todo caso facultativo y siempre que se haya previsto esta posibilidad en los estatutos sociales.

Asimismo, los estatutos sociales podrán prever la separación del procedimiento disciplinario en dos fases: una instructora y otra sancionadora. En estos casos el órgano de administración designará instructor o instructora del procedimiento que tendrá que elaborar la propuesta de acuerdo al citado órgano, con carácter preceptivo y no vinculante. Podrán ser nombrados instructor o instructora tanto las personas socias como un tercero con reconocida cualificación profesional o experiencia técnica.

En los supuestos mencionados en el párrafo anterior, se le debe notificar a la persona presuntamente responsable la identidad de la instructora, y ésta deberá abstenerse de participar en la fase sancionadora cuando sea miembro del órgano de administración.

Se prevé la posibilidad de recusación de la persona instructora en el plazo de cinco días desde la notificación del inicio del procedimiento. El órgano de administración será el encargado de resolverla en los cinco días siguientes. La recusación es causa de suspensión del procedimiento hasta que recaiga resolución sobre la misma. Dicha

resolución no es recurrible, aunque se podrá hacer alusión a la causa de recusación en el escrito de impugnación del acuerdo sancionador.

Los recursos contra la resolución del procedimiento sancionador deberá interponerlo la persona socia sancionada en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la notificación. Si el recurso debiera interponerse ante el Comité Técnico, este deberá pronunciarse en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de presentación del recurso.

Cuando se prevea la posibilidad de recurso en los estatutos sociales pero no exista Comité Técnico corresponderá a la primera Asamblea General su estudio y resolución. Ésta resolverá en votación secreta y notificará el acuerdo a la persona socia sancionada en el plazo de un mes desde su celebración.

El acuerdo será ejecutivo una vez que el Comité Técnico o la Asamblea General, en su caso, resuelva el recurso, o una vez transcurrido el plazo sin haberse interpuesto el mismo. Excepcionalmente si de manera expresa se dispone lo contrario en los estatutos sociales habrá que estar a dicha disposición. Sin embargo, cuando se trate de la sanción de exclusión de persona socia únicamente será ejecutivo el acuerdo una vez transcurrido el plazo sin interposición de recurso o cuando se haya resuelto éste.

El acuerdo que ratifique la sanción será ejecutivo y podrá ser impugnado conforme al art. 35 de la LSCA. También podrá impugnar la resolución por silencio en los casos en que no reciba respuesta alguna al recurso presentado ante los órganos correspondientes.

En cualquier caso, cuando no exista Comité Técnico o no se prevea en los estatutos de la sociedad cooperativa que el acuerdo del órgano de administración pueda ser recurrido, únicamente se podrán ejercitar las acciones judiciales conforme al art. 35 LSCA.

El art. 23 del RLSCA prevé el instituto de la prescripción de infracciones y sanciones. Conforme al mismo, las infracciones leves prescribirán a los tres meses, las graves a los seis meses y las muy graves a los doce meses.

El plazo de prescripción comienza el día en que el órgano de administración tenga conocimiento de la comisión de la infracción, y siempre a los dos años de haberse cometido. La incoación del procedimiento disciplinario interrumpirá la prescripción cuando en el mismo recaiga acuerdo y notificación del mismo dentro de los seis meses siguientes a su iniciación. En cuanto a las sanciones, por faltas leves prescribirán a los tres meses,

por faltas graves a los seis meses y por faltas muy graves a los doce meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que el acuerdo sancionador sea firme.

Las novedades más significativas de la nueva regulación son la regulación del conflicto de intereses para lo que se prevé la recusación, y que el acuerdo sancionador no sea ejecutivo antes de resolver su eventual recurso ante la Asamblea General, a menos que estatutariamente se disponga lo contrario. Además, el Reglamento prevé que el Comité Técnico sustituya al antiguo Comité de Recursos.

## **ARTÍCULO 22. EXCLUSIÓN.**

- 1. La exclusión del socio o socia, que solo podrá fundarse en causa muy grave prevista en los estatutos, será acordada por el órgano de administración, a resultas de expediente instruido al efecto y con su audiencia. No obstante, corresponderá a la Asamblea General acordar la exclusión en aquellos supuestos en los que la persona socia susceptible de exclusión pertenezca a la Administración Única o Solidaria a las que se refiere el artículo 42, en los términos que reglamentariamente se determinen.*
- 2. Reglamentariamente se regularán las peculiaridades del procedimiento disciplinario para la exclusión de la persona socia. En todo caso, cuando, conforme a lo establecido en el artículo 21.2, las personas socias puedan recurrir el acuerdo de exclusión, este solo será ejecutivo desde que se ratifique por el órgano correspondiente o haya transcurrido el plazo para recurrir sin que se interponga recurso alguno.*

**Concordancia con el artículo 24 del Reglamento de desarrollo.**

## **ARTÍCULO 24. EXCLUSIÓN.**

- 1. La persona socia podrá ser excluida de la sociedad cooperativa con los requisitos y efectos establecidos en el artículo 22 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, en el presente Reglamento y en los estatutos sociales.*
- 2. Los estatutos fijarán el procedimiento de exclusión respetando las normas establecidas en los artículos 21 y 22 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y en el artículo 22 de este Reglamento con las siguientes peculiaridades:*

*a) El acuerdo motivado de exclusión habrá de recaer en el plazo máximo de seis meses desde la iniciación del procedimiento y tendrá que ser comunicado por escrito a la persona socia. Transcurrido dicho plazo sin que hubiese recaído acuerdo, se entenderá automáticamente sobreseído el expediente, sin perjuicio de que se pueda iniciar uno nuevo en caso de que la infracción no haya prescrito.*

*b) No obstante lo establecido en el apartado anterior, cuando la causa de exclusión sea encontrarse la persona socia al descubierto de sus obligaciones económicas podrá acordarse su exclusión, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde la iniciación del procedimiento, salvo que ésta haya regularizado su situación.*

*c) Cuando la persona socia que pueda resultar excluida pertenezca a la administración única o solidaria, corresponderá a la Asamblea General el acuerdo correspondiente. En este caso, deberá incluirse la exclusión como primer punto del orden del día en la reunión de la Asamblea y, tras la audiencia de la persona afectada, que carecerá de derecho a voto sobre este extremo, se resolverá por votación mayoritaria de todos los personas socias presentes y representadas.*

*3. La persona socia sancionada disconforme con el acuerdo de exclusión dictado por el órgano de administración, podrá impugnarlo por el cauce procesal previsto en el artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, pudiendo recurrirlo previamente con arreglo a lo previsto en el artículo 22.3.*

*Cuando la exclusión sea acordada por la Asamblea General, sólo cabrá su impugnación a través del procedimiento previsto en el artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

### **Comentario del artículo 22 de la LSCA y 24 del RLSCA.**

El régimen de la exclusión de socios no presenta novedades relevantes, únicamente cabe resaltar que cuando se trate de un socio perteneciente a la administración única o solidaria, el acuerdo ha de corresponder a la Asamblea General.

Estamos ante la sanción más grave que se le puede poner a la persona socia. Por ello la ley establece una serie de garantías en el procedimiento sancionador, que todo caso será el regulado en los estatutos sociales con las peculiaridades previstas reglamentariamente. Las garantías son:



a) Expediente instruido al efecto. Por un lado, es necesario que se instruya un expediente individual para cada persona sancionada. Por otro lado, el expediente ha de ir referido a una determinada conducta constitutiva de infracción susceptible de ser sancionada con la exclusión. Si se aprecia la presunta comisión de varias infracciones deberán tramitarse tantos expedientes como posibles infracciones se puedan apreciar. La incoación del expediente no viene expresamente determinado por la Ley, si bien cabe entender que es competencia del órgano de administración o del resto de personas socias, en cuanto titulares de derechos, intereses y necesidades socioeconómicas comunes cuya satisfacción puede resultar dañada por la actitud del socio infractor.

b) Audiencia del interesado. La persona socia debe tener la oportunidad de defenderse ante el órgano de administración de la improcedencia de su exclusión de la sociedad por no concurrir causa que la justifique. La persona socia tiene derecho al asesoramiento legal oportuno y a utilizar cualquier medio de prueba para demostrar que no existe causa de exclusión.

c) Concurrencia de causa muy grave prevista en los estatutos. Los estatutos sólo podrán prever la sanción de exclusión para las infracciones tipificadas como muy graves.

d) Acuerdo del órgano de administración. Éste habrá de recaer en el plazo máximo de seis meses desde la iniciación del procedimiento y tendrá que ser comunicado por escrito a la persona socia. Sin embargo, cuando la causa de exclusión sea encontrarse la persona socia al descubierto de sus obligaciones económicas podrá acordarse su exclusión, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde la iniciación del procedimiento, salvo que ésta haya regularizado su situación. Como ya se ha señalado al inicio de este apartado, corresponderá a la Asamblea General adoptar el acuerdo correspondiente cuando la persona socia que pueda resultar excluida pertenezca a la administración única o solidaria.

El acuerdo de exclusión podrá ser impugnado por el cauce procesal previsto en el art. 35 de la LSCA, y previamente por el cauce previsto en el art. 22.3. No obstante, cuando el acuerdo haya sido adoptado por la Asamblea General, la impugnación sólo podrá realizarse según lo previsto en el art. 35.

## **ARTÍCULO 23. BAJA VOLUNTARIA.**

*1. La persona socia podrá causar baja voluntariamente en la sociedad cooperativa en cualquier momento mediante preaviso por escrito al órgano de administración en el plazo que fijen los estatutos, que no podrá ser superior a seis meses, salvo lo establecido en la normativa comunitaria de aplicación a las cooperativas agrarias.*

*A los efectos del aplazamiento del reembolso, previsto en el artículo 60.4, se entenderá producida la baja al término del plazo de preaviso.*

*2. Los estatutos podrán establecer un tiempo mínimo de permanencia, no superior a cinco años, salvo en los supuestos en que reglamentariamente se determine, o el compromiso de no causar baja hasta el final del ejercicio económico.*

*El incumplimiento por parte de la persona socia de la obligación de preaviso establecida en el apartado 1, o de alguno de los supuestos contemplados en el párrafo anterior, autoriza al órgano de administración a exigirle la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.*

*3. La baja tendrá el carácter de justificada cuando concurren las siguientes circunstancias:*

*a) Que se adopte por el órgano correspondiente un acuerdo que implique la asunción de obligaciones o cargas gravemente onerosas para la capacidad económica de la persona socia no previstas estatutariamente.*

*b) Tratándose de la Asamblea General, haber hecho constar en acta la oposición a su celebración o el voto en contra del acuerdo, no haber asistido o haber sido privado ilegítimamente del voto.*

*c) Que se ajuste al resto de los requisitos establecidos en esta ley y la solicitud de baja se presente en el plazo y forma que reglamentariamente se determinen.*

*4. La calificación de la baja corresponderá al órgano de administración, salvo en los supuestos en que la persona socia susceptible de causar baja pertenezca a la Administración Única o Solidaria a las que se refiere el artículo 42, en cuyo caso, tal facultad estará atribuida a la Asamblea General. El resto del procedimiento y el régimen*

*de impugnación de los acuerdos que se adopten en la materia objeto de este artículo se determinarán reglamentariamente.*

## **Concordancia con el artículo 25 del Reglamento de desarrollo.**

### **ARTÍCULO 25. BAJA VOLUNTARIA.**

*1. La persona socia podrá causar baja voluntariamente con los requisitos y efectos establecidos en el artículo 23 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, en el presente Reglamento y en los estatutos sociales.*

*2. Si los estatutos establecieran un tiempo mínimo de permanencia, conforme a lo dispuesto en el párrafo siguiente, o el compromiso de no causar baja hasta el final del ejercicio económico, la baja producida antes del cumplimiento de los plazos correspondientes a ambos supuestos se considerará como no justificada, salvo dispensa expresa del órgano de administración a tenor de las circunstancias del caso.*

*El tiempo mínimo de permanencia que se fije, en su caso, por los estatutos no será superior a cinco años, salvo para los siguientes tipos de cooperativas:*

*a) En las sociedades cooperativas agrarias, el plazo mínimo de permanencia no podrá ser superior a diez años.*

*b) En las sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, dicho plazo no podrá ser superior a quince años, sin perjuicio de que, con arreglo a lo previsto en el artículo 104.1, se puedan fijar estatutariamente prórrogas sucesivas de dicho plazo.*

*3. El incumplimiento por parte de la persona socia de la obligación de preaviso establecida en el apartado 1 del artículo 23 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre o de alguno de los supuestos contemplados en el apartado anterior, autoriza al órgano de administración a exigirle judicialmente la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.*

*Asimismo, cuando se produzca alguno de los supuestos de incumplimiento descritos, los estatutos podrán establecer un incremento adicional de hasta veinte puntos de los porcentajes fijados en relación con las deducciones sobre las aportaciones obligatorias, referidas en el artículo 48.2.b). El incremento aplicado a estas deducciones se*

*considerará pago a cuenta de la eventual indemnización acordada conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, sin que, en ningún caso, uno y otra sean acumulativos.*

*4. Para solicitar la separación de la sociedad cooperativa con los efectos propios de la baja justificada, será necesaria la presentación de una solicitud dirigida al órgano de administración, dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiera producido la reunión del órgano en cuestión, conforme a lo dispuesto en las letras a) y b) del artículo 23.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de haber asistido a la sesión del mismo.*

*En el caso de no haber estado presente en dicha reunión, el plazo del mes se contará a partir del día siguiente a aquel en que recibió la notificación del acuerdo. Cuando el acuerdo discutido deba ser objeto de publicación, de conformidad con lo previsto en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre o este Reglamento, el plazo señalado para solicitar la baja justificada se contará a partir del día siguiente a la publicación de dicho acuerdo.*

*5. La calificación y determinación de los efectos de la baja corresponderá al órgano de administración, que deberá formalizarla en un plazo máximo de tres meses desde su solicitud, mediante escrito motivado, que habrá de ser comunicado a la persona interesada.*

*Cuando la persona socia susceptible de causar baja pertenezca a la administración única o solidaria a las que se refiere el artículo 42 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, dicha facultad corresponderá a la Asamblea General. En tal supuesto, el acuerdo sobre la calificación de la baja deberá producirse en la primera Asamblea General que se celebre.*

*En cualquier caso, la persona socia incurso en el procedimiento de baja no podrá participar en la votación del órgano competente para adoptar el acuerdo.*

*Transcurrido el plazo sin resolución expresa se entenderá calificada la baja voluntaria como justificada.*

*6. La persona socia disconforme con el acuerdo del órgano de administración sobre la calificación y efectos de su baja voluntaria, podrá impugnarlo por el cauce procesal previsto en el artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, pudiendo recurrirlo previamente con arreglo a lo previsto en el artículo 22.3.*

*Cuando el acuerdo de calificación le corresponda a la Asamblea General, sólo cabrá su impugnación a través del procedimiento previsto en el artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

## **Comentario del artículo 23 de la LSCA y del artículo 25 del RLSCA.**

El procedimiento para la baja voluntaria en la entidad prevé varias novedades. De manera que se diversifica el plazo de permanencia a que se puede obligar a un socio. Antes, éste era de diez años y ahora podrá ser de cinco, diez o quince años. El primer plazo es el general, mientras que el segundo y tercero son para las cooperativas agrarias o de explotación comunitaria de la tierra, respectivamente. Esta nueva previsión está conectada con la normativa comunitaria o aportación al capital social (en la explotación comunitaria de la tierra por definición se aportan terrenos). Otra novedad significativa es que se establece que la calificación sobre el carácter de la baja (justificada o no) se realice en el plazo de tres meses con silencio favorable al carácter de justificada. También se prevé que determinadas deducciones de la aportación que se le devuelve al socio en caso de baja no justificada, se hagan a cuenta de una eventual indemnización de daños y perjuicios, sin que resulten acumulativos. Por último, otra novedad sería la prevista para el caso de baja de un socio perteneciente a la administración única o solidaria al establecer que corresponderá su calificación a la Asamblea General.

## **ARTÍCULO 24. BAJA OBLIGATORIA.**

*1. Causarán baja obligatoria las personas socias que dejen de reunir los requisitos exigidos para ostentar tal cualidad, de acuerdo con lo previsto en esta ley y en los estatutos de la sociedad cooperativa. La baja obligatoria tendrá el carácter de justificada, a menos que la pérdida de los referidos requisitos responda a un deliberado propósito por parte de la persona socia de eludir sus obligaciones con la entidad o de beneficiarse indebidamente con su baja.*

*La baja obligatoria no justificada autoriza al órgano de administración a exigir a la persona socia la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.*

*2. La baja obligatoria será acordada de oficio por el órgano de administración, por propia iniciativa o a instancia de persona interesada y previa audiencia de la persona socia*

*implicada. No obstante, corresponderá a la Asamblea General acordar la baja obligatoria en aquellos supuestos en los que la persona socia susceptible de baja obligatoria pertenezca a la Administración Única o Solidaria a las que se refiere el artículo 42, en los términos que reglamentariamente se determinen.*

*3. Reglamentariamente se regularán el procedimiento para la baja obligatoria, así como el régimen de impugnación de los acuerdos que puedan adoptarse en esta materia.*

## **Concordancia con el artículo 26 del Reglamento de desarrollo.**

### **ARTÍCULO 26. BAJA OBLIGATORIA.**

*1. La persona socia causará baja obligatoria con los requisitos y efectos establecidos en el artículo 24 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, en el presente Reglamento y en los estatutos sociales.*

*2. Los estatutos fijarán el procedimiento de baja obligatoria respetando las siguientes normas:*

*a) El procedimiento sobre la baja obligatoria podrá iniciarse de oficio por el órgano de administración, a petición de cualquier persona interesada o a instancia de la persona que dejó de reunir los requisitos para continuar siendo socia.*

*b) Será preceptiva, en todo caso, la audiencia previa de la persona socia implicada.*

*c) El acuerdo de la baja obligatoria es competencia indelegable del órgano de administración de la sociedad cooperativa, salvo que la persona socia susceptible de baja obligatoria pertenezca a la Administración Única o Solidaria, en cuyo caso, corresponderá a la Asamblea General la adopción de dicho acuerdo. En cualquier caso, la persona socia que se encuentre incurso en el procedimiento de baja no podrá tomar parte en la votación del órgano competente para adoptar el acuerdo.*

*3. La persona socia disconforme con el acuerdo del órgano de administración sobre la calificación y efectos de su baja obligatoria, podrá impugnarlo por el cauce procesal previsto en el artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, pudiendo recurrirlo previamente con arreglo a lo previsto en el artículo 22.3.*

*Cuando el acuerdo de calificación le corresponda a la Asamblea General, sólo cabrá su impugnación a través del procedimiento previsto en el artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

### **Comentario del artículo 24 de la LSCA y del artículo 26 del RLSCA.**

En el régimen de baja obligatoria de socios se prevé como única diferencia con la normativa anterior que cuando afecte a un socio perteneciente a la administración única o solidaria corresponda su calificación a la Asamblea General.

La persona socia podrá solicitar en cualquier momento la baja voluntaria en la sociedad cooperativa mediante preaviso por escrito al órgano de administración en el plazo previsto estatutariamente. El incumplimiento de esta obligación autoriza al órgano de administración a exigirle judicialmente la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. No obstante, los estatutos podrán prever un periodo mínimo de permanencia en la cooperativa, que en ningún caso podrá superar los cinco años, o el compromiso de no causar baja hasta el final del ejercicio económico. Si bien, en estos supuestos el órgano de administración deberá valorar las circunstancias concurrentes en cada caso antes de adoptar una decisión sobre la existencia de causa justificada de baja voluntaria.

Los casos en que la permanencia podrá superar los cinco años son: en las sociedades cooperativas agrarias, que podrá ser de hasta diez años; en las sociedades de explotación comunitaria de la tierra, que el plazo podrá ser de hasta quince años con posibilidad de prórroga.

Los casos en que la baja tendrá carácter de justificada serán aquellos en que concurran las siguientes causas:

- s) Cuando se adopte un acuerdo que implique la asunción de obligaciones o cargas gravemente onerosas para la capacidad económica de la persona socia no previstas en los estatutos.
- t) Cuando tratándose de la Asamblea General, se haya hecho constar en acta la oposición a su celebración o el voto en contra del acuerdo, no haber asistido o haber sido privado ilegítimamente del voto.



- u) Cuando se ajuste todos los requisitos establecidos en la LSCA y la solicitud de baja se presente en plazo y forma según el RLSCA.

El órgano encargado de la calificación de la baja es el órgano de administración. Si bien, en aquellos casos en que la persona socia pertenezca a la Administración Única o Solidaria la facultad será de la Asamblea General.

El procedimiento será el previsto en el art. 25. 4 del RLSCA. Conforme al mismo, se prevé que el inicio será mediante solicitud al órgano de administración dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiera producido la reunión del órgano en cuestión para los supuestos del art. 23 LSCA, si ha asistido a la sesión del mismo. Si no hubiera asistido, el plazo se contará a partir del día siguiente a aquel en que recibió la notificación del acuerdo. Cuando el acuerdo discutido deba ser objeto de publicación, de conformidad con lo previsto en la LSCA o el RLSCA, el plazo será el señalado para solicitar baja justificada se contará a partir del día siguiente a la publicación del acuerdo.

El órgano de administración debatirá y calificará los efectos baja, formulando resolución al respecto en el plazo de tres meses desde su solicitud. Si le correspondiese adoptar esta decisión a la Asamblea General, el acuerdo se deberá producir en la primera de éstas que se celebre desde la solicitud.

La persona socia no podrá votar en la sesión donde se decida sobre su baja justificada. El silencio por parte del órgano encargado de resolver es en todo caso positivo.

Los recursos que podrá ejercitar la persona socia disconforme con el acuerdo del órgano de administración son los previstos en el art. 35 LSCA, sin perjuicio de recurrir previamente conforme al art. 22.3. Si bien, cuando el acuerdo de calificación le corresponda a la Asamblea General, sólo cabrá su impugnación a través del cauce del art. 35.

## **CAPITULO III. DEL INVERSOR O INVERSORA**

### **ARTÍCULO 25. PERSONA INVERSORA.**

*1. Si los estatutos lo prevén, podrán formar parte de las sociedades cooperativas, en condición de personas inversoras, aquellas personas susceptibles de ser socias conforme al artículo 13.1 que realicen las aportaciones al capital que determinen los estatutos, o en su defecto la Asamblea General, y que no desarrollen la actividad cooperativizada. No obstante, no podrá ostentar la condición de inversor o inversora aquella persona que tenga intereses o realice actividades de la misma índole que las propias de la cooperativa, salvo que medie autorización expresa del órgano de administración.*

*El socio o socia que cause baja justificada podrá adquirir la condición de inversor o inversora transformando su aportación obligatoria en voluntaria en lo que exceda, en su caso, de la aportación inicial al capital social estatutariamente establecida para las personas inversoras.*

*2. Los inversores o inversoras tendrán voz y voto en la Asamblea General.*

*Los estatutos determinarán el régimen de admisión y baja, así como los derechos y obligaciones de las personas inversoras y el reparto de sus votos en la citada Asamblea, que, en su conjunto, no podrá superar el veinticinco por ciento de los votos presentes y representados en cada Asamblea.*

*Los estatutos podrán exigir el compromiso del inversor o inversora de no causar baja voluntaria en la cooperativa hasta que haya transcurrido el plazo que establezcan, que no podrá ser superior a siete años.*

*3. Las personas inversoras suscribirán la aportación inicial al capital social que fijen los estatutos, o en su caso la Asamblea General, no estando obligadas a realizar nuevas aportaciones. Las aportaciones realizadas por las personas inversoras devengarán interés en la forma y cuantía establecidas en el artículo 57, sin que la suma de dichas aportaciones pueda alcanzar el cincuenta por ciento del capital social.*

*4. Si los estatutos sociales lo prevén, y alternativamente a la remuneración en forma de interés, se podrá destinar hasta un cuarenta y cinco por ciento de los resultados positivos anuales a su distribución entre los inversores e inversoras en proporción al capital desembolsado, en cuyo caso, estos soportarán las eventuales pérdidas del ejercicio en la misma proporción, hasta el límite de su aportación comprometida.*

*Asimismo, los estatutos sociales podrán prever una remuneración mixta cuya extensión y límites se fijarán reglamentariamente, sin que, en ningún caso, a igualdad de condiciones, se proporcione a inversores e inversoras una ventaja económica sobre las personas socias de la entidad.*

*5. El régimen aplicable al inversor o inversora será, salvo previsión en contra, el establecido para la persona socia común, con las particularidades en lo relativo a su estatuto económico que se determinen reglamentariamente.*

## **Concordancia con el artículo 27 del Reglamento de desarrollo.**

### **ARTÍCULO 27. LA PERSONA INVERSORA.**

*1. Si los estatutos lo prevén, podrán formar parte de las sociedades cooperativas, en condición de personas inversoras, aquellas personas susceptibles de ser socias, conforme al artículo 13.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre que realicen las aportaciones al capital que determinen los estatutos o, en su defecto, la Asamblea General, y que no desarrollen la actividad cooperativizada. No obstante, no podrá ostentar la condición de inversora aquella persona que tenga intereses o realice actividades de la misma índole que las propias de la cooperativa, salvo que medie autorización expresa del órgano de administración.*

*El socio o socia que cause baja justificada podrá adquirir la condición de inversor o inversora transformando su aportación obligatoria en voluntaria en lo que exceda, en su caso, de la aportación exigible para la persona inversora con arreglo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*2. Las personas inversoras, que no podrán ostentar a la vez la condición de personas socias, tendrán los mismos derechos y obligaciones que éstas, con las siguientes especialidades:*

*a) No estarán obligadas a hacer aportaciones obligatorias al capital social, más allá de la aportación inicial que fijen los estatutos o, en su caso, la Asamblea General.*

*b) No desarrollarán la actividad cooperativizada.*

*c) En caso de que los estatutos establezcan el rehúse o la libre transmisión de aportaciones sociales para las personas socias, estos podrán regular las condiciones y plazos para el reembolso de las aportaciones de los inversores e inversoras como consecuencia de la baja.*

*d) Las aportaciones al capital social de los inversores e inversoras deberán contabilizarse de manera independiente a las de personas socias, y se acreditarán mediante títulos nominativos y especiales.*

*3. Si los estatutos sociales establecen, con arreglo a lo previsto en el artículo 25.4 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, la remuneración mixta como forma de retribución al capital de las personas inversoras, dicha remuneración estará integrada:*

*a) Por los intereses que devenguen sus aportaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*b) Por el importe relativo a su participación en los resultados positivos anuales de la sociedad cooperativa, en proporción al capital desembolsado, si bien no podrá destinarse una cantidad superior a un tercio de estos resultados a su distribución entre las personas inversoras, debiendo soportar, igualmente, las eventuales pérdidas del ejercicio en la misma proporción, hasta el límite de su aportación comprometida.*

*En todo caso, y a igualdad de aportación al capital social, nunca podrá obtener una remuneración mayor al setenta y cinco por ciento de la que obtenga una persona socia común, que desarrolle plenamente la actividad cooperativizada.*

### **Comentario del artículo 25 de la LSCA y del artículo 27 del RLSCA.**

La Ley de 1999 preveía la figura del asociado, que es aquel socio que sólo aporta capital. La nueva normativa cambia su denominación a la de persona inversora e introduce varias novedades en su régimen jurídico. Por ejemplo, este tipo de socio no podrá realizar actividades o tener intereses de la misma índole que la entidad. Por otro lado, se prevé que el establecimiento por la cooperativa del rehúse de las aportaciones en caso de baja

no les afecte. Y además, podrán tener una remuneración mixta: intereses más beneficios, pero con una serie de límites, puesto que sus rendimientos nunca podrán exceder del 75% de los de la persona socia. Por último, debemos destacar que este tipo de socios podrá tener hasta el 49% del capital social y un 25% de los votos en la Asamblea General (en la normativa anterior los porcentajes eran 30 y 20 por ciento respectivamente). Entre las ventajas del nuevo régimen debemos mencionar que tienen la posibilidad de poder aplicarle a sus aportaciones un interés hasta 7,9 veces superior al interés legal; y alternatively a este supuesto se les podrá atribuir hasta el 45% de los resultados. En este último caso el inconveniente es que habrán de soportar las pérdidas en igual proporción.

La aportación al capital social de las personas inversoras se hará en moneda de curso legal. Sin embargo, la aportación también podrá consistir en bienes y derechos evaluables económicamente según lo dispuesto en el artículo 54.4 de la LSCA. En este caso, será necesario que exista autorización expresa de la Asamblea General. Además, la persona aportante estará obligada a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la aportación en los términos establecidos en el Código Civil para el contrato de compraventa y se aplicarán las reglas del Código de Comercio sobre este mismo contrato en cuanto a la transmisión de riesgos.

El socio o socia que cause baja justificada podrá adquirir la condición de inversor o inversora transformando su aportación obligatoria en voluntaria en lo que exceda de la aportación exigible para la persona inversora.

Las personas inversoras no podrán ostentar la condición de personas socias, tendrán sin embargo los mismos derechos y obligaciones que éstas salvo algunas peculiaridades:

- v) No deben hacer aportaciones obligatorias al capital social, más allá de la aportación inicial que fijen los estatutos o la Asamblea General.
- w) No desarrollan la actividad cooperativizada.
- x) En caso de rehúse o libre transmisión de aportaciones sociales, se regularán las condiciones y plazos para el reembolso de las aportaciones de los inversores e inversoras como consecuencia de la baja.

- y) Las aportaciones al capital social de los inversores e inversoras deberán contabilizarse de manera independiente a las de personas socias y se acreditarán mediante títulos nominativos y especiales.

Finalmente, cabe señalar que la persona inversora no podrá en ningún caso obtener una remuneración mayor al setenta y cinco por ciento de la que obtenga una persona socia común.

## **CAPÍTULO IV. ÓRGANOS SOCIALES**

### *Sección 1ª Determinación*

#### **ARTÍCULO 26. ÓRGANOS SOCIALES.**

*1. Los órganos preceptivos de las sociedades cooperativas para su dirección y administración serán los siguientes:*

*a) Asamblea General.*

*b) Órgano de administración, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36 y siguientes.*

*2. Son órganos potestativos de las sociedades cooperativas, además de los que puedan establecerse estatutariamente con arreglo a los criterios fijados en el artículo 45, el Comité Técnico y la Intervención, a los que se refieren los artículos 43 y 44, respectivamente.*

**Concordancia con el artículo 28 del Reglamento de desarrollo.**

#### **ARTÍCULO 28. ÓRGANOS SOCIALES.**

*1. Son órganos preceptivos de las sociedades cooperativas la Asamblea General y el órgano de administración.*

*2. Son órganos potestativos de las sociedades cooperativas el Comité Técnico y la Intervención, sin perjuicio de que estatutariamente se puedan establecer otros, conforme a los requisitos establecidos en el [artículo 45 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#).*

## Comentario.

Comienza el Capítulo IV de la Ley de 14/2011, de 23 de Diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluas (en adelante LSCA) diferenciando los órganos sociales de las Sociedades Cooperativas Andaluas según un criterio de necesidad ya sea su existencia obligatoria o no. En concreto se diferencia entre órganos sociales preceptivos u obligatorio y órganos sociales potestativos o voluntarios. Serán órganos preceptivos la Asamblea General y el órgano de Administración. Y órganos potestativos el Comité Técnico, la Intervención y aquellos que establezcan los estatutos.

La principal diferencia respecto a la legislación anterior es que se reduce el número de órganos preceptivos en pos de la adaptación a la lógica evolución del entorno económico y normativo en que se insertan estas entidades.

En concreto desaparece el carácter de obligatoria de una figura histórica del derecho cooperativo cual es la de los Interventores. Esta supresión tiene su justificación en la asimilación cada vez mayor de la regulación de las sociedades cooperativas con la regulación general de sociedades. Más concretamente, la ley extiende el control de la auditoría externa a más supuestos de los contemplados convencionalmente para las sociedades cooperativas lo que convierten a los interventores en algo superfluo e incluso extravagante. Además, estos interventores debían ser elegidos entre las personas socias de la cooperativa, que en muchas ocasiones no contaban con la formación necesaria para el carácter altamente especializado de las tareas de fiscalización económica y contable que se les asignaban; siendo cada vez más frecuente el uso de la regla excepcional de poder nombrar como Interventores a personas extrañas a la sociedad con la cualificación profesional suficiente, cuando así se dispusiera estatutariamente. No obstante la LSCA, fiel a su carácter flexible y autonomista, permite su asunción estatutaria por aquellas sociedades cooperativas de cierta envergadura que la consideren operativa y cuenten con personas adecuadas para su ejercicio. Así el artículo 28.2 establece que será un órgano potestativo la Intervención.

Otra de las novedades de la nueva normativa es que, siguiendo este principio de flexibilidad y adaptación a las nuevas realidades, sustituye el anterior Consejo Rector, por un concepto de dimensiones más amplias como es el Órgano de Administración. Este concepto engloba tanto al tradicional Consejo Rector como otros órganos sustitutivos de este para sociedades con un número de socios igual o menor a diez que podrán prever



otros modos de organizar dicha administración, en concreto el órgano de la Administración Única y la Administración Solidaria. Como veremos en el apartado correspondiente, esta opción otorgará mayor flexibilidad funcional al órgano de administración para aquellas cooperativas más pequeñas

La última novedad destacable sería la adición de un segundo apartado en este artículo introductorio respecto a la legislación anterior. El legislador introduce un segundo párrafo dedicado a los órganos potestativos y utiliza una numeración abierta para esta reseña, refiriendo los dos órganos sociales de uso más frecuente, más allá de los órganos de carácter preceptivos, como es el Comité Técnico y la Intervención. El Comité Técnico es un nuevo órgano societario de carácter potestativo diseñado especialmente para sociedades de gran tamaño, este órgano recoge y unifica algunas de las facultades que la legislación anterior atribuyó a los Interventores así como las que atribuía al Comité de Recursos. El órgano potestativo de la Intervención igualmente viene a sustituir las competencias del órgano social obligatorio de la Intervención de la antigua normativa que se ha referido en el apartado anterior. Por último, fiel a su carácter autonomista, la ley deja abierta la posibilidad estatutaria de incluir aquellos órganos sociales que la realidad de la sociedad cooperativa exija.

## *Sección 2ª: Órganos preceptivos.*

### *Subsección 1ª Asamblea General.*

## **ARTÍCULO 27. CONCEPTO Y CLASES.**

*1. La Asamblea General, constituida por los socios y socias de la cooperativa, es el órgano supremo de expresión de la voluntad social en las materias cuyo conocimiento le atribuyen esta ley y los estatutos. Las personas socias, incluso las disidentes y las no asistentes, quedan sometidas a los acuerdos de la Asamblea General, siempre que se hayan adoptado de conformidad con el ordenamiento jurídico y los estatutos sociales.*

*Las asambleas generales pueden ser ordinarias y extraordinarias.*

*2. Es Asamblea General ordinaria la que tiene que reunirse anualmente, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio económico anterior, para analizar la gestión*

*social; aprobar, si procede, las cuentas anuales, y distribuir los resultados positivos o imputar pérdidas. Podrá decidir, además, sobre cualquier otro asunto incluido en su orden del día.*

*3. Toda Asamblea que no sea la prevista en el apartado anterior tendrá la consideración de extraordinaria.*

*4. Si la Asamblea General ordinaria se celebrara fuera del plazo previsto en el presente artículo, será válida, respondiendo los miembros del órgano de administración de los posibles perjuicios que de ello puedan derivarse tanto frente a las personas socias como frente a la entidad.*

**Concordancia con el artículo 29.1 del Reglamento de desarrollo.**

## **ARTÍCULO 29.CONVOCATORIA.**

*1. La Asamblea General ordinaria o extraordinaria deberá convocarse de acuerdo con lo establecido en el [artículo 29 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#).*

### **Comentario.**

Ha de empezar este comentario resaltando las novedades y avances que supone en la redacción de esta materia la nueva Ley de Cooperativas Andaluza respecto a la normativa anterior. Lo primero que llama la atención, es la agrupación de artículos que realiza la nueva ley; en concreto el actual artículo 27 engloba los artículos 46 y 47 de la anterior normativa. Si bien es cierto que no se observa diferencias contundentes en la redacción del precepto, esta agrupación de artículos sí evidencia la voluntad del legislador de presentar un texto más escueto que permita un desarrollo más detallado en el reglamento y en los propios estatutos sociales. La inusual técnica de desarrollar a través de un reglamento de aplicación una ley societaria responde a la necesidad de adaptación de las sociedades cooperativas al entorno socioeconómico actual. Así mismo el hecho de la continua remisión a los estatutos societarios que presenta esta materia responde al ánimo de propiciar un desarrollo autónomo con arreglo a las necesidades singulares de cada empresa.

Como tendremos ocasión de analizar pormenorizadamente, el Reglamento de la Ley de Sociedad Cooperativas Andaluza (en adelante RLSCA) realiza un desarrollo exhaustivo

de los aspectos más prácticos de la ley, aliviando la redacción de ésta, que se hace mucho más accesible en comparación con la anterior normativa. En concreto, el reglamento asume la regulación detallada de la convocatoria y desarrollo de la Asamblea General y el procedimiento para la toma de acuerdos en la misma.

### Concepto de Asamblea General.

El párrafo 1º del artículo 27 de la Ley establece la definición de Asamblea General de la sociedad cooperativa andaluza, abordando dos aspectos de la misma, por un lado su definición legal y por los requisitos que deberán cumplir sus acuerdos.

### Definición Legal.

La ley define la Asamblea General de Socios y Socias como el órgano de carácter preceptivo que representa la voluntad soberana de la sociedad que vinculará a todos los socios y socias. Puesto que esta voluntad soberana es de importancia máxima para el desarrollo de la vida de la sociedad y va a ser de estricto cumplimiento para las personas socias, ésta debe cumplir con dos requisitos básicos en su formación: que la voluntad se exprese sobre las materias que son competencias de la Asamblea General, y que, tanto el proceso de la toma de acuerdos como el contenido del mismo, se ajuste al marco de la ley y de los estatutos sociales.

Veamos esta definición y sus requisitos de forma detallada para poder abordar este concepto en toda su amplitud.

Es un órgano preceptivo. Si bien es cierto que en la redacción de este precepto no aparece la referencia al carácter obligatorio de este órgano, si se hace en el artículo previo, el artículo 26, donde se diferencia entre órganos preceptivos y órganos potestativos; encontrándose la Asamblea General de Socios y Socias entre los órganos preceptivos, es decir con carácter obligatorio. Esto significa que ninguna cooperativa podrá prescindir de la Asamblea General o sustituirla por ningún otro órgano.

Es el órgano supremo de expresión de la voluntad social. La Asamblea General ocupa la cúspide de la pirámide jerárquica de los órganos sociales. Es el órgano supremo, el más importante. Esto implica dos cosas: que tiene poder deliberatorio y poder decisorio. El poder deliberatorio conlleva que es el órgano donde se podrá informar y debatir de las cuestiones que competan, es decir todas las personas socias podrán exponer sus

argumentos y contra-argumentos de las propuestas que se presenten en la asamblea. El poder decisorio significa que se podrán tomar acuerdos sobre las propuestas siguiendo el proceso establecido en el artículo 31 de la LSCA. Todos los socios y socias tienen el derecho a la asistencia y al voto en la Asamblea General. Uno de los signos distintivos de las sociedades cooperativas es que rige el principio democrático según el cual “cada persona socia equivale a un voto” no rigiendo el principio del voto proporcional al capital aportado. Este principio, según el cual cada persona socia representa un voto en condiciones de igualdad, se cumple estrictamente respecto a las cooperativas de primer grado que no sean las cooperativas de servicios del artículo 102.1 de la LSCA. En las cooperativas de segundo grado o ulterior grado se pueden establecer otro tipo de votos que no rija el principio estrictamente democrático si no que puede hacerse proporcional al grado de participación de cada socio o socia en la actividad cooperativizada.

Sus acuerdos tienen carácter vinculante para todos los socios y socias. La ley establece que los socios y socias quedarán sometidos a los acuerdos tomados en Asamblea. La ley remarca el carácter absoluto de la expresión “todos los socios y socias” aclarando que los acuerdos serán vinculantes tanto para las personas socias que hayan votado a favor del acuerdo como para aquellas que no lo hayan hecho o no asistan a la asamblea. En concreto la ley establece la expresión disidentes y no asistentes. Así podemos afirmar que los acuerdos sociales vinculan a todos los socios y socias, hayan o no asistido a la Asamblea, hayan votado a favor o en contra, o simplemente se hayan abstenido o hayan mantenido una actitud pasiva durante la Asamblea.

Como ya anunciábamos antes, para que esta voluntad sea soberana y vincule a todos los socios y socias debe cumplir dos requisitos en su formación.

Los acuerdos deben versar sobre las competencias que la Ley y los estatutos sociales le atribuyen a la Asamblea General. Estas competencias están recogidas en el artículo 28 de la LSCA como tendremos ocasión de ver detenidamente. A pesar de que la ley hace una enumeración exhaustiva de las materias objeto de la competencia de la Asamblea General, deja la puerta abierta a través del último epígrafe del artículo citado para que esta lista no sea un *numerus clausus* y pueda ampliarse a través de Ley o de los Estatuto. Este precepto no significa que cualquier competencia o facultad que no esté atribuida expresamente a ningún órgano societario deba asumirse de forma automática por la Asamblea General. Para que la asamblea General pueda asumir una competencia añadida al listado que marca el artículo 28 de la LSCA, ésta debe de estar recogida en

alguna normativa de aplicación a la sociedad cooperativas andaluzas o debe estar recogida convenientemente en el estatuto societario. Así, el legislador, en pos de fomentar el principio de autonomía de esta normativa, otorga a las personas socias la facultad de incluir en el estatuto societario alguna atribución de competencia para la Asamblea General que la ley no contemple de forma exhaustiva. No obstante esta inclusión tendrá que tener en cuenta que no podrá restar las competencias que por ley son atribuidas al otro órgano societario con carácter obligatorio o preceptivo como es el órgano de Administración que referiremos en el apartado correspondiente.

Los acuerdos han de adoptarse de conformidad con el ordenamiento jurídico y los estatutos sociales. Así, para que los acuerdos sean vinculantes para todos los socios y socias, estos deben ser tomados respetando el marco normativo. En todo nuestro ordenamiento jurídico, la voluntad está supeditada a las reglas del juego que establece la ley. En la presente materia el cumplimiento de la ley y del estatuto societario supone una doble condición, una formal y otra de contenido:

Condición formal: Que la asamblea esté válidamente constituida. Ello implica: adecuada convocatoria, quorum suficiente de asistencia, válida constitución de la mesa presidencial, competencia por razón de la materia, deliberación y votación con las mayorías suficientes

Condición de contenido: El contenido de los acuerdos deben ser conforme a Derecho, es decir conforme a la ley y a los estatutos societarios. Ha de tenerse en cuenta que los acuerdos adoptado por la Asamblea General tiene una presunción de validez, es decir se presumen acordes a la Ley mientras la autoridad judicial no diga lo contrario. En la práctica esto significa que cualquier persona socia debe cumplir en un primer momento los acuerdos tomados por la Asamblea General. Si el socio o socia sospecha que el acuerdo puede ser contrario a las leyes o al estatuto societario deberá impugnar el acuerdo, por nulo o anulable, conforme al artículo 35 de la LSCA que se expondrá en su apartado correspondiente.

A modo de conclusión, decir que la Asamblea Generales el órgano formado por todos los socios y socias, donde se expresa la voluntad suprema de la sociedad y sus acuerdos tiene carácter vinculante para todas las personas socias, hayan participado o no en la formación de esta voluntad. Para que este carácter vinculante sea posible, la toma de acuerdos debe cumplir dos requisitos básicos: por un lado que los acuerdos versen sobre materias que sean competencia de la Asamblea General y por otro que el acuerdo cumpla

la ley y el estatuto societario tanto en la el procedimiento de la toma del acuerdo como en el contenido del mismo.

Las clases de Asambleas Generales.

El apartado 2º del artículo 27 de la LSCA mantiene la misma redacción del artículo 47 de la derogada Ley 2/1999 sobre cooperativas andaluzas, estableciendo dos tipologías de asambleas generales, las de carácter ordinario y las de carácter extraordinario, manteniéndose la similitud con otras normativas societarias.

La ley presenta una definición en positivo para la asamblea ordinaria estableciendo los requisitos que esta deben cumplir, y una definición en negativo para lo que ha de considerarse una asamblea extraordinaria, que será toda aquella que no cumplan los requisitos establecidos para la asamblea ordinaria.

Son dos, por tanto, los requisitos que se establecen para definir qué ha de entenderse por una asamblea ordinaria y cuya ausencia determinará qué es una asamblea extraordinaria: el criterio de temporalidad y el criterio del contenido material de la asamblea.

1º El criterio de la Temporalidad:

La ley establece que de forma obligatoria la asamblea ordinaria debe reunirse una vez al año y, en concreto, en los seis meses posteriores al cierre del ejercicio económico anterior. Este precepto ha generado cierta discusión doctrinal sobre si debe entenderse que la Ley está obligando a convocar la asamblea ordinaria en los seis meses posteriores al cierre económico anterior o si debe entenderse que el legislador no se limita a fijar la temporalidad de la convocatoria si no la de la celebración misma de la asamblea. Es decir ¿la sociedad cooperativa está obligada a convocar asamblea ordinaria en los seis meses posterior al cierre económico del ejercicio anterior o está obliga a celebrar de forma efectiva la asamblea en este mismo periodo de tiempo? El artículo 29 de la LSCA, dedicado a la convocatoria de la Asamblea Ordinaria, establece que el órgano de Administración deberá convocarla dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio económico lo que en principio podría parecer contradictorio con el artículo 27 de

la LSCA que venimos refiriendo. Así mismo hay que apuntar que la ley de cooperativas de 1985 refería en este mismo precepto que la obligación era convocar asamblea ordinaria en este plazo de tiempo y no su celebración. A nuestro juicio el criterio que debe prevalecer es el de la celebración en los seis meses posteriores al cierre del ejercicio económico anterior y no el de la convocatoria. La primera de las razones que nos lleva a decantarnos por esta opción es el hecho de la propia literalidad de la ley que utiliza el verbo reunirse, que entendemos el legislador utiliza como sinónimo de celebrarse puesto que la celebración conllevará la reunión de todos los socios y socias que conforman este órgano societario. Difícilmente podría entenderse que el legislador utiliza el término reunirse como sinónimo del verbo convocar, lo que hace interpretar que el legislador quería acotar por seguridad jurídica la fecha de reunión de la asamblea ordinaria de obligatoriedad anual y no la convocatoria de la misma. El otro de los argumentos en el que nos apoyamos para mantener esta tesis es que realmente no existe confusión alguna entre el artículo 27.2 y al artículo 29. 1 de la LSCA, pues la normativa no utiliza la técnica de fecha concreta para la celebración de la asamblea si no que utiliza una técnica de plazos. Es decir la ley no dice que la asamblea ordinaria deberá celebrarse, por ejemplo, el día 60 desde el cierre del ejercicio si no que da un plazo de tiempo, en concreto seis meses. Es decir que dentro de este plazo de tiempo es perfectamente viable que pueda hacerse la convocatoria de la asamblea y la celebración de la misma puesto que entre una y otra debe mediar un plazo únicamente de 20 días. Es perfectamente viable por tanto que el legislador exija tanto para la convocatoria como para la celebración de la asamblea el mismo plazo de seis meses.

La cuestión debatida puede tener cierta trascendencia si tenemos en cuenta que ciertas materias, como veremos posteriormente, son de exclusiva competencia de la asamblea ordinaria y el hecho de que se tratasen en una asamblea que haya devenido en extraordinaria, por celebrarse una vez concluido el plazo de los seis meses desde el cierre del ejercicio económico anterior, podría no ajustarse a Derecho. Manteniendo la opinión de DON MANUAL SEDA HERMOSIÓN, entendemos que el hecho de que la Asamblea General Ordinaria se convoque dentro del plazo legal pero se celebre fuera de él, o que incluso se convoque y celebre fuera del plazo, ni muta el carácter de Asamblea General Ordinaria, ni impide que se tomen en ellas decisiones propias de su competencia. Básicamente genera responsabilidad para el órgano de Administración, por no haber convocado la reunión con antelación suficiente para poder celebrarse dentro del plazo, y



le hará responsable de los posibles perjuicios que de ello se deriven frente a las personas socias, frente a la sociedad y frente a terceros.

2º El contenido material de la Asamblea.

La LSCA establece dos tipos de contenidos para la asamblea ordinaria, los de carácter obligatorio y los de carácter voluntario.

Los contenidos de carácter obligatorio serán aquellas materias que la ley establece de forma exhaustiva y que definen el carácter de ordinario de la asamblea:

Análisis de la gestión social: El órgano societario encargado de la gestión de la cooperativa es el Órgano de Administración (Consejo Rector, Administración Única o Administración Solidaria). La Asamblea General Ordinaria es el momento donde el órgano de Administración responde ante los socios y socias de su gestión durante el último ejercicio económico, informando sobre las actividades llevadas a cabo para el cumplimiento de los acuerdos asamblearios. Los socios y socias analizará esta gestión en función de los criterios básicos de gestión de los que el órgano de administración se haya dotado y tomarán los acuerdos que consideren.

Aprobación o rechazo de las cuentas anuales. Estas deberán presentarse por el órgano de Administración acorde a los criterios establecidos en los artículos 65, 66 y 67 de la ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas y la Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas. Corresponderá a las personas socias su aprobación o rechazo.

Distribución de los resultados positivos o imputación de las pérdidas en su caso acordes con los artículos 68 y 69 de la Ley de Cooperativas Andaluzas.

Los contenidos voluntarios serán aquellos que hayan sido incluidos en el orden del día según lo establecido en el artículo 29.2 del RLSCA. El único límite a esta potestad de inclusión de asuntos en el orden del día es que el debate y aprobación de estos no impide que en la asamblea ordinaria pueda llevarse a cabo el análisis de la gestión social y la aprobación de las cuentas anuales contenido obligatorio de la Asamblea General Ordinaria.

De lo expuesto se deduce que todas las Asambleas que no estén sujetas al cumplimiento de estos requisitos serán consideradas Asambleas Generales Extraordinarias. Las asambleas extraordinarias podrán celebrarse en cualquier momento del año sin estar delimitado su número y podrán tener como objeto cualquier materia que no sea las atribuidas con carácter obligatorio a las asambleas ordinarias. Esta flexibilidad que otorga a ley no resta para que las sociedades con arreglo a sus necesidades puedan establecer en los estatutos societarios una periodicidad para las asambleas extraordinarias así como un número concreto a celebrar anualmente o establezca un listado de materias que serán objeto de asambleas extraordinarias.

## **ARTÍCULO 28: COMPETENCIAS.**

*Corresponde de forma exclusiva e indelegable a la Asamblea General la adopción de acuerdos sobre las siguientes materias:*

- a) Examen de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y demás documentos que exija la normativa contable, así como la aplicación de los resultados positivos o la imputación de pérdidas, en su caso.*
- b) Modificación de los estatutos sociales y la aprobación o modificación del reglamento de régimen interior.*
- c) Nombramiento y revocación de los miembros del órgano de administración, del Comité Técnico, de la Intervención, así como de las personas liquidadoras.*
- d) Autorización a los miembros del órgano de administración para el ejercicio, por cuenta propia o ajena, de una actividad igual, análoga o complementaria a la que constituya el objeto social de la entidad.*
- e) Ejercicio de la acción de responsabilidad contra los miembros del órgano de administración, del Comité Técnico, de la Intervención, los responsables de la auditoría y las personas liquidadoras, así como transigir o renunciar a la misma.*
- f) Acordar la retribución de los miembros de los órganos sociales a que se refiere el artículo 49, estableciendo el sistema de retribución y su cuantificación.*

*g) Creación, extinción y cualquier mutación estructural de las secciones de la sociedad cooperativa.*

*h) Integración en consorcios, uniones o agrupaciones de carácter económico; participación en el capital social de cualquier tipo de entidad, salvo cuando dichas actuaciones no representen más del veinte por ciento de su cifra de negocio, obtenida de la media de los dos últimos ejercicios económicos; así como constitución, adhesión o separación de federaciones, asociaciones o cualquier otra entidad de carácter representativo.*

*i) Actualización del valor de las aportaciones al capital social y establecimiento de nuevas aportaciones obligatorias, así como la fijación de las aportaciones de los nuevos socios o socias y de las cuotas de ingreso o periódicas.*

*j) Emisión de obligaciones, títulos participativos, cédulas, bonos hipotecarios o la admisión de financiación voluntaria de las personas socias o de terceros bajo cualquier otra modalidad admitida por la legalidad vigente y acorde con la naturaleza cooperativa.*

*k) Aprobación del balance final de la liquidación.*

*l) Transmisión o cesión del conjunto de la empresa o patrimonio de la sociedad cooperativa, integrado por el activo y el pasivo, de todo el activo o de elementos que constituyan más del veinte por ciento del inmovilizado.*

*m) Fusión, escisión, transformación, disolución y reactivación de la sociedad cooperativa.*

*n) Cualquier otra que, con tal carácter, sea prevista legal o estatutariamente.*

### **Comentario.**

El artículo 28 de la LSCA presenta trece competencias exclusivas y excluyentes de la Asamblea General. El último número de esta lista deja la puerta abierta a incluir cualquier otra competencia dentro de este listado, siempre que la competencia incluida cumpla el requisito de estar prevista en la ley o en el estatuto societario.

Las principales novedades que se aprecian en la redacción dada en la nueva ley en comparación con la anterior ley de cooperativas andaluzas es que el orden expuesto es diferente y el número de competencias es mayor. El orden sigue un criterio según la

frecuencia y la habitualidad con la que se tratan estas materias en la vida práctica de la cooperativa, comenzando el listado por aquellas materias propias de las asambleas generales ordinarias referente principalmente a la aprobación de la gestión social, y cerrando la enumeración con la disolución o reactivación de la cooperativa, hechos por los general que se presentan de forma menos frecuente en el día a día de la cooperativa.

Respecto a las nuevas material reservadas a la Asamblea General, encontramos la competencia de determinar la cuantía de la retribución a los miembros de los órganos sociales, siguiendo la forma que la Ley Estatal de Cooperativas presenta, y la competencia sobre autorización a los miembros de órganos de Administración para el ejercicio, por cuenta propia o ajena, de una actividad igual, análoga o complementaria a la que constituya el objeto social de la entidad, como tendremos ocasión de ver detenidamente.

Exponemos a continuación de forma detallada las materias exclusivas y excluyentes de la Asamblea General de las cooperativas.

Examen de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y demás documentos que exija la normativa contable, así como la aplicación de los resultados positivos o la imputación de pérdidas, en su caso: Del mismo modo que la presentación de las cuentas anuales es competencia exclusiva e indelegable del órgano de Administración de la cooperativa, también el control de dicha gestión social, consistente en la aprobación o rechazo de las cuentas anuales y aplicación de los resultados, es competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea General, sin que estatutariamente quepa otra opción. Esta rigidez de la norma tiene su razón de ser en que la naturaleza definitoria de la cooperativa es el principio de democracia que la rige que, como ya vimos, se manifiesta en la voluntad de la Asamblea General de socios y socias, sobre los que recae el peso democrático del funcionamiento de la cooperativa.

Modificación de los estatutos sociales y la aprobación o modificación del reglamento de régimen interior:

Respecto a los estatutos sociales, como muy bien señala URJA, su modificación afecta a la estructura corporativa de la entidad y por tanto, la decisión de modificar dichos estatutos es y debe ser competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea General, sin distinguir entre ordinaria y extraordinaria. Es el órgano soberano, esto es, la Asamblea

General, que forma y expresa la voluntad social, el único competente para modificar los estatutos sociales. Los estatutos sociales son la norma interna que rige la vida práctica de la sociedad y vincula a todos los socios y socias, por lo que su modificación debe recaer en el conjunto de todos estos, es decir en la Asamblea General. El artículo 11 de la LSCA establece los contenidos mínimos que debe contemplar el estatuto pero no los máximos, lo que significa que la Asamblea General es soberana para modificar los estatutos sin límite de materias, siempre dentro del marco de del ordenamiento jurídico, tanto en la forma en la que se lleva a cabo estas modificaciones (convocatoria y quorum) como en el contenido de los mismos, ya que esto no podrán vulnerar el derecho de los socios y socias. Las modificaciones estatutarias deberán ser registradas en el Registro General de Cooperativas de la Junta de Andalucía para que tenga validez frente a terceros según el artículo 119 de la LSCA. La intervención notarial en este tipo de modificaciones será potestativa, salvo en el caso de que la modificación conlleve la aportación de bienes inmuebles al capital de la entidad o el estatuto lo contemple.

Respecto a la aprobación y modificación del reglamento de régimen interno, se trata de una competencia que la ley anterior ya recogía con entidad propia dentro del listado de competencias exclusivas y excluyentes de la Asamblea General. El legislador, fiel al principio de economía que rige la presente normativa, opta por agrupar esta competencia junto la competencia de aprobación y modificación de estatutos pero sin alterar en modo alguno la naturaleza de la misma. No se especifica en la ley si la modificación del Reglamento interno tiene eficacia constitutiva y debe presentarse en el Registro de Cooperativas. Consideramos que la modificación del reglamento de régimen interno al no estar contemplada en la enumeración del artículo 199 de la ley sobre los actos inscribibles en el Registro, debe ser considerado un acto con solo efecto declarativo, siendo potestativo su acceso al Registro y no teniendo efectos frente a terceros de buena fe si se opta por su no inscripción.

Nombramiento y revocación de los miembros del órgano de administración, del Comité Técnico, de la Intervención, así como de las personas liquidadoras. Es decir la Asamblea tendrá la competencia exclusiva y excluyente de nombrar a los miembros de los órganos sociales de la cooperativa, tanto los de carácter preceptivo, como es el Órgano de Administración, como aquellos de carácter potestativo como son el Comité Técnico, la Intervención y los Liquidadores, cuyas funciones tendremos ocasión de exponer de forma detallada con posterioridad.

Autorización a los miembros del órgano de administración para el ejercicio, por cuenta propia o ajena, de una actividad igual, análoga o complementaria a la que constituya el objeto social de la entidad.

Este precepto hay que ponerlo en relación con el artículo 48.b.2 de la LSCA que establece las prohibiciones para los miembros del órgano de administración de formar parte del mismo quienes desempeñen o ejerzan por cuenta propia o ajena actividades competitivas o complementarias a las de la sociedad cooperativa, salvo que medie autorización expresa de la Asamblea General. Trata de preservar esta norma que no existan conflictos de intereses entre los miembros del órgano de administración y los intereses de la sociedad. Puesto que el ejercicio por parte de los miembros de órganos de administración de actividades que puedan ser competitivas para la sociedad puede conllevar a que estos adopten decisiones contrarias al interés de la sociedad y sus socios en beneficio propio, por ser los intereses contrapuestos. Sin embargo la ley establece que podrá salvarse esta prohibición en tanto en cuanto la Asamblea General de socios y socias así lo autorice.

Esta materia no estaba atribuida como una competencia exclusiva y excluyente en el artículo 48 de la antigua Ley de Cooperativas, aunque sí estaba contemplado esta capacidad de la asamblea General en el artículo 70 de la ley anterior cuando hablaba de la prohibición de los miembros del órgano de Administración para el ejercicio, por cuenta propia o ajena, de una actividad igual, análoga o complementaria a la que constituya el objeto social de la entidad. La nueva normativa sigue manteniendo esta capacidad de la Asamblea General de salvar la prohibición de incompatibilidad de intereses y la suma al listado de competencias exclusivas y excluyentes de la Asamblea General del artículo 28.

Entendemos que esta dispensa no puede concederse genéricamente en los estatutos, ni tampoco de forma genérica para todos los casos en una Asamblea, si no que habrá de ser específica para cada supuesto, atendida a la condición de la persona nombrada, la actividad que ejerce y con ponderación de las circunstancias particulares que concurren en el caso sometido a votación.

Ejercicio de la acción de responsabilidad contra los miembros del órgano de administración, del Comité Técnico, de la Intervención, los responsables de la auditoría y las personas liquidadoras, así como transigir o renunciar a la misma.

El artículo 51 de la Ley establece que la acción de responsabilidad contra los miembros del órgano de administración, del Comité Técnico, de la Intervención, los responsables de la auditoría y las personas liquidadoras, será ejercitada por la sociedad cooperativa, previo acuerdo de la Asamblea General. Dado la importancia de esta materia atendiendo al daño que puede causar al interés de la sociedad el no poder ejercer esta acción de responsabilidad, los requisitos para su acuerdo son flexibles pudiendo ser adoptado por mayoría simple, y sin que sea necesaria la previa inclusión del asunto en el orden del día.

Ha de tenerse en cuenta que para otros órganos sociales de carácter potestativo no incluido en este artículo, como por ejemplo el caso del Director, la competencia para acordar una acción de responsabilidad no sería exclusiva de la Asamblea General, otorgando también esta competencia al Órgano de Administración. Esta excepción se basa en la gravedad que puede provocar que no pueda ejercerse esta acción de responsabilidad a tiempo, por lo que el legislador elimina ciertos requisitos formales.

Acordar la retribución de los miembros de los órganos sociales a que se refiere el artículo 49, estableciendo el sistema de retribución y su cuantificación.

La inclusión de esta competencia específica supone una novedad en la redacción de la normativa, como ya adelantábamos en la introducción de este apartado, respecto a la anterior normativa. En la anterior ley, esta competencia no se mencionaba, pero se sobreentendía dado que entre las menciones estatutarias obligatorias del antiguo artículo 12 de la ley, no se incluía la necesidad de indicar si los cargos son gratuitos o retribuidos y en qué cuantía, por lo que esta labor debía recaer en el órgano supremo de la cooperativa, la Asamblea General. Ahorra esfuerzos de interpretación el legislador actual al incluir en la redacción de las competencias de la Asamblea General la de fijar la retribución de los miembros de órganos sociales a los que se refiere el artículo 49 de la ley. Respecto a los miembros de órganos sociales que a la vez son persona socia trabajadora de la cooperativa, es necesario analizar que esta doble naturaleza a la hora de compatibilizar la retribución por el desempeño del cargo y el salario que le corresponde como persona socia trabajadora. La Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo viene admitiendo como perfectamente compatible la relación laboral y la relación societaria, de modo tal que el nombramiento como administrador social o la pertenencia a un órgano de administración no se concibe como un impedimento para el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, ya que se entiende que ambas actividades pueden ejercerse simultáneamente (Sentencias de la Sala 4ª del Tribunal Supremo de 27



de enero de 1992, 14 de junio de 1994 y 20 de octubre de 1998). Por tanto será la Asamblea General la que establezca los criterios y el modelo de retribución de los miembros de órganos sociales. Independientemente de que esta forma de retribución aparezca reflejada en los estatutos societarios, es la Asamblea la que ostenta esta competencia de forma exclusiva, evitando así que se pueda cometer abusos por los miembros de los órganos a la hora de fijar la retribución.

Creación, extinción y cualquier mutación estructural de las secciones de la sociedad cooperativa. El artículo 12 de la LSCA establece que los Estatutos Sociales pueden prever la existencias de secciones dentro de la cooperativa que podrían definirse como estructuras societarias con autonomía de gestión y patrimonio separado con el fin de desarrollar actividades específicas o complementarias del objeto social de la cooperativa. La antigua ley ya contemplaba esta competencia, pero su redacción la incluía en el apartado I del artículo 48, junto a la competencia para adhesión o separación de las cooperativas respecto a otras. El legislador actual opta por sacar la redacción de esta competencia en un apartado propio para su mejor comprensión.

Entendemos que aunque estas secciones se prevean estatutariamente, su creación extinción o cualquier otro cambio deberán decidirse en Asamblea General de socios y socias. Casando el artículo 12 de la LSCA con este apartado del artículo 28, puede concluirse que corresponde al estatuto prever la existencia de las secciones y su régimen y que sobre esta posibilidad será la Asamblea General quien tome los acuerdos sobre la creación de estas y las materialice. Estos acuerdos que materialicen la creación de una sección concreta, no tienen porqué conllevar la correspondiente modificación de estatuto, que sería potestativa pues la ley no la exige.

Integración en consorcios, uniones o agrupaciones de carácter económico; participación en el capital social de cualquier tipo de entidad, salvo cuando dichas actuaciones no representen más del veinte por ciento de su cifra de negocio, obtenida de la media de los dos últimos ejercicios económicos; así como constitución, adhesión o separación de federaciones, asociaciones o cualquier otra entidad de carácter representativo.

Esta competencia ya era exclusiva y excluyente de la Asamblea General en la anterior normativa, pues así la contemplaba el apartado I del artículo 48, utilizando, sin embargo, una redacción más compleja para su exposición: “Constitución de cooperativas de primer segundo o ulterior grado, y cooperativas de integración adhesión o separación de las

mismas; creación, adhesión o separación de consorcios, federaciones, asociaciones; creación y extinción de secciones de la cooperativa; así como la participación en empresas no cooperativas.” El actual legislador opta por utilizar conceptos más amplios como uniones o agrupaciones de carácter económico, en los que estarían englobadas las cooperativas de primer o ulterior grado, y hace más sencilla la redacción y comprensión del mismo. Realiza una salvedad la redacción de la nueva ley estableciendo que en el caso de que la operación no conllevara un determinado riesgo económico para la sociedad, no será necesaria la decisión de la Asamblea para llevarla a cabo. Establece el límite del riesgo en el veinte por ciento de la cifra de negocio de la cooperativa. En estos casos, la competencia para tomar la decisión es del órgano de Administración (artículo 37.f). La ley establece que el acuerdo del órgano de Administración deberá constar en el orden del día y ser ratificado, en su caso, por la Asamblea General inmediatamente posterior. Esta ratificación posterior de la Asamblea General se enmarcaría dentro de su competencia para evaluar la gestión social del órgano de Administración de la sociedad y aprobarla o rechazarla en su caso. Con esta excepción el legislador persigue flexibilizar el ejercicio del órgano de Administración, que podrá realizar este tipo de negocios jurídicos sin necesidad de convocar asambleas, siempre y cuando se cumpla la garantía de la ratificación a posteriori por parte de la Asamblea General.

Actualización del valor de las aportaciones al capital social y establecimiento de nuevas aportaciones obligatorias, así como la fijación de las aportaciones de los nuevos socios o socias y de las cuotas de ingreso o periódicas.

Amplía el legislador esta enumeración de competencias en relación con la legislación anterior incluyendo entre ellas la fijación de las aportaciones de los nuevos socios y socias, asemejándose más a la redacción que de esta materia realiza la Ley Estatal de Cooperativas de 16 de julio de 1999.

Emisión de obligaciones, títulos participativos, cédulas, bonos hipotecarios o la admisión de financiación voluntaria de las personas socias o de terceros bajo cualquier otra modalidad admitida por la legalidad vigente y acorde con la naturaleza cooperativa.

Se amplía la redacción de esta competencia en relación con la anterior en base a las novedades que en esta materia presenta la nueva ley de cooperativas, principalmente en la figura del inversor o inversora, a los que se permite una mayor participación en el capital social, se modifica el límite de su capacidad de decisión y se diversifica su

remuneración, de manera que su perfil resulte más atractivo y permita su ingreso en la sociedad para contribuir a solventar las necesidades de financiación.

Aprobación del balance final de la liquidación. Se mantiene respecto a la ley anterior esta competencia como exclusiva y excluyente de la Asamblea General que tiene su parangón en las sociedades anónimas (artículos 275 de la ley de Sociedades Anónimas de 1989), en las sociedades limitadas (Artículo 118.1º de la ley de Sociedades Limitadas) y en las sociedad cooperativas sujetas a la legislación estatal (art. 74.1 de la ley de Sociedades Cooperativas Estatal).

Transmisión o cesión del conjunto de la empresa o patrimonio de la sociedad cooperativa, integrado por el activo y el pasivo, de todo el activo o de elementos que constituyan más del veinte por ciento del inmovilizado. Según este precepto es necesario el acuerdo de la Asamblea General para realizar actos de transmisión por cualquier título (compraventa, permuta, dación en pago, o donación) y/o constitución de un derecho real de garantía ( de la clase que sea en función de la naturaleza del bien afectado; esto es hipoteca, prenda, anticrisis, hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento de la posesión), siempre que la transmisión o la constitución del gravamen recaiga sobre el conjunto de la empresa o el patrimonio de la cooperativa pasivo o activo cuando este sea mayor al 20 % del patrimonio total. Para los casos en que la operación recaiga sobre una parte del patrimonio inferior al 20% del total no será competencia de la Asamblea aprobar el acuerdo. Aunque el artículo 37 de la ley no establece de forma específica que será competencia del órgano de Administración los negocios jurídicos de transmisión o cesión que afecten a menos de un 20% del patrimonio, se entiende que recae sobre estos la competencia según el apartado e) del artículo 37 en cuanto a la prestación de avales fianzas o garantías reales.

Fusión, escisión, transformación, disolución y reactivación de la sociedad cooperativa. Siguiendo el esquema lógico que se ha expuesto en este apartado se concluye que todos los actos que comportan una modificación esencial en la estructura social y en propia vida de la sociedad, es lógico que la competencia sea de la Asamblea General. (Véase los artículos 75, 76, 78, 79 y 80 de la Ley de Cooperativas andaluzas para la definición de cada una de estas modalidades).

Otras competencias:

El último párrafo del artículo establece que será competencia de la Asamblea General cualquier otra competencia que sea prevista legal o estatutariamente.

Los estatutos por tanto podrán contemplar otras competencias para la Asamblea General, sin embargo esta posibilidad debe estar sujeta al marco general del ordenamiento jurídico tanto en su forma como en su contenido.

En su vertiente formal, estas nuevas competencias no podrán contravenir lo establecido por la LSCA con carácter obligatorio para la estructura de la sociedad; nos referimos principalmente al límite que suponen las competencias atribuidas por ley al órgano de Administración. Contravenir estas normas de atribución de competencias exclusivas y excluyentes supondría desvirtuar la propia naturaleza de la sociedad cooperativa, pues aunque la Asamblea es el órgano soberano, se trata de una sociedad mercantil y las potestades de los órganos de administración para la gestión social y económica de la empresa es en lo que se sostiene este carácter empresarial de la cooperativa.

En su vertiente sustancial o de contenidos, las competencias que los estatutos atribuyan con carácter exclusivo a la Asamblea General más allá de las previstas en la ley de cooperativas, no podrán contravenir ninguna normativa de nuestro ordenamiento jurídico.

## **ARTÍCULO 29: CONVOCATORIA.**

*1. La Asamblea General ordinaria deberá convocarse por el órgano de administración dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio económico.*

*Transcurrido dicho plazo sin que se efectúe, la llevará a cabo el Comité Técnico. De no contar con dicho órgano o de no ejercer este la citada competencia dentro de los quince días siguientes a la finalización del plazo legal de convocatoria, corresponderá a la Secretaría del Consejo Rector proceder a la convocatoria de la Asamblea General en el plazo de quince días, sin que en este supuesto sea de aplicación lo previsto con carácter general en el artículo 42.2 respecto del ejercicio de las facultades de la Secretaría por las personas administradoras. Superados estos plazos sin que medie convocatoria, cualquier socio o socia podrá solicitarla del órgano judicial competente.*

*2. La Asamblea General extraordinaria se convocará por el órgano de administración por propia iniciativa, siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales y, asimismo, cuando lo solicite un número de socios o socias que represente, al menos, al diez por ciento de las personas socias en las sociedades cooperativas de más de mil, el quince por ciento en las de más de quinientos y el veinte por ciento en las restantes. En este caso, la convocatoria deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiera requerido en forma fehaciente al órgano de administración, debiendo incluirse en el orden del día, necesariamente, los asuntos que hubieran sido objeto de la solicitud.*

*Cuando el órgano de administración no efectúe la convocatoria solicitada dentro del plazo establecido al efecto, se seguirá el mismo procedimiento previsto en el apartado 1, si bien, en este caso, solo estará legitimado para solicitar la convocatoria del órgano judicial competente a que se refiere el párrafo segundo de dicho apartado cualquiera de los solicitantes de la Asamblea General extraordinaria, presidiéndola el socio o socia que aparezca en primer lugar en la solicitud.*

*3. La Asamblea General deberá celebrarse en el lapso que media entre los quince días y los dos meses desde su convocatoria. Se notificará a cada persona socia y se anunciará en la forma que establezcan los estatutos, debiendo justificar la Secretaría del órgano de administración la remisión de las comunicaciones dentro del expresado plazo.*

*Los estatutos sociales determinarán el régimen de notificación y publicidad de la convocatoria de la Asamblea General, pudiéndose utilizar, en sustitución de la notificación personal, los medios de comunicación de máxima difusión en el ámbito de actuación de la sociedad cooperativa cuando la convocatoria afectase a aquellas cooperativas de más de mil socios y socias, así como, cualquiera que sea su número, prever la utilización de cualquier medio técnico, informático o telemático que permitan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, siempre que se observen los protocolos que el uso de dichos medios lleva aparejados, para garantizar que las personas socias tengan conocimiento de la convocatoria.*

*Tanto la notificación como el anuncio deberán especificar los extremos que reglamentariamente se determinen, debiendo mediar entre la primera y la segunda convocatoria el plazo que fijen los estatutos sociales.*

*4. El orden del día de la Asamblea será fijado por el órgano de administración con la claridad y precisión necesarias para proporcionar a los socios y socias una información suficiente, debiendo incluir los asuntos propuestos por el Comité Técnico o por las personas socias en los términos que se establezcan reglamentariamente.*

*En el orden del día se incluirá necesariamente un punto que permita a los socios y socias efectuar ruegos y preguntas al órgano de administración sobre extremos relacionados con aquel.*

*5. La Asamblea General tendrá el carácter de universal cuando, sin que medie convocatoria formal, estén presentes o representados todos los socios y socias de la sociedad cooperativa, y acepten, unánimemente, su celebración y los asuntos a tratar en ella.*

## **Concordancia con el Artículo 29 del Reglamento de desarrollo.**

### **ARTÍCULO 29. CONVOCATORIA.**

*1. La Asamblea General ordinaria o extraordinaria deberá convocarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*2. El orden del día de la Asamblea General será fijado por el órgano de administración con la claridad y precisión necesarias para proporcionar a las personas socias una información suficiente, debiendo incluir los asuntos que se propongan por el Comité Técnico o por un número de personas socias que represente, al menos, el diez por ciento de las personas socias en las sociedades cooperativas de más de mil, el quince por ciento, en las de más de quinientos, y el veinte por ciento en las restantes, con anterioridad a la convocatoria o después de la misma dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de publicación de la convocatoria o desde su notificación a la última de las personas socias.*

*El órgano de administración deberá incluir estos asuntos en el orden del día, haciendo pública su inclusión cinco días antes, como mínimo de la fecha señalada para la reunión, en la forma que determinen los estatutos sociales. Empero, cuando la petición de inclusión de algún asunto se efectuara con una antelación de, al menos, quince días antes de la convocatoria, dicho asunto tendrá la publicidad que, en cuanto a tiempo y forma, establece el citado artículo 29.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*



*En el orden del día se incluirá, necesariamente, un punto que permita a las personas socias efectuar ruegos y preguntas al órgano de administración, sobre extremos relacionados con aquél.*

*3. La notificación y publicidad de la convocatoria de la Asamblea General se realizarán de conformidad con lo recogido en los estatutos sociales, según lo previsto en el artículo 29.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*La convocatoria de la Asamblea General, que será objeto de notificación y anuncio, expresará, con la debida claridad y concreción, la denominación y domicilio de la sociedad cooperativa, los asuntos incluidos en el orden del día, el lugar, fecha y hora en que haya de celebrarse la reunión, tanto en primera como en segunda convocatoria, mediando entre ambas el plazo que establezcan los estatutos que, al menos, será de media hora. La convocatoria deberá hacer constar la relación completa de información o documentación que está a disposición de las personas socias y el régimen de consulta, de acuerdo con lo establecido estatutariamente.*

*4. Desde el día de publicación de la convocatoria hasta el día de celebración de la Asamblea General, deberá ser puesta a disposición de las personas socias la documentación que represente el soporte de los extremos a tratar con arreglo al orden del día establecido. Durante dicho período, las personas socias podrán examinar la referida documentación y solicitar sobre la misma al órgano de administración, en la forma que se determine estatutariamente, las explicaciones o aclaraciones que estimen convenientes, para que sean contestadas durante la celebración de la Asamblea General. La solicitud deberá presentarse, al menos, con cinco días hábiles de antelación a dicha celebración.*

*Cuando en la Asamblea General se vaya a tratar cualquier asunto relacionado con las cuentas anuales, especialmente el sometimiento de su aprobación a la consideración del citado órgano, deberán ser puestos a disposición de las personas socias los documentos previstos en el artículo 64.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, además del informe del órgano de intervención o de las personas auditoras de cuentas, cuando cualquiera de estos procedan.*

*No obstante lo anterior, y dentro de los plazos previstos, cuando alguna persona socia lo solicite, se le facilitará gratuitamente copia de la mencionada documentación, si bien el órgano de administración, en función de las circunstancias concurrentes, podrá instar a la*



*persona socia interesada a actuar conforme a lo previsto en el artículo 21.4, regulador del derecho de información, cuando se aprecie la concurrencia de un abuso manifiesto en el ejercicio de este derecho por la persona solicitante.*

*5. Los estatutos sociales podrán prever, dentro del régimen de notificación y publicidad de la convocatoria y en sustitución de la notificación personal, la posibilidad de la utilización de cualquier medio técnico, informático o telemático que permitan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, siempre que, además de cumplir los requisitos exigidos en el artículo 29.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, el uso de estos medios garantice el no repudio de la información recibida.*

*Concretamente, la sociedad cooperativa podrá establecer en sus estatutos que la convocatoria de la Asamblea General se realice mediante anuncio publicado en la página web de la entidad.*

*La sociedad garantizará la seguridad de la página web, la autenticidad de los documentos publicados en esa página, así como el acceso gratuito a la misma con posibilidad de descarga e impresión de lo insertado en ella.*

## **Comentario.**

A efectos de convocatoria se distinguen tres tipos de Asambleas Generales, las ya presentadas en los epígrafes anteriores, La Asamblea General Ordinaria y la Asamblea General Extraordinaria y una tercera que es la llamada Asamblea General Universal que se celebrará cuando se encuentren reunidos la totalidad de los socios y socias con voluntad de celebración, aunque no haya mediado convocatoria.

La Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria: La ley prevé un tipo de convocatoria general que tiene carácter de norma principal, y otras tres formas de convocatoria subsidiarias para cuando no sea posible llevar a cabo la norma general de convocatoria.

Norma general de Convocatoria: La Asamblea General ordinaria deberá convocarse por el órgano de administración dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio económico.

Norma subsidiaria primera: Transcurrido el plazo de seis meses de la norma general de convocatoria sin que se haya efectuado, el Comité Técnico podrá convocarla él mismo.

En el caso de que la cooperativa no cuente con un Comité Técnico podrá convocar el Consejo Rector dentro del plazo de estos mismos 15 días.

Norma subsidiaria segunda: Si trascurrido 15 días desde que se agotó el plazo de los seis meses para convocar por el órgano de administración tampoco se ha llevado a cabo por el Comité Técnico, podrá convocarla la Secretaría del Consejo Rector. La ley establece dos motivos por los que el Comité Técnico no haya podido convocar en estos 15 días, o bien por dejación de funciones, o bien porque la cooperativa no cuente con un Comité Técnico.

Norma subsidiaria tercera: Si tampoco el Consejo Rector llevará a cabo la convocatoria en el plazo de otros 15 días, cualquier socio o socia podrá solicitar el auxilio judicial para requerir su convocatoria. El juez competente será el de primera instancia del lugar donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio, en aplicación de las normas procesales que regulan las competencias funcional y territorial de los jueces y tribunales. El Juez a instancia de parte, en este caso el socio, ordenará la convocatoria de la Asamblea.

La Convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria.

La asamblea General Extraordinaria siempre será convocada por el órgano de Administración, no obstante la ley establece dos modalidades para la convocatoria de la Asamblea General extraordinaria dependiendo del sujeto que la promueva: el órgano de Administración, o un porcentaje determinado de personas socias.

La convocatoria de Asamblea Extraordinaria promovida por el órgano de Administración no está sujeta a plazo, puede hacerse en cualquier momento en que se estime conveniente por las personas administradoras según lo exijan las necesidades sociales de la empresa. Tampoco hay un límite del número de asambleas extraordinarias que pueden celebrarse en un ejercicio económico, lo que deja a libre voluntad de las personas socias según las necesidades de la empresa la autonomía para su fijación. No obstante, si se produjera un abuso del número de asambleas extraordinarias por parte de la Administración, en la Asamblea General ordinaria podría censurarse esta gestión y acordar lo que se estime conveniente por parte de las personas socias.

La convocatoria de Asamblea Extraordinaria promovida por los socios y socias. La primera conclusión que se desprende de la literalidad de la ley es que para que los socios y socias puedan promover la convocatoria de una asamblea General Extraordinaria debe

coincidir en esta voluntad un determinado número de personas socias. En concreto deben promoverla un número de socios o socias que represente, al menos, al diez por ciento de las personas socias en las sociedades cooperativas de más de mil, el quince por ciento en las de más de quinientos y el veinte por ciento en las restantes. La Dirección General de los Registros y del notariado en resolución de 13/01/1994, en relación a las sociedades anónimas, estableció que los estatutos societarios podrían rebajar estos porcentajes mínimos en aras de un mayor reforzamiento de los socios minoritarios, pero en ningún caso aumentar estos porcentajes. Entendemos que este mismo principio es extrapolable al caso de las sociedades cooperativas que aquí presentamos.

La solicitud ha de dirigirse al órgano de Administración, pues como ya apuntábamos al principio de este epígrafe, es el único órgano con competencia para convocar la Asamblea General Extraordinaria. Esta solicitud deberá de contemplar el orden del día de los temas a tratar en la Asamblea Extraordinaria e ir firmado por todos los socios y socias que promueven la petición. El órgano de administración deberá convocar la Asamblea Extraordinaria en el plazo de diez días a contar desde que recibe la solicitud. En el caso de que el órgano de Administración no convoque la Asamblea General Extraordinaria en este plazo de diez días que otorga la ley, las personas socias que lo han promovido están legitimados para acudir al auxilio judicial. En este caso el auxilio judicial no es un derecho que puedan ejercer todos los socios y socias de la cooperativa, si no solo aquellos que han promovido la solicitud de la Asamblea Extraordinaria. En esta ocasión igualmente el juzgado competente para conocer esta petición es el juzgado de primera instancia del lugar donde tenga su domicilio la sociedad.

La Convocatoria de la Asamblea General Universal: El artículo 29 apartado 5 de la LSCA establece que se considerará asamblea general universal aquella en la que esté presente todos los socios y socias y acepten por unanimidad su celebración y los asuntos a tratar en ella, aun cuando no haya mediado convocatoria formal de la misma. En este caso la unanimidad de todos los socios y socias en la voluntad de la celebración de la asamblea subsana el defecto de forma que es la no existencia de convocatoria.

El proceso de Convocatoria.

La Asamblea General deberá celebrarse en el lapso que media entre los quince días y los dos meses desde su convocatoria. Se notificará a cada persona socia y se anunciará en

la forma que establezcan los estatutos, debiendo justificar la Secretaría del órgano de Administración la remisión de las comunicaciones dentro del expresado plazo.

Veamos detenidamente tres aspectos importantes en el proceso de Convocatoria de Asamblea independientemente del tipo de asamblea a la que se refiera.

La notificación y anuncio.

- La notificación a las personas socias. Es la regla general para la convocatoria de asambleas y consistirá en el envío de la convocatoria de forma particular a cada persona socia. El domicilio de envío será el que conste en el libro de registro de socios y socias. Este envío deberá quedar acreditado de forma fehaciente tanto en tiempo como en contenido por el Secretario del órgano de administración. La notificación expresará, con la debida claridad y concreción, la denominación y domicilio de la sociedad cooperativa, los asuntos incluidos en el orden del día, el lugar, fecha y hora en que haya de celebrarse la reunión, tanto en primera como en segunda convocatoria, mediando entre ambas el plazo que establezcan los estatutos que, al menos, será de media hora. La convocatoria deberá hacer constar la relación completa de información o documentación que está a disposición de las personas socias y el régimen de consulta, de acuerdo con lo establecido estatutariamente (artículo 29. 3 del RLSCA).

- La notificación a través de anuncio. Los estatutos sociales podrán prever, dentro del régimen de notificación y publicidad de la convocatoria y en sustitución de la notificación personal, la posibilidad de la utilización de cualquier medio técnico, informático o telemático que permitan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, siempre que, además de cumplir los requisitos exigidos en el artículo 29.3 de la LSCA que exponemos a continuación.

a) Requisitos para las cooperativas de más de mil socios y socias: Los únicos requisitos que parece establecer la ley es que esta forma de anuncio esté contemplada en los estatutos societarios, y que se realice a través de los medios de comunicación de máxima difusión en el ámbito de actuación de la sociedad cooperativa. No obstante también le sería de aplicación los requisitos establecidos para la utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación, puesto que estos tendrán que observarse independientemente del número de socios que tenga la cooperativa.

b) Requisitos para todas las cooperativas: La ley establece que podrá sustituirse la regla general de la notificación personal a cada persona socia pudiéndose utilizar cualquier medio técnico, informático o telemático que permitan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, siempre que se observen los protocolos que el uso de dichos medios lleva aparejados, para garantizar que las personas socias tengan conocimiento de la convocatoria. Concretamente, la sociedad cooperativa podrá establecer en sus estatutos que la convocatoria de la Asamblea General se realice mediante anuncio publicado en la página web de la entidad. La sociedad garantizará la seguridad de la página web, la autenticidad de los documentos publicados en esa página, así como el acceso gratuito a la misma con posibilidad de descarga e impresión de lo insertado en ella. (Artículo 29.5 del RLSCA).

El orden del día.

El orden del día de la Asamblea será fijado por el órgano de Administración con la claridad y precisión necesarias para proporcionar a los socios y socias una información suficiente, debiendo incluir los asuntos propuestos por el Comité Técnico o por las personas socias en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Comité Técnico. En el orden del día se incluirá necesariamente un punto que permita a los socios y socias efectuar ruegos y preguntas al órgano de Administración sobre extremos relacionados con aquél.

Socios y Socias. Las personas socias podrán incluir aquellos puntos del orden del día que crean necesario siempre que sea un número que represente, al menos, el diez por ciento de las personas socias en las sociedades cooperativas de más de mil; el quince por ciento, en las de más de quinientos, y el veinte por ciento en las restantes. La ley otorga dos momentos para poder hacer esta propuesta colectiva de orden del día por las personas socias, en concreto podrán realizarlo antes de la convocatoria o después de la misma. Si lo realizan después de la misma, es decir cuando la convocatoria ya ha sido lanzada y notificada, deberán hacer la propuesta dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de publicación de la convocatoria o desde su notificación a la última de las personas socias. El órgano de Administración deberá incluir estos asuntos en el orden del día, haciendo pública su inclusión cinco días antes, como mínimo de la fecha señalada para la reunión, en la forma que determinen los estatutos sociales. Empero, cuando la petición de inclusión de algún asunto se efectuara con una antelación de, al menos,

quince días antes de la convocatoria, dicho asunto tendrá la publicidad que, en cuanto a tiempo y forma, establece el citado artículo 29.3 de la LSCA ya expuesto ( artículo 29.2 del RLSCA).

La Ley establece diferentes supuestos en los que no es necesario que un asunto esté incluido en el orden del día para que pueda debatirse y tomar acuerdos sobre él. Así:

- El ejercicio de la acción de responsabilidad por parte de la sociedad contra los miembros del órgano de administración, del Comité Técnico, de la Intervención, los responsables de la auditoría y las personas liquidadoras.
- Transigir o desistir de la acción de responsabilidad.
- La Prórroga de las Asambleas (Artículo 30.7 del RLSCA).

Los documentos.

Respecto a la puesta a disposición a las personas socias de los documentos que van a ser tratados en asamblea, la nueva normativa es mucho más detallada y garantista que la normativa anterior, en la que tal derecho de los socios y socias quedaba enunciado de una manera implícita.

Desde el día de publicación de la convocatoria hasta el día de celebración de la Asamblea General, deberá ser puesta a disposición de las personas socias la documentación que represente el soporte de los extremos a tratar con arreglo al orden del día establecido. Durante dicho período, las personas socias podrán examinar la referida documentación y solicitar sobre la misma al órgano de Administración, en la forma que se determine estatutariamente, las explicaciones o aclaraciones que estimen convenientes, para que sean contestadas durante la celebración de la Asamblea General. La solicitud deberá presentarse, al menos, con cinco días hábiles de antelación a dicha celebración.

Cuando en la Asamblea General se vaya a tratar cualquier asunto relacionado con las cuentas anuales, especialmente el sometimiento de su aprobación a la consideración del citado órgano, deberán ser puestos a disposición de las personas socias los documentos previstos en el artículo 64.2 de la LSCA, además del informe del órgano de intervención o de las personas auditoras de cuentas, cuando cualquiera de estos procedan.

No obstante lo anterior, y dentro de los plazos previstos, cuando alguna persona socia lo solicite, se le facilitará gratuitamente copia de la mencionada documentación, si bien el órgano de Administración, en función de las circunstancias concurrentes, podrá instar a la persona socia interesada a actuar conforme a lo previsto en el artículo 21.4, regulador del derecho de información, cuando se aprecie la concurrencia de un abuso manifiesto en el ejercicio de este derecho por la persona solicitante (artículo 29.4 del RLSCA).

### **ARTÍCULO 30. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL.**

*1. La Asamblea General quedará válidamente constituida cuando asistan, presentes o representadas, en primera convocatoria, al menos la mitad más una de las personas socias de la cooperativa. En segunda convocatoria, quedará constituida cualquiera que sea el número de asistentes.*

*2. La Asamblea General estará presidida por la persona titular de la Presidencia del órgano de administración o, en su defecto, por aquella que ostente la Vicepresidencia; como Secretario o Secretaria actuará quien desempeñe dicho cargo en el órgano de administración o quien lo sustituya estatutariamente. En defecto de estos cargos, ejercerán la Presidencia y Secretaría de la Asamblea General quienes designe la propia Asamblea. Las funciones de dichos cargos se determinarán reglamentariamente.*

*3. Las votaciones serán secretas cuando tengan por finalidad la exclusión de un socio o socia, la elección o revocación de los miembros de los órganos sociales, el acuerdo para ejercitar la acción de responsabilidad contra los miembros de dichos órganos, así como para transigir o renunciar al ejercicio de esta acción. Se adoptará también mediante votación secreta el acuerdo sobre cualquier punto del orden del día cuando así lo solicite un diez por ciento de las personas socias presentes o representadas o cuando así lo establezca la presente ley.*

*4. Las asambleas generales podrán celebrarse, si los estatutos sociales lo prevén, con plena validez a todos los efectos, mediante cualquier medio técnico, informático o telemático, o cualquier otro que permitan las tecnologías de la información y la comunicación.*



*Reglamentariamente, se establecerán las garantías necesarias para su celebración, en especial las relativas al procedimiento, las condiciones y los requisitos necesarios para las votaciones no presenciales, en las que se garantizará la identidad de la persona socia, la autenticidad del voto y, en los supuestos en que así esté previsto, su confidencialidad.*

*Los estatutos sociales podrán desarrollar todos aquellos aspectos de estas asambleas que no vengan regulados por las disposiciones legales aplicables.*

*5. La presencia en la Asamblea General de personas ajenas a la sociedad cooperativa, la sustitución de quienes hayan de desempeñar la Presidencia o la Secretaría de dicha Asamblea cuando en el orden del día figuren asuntos que les afecten directamente, el procedimiento para establecer su prórroga o prórrogas sucesivas, así como cualquier otro asunto relacionado con su celebración, se ajustarán a lo que reglamentariamente se disponga, sin perjuicio de su concreción estatutaria.*

*6. Corresponde a la Secretaría de la Asamblea General la redacción del acta de su celebración, en la que constarán los extremos que se establezcan reglamentariamente. También será objeto de regulación reglamentaria la forma en que se aprobará y transcribirá al libro social correspondiente, así como la posibilidad de la presencia de un notario en la Asamblea General, en cuyo caso, el acta notarial tendrá la consideración de acta de la Asamblea.*

**Concordancia con el artículo 30 del Reglamento del desarrollo.**

### **ARTÍCULO 30. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.**

*1. La constitución y funcionamiento de la Asamblea General se ajustará a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*2. Cuando en el orden del día figuren asuntos que afecten directamente a quien haya de desempeñar las funciones de la Presidencia o de la Secretaría, éstas se encomendarán a personas elegidas por la propia Asamblea.*

*3. Corresponden a la persona que ostente la Presidencia de la Asamblea General las siguientes funciones:*

*a) Realizar el cómputo de las personas socias presentes o representadas, y proclamar, en su caso, la válida constitución de la Asamblea General.*

*b) Dirigir las deliberaciones.*

*c) Mantener el orden de la sesión pudiendo expulsar de la misma a los asistentes que obstruyan su normal desarrollo o falten al respeto de la Asamblea o de alguno de los asistentes. La expulsión será siempre motivada, y en dichos términos se reflejará en el acta de la Asamblea General.*

*d) Velar por el cumplimiento de las formalidades legales.*

*4. Corresponden al Secretario o Secretaria de la Asamblea comprobar la veracidad y adecuación de las representaciones conferidas en el acto de la Asamblea General conforme a los criterios establecidos en el artículo 32, así como la redacción del acta de la sesión, cuyo contenido, aprobación, firma y transcripción al libro de actas se ajustará a lo dispuesto en el artículo siguiente.*

*La redacción del acta por parte de la Secretaría de la Asamblea no será necesaria cuando esta se elabore por un notario o notaria, con arreglo a lo previsto en el artículo 31.5.*

*5. Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el domicilio social, pero podrán también celebrarse en cualquier otro lugar que determine el órgano de administración, a propuesta de la Presidencia de la entidad, siempre que concurra causa justificada.*

*De preverse estatutariamente, dichas reuniones podrán celebrarse con asistencia simultánea en distintos lugares conectados por medios técnicos, informáticos o telemáticos o cualquier otro que permitan las tecnologías de la información y la comunicación, siempre que se asegure el reconocimiento de las personas concurrentes y la interactividad e intercomunicación en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto. En la convocatoria se hará constar el sistema de conexión y, de resultar aplicable, los lugares en que están disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. La reunión se entenderá celebrada en el lugar donde se halle el mayor número de personas socias reunidas de la Asamblea General y, a igualdad de número, en el lugar en que se encuentre quien presida la reunión. En cualquier caso, la persona que ejerza la Secretaría de la Asamblea dejará constancia en las actas de todos estos extremos y dará fe de la válida constitución y celebración de la Asamblea General, detallando el número de personas socias asistentes; el lugar desde la que cada una asistió a la reunión; y el medio de asistencia a distancia utilizado.*

*Para asistir e intervenir en la Asamblea General a través de cualquiera de los medios indicados en el párrafo anterior, las personas socias deberán disponer, para garantizar su identificación, de acceso individual a través de contraseña y usuario, que habrán de ser facilitados de manera confidencial por la sociedad cooperativa. Asimismo, y con el fin de asegurar también su autenticidad, para el ejercicio del derecho al voto en este tipo de Asambleas, las personas socias deberán disponer de firma electrónica avanzada, basada en un certificado electrónico reconocido, o de firma electrónica incorporada al documento nacional de identidad, debiendo garantizarse la reserva de la identidad de las personas firmantes en el caso de que el voto sea secreto.*

*6. Si lo prevén los estatutos o lo acuerda la Asamblea General, podrán asistir a la Asamblea General, con voz y sin voto, personas que, no siendo socias, hayan sido convocadas por el órgano de administración o por la Presidencia de la Asamblea por considerarlo conveniente para la entidad, salvo que se opongan a su presencia la mayoría de los asistentes o se esté tratando el punto del orden del día relativo a elección y revocación de cargos.*

*7. Si al término de una jornada no finalizase la celebración de la Asamblea, la prórroga o prórrogas sucesivas serán acordadas por la propia Asamblea, regulándose en los estatutos el procedimiento a seguir.*

*8. En la adopción de acuerdos de la Asamblea General, que se realizará conforme a lo previsto en el artículo 33 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, se deberán respetar, asimismo, las siguientes normas:*

*a) La presidencia identificará con claridad y precisión el objeto de la votación.*

*b) El voto sólo podrá emitirse en Asamblea por la persona socia o por su representante.*

*c) Para las votaciones secretas, la sociedad cooperativa facilitará los instrumentos que garanticen tal extremo, que serán puestos a disposición de las personas socias con derecho a voto.*

## **Comentario.**

Para una mejor exposición de los aspectos procesales del funcionamiento de la Asamblea General seguiremos el orden que realiza el artículo 30 de la LSCA.

Constitución de la Asamblea. La Asamblea General quedará válidamente constituida cuando asistan, presentes o representadas, en primera convocatoria, al menos la mitad más una de las personas socias de la cooperativa sin diferenciar el tipo de socio que sean. En segunda convocatoria, quedará constituida cualquiera que sea el número de asistentes. Por tanto en la práctica la ley no establece un número mínimo de asistentes para poder celebrar la asamblea. Se plantea por la doctrina la cuestión de si es posible variar estatutariamente los quorum determinados para la válida constitución de la Asamblea General. Mayoritariamente se entiende que:

El quorum de válida constitución en segunda convocatoria no puede bajarse por razones obvias (vale la constitución, cualquiera que sea el número de asistentes). En cambio se admite que pueda elevarse estatutariamente, siempre que en la práctica no se acerque al quorum exigido para la primera convocatoria.

El quorum de válida constitución en primera convocatoria puede aumentarse, siempre que no se exija la unanimidad o porcentaje semejante a la unanimidad, sin embargo no puede rebajarse, porque para celebrarse por debajo del mínimo legal ya existe la segunda convocatoria.

En este sentido puede verse la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de Enero de 1994 a propósito de las sociedades anónimas, pero cuyos fundamentos son aplicables *mutatis mutandi* a las sociedades cooperativas, por la similitud de este punto.

Presidencia de la Asamblea: La Asamblea General estará presidida por la persona titular de la Presidencia del órgano de Administración o, en su defecto, por aquella que ostente la Vicepresidencia; como Secretario o Secretaria actuará quien desempeñe dicho cargo en el órgano de administración o quien lo sustituya estatutariamente. La presidencia de la Asamblea se puede constituir directamente entre las personas socias presentes en la misma en dos supuestos diferentes: Cuando no existan estos cargos designados, o cuando en el orden del día figuren asuntos que afecten directamente a quien haya de desempeñar las funciones de la Presidencia o de la Secretaría a fin de no generar conflictos de intereses.

Las funciones de la Presidencia durante la asamblea serán las establecidas en el artículo 30.3 del RLSCA, en concreto:

- a) Realizar el cómputo de las personas socias presentes o representadas, y proclamar, en su caso, la válida constitución de la Asamblea General.
- b) Dirigir las deliberaciones.
- c) Mantener el orden de la sesión pudiendo expulsar de la misma a los asistentes que obstruyan su normal desarrollo o falten al respeto de la Asamblea o de alguno de los asistentes. La expulsión será siempre motivada, y en dichos términos se reflejará en el acta de la Asamblea General.
- d) Velar por el cumplimiento de las formalidades legales.

Las funciones de la Secretaría durante la asamblea serán las establecidas en el artículo 30.4 del RLSCA, en concreto:

- a) Comprobar la veracidad y adecuación de las representaciones conferidas en el acto de la Asamblea General conforme a los criterios establecidos en el artículo 32 de la LSCA.
- b) Redactar el acta de la sesión, cuyo contenido, aprobación, firma y transcripción al libro de actas según lo dispuesto en la ley. Existe una excepción por la cual la Secretaría de la asamblea puede verse relegada en su función de redacción del acta y es cuando ésta sea levantada por notario presente en la Asamblea General.

El lugar de celebración: Con carácter general las asambleas se celebrarán en el domicilio social de la sociedad, aunque podrán celebrarse en cualquier otro lugar que determine el órgano de Administración, a propuesta de la presidencia de la entidad siempre que concurra causa justificada. A diferencia de la normativa anterior, la nueva ley establece como lugar principal de celebración el domicilio social en lugar de la localidad donde radique el domicilio social. Es más estricta pues la nueva normativa a la hora de establecer el lugar de reunión; sin embargo, sigue dejando abierta la posibilidad de que se celebre en lugar diferente al domicilio social cuando exista causa justificada y tenga la aprobación del órgano de Administración.

No obstante la novedad más importante que incluye la redacción de este apartado en la nueva ley es la posibilidad de introducir las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la celebración válida de la Asamblea General. Es el reglamento de desarrollo de la ley quien se encarga de establecer este uso de estas nuevas tecnologías.

Así, el artículo 30.5 del reglamento de desarrollo establece la posibilidad de que podrán celebrarse con asistencia simultánea en distintos lugares conectados por medios técnicos, informáticos o telemáticos o cualquier otro que permitan las tecnologías de la información y la comunicación. Para que la Asamblea pueda celebrarse de forma válida el uso de estas tecnologías debe observar los siguientes requisitos:

- Que estén previstas estatutariamente.
- Que se asegure el reconocimiento de las personas concurrentes: las personas socias deberán disponer, para garantizar su identificación, de acceso individual a través de contraseña y usuario, que habrán de ser facilitados de manera confidencial por la sociedad cooperativa. Asimismo, y con el fin de asegurar también su autenticidad, para el ejercicio del derecho al voto en este tipo de asambleas, las personas socias deberán disponer de firma electrónica avanzada, basada en un certificado electrónico reconocido, o de firma electrónica incorporada al documento nacional de identidad, debiendo garantizarse la reserva de la identidad de las personas firmantes en el caso de que el voto sea secreto.
- Que se garantice la interactividad e intercomunicación en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto.
- Que en la convocatoria se haga constar el sistema de conexión y, de resultar aplicable, los lugares en que están disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. La reunión se entenderá celebrada en el lugar donde se halle el mayor número de personas socias reunidas de la Asamblea General y, a igualdad de número, en el lugar en que se encuentre quien presida la reunión.
- Que la persona que ejerza la Secretaría de la Asamblea deje constancia en las actas de todos estos extremos y de fe de la válida constitución y celebración de la Asamblea General, detallando el número de personas socias asistentes; el lugar desde la que cada una asistió a la reunión; y el medio de asistencia a distancia utilizado.

La incorporación del uso de las nuevas tecnologías en la vida societaria supone una de las novedades más destacable de la nueva ley de cooperativas. El legislador andaluz busca salvar obstáculos de carácter físico para el desarrollo de las Asambleas de socios y

socias que se encuentre en distintos lugares sin posibilidad de desplazamiento. El uso de estas nuevas tecnologías para la celebración de asambleas quizás no sea tan necesario en las sociedades cooperativas como en otros modelos societarios, pues una de los rasgos definitorios de las cooperativas es el vínculo con el territorio y la función de cohesión social, vertebración territorial y de arraigo al territorio que representan por los que los obstáculos físicos son menores. No obstante, supone una nueva herramienta para facilitar la visa societaria muy especialmente en el supuesto de sociedades de gran tamaño con una base social dispersa o para las cooperativas de segundo o ulterior grado.

Apuntamos a continuación una serie de consejos prácticos para la dotación de herramientas digitales que posibiliten el buen funcionamiento de una asamblea virtual:

- La plataforma virtual tendrá que ser muy intuitiva, visual y usable para darse de alta, crear y utilizar una sala virtual y para gestionar los documentos que se evaluarán y posteriormente se firmarán y aprobarán.
- El Proceso de firma tendrá que estar respaldado por un certificado digital que garantice la seguridad de la persona, como pudiera ser el emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o por el DNI Digital. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica regula el procedimiento de obtención y uso de estos certificados.
- La aplicación constará de un modo de VOTO VIRTUAL por el que se podrán crear distintos sistemas de votación con las opciones disponibles a debatir, y la contabilización de votos según la opción elegida por el socio en presencia virtual. Si la empresa así lo decidiera, el sistema de votación deberá prever la posibilidad de preservar el anonimato del socio.
- El programa integrará vídeo, voz y texto, para que todos los socios se puedan oír, ver y leer en tiempo real. Existirá la posibilidad de elegir alguno o todos de estos medios.
- La aplicación permitirá el envío de documentos para su lectura o consideración de modo virtual antes o durante la Asamblea.
- La aplicación podrá ser modificable para adaptar los colores, estética y formas de la Empresa que la utilice, con el fin de que los socios se sientan identificados y con confianza en la utilización de la misma.



- Con el fin de poder realizar Asambleas Internacionales, la plataforma podrá tener la capacidad de selección de audio, para la posibilidad de traducción simultánea.

Como en el resto de filosofía de la plataforma, el trabajo del moderador también será muy intuitiva y simple, en cuanto a la tarea de moderar la reunión.

Asistencia de personas no socia a la Asamblea General. La ley abre la posibilidad para que puedan asistir a las Asambleas con voz pero sin voto personas que no sean socias de las cooperativas en tanto en cuanto se cumpla una serie de requisitos (artículo 30.6 del RLSCA):

- Que lo prevean los estatutos o lo haya acordado la Asamblea General.
- Que hayan sido convocadas por el órgano de administración o por la Presidencia de la Asamblea.
- Que exista una causa justificada que sea conveniente para la entidad.
- Que no exista oposición de la mayoría de los asistentes.
- Que no se esté tratando el punto del orden del día relativo a elección y revocación de cargos. En este caso no podrán asistir las personas no socias aunque lo prevean los estatutos o lo haya acordado la Asamblea General.

La prórroga de la Asamblea: Si al término de una jornada no finalizase la celebración de la Asamblea, la prórroga o prórrogas sucesivas serán acordadas por la propia Asamblea, regulándose en los estatutos el procedimiento a seguir. Para acordar la prórroga de la Asamblea no será necesario que venga especificado como un punto del orden del día de la Asamblea. La asamblea celebrada en una o más sesiones, tras sucesivas prórrogas se considerará a todos los efectos como una sola asamblea, lo cual supone:

Que se levantará un solo acta.

Que el quorum necesario para la válida constitución de la asamblea será el que concurrió al comienzo de la misma. El mero hecho de que en posteriores ocasiones aparezcan menos personas socias se computarán como abstención, pero no se procederá a recomputar el número de asistentes a efectos de válida constitución en cada sesión. Ello no obsta para que, al comienzo de cada sesión se controle la identidad de los asistentes pues

podrán ir menos y entonces su ausencia se computarán como abstenciones; en cambio, no podrán concurrir más de los que concurrieron en la primera jornada. .

Las votaciones secretas: La regla general para las votaciones es que estas se harán de manera pública, por ejemplo a mano alzada o a viva voz. No obstante los estatutos podrán establecer otro tipo de votación como regla general. Sin embargo existe una serie de supuesto donde de forma obligatoria la votación deberá ser secreta, estos son:

Cuando tengan por finalidad la exclusión de un socio o socia.

La elección o revocación de los miembros de los órganos sociales.

El acuerdo para ejercitar la acción de responsabilidad contra los miembros de dichos órganos, así como para transigir o renunciar al ejercicio de esta acción.

Se adoptará también mediante votación secreta el acuerdo sobre cualquier punto del orden del día cuando así lo solicite un diez por ciento de las personas socias presentes o representadas o cuando así lo establezca la presente ley.

Esta obligación de votación secreta que exige la ley responde a la voluntad del legislador de salvaguardar la libertad de las personas socias en materias especialmente trascendentes.

La redacción del acta. El acta de la Asamblea General es el documento escrito donde queda constancia de los acuerdos adoptados donde se indican aspectos relevantes del proceso de su adopción, es redactado por persona autorizada para ello, tiene alcance probatorio y conformador de la voluntad social. Aunque se trate de un documento privado (a excepción del acta notarial) y no tenga carácter constitutivo puede entenderse según la doctrina y la Dirección General de Registros y del Notariado (Resolución 16/06/1994) que su valor es superior al de un simple documento privado. Por tanto el acta está investida de una presunción de veracidad que requiere prueba en contrario para su contravención. El acta no es un documento meramente probatorio sino también conformador de la voluntad social, pue solo existe voluntad social cuando se cumplen todos los requisitos formales entre ellos, la plasmación en acta de los acuerdos adoptados. Señalamos a continuación detenidamente los requisitos que conforman la naturaleza del acta de la Asamblea General.

La persona que redacta el acta: Corresponde como regla general a la persona titular de la Secretaría de la Asamblea General la redacción del acta (artículo 31.1 del RLSCA). Como excepción la Secretaría puede ser suplida por la presencia de un notario. El órgano de administración o el Comité Técnico, en su caso, podrá requerir la presencia de un notario o notaria para que levante acta de la Asamblea y deberá hacerlo, cuando le sea solicitado, cinco días antes de la celebración de la misma, por el diez por ciento de las personas socias en las sociedades cooperativas de más de mil, el quince por ciento en las de más de quinientos y el veinte por ciento en las restantes. Los honorarios serán a cargo de la sociedad cooperativa. El acta notarial tendrá la consideración de acta de la Asamblea (artículo 31.5 RLSCA).

El contenido del acta: Obligatoriamente el acta tendrá que contemplar el orden del día y documentación de la convocatoria, el lugar o lugares y la fecha o fechas de las deliberaciones, el número de personas socias y, en su caso, personas inversoras asistentes, presentes o representadas, si se celebra en primera o en segunda convocatoria, un resumen de los debates sobre cada uno de los asuntos discutidos, con especial referencia a aquellas intervenciones sobre las que se haya pedido expresa constancia en acta, el resultado de las votaciones y el texto de los acuerdos adoptados, con nítida y diferenciada identificación (artículo 31.1 del RLSCA). La relación de asistentes a la Asamblea General figurará al comienzo del acta, o bien mediante anexo firmado por la Presidencia y la Secretaría o las personas socias que firmen el acta. De las personas socias asistentes representadas, figurarán en dicho anexo los documentos acreditativos de tal representación (artículo 31.2 del RLSCA).

Aprobación del acta. El acta de la Asamblea General será aprobada como último punto del orden del día o dentro de los quince días siguientes a su celebración, por la Presidencia y la Secretaría y un número impar de personas socias, no inferior a tres, elegidas por la Asamblea de acuerdo con lo previsto en los estatutos. En las sociedades cooperativas de menos de cinco miembros bastará con la firma de una sola, junto a la de la Presidencia y la Secretaría.

Registro del acta. El acta se transcribirá al libro de actas de los órganos sociales dentro de los diez días siguientes a su aprobación y se firmará por la Secretaría y la Presidencia.

## **ARTÍCULO 31. DERECHO DE VOTO.**

*1. En las sociedades cooperativas de primer grado, cada persona socia común tendrá derecho a un voto, sin perjuicio de la opción prevista para las sociedades cooperativas de servicios en el artículo 102.1. En el caso del resto de las personas socias así como de los inversores e inversoras este derecho queda supeditado a los distintos límites que, como integrantes de sus respectivos colectivos, se establecen en la presente ley.*

*2. En las sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado, los estatutos podrán establecer el sistema de voto plural en función del grado de participación de cada persona socia en la actividad cooperativizada, o del número de socios y socias de cada persona jurídica integrada en la estructura asociativa, sin que, en ningún caso, una persona socia pueda disponer de más del cincuenta por ciento de los votos sociales o del setenta y cinco por ciento en el caso de que estén formadas únicamente por dos sociedades cooperativas.*

*3. El conjunto de los votos de las personas socias inactivas y colaboradoras y de las personas inversoras, a las que se refieren los artículos 16, 17 y 25, respectivamente, no podrá superar el cuarenta y nueve por ciento del total de los votos sociales.*

### **Comentario.**

Este artículo sigue manteniendo la misma diferencia de la normativa anterior respecto a la forma de voto entre las cooperativas de primer y segundo grado o ulterior. Si bien en las primeras el principio democrático de un socio un voto se cumple de manera estricta, en las cooperativas de segundo grado o ulterior este principio no tiene fuerza obligatoria asemejándose más la votación a la forma habitual en derecho societario donde el criterio plutocrático se impone al criterio democrático como tendremos ocasión de ver.

Las novedades que introduce el nuevo articulado en comparación con la normativa anterior tiene su fundamentación en la necesidad que se le presenta al legislador de adaptar el modo de votación a las nuevas figuras de asociados y asociadas que se incluye en la nueva norma, así como los novedosos modelos de cooperativas.

Cierra este artículo una norma de limitación para el voto de las personas asociadas que no lo son de pleno derecho de forma semejante a como lo redactaba la normativa anterior, aunque introduciendo la novedad de disminuir este límite de la suma de votos de

las personas asociadas estableciendo un cuarenta y nueve por ciento de los votos totales como mínimo en lugar del cincuenta por ciento que establecía la normativa anterior.

El principio democrático de las cooperativas:

El principio democrático es la esencia de la naturaleza de las cooperativas como sociedades donde el valor del trabajo de cada persona socia está por encima del valor económico que represente su aportación social en el capital de la empresa. La afirmación del principio democrático como principio rector de las sociedades cooperativas está recogido por la alianza Cooperativa Internacional y proclamado en el artículo 4. c) de la ley andaluza al señalar la igualdad de derecho y obligaciones entre socios y socias, esto es, entre personas, no entre fracciones del capital.

El principio general en derecho societario es que la capacidad de decisión de la persona socia, es decir el derecho a voz y voto en los órganos sociales, irá en función del capital invertido en la sociedad, sin embargo en las sociedades cooperativas rige la máxima de un “socio un voto”. Por ejemplo si en una sociedad limitada entre dos personas socias suman el 51 % de las participaciones sociales, indiferentemente de que el resto estén repartidas entre cientos de personas, serán estos dos socios los que adopten los acuerdos en las Juntas Generales. Sin embargo en las sociedades cooperativas, independientemente de la aportación al capital que haya realizado cada persona socia, tendrán el mismo voto y por tanto la misma capacidad de decisión.

El principio democrático “un socio, un voto” es por tanto la regla general en el sistema de votación de los socios y socias en la Asamblea General y es de carácter obligatorio a fin de no desvirtuar la esencia del modelo cooperativo. No obstante esta obligatoriedad del principio democrático tiene excepciones en determinados supuestos tal como expondremos a continuación:

Excepciones a la obligatoriedad del sistema democrático de votación en las sociedades cooperativas:

Las sociedades cooperativas de servicio:

Son sociedades cooperativas de servicios las que integran a personas susceptibles de ser socias conforme al artículo 13.1 de la LSCA, titulares de derechos que lleven aparejado el uso o disfrute de explotaciones industriales, de servicios, y a profesionales que ejerzan su

actividad por cuenta propia y tengan por objeto la prestación de servicios y la realización de operaciones encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las actividades profesionales o de las explotaciones de sus socios y socias. Es decir la cooperativa de servicios es una herramienta colectiva de la que se dotan personas con las mismas necesidades en sus actividades económicas y profesionales con el fin de cubrir estas de una manera común. Una cooperativa de servicios sería por ejemplo aquella que tenga como objetivo moler el grano de distintos agricultores de trigo que en este caso serían las personas socias de la cooperativa.

Pues bien, en el caso de este tipo de cooperativas se flexibiliza el principio de democracia propio de las cooperativas y se otorga la posibilidad de establecer un voto plural ponderado en proporción al volumen de la actividad cooperativizada. Los estatutos de las sociedades cooperativas de servicios podrán regular, conforme a lo establecido en el artículo 102.1 de la LSCA, el establecimiento de un voto plural ponderado de cada persona socia en la Asamblea General, en proporción al volumen de la actividad cooperativizada de la persona socia.

Se entiende por voto ponderado el voto corregido por la proporción que representa el votante respecto a un colectivo. En este caso la proporción es el volumen de actividad cooperativizada y el colectivo es la sociedad cooperativa propiamente. El adjetivo plural significa que podrá ser más de un único voto, que como venimos exponiendo es la regla general en esta materia. Aunque como veremos a lo largo de este apartado esta pluralidad está limitada por la ley.

El propio legislador explica en la exposición de motivos de la LSCA el porqué de esta flexibilización en cuanto al principio democrático en este tipo de cooperativas: La igualdad a ultranza en materia del voto en la asamblea General de socios y socias resulta más coherente con la estructura de las sociedades cooperativas de trabajo que con las de servicio, pues, en las primeras, la aportación social de sus integrantes –el trabajo– suele ser similar o, al menos, no muy dispar, mientras que en las segundas, singularmente en las agrarias, la actividad cooperativizada –la aportación de producto para su transformación o distribución– puede diferir ostensiblemente. Lo cual, además de plantear problemas de desconexión estratégica entre los intereses de las personas socias en función de la envergadura de la aportación que realizan, puede entrañar un desajuste importante de la relación entre interés económico y capacidad de decisión, con menoscabo del propio carácter empresarial de la entidad. Sensible a estas eventuales

dificultades, el legislador andaluz regula el voto plural, si bien velando por que dicha regulación no pierda de vista el carácter esencialmente personalista de estas empresas.

Veamos pues cuales son estas limitaciones al voto plural ponderado que realiza el legislador al fin de guardar un justo equilibrio entre la esencia democrática de la cooperativa y el interés de las personas socias respecto a su aportación.

La ley establece que el voto plural ponderado se regirá por las siguientes reglas:

- a) Cada persona socia dispondrá de, al menos, un voto.
- b) Ninguna persona socia podrá disponer de un número superior a siete votos sociales.
- c) Los estatutos sociales deberán fijar claramente los criterios que garanticen el carácter proporcional y equitativo del reparto del voto entre las personas socias. De no hacerlo, cada voto se asignará en función del cociente resultante de la división entre la mayor aportación realizada a la actividad cooperativizada por cualquiera de los socios o socias y el número máximo de votos del que pueda disponer una persona socia, que se haya fijado estatutariamente. A cada socio o socia le corresponderá un número de votos equivalente a tantas veces como su aportación represente el citado cociente. Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.
- d) En las sociedades cooperativas con un número de personas socias igual o inferior a veinticinco, el diez por ciento, o menos, de estas no podrá disponer de más del veinticinco por ciento de los votos sociales.

El voto plural nunca se establecerá tomando en consideración el capital aportado.

En cualquier caso, lo esencial en esta materia, en términos de garantía para los socios y socias, es su establecimiento voluntario mediante asunción estatutaria, de modo que sea la Asamblea de cada sociedad la que, haciendo uso del voto simple –único válido por defecto–, adopte, en su caso, el acuerdo de distribuirlo de esta otra forma, por entender que, con arreglo a su peculiar estructura societaria, resulta más ajustado o equitativo



En opinión de Luciano Ramírez de Arellano Espadero<sup>2</sup> esta cuestión ha podido ser una de las que más debate generó en la tramitación de la normativa, e impidió la unanimidad de la aprobación de uno de los informes preceptivos del Consejo Económico y Social. Los argumentos más contrarios a la introducción de esta novedad esgrimían el voto plural o la figura del inversor como posibles riesgos para el principio democrático que inspira la naturaleza de la sociedad cooperativa. Sin embargo la mayoría más amplia de representación de cooperativas en Andalucía valoró que esta modificación no rompía el principio cooperativo respecto a la toma de decisiones, pues el criterio determinante para la participación continúa siendo en función de la actividad y no la aportación del capital.

Como mecanismos de precaución para la salvaguarda del principio democrático se destacan dos en la normativa:

1. El voto es ponderado, lo cual significa que de existir una diferencia de 1 a 10.000 entre la aportación de actividad de dos personas socias, (frecuente en cooperativas agrarias de cierta importancia, que a su vez, son las que reclamaban este voto) la traducción en votos sería, como mucho, de 1 a 7, lo cual queda muy lejos de la realidad matemática, y no pretende ser más allá de un ajuste práctico a la hora de regular el voto democrático. El voto debe ser democrático, pero también equilibrado y justo.
2. Por otro lado recordar que este voto ponderado solo es posible si así queda establecido por acuerdo de las personas socias en el estatuto de la sociedad.

Las sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado.

Son sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado las que agrupan, al menos, a dos sociedades cooperativas de grado inmediatamente inferior, para el cumplimiento y desarrollo de fines comunes de orden económico (Artículo 108 de la LSCA). En este tipo de cooperativas la ley también hace una excepción al carácter obligatorio del principio democrático de un socio un voto y permite que el voto sea plural aunque siempre ponderado en función del grado de participación de cada socio o socia en la actividad

---

<sup>2</sup> Luciano Ramírez de Arellano Espadero es Jefe de Servicio de Registro e Inspección de la Dirección General de Economía Social y Autónomos en la Consejería de Conocimiento y Economía de la Junta de Andalucía y redactor de la LASC.

cooperativizada, o del número de socios y socias de cada persona jurídica integrada en la estructura asociativa.

Al igual que en el caso de las cooperativas de servicio, se entiende por voto ponderado el voto corregido por la proporción que representa el votante respecto a un colectivo. El adjetivo plural se refiere a que puede romperse la regla general de un solo voto por socio.

Con el objetivo de salvaguardar la esencia democrática del modelo societario cooperativo a la vez que el interés de los socios y socias que conforman las cooperativas de segundo o ulterior grado la ley establece las siguientes garantías para que pueda darse el voto plural:

1º En caso de que la cooperativa de segundo grado esté compuesta por más de dos sociedades cooperativas en ningún caso, una persona socia pueda disponer de más del cincuenta por ciento de los votos sociales.

2º En caso de que la cooperativa de segundo grado esté compuesta por solo dos cooperativas en ningún caso una persona socia puede disponer de más del setenta y cinco por ciento de los votos sociales.

3º El Estatuto societario es el que debe regular tanto la posibilidad como el modo de funcionamiento del voto plural ponderado en función del grado de participación de cada socio o socia en la actividad cooperativizada, o del número de socios y socias de cada persona jurídica integrada en la estructura asociativa.

Una vez expuestas las excepciones al principio democrático del voto en las sociedades cooperativas la norma cierra en su tercer punto con un límite cuantitativo al voto de aquellas personas asociadas que no tienen estrictamente la condición de socias, como son las personas socias inactivas y colaboradoras y de las personas inversoras.

Socios y socias inactivos es aquel que deje de realizar la actividad cooperativizada o de utilizar sus servicios pero mantiene su vinculación social en concepto de persona socia inactiva porque así lo autorice el órgano de administración para un tiempo determinado (artículo 16 de la LSCA).

Socios y socias colaboradores son aquellas personas susceptibles de ser socias conforme al artículo 13.1 que, sin realizar la actividad cooperativizada principal,

contribuyan a la consecución del objeto social de la cooperativa o participen en alguna o algunas de sus accesorias, siempre que así lo permitan los estatutos societarios (Artículo 17 de la LSCA).

Socios y socias inversores. Aquellas personas susceptibles de ser socias conforme al artículo 13.1 que realicen las aportaciones al capital que determinen los estatutos, o en su defecto la Asamblea General, y que no desarrollen la actividad cooperativizada. (Artículo 25 de la ley de cooperativas).

El límite cuantitativo que establece la ley es que el conjunto de los votos de las personas socias inactivas y colaboradoras y de las personas inversoras no podrá superar el cuarenta y nueve por ciento del total de los votos sociales. La argumentación jurídica para esta limitación la encontramos en la propia esencia definitoria de las cooperativas donde el nivel de participación en la toma de decisiones es proporcional al nivel trabajo corporativizado y no al nivel de aportación económica. Las figuras de la persona socio inactiva, la persona socia colaboradora y la persona socia inversora tienen en común que no aportan un trabajo concreto a la cooperativa, si no únicamente un capital. Por tanto su nivel de participación a través de voto debe ser limitado puesto que carecen del elemento primordial de la persona socia en la cooperativa como es el trabajo. De no ser así y poder sustituir el trabajo por el capital sin conllevar una menor participación en la toma de decisiones nos encontraríamos con una sustitución del principio democrático por el principio plutocrático. En definitiva, a fin de que el elemento principal de aportación de los socios sea el trabajo como criterio para su participación, el voto de la persona socia que únicamente aporta capital debe estar limitado.

Respecto al límite de votos que pueden sumar estas figuras de personas socias no trabajadoras ha disminuido en un punto respecto a la normativa anterior, siendo en la actualidad de un cuarenta y nueve por ciento. El legislador modifica el límite de su capacidad de decisión y se diversifica su remuneración, de manera que su perfil resulte más atractivo y permita su ingreso en la sociedad para contribuir a solventar las necesidades de financiación.

## **ARTÍCULO 32. REPRESENTACIÓN.**

*1. Salvo disposición estatutaria en contra, cada socio o socia podrá hacerse representar en la Asamblea General por otra persona, no pudiendo esta representar a más de dos. La representación de las personas menores de edad e incapacitadas se ajustará a las normas de derecho común.*

*2. La representación es siempre revocable. La asistencia a la Asamblea General de la persona representada equivale a su revocación.*

*3. Cualquier otro aspecto relativo a la representación se regulará reglamentariamente.*

### **Concordancia con el artículo 32 del Reglamento de desarrollo.**

### **ARTÍCULO 32. REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA SOCIA.**

*1. Los estatutos podrán prever que la persona socia sea representada por su cónyuge o por la persona con la que conviva de manera habitual, o por un familiar hasta el grado de parentesco que estatutariamente se determine, con plena capacidad de obrar, sin otro requisito que acreditar dicha condición así como la voluntad del socio o socia de ser representada por cualquiera de esas personas.*

*2. Las personas jurídicas, las sociedades civiles y las comunidades de bienes y derechos que tengan la condición de socias serán representadas por quienes ostenten legalmente su representación o por las personas que voluntariamente designen. No será lícita la representación conferida a una persona jurídica, sociedad civil o comunidad de bienes y derechos ni la otorgada a quien la represente. La representación a que se refiere el presente apartado se ajustará a las normas generales o especiales que les sean aplicables.*

*3. La representación, siempre que no tenga el carácter de legal o se refiera a los supuestos mencionados en el apartado 1, deberá concederse de manera expresa e individualizada para cada Asamblea por el medio que determinen los estatutos sociales que permita verificar la autenticidad y suficiencia de la representación conferida, pudiendo recoger instrucciones para el representante sobre cada asunto del orden del día.*

*El medio probatorio de la representación, que se anexionará al acta de la Asamblea, habrá de especificar:*

*a) Nombre y apellidos de la persona socia representada o poderdante.*

*b) Nombre y apellidos de la persona a quien se encomienda la representación o persona apoderada.*

*c) Identificación de la Asamblea General de que se trate.*

*4. La representación otorgada a una persona ajena a la sociedad cooperativa deberá realizarse mediante poder notarial, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1.*

*5. La Secretaría de la Asamblea General deberá bastantear la representación conferida conforme a lo dispuesto en el artículo 30.4, debiendo someter a la consideración de la Presidencia, en caso de duda, la adecuación de la misma a la legalidad vigente. En última instancia, la Presidencia de la Asamblea podrá rechazar, motivadamente, la representación otorgada.*

### **Comentario.**

La ley sigue manteniendo respecto a la normativa anterior la posibilidad de que la persona socia pueda conferir a otra su representación en la Asamblea General, sin embargo la nueva normativa introduce varias mejoras técnicas que persiguen dotar de seguridad a este acto. Solo una variante de fondo a destacar, la representación, que con la anterior ley solo podía ser de socio a socio, ahora se flexibiliza, permitiendo que recaiga en un tercero, si bien manteniendo el límite de hasta dos representaciones.

Así, como regla general la representación que la persona socia confiere a otra para asistir a la Asamblea y tener voz y voto es posible siempre que cumpla algunos requisitos esenciales:

- Que no exista una disposición estatutaria en contra.
- Que la persona que represente no ostente más de dos representaciones.

**Tipos de representación:**

**Representación familiar.**

La persona socia puede ser representada en la Asamblea General por su cónyuge o por la persona con la que conviva de manera habitual, o por un familiar hasta el grado de

parentesco que estatutariamente se determine, con plena capacidad de obrar. Para que esta representación sea válida debe cumplir tres requisitos básicos:

- a) Que la representación familiar esté expresamente permitida por el estatuto societario.
- b) Que se acredite la relación familiar que vincula al representante con la persona socia.
- c) Que se acredite la voluntad real de la persona socia de ser representada en la Asamblea por dicho familiar.

Habiendo incluido el legislador en la nueva ley la posibilidad de que la persona socia pueda conferir poder de representación a cualquier persona sin necesidad de que esta sea socia de la cooperativa, realmente la representación familiar deja de ser tan excepcional, y lo único que la diferencia de otro tipo de representación es que la representada no está obligada a conferir la representación a través de poder notarial, si no únicamente observando los requisitos expuestos anteriormente.

#### Representación legal.

Esta representación tiene carácter general. Es aquella que otorga una norma con fuerza de ley a una persona sobre los actos de otra para todos los casos en general. Por tanto esta representación no es voluntaria, es decir no es el socio quien confiere la representación ni tiene carácter puntual para una única asamblea. Señala la ley el caso de los menores y de los incapacitados regulado en el Título X del Código Civil con el título “De la tutela, de la curatela y de la guarda de los menores o incapacitados”.

#### Representación de personas jurídicas.

Personas jurídicas como representadas: Las personas jurídicas, las sociedades civiles y las comunidades de bienes y derechos que tengan la condición de socias pueden ser representadas en Asambleas o bien por quienes ostenten legalmente su representación o bien por las personas que voluntariamente designen. Así puede hablarse de una representación legal o una representación voluntaria. Esta representación estará sujeta a los mismos requisitos generales que establece este artículo, en concreto: el representante debe ser una persona física, no puede tener conferida la representación de otra persona física, ni puede ostentar más de dos representaciones. Aunque la ley no lo dice expresamente se infiere que cuando el representante es voluntario este tendrá que ser

una persona socia de la cooperativa y en caso de no serlo tendrá que constar la representación en poder notarial.

Personas jurídicas como representantes. La ley establece que no será lícita la representación conferida a una persona jurídica, sociedad civil o comunidad de bienes y derechos ni la otorgada a quien la represente. Es decir que ninguna persona física ni ninguna persona jurídica podrán conferir la representación en Asamblea al representante legal de una persona física. Pretende el legislador con esta prohibición limitar la capacidad de influencia de las personas físicas en la toma de acuerdos de las Asambleas Generales. Surge la duda de si esta prohibición afecte únicamente a los representantes legales de las personas físicas o también a los apoderados voluntarios que éstas nombren entre las personas socias de la cooperativas para que les represente en la asamblea. Resuelve SEDA HERMOSÍN, que sí será lícita la representación conferida a un apoderado voluntario de una persona jurídica puesto que como la ley limita el número de representaciones a dos no hay peligro para que por parte de la persona física, por sí o por medio de sus representantes, acaparen votos y oriente el sentido de la Asamblea.

Terceros como representantes.

Una de las novedades de la ley actual en esta materia es la posibilidad de que una tercera persona tenga la representación de la persona socia en Asamblea. Para que esta representación sea lícita, esta tercera persona tendrá que cumplir tanto los requisitos generales para la representación (que no exista disposición estatutaria en contra y que no se ostente más de dos representaciones) y un requisito especial consistente en que la representación esté conferida a través de poder notarial. Se acerca más el legislador en esta materia a la regulación del derecho societario general en comparación con la normativa anterior; no obstante, para no desvirtuar el principio democrático que rige el funcionamiento de las Asambleas Generales de la cooperativa, mantiene el límite de las dos representaciones.

Forma de la representación.

La representación deberá concederse de manera expresa e individualizada para cada Asamblea, por el medio que determinen los estatutos sociales, que permita verificar la autenticidad y suficiencia de la representación conferida. Esta regla tendrá como excepción la representación que tenga carácter legal o familiar. El reglamento de



cooperativas entra a detallar los extremos que debe contemplar el documento donde se otorga el poder de representación para poder comprobar la autenticidad y suficiencia de la misma:

- a) Nombre y apellidos de la persona socia representada o poderdante.
- b) Nombre y apellidos de la persona a quien se encomienda la representación o persona apoderada.
- c) Identificación de la Asamblea General de que se trate.
- d) Con carácter potestativo podrá recoger instrucciones para el representante sobre cada asunto del orden del día.

La Secretaría de la Asamblea General deberá bastantear la representación conferida conforme a lo dispuesto en el artículo 30.4 del RLSCA debiendo someter a la consideración de la Presidencia, en caso de duda, la adecuación de la misma a la legalidad vigente. En última instancia, la Presidencia de la Asamblea podrá rechazar, motivadamente, la representación otorgada.

Revocación de la representación.

La revocación de la regulación del poder es una de las novedades que introduce la nueva normativa. Establece como regla general que la representación es siempre revocable. Aunque no lo dice expresamente, ha de entenderse que se refiere únicamente a las representaciones de carácter voluntario y no aquellas representaciones legales que tiene carácter general. Reproduciendo la normativa societaria general la nueva ley de cooperativas recoge el principio según el cual la presencia del representante en la Asamblea General implica la tácita revocación del poder conferido atendiendo al carácter personalista de la sociedad, el deber de asistencia de la persona socia a la Asamblea y la regulación del derecho de representación como excepción a la forma natural de ejercicio del derecho de asistencia y voto.

## **ARTÍCULO 33. ADOPCIÓN DE ACUERDOS.**

*1. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de los votos válidamente emitidos, salvo que legal o estatutariamente se establezca una mayoría cualificada.*

*2. Será necesaria, en primera convocatoria, la emisión de votos favorables en número no inferior a los tres quintos de las personas asistentes, presentes o representadas, y, en segunda convocatoria, en número no inferior a los dos tercios, para acordar:*

*a) La ampliación del capital mediante nuevas aportaciones obligatorias.*

*b) La emisión de obligaciones, títulos participativos, cédulas, bonos hipotecarios o cualquier otra fórmula de financiación ajena admitida por la legislación mercantil.*

*c) La modificación de los estatutos sociales.*

*d) La transmisión o cesión del conjunto de la empresa o patrimonio de la sociedad cooperativa, integrado por el activo y el pasivo, de todo el activo o de elementos del inmovilizado que constituyan más del veinte por ciento del mismo.*

*e) La fusión, escisión, transformación, disolución o reactivación de la sociedad cooperativa.*

*f) Aquellos otros asuntos previstos expresamente en esta ley o en los estatutos.*

### **Comentario.**

La redacción del presente artículo no ha conllevado modificación alguna respecto a la legislación anterior respetándose el proceso de adopción de acuerdos ya asentados en la antigua ley. Sin embargo en esta materia el reglamento hace algunas precisiones de carácter procesal que completa la legislación anterior como tendremos ocasión de ver.

El artículo establece dos sistemas de votación y toma de acuerdos diferentes según un criterio material, es decir según la materia que se está sometiendo a votación. Existe por tanto una mayoría simple para la toma general de acuerdos y una mayoría cualificada para el acuerdo referente a determinadas materias establecidas expresamente en la ley o bien acordadas en el estatuto societario.

## La Regla General sobre Mayorías.

La regla general establece que los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos válidamente emitidos, salvo que legal o estatutariamente se establezca una mayoría cualificada. Existen por tanto tres parámetros en este anunciado que ha de analizarse por separado para entender el sentido de esta regla general para la toma de acuerdos:

**Mayoría simple:** se entiende por mayoría simple el sistema de votación mediante el cual se requiere, para aprobar una decisión, más votos a favor de los que en contra. Es decir, se elige la opción que obtenga más votos que las demás.

La votación puede ser de distintos tipos:

**Dual.** Las únicas posibilidades es votar a favor, en contra o abstenerse. En este caso con mayoría ordinaria vencería la opción "a favor" o "en contra" que obtenga la mitad de los votos más uno.

**Múltiple.** En este caso, la decisión hay que hacerla entre más de dos opciones. Vencería la opción que más votos obtenga.

**Votos válidamente emitidos.** La doctrina general entiende que los votos válidamente emitidos excluyen las abstenciones, el voto nulo y el voto en blanco. Se entiende por abstención el acto por el cual una persona socia con posibilidad de votar no lo hace por decisión propia. Se entiende por voto nulo aquel que adolece de algún vicio formal que lo invalida a la hora del recuento. En materia societaria se entenderá como voto nulo aquel que emita la persona socia que está privada de este derecho, por ejemplo cuando concurra conflictos de interés. Por último, se entiende por voto en blanco aquel que se emite pero sin optar a ninguna de las opciones que concurren a votación, por tanto ha de asimilarse a la abstención y no contabilizar a la hora de adoptar el acuerdo.

**Salvo que se establezca una mayoría cualificada:** La ley de cooperativas establece una mayoría cualificada en el segundo apartado del presente artículo, así mismo podría ocurrir que alguna norma con rango legal exigiera una mayoría cualificada para la adopción de acuerdos que versarán sobre una materia determinada. Los estatutos sociales pueden contemplar como regla general una mayoría diferente, o cambiar algún otro parámetro de esta regla general, contemplando por ejemplo que las abstenciones contaran como voto válido. No obstante tal posibilidad de los estatutos societarios tiene una limitación que

sería no sobrepasar la mayoría cualificada exigida para la adopción de acuerdos que versen sobre determinadas materias.

### Las Mayorías Reforzadas.

Como venimos anunciando la ley establece unos porcentajes mayores de votos para adoptar acuerdos en determinadas materias de especial trascendencia. Es a este sistema de votación que exige mayores porcentajes de votos a favor para adoptar un acuerdo al que se le llama mayoría reforzada. En concreto la ley establece dos tipos de mayorías reforzadas según el momento en que se adopte el acuerdo, bien sea en primera o en segunda convocatoria.

Para los acuerdos adoptados en primera convocatoria se exige que la emisión de votos favorables sea al menos de tres quintos de las personas asistentes (60%).

Para los acuerdos adoptados en segunda convocatoria se exige que la emisión de votos favorables sea al menos de dos tercios (66%).

Existen dos cuestiones a resaltar de esa diferencia del voto simple. En primer lugar, no se hace sobre los votos válidamente emitidos si no sobre el número de personas asistentes, lo cual supone una garantía dirigida a buscar el mayor nivel de consenso posible en la adopción del acuerdo. En segundo lugar, llama la atención que la mayoría requerida en segunda convocatoria es mayor que la requerida en primera convocatoria cuando lo habitual es rebajar las exigencias en segunda convocatoria; el motivo es porque a la segunda convocatoria suelen acudir menos personas socias respecto a la primera puesto que la ley no requiere un mínimo, por lo que el legislador intenta reforzar la toma de acuerdos evitando que se adopten decisiones trascendentes con una representación de personas socias menor a dos tercios del total.

Los acuerdos para los que la ley establece la concurrencia de esta mayoría cualificada son los que versan sobre las siguientes materias exclusivas y excluyentes de la Asamblea General:

- a) La ampliación del capital mediante nuevas aportaciones obligatorias.
- b) La emisión de obligaciones, títulos participativos, cédulas, bonos hipotecarios o cualquier otra fórmula de financiación ajena admitida por la legislación mercantil.

c) La modificación de los estatutos sociales.

d) La transmisión o cesión del conjunto de la empresa o patrimonio de la sociedad cooperativa, integrado por el activo y el pasivo, de todo el activo o de elementos del inmovilizado que constituyan más del veinte por ciento del mismo.

e) La fusión, escisión, transformación, disolución o reactivación de la sociedad cooperativa.

f) Aquellos otros asuntos previstos expresamente en esta ley o en los estatutos.

Por último señalar que aunque la ley no especifica nada concretamente, se entiende que estatutariamente podrán reforzarse estas mayorías, así como incluir otras materias que requieran mayorías cualificadas, sin embargo no podrán disminuirse ni aumentarse hasta alcanzar cuotas semejantes a la unanimidad.

Reglas Comunes para el funcionamiento de la Asamblea General.

Para cerrar este epígrafe, apuntar las reglas generales que el artículo 30.8 del RLSCA para el funcionamiento correcto de la Asamblea General:

a) La presidencia identificará con claridad y precisión el objeto de la votación. Esta identificación se realizará antes de proceder a la votación, identificando de forma precisa las opciones que concurren a la votación.

b) El voto sólo podrá emitirse en Asamblea por la persona socia o por su representante.

c) Para las votaciones secretas, la sociedad cooperativa facilitará los instrumentos que garanticen tal extremo, que serán puestos a disposición de las personas socias con derecho a voto. Entendemos que estos recursos serán tanto para las votaciones donde se utilicen las nuevas tecnologías de comunicación como aquellas que se realicen de manera presencial. Para aquellos que se realicen a través de herramientas digitales la sociedad, a través del órgano de administración deberá garantizar la identificación de las personas socias y el acceso a la plataforma digital que se habilite para ello a través de contraseña y usuario, que deberán ser facilitados de manera confidencial por la sociedad cooperativa. Para el caso de votaciones presenciales entendemos que se utilizarán las herramientas tradicionales de votación secreta como son urnas selladas y sobres cerrados para depositar el voto.

## **ARTÍCULO 34. ASAMBLEA GENERAL DE PERSONAS DELEGADAS.**

*Cuando una sociedad cooperativa cuente con más de quinientas personas con derecho a voto o concurran circunstancias que dificulten de forma permanente su presencia en la Asamblea General, los estatutos podrán establecer que las competencias de la misma se ejerzan mediante una Asamblea de segundo grado, integrada por las personas delegadas designadas en asambleas previas, que se denominarán «juntas preparatorias», cuya regulación, así como su relación con la de segundo grado, se establecerá reglamentariamente.*

*En todo caso, las votaciones de las personas delegadas en la Asamblea de segundo grado serán públicas.*

**Concordancia con el artículo 33 del Reglamento de desarrollo.**

## **ARTÍCULO 33. ASAMBLEA GENERAL DE PERSONAS DELEGADAS.**

*1. La Asamblea General de personas delegadas se ajustará a lo previsto en el artículo 34 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, en el presente Reglamento y en los estatutos.*

*Los estatutos establecerán los criterios de adscripción de las personas socias a las Juntas Preparatorias y el órgano de administración mantendrá actualizados los censos de las personas socias adscritas a cada Junta.*

*2. La convocatoria de la Asamblea General de personas delegadas incluirá la de las Juntas Preparatorias, y éstas habrán de celebrarse no antes de los diez días siguientes a la publicación de la misma ni en los dos días anteriores a su celebración.*

*Si el órgano de administración hubiera preparado memorias o cualquier otra clase de informes o documentos para su examen por la Asamblea General de personas delegadas, se facilitará también una copia a cada Junta Preparatoria al tiempo de efectuar la convocatoria.*

*3. La Junta Preparatoria, que se constituirá conforme a las normas establecidas por los estatutos o, en su defecto, por la Asamblea General de personas delegadas, se iniciará con la elección, de entre las personas socias presentes, de los miembros de la Mesa de la Junta, que estará integrada por una Presidencia y una Secretaría.*

*Debatidos los asuntos que componen el orden del día, las personas socias adscritas a la Junta, que no podrán reservarse el derecho de asistir personalmente a la Asamblea General de personas delegadas, procederán, en votación secreta, a la elección de los delegados y delegadas entre los presentes. En esta elección, aunque sean personas socias adscritas a la Junta, no intervendrán como elegibles las personas socias que sean miembros del órgano de administración ni, de existir, del Comité Técnico o de la Intervención, por cuanto tendrán el derecho y la obligación de asistir a la Asamblea General de personas delegadas.*

*Para ser proclamada persona delegada será necesario obtener el número de delegaciones de voto que establezcan los estatutos. Las personas socias que no alcancen dicho mínimo podrán cederse entre sí, en el mismo acto de la Junta Preparatoria, los votos obtenidos, siempre que fuesen suficientes para conseguir nuevas proclamaciones.*

*Tanto la elección de delegado o delegada como los votos conferidos serán válidos únicamente para cada Asamblea General de personas delegadas. No obstante, si lo prevén los estatutos de la sociedad cooperativa, la elección como persona delegada y los votos conferidos serán válidos para todas las que se celebren en un período de hasta cuatro años.*

*4. El acta, que se aprobará por la propia Junta Preparatoria al final de la celebración de la misma, recogerá el nombre de las personas delegadas y el número de delegaciones de voto conferidas a cada una. Una certificación del acta, firmada por el titular de la Presidencia y la Secretaría de la Junta, las acreditará ante la Asamblea General de personas delegadas.*

*5. El voto de los delegados y delegadas en la Asamblea de segundo grado será público, siendo los estatutos sociales los que determinen el carácter imperativo o no, del mandato conferido. Las personas delegadas, que ostentarán tantos votos como les hubieran sido conferidos, estarán obligadas a actuar con buena fe y la diligencia de una persona mandataria.*

*La existencia de Asambleas Generales mediante delegados y delegadas no limitará el derecho de información de la persona socia, si bien en los supuestos en que debería*



*solicitarla o recibirla en el acto de celebración de la Asamblea General lo hará a través de la persona delegada a quien se le encomiende.*

*6. En lo no previsto en este artículo y en los estatutos sobre convocatoria y funcionamiento de las Juntas Preparatorias, se observarán, en cuanto sean aplicables, las normas establecidas sobre las Asambleas Generales.*

*Los estatutos podrán prever y regular la existencia y designación de suplentes de los delegados y delegadas titulares, para el supuesto de ausencia justificada de éstos.*

*7. Las Juntas Preparatorias no son directamente impugnables por la personas socias, sin perjuicio de la impugnación que pueda hacerse de la Asamblea General de Delegados por motivos relacionados con las citadas Juntas Preparatorias.*

### **Comentario.**

Como regla general la Asamblea General estará constituida por los socios y socias tal como señala en los artículo 19.c) y 27 de la ley, sin embargo la normativa otorga la opción de que la Asamblea pueda conformarse por personas delegadas que representen a un grupo de personas socias, son las llamadas Asamblea General de Personas Delegadas. Se entenderá por persona delegada aquella que recibe el poder para hablar y votar en nombre de las personas socias.

La regulación es muy similar a la de la ley anterior, pero se abordan dos asuntos que durante la vigencia de esta última provocaron numerosas dudas y hasta conflictos sociales, ambas relacionas con el carácter del mandato de los socios elegidos en estas asambleas; a saber, el carácter público/secreto y la imperatividad o no del mandato. En relación al primero, se opta por su carácter público, de manera que los delegados se retraten ante sus respectivos electores, y en cuanto a la imperatividad se deja a la regulación estatutaria de cada cooperativa, en función de la armonización de factores tales como sujeción y flexibilidad.

Esta posibilidad de excepcionar la regla general establecida en el artículo 27 de la LSCA en cuanto a quienes constituirán la asamblea General, solo podrá llevarse a cabo cuando esté prevista en los estatutos sociales y además se de alguna de estas dos situaciones concretas:

Cuando la sociedad cooperativa cuente con más de quinientas personas con derecho a voto.

Cuando concurren circunstancias que dificulten de forma permanente la presencia de las personas socias en la Asamblea General. Entendemos que estas circunstancias sucederán cuando existan impedimentos de carácter físico por la que no puedan participar la totalidad de las personas socias en la Asambleas, por ejemplo estar la base social repartida en un territorio muy amplio.

Así la posibilidad de convocar Asamblea de Personas Delegadas está sujeta a que exista una justificación previa, y en ningún momento quedará a la voluntad de la sociedad sustituir la Asamblea General por Asamblea de personas delegadas.

Funcionamiento de la Asamblea de personas delegadas.

Para salvaguardar el principio de democracia participativa que inspira el funcionamiento de las cooperativas donde cada persona socia podrá tener un voto en la asamblea, la ley establece un modus operandi muy específico para el funcionamiento de estas Asambleas.

Esta forma de funcionamiento contará en una doble fase de asamblea, es decir cada Asamblea de personas delegadas irá precedida de una Asamblea preparatoria donde se escogerá a estas delegadas.

Convocatoria: La convocatoria de la Asamblea General cuando se realiza a través de personas delegadas deberá cumplir los mismos requisitos que para las Asambleas Generales establecidos en el artículo 29 de la LSCA de cooperativas y los estatutos sociales. No obstante ha de añadirse dos requisitos especiales basados en la excepcionalidad de este tipo de Asambleas:

La convocatoria de la Asamblea debe incluir la convocatoria de las Juntas Preparatorias. Estas Asambleas preparatorias deben celebrarse pasado al menos 10 días desde la convocatoria pero teniendo en cuenta que nunca podrán celebrarse en los dos días previos a la Asamblea General de personas delegadas.

Si el órgano de Administración hubiera preparado memorias o cualquier otra clase de informes o documentos para su examen por la Asamblea General, se facilitará también una copia a cada Junta Preparatoria al tiempo de efectuar la convocatoria. Esta norma

tiene su fundamento en el hecho de que las personas socias deben delegar su voz y voto, por lo que han de conocer previamente el contenido de los asuntos sobre los que se va a adoptar acuerdo. La voluntad del legislador es crear una figura que facilite el desarrollo práctico de las Asambleas Generales en determinadas circunstancias, pero no restar garantías al derecho de participación de las personas socias en las Asambleas según establece el artículo 19.c de la LSCA. En aras de salvaguardar el derecho a la información de los socios y socias, la normativa establece de forma expresa que la Asamblea de personas delegadas no limitará el derecho de información de la persona socia. Cuando las personas socias deban solicitar o recibir algún tipo de información en el acto de celebración de la Asamblea General lo harán a través de la persona delegada a quien se le encomiende.

#### Junta Preparatoria:

Los asistentes: A las asambleas preparatorias acudirán los socios y socias que estén adscritos a la misma. Ni la ley ni el reglamento de desarrollo establece el criterio que debe seguirse para adjudicar a cada persona socia una asamblea preparatoria concreta, será los estatutos lo que deberán incluirlo y será el órgano de administración el que se encargue de mantener actualizado estos censos.

El funcionamiento. Las Juntas Preparatorias seguirán las mismas reglas de funcionamiento que las Asambleas Generales establecidas en el artículo 30 de la ley, con las especialidades que puedan añadir los estatutos. Es decir, una Junta preparatoria es a efecto de funcionamiento una asamblea General, la única especialidad ocurrirá al final de la misma. Al final de la Asamblea Preparatoria, en lugar de adoptarse acuerdos, se escogerán a las personas delegadas. Las delegadas serán las responsables de acudir en representación de las personas socias adscritas a la asamblea preparatoria la Asamblea General donde se adoptaran los acuerdos definitivos. Veamos estos aspectos de funcionamiento detenidamente:

Inicio: Comienza con la elección, de entre las personas socias presentes, de los miembros de la Mesa de la Junta, que estará integrada por una Presidencia y una Secretaría. Y a continuación se llevará a cabo el debate de los asuntos. Surge aquí el debate doctrinal de si estas deliberaciones deben concluir en la adopción de acuerdos o no. Si nos basamos en la literalidad de la normativa esta dice que los asuntos se debatirán y únicamente se tomarán acuerdo, es decir se someterá a votación, la elección de las personas delegadas.

Sin embargo una interpretación estricta de la normativa podría restar garantías al ejercicio del derecho de participación de cada persona socia. Entendemos que los asuntos deben ser debatidos y cada persona socia debe exponer su postura al respecto para posibilitar que en el momento de la votación de la persona delegada cada socio o socia pueda escoger a aquella que represente una postura más a fin a la propia. Así las personas más votadas también representarán las opiniones más respaldadas.

Elección de personas delegadas. Todas las personas delegadas deben ser acordadas mediante votación en las Juntas Preparatorias no pudiendo reservarse el derecho de asistir personalmente a la Asamblea General ningún socio o socia. No podrán concurrir a ser elegidas como delegada las personas socias que sean miembros del órgano de Administración ni, de existir, del Comité Técnico o de la Intervención, por cuanto tendrán el derecho y la obligación de asistir a la Asamblea General. Para ser proclamada persona delegada será necesario obtener el número de delegaciones de voto que establezcan los estatutos. Las personas socias que no alcancen dicho mínimo podrán cederse entre sí, en el mismo acto de la Junta Preparatoria, los votos obtenidos, siempre que fuesen suficientes para conseguir nuevas proclamaciones. Como regla general la elección de persona delegada será únicamente válida para la Asamblea General para la que se haya convocado Junta Preparatoria. No obstante, en aras de la autonomía que inspira la normativa de cooperativas, el estatuto societario podrá establecer que esta delegación pueda utilizarse para todas las Asambleas Generales. No obstante esta autonomía societaria tiene un límite temporal que se establece en cuatro años. Es decir el mandato para las Asambleas Generales de personas delegadas podrá servir para todas las Asambleas que se celebre en los cuatro años siguientes a la elección.

El acta cumplirá las reglas generales establecidas en el artículo 30.6 de la LSCA y 31 del RLSCA. No obstante, como hemos anunciado anteriormente, este acta no recogerá acuerdos más allá de la elección de la designación de las personas delegadas. El acta recogerá el nombre de las personas delegadas y el número de delegaciones de voto conferidas a cada una. Una certificación del acta, firmada por el titular de la Presidencia y la Secretaría de la Junta, acreditará a las personas delegadas ante la Asamblea General.

Impugnación de acuerdos. Las Juntas Preparatorias no son directamente impugnables por la personas socias pues no son un acto completo si no que solo es la primera instancia de la Asamblea General. Si alguna persona socia detecta alguna irregularidad en la Junta Preparatoria deberá impugnar los acuerdos finales que se adopten en la

Asamblea General por haberse producido una nulidad en el procedimiento del que la Junta preparatoria forma parte.

#### Las Asambleas Generales de Personas Delegadas:

El funcionamiento de las Asambleas de personas delegadas se regirá por la normativa de funcionamiento de las Asambleas Generales de socios y socias. Únicamente establece la ley una especialidad y es que el voto de los delegados y delegadas en la Asamblea de segundo grado será público. Este carácter imperativo del voto público tiene su fundamento en el hecho de que las personas socias que han otorgado el mandato a la delegada tienen el derecho a poder conocer si el mandato se llevó a cabo convenientemente. Como veremos el hecho de que la persona delegada se aparte del mandato, no invalida la toma del acuerdo, pero sus mandatarios podrán pedir rendición de cuentas para lo cual es necesario que conozcan el sentido de su voto previamente; de ahí la necesidad de que este tenga que ser irremediabilmente público.

El resto de especialidades de este tipo de Asamblea no está regulado en la normativa, sino que debe ser regulado por los estatutos societarios que contemplen esta figura. Así, para que una cooperativa pueda celebrar Asamblea de Personas Delegadas estos deberán:

Establecer el número de votos necesarios para poder ser proclamada persona delegada.

Determinar el carácter imperativo o no, del mandato conferido. Es decir si deberán ajustarse al mandato que la asamblea preparatoria le haya encomendado en cuanto al sentido de la votación de un determinado asunto o no. Si la LSCA hubiera establecido el carácter imperativo del mandato, hubiera desprovisto a la figura de la persona delegada de gran parte de su cometido reduciéndola a una mera portavocía. Ha de tenerse en cuenta que durante el desarrollo de la Asamblea General se va a llevar a cabo deliberaciones y se van a exponer diferentes puntos de vista que pueden hacer virar el parecer de la persona delegada que puede concluir que la opción más acertada no tiene por qué ser el sentido del voto que le encomendaron en la asamblea preparatoria. Dar esta posibilidad de no acogerse al mandato posibilita un debate real en el seno de la Asamblea General y no una mera suma de votos delegados. No obstante, la ley hace unas precisiones en esta materia y advierte que las personas delegadas estarán obligadas a actuar con buena fe y la diligencia de una persona mandataria. Es decir

podrán cambiar el sentido del voto pero anteponiendo en esta decisión el interés de sus mandatarios y no las de ella misma.

Los estatutos podrán prever y regular la existencia y designación de suplentes de los delegados y delegadas titulares, para el supuesto de ausencia justificada de éstos.

### **ARTÍCULO 35. IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS.**

*1. Podrán ser impugnados, según las normas y dentro de los plazos establecidos en este artículo, los acuerdos de la Asamblea General que sean contrarios al ordenamiento jurídico, que se opongan a los estatutos o que lesionen, en beneficio de uno o varios socios o socias, o de terceros, los intereses de la sociedad cooperativa.*

*No procederá la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro.*

*2. Serán nulos los acuerdos contrarios al ordenamiento jurídico. Los demás acuerdos a que se refiere el apartado anterior serán anulables.*

*3. Están legitimados para el ejercicio de las acciones de impugnación de los acuerdos anulables los asistentes a la Asamblea General que hubiesen hecho constar en acta su oposición a la celebración de la misma o su voto contra el acuerdo adoptado, los socios o socias ausentes y los que hayan sido ilegítimamente privados de emitir su voto.*

*Para el ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos que se estimen nulos están legitimados, además, los socios o socias que hubieran votado a favor del acuerdo y los que se hubieran abstenido.*

*Los miembros del órgano de administración están obligados a ejercitar las acciones de impugnación contra los acuerdos sociales cuando sean contrarios a la ley o se opongan a los estatutos de la sociedad cooperativa.*

*4. La acción de impugnación de los acuerdos nulos caducará en el plazo de un año desde la fecha en que se tomó el acuerdo o desde su inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas, si el acuerdo se hubiera inscrito. La acción de impugnación de los acuerdos anulables caducará a los cuarenta días desde la fecha de adopción o desde la fecha de*

*su inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas, en su caso. No tendrán plazo de caducidad las acciones para impugnar los acuerdos que por su causa o contenido resultaren contrarios a los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Sección 1.ª del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución Española.*

*5. El procedimiento de impugnación de los acuerdos nulos o anulables se ajustará a las normas de tramitación previstas en la legislación estatal aplicable.*

*La interposición ante los órganos sociales de los recursos contemplados en esta ley interrumpe el plazo de prescripción y suspende el de caducidad de las acciones que puedan corresponder a las personas socias.*

### **Comentario.**

En materia de impugnación de acuerdos de la Asamblea General la nueva ley ha mantenido intacta la redacción de la normativa anterior. Ha de tenerse en cuenta que esta materia fue una de las principales novedades de redacción de la ley anterior que se acercó más al régimen jurídico de la legislación estatal, a la que se remite expresamente en la regulación del cauce procesal por el que debe discurrir tal impugnación.

Según la norma son impugnables los acuerdos de la Asamblea General cuando se consideren nulos o anulables. Esta diferenciación es importante porque tanto el procedimiento a seguir como los efectos que conllevará que la impugnación prospere, va a depender que el acto se considere nulo o se considere anulable. Así pues, para una mayor comprensión del precepto vamos a exponer esta materia diferenciando las normas que la ley establece para la impugnación de los actos nulos de la impugnación de los actos anulables. Finalmente expondremos las normas comunes a ambos tipos de procedimiento.

#### **Impugnación actos nulos.**

Concepto de Actos Nulos. Serán nulos los acuerdos que adopte la Asamblea General cuando sean contrarios al ordenamiento jurídico, es decir los que contravengan la ley de cooperativas o cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. A modo de ejemplo señalar que la jurisprudencia ha declarado nulo los actos declarados por una Asamblea General inválidamente convocada, o defectuosamente constituida, los adoptados por mayorías insuficientes en el caso de que la ley exija mayorías reforzadas, los contrarios a



la ley, a la moral, a las buenas costumbres, o los adoptados contra los derechos fundamentales de los socios. La nulidad de un acto supone un grado más de invalidez que la anulabilidad, como tendremos ocasión de ver cuando analicemos los efectos de la declaración de nulidad y de la declaración de anulabilidad. Este plus de invalidez se basa en que los actos nulos vulneran un bien jurídico general como es el ordenamiento jurídico, y no solo un bien particular como puede ser el interés concreto de una sociedad cooperativa. El ordenamiento jurídico por tanto tiene un alcance general, y común a todo el orden social, por lo que la impugnación de su vulneración ha de tener unas garantías extras, como expondremos a continuación. Debe enmarcarse este precepto dentro del supuesto establecido por el artículo 6.3 de nuestro Código Civil según el cual *“Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención”*.

Legitimación para impugnar: Considerando este plus de garantía que el legislador establece para la vulneración de los actos nulos, la legitimación para impugnar será más amplia en este caso que cuando se trate de actos anulables. En principio están legitimados para impugnar los actos nulos emanados de una Asamblea General las mismas personas legitimadas para cuando estos actos sean anulables, y en concreto: los asistentes a la Asamblea General que hubiesen hecho constar en acta su oposición a la celebración de la misma o su voto contra el acuerdo adoptado, los socios o socias ausentes y los que hayan sido ilegítimamente privados de emitir su voto. Se desarrollará más ampliamente estos conceptos en el epígrafe siguiente.

En materia de legitimación para la impugnación el plus de garantía lo contempla el legislador estableciendo que, además de las personas antes citadas, están legitimadas para el ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos que se estimen nulos los socios o socias que hubieran votado a favor del acuerdo y los que se hubieran abstenido. Es decir, cualquier persona socia frente a los que el acuerdo va a tener un carácter vinculante va a estar legitimada para la acción de impugnación aunque en un primer momento estuviera de acuerdo con la adopción del acuerdo o no estuviera en contra. Prima aquí más la salvaguarda del ordenamiento jurídico que se ha visto vulnerado que salvar la coherencia de los actos del socio o socia concreto.

Plazo de caducidad de la Acción de Nulidad. La acción de impugnación de los acuerdos nulos caducará en el plazo de un año desde la fecha en que se tomó el acuerdo o desde su inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas, si el acuerdo se hubiera inscrito.

El momento clave aquí es el momento del conocimiento del acuerdo, es decir para las personas socias o miembros del órgano de administración que acudieron a Asamblea y tuvieron conocimiento del acuerdo in situ, aunque el acuerdo sea inscribible el plazo no debe contar desde la inscripción en el Registro de Cooperativas, si no desde la fecha de su adopción. Por el contrario, tratándose de personas socias ausentes, o miembros del órgano de administración que no acudieron a la reunión, el plazo debe contar desde que pudieron tener conocimiento del acuerdo, esto es, desde la inscripción en el Registro de Cooperativas, si el acuerdo era inscribible, y en otro caso desde la fecha de su adopción.

Cuando el acuerdo nulo que se pretenda impugnar por su causa o contenido resultaren contrarios a los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Sección 1.<sup>a</sup> del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución Española la acción de impugnación no estará sujeta a ningún plazo de caducidad. Este precepto supone un plus de garantía para las acción de impugnación contra acuerdos nulos cuando el bien jurídico vulnerado por el acuerdo sea uno de los que goza mayor protección del ordenamiento jurídico, esto son los derechos fundamentales y libertades públicas. En estos supuestos la salvaguarda que pretende el legislador no es solo al ordenamiento jurídico considerado de una forma abstracta si no a los derechos fundamentales y libertades públicas de sujetos concretos.

### Impugnación actos anulables

Concepto de actos anulables: Son actos anulables los que se opongan a los estatutos o que lesionen, en beneficio de uno o varios socios o socias, o de terceros, los intereses de la sociedad cooperativa. Así pues, son aquellos que atentan contra un bien jurídico determinado como es el interés de la cooperativa, es decir el buen curso de la vida societaria. La LSCA distingue dos tipos de actos anulables según el bien contra el que atenten, veámoslo por separado:

Los estatutos societarios. Un acto será anulable cuando no cumpla tanto en su contenido como en su forma, lo dispuesto en los estatutos societarios. Los estatutos son las normas de las que la cooperativa se dota para el funcionamiento de su actividad, por tanto la inobservancia de estas normas supondría una vulneración en el desarrollo normal de la vida de la sociedad. No obstante, ha de entenderse que cuando un acto no observara lo previsto estatutariamente deviene anulable aunque no causara ningún perjuicio a los intereses de la sociedad, pues aquí el legislador lo que pretende salvaguardar no es tanto

el perjuicio concreto que puede existir o no, como regular si un acuerdo cumple con lo previsto en el estatuto.

Los intereses de la sociedad: Regula aquí el legislador la validez de un acuerdo atendiendo solo al contenido del mismo y no la forma en la que sea adoptado. Así la ley establece que serán anulables los acuerdos que vulneren los intereses de la sociedad. Aunque el acuerdo haya observado en el proceso de su adopción las reglas establecidas en la ley y el estatuto, si éste en su contenido causa un perjuicio al interés de la sociedad podrá ser impugnado como un acto anulable. No obstante la ley exige un requisito para poder impugnar actos que van en contra del interés de la sociedad cuando no ha existido vulneración de ningún precepto legal ni estatutario, y es que este suponga un beneficio para algunas personas socia en contraprestación al perjuicio que causa al interés de la sociedad.

Legitimación para impugnar: Están legitimados para el ejercicio de las acciones de impugnación de los acuerdos anulables los asistentes a la Asamblea General que hubiesen hecho constar en acta su oposición a la celebración de la misma o su voto contra el acuerdo adoptado, los socios o socias ausentes y los que hayan sido ilegítimamente privados de emitir su voto.

Los asistentes que hagan constar su oposición. Así que la ley establece un requisito doble, que el asistente haya votado en contra y que además conste en acta. De no constar en acta deberá probarse en el mismo procedimiento judicial donde se ejercite la acción de impugnación que efectivamente el voto fue en contra. En el caso de que la votación hubiera sido secreta el asistente que vote en contra deberá pedir que conste su voto en acta para poder ejercer posteriormente la acción de impugnación.

Los socios o socias ausentes. Este extremo se acredita acudiendo a la lista de asistentes que se confecciona al iniciar la Asamblea. En este punto, la jurisprudencia ha flexibilizado la interpretación de la norma y ha tenido por ausente, a estos efectos, a la persona socia que habiendo asistido al inicio de la Asamblea se ausentó después de ella, no estando presente en el momento de la votación del acuerdo cuya impugnación pretende. No obstante en este último caso al igual que en el punto anterior habrá de atenderse a la prueba.

Los socios o socias que hayan sido ilegítimamente privados de emitir su voto. En este caso, el problema fundamental es el de la prueba; así, además de tener que probar la irregularidad del acuerdo, debe probar el recurrente la base de su legitimación, esto es, el hecho de haber sido privado ilegítimamente por el presidente de la Asamblea de su derecho a votar.

Plazo de caducidad de la Acción de Anulabilidad. La acción de impugnación de los acuerdos anulables caducará a los cuarenta días desde la fecha de adopción o desde la fecha de su inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas, en su caso. Este plazo es mucho más breve que el de los acuerdos anulables como puede verse. Este plazo coincide por el establecido por la legislación de sociedades anónimas y la legislación estatal de cooperativas. La razón de la brevedad no es otra que la necesidad de dotar de certeza y seguridad jurídica a los acuerdos sociales, que generalmente han de producir efectos contra terceros, no dejando abierta durante mucho tiempo la incertidumbre de la posible reclamación. Pueden tenerse por reproducidos aquí los comentarios hechos anteriormente a propósito del cómputo de plazo en la acción de impugnación de acuerdos nulos.

Normas Comunes a la impugnación de actos nulos y anulables.

La ley excluye de la impugnación los acuerdos que hayan sido dejados sin efecto o sustituidos válidamente por otros. Esta medida es lógica y razonable, teniendo en cuenta que por razones de seguridad jurídica aconsejan no dejar abierta la puerta a posibles impugnaciones sociales, a veces tardías y extemporáneas, cuando el vicio detectado pueda sanarse por otro acuerdo posterior.

Los miembros del órgano de Administración están obligados a ejercitar las acciones de impugnación contra los acuerdos sociales cuando sean contrarios a la ley o se opongan a los estatutos de la sociedad cooperativa.

El procedimiento de impugnación de los acuerdos nulos o anulables se ajustará a las normas de tramitación previstas en la legislación estatal aplicable, concretamente el artículo 31 de la ley estatal 27/1999 de 16 de julio. A su vez, el apartado 5º del artículo 31 de la ley estatal remite al procedimiento regulador de la impugnación de los artículos 188 a 121 del texto refundido de la ley de Sociedades Anónimas, por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Sociedades de Capital al que habrá de atenderse en esta materia, en concreto a lo dispuesto en su artículo.

1. Para la impugnación de los acuerdos sociales, se seguirán los trámites del juicio ordinario y las disposiciones contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. En el caso de que fuera posible eliminar la causa de impugnación, el juez, a solicitud de la sociedad demandada, otorgará un plazo razonable para que aquella pueda ser subsanada.

La especialidad que introduce a este procedimiento la ley estatal de cooperativas es que para solicitar en el escrito de demanda la suspensión del acuerdo impugnado, se exigirá que los demandantes sean o las personas interventoras o socias que representen, al menos, un veinte por ciento del total de votos sociales.

Por último la ley establece que para la interposición ante los órganos sociales de los recursos contemplados en esta ley interrumpe el plazo de prescripción y suspende el de caducidad de las acciones que puedan corresponder a las personas socias. La doctrina discute la viabilidad de este precepto pues la ley no establece cual será el procedimiento para llevar a cabo este tipo de recurso. En el caso de la Asamblea General es aún más dificultoso establecer el órgano ante el que habrá de presentarse este recurso pues la Asamblea es el órgano soberano de la sociedad cooperativa. Este falso cierre del artículo produce en la práctica que la impugnación de acuerdos de la Asamblea General solo pueda realizarse a través de la acción judicial. No obstante la jurisprudencia abre paso a la posibilidad de que la impugnación de acuerdos se pueda someter a un arbitraje previo a la acción en vía judicial siempre que así lo prevea el estatuto societario. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 1998 o la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de febrero de 1998.

### *Subsección 2ª El Órgano de Administración*

## **ARTÍCULO 36. CLASES.**

*1. El órgano de administración de las sociedades cooperativas será el Consejo Rector. No obstante, en aquellas entidades que cuenten con un número igual o inferior a diez*

*personas socias comunes, sus estatutos podrán prever otros modos de organizar dicha administración, cuales son la Administración Única y la Administración Solidaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 sobre personas administradoras.*

*2. En tal supuesto, los estatutos sociales de estas entidades podrán establecer distintos modos de organizar la administración atribuyendo a la Asamblea General la facultad de optar por cualquiera de ellos sin necesidad de modificación estatutaria, en cuyo caso, la inscripción registral se ajustará al procedimiento que se determine reglamentariamente.*

## **Comentario.**

La principal novedad que presenta la actual legislación respecto a la anterior en relación a este órgano societario es la creación del propio concepto de órgano de Administración, atribuyéndole un alcance mayor al englobar éste varias figuras societarias. En la anterior legislación se contemplaba un solo tipo de órgano de Administración para las sociedades cooperativas, este era el Consejo Rector. Comenzaba la sección 3º del capítulo V de la ley dedicada a esta materia con el epígrafe “Consejo Rector”, la nueva ley sin embargo anuncia este mismo epígrafe con el concepto “Órgano de Administración” englobando éste tres tipos diferentes de órganos como expondremos a continuación.

La nueva ley establece que como regla general será el Consejo Rector el órgano de Administración de la sociedad cooperativa, sin embargo deja la puerta abierta a establecer estatutariamente otros tipos de órganos de administración como son la Administración Única y la Administración Solidaria.

La Administración Única es el órgano de Administración que está conformado por un solo socio o socia y tendrá todas las facultades que la ley atribuye al órgano de Administración, incluidas las facultades de Presidencia y Secretaría que se reunirán en esta sola persona.

La Administración Solidaria es el órgano de Administración que está conformada por dos personas socias a las que se les atribuirá las facultades del órgano de Administración de forma solidaria, es decir que cada una de ella indistintamente podrá ejercer estas facultades. Ha de diferenciarse esta forma de responsabilidad de la responsabilidad mancomunada para la que cualquier acto de que emane de las funciones que se tienen atribuidas necesitaría el común acuerdo de las dos personas administradoras, a diferencia de la solidaria donde cada administradora podrá actuar de forma independiente dentro del desarrollo de sus funciones. La ley establece expresamente que en el caso de optar por la

Administración Solidaria el número no podrá superar el de dos personas, sin dejar la puerta abierta al estatuto para poder aumentar el número de administradores para no desvirtuar la naturaleza de este órgano pues de contemplarse un número mayor de administradores nos acercaríamos más a la figura del Consejo Rector.

Para que una sociedad pueda optar a una de estas dos formas alternativas de órgano de Administración deberá cumplir dos requisitos establecidos en el mismo artículo 36 de la ley:

Que la sociedad cuenten con un número igual o inferior a diez personas socias comunes. Ha de tenerse en cuenta que el legislador utiliza el adjetivo comunes para referir que, a efectos de poder optar a una forma excepcional de órgano de Administración, solo contabilizarán las personas socias que realicen plenamente la actividad cooperativizada y sean titulares de todos los derechos y obligaciones que la ley establece para la persona socia. Quedan por tanto excluidas de este número las personas socias inactivas, las colaboradoras y las inversoras. La fundamentación jurídica de tal precepto se basa en la voluntad del legislador de facilitar la actividad de administración a aquellas cooperativas con menor número de personas socias. Teniendo en cuenta que solo las personas socias comunes de pleno derecho tienen capacidad para formar parte del órgano de Administración, como expondremos en el próximo epígrafe, esta norma solo contabiliza el número de ellas que tenga una sociedad para permitirle optar a un modelo más ágil de administración.

Previsión estatutaria. Para poder optar a uno de estos modelos alternativos de administración la sociedad deberá tener previsto esta opción en sus estatutos. La previsión estatutaria de esta opción tiene carácter imperativo según establece la LSCA, sin embargo la ley deja la posibilidad de que la sociedad pueda establecer distintos modos de organizar la administración atribuyendo a la Asamblea General la facultad de optar por cualquiera de ellos. Se desprende de esta norma que una sociedad podrá establecer en su estatutos una única forma de administración alternativa, por ejemplo la Administración Única, o bien establecer los dos tipos, Administración Única y Administración Solidaria, y la Asamblea se encargará, según la necesidad de la sociedad en cada momento, de optar a un tipo de Administración. En este caso tal opción no conllevará modificación estatutaria, ya que el estatuto contempla ambas opciones, aunque sí requerirá que el acta de la Asamblea que opte a uno de estos dos modelos sea inscrita en el Registro de Cooperativas a fin de tener efectos frente a terceros. Ha de tenerse en



cuenta que las personas administradoras son las representantes legales de la sociedad frente a terceros por lo que, en pos de la seguridad jurídica, esta elección debe dejar constancia registral.

### **ARTÍCULO 37. EL CONSEJO RECTOR: NATURALEZA Y COMPETENCIA.**

*1. El Consejo Rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de la sociedad cooperativa y está sujeto a la ley, a los estatutos y a las directrices generales fijadas por la Asamblea General.*

*2. Corresponden al Consejo Rector las siguientes facultades:*

*a) Fijación de criterios básicos de la gestión.*

*b) Presentación a la Asamblea General de las cuentas del ejercicio y demás documentos necesarios según la normativa contable aplicable, así como la propuesta de distribución o asignación de los resultados positivos o de imputación de pérdidas, en su caso.*

*c) Control del ejercicio de las facultades delegadas.*

*d) Otorgamiento de poderes generales.*

*e) Prestación de avales, fianzas o garantías reales a favor de otras personas con cargo al patrimonio de la sociedad cooperativa, salvo lo dispuesto para las de crédito, y autorización a la Dirección para actos de disposición relativos a dichos derechos reales, fianzas o avales. Todo ello sin perjuicio de la limitación establecida en el artículo 28.1) sobre competencias de la Asamblea General.*

*f) Integración en consorcios, uniones o agrupaciones de carácter económico o participación en el capital social de cualquier tipo de entidad, siempre que estas actuaciones no representen más del veinte por ciento de su cifra de negocio, obtenida de la media de los dos últimos ejercicios económicos. El acuerdo adoptado deberá constar en el orden del día y ser ratificado, en su caso, por la Asamblea General inmediatamente posterior.*

*g) Aquellas que le hayan sido delegadas por la Asamblea General.*

*h) Decidir sobre el rehúse del reembolso de las aportaciones de las personas socias.*

*i) Decidir sobre la admisión de personas socias.*

*j) Todas aquellas otras facultades de gobierno, gestión y representación que no estén reservadas por la ley o los estatutos a otros órganos sociales.*

*Aquellas materias atribuidas al Consejo Rector por la ley o los estatutos no podrán ser objeto de decisión por otros órganos de la sociedad.*

*3. La representación de la sociedad cooperativa, atribuida al Consejo Rector, se extenderá a todos los asuntos concernientes a la entidad.*

*4. La persona titular de la Presidencia del Consejo Rector, que lo será también de la sociedad cooperativa, tiene atribuido el ejercicio de la representación de la entidad, debiendo ajustar su actuación a los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo Rector. En su ausencia ejercerá sus funciones la persona titular de la Vicepresidencia.*

**Concordancia con el artículo 34 del Reglamento de Desarrollo.**

### **ARTÍCULO 34. REPRESENTACIÓN.**

*La representación de la entidad, atribuida al órgano de administración, se extiende a todos los asuntos concernientes a la sociedad cooperativa.*

*Si se establecieran limitaciones de cualquier índole a las facultades representativas del órgano de administración, serán ineficaces ante terceras personas, en todo caso.*

### **Comentario.**

La nueva Ley sigue manteniendo el mismo concepto de Consejo Rector que ya establecía la ley anterior, atribuyéndole las competencias de gobierno, gestión y representación de la cooperativa, sin embargo el legislador utiliza una nueva técnica en el articulado introduciendo una enumeración exhaustiva de las competencias. El artículo 37 de la LSCA atribuye de manera específica nueve competencias exclusivas y excluyentes del Consejo Rector asemejando la redacción al artículo 28 de la LSCA en cuanto a la enumeración de las competencias de la Asamblea General. Fiel al principio de autonomía que rige en la normativa de las sociedades cooperativas, el legislador cierra la

enumeración de las competencias del Consejo Rector con un apartado que deja abierta la posibilidad de atribuirle otras competencias más allá de las enumeradas. Estas otras competencias deben un cumplir un doble requisito para permitirse su atribución por el Consejo Rector, por un lado no estar atribuidas por la ley o por estatuto a otro órgano social, y que esté dentro de las facultades de gobierno, gestión y representación que con carácter general la ley otorga a este órgano societario.

Así pues en este artículo observamos una doble técnica de atribución de competencias, por un lado hay una atribución genérica de competencias para las que se utiliza términos amplios como gobierno, gestión y administración, y posteriormente en un afán del legislador de facilitar el desarrollo práctico del precepto, se enumeran de forma detallada nueve competencias concretas del Consejo Rector que vienen a desarrollar estos conceptos generales. Para una mejor comprensión de estos términos, expondremos a qué se refiere el legislador al utilizar estas competencias generales y después haremos una breve reflexión sobre cada una de las competencias específicas.

Competencias Generales del Consejo Rector: gobierno, gestión y representación:

Competencias de Gobierno: Se entiende por tal el derecho y el deber de aplicar las normas legales y estatutarias, así como su interpretación e impulsar la actuación de los demás órganos societarios en orden al cumplimiento de sus respectivas funciones.

Competencia de Gestión: Comprende la tarea de la administración del patrimonio social, con el fin de conservarlo y aumentarlo para repartir beneficios sociales. Así se incluye la fijación de la política a corto y medio plazo de la cooperativa, siguiendo las directrices que marque la Asamblea General para los objetivos a largo plazo.

Competencia de representación. El Consejo Rector representa los intereses de la sociedad frente a terceros y tiene capacidad de obligarse frente a ellos. A esta figura se le conoce como representación orgánica pues los representantes no actúan a través del mandado de la sociedad, si no que el Consejo Rector actúa como órgano social que tiene el poder de representar a la sociedad. Así es este representante, el Consejo Rector, quien actúa frente a terceros, exteriorizando la voluntad social y celebrando los consiguientes negocios jurídicos, actos y contratos que vincularán a la sociedad. Esta representación es obligatoria y no puede prescindirse de ella, pues la persona jurídica solo puede mostrar su voluntad frente a tercero a través de las personas físicas que la representan. Vía

reglamentaria el legislador establece el alcance de esta representación, estableciendo en el artículo 34<sup>o</sup>1 del RLSCA que la representación realizada a través del órgano de Administración se extiende a todos los asuntos concernientes a la sociedad cooperativa. Es decir, a diferencia del derecho societario general, el órgano de Administración de la cooperativa responderá frente a terceros tanto por los actos que realice dentro del objeto social de la cooperativa como los que realice fuera de este objeto. No obstante la Sociedad Cooperativa siempre puede exigir al órgano de Administración responsabilidades por aquellos actos que hayan realizado fuera del objeto de la sociedad por los que esta haya quedado vinculada. El reglamento cierra este precepto ahondando más en el carácter exclusivo de la competencia de representación del órgano de Administración, estableciendo que ninguna limitación que pueda hacerse a esta competencia tendrá efectos frente a terceros. Este rigor de la normativa se debe al afán del legislador de garantizar la seguridad del tráfico jurídico, pues cualquier tercero entenderá ilimitada las facultades de representación de la sociedad sin estar obligado a conocer que pudieran existir limitaciones a esta.

De forma más concreta, la ley establece que la persona titular de la Presidencia del Consejo Rector, que lo será también de la sociedad cooperativa, tiene atribuido el ejercicio de la representación de la entidad, y su ausencia ejercerá sus funciones la persona titular de la Vicepresidencia. Así que en la práctica, la persona física a través de la que se manifiesta externamente la voluntad de la sociedad cooperativa es la que ostenta la presidencia de la entidad.

#### Competencias concretas del Consejo Rector:

a) Fijación de criterios básicos de la gestión. En desarrollo de la competencia general de gestión atribuida al Consejo Rector, la ley le adjudica de manera concreta la facultad de fijar los criterios básicos para desarrollar esta gestión. Supone pues una atribución de auto-reglamentación que conllevará la responsabilidad del Consejo Rector de trazar los criterios básicos para poder realizar posteriormente una evaluación de su gestión utilizando estos criterios como parámetro. Será la Asamblea General la que con posterioridad evaluará la gestión del Consejo Rector en base a estos criterios que se entiende deben ser también examinados y aprobados por la Asamblea General según el artículo 28 a) de la LSCA.

b) Presentación a la Asamblea General de las cuentas del ejercicio y demás documentos necesarios según la normativa contable aplicable, así como la propuesta de distribución o asignación de los resultados positivos o de imputación de pérdidas, en su caso. La ley atribuye de manera exclusiva y excluyente a la Asamblea General la competencia de aprobar las cuentas del ejercicio así como la distribución de ganancia e imputación de pérdidas, sin embargo es el Consejo Rector quien de manera práctica realizará esta propuesta a la Asamblea en desarrollo de su competencia de gestión. La presentación de cuentas simboliza la conclusión del trabajo de gestión realizado por el Consejo Rector consistente en la administración y disposición del patrimonio social. Así pues el Consejo Rector deberá redactar, dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio económico, las cuentas anuales y demás documentos exigibles conforme a la normativa general contable así como la propuesta de distribución de resultados positivos o de imputación de pérdidas y, en su caso, la relación de resultados extra-cooperativos (artículo 64 de LSCA).

c) Control del ejercicio de las facultades delegadas. En consonancia con el principio de auto-organización que inspira la regulación del Consejo Rector, el artículo 40 de la LSCA establece la posibilidad de que el Consejo Rector delegue sus facultades en uno o varios de sus miembros constituidos en una Comisión Ejecutiva o en personas consejeras delegadas. En cumplimiento de la competencia de gobierno que tiene atribuida, es al Consejo Rector quien compete el control del ejercicio de estas facultades delegadas. De las acciones de estas personas delegadas responderá el Consejo Rector frente a la Asamblea y en nombre de la sociedad frente a terceros.

d) Otorgamiento de poderes generales. Como ya hemos expuesto, la representación orgánica de la cooperativa corresponde al Consejo Rector pero su ejercicio, esto es, su exteriorización, corresponde a la Presidencia del órgano, que a su vez es la Presidencia de la cooperativa. La representación de la Presidencia no es delegable, aunque sí podrá otorgar poderes especiales a otros miembros del consejo siempre que el Consejo Rector así lo acuerde. Estos poderes deberán ser elevados a escritura pública e inscritos en el Registro de Cooperativas cuando contengan atribuciones de funciones de administración y gestión delegadas con carácter permanente, si bien con eficacia declarativa y no constitutiva.

e) Prestación de avales, fianzas o garantías reales a favor de otras personas con cargo al patrimonio de la sociedad cooperativa, salvo lo dispuesto para las de crédito, y

autorización a la Dirección para actos de disposición relativos a dichos derechos reales, fianzas o avales. Todo ello sin perjuicio de la limitación establecida en el artículo 28.1) sobre competencias de la Asamblea General. En desarrollo de su competencia de gestión del patrimonio social, la ley especifica que corresponderá al Consejo Rector las operaciones de constitución de derechos reales de otras personas con cargo al patrimonio de la sociedad. Establece dos únicas limitaciones la ley para el desarrollo de esta competencia, por un lado la limitación establecida para las sociedades cooperativas de crédito que se regirá por su propia normativa en esta materia (Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito) y el límite que supone las competencias exclusivas y excluyentes de la Asamblea General.

f) Integración en consorcios, uniones o agrupaciones de carácter económico o participación en el capital social de cualquier tipo de entidad, siempre que estas actuaciones no representen más del veinte por ciento de su cifra de negocio, obtenida de la media de los dos últimos ejercicios económicos. El acuerdo adoptado deberá constar en el orden del día y ser ratificado, en su caso, por la Asamblea General inmediatamente posterior. Esta competencia es correlativa a la establecida por el artículo 28 f) de la LSCA que establece las competencias exclusivas y excluyentes de la Asamblea General. Así pues, la LSCA no enuncia con carácter estrictamente exclusivo la competencia de la Asamblea General para la integración de las cooperativas en otras entidades de carácter económico, pues si esta integración no representa un riesgo superior al veinte por ciento de la cifra de negocio de los dos últimos ejercicios de la sociedad, dicha competencia será exclusiva del Consejo Rector. Podríamos por tanto enunciar que, como desarrollo de su competencia de gestión, el Consejo Rector podrá llevar a cabo las operaciones de integración de la cooperativa en otras entidades de crédito siempre que esta no rebase un límite de riesgo establecido en un veinte por ciento de su cifra de negocio en cuyo caso necesitará, con carácter previo a llevarse a cabo la operación, la aprobación por parte de la Asamblea General.

g) Aquellas que le hayan sido delegadas por la Asamblea General. Deja este precepto abierta la posibilidad de que la Asamblea General delegue alguna competencia al Consejo Rector. Debemos entender que estas competencias no pueden ser las enumeradas en el artículo 28 de la LSCA pues estas tienen un carácter indelegable tal como el mismo precepto enuncia. Por tanto debe de ser alguna otra competencia más allá de las enumeradas en el artículo 28 y que tampoco entren dentro de la definición de competencias de gobierno, gestión, y representación pues éstas pueden ser desarrolladas

por el Consejo Rector sin contar con la delegación de la Asamblea General ya que suponen el contenido de la propia naturaleza del órgano.

h) Decidir sobre el rehúse del reembolso de las aportaciones de las personas socias. El artículo 60.1 de la LSCA establece que las aportaciones sociales confieren a la persona socia que las desembolsa el derecho a su reembolso en caso de baja, salvo que el órgano que las acuerde o emita les prive de este carácter, en cuyo caso, el órgano de Administración podrá rehusar su reembolso incondicionalmente siempre que exista un acuerdo previo de la Asamblea General. En este caso nos encontramos ante una manifestación del desarrollo de la competencia de gestión del Consejo Rector, sin embargo en esta materia el Consejo solo se limitará a ejecutar un acuerdo previo de la Asamblea General sin entrar en juego mayor autonomía de este órgano societario.

i) Decidir sobre la admisión de personas socias. El artículo 18 de la ley de cooperativas establece que será el Consejo de Administración quien resolverá, en un plazo no mayor a tres meses, las solicitudes de admisión de nuevas personas socias. La decisión sobre la admisión o no de la persona se basará en los requisitos objetivos establecidos en el estatuto no pudiendo denegarse de manera injustificada. En caso de denegación ésta habrá de ser motivada y vinculada a la existencia de una causa objetiva. El silencio en la resolución de la admisión, es decir transcurrido los tres meses sin que haya resolución, se entenderá estimatorio.

La cláusula de competencias residuales:

Finalmente corresponde al Consejo Rector de la cooperativa todas las facultades que expresamente no hayan sido atribuidas a otro órgano social, siempre que estén dentro del marco de las competencias generales que enumerábamos al principio de esta epígrafe y que representan la esencia de la naturaleza de este órgano societario, como son las competencias de gobierno, gestión y representación. Por tanto, y poniendo esta cláusula residual en relación al apartado 2.j) del artículo 34 de la LSCA, cabe decir que cualquier competencia que exceda de las facultades de gobierno, gestión y representación podrá ser atribuida al Consejo Rector pero no de forma automática si no que requerirá la expresa delegación de la Asamblea General.



## **ARTÍCULO 38. COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN DEL CONSEJO RECTOR.**

*1. Los estatutos fijarán la composición del Consejo Rector o, al menos, el número máximo y mínimo de sus componentes, en cuyo caso, será la Asamblea General quien lo precise. En todo caso, formarán parte del mismo la Presidencia, la Vicepresidencia y la Secretaría.*

*2. Los miembros del Consejo Rector serán elegidos de entre los socios y socias por la Asamblea General, en votación secreta y por mayoría simple, con las únicas excepciones establecidas en este artículo y su desarrollo reglamentario.*

*Reglamentariamente, se regulará la presencia de determinados colectivos en este órgano y, en particular, de las personas socias de trabajo, de las personas socias integrantes de las secciones, de las personas socias colaboradoras, de las personas trabajadoras por cuenta ajena y de las personas inversoras.*

*Asimismo, los estatutos sociales podrán admitir, en número que no exceda de un tercio del total de los integrantes de este órgano que sean personas socias, el nombramiento como consejeros o consejeras de personas que sin ostentar la condición de socias puedan contribuir, en función de su cualificación profesional, experiencia técnica o empresarial, al cumplimiento más eficaz de las funciones encomendadas a este órgano. Reglamentariamente se regulará el nombramiento y estatuto de las citadas personas.*

*En cualquier caso, el Consejo Rector estará integrado, en sus dos terceras partes, como mínimo, por personas socias de la entidad.*

*3. Los estatutos podrán regular el procedimiento electoral con arreglo a lo dispuesto en esta ley y en los preceptos reglamentarios que la desarrollen. Si aquellos lo prevén, la elección de los miembros del Consejo Rector podrá realizarse tras la constitución de una mesa electoral a lo largo de una sesión continuada cuya duración se establecerá en la correspondiente convocatoria.*

*4. Las sociedades cooperativas procurarán la presencia equilibrada de socios y socias en el Consejo Rector.*

## **Concordancia con el artículo 35 del Reglamento de desarrollo.**

### **ARTÍCULO 35. ELECCIÓN DEL CONSEJO RECTOR.**

*1. Los miembros del Consejo Rector serán elegidos de entre los socios y socias por la Asamblea General, en votación secreta y por mayoría simple, con las únicas excepciones detalladas en este artículo.*

*Cuando se eligiese a una persona jurídica, sociedad civil o comunidad de bienes y derechos, éstas deberán designar a la persona física que la represente con carácter permanente en el Consejo Rector, subsistiendo la representación en tanto no se notifique fehacientemente a éste su revocación expresa. Todo ello, sin perjuicio de lo previsto en el [artículo 104.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#), a propósito de las sociedades cooperativas agrarias.*

*2. En caso de que en el seno de la cooperativa existan secciones conforme a lo dispuesto en el [artículo 12 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#), los estatutos sociales determinarán la forma y proporción en que éstas serán representadas en el Consejo Rector de la entidad, teniendo voz pero no voto en dicho órgano.*

*3. Las personas socias colaboradoras podrán elegir un representante en el Consejo Rector, con voz y voto, pudiendo supeditarse estatutariamente su designación a alcanzar un determinado número de personas o a determinados porcentajes de sus aportaciones en relación con el capital social.*

*4. En las cooperativas en las que los socios o socias de trabajo alcancen un veinticinco por ciento de la totalidad de las personas socias o sean como mínimo cincuenta, los estatutos sociales deberán regular el procedimiento para otorgarles representación en el Consejo Rector, disponiendo dicho colectivo, en todo caso, del derecho a elegir, al menos, un consejero o consejera.*

*5. Cuando la cooperativa tenga más de cincuenta trabajadores y trabajadoras que permitan contar y cuenten con comité de empresa, o cuando, contando con menos, lo prevea sus estatutos, uno de ellos formará parte del Consejo Rector como miembro vocal, el cual será elegido y podrá ser revocado por el órgano de representación de los trabajadores y trabajadoras, a excepción de que únicamente cuente con un delegado o delegada de personal, en cuyo caso serán los trabajadores y trabajadoras, en asamblea*

*convocada al efecto, quienes lo designen, pudiendo, igualmente, ser revocado del cargo por el mismo procedimiento. Cuando la cooperativa cuente con más de un comité de empresa o más de un centro de trabajo, el vocal a que hace referencia este apartado será elegido y podrá ser revocado por aquellas personas trabajadoras que, a su vez, hayan sido elegidas por cada comité de empresa o asamblea de centro de trabajo a este fin.*

*El régimen aplicable a este vocal será igual que el establecido para los miembros del Consejo Rector que sean personas socias de la entidad, disponiendo de voz y voto en sus sesiones.*

*6. Las personas inversoras podrán elegir un representante en el Consejo Rector, como miembro vocal, con voz pero sin voto, debiendo regularse estatutariamente dicha designación y pudiendo condicionarse a la exigencia de cifras o porcentajes mínimos sobre el número de personas socias comunes o sobre el volumen de aportaciones realizadas por las personas inversoras al capital social. No obstante, cuando las personas inversoras de la cooperativa participen en los excedentes y pérdidas del ejercicio, su representante en el Consejo Rector, tendrá voz y voto.*

*7. Los estatutos podrán prever, en número que no exceda de un tercio del total, el nombramiento como consejeros o consejeras de personas que no ostenten la condición de socias que, en función de su cualificación profesional, experiencia técnica o empresarial, puedan contribuir al más eficaz cumplimiento de las funciones encomendadas a este órgano.*

*Estas personas estarán obligadas a guardar secreto sobre los asuntos de la cooperativa, tendrán voz y, salvo que estatutariamente se establezca lo contrario, dispondrán de voto en el Consejo Rector, pero en ningún caso podrán ostentar la Presidencia ni la Vicepresidencia. Su nombramiento se realizará por el Consejo Rector y se ratificará en la primera Asamblea General que se celebre con posterioridad al mismo, constando tal extremo en el orden del día.*

*8. Los estatutos podrán regular el procedimiento electoral con arreglo a lo previsto en la [Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#) y en este Reglamento. Si aquellos lo prevén, podrá realizarse la elección de los miembros del Consejo Rector a lo largo de una jornada cuya duración se establecerá en la correspondiente convocatoria, de forma continuada y mediante la constitución de una mesa electoral.*

*Nadie podrá presentarse al cargo fuera del procedimiento señalado en los estatutos. La presentación de candidaturas fuera del plazo marcado en los estatutos será nula.*

*9. El nombramiento de los consejeros y consejeras necesitará como requisito de eficacia la aceptación de las personas elegidas en el plazo máximo de cinco días desde la designación y deberá inscribirse en el Registro de Cooperativas Andaluzas conforme a lo establecido en el artículo 124.*

## **Comentario.**

### Composición del Consejo Rector.

La LSCA atribuye a los estatutos sociales la competencia para establecer cuál será la composición del Consejo Rector; no obstante prevé que esta composición no queda completamente cerrada en los estatutos y que estos solo contemplen unos límites máximos y mínimos a partir de los cuales la Asamblea General opte por la composición exacta. Esta fórmula supone una novedad respecto a la normativa anterior que establecía de forma exacta el número mínimo de personas que debían conformar el Consejo Rector que la ley fijaba en tres salvo excepciones. Se aproxima así más el legislador actual a la legislación general de sociedades.

No obstante, la ley sí establece unos requisitos mínimos a los que habrá que atenerse la redacción de los estatutos, en concreto: que entre los miembros del Consejo Rector habrá de establecerse una Presidencia una Vicepresidencia y una Secretaría. Así se concluye que la ley establece un número mínimo de miembros para el consejo rector que deberá ser al menos de tres personas socias capaces de cubrir los tres cargos de mínimos que establece la norma. Una de las novedades más destacada en esta materia, es que, en la redacción de la actual ley, no se contempla un modelo de composición reducida, como sí hacía la ley anterior, para los casos en que los miembros de la cooperativa fueran tres socios. La anterior legislación establecía que en caso de ser solo tres personas las socias de la cooperativa el Consejo Rector podía únicamente constituirse por dos personas que ostentaran la presidencia y la secretaría prescindiéndose de la vicepresidencia. Por tanto cabe concluir que con la actual redacción en el caso de cooperativas que solo estén conformada por tres personas socias, las tres personas formarán parte de este Consejo Rector.

### Elección de miembros del Consejo Rector.

Como regla general la elección de los miembros del Consejo Rector se realizará entre los socios y socias de la cooperativa elegidos en Asamblea General. No obstante la ley de cooperativas y su reglamento de desarrollo establecen una serie de excepciones a la regla general para determinadas situaciones donde la representación se realizará de forma ponderada y no como resultado del voto directo. Veamos detenidamente estas especialidades.

Miembro elegido persona jurídica. Establece la ley que cuando se eligiese a una persona jurídica, sociedad civil o comunidad de bienes y derechos, éstas deberán designar a la persona física que la represente con carácter permanente en el Consejo Rector. Ha de tenerse en cuenta que la voluntad de la sociedad se expresa a través de la acción de los miembros del órgano de Administración, de ahí la necesidad irremediable de que este esté conformado por personas físicas concretas. Una persona jurídica podrá formar parte del Consejo Rector pero siempre y cuando se materialice en el nombramiento de una persona física concreta. Esta persona puede ser, o bien el representante orgánico de la entidad nombrada o bien una persona extraña, que debe nombrar el órgano de Administración de la persona jurídica nombrada consejera. Conforme a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 11 de marzo de 1991, reiterada por la de 3 de junio de 1999, es necesario acreditar el cargo vigente e inscrito del órgano de Administración de la persona jurídica consejera, que designa a su vez a la persona física que desempeñará el cargo, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento del Registro Mercantil.

La ley prevé que en el caso de que la persona física nombrada sea relevada del cargo de presentación de la entidad a su vez nombrada consejera, permanecerá formando parte del Consejo rector mientras no se notifique expresamente su revocación.

Miembros elegidos de las secciones. El artículo 35.2 del RLSCA establece que en caso de que en el seno de la cooperativa existan secciones conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la LSCA, los estatutos sociales determinarán la forma y proporción en que éstas serán representadas en el Consejo Rector de la entidad, teniendo voz pero no voto en dicho órgano. Puesto que las secciones tienen como finalidad desarrollar actividades económicas complementarias al objeto de la sociedad, la representación de estas en el Consejo Rector garantiza una mejor comunicación y coordinación en el desarrollo práctico de la actividad societaria.

Miembros personas socias colaboradores. El artículo 35.3 del RLSCA establece que las personas socias colaboradoras podrán elegir un representante en el Consejo Rector, con voz y voto, pudiendo supeditarse estatutariamente su designación a alcanzar un determinado número de personas o a determinados porcentajes de sus aportaciones en relación con el capital social.

Miembros personas socias de trabajo. El artículo 15 de la ley de cooperativas establece que se considerarán personas socias de trabajo a aquellas cuya actividad cooperativizada consista en la prestación de su trabajo personal. A fin de garantizar la participación equilibrada en la sociedad de estas personas en comparación con el resto de personas socias el artículo 35.4 del RLSCA establece que cuando los socios o socias de trabajo alcancen un veinticinco por ciento de la totalidad de las personas socias o sean como mínimo cincuenta, los estatutos sociales deberán regular el procedimiento para otorgarles representación en el Consejo Rector, disponiendo dicho colectivo, en todo caso, del derecho a elegir, al menos, un consejero o consejera.

Miembros personas trabajadoras de la cooperativa. Cuando la cooperativa tenga más de cincuenta trabajadores y trabajadoras que permitan contar y cuenten con comité de empresa, de forma obligatoria uno de ellos formará parte del Consejo Rector como miembro vocal, el cual será elegido y podrá ser revocado por el órgano de representación de los trabajadores y trabajadoras, a excepción de que únicamente cuente con un delegado o delegada de personal, en cuyo caso serán los trabajadores y trabajadoras, en asamblea convocada al efecto, quienes lo designen, pudiendo, igualmente, ser revocado del cargo por el mismo procedimiento. Cuando la cooperativa cuente con más de un comité de empresa o más de un centro de trabajo, el vocal a que hace referencia este apartado será elegido y podrá ser revocado por aquellas personas trabajadoras que, a su vez, hayan sido elegidas por cada comité de empresa o asamblea de centro de trabajo a este fin. Para cooperativas que tengan menos de cincuenta trabajadores y trabajadoras pero su estatuto prevea que estén representados en el Consejo Rector, regirán las mismas normas aquí expuestas.

El régimen aplicable a este vocal será igual que el establecido para los miembros del Consejo Rector que sean personas socias de la entidad, disponiendo de voz y voto en sus sesiones. La voluntad del legislador al incluir esta excepción a la regla general de composición del Consejo Rector es fomentar la participación de los trabajadores y

trabajadoras en los órganos de dirección de la empresa, máxime en esta forma social de clara inspiración democrática.

Miembros de personas inversoras. El artículo 35.6 del RLSCA establece que las personas inversoras podrán estar representadas en el Consejo Rector por un representante como miembro vocal, con voz pero sin voto. Esta designación debe estar prevista en el estatuto pudiendo condicionarse a la exigencia de cifras o porcentajes mínimos sobre el número de personas socias comunes o sobre el volumen de aportaciones realizadas por las personas inversoras al capital social. No obstante, la ley establece una excepción a la regla general de que la representación de las personas inversoras participará en el Consejo Rector únicamente con voz, será en el caso de que estas participen en los excedentes y pérdidas del ejercicio, en este caso el representante en el Consejo Rector tendrá además voto.

Miembros no socios ni socias. El artículo 35. 8 del RLSCA establece la posibilidad de que personas que no ostenta la condición de socias puedan ser nombradas consejeros o consejeras. Aquí se entiende como personas no socias en sentido amplio aquellas que no tengan ninguna relación societaria o laboral con la entidad. La normativa exige tres requisitos para este nombramiento: que esté previsto estatutariamente, que el número no exceda de un tercio del total y que esté justificado el nombramiento porque la cualificación profesional, experiencia técnica o empresarial de estas personas, puedan contribuir al más eficaz cumplimiento de las funciones encomendadas a este órgano.

Estas personas estarán obligadas a guardar secreto sobre los asuntos de la cooperativa, tendrán voz y, salvo que estatutariamente se establezca lo contrario, dispondrán de voto en el Consejo Rector, pero en ningún caso podrán ostentar la Presidencia ni la Vicepresidencia. Su nombramiento se realizará por el Consejo Rector y se ratificará en la primera Asamblea General que se celebre con posterioridad al mismo, constando tal extremo en el orden del día.

Procedimiento para la elección de miembros del Consejo Rector.

El procedimiento para la elección de los consejeros y consejeras del Consejo Rector está brevemente regulado por la ley y el reglamento de desarrollo, limitándose a establecer unos requisitos de mínimos y remitiendo a la regulación estatutaria los aspectos concretos



del procedimiento. Veamos pues estos requisitos legales mínimos que debe cumplir el procedimiento de elección de este órgano societario:

La elección de las personas consejeras se realizará en la Asamblea General a través de votación secreta de todas las personas socias asistentes según lo establecido en el artículo 30.3 de la LSCA. Establece la ley la votación secreta con carácter preceptivo a fin de salvaguardar la libertad de las personas socias a la hora de elegir los miembros del órgano. A cargo de la sociedad estará el establecer los instrumentos que garanticen la privacidad del voto.

Se requiere mayoría simple para la elección con las únicas excepciones establecidas anteriormente para los casos especiales de representación. Se entenderá por mayoría simple aquella opción que obtenga el mayor número de votos.

El nombramiento de los consejeros y consejeras necesitará para su eficacia la aceptación de estos. El reglamento establece un plazo de cinco días para que las personas elegidas acepten la elección. Así parece que en principio la persona socia elegida es libre para aceptar el cargo o no, pero ha de tenerse en cuenta que el artículo 20 f) de la LSCA se establece que será una obligación de la persona socia aceptar los cargos sociales para los que fuese elegida, salvo que exista causa justificada que impida el ejercicio del mismo. Por lo tanto la persona socia no puede excusarse del ejercicio del cargo sin más, sino mediante causa justificada. La aceptación es una obligación de hacer personalísima que en caso de no cumplirse no puede ser sustituida por la voluntad ajena. En caso de incumplimiento sin causa justificada se podrá aplicar las sanciones que correspondan por decisión del órgano competente.

La elección deberá inscribirse en el Registro de Cooperativas Andaluzas para que surta efectos frente a terceros conforme al artículo 14 RLSCA. La inscripción por tanto únicamente tendrá efectos declarativos y no efectos constitutivos. Será inscribible el acta de la Asamblea General donde conste la adopción del acuerdo de la elección. La inscripción se practicará en virtud de certificación expedida por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Aparte de estos requisitos mínimos obligatorio, la ley y el reglamento establecen dos fórmulas optativas que el estatuto puede prever para este procedimiento de elección:

Podrá realizarse la elección de los miembros del Consejo Rector a lo largo de una jornada cuya duración se establecerá en la correspondiente convocatoria, de forma continuada y mediante la constitución de una mesa electoral. Esta nueva fórmula supone una novedad en la redacción de la normativa sobre cooperativas. La voluntad del legislador pretende facilitar una fórmula práctica para que la sociedad pueda cumplir su obligación de facilitar los instrumentos necesarios a fin de garantizar el secreto del voto. No obstante, la regulación detallada de cómo se procederá para la constitución de la mesa electoral queda reservada al estatuto que a nuestro juicio deberá contemplar al menos cómo se escogerá las personas que conformen la mesa electoral, cuál será el método de votación y en qué forma se llevará a cabo el recuento de la votación.

La ley establece de forma indirecta la posibilidad de que los estatutos societarios prevean la presentación de candidaturas que concurran para formar parte del Consejo Rector. Decimos que lo prevé indirectamente puesto que lo que hace es establecer unos requisitos en el caso de que estas candidaturas existan, sin enunciar de manera expresa esta posibilidad. La ley establece que nadie podrá presentarse al cargo fuera del procedimiento señalado en los estatutos y que la presentación de candidaturas fuera del plazo marcado en los estatutos será nula. Entendemos por tanto que existe la posibilidad de concurrir a esta elección conformando candidaturas. Queda para la discusión doctrinal si, en el caso de preverse estatutariamente la posibilidad de concurrir al Consejo Rector a través de candidatura, impide que una persona socia pueda presentarse individualmente a la elección. Teniendo en cuenta que la elección se configura como un derecho de la persona socia por el mero hecho de serlo cualquier cláusula estatutaria que limitara este derecho debería ser considerada ilícita.

Presencia equilibrada de socios y socias en el Consejo Rector.

El artículo 38 de la ley cierra con un mandato de género para las sociedades cooperativas, para que estas procuren la presencia equilibrada de socios y socias en el Consejo Rector. Cumple así el legislador andaluz con los mandatos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que establece en su artículo 75 que “las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su Consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta Ley. Lo previsto en el párrafo anterior se

tendrá en cuenta para los nombramientos que se realicen a medida que venza el mandato de los consejeros designados antes de la entrada en vigor de esta Ley”.

Expone el legislador en la exposición de motivos de la ley de Cooperativas que el principio de igualdad de género, sin formar parte expresa del ideario cooperativo inicial, entre otras, por razones cronológicas, se incardinan en la misma corriente de pensamiento progresista que en sus orígenes asumió dicho sector, hasta el punto de que en la actualidad forman parte del compromiso de buena parte del mismo.

Se entiende como presencia equilibrada que al menos un 40% de los miembros del Consejo Rector deben ser ejercidos por mujeres.

### **ARTÍCULO 39. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANDATO DEL CONSEJO RECTOR.**

*1. El Consejo Rector elegirá de entre sus miembros a las personas titulares de la Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría y demás cargos previstos estatutariamente, salvo que tal facultad venga atribuida a la Asamblea General por los estatutos.*

*2. El Consejo Rector se convocará por la persona titular de la Presidencia o por quien le sustituya legalmente, a iniciativa propia o a petición de cualquier otro miembro del Consejo. Si la solicitud no fuese atendida en el plazo de diez días, podrá ser convocado por quien hizo la petición, siempre que logre para su convocatoria la adhesión, al menos, de un tercio del Consejo.*

*No será necesaria convocatoria cuando, estando presentes todos los consejeros y consejeras, decidan por unanimidad la celebración del Consejo.*

*3. El Consejo Rector se reunirá con la periodicidad que establezcan los estatutos y, como mínimo, una vez al año, quedando válidamente constituido cuando concurran a la sesión la mitad más uno de sus componentes. En segunda convocatoria, quedará constituido cualquiera que sea el número de asistentes. Los estatutos determinarán el plazo que deba transcurrir entre la primera y la segunda convocatoria.*

*La actuación de sus miembros será personalísima, sin que puedan hacerse representar por otra persona. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, dirimiendo el voto de la Presidencia los empates que pudieran producirse.*

*Cuando los estatutos lo prevean, el Consejo Rector podrá adoptar acuerdos sin necesidad de reunirse, mediante votación por escrito, siempre que ningún consejero se oponga a este procedimiento. Los estatutos que contemplen esta posibilidad deberán regular las peculiaridades propias de esta actuación.*

*4. Si los estatutos sociales lo prevén, tanto la convocatoria como el desarrollo de las sesiones del Consejo Rector podrán realizarse, con plena validez a todos los efectos, mediante cualquier medio técnico, informático o telemático, o cualquier otro que permitan las tecnologías de la información y la comunicación.*

*Reglamentariamente, se establecerán las garantías necesarias para la realización de ambos actos, en especial las relativas al procedimiento, las condiciones y los requisitos necesarios para las votaciones no presenciales, en las que se garantizará la identidad de la persona socia, la autenticidad del voto y, en los supuestos en que así esté previsto, su confidencialidad.*

*5. Reglamentariamente, se regulará la asistencia de personas ajenas al Consejo Rector a sus sesiones, las atribuciones de la Presidencia en caso de urgencia y los requisitos del acta, cuya redacción corresponde a la Secretaría del Consejo Rector.*

*6. Los estatutos fijarán el periodo de duración del mandato del Consejo Rector, que no podrá ser inferior a tres años ni superior a seis, finalizado el cual, se renovará el Consejo en su totalidad, sin perjuicio de que sus miembros puedan ser reelegidos para sucesivos periodos.*

*Los miembros del Consejo Rector continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca su renovación, aunque haya concluido el periodo para el que fueron elegidos.*

*7. Las situaciones relativas a las vacantes, suplencias, renunciaciones y revocaciones que se produzcan en el seno del Consejo Rector se regularán reglamentariamente.*

**Concordancia con los artículos 36, 37 y 38 del Reglamento de Desarrollo de la ley de cooperativas.**

## **ARTÍCULO 36. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL CONSEJO RECTOR.**

*1. La organización y desarrollo de las sesiones del Consejo Rector se ajustarán a lo previsto en el artículo 39 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*2. Corresponde al titular de la Presidencia o a la persona que le sustituya legalmente, la convocatoria del Consejo Rector, debiendo la Secretaría del órgano justificar la notificación de dicha convocatoria, junto con la remisión de la documentación necesaria para proporcionar a las personas consejeras una información suficiente sobre los temas a tratar durante la sesión, con una antelación suficiente fijada en los estatutos sociales.*

*No obstante, en casos de urgencia, la Presidencia podrá tomar las medidas que considere imprescindibles para evitar cualquier daño o perjuicio a la cooperativa, aunque se inscriban en el ámbito de competencias del Consejo Rector. En estos supuestos, dará cuenta de las mismas y de su resultado al primer Consejo Rector que se celebre a efectos de su posible ratificación.*

*3. La Presidencia de la cooperativa o quien le sustituya legalmente podrá convocar a la reunión, a iniciativa propia o a petición de cualquier persona consejera, a los titulares de la Dirección, a los miembros del Comité Técnico o de la Intervención, así como a los técnicos o técnicas de la cooperativa o a otras personas cuya presencia sea de interés para la buena marcha de los asuntos sociales. En ninguno de estos casos las personas convocadas tendrán derecho a voto.*

*4. Los estatutos sociales podrán prever, dentro del régimen de notificación y publicidad de la convocatoria y en sustitución de la notificación personal, la posibilidad de la utilización de cualquier medio técnico, informático o telemático que permitan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, siempre que, además de cumplir los requisitos exigidos en el artículo 29.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, para la convocatoria telemática de la Asamblea General, el uso de estos medios garantice el no repudio de la información recibida.*

*Concretamente, la sociedad cooperativa podrá establecer en sus estatutos que la convocatoria del Consejo Rector se realice mediante anuncio publicado en la página web de la entidad.*

*La sociedad cooperativa garantizará la seguridad de la página web, la autenticidad de los documentos publicados en esa página, así como el acceso gratuito a la misma con posibilidad de descarga e impresión de lo insertado en ella.*

*5. Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el domicilio social, pero podrán también celebrarse en cualquier otro lugar que determine la Presidencia.*

*También podrán celebrarse, si los estatutos sociales así lo prevén, las reuniones del Consejo con asistencia simultánea en distintos lugares conectados por medios técnicos, informáticos o telemáticos o cualquier otro que permitan las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre que se asegure el reconocimiento de las personas concurrentes y la interactividad e intercomunicación en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto. En la convocatoria se hará constar el sistema de conexión y, de resultar aplicable, los lugares en que están disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. La reunión se entenderá celebrada en el lugar donde se halle el mayor número de miembros del Consejo reunidos y, a igualdad de número, en el lugar en que se encuentre quien presida la reunión. En cualquier caso, la persona que ejerza la Secretaría del Consejo Rector dejará constancia en las actas de todos estos extremos y dará fe de la válida constitución y celebración del Consejo Rector, detallando el número de miembros asistentes; el lugar desde el que cada uno de los miembros del Consejo asistió a la reunión; y el medio de asistencia a distancia utilizado.*

*Para asistir e intervenir en las reuniones del Consejo Rector a través de cualquiera de los medios indicados en el párrafo anterior, sus miembros deberán disponer, para garantizar su identificación, de acceso individual a través de contraseña y usuario, que habrán de ser facilitados de manera confidencial por la sociedad cooperativa. Asimismo, para el ejercicio del derecho al voto en este tipo de reuniones, y con el fin de asegurar también su autenticidad, las personas administradoras deberán disponer, además, de firma electrónica avanzada, basada en un certificado electrónico reconocido, o de firma electrónica incorporada al documento nacional de identidad, debiendo garantizarse la reserva de la identidad de las personas firmantes en el caso de que el voto sea secreto.*

## Comentario.

Veamos detenidamente cada uno de los aspectos de funcionamiento del Consejo Rector.

### 1. Distribución de los Cargos en el Consejo Rector.

La ley establece con carácter obligatorio tres cargos sociales que deben cubrir los miembros del Consejo Rector: Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría. Aunque la ley remite al estatuto para establecer el número mínimo de miembros que debe tener el Consejo Rector, se entiende que este número mínimo no podrá estar nunca por debajo de tres, pues ha de cubrirse los tres cargos orgánicos que con carácter obligatorio exige la ley. La nueva redacción de la LSCA ha optado por prescindir de la figura del Consejo Rector de solo dos miembros, que sí contemplaba la anterior ley para los casos en que la cooperativa estaba conformada por el número mínimo de socios que permite la ley para la constitución de sociedades cooperativas, o sea tres socios. Por tanto la figura de vicepresidente, que en la anterior normativa tenía carácter optativo para las cooperativas de tres socios, se erige en la actualidad con carácter obligatorio igualándose al resto de cargos societarios del Consejo Rector y deberá contemplarse en cualquiera que sea el número de personas socias en la entidad.

Como regla general, una vez elegidos los miembros del Consejo Rector, estos se distribuirán los cargos entre sí, sin embargo la ley prevé que pueda ser la misma Asamblea General la que además de elegir los miembros que formarán parte del Consejo Rector, distribuya los cargos que han de desempeñar. Se requiere que el estatuto contemple expresamente esta competencia de la Asamblea General, por lo que en el caso de no contemplarse se estará a lo dispuesto con carácter general.

### 2. Convocatoria del Consejo Rector.

La normativa establece tres tipos de procedimiento por el que puede ser convocado el Consejo Rector dependiendo de la persona que la promueve:

Como regla general la persona titular de la Presidencia o quien le sustituya legalmente es la responsable de lanzar la convocatoria. La Presidencia podrá convocar al órgano por iniciativa propia o a petición de cualquier persona consejera. El reglamento establece una excepción para que La Presidencia pueda actuar dentro del ámbito de competencias del Consejo Rector sin convocarlo previamente. Dicha excepción concurrirá cuando exista



una urgencia, y siempre que las medidas adoptadas estén encaminada a evitar cualquier daño o perjuicio a la cooperativa.

Excepcionalmente cualquier miembro del Consejo Rector podrá convocar siempre que se den unos determinados requisitos, a saber: que previamente haya hecho la petición de convocatoria a la Presidencia, que esta no haya sido atendida en un plazo de 10 días, y que logre para la adhesión a su convocatoria al menos a un tercio del Consejo. Interpretamos que la voluntad del legislador al utilizar la expresión “atendida” supone que de forma efectiva le dé trámite a esta convocatoria. Si desde la Presidencia se acusará recibo de esta petición y se respondiera de forma negativa dentro del plazo legal de 10 días no quedaría atendida la petición y por tanto la persona Consejera que promueve podría convocar al Consejo siempre que contara con las adhesiones suficientes.

Consejo Rector Universal. Podrá entenderse constituido el Consejo Rector prescindiendo de convocatoria alguna cuando estén presentes todos los consejeros y consejeras y decidan por unanimidad la celebración del Consejo. Deberán estar presente todas las personas consejeras y decidir por unanimidad la celebración del Consejo. Para que pueda darse este tipo de convocatoria deberá estar prevista expresamente en el estatuto societario.

Para la válida convocatoria la normativa exige dos requisitos formales básicos:

Deben quedar acreditada la notificación a todas las personas miembros del Consejo. Para ello la Secretaría del órgano debe dejar constancia de la notificación de dicha convocatoria.

Junto a la notificación de la convocatoria deben remitirse la documentación necesaria para proporcionar a las personas consejeras una información suficiente sobre los temas a tratar durante la sesión, con una antelación suficiente fijada en los estatutos sociales.

Respecto a las notificación de la convocatoria, estas deben ser con carácter personal y remitirse a los domicilio que conste en el Libro de Socios y Socias para cada una de las personas consejeras.

Con el ánimo de agilizar y flexibilizar estos trámites de notificación el legislador permite el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación al igual que ya introducía en el caso de la convocatoria de la Asamblea General. Para que estas tecnologías pueda

sustituir a la notificación personal esta debe estar expresamente regulada en el estatuto. Podrá utilizarse cualquier medio informático o telemático siempre que se garantice el no repudio de la notificación y siempre que se observen los protocolos que el uso de dichos medios lleva aparejados.

Concretamente, la sociedad cooperativa podrá establecer en sus estatutos que la convocatoria del Consejo Rector se realice mediante anuncio publicado en la página web de la entidad. La sociedad cooperativa garantizará la seguridad de la página web, la autenticidad de los documentos publicados en esa página, así como el acceso gratuito a la misma con posibilidad de descarga e impresión de lo insertado en ella.

La normativa prevé la posibilidad de que la Presidencia o quien le sustituye legalmente, a iniciativa propia o a petición de cualquier persona consejera convoque a personas que no sean miembros del Consejo Rector ni de la sociedad, siempre que tenga una causa justificada en el interés para la buena marcha de los asuntos sociales. A modo de ejemplo el RLSCA nombra a los titulares de la Dirección, a los miembros del Comité Técnico o de la Intervención, así como a los técnicos o técnicas de la cooperativa. En ninguno de estos casos las personas convocadas tendrán derecho a voto.

### 3. Celebración de reuniones del Consejo Rector.

Se presentan los aspectos legales a tener en cuenta para la correcta celebración del Consejo Rector:

- Periodicidad. El Consejo Rector se reunirá con la periodicidad que establezcan los estatutos y, como mínimo, una vez al año. En esta materia la actual normativa supone una importante modificación respecto al anterior al aumentar el periodo que debe transcurrir entre las reuniones del Consejo Rector de un mes a un año. Esta modificación responde al ánimo de flexibilidad y autonomía que la nueva legislación pretende propiciar para la sociedad cooperativa que vía estatutaria adaptaran los plazos mínimos para las reuniones del Consejo Rector que su propia realidad le requiera, sin el estrecho margen de un mes que imponía la anterior legislación.
- Constitución: Queda válidamente constituido el Consejo rector cuando concurren a la sesión la mitad más uno de sus componentes. Con la expresión “la mitad más uno” el legislador pretende referir que el consejo estará válidamente constituido cuando concorra la mayoría absoluta de sus miembros. En segunda convocatoria,

quedará constituido cualquiera que sea el número de asistentes. Serán los estatutos los encargados de determinar el plazo que deba transcurrir entre la primera y la segunda convocatoria.

- Lugar de Reunión. Como regla general las reuniones se celebrarán en el domicilio social de la cooperativa, no obstante por razones prácticas podrá celebrarse en cualquier otro lugar que determine la Presidencia. La normativa no hace más precisiones a esta excepción, no obstante ha de entenderse que deberá ser justificada y en todo caso celebrarse en la localidad donde esté establecido el domicilio social de la sociedad. Al igual que en el caso de la Asamblea General la normativa permite que se utilicen las nuevas tecnología de la información y la comunicación para poder llevar a cabo reuniones del Consejo Rector cuando sus miembros se encuentran en distintos lugares. Estas reuniones de asistencia simultánea de miembros que se encuentra en distintos lugares, requiere el cumplimiento de una serie de requisitos a fin de no desvirtuar la naturaleza de la reunión ni vulnerar el derecho de participación de ninguna de las personas consejeras:

z) Debe estar previsto de manera expresa en los estatutos societarios.

aa) Debe estar garantizado el reconocimiento de la identidad de las personas concurrentes. Entendemos que este precepto requiere que el medio utilizado garantice la imagen de la persona a través de cámara de video para que el resto de miembros participe en la reunión pueda reconocer su identidad. No obstante, sería válido cualquier otro medio informático que garantice la identidad. En relación con este requisito anterior se requiere que esta imagen sea tomada a tiempo real, quedando, por ejemplo, excluido por tanto una grabación de video en diferido. Ha de garantizarse por tanto la interactividad e intercomunicación en tiempo real y para que pueda acreditarse la unidad de acto.

bb) En la convocatoria de este tipo de reuniones deberá constar el sistema de conexión y, de resultar aplicable, los lugares en que están disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. Busca este precepto facilitar a las personas consejeras la utilización de los medios de comunicación e información a través de lo que se realice la reunión simultánea.

- cc) Así mismo, en el acta, la persona que ejerza la Secretaría del Consejo Rector, dejará constancia de todos estos extremos y dará fe de la válida constitución y celebración del Consejo Rector, detallando el número de miembros asistentes, el lugar desde el que cada uno de los miembros del Consejo asistió a la reunión y el medio de asistencia a distancia utilizado.
- dd) La sociedad cooperativa deberá garantizar que sus miembros dispongan para su identificación, de acceso individual a la plataforma virtual de comunicación que se escoja a través de contraseña y usuario, que habrán de ser facilitados de manera confidencial por la sociedad cooperativa.
- ee) Las personas administradoras deberán disponer de firma electrónica avanzada, basada en un certificado electrónico reconocido, o de firma electrónica incorporada al documento nacional de identidad para el ejercicio del derecho al voto en este tipo de reuniones, y con el fin de asegurar también su autenticidad, debiendo garantizarse la reserva de la identidad de las personas firmantes en el caso de que el voto sea secreto.
- ff) A efectos del acta este tipo de reunión se entenderá celebrada en el lugar donde se halle el mayor número de miembros del Consejo reunidos y, a igualdad de número, en el lugar en que se encuentre quien presida la reunión.

### **ARTÍCULO 37. ACTA DEL CONSEJO RECTOR.**

*El acta de cada sesión del Consejo Rector, firmada por la Presidencia y por la Secretaría del mismo, recogerá sucintamente el contenido de los debates, el texto de los acuerdos y el resultado de las votaciones, así como la fecha, el lugar y la hora de celebración, debiendo aprobarse como último punto del orden del día, o dentro de los diez días siguientes a su celebración por la Presidencia, Secretaría y otro miembro, al menos, de dicho órgano, elegido por éste, o en la siguiente sesión del mismo. Dentro de los diez días siguientes a su aprobación, se transcribirá al libro de actas de órganos sociales.*

#### **Comentario.**

El acta del Consejo Rector. El artículo 37 del RLSCA establece los contenidos del acta del consejo rector así como los requisitos procedimentales para su validez. Supone una novedad este precepto en la normativa de cooperativas andaluzas, pues la anterior

legislación regulaba esta materia de manera muy somera remitiendo su contenido casi íntegramente al estatuto. Sirve pues esta nueva regulación para una orientación práctica a la hora de desarrollar la labor de administración de la sociedad.

El contenido mínimo de acta del Consejo Rector.

El contenido sucinto de los debates

El texto de los acuerdos

El resultado de las votaciones

La fecha, el lugar y la hora de celebración

Requisitos de procedimiento:

a) Ir firmada por la Presidencia y por la Secretaría

b) Aprobarse por los miembros del Consejo en alguno de estos tres momentos:

Como último punto del orden del día de la misma reunión en que se levanta.

Dentro de los diez días siguientes a su celebración por la Presidencia, Secretaría y otro miembro elegido por el Consejo sin necesidad de celebrar una nueva reunión.

En la siguiente sesión del consejo Rector.

Una vez aprobada se transcribirá al libro de actas de órganos sociales.

### **ARTÍCULO 38. VACANTES, SUPLENCIAS, RENUNCIAS, REVOCACIONES Y SUSPENSIONES EN EL CONSEJO RECTOR.**

*1. Las vacantes que se produzcan en el Consejo Rector se cubrirán en la primera Asamblea General que se celebre. Si la distribución de los cargos es competencia de la Asamblea General, vacantes los correspondientes a la Presidencia o Secretaría, hasta tanto se celebre la Asamblea en que se cubran, sus funciones serán asumidas, respectivamente, por la persona titular de la Vicepresidencia y por el miembro vocal de mayor antigüedad, y en caso de igualdad, por el de mayor edad.*

*No obstante, los estatutos pueden prever la existencia de miembros suplentes para el supuesto de vacantes definitivas, determinándose en dicho caso, estatutariamente, su número y reglas de sustitución.*

*Las personas suplentes desempeñarán las funciones de las personas titulares a que sustituyan por el tiempo de mandato que restara a éstos.*

*2. Si quedasen vacantes los cargos de titular de la Presidencia o de la Secretaría y no fuere posible su sustitución por las reglas establecidas en este artículo, o si quedase un número de miembros del Consejo Rector insuficiente para constituir válidamente éste, los consejeros y consejeras que restasen, antes de transcurridos quince días desde que se produzca dicha situación, deberán convocar Asamblea General en que se cubran los cargos vacantes.*

*Si resultan vacantes todos los puestos del Consejo Rector, el Comité Técnico o, en su defecto, la persona socia de mayor antigüedad, y en caso de igualdad, la de mayor edad, deberá convocar, en el plazo indicado en el párrafo anterior, la Asamblea General para que se cubran dichos cargos.*

*3. En caso de ausencia o enfermedad de la persona titular de la Presidencia o de la Secretaría del Consejo Rector, estas serán suplidas temporalmente, de forma respectiva, por la persona titular de la Vicepresidencia y por el miembro vocal de mayor antigüedad, y en caso de igualdad, por el de mayor edad.*

*4. Los miembros del Consejo Rector podrán renunciar a sus cargos por justa causa de excusa, correspondiendo al mismo su aceptación. También podrá la Asamblea General aceptar la renuncia aunque el asunto no conste en el orden del día.*

*La renuncia producirá por si sola efectos extintivos, quedando vacante el cargo. No obstante, si el Consejo Rector o, en su caso, la Asamblea General no aceptase la renuncia al no apreciar la existencia de justa causa de excusa, la persona dimisionaria carecerá de derecho de sufragio pasivo en las próximas elecciones a miembros del Consejo Rector de la sociedad cooperativa.*

*Si la renuncia originase alguna de las situaciones a las que se refiere el apartado 2, además de convocarse la Asamblea General en el plazo que en el mismo se establece,*

*los miembros del Consejo Rector deberán continuar en sus funciones hasta que esta se reúna y las personas elegidas acepten el cargo.*

*5. El Consejo Rector podrá ser revocado total o parcialmente, siempre que dicho asunto conste en el orden del día de la Asamblea General. El acuerdo de revocación se adoptará mediante votación secreta y requerirá mayoría simple.*

*En caso de revocación total de los miembros del Consejo Rector y no estando prevista la existencia de suplentes, la propia Asamblea que adoptó el acuerdo de revocación procederá, directamente, a la elección de un nuevo Consejo Rector o a encomendar al Comité Técnico, en su caso, la convocatoria de una nueva Asamblea, en el plazo máximo de quince días, en la que se cubran tales cargos.*

*6. Los miembros del Consejo Rector afectados quedarán suspendidos en sus cargos como consecuencia del ejercicio de la acción de responsabilidad por parte de la sociedad cooperativa, previo acuerdo de la Asamblea General y sin necesidad de la inclusión del asunto en el orden del día, con arreglo a lo previsto en el artículo 51.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*Ante la inexistencia de suplentes y con el objeto de cubrir los cargos afectados por la suspensión de sus titulares, mientras dure el procedimiento judicial o arbitral iniciado contra ellos, se actuará de alguna de las siguientes formas:*

*a) Si la suspensión originase la situación referida en el párrafo primero del apartado 2 se seguirá el procedimiento que el mismo regula.*

*b) Si la suspensión afectase a todos los miembros del Consejo Rector y el asunto hubiese formado parte del orden del día de la Asamblea General, se procederá conforme a lo previsto en el apartado anterior a propósito de la revocación total.*

*c) Si la suspensión afectase a todos los miembros del Consejo Rector pero el asunto no hubiese formado parte del orden del día, se facultará al Comité Técnico para que convoque una nueva Asamblea General y, en su defecto, se facultará a un número de personas socias presentes no superior a tres, para que realicen dicha convocatoria.*

## **Comentario.**



Según la normativa de cooperativas será el estatuto societario quien prevea tiempo de duración del mandato del Consejo Rector, limitándose la ley a establecer un plazo máximo y mínimo dentro del cual el estatuto deberá establecer un tiempo exacto. El tiempo mínimo legal es de tres años y el máximo de seis años. La nueva normativa establece un plazo superior al plazo mínimo dado por la anterior normativa para el mandato del Consejo Rector, aumentando de dos años a los tres años actuales. Responde esta modificación al ánimo del legislador de flexibilizar los plazos, sin dejar de proponer un marco de mínimo, a fin de que sea la propia sociedad quien tenga un margen holgado a la hora de proponer sus plazos mínimos para el mandato en su estatuto societario.

A pesar de que el estatuto cumpla esta previsión legal y establezca un plazo exacto de duración del mandato del Consejo Rector, la vida societaria está expuesta a innumerables vicisitudes que puede provocar que los miembros del consejo rector dejen de poder ejercer el mandato antes de culminar su plazo. Para hacer frente a estas situaciones y garantizar el ejercicio correcto de este órgano de Administración, el legislador, vía reglamentaria, establece las siguientes previsiones:

- Para el caso de vacantes.

En el caso de que se produjera una vacante entre los miembros del Consejo Rector, porque alguno de ellos tuviera que dejar de ejercer su cargo de manera definitiva, se establece como regla general que la Asamblea General que se celebre con posterioridad a producirse esta vacante deberá nombrar a un nuevo miembro. Tiene su fundamento esta regla general en el hecho de la competencia exclusiva y excluyente que tiene designada la Asamblea General para la elección de las personas miembros del Consejo Rector (artículo 28 de la LSCA).

Puede suceder que esta vacante sea de la persona que ejerce la función de la presidencia o la secretaría, en este caso en pos de garantizar el buen funcionamiento del órgano y no demorar la solución hasta la siguiente Asamblea General, la normativa establece las siguientes reglas:

Si la competencia de la distribución recayera en el propio Consejo Rector, por no tenerla atribuida expresamente la Asamblea General vía estatutaria, corresponderá a las personas

miembros elegir una nueva persona de entre ellas para cubrir la vacante de la presidencia o la secretaría.

En el caso de que la competencia para la atribución de cargo la tenga atribuida la Asamblea General, porque así lo prevean los estatutos, la ley propone una solución temporal en pos del buen funcionamiento del órgano mientras se celebra la Asamblea General. En este caso si la vacante fuera de la presidencia sus funciones las cubrirá la vicepresidencia. Si la vacante fuera de la Secretaría sus funciones la cubrirá el miembro vocal del Consejo Rector de más antigüedad, y en caso de idéntica antigüedad la persona de mayor edad.

Es posible que ninguna de estas reglas sea necesaria porque el propio estatuto ya prevea la existencia de suplentes vacantes definitivas. En cuanto al número de suplentes y su entrada en el Consejo, habrá que remitirse al estatuto tal como ordena la ley. Independientemente del proceso que establezca el estatuto entendemos que para constituir esta suplencia rigen las mismas normas establecidas para el nombramiento de consejeros y consejeras del Consejo Rector, en concreto la aceptación del cargo por parte de la persona suplente y su inscripción en el Registro de Cooperativas.

La ley establece un precepto a modo de garantía para el caso de que ninguna de estas reglas pudiera solucionar el problema de la vacante, bien porque quedasen vacantes los cargos de titular de la Presidencia o de la Secretaría y no fuere posible su sustitución por las reglas establecidas en este artículo, o bien porque quedase un número de miembros del Consejo Rector insuficiente para constituir válidamente éste. Ante esta situación y con el fin de garantizar el desarrollo de la actividad de administración que tiene encomendada este órgano societario, los consejeros y consejeras que restasen, antes de transcurridos quince días desde que se produzca la situación de la vacante, deberán convocar Asamblea General en que se cubran estos cargos.

Por último establece una segunda garantía para cuando resulten vacantes todos los puestos del Consejo Rector. Ante esta extrema situación el Comité Técnico o, en su defecto, la persona socia de mayor antigüedad, y en caso de igualdad, la de mayor edad, deberá convocar, en el plazo de quince días desde que se produce la vacante, la Asamblea General para que se cubran dichos cargos.

En cualquiera de estas circunstancias las personas suplentes desempeñarán las funciones de las personas titulares a que sustituyan por el tiempo de mandato que restara a éstos.

- Para el caso de suplencias.

Se entiende una situación de suplencia cuando una de las personas miembros del Consejo Rector que desempeñan las funciones de presidencia o secretaría se ve incapacitada para desarrollar sus funciones de forma temporal. Es el criterio de temporalidad lo que diferencia a esta figura de la vacante: si bien la vacante es un cese definitivo de la actividad, la suplencia es solo un cese temporal. La ley establece dos causas para esta situación: ausencia o enfermedad; sin embargo entendemos que es a modo de ejemplo, pues cabría cualquier otra circunstancia que de manera justificada impidiera el desarrollo de la actividad del consejero o consejera como sería por ejemplo, una baja maternal. Para este tipo de casos la normativa prevé que estos miembros sean suplidos temporalmente por la persona titular de la Vicepresidencia en caso de la Presidencia y por el miembro vocal de mayor antigüedad, y en caso de igualdad, por el de mayor edad para el caso de la Secretaría.

- Para caso de renunciaciones.

La normativa exige que para que la persona consejera pueda renunciar a su cargo debe concurrir causa justificada. Ni la ley ni el reglamento prevén cuáles serán estas causas por lo que se entiende que deberán estar reguladas en el estatuto. Este precepto es consecuencia de la configuración del ejercicio del cargo como un deber que establece el artículo 20.f) de la LSCA. La ley anterior establecía que esta renuncia debía ser aceptada por el Consejo Rector y posteriormente ratificada por la Asamblea General. En la actualidad la renuncia debe ser aceptada únicamente por la Asamblea General, por lo que esta debe ser convocada en el menor plazo posible, el legislador establece que deberá ser convocada la Asamblea en el plazo de cinco días desde que se produzca la renuncia. Este plazo tan breve funciona como una garantía de que la sociedad no quedará descabezada durante un plazo muy extenso. La ley obliga a la persona renunciante a permanecer en el ejercicio del cargo hasta que se celebre la Asamblea, se escoja una nueva persona consejera y esta acepte el cargo. En el caso de que no exista causa justificada y la Asamblea no acepte la renuncia, o el renunciante no cumpla con su deber de permanecer en el cargo hasta el nuevo nombramiento, cabe que la sociedad

cooperativa exija al renunciante la indemnización por daños y perjuicios, amén de aplicarle las sanciones que estatutariamente estén previstas conforme al artículo 21 de la LSCA.

- Para caso de revocación.

Por lo que se refiere a la revocación de la persona consejera, es principio elemental en toda sociedad que el cargo de miembro está siempre a disposición de la Asamblea que podrá revocar a los miembros del Consejo Rector en cualquier momento. No obstante para la validez de esta revocación se requiere una serie de requisitos:

El punto sobre la revocación debe estar incluido en el orden del día de la Asamblea. Este requisito tiene una excepción en el caso de que cuando la revocación sea consecuencia de la acción de responsabilidad.

La votación será secreta.

Se requiere mayoría simple para aprobar la revocación.

Cualquiera que sea la causa que motive el cese de la persona consejera, esta deberá ser suplida por los medios previstos por la ley para el caso de suplencias que hemos expuesto al inicio de este epígrafe.

- Para casos de suspensión.

La Asamblea General tendrá potestad para suspender del ejercicio de su mandato a los miembros del Consejo Rector, observando los mismos requisitos que se han expuesto en el apartado anterior para el caso de revocación. La única diferencia entre la revocación y la suspensión es el carácter temporal de esta última, en comparación con el cese definitivo del mandato que supone la revocación.

#### **ARTÍCULO 40. DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL CONSEJO RECTOR.**

*1. El Consejo Rector, si los estatutos lo prevén, podrá designar de entre sus miembros una Comisión Ejecutiva o una o más personas consejeras delegadas, en quienes*

*delegará de forma permanente o por un periodo determinado aquellas facultades que sean susceptibles de ello.*

*2. Las facultades delegadas solo podrán alcanzar al tráfico empresarial ordinario de la sociedad cooperativa, conservando en todo caso el Consejo Rector, con carácter exclusivo e indelegable, las facultades comprendidas entre las letras a) y h), ambas inclusive, del artículo 37.2, regulador del régimen competencial del citado órgano.*

*3. La delegación de alguna facultad del Consejo Rector en la Comisión Ejecutiva o en el Consejero Delegado y la designación de los miembros del Consejo que hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de sus componentes. La designación de las personas consejeras delegadas y de los miembros que vayan a integrar la Comisión Ejecutiva, las facultades permanentes que le hayan sido conferidas y su sustitución, modificación o revocación deberán ser inscritas en el Registro de Cooperativas Andaluzas en la forma que se determine reglamentariamente.*

## **Comentario.**

Con el ánimo de agilizar el cometido del Consejo Rector y distribuir sus competencias entre las personas que lo conforman, la ley abre la posibilidad a que el estatuto societario pueda prever que exista una Comisión Ejecutiva o una o más personas consejeras delegadas que tendrán atribuidas las facultades del Consejo.

La comisión ejecutiva es un órgano colegiado, es decir estará compuesto por varias personas consejeras las cuales ostentarán de forma conjunta las facultades delegadas por el Consejo Rector. En cambio la persona o personas delegadas ostentarán de forma individual las facultades delegadas que se le atribuya. En el caso de ser varias las personas delegadas el acuerdo de su nombramiento deberá expresar si su actuación es solidaria o mancomunada.

La delegación de facultades puede hacerse sobre alguna de las competencias del Consejo Rector o sobre todas sus competencias, con las limitaciones que se expondrá a continuación. Así mismo la delegación puede ser con carácter temporal o con ánimo de permanencia en el tiempo.

La ley establece unos requisitos básicos para que pueda llevarse a cabo esta delegación de facultades:

Qué esté previsto en los estatutos societarios.

Que sean nombrados entre las personas miembros del Consejo Rector en pos del principio de autorregulación y autonomía del Consejo Rector.

Las facultades delegadas solo pueden alcanzar al tráfico empresarial ordinario, es decir los actos de representación y administración que formen parte del objeto societario y sea necesaria para su consecución. Quedan excluidas de delegación las facultades que tengan atribuidas el Consejo Rector con carácter indelegable y en concreto las siguientes:

- a) Fijación de criterios básicos de la gestión.
- b) Presentación a la Asamblea General de las cuentas del ejercicio y demás documentos necesarios según la normativa contable aplicable, así como la propuesta de distribución o asignación de los resultados positivos o de imputación de pérdidas, en su caso.
- c) Control del ejercicio de las facultades delegadas.
- d) Otorgamiento de poderes generales.
- e) Prestación de avales, fianzas o garantías reales a favor de otras personas con cargo al patrimonio de la sociedad cooperativa, salvo lo dispuesto para la de crédito, y autorización a la Dirección para actos de disposición relativos a dichos derechos reales, fianzas o avales. Todo ello sin perjuicio de la limitación establecida en el artículo 28.1) sobre competencias de la Asamblea General.
- f) Integración en consorcios, uniones o agrupaciones de carácter económico o participación en el capital social de cualquier tipo de entidad, siempre que estas actuaciones no representen más del veinte por ciento de su cifra de negocio, obtenida de la media de los dos últimos ejercicios económicos. El acuerdo adoptado deberá constar en el orden del día y ser ratificado, en su caso, por la Asamblea General inmediatamente posterior.
- g) Aquellas que le hayan sido delegadas por la Asamblea General.

h) Decidir sobre el rehúse del reembolso de las aportaciones de las personas socias.

El procedimiento para la Delegación de Facultades:

Como regla general la delegación de facultades se realizará por acuerdo del Consejo Rector. Teniendo en cuenta que para que esta delegación sea posible debe de existir una previsión estatutaria, el estatuto podría prever que el órgano encargado del nombramiento de esta comisión ejecutiva o personas delegadas del consejo Rector fuera la Asamblea General. Entendemos que esta previsión sería válida pues supone un plus de garantía en la elección de esta Comisión. No sería por tanto válida que se estableciera en el estatuto que la delegación se realizará por un órgano societario inferior a la Asamblea pues restaría garantías democráticas a la delegación.

En el caso de que la delegación de facultades esté prevista como una competencia del Consejo Rector esta debe ser acordada por el voto favorable de las dos terceras partes de sus componentes para que pueda gozar de validez. Esta regla general de votación está establecida por la ley para cualquier forma de delegación sea esta para algunas o todas las facultades del Consejo Rector, sea otorgada a una comisión ejecutiva o a personas delegadas, o sea con carácter temporal o permanente.

Para que este acuerdo tenga validez, deberá ser documentado en acta del Consejo Rector y debe contemplar expresamente los siguientes extremos:

Si la delegación se hace a una Comisión ejecutiva o a personas o personas delegadas.

Qué personas han sido designadas.

Las atribuciones concretas a cada una de estas personas designadas.

La aceptación expresa de la persona o personas designadas.

Sobre qué facultades concretas se realiza la delegación.

Si la delegación tendrá carácter temporal o permanente. Si fuera temporal establecer la fecha de fin de la delegación.

El resultado de la votación



Firma del presidente y secretario

Fecha, lugar y hora de la celebración del Consejo Rector

Estos mismos requisitos deberán cumplirse para el caso de sustitución, modificación o revocación de estas delegaciones.

Como último requisito la ley exige que el acuerdo sobre la delegación de facultades del Consejo Rector deba ser inscrito en el Registro de Cooperativas para que tenga efectos declarativos. En concreto el artículo 124.3.b) del RLSCA establece que se inscribirán en el Registro de Cooperativas mediante certificación del acta que recoja el acuerdo del órgano de administración o, en su caso, mediante escritura pública la designación, de entre los miembros del Consejo Rector, de las personas Consejeras Delegadas y miembros de la Comisión Ejecutiva, las facultades permanentes que les hayan sido conferidas, su sustitución, así como la modificación o revocación de dichas facultades.

#### **ARTÍCULO 41. IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS DEL CONSEJO RECTOR.**

*Sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad regulada en el artículo 51, los acuerdos del Consejo Rector que se estimen contrarios a la ley o a los estatutos, o que lesionen, en beneficio de uno o varios de los socios o socias o de terceros, los intereses de la sociedad cooperativa, podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35, por los miembros de aquel que hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo alcanzado, por los no asistentes a la sesión en que se adoptó, por los que hayan sido ilegítimamente privados de emitir su voto, o por un número de personas socias que represente al menos un veinte por ciento en las sociedades cooperativas de más de mil, un quince por ciento en las de más de quinientas y un diez por ciento en las restantes, para el supuesto de acuerdos anulables, así como por cualquier persona socia en el caso de acuerdos nulos.*

#### **Comentario.**

Siguiendo las mismas reglas establecidas en el artículo 35 de la LSCA respecto a la impugnación de acuerdos de la Asamblea General, el artículo 41 de la LSCA establece el procedimiento para la impugnación de los acuerdos del Consejo Rector. En todo lo no

regulado expresamente por el artículo 41 regirán las reglas generales establecidas para la impugnación de los acuerdos de la Asamblea General. Con esta regulación específica para la impugnación de los acuerdos de los órganos sociales que no sean la Asamblea, el legislador mantiene su voluntad de propiciar la transparencia y la democracia en el funcionamiento de las entidades cooperativas.

Prácticamente la redacción se mantiene a lo que la anterior ley establecía en su artículo 62 para la impugnación de acuerdos del Consejo Rector. La principal novedad aparece en cuanto a la legitimación para poder impugnar estos acuerdos, siendo más garantista y detallada la actual redacción. La nueva ley establece que los acuerdos del Consejo Rector, además de poder ser impugnados por los miembros que hayan votado en contra del acuerdo y que no hayan asistido a la asamblea, podrán también impugnar aquellas personas miembros que asistieron a la asamblea y no pudieron manifestar su voto por privársele el mismo indebidamente. Así mismo, en pos de la seguridad del tráfico jurídico, el legislador regula el porcentaje de votos que necesitarán reunir las personas socias que pretendan ejercer la acción de nulidad frente a los acuerdos del Consejo Rector. En la actualidad la ley de cooperativas sigue manteniendo que el número de personas social que podrán impugnar los acuerdos del Consejo Rector deberán representar un porcentaje del diez por ciento de los votos, elevándose este porcentaje para las empresas de más de mil y más de quinientas personas socias en un veinte y un quince por ciento respectivamente.

Así pues la ley diferencia entre actos nulos y anulables entendiendo, que al igual que se establece en el artículo 35, se consideraran actos anulables los que se opongan a los estatutos o que lesionen, en beneficio de uno o varios socios o socias, o de terceros, los intereses de la sociedad cooperativa, y actos nulos los que sean contrarios al ordenamiento jurídico.

Están legitimados para ejercer la acción de nulidad frente a los actos anulables:

Los miembros del Consejo Rector que hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo alcanzado. La oposición podrá ser tanto a la celebración del Consejo Rector como a la votación del acuerdo, siempre que conste en el acta de la sesión.

Los miembros que no hayan asistido a la reunión del Consejo Rector. Este extremo deberá estar acreditado por contar su ausencia en la lista de asistentes que obligatoriamente debe recoger el acta.

Los miembros que hayan sido ilegítimamente privados de emitir su voto, por ejemplo porque el resto de consejeros y consejeras hubieran apreciado de forma incorrecta la concurrencia de una causa de incompatibilidad. En este caso deberán probar este hecho en el procedimiento judicial que origine el ejercicio de la acción de nulidad.

Por un número de personas socias que represente al menos un veinte por ciento en las sociedades cooperativas de más de mil.

Por un número de personas socias que represente al menos de un quince por ciento en las de más de quinientas.

Por un número de personas socias que represente al menos un diez por ciento en las sociedades de menos de quinientas.

Están legitimados para ejercer la acción de nulidad frente a los actos nulos cualquier persona socia independientemente del porcentaje de votos que represente en la Asamblea de la sociedad. El legislador rebaja las exigencias para el ejercicio de la acción de nulidad en el caso de que el acto sea considerado nulo y el único requisitos es ser persona socia de la entidad. Ha de tenerse en cuenta que el acuerdo es nulo cuando se opone al ordenamiento jurídico, por lo que es necesario que un acuerdo de este tipo deje de tener validez lo más inmediatamente posible pues el ordenamiento jurídico es un bien que merece la mayor protección judicial posible pues que son las normas que rigen en la sociedad.

En todo lo regulado en este artículo, principalmente respecto a los plazos para la impugnación y el proceso judicial pertinente regirá lo establecido en el artículo 35 de la LSCA referente a la impugnación de acuerdos de la Asamblea General.

## **ARTÍCULO 42. PERSONAS ADMINISTRADORAS.**

*1. Las sociedades cooperativas que cuenten con un número de personas socias comunes igual o inferior a diez podrán conferir su gobierno, gestión y representación a una*

*Administración Única, o a una Administración Solidaria que cuente con dos personas, siempre que se determine estatutariamente.*

*2. El régimen de estos órganos será el establecido en los artículos 37 a 41 para el Consejo Rector, así como en aquellos otros que contengan referencias a dicho órgano, en ambos casos, en todo lo que, conforme a su naturaleza, les sea de aplicación. Las facultades de la Presidencia y de la Secretaría corresponderán a la Administración Única o, indistintamente, a cada una de las personas que ostentan la representación solidaria, respectivamente.*

*3. La sustitución de estas personas administradoras, en relación con las competencias atribuidas por el artículo 29 para la convocatoria de la Asamblea General, si no estuviese prevista estatutariamente la existencia de suplentes, la ejercerá el socio o socia de mayor antigüedad, y, en caso de igualdad, el de mayor edad.*

*4. En el supuesto de vacante, si no estuviera prevista en los estatutos la existencia de suplentes, la persona socia de mayor antigüedad, y, en caso de igualdad, la de mayor edad, procederá a la convocatoria de la Asamblea General en la que se cubran tales cargos.*

*5. Las situaciones relativas a las vacantes, suplencias, renunciaciones y revocaciones de las personas administradoras se regularán reglamentariamente.*

#### **Concordancia con el Artículo 39. Del Reglamento de desarrollo.**

### **ARTÍCULO 39. VACANTES, SUPLENCIAS, RENUNCIAS, REVOCACIONES Y SUSPENSIONES DE LAS PERSONAS ADMINISTRADORAS.**

*1. Los estatutos pueden prever la existencia de miembros suplentes para el supuesto en el que se encuentren vacantes los cargos de las personas administradoras, determinándose en dicho caso, estatutariamente, su número y reglas de sustitución. En caso de no preverse estatutariamente la existencia de personas suplentes, se procederá conforme a lo establecido en los apartados siguientes.*

*2. En caso de vacante de ambos miembros de la Administración Solidaria o de la Administración Única, el Comité Técnico o, en su defecto, la persona socia de mayor antigüedad, y en caso de igualdad, la de mayor edad, deberá convocar, en el plazo de*

*tres días desde que se produzca dicha situación, la Asamblea General para que se cubran dichos cargos.*

*En caso de vacante de uno de los miembros de la administración solidaria, la otra persona administradora procederá a la convocatoria de la Asamblea General en el plazo establecido en el párrafo anterior, con objeto de cubrir la vacante producida.*

*3. Las personas administradoras podrán renunciar a sus cargos por justa causa de excusa, debiendo convocar ellas mismas la Asamblea General en el plazo máximo de cinco días desde que se origine dicha situación, para que ésta se pronuncie sobre su aceptación. Las personas administradoras deberán permanecer en el ejercicio de sus funciones hasta que se celebre la Asamblea y las personas elegidas acepten el cargo.*

*4. Las personas administradoras podrán ser revocadas, siempre que dicho asunto conste en el orden del día de la Asamblea General. También podrán ser objeto de suspensión como consecuencia del ejercicio de la acción de responsabilidad por parte de la sociedad cooperativa, de conformidad con lo dispuesto en el [artículo 51.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#), sin necesidad de la inclusión del asunto en el orden del día de la Asamblea.*

*En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 38, en lo que a la revocación y suspensión total del Consejo Rector, respectivamente, se refiere, al objeto de cubrir las vacantes producidas.*

## **Comentario.**

Esta regulación ya existía en la normativa anterior como un órgano residual; ahora, por el contrario, este órgano y los administradores solidarios, toma carta de naturaleza no accesorio, por lo que tiene su propio desarrollo reglamentario como expondremos a continuación.

La principal novedad respecto a la normativa anterior es que la Administración también podrá ser solidaria, es decir formada por dos personas que ejercerán las competencias de forma solidaria. La responsabilidad solidaria significa que cada una de las personas responden frente a la sociedad de sus obligaciones de forma conjunta, independientemente de que para un mejor desarrollo del trabajo puedan dividirse las competencias.

Para que una sociedad cooperativa pueda optar por alguna de esta forma de órgano de administración y prescindir del Consejo Rector, debe cumplir dos requisitos:

Que exista una previsión estatutaria donde se permita optar por personas administradoras, bien sea como Administración Única o Administración Solidaria.

Que la sociedad tenga un número de personas socias igual o inferior a diez.

El régimen de estos órganos se regirá por lo establecido en la LSCA para el Consejo Rector en todo lo que le sea de aplicación, especialmente en cuanto a las competencias, el procedimiento de elección, funcionamiento e impugnación de acuerdos.

Las únicas especialidades que establece la normativa son las que se generan a partir del hecho del número reducido de personas que componen este órgano societario, y en concreto las siguientes:

Las facultades de la Presidencia y de la Secretaría corresponderán a la Administración Única o, indistintamente, a cada una de las personas que ostentan la representación solidaria, respectivamente.

Se establece vía reglamentaria unas reglas específicas para los casos de vacantes, suplencias, renunciaciones, revocaciones y suspensiones. Estas reglas especiales tienen su razón de ser en el hecho de que, estando formado el órgano por una o dos personas, alguna se pueda ver impedida para el desarrollo de sus funciones y pudiera dejar descabezada la sociedad y por tanto dañar a la gestión cotidiana de la misma. Como regla general los estatutos son la herramienta adecuada para establecer el procedimiento a seguir en caso de que la suplencia de las personas administradoras sea necesaria, y por tanto pueden establecer el número de suplentes y las reglas de sustitución. Sería por tanto lo más adecuado que una sociedad que optara por contemplar en sus estatutos la Administración Única o Solidaria, junto a esta opción regulara el procedimiento a seguir en caso de vacante. No obstante el legislador, en pos del buen funcionamiento de las sociedades cooperativas, prevé unas reglas generales para la sustitución de personas administradoras para el caso de que el estatuto no contemple el modo de proceder ante estas situaciones. Veamos detenidamente estas reglas:

En caso de vacante de las dos personas Administradoras o de la persona Administradora única deberá convocarse Asamblea General en el plazo de tres días desde que se produzca la situación. Estarán legitimados para convocar esta Asamblea General:

Las personas administradora cuando la Administración sea solidaria y una de los administradores no pueda seguir ejerciendo sus funciones.

Con carácter subsidiario el Comité Técnico, siempre que la vacante sea de la persona Administradora Única o de las dos personas Administradoras Solidarias, y siempre que la sociedad cuente con este órgano societario.

Con carácter subsidiario en el caso de no contar la sociedad con Comité Técnico, la persona socia de mayor antigüedad en la sociedad, y en caso de que existan varias, la de mayor edad.

En el caso de renuncia, es decir cuando la vacante se produzca por la propia voluntad de la persona administradora, esta deberá cumplir los siguientes requisitos:

Que la renuncia esté motivada, pues el ejercicio de las funciones es una obligación de la persona socia establecida en el artículo 20 apartado f) de la LSCA. En el caso de no existir una motivación que sustente la renuncia la sociedad podrá exigir a la persona Administradora responsabilidades así como sancionar esta renuncia según prevea la ley y el estatuto.

Debe convocar Asamblea General en el plazo de 5 días desde que se produzca la situación que origina la causa de la renuncia, a fin de que la Asamblea General acepte la misma.

Debe permanecer en el cargo hasta que la Asamblea General acepte la renuncia y se escoja la persona que la sustituirá y esta acepte el cargo.

En caso de revocación, la dejación de funciones por parte de la o las personas administradoras se producirá por decisión de la Asamblea General. En este caso el debate sobre la revocación deberá constar en el orden del día.

En el caso de que se ejerza acción de responsabilidad contra la Administración por parte de la sociedad cooperativa conforme al artículo 51.1 de la LSCA, la suspensión podrá



llevarse a acabo por decisión de la Asamblea General sin que conste este punto en el orden del día y quedando las personas administradoras suspendidas de sus cargos.

### Sección 3ª Órganos potestativos

#### **ARTÍCULO 43. COMITÉ TÉCNICO.**

*1. Los estatutos podrán prever la existencia de un Comité Técnico, delegado de la Asamblea General, fijando su composición y su régimen de funcionamiento con arreglo a lo establecido en este artículo y su desarrollo reglamentario. Estará integrado, al menos, por tres miembros elegidos en votación secreta por la Asamblea General de entre los socios y socias con plenitud de derechos, sin perjuicio de que los estatutos prevean la existencia de un asesor o asesora de carácter externo. En todo caso, el número de miembros habrá de ser impar. El periodo de mandato oscilará entre los dos y seis años, en función de lo que estatutariamente se determine, si bien sus integrantes continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta el momento en que se produzca su renovación efectiva, aunque haya concluido el periodo para el que fueron elegidos. La duración de su mandato no podrá ser coincidente con el correspondiente al órgano de administración.*

*2. Los miembros del Comité Técnico tendrán atribuidas todas o algunas de las siguientes funciones, con arreglo a lo dispuesto en los estatutos:*

*a) De seguimiento y control.*

*b) De resolución de reclamaciones.*

*c) De resolución de apelaciones.*

*d) De garantía.*

*e) De información.*

*3. El nombramiento, funcionamiento y alcance de las funciones referidas en el apartado anterior, así como cualquier otro aspecto del régimen del citado órgano, se regularán reglamentariamente.*

**Concordancia con el artículo 40 del Reglamento de desarrollo.**

## **ARTÍCULO 40. COMITÉ TÉCNICO.**

1. El Comité Técnico se regirá por lo dispuesto en el [artículo 43 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#), en el presente Reglamento y en los estatutos sociales.

2. El nombramiento de los miembros del Comité Técnico requerirá, como requisito de eficacia, la aceptación de los mismos en el plazo máximo de cinco días desde la designación y se inscribirá en el Registro de Cooperativas Andaluzas en la forma indicada en el artículo 124.

Los estatutos podrán prever la existencia de suplentes y las reglas de sustitución. En caso de vacantes definitivas, la persona sustituta ostentará el cargo por el tiempo que restara a la que cesó.

3. Los miembros del Comité Técnico, que no podrán intervenir en la gestión de la cooperativa ni representarla frente a terceras personas, tendrán atribuidas todas o alguna de las siguientes funciones, de acuerdo con lo previsto en los estatutos:

a) Funciones de seguimiento y control, que ejercerá de oficio y se extenderán a las siguientes materias:

1.<sup>a</sup> Examinar la marcha de la sociedad cooperativa, así como expresar su conformidad, o no, con la actuación del órgano de administración, en relación con la política establecida por la Asamblea General, así como con los criterios generales de una buena gestión empresarial.

2.<sup>a</sup> Velar porque la eventual transmisión de participaciones se realice conforme a lo dispuesto en la [Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#), y en especial, que se observen los derechos de suscripción preferente y retracto contemplados en sus artículos 89, 96.3 y 102.2 de la citada Ley, siempre que este régimen de transmisión sea objeto de previsión estatutaria.

3.<sup>a</sup> Velar por el derecho de las personas trabajadoras de la sociedad a acceder a la condición de persona socia en el supuesto previsto en el [artículo 84.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#).

4.<sup>a</sup> *Controlar que los procesos de elección de los miembros que integran los órganos de la sociedad cooperativa se ajustan a lo dispuesto en la [Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#) y en el presente Reglamento.*

5.<sup>a</sup> *Revisar los libros de la cooperativa, y proponer al órgano de administración, en su caso, su adecuación a la legalidad, con la salvedad prevista en el [artículo 44.2.a\)](#) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de preverse estatutariamente la existencia de un órgano de intervención.*

b) *Funciones de resolución de reclamaciones, instando al órgano sobre el que se haya interpuesto una reclamación por parte de cualquier persona legitimada en relación con algún aspecto de la marcha de la sociedad cooperativa, a que reconsidere, en su caso, su actuación. Todo ello, sin perjuicio de poner en conocimiento de la Asamblea General cualquier circunstancia que al respecto, y a su entender, deba ser conocida por ésta.*

c) *Funciones de resolución de apelaciones: tramitar y resolver cuantos recursos vengan atribuidos por determinación legal o estatutaria.*

d) *Funciones de garantía, que se extenderán a las siguientes materias:*

1.<sup>a</sup> *Convocatoria de la Asamblea General ordinaria o extraordinaria, cuando el órgano de administración hubiera incumplido su obligación de efectuarla conforme al [artículo 29 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#).*

2.<sup>a</sup> *Solicitar al órgano de administración la convocatoria de Asamblea General cuando considere que algún miembro de aquel órgano incurre en alguna de las causas de incapacidad, prohibición o incompatibilidad del [artículo 48 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#), al objeto de que se pronuncie sobre este extremo y destituya, en su caso, al miembro del órgano de administración de que se trate. Transcurrido un mes desde que el Comité Técnico efectuara la expresada solicitud sin que fuese atendida en forma por el órgano de administración, convocará directa e inmediatamente a la Asamblea General a fin de que se pronuncie sobre este extremo.*

3.<sup>a</sup> *Requerimiento de la presencia notarial para que levante acta de la Asamblea General.*

*e) Funciones de información sobre cualquier aspecto de la marcha de la cooperativa que, a su entender, deba de ser conocido por la Asamblea General o cuando esta le someta cualquier asunto a su consideración.*

*4. Para el cumplimiento de sus funciones el Comité Técnico tiene atribuidas las siguientes facultades:*

*a) Obtener de los distintos órganos sociales cuantos informes y documentos considere oportunos.*

*b) Realizar todas las comprobaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.*

*c) Contratar el asesoramiento de una persona experta ajena a la sociedad cooperativa para aquellas cuestiones que estime pertinentes, cuyos honorarios correrán a cargo de la entidad.*

*5. Cuando este órgano hubiera de ejercer funciones que requieran la adopción de acuerdos, estos se tomarán por mayoría simple de sus integrantes.*

*6. Deberán abstenerse de intervenir en la tramitación de asuntos propios de este órgano, los miembros del Comité Técnico que sean cónyuge o pareja de hecho de la persona socia o aspirante a persona socia afectada, o tengan, respecto a esta, parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, de afinidad dentro del segundo, amistad íntima, enemistad manifiesta o relación de servicio. Asimismo, deberán abstenerse aquellos miembros que tengan relación directa con el asunto objeto del recurso.*

*Los miembros del Comité Técnico no podrán revelar, fuera de los cauces previstos normativa o estatutariamente, ni siquiera a las personas socias, el resultado de las actuaciones o las informaciones recibidas.*

### **Comentario.**

Como exponíamos al principio de este capítulo una de las novedades de la nueva normativa de cooperativas es el hecho de contemplar una estructura organizativa más sencilla para las cooperativas y más flexible siendo la sociedad la que pueda ajustar el modelo de órganos que mejor conviene a sus intereses. En esta línea, el legislador optó por suprimir la figura de la Intervención como órgano social preceptivo y en contraposición amplió el número de órganos potestativos a los que la sociedad puede optar.

Por tanto, el Comité Técnico es un órgano potestativo pensado para cooperativas de gran tamaño, que asumen las competencias antes dispersas entre los Interventores, Comité de Recursos, Secretario u otros órganos potestativos de la entidad. Conforme al carácter flexible de la ley que se desarrolla, no solamente resulta facultativo este órgano, sino que también sus funciones pueden ser asumidas estatutariamente por la cooperativa por bloques, sin necesidad de asumirlas todas.

Por definición, el Comité Técnico es un órgano delegado de la Asamblea y por tanto sus funciones son emanadas de las facultades de la propia Asamblea. Su función principal es actuar como órgano de garantía que vele por el cumplimiento de los estatutos y de los acuerdos emanados de la Asamblea General. Como sabemos la Asamblea General tiene un funcionamiento discontinuo, es decir no es permanente en el tiempo. A diferencia del Consejo Rector, que actúa de manera continuada y perdurable en el tiempo, la Asamblea General no está permanentemente celebrándose si no que tiene sus procedimientos de convocatoria. Para las sociedades cooperativas de gran tamaño y con una base social amplia, la posibilidad de convocar asambleas extraordinarias para el seguimiento de la gestión de la sociedad supone una gran dificultad. Para salvar esta dificultad se crea el Comité Técnico que tiene carácter permanente en el tiempo y puede velar por el cumplimiento de los acuerdos asamblearios en el periodo de tiempo que transcurre entre su celebración. Por tanto el Comité técnico es un órgano con un funcionamiento continuo como el Consejo Rector, pero sin ostentar las competencias de gestión y representación de este limitándose a ser un órgano de garantía delegado de la Asamblea General.

#### 1. Constitución del Comité Técnico:

a) Previsión estatutaria. Como hemos expuesto anteriormente el Comité Técnico es un órgano social potestativo, es decir las sociedades puede optar por dotarse de él o no. La voluntad de la sociedad se manifiesta en su estatuto; es por tanto en el estatuto donde se verá reflejada la opción de la sociedad de haber optado a dotarse de un Comité Técnico. En el caso de que el estatuto prevea la existencia de un Comité Técnico, deberá de establecer cuál será su composición y funcionamiento dentro del marco establecido por la ley para el funcionamiento de este órgano societario

b) Elección de Miembros. La ley establece una serie de requisitos para la elección de los miembros que conformarán el Comité Técnico:

- Las personas miembros deber ser escogida en la Asamblea General. Recordemos que la naturaleza de este órgano es actuar de forma delegada de la asamblea durante el tiempo que transcurre entre la constitución de una y otra Asamblea General. Esta delegación solo se realizará para determinadas funciones establecidas de forma concreta en la ley y siempre que estén recogidas en los estatutos societarios que opten por dotarse de este órgano social. La Asamblea General es el órgano donde se manifiesta la voluntad soberana de la sociedad y por tanto no puede ser sustituido por ningún otro, el Comité Técnico es simplemente un órgano delegado para funciones que se le asignan de forma específica como veremos en el epígrafe posterior.

- La votación para la elección de los miembros del Comité Técnico deberá ser secreta, al igual que para el resto de órganos societarios que se designa en la Asamblea a fin de garantizar la independencia de la persona socia al emitir su voto y evitar que pueda ser condicionado.

- Los miembros del Comité Técnico deben ser personas socias con plenitud de derechos. Entendemos que el legislador, cuando habla de personas socias con plenitud de derechos, se refiere a la persona socia común regulada en el artículo 14 de la LSCA, ya que es la que realiza plenamente la actividad corporativizada, aplicándose íntegramente el régimen de derecho y obligaciones establecidos en la ley. Quedan por tanto excluidos de la posibilidad de ser elegidas miembros del Comité Técnico las personas socias inactivas, las personas socias colaboradoras y la personas inversoras. No obstante la ley prevé la posibilidad de que exista una persona asesora con carácter externo que podrá colaborar con el Comité Técnico. Entendemos que esta persona asesora sí podría ser elegida entre las personas socias inactivas, personas colaboradoras o personas inversoras además de entre personas externas a la cooperativa. Hacemos pues una interpretación extensiva del adjetivo externo entendiendo como externo a todas aquellas personas que no sean socias comunes de la cooperativa. Ha de tenerse en cuenta que esta persona socia externa será escogida por su cualificación técnica o profesional para asesorar en las funciones del Comité Técnico y no por la cualidad de mayor o menor implicación que tenga con la sociedad cooperativa.

El número mínimo para constituir el Comité Técnico será de tres miembros. No se establece ningún número máximo de miembros, no obstante se exige que el número siempre deba ser impar. Recordemos que este órgano tiene una función principal de actuar como órgano de garantía para el cumplimiento de acuerdos, por lo que el número

mínimo de tres garantiza una visión más amplia de la gestión societaria. El hecho de que el número deba ser impar garantiza que los acuerdos puedan ser tomados por mayoría simple sin riesgo de que pueda existir un empate a la hora de adoptar acuerdos.

El periodo de mandato de los miembros del Comité Técnico oscilará entre dos a seis años. La ley establece un periodo mínimo que pueda garantizar la estabilidad del órgano durante al menos dos ejercicios económicos, y establece un máximo de seis años que garantiza la democracia interna de la sociedad y un reparto de responsabilidad rotatorio entre las personas socia. Corresponderá al estatuto de la sociedad establecer el tiempo concreto de cada mandato dentro de estos topes establecidos en la Ley. Entendemos que por razones prácticas y de seguridad jurídica el estatuto no podrá establecer un nuevo periodo de oscilación dentro de los límites legales, sino que debe concretar un plazo específico para el mandato. La ley hace una única salvedad a esta potestad estatutaria y es que la duración del mandato del Comité Técnico no podrá ser coincidente con el correspondiente al órgano de Administración. Hay que tener en cuenta que tanto las personas miembros del órgano de Administración como las personas miembros del Comité Técnico deben aceptar el cargo una vez designadas, como veremos a continuación, por lo que es posible que entre la elección y la aceptación trascurra un periodo de tiempo en que la sociedad podría quedar descabezada si la elección de ambos órganos se hiciera al mismo tiempo.

- Se requiere como requisito de eficacia la aceptación de los miembros elegidos para el Comité Técnico. Esta aceptación deberá hacerse en el plazo improrrogable de cinco días desde su elección. Solo por causa justificada puede ser rechazada la elección por parte de un miembro del Comité Técnico puesto que según el artículo 20 apartado f) de la LSCA es obligación de las personas socias aceptar los cargos para las que fueran elegidas. La no aceptación no basada en justa causa podría conllevar las sanciones que el estatuto prevea.

- La constitución del Comité Técnico deberá ser inscrita en el Registro de Cooperativas Andaluza. La inscripción se registrará a través de certificado del acta de la Asamblea General donde se adopte el acuerdo de la elección del Comité Técnico. Firmada por la persona secretaria de la entidad y con el visto bueno de la presidencia. Esta inscripción tendrá carácter declarativo frente a terceros.



- Los estatutos podrán prever la existencia de suplentes y las reglas de sustitución. En caso de vacantes definitivas, la persona sustituta ostentará el cargo por el tiempo que restara a la que cesó.

## 2. Las funciones del Comité Técnico.

El carácter potestativo del Comité Técnico no solo abarca la constitución de este, sino también las funciones que este puede desarrollar, que podrán ser todas las previstas en la normativa o solo alguna de ellas. Es decir la sociedad cooperativa puede elegir dotarse o no de un Comité Técnico en atención a sus necesidades y en el caso de optar por su constitución, podrá atribuirle las funciones que considere dentro del abanico que establece la LSCA. La ley establece cinco funciones generales, que con un carácter más detallado se amplían en el RLSCA, el estatuto podrá asignar al Comité Técnico todas estas funciones o solo alguna de ellas. Veamos detalladamente estas funciones:

Las Funciones de Seguimiento y Control. Podría decirse que está actividad es una función delegada de la competencia de aprobación de la gestión que tiene atribuida con carácter excluyente la Asamblea General. El órgano de Administración es el encargado de la gestión de la sociedad y la Asamblea General es la encargada de aprobar esta gestión. Durante el tiempo en que la Asamblea General no se convoca, corresponde al Comité Técnico velar para que el órgano de Administración cumpla con la gestión que la Asamblea General le ha mandatado. Para ello podrá examinar la marcha de la sociedad cooperativa y hacer informes y dar las recomendaciones que considere al órgano de Administración en pos del buen funcionamiento de la entidad. Esta función la realizará de oficio el Comité Técnico, es decir, sin que exista necesidad de ser instada por ningún órgano social o persona socia para que la lleva a cabo. El RLSCA detalla estas funciones de seguimiento y control en las siguientes: examinar la marcha de la sociedad cooperativa, así como expresar su conformidad, o no, con la actuación del órgano de administración; velar porque la eventual transmisión de participaciones y en concreto por el cumplimiento de los derechos de suscripción preferente y retracto; velar por el derecho de las personas trabajadoras de la sociedad a acceder a la condición de persona socia; controlar que los procesos de elección de los miembros que integran los órganos de la sociedad cooperativa se ajustan a lo dispuesto en la LSCA; revisar los libros de la cooperativa, y proponer al órgano de administración, en su caso, su adecuación a la legalidad cuando no exista órganos de Intervención.

Funciones de resolución de reclamaciones. El Comité Técnico no resolverá reclamaciones propiamente dichas, si no que se encargará de que sean resueltas por los órganos competentes ante las que se entablen. Así el artículo 40. 3 letra b) establece que el Comité Técnico debe instar al órgano sobre el que se haya interpuesto una reclamación por parte de cualquier persona legitimada en relación con algún aspecto de la marcha de la sociedad cooperativa, a que reconsidere, en su caso, su actuación. En el caso de que observe un incumplimiento de estas funciones de resolución de reclamaciones por algún órgano, podrá ponerlo en conociendo de la Asamblea General.

Funciones de Resolución de Apelaciones. La normativa no entra a regular el procedimiento que ha de observarse para la interposición de recursos de apelación ante el Comité Técnico, remitiéndose al desarrollo estatutario para esta cuestión. No obstante con carácter general, las personas socias, con anterioridad a ejercer las acciones legales que se establecen en la normativa, podrán agotar la vía interna interponiendo el respectivo recurso de apelación ante el Comité Técnico en el caso de existir este órgano. No obstante existe una excepción a esta regla general en el caso de las sanciones que se impongan por una infracción de carácter laboral, que en ningún caso serán recurribles ante el Comité Técnico ni, en su defecto, ante la Asamblea General, y se tramitarán con arreglo a la legislación procesal laboral, según el artículo 86.3 de la LSCA.

Funciones de garantías. Estas funciones engloban aquellas actividades encaminadas a hacer cumplir la normativa en pos del principio democrático que inspira a la sociedad cooperativa. El RLSCA contempla entre estas funciones la Convocatoria de la Asamblea General ordinaria o extraordinaria, cuando el órgano de Administración hubiera incumplido su obligación; solicitar al órgano de Administración la convocatoria de Asamblea General cuando considere que algún miembro de aquel órgano incurre en alguna de las causas de incapacidad, prohibición o incompatibilidad; requerimiento de la presencia notarial para que levante acta de la Asamblea General.

Funciones de Información. Esta función tiene una doble vertiente, por un lado recabar la información que considere de los órganos sociales, y por otra reportar a la Asamblea General la información que considere sobre cualquier aspecto de la marcha de la cooperativa.

Procedimiento Adopción de acuerdos del Comité Técnico.

Los acuerdos que sean necesarios tomar en el Comité Técnico se adoptarán por mayoría simple de sus integrantes, sin que exista riesgo de empate en la votación pues la ley exige que el número de miembros de este órgano social siempre sea impar. La toma de acuerdos tendrá su razón de ser principalmente para la resolución de recursos de apelación que se interpongan ante este órgano.

El RLSCA establece unas reglas mínimas para garantizar la imparcialidad del Comité Técnico en la toma de acuerdos, principalmente para la resolución recursos de apelación.

En general deberán abstenerse aquellos miembros que tengan relación directa con el asunto objeto del recurso.

En concreto deberán abstenerse de intervenir en la tramitación de asuntos propios de este órgano, los miembros del Comité Técnico que sean cónyuge o pareja de hecho de la persona socia o aspirante a persona socia afectada, o tengan, respecto a esta, parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, de afinidad dentro del segundo, amistad íntima, enemistad manifiesta o relación de servicio.

Por último el RLSCA establece una cláusula de seguridad para la información a la que tienen acceso los miembros de Comité Técnico en pos del interés de la empresa. Esta cláusula consiste en la prohibición a los miembros del Comité Técnico de revelar, ni siquiera a las personas socias, el resultado de las actuaciones o las informaciones recibidas en el desarrollo de sus funciones. El espacio donde las personas socias pueden acceder a la información referente a la sociedad es, por definición, la Asamblea General.

## **ARTÍCULO 44. INTERVENCIÓN.**

*1. En las sociedades cooperativas con más de diez personas socias, los estatutos podrán prever la existencia de un órgano de Intervención, en cuyo caso deberán fijar su composición, régimen de funcionamiento e incidencias de su mandato con arreglo a lo establecido en este artículo y su desarrollo reglamentario. Sus miembros, siempre en número impar, serán elegidos por la Asamblea General de entre los socios y socias de la entidad para un periodo de mandato que oscilará entre los dos y seis años, en función de lo que estatutariamente se determine, si bien continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta el momento en que se produzca su renovación efectiva, aunque haya concluido el*

*periodo para el que fueron elegidos. La duración del mandato de este órgano no podrá ser coincidente con el correspondiente al órgano de administración.*

*Si los estatutos lo prevén, y siempre que existan tres o más miembros en la Intervención, un tercio del total podrán ser personas no socias.*

*2. A los interventores e interventoras les corresponden las siguientes funciones:*

*a) Revisar las cuentas anuales y demás documentos que se determinen reglamentariamente, debiendo proponer al órgano de administración, en su caso, su adecuación a la legalidad.*

*b) Informar a la Asamblea General sobre los asuntos o cuestiones que esta les someta.*

*3. El nombramiento, funcionamiento y alcance de las funciones referidas en el apartado anterior, así como cualquier otro aspecto del régimen del citado órgano, se regularán reglamentariamente.*

## **Concordancia con el artículo 41 del Reglamento de desarrollo**

### **ARTÍCULO 41. INTERVENCIÓN.**

*1. El nombramiento de las personas interventoras requerirá, como requisito de eficacia, la aceptación de las mismas en el plazo máximo de cinco días desde la designación y se inscribirá en el Registro de Cooperativas Andaluza en la forma establecida en el artículo 124.*

*2. Los estatutos podrán prever la existencia de suplentes y las reglas de sustitución. En cualquiera de los supuestos en que se produzcan vacantes definitivas, el sustituto ostentará el cargo por el tiempo que restara al que cesó en el mismo.*

*3. Al órgano de intervención regulado en el [artículo 44 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#), le corresponderán las siguientes funciones:*

*a) Revisar toda documentación de naturaleza económico-contable de la sociedad cooperativa debiendo proponer al órgano de administración, en su caso, su adecuación a la legalidad.*

*b) Revisar las cuentas anuales y emitir informe sobre las mismas y sobre la propuesta de distribución de excedentes o imputación de pérdidas, antes de que se sometan a la Asamblea General, salvo en el caso de que éstas hubiesen de someterse a auditoría externa.*

*c) Informar a la Asamblea General sobre asuntos o cuestiones que la misma le hubiese sometido.*

*El órgano de intervención ejercerá las funciones que le asigna la [Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#) y el presente Reglamento, sin que pueda intervenir en la gestión de la sociedad cooperativa ni representar a ésta ante terceras personas.*

*4. Cuando este órgano hubiera de ejercer funciones que requieran la adopción de acuerdos, estos se tomarán por mayoría simple de sus integrantes.*

*5. Los miembros de la Intervención podrán obtener del órgano de administración cuantos informes y documentos consideren oportunos, además de acceder a la documentación necesaria para el cumplimiento de sus fines.*

*6. El órgano de intervención no podrá revelar, fuera de los cauces previstos, normativa o estatutariamente, ni siquiera a las personas socias, el resultado de las actuaciones o las informaciones recibidas.*

## **Comentario.**

La principal novedad de redacción respecto al órgano de Intervención, tal como introducíamos al principio de este capítulo, es que pierde el carácter obligatorio de la anterior normativa atribuyéndole el legislado en la nueva LSCA un carácter potestativo. Además, y ahí radica la principal variación de la presente regulación con respecto a la normativa anterior, de existir, solo se le atribuyen competencias de fiscalización contable, no de otro orden, que con la nueva ley pasan a corresponder al Comité Técnico.

Constitución del órgano de Intervención.

Para optar por constituir un órgano de Intervención las cooperativas deberán contar con más de diez personas socias. El órgano de Intervención queda únicamente como una opción para aquellas cooperativas que tenga más de diez personas socias. La nueva legislación convierte la Intervención en un derecho de las sociedades para las que por su volumen de gestión se haga necesario. Deja, por tanto, de ser un deber tal como requería la anterior legislación, siendo especialmente beneficiadas de esta asunción de la obligación de la Intervención las sociedades con una base social inferior a diez persona para las que la Intervención no suponía una auténtica necesidad, lo que originaba que se contemplara de manera formal en sus estatutos sin que tuviera una efectiva aplicación práctica.

Las Sociedades cooperativas de más de diez personas socias que opten por constituir un órgano de Intervención deberán recoger esta opción de manera específica en sus estatutos junto a la composición que tendrán, su régimen de funcionamiento y la previsión para el caso de incidencias durante su mandato.

Procedimiento para la elección de miembros. La ley establece una serie de requisitos para la elección de los miembros que conformarán el órgano de Administración:

- Las personas miembros deber ser escogida en la Asamblea General. Si el Comité Técnico se constituía como un órgano delegado para realizar funciones que faciliten la competencia de aprobación de la gestión social que tiene atribuida la Asamblea General, la Intervención se constituye como un órgano delegado para realizar funciones que faciliten la otra competencia principal de la Asamblea General que es la aprobación de cuentas.
- La votación para la elección de los miembros de la Intervención deberá ser secreta al igual que para el resto de órganos societarios que se designa en la Asamblea, a fin de garantizar la independencia de la persona socia al emitir su voto y evitar que pueda ser condicionado.
- Los miembros de la Intervención deberán ser escogidos entre las personas socias, sin embargo cuando la intervención esté compuesta por tres miembros o más, la ley permite que al menos un tercio del total podrá ser una persona no socia si el estatuto lo prevé. La justificación de esta excepción está basada en el perfil cualificado que requiere los miembros de la intervención, que no siempre puede estar cubierto por personas no

socias. A diferencia de la regulación del Comité Técnico la ley no establece un mínimo para la Intervención por lo que su número puede ser solo de una persona, puesto que la ley sí exige que sea un número impar, no obstante el estatuto deberá concretar un número de miembros determinados.

- El periodo de mandato de los miembros del órgano de Intervención oscilará de dos a seis años. La ley establece un periodo mínimo que pueda garantizar la estabilidad del órgano durante al menos dos ejercicios económicos, y establece un máximo de seis años que garantiza la democracia interna de la sociedad y un reparto de responsabilidad rotatorio entre las personas socias. Corresponderá al estatuto de la sociedad establecer el tiempo concreto de cada mandato dentro de estos topes establecidos en la Ley. Entendemos que, por razones prácticas y de seguridad jurídica, el estatuto no podrá establecer un nuevo periodo de oscilación de dentro de los límites legales si no que debe concretar un plazo específico para el mandato. La ley hace una única salvedad a esta potestad estatutaria y es que la duración del mandato del Comité Técnico no podrá ser coincidente con la correspondiente al órgano de Administración.

- Se requiere como requisito de eficacia la aceptación de los miembros elegidos para el órgano de Intervención. Esta aceptación deberá hacerse en el plazo improrrogable de cinco días desde su elección. Solo por causa justificada puede ser rechazada la elección por parte de un miembro del órgano de Intervención puesto que según el artículo 20 apartado f) de la LSCA es obligación de las personas socias aceptar los cargos para las que fueran elegidas. La no aceptación sin que concurra justa causa podría conllevar las sanciones que el estatuto prevea.

- La constitución del Comité Técnico deberá ser inscrita en el Registro de Cooperativas Andaluzas. La inscripción se registrará través de certificado del acta de la Asamblea General donde se adopte el acuerdo de la elección del órgano de Intervención. El certificado deberá estar firmado por la persona secretaria de la entidad y con el visto bueno de la presidencia. Esta inscripción tendrá carácter declarativo frente a terceros.

- Los estatutos podrán prever la existencia de suplentes y las reglas de sustitución. En caso de vacantes definitivas, la persona sustituta ostentará el cargo por el tiempo que restara a la que cesó.

Funciones del Órgano de Intervención.



La función básica del órgano de Intervención es la fiscalización de cuentas anuales, lo que conllevará realizar un informe sobre las mismas y una propuesta de aplicación de resultados. Las cuentas anuales comprenden el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias y la memoria explicativa conforme a los artículos 34 y 35 del Código de Comercio. El RLSCA desarrolla estas funciones en las siguientes actividades:

a) Revisar toda documentación de naturaleza económico-contable de la sociedad cooperativa, debiendo proponer al órgano de administración, en su caso, su adecuación a la legalidad.

b) Revisar las cuentas anuales y emitir informe sobre las mismas y sobre la propuesta de distribución de excedentes o imputación de pérdidas, antes de que se sometan a la Asamblea General, salvo en el caso de que éstas hubiesen de someterse a auditoría externa.

c) Informar a la Asamblea General sobre asuntos o cuestiones que la misma le hubiese sometido.

Para el desarrollo de estas funciones el órgano de Intervención podrán obtener del órgano de administración cuantos informes y documentos consideren oportunos, además de acceder a la documentación necesaria para el cumplimiento de sus fines.

Procedimiento Adopción de acuerdos del órgano de Intervención.

Los acuerdos que sean necesarios tomar en el órgano de Intervención se adoptarán por mayoría simple de sus integrantes sin que exista riesgo de empate en la votación pues la ley exige que el número de miembros de este órgano social siempre sea impar. Teniendo en cuenta que la ley al no establecer un número mínimo para los miembros del órgano de Intervención y que tampoco requiere que su número sea impar por lo que el órgano de Intervención podría estar conformado por un solo miembro por lo que la toma de acuerdos no necesitaría ningún proceso de votación.

El RLSCA cierra la regulación del órgano de Intervención con una cláusula de seguridad para la información a la que tienen acceso los miembros de este órgano en pos del interés de la empresa, tal como lo hace en la regulación del Comité Técnico. Esta cláusula consiste en la prohibición a los miembros de la Intervención de revelar, ni siquiera a las personas socias, el resultado de las actuaciones o las informaciones recibidas en el

desarrollo de sus funciones. El espacio donde las personas socias pueden acceder a la información referente a la sociedad es por definición la Asamblea General.

## **ARTÍCULO 45. OTROS ÓRGANOS SOCIALES.**

*1. Los estatutos podrán prever la creación de cuantos órganos se estimen convenientes para el mejor desarrollo y funcionamiento de la sociedad cooperativa, determinando su composición, régimen de actuación y competencias, sin que, en ningún caso, se les atribuyan las propias de los órganos regulados en la presente ley.*

*2. La denominación de estos órganos no deberá inducir a confusión con la de los regulados en esta ley.*

### **Comentario.**

Fiel al principio de autonomía que rige la regulación de las sociedades cooperativas, el legislador mantiene intacta la redacción del antiguo artículo 76 de la ley de cooperativas anterior, referente a la posibilidad de que estas se doten de otros órganos sociales ni previstos en la LSCA.

Para la creación de estos órganos la sociedad cooperativa debe atender unos requisitos establecidos por la ley:

Previsión estatutaria: Solo es posible crear otros órganos sociales distintos a los regulados en la ley por vía estatutaria. En consecuencia será nulo el acuerdo adoptado en la Asamblea General para la creación de un nuevo órgano.

Los estatutos no solo deben prever su creación si no también regular su composición, régimen de actuación, y las competencias que se le atribuye.

Las competencias que le atribuya los estatutos no puede invadir a ninguno de los órganos sociales regulados en la LSCA sean estos preceptivos o potestativos.

Su denominación no puede inducir a error con los órganos sociales regulados en la LSCA.

Algunos ejemplos de estos otros órganos sociales pueden ser los órganos consultivos de tipo jurídico, económico-contable o incluso un Consejo de Notables con funciones de

asesoramiento y consulta, basada en la experiencia y juicio recto de quienes lo componen.

#### *Sección 4ª Del apoderamiento y la dirección*

### **ARTÍCULO 46. RÉGIMEN GENERAL.**

*El órgano de administración podrá conferir apoderamientos a cualquier persona, que, en todo caso, estarán sometidos a las limitaciones establecidas en el apartado 2 del artículo 40.*

*El otorgamiento, modificación y revocación de poderes que contengan facultades de gestión y administración, atribuidos con carácter permanente, deberán ser inscritos en el Registro de Cooperativas Andaluzas en la forma que se determine reglamentariamente.*

#### **Comentario.**

La antigua ley de cooperativas ya contemplaba la figura del apoderamiento en los mismos términos establecido en la actual ley. Sin embargo en la anterior ley esta figura estaba regulada en el artículo 61, dedicado a la Delegación de Facultades del Consejo Rector, contemplándose el apoderamiento en el apartado 4 del artículo como una opción de funcionamiento que podía adoptar el Consejo. La nueva redacción de la ley contempla el apoderamiento como un órgano social con entidad propia aunque sus funciones sean delegadas del Consejo Rector. Aunque no lo incluye dentro de la sección dedicada a los órganos sociales potestativos, ha de entenderse que sí tiene carácter potestativo, puesto que queda a la elección del Consejo Rector su adopción de forma voluntaria según lo requieran las necesidades de la empresa.

Las características del apoderamiento según la nueva redacción son las siguientes:

Es un órgano delegado del Consejo Rector. Se trata de un supuesto de representación voluntaria y en ningún caso orgánica, lo que significa que no tiene facultades de representación del Consejo Rector, únicamente tiene las funciones específicamente atribuidas en el documento de su constitución.

Cualquier persona puede ser nombrada apoderada. Esta es la principal diferencia con las personas delegadas del Consejo Rector que se regula en el artículo 40 de la LSCA, pues en ese caso solo podrían ser escogidas entre las personas consejeras del Consejo Rector. Lo cual no excluye que pueda ser nombrada apoderada una persona miembro del Consejo Rector.

Están sometidas a las limitaciones reguladas en el artículo 40.2 referidas a las personas delegadas del Consejo Rector, y en concreto las facultades delegadas solo pueden alcanzar al tráfico empresarial ordinario, es decir los actos de representación y administración que formen parte del objeto societario y sea necesarias para su consecución. Queda excluidas de delegación las facultades que tenga atribuidas el Consejo Rector con carácter indelegable y en concreto las siguientes:

- a) Fijación de criterios básicos de la gestión.
- b) Presentación a la Asamblea General de las cuentas del ejercicio y demás documentos necesarios según la normativa contable aplicable, así como la propuesta de distribución o asignación de los resultados positivos o de imputación de pérdidas, en su caso.
- c) Control del ejercicio de las facultades delegadas.
- d) Otorgamiento de poderes generales.
- e) Prestación de avales, fianzas o garantías reales a favor de otras personas con cargo al patrimonio de la sociedad cooperativa, salvo lo dispuesto para el de crédito, y autorización a la Dirección para actos de disposición relativos a dichos derechos reales, fianzas o avales. Todo ello sin perjuicio de la limitación establecida en el artículo 28.1) sobre competencias de la Asamblea General.
- f) Integración en consorcios, uniones o agrupaciones de carácter económico o participación en el capital social de cualquier tipo de entidad, siempre que estas actuaciones no representen más del veinte por ciento de su cifra de negocio, obtenida de la media de los dos últimos ejercicios económicos. El acuerdo adoptado deberá constar en el orden del día y ser ratificado, en su caso, por la Asamblea General inmediatamente posterior.
- g) Aquellas que le hayan sido delegadas por la Asamblea General.

El otorgamiento, modificación y revocación de los poderes que contengan las facultades de gestión y administración con carácter permanente, deben ser inscrito en el Registro de Cooperativas, si bien con eficacia meramente declarativa frente a terceros, tal como establece el artículo 119.1 del RLSCA. Una de las principales novedades de redacción de esta materia es que el legislador exonera a la sociedad de hacer constar el apoderamiento en escritura pública como requisito previo a la inscripción, con el ánimo de hacer más sencilla la gestión de las cooperativas. El reglamento no contempla la forma que deberá darse al documento constitutivo del apoderamiento, no obstante entendemos que deberá ser un certificado del acta del Consejo Rector donde se acuerde el apoderamiento. Este certificado deberá contemplar la persona o personas a la que se designa al apoderamiento, las funciones que se les atribuye, el tiempo por el que se otorga así como el resto de aspectos relativo al régimen del apoderamiento, contando en el certificado la firma de la persona Secretaria de la entidad con el visto bueno de la presidencia.

## **ARTÍCULO 47. LA DIRECCIÓN.**

*1. Los estatutos podrán prever el establecimiento de una Dirección integrada por una o varias personas con las facultades y poderes conferidos en la correspondiente escritura pública. Para las sociedades cooperativas de crédito, en todo caso, y para las que constituyan sección de crédito, será necesaria la designación de un director o directora general o cargo equivalente, con dedicación permanente.*

*Corresponde al órgano de administración nombrar y destituir a los miembros de la Dirección, debiendo comunicar dichos acuerdos, así como las razones del cese anticipado, a la primera Asamblea General que se celebre, constando dichos acuerdos en el orden del día.*

*2. Las competencias de los miembros de la Dirección se extenderán a los asuntos concernientes al giro o tráfico empresarial ordinario de la sociedad cooperativa. Los actos de disposición relativos a derechos reales, fianzas o avales con cargo al patrimonio de la sociedad cooperativa requerirán siempre autorización expresa del órgano de administración, con excepción de aquellos que formen parte de la actividad propia de la sociedad cooperativa, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.1).*

*3. Los miembros de la Dirección tendrán los derechos y deberes que dimanen del respectivo contrato. Al menos una vez al año deberán presentar al órgano de administración un informe detallado sobre la situación económica de la sociedad cooperativa y, dentro del plazo de dos meses, a contar desde el día de cierre del ejercicio social, elevar a dicho órgano una propuesta de los documentos contables que reglamentariamente se determinen. Asimismo, deberán comunicar sin demora al órgano de administración todo asunto que, por su importancia, requiera ser conocido por este. Sus miembros asistirán con voz y sin voto a las sesiones del órgano de administración cuando se les convoque e informarán, en tal caso, sobre los extremos de su gestión que les sean solicitados.*

### **Comentario.**

La naturaleza de la Dirección es un tipo de apoderamiento del regulado en el artículo 46 que hemos presentado en el epígrafe anterior pero cuyo alcance es general, es decir sus funciones no están limitadas a un contenido específico si no que tienen alcance general para todas las funciones del Consejo Rector. La discusión doctrinal planteaba dos tipos de naturaleza jurídica que podía atribuirse a la Dirección, si bien puede considerarse un órgano social propio o bien como una parte más del Consejo Rector con funciones delegadas. La principal diferencia entre la nueva redacción normativa y la anterior es el lugar donde se regula la Dirección. Si bien la ley anterior regulaba la Dirección dentro de la sección dedicada al Consejo Rector, la nueva ley opta por regularla en una sección diferenciada, dedicada específicamente al apoderamiento y a la dirección. Esta opción del legislador demuestra la voluntad de diferenciar la naturaleza de la Dirección del Consejo Rector, que si bien no podemos afirmar que sea un órgano social con naturaleza propia pues sus funciones son delegadas por el Consejo Rector, si tiene una regulación específica que la dota de cierta autonomía. Hay que tener en cuenta que la anterior normativa también revestía a la Dirección de cierta identidad propia, pues su regulación estaba recogida en un artículo específico y no como un punto más en la regulación de las funciones delegadas del Consejo Rector como sí se contemplaba el apoderamiento.

La otra gran diferencia respecto a la regulación dada a la Dirección por la normativa anterior es que el carácter voluntario de su constitución está limitado en la normativa actual. En concreto existe obligación de constituir Dirección en las cooperativas de crédito con carácter general y en cualquier cooperativa que forme secciones de crédito.

Las principales características que dotan de naturaleza propia a la Dirección son:

**Carácter voluntario.** Si bien la ley enuncia que será voluntad de la entidad optar por constituir una dirección, existe una excepción a esta regla para el caso de las cooperativas de crédito en todo caso y para aquellas otras cooperativas que no sean cooperativa de crédito pero opten por crear una sección de crédito. Entendemos que esta excepción está basada en el carácter profesional y cualificado que requiere la gestión de las cooperativas de crédito.

**Previsión estatutaria.** Puesto que el carácter es voluntario, a excepción de lo expuesto en el párrafo anterior, la voluntad de la cooperativa respecto a la creación de una Dirección deberá estar recogida en el estatuto societario. No sería válida por tanto una Dirección constituida por acuerdo del Consejo Rector ni si quiera por acuerdo de la Asamblea General.

La Dirección puede estar formada por una o varias personas, que no tienen que ser necesariamente miembros del órgano de Administración como sí se requerían para las personas delegadas. Tampoco es obligación de que sea una persona socia, por lo que cualquier persona externa a la cooperativa puede ser escogida para desempeñar las funciones de la Dirección, únicamente deberá reunir los requisitos profesionales que la entidad requiera. En el caso de que el estatuto opte por una Dirección plural deberá contemplarse el régimen de actuación y funcionamiento. Para la constitución de la Dirección el apoderamiento debe constar en escritura pública. Este requisito tiene su fundamentación jurídica en el artículo 1280.5 del Código Civil que exige hacer constar en escritura pública el poder para administrar bienes, que es precisamente la función de la Dirección tal como veremos a continuación.

**Elección y cese por el órgano de Administración.** Si bien son los estatutos los que designan si la entidad tendrá o no Dirección, la elección de la persona o personas que deberá realizarla es decidida en el Consejo Rector. Así mismo será competencia del Consejo Rector decidir el cese de la Dirección. No obstante la ley establece que estas decisiones respecto a la Dirección deben ser comunicadas en la Asamblea General siguiente a la toma del acuerdo y además debe constar en el orden del día de la convocatoria.



Competencias amplias con limitaciones. La ley señala que será competencia de la Dirección los asuntos concernientes al giro o tráfico empresarial ordinario de la cooperativa. Podría definirse esta expresión por aquellos actos que guarden relación con el objeto de la cooperativa y tiendan a la administración del patrimonio social, con el fin de conservarlo, aumentarlo y repartir beneficios. En concreto podemos señalar:

- Actos de disposición y enajenación de los bienes de producción ordinaria de la cooperativa.
- Los actos relativos a la disposición de derechos reales, fianzas o avales con cargo al patrimonio siempre que formen parte de la actividad ordinaria de la sociedad.

Existen dos limitaciones establecidas por la LSCA para el desarrollo de estas funciones:

En caso de que los actos relativos a la disposición de derechos reales, fianzas o avales tengan carácter excepcional, es decir no formen parte de la actividad ordinaria de la sociedad, la Dirección deberá contar con la autorización del órgano de Administración para llevarlo a cabo.

Cuando los actos de transmisión o cesión afecten al conjunto de la empresa o patrimonio de la sociedad cooperativa, integrado por el activo y el pasivo, de todo el activo o de elementos que constituyan más del veinte por ciento del inmovilizado, se requerirá aprobación de la Asamblea General.

- Derecho y obligaciones de las personas que ejercen la Dirección.

Con carácter general los miembros de la Dirección tendrán las competencias que dimanen del respectivo contrato. Por “contrato” debemos entender en primer término la escritura pública donde se constituye la Dirección y se recogen los aspectos de funcionamiento de la misma. No obstante es posible que la Dirección se constituya como una relación laboral, pues la ley permite que esté desempeñadas por una persona externa a la sociedad que principalmente será escogida por la cualificación profesional y técnica que puede requerir el cargo. En este caso nos encontramos ante una relación laboral de carácter especial, que queda encuadrada dentro de los contratos de alta dirección, sometidos al Real Decreto 1382/1985 de 1 de agosto.

No obstante, la LSCA establece unas obligaciones mínimas que deben cumplir los miembros de la Dirección:

Al menos una vez al año deberán presentar al órgano de administración un informe detallado sobre la situación económica de la sociedad cooperativa.

Elevar a dicho órgano una propuesta de los documentos contables dentro del plazo de dos meses, a contar desde el día de cierre del ejercicio social. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, en su caso, y la memoria.

Deberán comunicar sin demora al órgano de administración todo asunto que, por su importancia, requiera ser conocido por este.

Sus miembros asistirán con voz y sin voto a las sesiones del órgano de administración cuando se les convoque e informarán, en tal caso, sobre los extremos de su gestión que les sean solicitados.

#### *Sección 5.ª Régimen aplicable a los miembros de los órganos*

### **ARTÍCULO 48. INCAPACIDADES, PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES.**

*1. No podrán ser miembros del órgano de administración, del Comité Técnico, de la Dirección, o de la Intervención, aquellas personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias limitativas:*

#### *a) Incapacidades:*

*1.º Las personas incapaces, de conformidad con la extensión y límites establecidos en la sentencia de incapacitación.*

*En las sociedades cooperativas integradas mayoritaria o exclusivamente por personas con discapacidad psíquica, su falta de capacidad de obrar será suplida por sus padres, en caso de patria potestad prorrogada o rehabilitada, o por sus tutores o tutoras, con arreglo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, siéndoles de aplicación a estos el*

*régimen de incompatibilidades, incapacidades, prohibiciones y responsabilidad previsto en este artículo.*

*2.º Las personas condenadas por delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico, así como de falsedad o contra la Administración pública.*

*3.º Las personas concursadas no rehabilitadas y aquellas que, por razón de su cargo, no puedan ejercer actividades económicas lucrativas.*

*b) Prohibiciones:*

*1.º Las personas que tengan la consideración de alto cargo y el personal al servicio de las administraciones públicas con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades de las sociedades cooperativas, en general, o con las de la sociedad cooperativa de que se trate, en particular, salvo que lo sean en representación, precisamente, del ente público en el que prestan sus servicios.*

*2.º Quienes desempeñen o ejerzan por cuenta propia o ajena actividades competitivas o complementarias a las de la sociedad cooperativa, salvo que medie autorización expresa de la Asamblea General.*

*3.º Quienes como integrantes de dichos órganos hubieran sido sancionados dos o más veces por incurrir en infracciones tipificadas por la legislación cooperativa. Esta prohibición se extenderá a un periodo de tiempo de cinco años, a contar desde la firmeza de la última sanción.*

*c) Incompatibilidades:*

*Son incompatibles entre sí los cargos de miembro del órgano de administración, de la Intervención e integrante del Comité Técnico.*

*Estatutariamente, se podrá extender dicha incompatibilidad a los miembros de la Dirección.*

*La incompatibilidad se extenderá al cónyuge o pareja de hecho y parientes de los expresados cargos hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad en las sociedades cooperativas de más de veinticinco personas socias.*

*2. El miembro del órgano de administración, Dirección, Intervención o Comité Técnico que incurra en alguna de las prohibiciones o se encuentre afectado por las incapacidades o incompatibilidades previstas en este artículo, o por cualquier otra establecida en los estatutos, será destituido conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 22, relativo a la exclusión, y su correspondiente desarrollo reglamentario, pudiéndose acordar por el órgano de administración la suspensión inmediata en el cargo del miembro afectado en tanto se resuelvan los recursos internos planteados o haya transcurrido el plazo para recurrir sin haberlo hecho el interesado. No obstante, corresponderá a la Asamblea General determinar dicha suspensión cuando la persona afectada pertenezca a la Administración Única o Solidaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 42.*

*Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de la eventual facultad del Comité Técnico de la entidad respecto de la convocatoria de Asamblea General en la que se dilucide esta cuestión, con arreglo a lo que se disponga reglamentariamente, así como de las responsabilidades en que haya podido incurrir el miembro del órgano concernido.*

*3. Si la sociedad cooperativa no contase con Comité Técnico, un número de personas socias, que represente al menos al diez por ciento de estas en las sociedades cooperativas de más de mil, el quince por ciento en las de más de quinientos y el veinte por ciento en las restantes, podrá solicitar al órgano de administración que adopte el acuerdo de destitución del miembro que, a su entender, incurra en alguna de las causas de incapacidad, prohibición o incompatibilidad establecidas en el presente artículo.*

*Transcurrido un mes desde la expresada solicitud sin que esta fuese atendida en forma por el órgano de administración, cualquiera de los solicitantes estará legitimado para solicitar del órgano judicial competente la convocatoria de la Asamblea General a fin de que se pronuncie sobre este extremo.*

## **Comentario.**

El artículo 48 de la LSCA establece las diferentes causas de incapacidad, prohibición e incompatibilidad por las cuales una persona no puede ser miembro del órgano de administración, del Comité Técnico, de la Dirección o de la Intervención.

### **1.- Causas de incapacidad.**

a) Las personas incapaces, de conformidad con la extensión y límites establecidos en la sentencia de incapacitación: En estas causas estarían aquellas personas que tienen una capacidad de obrar limitada que les impediría ejercer tales cargos. Todas las personas, por el hecho de serlo y desde su nacimiento, tienen capacidad jurídica. La capacidad jurídica sólo se perderá con la muerte, y la tiene toda persona con independencia de su edad, estado civil y de su salud mental y física. En virtud de la capacidad jurídica, todas las personas, incluidas las afectadas por una incapacidad, pueden ser titulares de derechos y obligaciones, y ser sujetos de las relaciones jurídicas. Esto significa que las personas incapaces pueden ser titulares de participaciones sociales por ejemplo. Sin embargo, para ejercitar estos derechos y cumplir con sus obligaciones es necesario un complemento: la capacidad de obrar. La capacidad de obrar la tienen todas las personas mayores de edad mientras no sean privadas de ella, total o parcialmente, mediante la incapacitación. Por los menores de edad actúan quienes ostenten la patria potestad.

La incapacidad por tanto es una situación de hecho, provocada por el padecimiento de una enfermedad o deficiencia física o psíquica, de carácter permanente, que priva a algunas personas de su capacidad de obrar. Para proteger a estos individuos que no poseen una voluntad consciente y libre, ni suficiente discernimiento para adoptar las decisiones adecuadas en la esfera personal, y/o en la de administración de sus bienes, la LSCA ha previsto la declaración de incapacidad. Por tanto la incapacitación sólo puede declararla un Juez mediante Sentencia, tras haberse tramitado el oportuno procedimiento judicial, y será en esta sentencia cuándo se determine para que actos tiene capacidad y para qué actos no la tiene. El Código Civil no determina las enfermedades o deficiencias que dan lugar a la incapacitación, pero exige como requisitos ineludibles que las mismas sean persistentes en el tiempo, no meramente temporales, y que impidan a la persona gobernarse. En todo caso, la incapacitación hay que entenderla en un sentido positivo, pues tiene por finalidad posibilitar que personas sin capacidad, o con su capacidad disminuida, puedan actuar a través de sus representantes legales, o con la debida asistencia.

La LSCA contiene una excepción que contempla que en las cooperativas integradas mayoritariamente o exclusivamente por personas con discapacidad psíquica, su falta de capacidad de obrar será suplida por sus padres o por sus tutores conforme a la legislación vigente. Serán éstos padres o tutores a los que se les aplique el régimen de incompatibilidades, incapacidades prohibiciones y responsabilidad de la LSCA. El

legislador debería haber distinguido expresamente entre una discapacidad psíquica y la falta de capacidad de obrar, ya que dicha discapacidad no tiene que ser sinónimo de incapacidad. Asimismo el término más adecuado para referirse a estas personas sería el de persona con diversidad funcional<sup>3</sup>, aunque el término “Personas con discapacidad” jurídicamente es correcto ya que se corresponde a quienes tienen de algún modo limitada sus capacidades motoras, intelectuales o sensitivas. Dicha terminología ha cristalizado tanto en nuestro país como en otros de nuestro entorno y parece haber sido acogida definitivamente por nuestro legislador a partir de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y particularmente desde la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia cuya disposición adicional octava recoge: *“Las referencias que en los textos normativos se efectúan a «minusválidos» y a «personas con minusvalía», se entenderán realizadas a «personas con discapacidad». A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las disposiciones normativas elaboradas por las Administraciones Públicas utilizarán los términos «persona con discapacidad» o «personas con discapacidad» para denominarlas”*.

b) Las personas condenadas por delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico, así como de falsedad o contra la Administración pública.

El Código Penal utiliza esta denominación para ordenar sistemáticamente los delitos del Título XIII del Libro II del Código Penal de 1995, que engloba los delitos de hurto, robo, extorsión, robo y hurto de uso de vehículos, usurpación, defraudaciones (estafa, apropiación indebida, defraudación de fluido eléctrico y análogas), insolvencias punibles, alteración de precios en concursos y subastas públicas, daños, delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores, sustracción de cosa propia de utilidad social o cultural, incluyendo también los delitos societarios además de la receptación y otras conductas afines.

---

<sup>3</sup> Es decir, esa persona no es discapacitado ni minusválido, sino que tiene una discapacidad específica, que podrá limitar en algún aspecto el desarrollo de algunas de las tareas cotidianas de su vida. Pero gracias a las ayudas técnicas, **productos de apoyo**, y al diseño para todos, poco a poco, esas discapacidades lo son menos. Como dicen expertos en el campo de la accesibilidad y la discapacidad "a veces la discapacidad no está en nosotros, sino en el entorno", que no es el adecuado, y que nos pone límites o barreras. Ninguna de esas dos formas de referirse a una **persona con discapacidad** (minusválido, con minusvalía, discapacitado) son las convenientes, ya que con discapacitados da a entender que alguien está limitado en todas sus capacidades.

Como señala MESTRE DELGADO, el Título XIII del Libro II del Código Penal unifica, bajo una misma rúbrica y regulación [...], dos grupos de delitos que, sin embargo, carecen de características comunes que justifiquen un tratamiento legal conjunto. Los delitos contra el patrimonio, por un lado, son infracciones de raigambre histórica, y con los que se protegen intereses económicos individuales. Los delitos contra el orden socioeconómico, por su parte, están conformados por figuras delictivas de menor tradición histórica [...], con los que se pretenden proteger intereses económicos supraindividuales, colectivos o sociales, en plasmación coherente con la evolución de un Derecho Penal preocupado ahora por la defensa de los bienes jurídicos “de tercera generación”. Siguiendo al citado autor, podemos señalar que «los delitos contra el patrimonio pretenden proteger un conjunto de bienes y derechos, de contenido económico, sobre el que cada ciudadano puede ejercer legítimamente derechos de aprovechamiento o disposición. El concepto de patrimonio supera, así, el concepto más limitado que, con la expresión “propiedad”, se utilizaba a los mismos fines en el Código Penal antecedente. En la última reforma del Código Penal que entró en vigor el 1 de julio de 2015, se incluyen nuevas figuras delictivas en los delitos contra el patrimonio y el orden socio-económico, con especial relevancia en asuntos como la insolvencia punible o la administración desleal. Se intensifican las penas y la exigencia de reparación del daño por responsabilidad civil y de indemnización a las víctimas.

En cuanto a los delitos contra la Administración Pública están recogidos en el Título XIX del C.P y se divide en nueve capítulos. Así, el Capítulo I, de la prevaricación y otros comportamientos injustos (arts. 404 a 406), el Capítulo II, del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos (arts. 407 a 409), el Capítulo III, de la desobediencia y la denegación de auxilio (arts. 410 a 412), el Capítulo IV, de la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos (arts. 413 a 418), el Capítulo V, del cohecho (arts. 419 a 427), el Capítulo VI, del tráfico de influencias (arts. 428 a 431), el Capítulo VII, de la malversación (arts. 432 a 435), el Capítulo VIII, de los fraudes y exacciones (arts. 436 a 438) y, finalmente, el Capítulo IX, de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y de los abusos en el ejercicio de su función (arts. 439 a 445). El bien jurídico protegido en este Título es, obviamente, el correcto funcionamiento de la administración pública. En este sentido hay que tener en cuenta por correcto funcionamiento, los principios que inspiran la actuación de la administración pública y que está recogidos constitucionalmente en el art. 103 C.E. (eficacia, eficiencia,



sometimiento al derecho, etc.). Por su parte, los distintos capítulos regulan las distintas formas de ataque al bien jurídico protegido.

Por último en cuanto a las denominación genérica «De las falsedades», el CP en su Libro II, Título XVIII, arts. 386 a 403, una serie de tipos de carácter heterogéneo de difícil reducción a un único bien jurídico protegido. El objeto material varía en cada modalidad, distinguiéndose: a) La falsificación material o real, dentro de la cual se incluyen las de los Capítulos I, «De la falsificación de moneda y efectos timbrados», y II, «De las falsedades documentales»; b) La falsificación personal, que comprende el Capítulo IV, «De la usurpación del estado civil» y el V, «De la y del intrusismo».

Aunque era necesaria que se ampliaran los casos por los cuales cualquier tipo de personas pudieran ser miembros de los diferentes órganos de las cooperativas, sin embargo el legislador deja abierta la norma, sin contemplar excepción alguna frente a conductas tan variadas y diversas. Así se puede llegar a equiparar una conducta de cohecho con una ocupación pacífica de inmuebles, siendo a todas luces desproporcionado sobre todo porque el bien jurídico y los sujetos víctima de los delitos son totalmente diferentes en uno y otro caso. En todo caso debería ser la norma penal la que estableciera la posibilidad de la inhabilitación para el ejercicio de estos puestos de dirección.

Por supuesto la aplicación debe entenderse a todas las personas sean físicas o jurídicas. Las penas aplicables a las personas jurídicas se establecen en el apartado 7 del artículo 33 del Código Penal que asigna siete tipos de penas, creadas para imponerse específicamente a las personas jurídicas con la consideración de penas graves, independientemente de su duración: a) multa, por cuotas o proporcional; b) disolución de la persona jurídica; c) suspensión de las actividades; d) clausura de los locales y establecimientos; e) prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito; f) inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social; g) intervención judicial.

Por otro lado aplicando una doctrina penal garantista entendemos que dicha condena debería ser firme, sin posibilidad de recurso ordinario alguno, lo cual no impide que por parte del Juez Instructor se pudieran establecer una serie de medidas cautelares tanto a

la persona física como jurídica que estableciera la posibilidad de extender los efectos de la prohibición de manera temporal.

c) Las personas concursadas no rehabilitadas y aquellas que, por razón de su cargo, no puedan ejercer actividades económicas lucrativas. En cuanto a los quebrados y concursados no rehabilitados son personas que tienen limitada la libre disposición de sus bienes, causada por una mala administración de los bienes u otras causas sobrevenidas que pudieran causarla.

En cuanto a las personas que por razón de su cargo no puedan ejercer actividades económicas lucrativas, nos encontramos con una gran dispersión legislativa estatal y autonómica.

## 2.- Causas de Prohibiciones.

a) Las personas que tengan la consideración de alto cargo y el personal al servicio de las administraciones públicas con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades de las sociedades cooperativas, en general, o con las de la sociedad cooperativa de que se trate, en particular, salvo que lo sean en representación, precisamente, del ente público en el que prestan sus servicios. Así se pueden incluir a miembros del Gobierno, Jueces y Magistrados, Fiscales, altos cargos de entidades de crédito (Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito), e incluso Diputados, Concejales y Alcaldes si se contempla esta incompatibilidad y demás normativa de incompatibilidades<sup>4</sup>. En lo que afecta a la Administración Andaluza está regulado en la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos. A nivel estatal está recogido principalmente en – Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno : Ley 19/2013, de 9 de diciembre (BOE

---

<sup>4</sup> El dispositivo legislativo español se ha visto reforzado en esta línea por la publicación de normas tales como la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado; el Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado; el Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005 por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado; estas tres últimas derogadas por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

10 de diciembre), Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado: Ley 3/2015, de 30 de marzo (BOE [31 de marzo](#)), Real Decreto por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades: Real Decreto 451/2012, de [5 de marzo](#) . A nivel europeo la directiva 2006/70/ce de la comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la directiva 2005/60/CE del parlamento europeo y del consejo en lo relativo a la definición de personas del medio político y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada, entre otras.

El fundamento de esta prohibición es evitar que se cause perjuicio a la propia sociedad por parte de la persona en quien concurra tal cargo de confianza, pues pueden evidenciarse intereses contrapuestos a los de la cooperativa, o a sensu contrario favorecer mediante actividades relacionadas con su cargo a la misma, provocando la realización de actividades ilícitas y delitos estudiados en el apartado anterior.

b) Quienes desempeñen o ejerzan por cuenta propia o ajena actividades competitivas o complementarias a las de la sociedad cooperativa, salvo que medie autorización expresa de la Asamblea General. El fundamento de dicha causa de prohibición no es otro que el garantizar que no existan intereses contrapuestos que puedan poner en peligro la propia actividad de la sociedad, porque por ejemplo se ejerza una actividad como autónomo o profesional con el mismo segmento de clientes que la actividad principal de la sociedad. Se extiende dicha prohibición no únicamente a las actividades competitivas sino incluso a las complementarias a la actividad principal. La excepción a la regla es que sea autorizado de manera expresa por la Asamblea General de la sociedad cooperativa.

c) Quienes como integrantes de dichos órganos hubieran sido sancionados dos o más veces por incurrir en infracciones tipificadas por la legislación cooperativa. Esta prohibición se extenderá a un periodo de tiempo de cinco años, a contar desde la firmeza de la última sanción. Se contempla una novedad respecto a la LSCA anterior y es que se extiende a cualquier tipo de infracción, no únicamente a las graves y muy graves. La motivación y el fundamento de este tipo de prohibición es proteger el interés de la sociedad frente a quienes dañan a la sociedad por el desempeño inadecuado de sus actos.

### 3.- Causas de Incompatibilidades.

El motivo de dichas causas de la imposibilidad de ejercer determinados cargos de los órganos de la sociedad cooperativa, no es otro que el mantener la independencia entre los distintos órganos **de los que se haya dotado**, ya que los mismos tienen una serie de funciones y finalidades que pueden ser incompatibles con el ejercicio de otros. En definitiva es una “división de poderes” que favorece una gestión transparente de la sociedad. También el evitar lazos de parentesco directo con los miembros de dichos cargos, evita posibles faltas de transparencia y control en la gestión de la misma.

Así se establecen dos causas:

La primera es que se establece la incompatibilidad entre sí de los cargos de miembro del órgano de administración, de la Intervención e integrante del Comité Técnico, pudiendo ser extendida, si así lo recogen sus estatutos, dicha incompatibilidad a los miembros de la Dirección.

La segunda causa es que la incompatibilidad se extenderá al cónyuge o pareja de hecho y parientes de los expresados cargos hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad en las sociedades cooperativas de más de veinticinco personas socias.

### 4.- Procedimiento ante una incapacidad, prohibición o incompatibilidad.

Se regula el procedimiento de exclusión de un socio de la cooperativa. Regulación casi idéntica al de la normativa anterior. La única novedad relevante es la de prever que cuando se trate de una persona socia perteneciente a la administración única o solidaria, el acuerdo corresponde a la Asamblea General. Cuando un miembro del órgano de administración, Dirección, Intervención o Comité Técnico incurra en alguna causa de prohibición, incapacidad o incompatibilidad, será destituido conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 22 de la LSCA y artículos 24 y siguientes del RLSCA como se ha visto en los comentarios de dichos artículos anteriormente. El órgano de administración tendrá la potestad para suspender inmediatamente del cargo al miembro afectado en tanto se resuelvan los recursos internos planteados o haya transcurrido el plazo para recurrir sin que lo hubiera haberlo hecho la persona interesada. No obstante, corresponderá a la Asamblea General determinar dicha suspensión cuando la persona afectada pertenezca a la Administración Única o Solidaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la LSCA, sin perjuicio de la eventual facultad del Comité Técnico respecto

de la convocatoria de Asamblea General en la que se dilucide esta cuestión. Si no se contase con éste, un número de personas socias, que represente al menos al diez por ciento de estas en las sociedades cooperativas de más de mil, el quince por ciento en las de más de quinientos y el veinte por ciento en las restantes, podrá solicitar al órgano de administración que adopte el acuerdo de destitución del miembro que, a su entender, incurra en alguna de las causas. Asimismo si transcurrido un mes desde que la solicitud se planteó y no fuera atendida en forma por el órgano, cualquiera de los solicitantes estará legitimado para solicitar al órgano judicial competente la convocatoria de Asamblea General para que se pronuncie sobre dicha cuestión.

La amplitud de la fórmula utilizada, “órgano judicial”, ha servido para que los Jueces de lo mercantil hayan establecido de forma pacífica que corresponden a su conocimiento las solicitudes de convocatoria o disolución judicial de una sociedad. En concreto, una de las conclusiones alcanzadas en el *«Primer encuentro de la especialidad mercantil»* (Valencia, diciembre de 2004) es que *«el empleo de la expresión ‘cuestiones’ [...] provoca que todos los expedientes judiciales, sean contenciosos o no, en materia societaria o cooperativas sean competencia del Juzgado de lo Mercantil»*<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> El orden competencial determinado es una cuestión compleja en el derecho procesal español. Tal y como expone GARCÍA-VILLARUBIA, la competencia de los Juzgados de lo mercantil en esta materia se encuentra establecida con notable amplitud e imprecisión, pues se hace referencia a *«todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan»* al amparo de esta normativa (artículo 86 ter.1.a) LOPJ). Precisamente esa amplitud está provocando no pocos problemas en la determinación de qué asuntos pueden tener encaje bajo esta enunciación, sobre todo en los casos que pueden calificarse de limítrofes o fronterizos. Ciertamente, no resulta fácil establecer un criterio que resulte de aplicación con carácter abstracto. Pero pueden darse algunos parámetros que sirvan de orientación para dilucidar cuándo se está, a los efectos de determinación del órgano competente, ante un asunto relativo a la normativa sobre sociedades mercantiles y cooperativas.

En términos generales, puede comenzarse señalando que no todos los procesos en los que esté implicada una sociedad mercantil (o cooperativa) han de ser conocidos por los Juzgados de lo mercantil. Puede parecer una precisión evidente, pero la experiencia enseña que no lo es, pues no son pocos los casos en los que, con notable exceso, se intenta utilizar el carácter mercantil de las partes en proceso o la alegación, aunque sea de forma tangencial o artificios, de normativa societaria para atribuir el conocimiento del asunto a los Juzgados de lo mercantil. Al objeto de discernir si se está o no ante un asunto que debe atribuirse al conocimiento de estos órganos especializados, lo relevante será, en cada caso concreto, atender al fundamento jurídico de la causa de pedir en que se base la demanda del actor. Si ese fundamento se encuentra en la normativa sobre sociedades o cooperativas, serán competentes los Juzgados de lo mercantil, en atención al principio de especialización en virtud del cual se les atribuye el conocimiento de esta materia. En otro caso, la competencia corresponderá a los Juzgados de Primera Instancia. Particular interés reviste, en este sentido, el Auto de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 26 de abril de 2006 (Jur 2006/188445), que con claridad explica que *«en cuanto a la materia de sociedades, a pesar de que el legislador alude sólo a normas materiales para atribuir la competencia material desligándola del cauce procesal articulador de la pretensión, ello no significa que la mera alegación de cualesquiera normas relativas a sociedades determine la competencia de los Juzgados de lo mercantil, sino que ha de estarse a la concreta pretensión ejercitada para analizar si su fundamento es el derecho de sociedades o no»*.

## **ARTÍCULO 49. RETRIBUCIÓN.**

*Los estatutos sociales podrán prever que la Presidencia y la Secretaría del Consejo Rector, los miembros de la Comisión Ejecutiva, del Comité Técnico y de la Intervención, los consejeros delegados, así como la Administración Única o las personas administradoras solidarias, y las personas responsables de la liquidación de la sociedad cooperativa, puedan percibir retribuciones, debiendo acordarse por la Asamblea General, a instancia del órgano de administración, el sistema de retribución y su cuantificación.*

*Los miembros del órgano de administración y, caso de existir, del Comité Técnico y de la Intervención serán resarcidos, en todo caso, por los gastos que les origine el desempeño de sus funciones.*

### **Comentario.**

Al igual que en la Ley 2/1999 de cooperativas andaluzas, se establece el principio de gratuidad en el cargo mediante el cual son facultativas dichas remuneraciones, cuyos requisitos para que se produzcan son los siguientes:

1.- Objetivo: Deben estar contempladas expresamente en los estatutos sociales de la sociedad cooperativa. Esto es consecuencia del principio de gratuidad en los cargos, y por ello la norma estatutaria para que se produzca, debe prever su existencia, limitada a una serie de condiciones subjetivas. Asimismo en la LSCA no se contempla que estos estatutos fijen los criterios por los que la Asamblea General cuantifique y determine la remuneración, dejando libertad a la misma para fijar los criterios siempre acorde a los establecidos de forma general en los estatutos.

2.- Subjetivo: Únicamente pueden acceder a esta remuneración la Presidencia y la Secretaría del Consejo Rector, los miembros de la Comisión Ejecutiva, del Comité Técnico y de la Intervención, los consejeros delegados, así como la Administración Única o las personas administradoras solidarias, y las personas responsables de la liquidación de la sociedad cooperativa. De esta forma se compatibiliza el principio de gratuidad con el principio de profesionalización en la sociedad cooperativa acorde con las necesidades y crecimiento futuro que pueda tener la misma.

3.- Tipología: En todo caso se establece que los miembros del órgano de administración y del Comité Técnico y la Intervención en su caso, serán resarcidos por los gastos que les



origine el desempeño de sus funciones. Estos gastos son independientes de las retribuciones contempladas y en todo caso no pueden equipararse a las dietas, sino a la cobertura de gastos que hayan sido desembolsados y satisfechos por el ejercicio de sus funciones.

## **ARTÍCULO 50. RESPONSABILIDAD SOCIAL.**

*1. Los miembros del órgano de administración, de la Dirección, del Comité Técnico y de la Intervención deberán realizar sus funciones con la diligencia que corresponde a un ordenado gestor de sociedades cooperativas y a un representante leal, debiendo guardar secreto sobre los datos que tengan carácter confidencial aun después de haber cesado en sus funciones.*

*2. Todos ellos responderán frente a la sociedad cooperativa y las personas socias del perjuicio que causen por los actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, o los realizados sin la diligencia con que deben desempeñar el cargo.*

*3. La responsabilidad de los miembros de los órganos colegiados frente a la sociedad cooperativa y los socios y socias será solidaria, quedando exentos de la misma:*

*a) Quienes, habiendo asistido a la reunión en la que se adoptó el acuerdo, prueben que votaron en contra del mismo solicitando que constara en el acta, que no han participado en su ejecución e hicieron todo lo conveniente para evitar el daño.*

*b) Quienes prueben que no asistieron a la reunión en la que se adoptó el acuerdo y que no han tenido posibilidad alguna de conocerlo, o, habiéndolo conocido, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño y no han intervenido en su ejecución.*

*c) Quienes prueben que propusieron a la Presidencia del órgano la adopción de las medidas pertinentes para evitar un daño o perjuicio irrogado a la sociedad cooperativa como consecuencia de la inactividad del órgano.*

*La responsabilidad frente a terceros tendrá el carácter que establezca la legislación estatal aplicable.*

*3. No exonerará de responsabilidad el hecho de que la Asamblea General haya*



*ordenado, aceptado, autorizado o ratificado el acto o acuerdo, cuando el mismo sea propio de la competencia del órgano que lo adoptó en cada caso.*

## **Comentario.**

### **1.- Concepto de responsabilidad y sujetos incluidos.**

La previsión de la responsabilidad de los miembros de los órganos de las cooperativas es la consecuencia de la tendencia a la profesionalización de los miembros del órgano de administración. Se trata de que las cooperativas estén administradas por personas preparadas tanto para la gestión como para asumir el riesgo de la responsabilidad. En nuestro derecho de sociedades encontramos dos sistemas diferentes de responsabilidad de los administradores que responden a unos principios y contenido distintos, la denominada responsabilidad-indemnización, o por daños (sistema tradicional), y la responsabilidad-sanción por no promover la disolución, y por no **solicitud de** apertura del concurso de acreedores. La tradicional responsabilidad indemnización, por la que se hace a los administradores responsables de los daños causados a la sociedad, los socios, o terceros, tiene como punto de partida una actuación de los administradores contraria a la Ley, a los estatutos, o realizada sin cumplir con el deber de diligencia, a este presupuesto debemos añadir la existencia de un daño causado como consecuencia de esa actuación realizada como administradores, y como tercer presupuesto se presenta como necesario que exista una relación causa-efecto, entre la actuación imputable a los administradores y el daño causado. Esta última es la que se contempla en el artículo 50.1 y 2 de la LSCA. Asimismo el artículo 43 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas establece que “La responsabilidad de los consejeros e interventores por daños causados, se regirá por lo dispuesto para los administradores de las sociedades anónimas, si bien, los interventores no tendrán responsabilidad solidaria. El acuerdo de la Asamblea General que decida sobre el ejercicio de la acción social de responsabilidad requerirá mayoría ordinaria, que podrá ser adoptado aunque no figure en el orden del día. En cualquier momento la Asamblea general podrá transigir o renunciar al ejercicio de la acción siempre que no se opusieren a ello socios que representen el cinco por ciento de los votos sociales de la cooperativa”.

Los sujetos incluidos en dicha responsabilidad son los miembros del órgano de administración, de la Dirección, del Comité Técnico y de la Intervención a los cuales se les exige la diligencia de un ordenado gestor de cooperativas y la de un representante leal.

Dichos conceptos son indeterminados pero es claro que deberán aplicarse en su actuación los principios generales del cooperativismo, a diferencia que en el resto de sociedades, estableciéndose un sistema de responsabilidad subjetiva.

## 2.- Requisitos y clases de responsabilidad

Los sujetos anteriormente reseñados en el artículo 50.1 responderán frente a la cooperativa y las personas socias por el perjuicio que causen por los actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, o los realizados sin la diligencia con que deben desempeñar sus cargos.

En consecuencia la responsabilidad de estos sujetos depende de la presencia de los siguientes requisitos:

a) Una actuación de los administradores (acción u omisión), realizada en el marco de su actuación orgánica que sea contraria a la Ley, los estatutos, o que se realice sin cumplir con el deber de diligencia.

b) La presencia de un daño causado al patrimonio de la cooperativa (acción social de responsabilidad), o al patrimonio de los socios o de los terceros (acción individual o directa de responsabilidad).

c) La existencia de una relación causa efecto entre la actuación de los administradores y el daño causado.

En cuanto a los tipos de responsabilidad entendemos que pueden darse los siguientes:

a) Responsabilidad Civil que es a la que se refieren el artículo 50.

b) Responsabilidad Penal que es la derivada de la comisión de delitos y en base al principio de culpabilidad son imputables a las personas físicas, pero también a las personas jurídicas que conformen esos órganos.

c) Responsabilidad tributaria que es la derivada del incumplimiento de la Ley General Tributaria y sus infracciones y sanciones.

d) Responsabilidad Administrativa que es la derivada del incumplimiento de la normativa administrativa emanada de los poderes públicos, como la propia Ley, el RLSCA y las órdenes que se dicten por la Consejería competente en materia de cooperativas.

e) Responsabilidad laboral que es la derivada del incumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social.

f) Responsabilidad Estatutaria que es la derivada del incumplimiento de los estatutos sociales y que puede derivar en cualquiera de las anteriores responsabilidades.

### 3.- Efectos de la responsabilidad.

3.1 Responsabilidad Solidaria.- La LSCA prevé que la responsabilidad será solidaria de los miembros de los órganos colegiados frente a la sociedad cooperativa y las personas socias. La decisión del legislador de consagrar esta responsabilidad solidaria de los miembros de los órganos colegiados por su sola pertenencia a estos no es caprichosa y se justifica porque el hecho de integrar un cuerpo plural de esas características, en el que la voluntad del órgano es la resultante de la coincidencia de la mayor parte de las voluntades individuales que lo forman. Los integrantes del órgano plural que contribuyeron a formar la mayoría necesaria para aprobar la decisión que, a la postre, resulte dañosa y dispare la imputación de responsabilidad quedan por esa razón solidariamente ligados con esa determinación. Quienes en cambio forman la minoría también tendrán responsabilidad solidaria, a menos que demuestren una causa de exoneración, por no haber ejercido adecuadamente las atribuciones recíprocas de control sobre las actividades de sus pares y de **contralor** sobre los actos de gestión administrativa de la sociedad, al no haberse opuesto formalmente a lo decidido por el órgano, haciendo uso de los resortes jurídicos con los que cuenta para esos efectos. Pero, además de estas razones dogmáticas, existe también una justificación de naturaleza práctica para la consagración de esta responsabilidad solitaria de los administradores societarios que integran los órganos colegiados: sería sumamente complejo, cuando no imposible –tanto para la sociedad como para las personas socias–, lograr el resarcimiento de los daños sufridos por las irregularidades en las decisiones de los órganos plurales, si primero tuviera que determinarse cuál o cuáles de sus integrantes son los realmente responsables y cuáles no.

### 3.2 Causas de exoneración de responsabilidad.

a) Cuando el miembro del órgano ha participado en la adopción del acuerdo, pero se opuso expresamente al mismo, siendo necesario que haya solicitado su constancia en acta de tal oposición y haya hecho todo lo posible para evitar el daño.

b) Cuando el miembro del órgano no participó en la adopción del acuerdo y no haya tenido oportunidad de conocerlo. Si tuvo conocimiento del acuerdo se exige que no haya participado en la toma, que haya hecho lo conveniente para evitar el daño y que no haya intervenido en su ejecución.

c) Cuando el miembro del órgano hubiese propuesto al presidente del mismo, la adopción de medidas necesarias para evitar el daño o perjuicio a la sociedad como consecuencia de la inactividad del órgano. Se trata de un supuesto de responsabilidad por omisión.

d) No exonera de responsabilidad el hecho que la Asamblea General haya ordenado, aceptado, autorizado o ratificado el acto o acuerdo, cuando el mismo sea propio de la responsabilidad del órgano que lo adoptó.

3.3 Responsabilidad frente a terceros. Remite expresamente a la legislación estatal aplicable.<sup>6</sup>

## **ARTÍCULO 51. ACCIONES DE RESPONSABILIDAD.**

*1. La acción de responsabilidad contra los miembros del órgano de administración, del Comité Técnico, de la Intervención, los responsables de la auditoría y las personas liquidadoras será ejercitada por la sociedad cooperativa, previo acuerdo de la Asamblea General, adoptado por mayoría simple, y sin que sea necesaria la previa inclusión del asunto en el orden del día. Dicho acuerdo determinará la suspensión inmediata en el cargo de los miembros afectados mientras dure el procedimiento judicial o arbitral iniciado contra ellos.*

---

<sup>6</sup> Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

*2. De no adoptarse dicho acuerdo, o transcurridos tres meses desde su adopción sin que la sociedad cooperativa hubiese entablado la correspondiente acción de responsabilidad, esta podrá ser ejercitada, en el plazo de dos meses, por cualquier socio o socia, en nombre y por cuenta de la sociedad.*

*3. La acción de responsabilidad contra la Dirección podrá ser ejercitada, además de por los anteriores, por el órgano de administración.*

*4. La Asamblea General podrá, en cualquier momento, y previo acuerdo adoptado por mayoría de dos tercios de los votos presentes y representados, transigir o desistir del ejercicio de la acción de responsabilidad.*

- *La acción de responsabilidad prescribirá al año desde que los hechos fueran conocidos y, en todo caso, a los tres años desde que se produjeron.*
- *Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, cualquier socio o socia podrá ejercitar la pertinente acción para exigir la reparación de los daños y perjuicios que se le hayan causado directamente en su patrimonio.*

## **Comentario.**

En este artículo se regulan las diferentes acciones de responsabilidad que son dos, dependiendo de la persona que las ejercita.<sup>7</sup>

1.- Acción social de responsabilidad: es la acción que ejercita la sociedad cooperativa como tal. Está legitimada activamente la propia sociedad cooperativa para ejercerla contra el órgano de administración, del Comité Técnico, de la Intervención, los responsables de la auditoría y las personas liquidadoras. También se prevé que la acción de responsabilidad contra la Dirección podrá ser ejercitada, además de por los anteriores, por el órgano de administración. Para su ejercicio se requiere el acuerdo previo de la Asamblea General que debe adoptarse por mayoría simple y sin que sea necesario que se haya previsto en el orden del día de la misma. Como novedad se incluye que dicho acuerdo determinará la suspensión inmediata en el cargo de los miembros afectados mientras dure el procedimiento judicial o arbitral contra ellos, precisamente para

---

<sup>7</sup> La nueva Ley de Sociedades de Capital viene a unificar igualmente las acciones de responsabilidad contra los administradores en los artículos 236 a 241. Dentro de dichas acciones, como decimos, los acreedores pueden acumular tanto la acción social (art. 238 LSC) como la individual (art. 241 LSC) contra los administradores que hayan incumplido los deberes anteriormente mencionados y, en como consecuencia de ello, hayan causado un daño, concretado éste en la deuda impagada por la sociedad.

suspender cautelarmente los perjuicios que se estuvieran causando a la sociedad mientras se resuelve el proceso.

Se prevé que cuando la Asamblea General no hubiese acordado ejercitar la acción o cuando habiéndola acordado no hubiese entablado la acción en el plazo de tres meses desde el acuerdo, cualquier persona socia podrá ejercitarla en defensa y en nombre de la sociedad, para proteger precisamente a la misma de conductas lesivas por omisión de los órganos competentes para ello.

El plazo de prescripción para el ejercicio de la acción es un año desde que los hechos se conocieron y en todo caso a los tres años desde que se produjeron.

2.- Acción individual de responsabilidad. En la acción individual de responsabilidad el objeto consiste en la reclamación por parte de una persona socia o un tercero de los daños directos causados a su patrimonio por la actuación de los sujetos expuestos en el artículo 51.1 de la LSCA. En cuanto al plazo para su ejercicio y prescripción dependerá del tipo de acción que exija en función de la relación jurídica que tenga la persona socia o el tercero.

## **ARTÍCULO 52. CONFLICTO DE INTERESES.**

*1. La asunción de obligaciones por parte de la sociedad cooperativa a favor de cualquier miembro del órgano de administración, del Comité Técnico, de la Intervención o de la Dirección, así como de los cónyuges, parejas de hecho o de alguno de los parientes de aquellos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, requerirá una autorización expresa, expedida por el órgano de administración, al efecto de evitar eventuales conflictos de intereses.*

*No obstante, corresponderá a la Asamblea General acordar y expedir dicha autorización cuando el conflicto de intereses se plantee respecto de algún miembro del órgano de administración o de alguna de las personas ligadas a este anteriormente indicadas en aquellos casos en que la administración de la sociedad cooperativa se ejerza de manera única o solidaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 42.*

*La citada autorización no será preceptiva cuando se trate de relaciones propias de la condición de socio o socia.*

*2. La persona socia que se vea implicada en un eventual conflicto de intereses no podrá tomar parte en la votación del correspondiente órgano.*

*3. El contrato estipulado sin la preceptiva autorización será anulable, salvo que sea ratificado por la Asamblea General, quedando a salvo, en cualquier caso, los derechos adquiridos por terceros de buena fe.*

## **Comentario.**

El régimen jurídico del conflicto de intereses se encuentra, a nivel estatal, actualmente previsto en el artículo 190 TRLSC (anterior artículo 52.1 LSRL), cuya regulación descansa en tres pilares básicos: en primer lugar, la persona a quien afecta que conforme al precepto es la persona socia en algunos supuestos y el socio o socia que a su vez ostente la condición de administrador; en segundo lugar, la naturaleza restrictiva de los supuestos previstos legalmente y su consideración con lista cerrada o *numerus clausus* (aunque parte de la doctrina no comparte esta afirmación); y en tercer lugar, la consecuencia jurídica de incurrir en alguno de los supuestos, previstos legalmente, que es la existencia de un deber de abstención en el ejercicio del derecho de voto y para el acuerdo en el que exista el citado conflicto<sup>8</sup>.

Sin embargo estos conflictos de intereses, por la propia naturaleza jurídica de la sociedad cooperativa, no son tan taxativos y restrictivos como en el resto de sociedades mercantiles.

El fundamento de esta norma es salvaguardar los intereses de la sociedad cooperativa evitando que una mayoría de votos pueda desembocar en un acuerdo que sea lesivo para la sociedad y beneficioso para los miembros de los órganos de administración, del

---

<sup>8</sup> La sentencia del [TS de 26 de diciembre de 2012](#) trata el primero de los aspectos apuntados, es decir, el ámbito subjetivo del conflicto de intereses. En el supuesto enjuiciado algunas de las personas que ejercitaban el derecho de voto en la Junta no tenían la condición de socios, sino de representantes de socios, y el acuerdo de dispensa de la prohibición de competencia que se votaba les afectaba a ellos personalmente. Y el Tribunal declara que, a pesar de que la ley establezca exclusivamente que el deber de abstención alcanza a los socios, declara que: *el deber de abstención es aplicable tanto si el conflicto de intereses existe respecto del socio como si existe de la persona que ejercita el concreto derecho de voto. Esta interpretación se extrae de la ratio de la norma (artículo 52.1 LSRL).*



Comité Técnico, de la Intervención o de la Dirección, así como de los cónyuges, parejas de hecho o parientes hasta el cuarto grado.

En los casos anteriores, la LSCA prevé varios mecanismos para evitar salvaguardar los intereses de la sociedad cooperativa: 1.) Autorización expresa del órgano de administración para la asunción de obligaciones por parte de la sociedad a favor de los sujetos contemplados en el artículo 52. 2.) Autorización expresa de la Asamblea General cuando el conflicto se plantee respecto de algún miembro del órgano de administración o de las personas a que se refiere el artículo 52 cuando la administración de la sociedad cooperativa se ejerza de manera única o solidaria según lo dispuesto en el artículo 42 de la LSCA. En ambos casos deberán ser autorizaciones concretas y para cada supuesto. 3.) La persona socia implicada en un conflicto de interés no podrá tomar parte en la votación del órgano donde se dilucide la cuestión. 4.- Autorización o Validación a posteriori. El contrato estipulado sin la preceptiva autorización será anulable, salvo que sea ratificado por la Asamblea General, salvando los derechos adquiridos por terceros de buena fe.

Entendemos que los estatutos podrán fijar supuestos concretos que representan conflictos de intereses para esa sociedad, dejando por supuesto abierta la puerta a que se decidan de manera individual y concreta aunque no estén fijados.

## **CAPITULO V. RÉGIMEN ECONÓMICO**

### **ARTÍCULO 53. RESPONSABILIDAD**

*1. La sociedad cooperativa responderá de sus deudas con todo su patrimonio presente y futuro, excepto el correspondiente al Fondo de Formación y Sostenibilidad, que solo responderá de las obligaciones contraídas para el cumplimiento de sus fines.*

*2. La responsabilidad de los socios y socias por las deudas sociales quedará limitada al importe de las aportaciones suscritas al capital social, estén o no desembolsadas.*

#### **Comentario.**

Mientras la derogada LSCA solo recogía dentro de las disposiciones generales (art. 5) la responsabilidad de las personas socias frente a terceros, vemos como la actual recoge

tanto la responsabilidad de las personas socias como la de la sociedad dentro del Capítulo referente al Régimen Económico de las Cooperativas.

La responsabilidad de las personas socias está limitada al importe de las aportaciones suscritas al capital social, estén o no desembolsadas. No obstante la LSCA y el RLSCA establecen a lo largo de su articulado las siguientes excepciones a esta regla general:

a) En el art. 9.3 de la LSCA se recoge la responsabilidad ilimitada de las personas socias por la actividad desarrollada por la cooperativa en el período comprendido desde la celebración de la Asamblea constituyente hasta la inscripción de la sociedad en el Registro de Cooperativas.

b) En el art. 12.1 de la LSCA, donde se establece la posibilidad de repetición de la sociedad contra los socios y socias que integren una sección en el supuesto de que la cooperativa tenga que responder con su patrimonio por deudas de la misma.

c) En el art. 65.8 del RSCA, cuando al regular la transformación de la sociedad cooperativa en cualquier otra sociedad civil, mercantil o entidad de economía social, recoge en su apartado 8 que las personas socias que, en virtud de la transformación, asuman responsabilidad personal e ilimitada por las deudas sociales, responderán en la misma forma de las deudas anteriores a la transformación.

d) En el art. 66.4 del RSCA, al regular la transformación de sociedades mercantiles y agrupaciones de carácter no cooperativo en sociedades cooperativas, establece que dicha transformación no libera a los socios y socias de su responsabilidad personal por las deudas contraídas con anterioridad al acuerdo, salvo consentimiento expreso a la transformación de las personas acreedoras.

Respecto a la responsabilidad de la sociedad, al igual que en la regulación anterior, la actual LSCA establece que será ilimitada y que responderá con todo su patrimonio excepto el correspondiente al Fondo de Formación y Sostenibilidad, que ha venido a sustituir al antiguo Fondo de Educación y Promoción.

## **ARTÍCULO 54. CAPITAL SOCIAL.**

*1. En las sociedades cooperativas el capital social tendrá una doble acepción: el capital social contable, que es el resultante de las aportaciones suscritas en cada momento, y el capital social estatutario, constituido por la parte de aquel que ha de reflejarse estatutariamente mediante una cifra, cuya variación está sometida a determinados requisitos que se recogen en el presente artículo.*

*Las citadas aportaciones pueden ser, a su vez, obligatorias o voluntarias, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 55 y 56.*

*2. El capital social deberá estar suscrito en su totalidad, y desembolsado, al menos, en un cincuenta por ciento, salvo que el órgano de administración acuerde su aplazamiento, con arreglo a lo establecido en el art. 58.3 para el ingreso de nuevas personas socias.*

*Si por cualquier razón el capital social contable quedara por debajo de la cifra de capital social estatutario, será necesario acuerdo de reducción, adoptado por la Asamblea General, en el que deberán observarse las garantías que reglamentariamente se determinen.*

*3. El importe total de las aportaciones de cada socio o socia al capital social de las sociedades cooperativas de primer grado no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del mismo, salvo que se trate de una entidad pública, en cuyo caso se podrá superar dicho límite, sin alcanzar el cincuenta por ciento del total de aportaciones.*

*En cuanto a las sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado, se estará a lo dispuesto en el art. 108.3 sobre el importe total de las aportaciones de cada persona socia.*

*4. Las aportaciones se realizarán en moneda de curso legal y, de autorizarse por la Asamblea General, podrán consistir en bienes y derechos evaluables económicamente, en cuyo caso, se estará a lo dispuesto en la normativa legal aplicable en lo que a su entrega y saneamiento se refiere. La expresada autorización podrá tener un carácter general, sin que sea preciso su acuerdo en cada caso.*

*El régimen de valoración de las aportaciones no dinerarias se determinará reglamentariamente.*

*5. Las aportaciones se acreditarán mediante títulos o libretas de participación, en ambos casos, de carácter nominativo, o por cualquier otro medio que se determine reglamentariamente, no teniendo en ningún caso la consideración de títulos valores.*

## **Desarrollo Reglamentario.**

### **ARTÍCULO 42. APORTACIONES AL CAPITAL SOCIAL.**

*1. Las aportaciones al capital social se acreditarán mediante títulos o libretas de participación nominativos, así como mediante fichas o relación nominal de socios o socias con su correspondiente importe, no teniendo, en ningún caso, la consideración de títulos valores. También podrán acreditarse mediante anotaciones en cuenta, que se regirán por lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y demás normas que le sean de aplicación, en especial las referidas a las entidades autorizadas para llevar las anotaciones.*

*2. Los títulos nominativos serán autorizados por el órgano de administración, numerados correlativamente, pudiendo emitirse títulos múltiples.*

*3. Los títulos y las libretas de participación nominativos reflejarán necesariamente:*

*a) Denominación de la sociedad cooperativa, fecha de su constitución y número de inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas.*

*b) Nombre e identificación fiscal de su titular.*

*c) Si se trata de aportaciones obligatorias o voluntarias.*

*d) Valor nominal, importe desembolsado y, en su caso, fecha y cuantía de los sucesivos desembolsos.*

*e) Las actualizaciones, en su caso.*

*4. Las anotaciones en cuenta, las fichas y la relación nominal de socios o socias reflejarán las aportaciones suscritas, las cantidades desembolsadas y las sucesivas variaciones de éstas. Al menos una vez al año, de solicitarse por la persona socia interesada, deberá remitirse su extracto al domicilio de esta.*

*5. La persona socia que no desembolse las aportaciones en los plazos previstos incurrirá en mora por el solo vencimiento del plazo y deberá abonar a la sociedad cooperativa el interés legal y resarcirla de los daños y perjuicios causados por la morosidad. Todo ello, sin perjuicio de la sanción o sanciones disciplinarias que se les puedan imponer, así como de la reclamación judicial contra las mismas.*

## **ARTÍCULO 43. RÉGIMEN DE VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES NO DINERARIAS.**

*1. De acuerdo con lo previsto en el art. 54.4 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, la Asamblea General podrá autorizar que las aportaciones puedan consistir en bienes y derechos evaluables económicamente que deberán desembolsarse íntegramente en el momento de la suscripción, a menos que su naturaleza permita el desembolso parcial de estos.*

*2. Si la aportación consistiera en bienes, muebles o inmuebles, o derechos asimilados a ellos, la persona aportante estará obligada a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la aportación en los términos establecidos en el Código Civil para el contrato de compraventa y se aplicarán las reglas del Código de Comercio sobre este mismo contrato en cuanto a la transmisión de riesgos.*

*Si las aportaciones consistieran en un derecho de crédito, la persona aportante responderá de la legitimidad de éste y de la solvencia del deudor.*

*Si se aportase una empresa o establecimiento, la persona aportante quedará obligada al saneamiento de su conjunto, si el vicio o la evicción afectasen a la totalidad o alguno de los elementos esenciales para su normal explotación. Procederá también al saneamiento individualizado de los demás elementos.*

*3. La valoración de las aportaciones no dinerarias en el procedimiento de constitución mediante Asamblea constituyente se realizará por las personas promotoras a menos que se trate de aportaciones realizadas con posterioridad a la celebración de la Asamblea constituyente y antes de formalizar la constitución, en los supuestos previstos en la Ley de 14/2011, de 23 de diciembre, en cuyo caso la realizarán las personas gestoras designadas en aquella.*

*La valoración de las aportaciones que se efectúen con posterioridad a la constitución se realizará por el órgano de administración de la sociedad cooperativa.*

*La valoración realizada por las personas gestoras, en el procedimiento de constitución, o por el órgano de administración deberá ser ratificada por la primera Asamblea General que se celebre tras la valoración.*

*La expresada valoración reflejará documentalmente las características de la aportación, su valor y criterios utilizados para obtenerlo.*

*De la existencia y valoración de dichas aportaciones responderán solidariamente quienes las hayan realizado. Tanto las personas promotoras o las personas gestoras, en su caso, como el órgano de administración podrán solicitar el informe de una o varias personas expertas independientes, bajo su responsabilidad, en cuyo caso quedarán exentos de responsabilidad siempre y cuando no se aparten de la valoración realizada en dicho informe, que versará, como mínimo, sobre las características de la aportación, su valor y criterios utilizados para obtenerlo.*

*Dentro de los tres meses siguientes a la valoración, cualquier persona socia podrá solicitar, a su costa, del Registro de Cooperativas Andaluzas, la realización de una nueva valoración por una persona experta independiente.*

*4. Las aportaciones no dinerarias contempladas en este artículo no producen cesión o traspaso, ni aun a los efectos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos o la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos rústicos, resultando la sociedad cooperativa continuadora en la titularidad del bien o derecho. Lo mismo se entenderá respecto a nombres comerciales, marcas, patentes y cualesquiera otros títulos o derechos que constituyesen aportaciones al capital social.*

#### **ARTÍCULO 44. REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.**

*1. En los supuestos en que el capital social contable quedase por debajo de la cifra de capital social estatutario, será necesaria la reducción de ésta última mediante acuerdo de modificación estatutaria adoptado al efecto por la Asamblea General de la entidad.*

*Dicho acuerdo no podrá llevarse a efecto antes de que transcurran, al menos, tres*

*meses desde su publicación en la sede electrónica de la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de sociedades cooperativas, pudiendo prescindirse de dicha publicación cuando el acuerdo se notifique individualmente por escrito a todas las personas socias y acreedoras, a través de un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad cooperativa y en los domicilios que hayan puesto en conocimiento de la sociedad o, en su defecto, en sus domicilios legales, respectivamente. En este caso, el cómputo del plazo para llevar a efecto el acuerdo asambleario de reducción comenzará cuando se lleve a cabo la última de dichas notificaciones.*

*Durante dicho plazo, los acreedores podrán oponerse a la ejecución del acuerdo de reducción, si sus créditos no son satisfechos o la sociedad no presta la garantía suficiente.*

*Será nula toda restitución de aportaciones integrantes del capital social que se realice con incumplimiento de los requisitos o trámites establecidos en este artículo, o a pesar de la oposición entablada, en tiempo y forma, por cualquier persona acreedora.*

*2. La reducción del capital social contable hasta una cifra que no altere el capital social estatutario requerirá tan solo el acuerdo del órgano social que lo hubiera establecido. De haberse acordado sucesivamente por dos órganos sociales distintos, bastará con el acuerdo de la Asamblea General.*

*No obstante, si la citada reducción supone la disminución de las aportaciones obligatorias constitutivas de las personas socias a que se refiere el art. 55.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, habrá de procederse a la correspondiente modificación estatutaria.*

## **Comentario.**

Como principales modificaciones en la regulación actual del capital social cabe destacar:

a) La anterior LSCA fijaba en su artículo 77.2 un capital social mínimo de 3.005,06 euros para constituir una cooperativa. La actual Ley de Cooperativas, si bien establece que debe haber un capital social, no fija ningún capital mínimo, por lo que su cuantía se deja a los intereses de cada proyecto empresarial.



b) La anterior regulación establecía en su artículo 78.1 la obligación de que el capital social estuviese desembolsado, al menos, en un 25%, en el momento de la suscripción, mientras que en el art. 54.2 de la actual Ley de Cooperativas Andaluzas ese desembolso mínimo se fija en el 50%, con la salvedad prevista en el apartado 3 del art. 58 de que, de preverse estatutariamente, el órgano de administración pueda autorizar que las personas aspirantes a la condición de socio desembolsen una cantidad inferior a la que les corresponda, e incluso, si la situación económica de la sociedad cooperativa lo permite, a no desembolsar cantidad alguna en el momento de su ingreso, aplazando dicha obligación hasta que se les satisfagan los anticipos o se les hagan efectivos los retornos acordados por dicho órgano, que igualmente podrá decidir su prorrateo.

c) La anterior regulación establecía en su artículo 77.5 que el importe total de las aportaciones de cada socio al capital social de las cooperativas de primer grado no podía exceder del 35 por 100 del mismo, mientras que la actual regulación, en el artículo 54.3 de la LSCA, ha elevado ese tope hasta el 45%. Respecto a las cooperativas de segundo o ulterior grado, la anterior regulación, en su artículo 77.5, fijaba el límite de aportaciones al capital en el 50%, mientras que la actual Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, en sus artículos 54.3 y 108.3, lo eleva hasta el 75%, debiendo pertenecer, al menos, el 51% de dicho capital, a sociedades cooperativas.

d) Una de las principales modificaciones de la LSCA es la relativa a la publicación del acuerdo de reducción de capital social, ya que mientras el artículo 81.2 de la derogada LSCA establecía que el acuerdo de reducción debía ser publicado por dos veces en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en uno de los periódicos de mayor circulación del ámbito territorial de actuación efectiva de la cooperativa, el artículo 44.1 del actual Reglamento de Sociedades Cooperativas andaluzas ha sustituido las dos publicaciones mencionadas por una sola publicación en la sede electrónica de la Consejería de la Junta de Andalucía, llegando incluso a suprimir ésta última en los supuestos en que el acuerdo de reducción se notifique individualmente y por escrito a todas las personas socias y acreedoras.

Aparte de las modificaciones mencionadas, cabe destacar como novedades de la LSCA y del RSCA, respecto al capital social:

a) La distinción que establece el art. 51.1 de la actual LSCA entre capital social contable y capital social estatutario, que no se recogía en la anterior regulación.

b) La posibilidad recogida en el artículo 42.1 del RSCA de que las aportaciones al capital se acrediten mediante anotaciones en cuenta, que se registrarán por lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y demás normas que le sean de aplicación.

c) La posibilidad recogida en el artículo 43.3 del RSCA de que cualquier persona socia pueda solicitar del Registro de Cooperativas Andaluas, a su costa, y dentro del plazo de tres meses desde que se efectúe la valoración de las aportaciones no dinerarias al capital social por los promotores, por las personas gestoras o por el órgano de administración, una nueva valoración por una persona experta independiente.

d) La obligación, recogida en el art. 42.5 del RSCA, de la persona socia de desembolsar las aportaciones en los plazos previstos, so pena de incurrir en mora por el solo vencimiento del plazo sin haberlas efectuado, en cuyo caso deberá abonar a la sociedad cooperativa el interés legal y resarcirla de los daños y perjuicios causados por la morosidad, sin perjuicio de la sanción o sanciones disciplinarias que se les puedan imponer, así como de la reclamación judicial contra las mismas.

e) Por último, tal y como señala la exposición de motivos de la LSCA, en el apartado económico resalta como novedad el esfuerzo pedagógico de la norma a la hora de conceptualizar las distintas acepciones del capital de estas empresas, pues junto a las distinciones clásicas entre capital mínimo –estatutario– y real –contable–, o aportaciones obligatorias y voluntarias a dicho capital, viene ahora a sumarse, por imperativo de la legislación comunitaria, la relativa al carácter reembolsable o no de dichas aportaciones.

## **ARTÍCULO 55. APORTACIONES OBLIGATORIAS.**

*1. Las aportaciones obligatorias son aquellas que forman parte del capital social y cuya suscripción, al constituirse la entidad o posteriormente por acuerdo de la Asamblea General, deben realizar necesariamente quienes ostenten la condición de personas socias en el momento de su emisión.*

*2. Las aportaciones obligatorias pueden ser constitutivas o sucesivas, según se establezca en el momento de la constitución de la entidad o con posterioridad, respectivamente.*

*3. El importe de las aportaciones obligatorias constitutivas deberá fijarse estatutariamente, pudiendo determinarse con referencia a cuantías o índices económicos publicados por organismos oficiales o independientes.*

*La suma de dichas aportaciones deberá ser, al menos, igual al capital social estatutario, y deberá desembolsarse, como mínimo en un cincuenta por ciento, en el momento de su suscripción, y el resto, en las condiciones y plazos que fijen los estatutos, con el límite máximo de tres años.*

*Las aportaciones obligatorias sucesivas podrán acordarse por la Asamblea General, que fijará su cuantía y condiciones, teniendo en cuenta que tanto el porcentaje inicial como los plazos para materializar el desembolso serán los establecidos para las aportaciones obligatorias constitutivas.*

*4. Podrá preverse estatutariamente que la cuantía de las aportaciones obligatorias sea igual para todos, diferenciada según los tipos de socios o socias previstos en esta ley en función de su naturaleza física o jurídica, o proporcional a la actividad cooperativizada desarrollada o comprometida por cada persona socia, conforme a módulos de participación objetivamente establecidos en los estatutos sociales.*

*5. En el caso de que la aportación de una persona socia quedara por cualquier razón por debajo de la que debiera realizar con carácter obligatorio, esta quedará obligada a reponerla hasta alcanzar dicho importe. A tal efecto, será inmediatamente requerida por el órgano de administración. Dicha aportación deberá desembolsarse en el plazo que fijen al efecto los estatutos o, en su defecto, acuerde la Asamblea General, sin que pueda exceder de un año desde el requerimiento.*

## **Comentario.**

La principal modificación operada por la nueva regulación de las Sociedades Cooperativas Andaluza respecto de las aportaciones obligatorias, tanto constitutivas como sucesivas, radica en el porcentaje de desembolso mínimo y en el plazo para efectuar el desembolso total, ya que mientras que en la regulación anterior el desembolso mínimo era del 25%, en la actual es del 50%, y mientras que en la regulación anterior el límite máximo para el desembolso aplazado era de 4 años, en la actual es de 3 años.

Asimismo, se añade la posibilidad de que los estatutos fijen la cuantía de las aportaciones

obligatorias diferenciándolas según los tipos de socios o socias previstos en la LSCA en función de su naturaleza física o jurídica.

## **ARTÍCULO 56. APORTACIONES VOLUNTARIAS.**

*1. Las aportaciones voluntarias son aquellas que forman parte del capital social y cuya suscripción, al constituirse la entidad o, posteriormente, por acuerdo del órgano social correspondiente, resulta opcional para las personas socias.*

*2. Tanto la Asamblea General como el órgano de administración podrán acordar la admisión de aportaciones voluntarias de socios y socias, fijando la cuantía global máxima, el plazo de suscripción, que no podrá exceder de seis meses, y la determinación de su tipo de interés conforme a lo previsto para la remuneración de las aportaciones en el art. 57.*

*3. Todo socio o socia tendrá derecho a suscribir como aportación voluntaria, dentro de la cuantía global máxima que determine el acuerdo social, una parte proporcional a la aportación obligatoria para integrar el capital social que tuviera en el momento de la adopción de dicho acuerdo. Quien no haga uso, en todo o en parte, de este derecho podrá cederlo a otras personas socias siempre que queden salvados los límites legales relativos a los porcentajes máximos de titularidad de las aportaciones.*

*4. En el supuesto de que las personas socias no suscriban la totalidad de la cuantía global máxima de las aportaciones voluntarias, se entenderá que, una vez que haya finalizado el plazo de suscripción fijado por el órgano social competente, la referida cuantía queda automáticamente reducida al importe efectivamente realizado por los socios y socias, salvo que se hubiera previsto en el acuerdo que el aumento quedase sin efecto en tal caso.*

*5. Las aportaciones voluntarias deberán desembolsarse, al menos, en un cincuenta por ciento en el momento de su suscripción, y el resto en las condiciones y plazos que fije el acuerdo social, sin que en ningún caso pueda exceder de un año.*

*6. La persona socia que tuviera desembolsadas aportaciones voluntarias podrá aplicarlas, en todo o en parte, a cubrir las nuevas aportaciones obligatorias acordadas*

*por la Asamblea General.*

## **Comentario.**

En concordancia con el desembolso mínimo obligatorio fijado en la nueva LSCA para las aportaciones obligatorias, se ha modificado también el desembolso mínimo para las aportaciones voluntarias que ha pasado de ser del 25% al 50%, permaneciendo el límite máximo de un año para el desembolso total.

Por otro lado, en caso de suscripción incompleta se mantiene la reducción automática de la cuantía global máxima de las aportaciones voluntarias al importe efectivamente realizado por los socios y socias previsto en la normativa anterior, si bien la actual LSCA ha introducido la posibilidad de regular en el acuerdo que en este supuesto el aumento quede sin efecto.

## **ARTÍCULO 57. REMUNERACIÓN DE LAS APORTACIONES.**

*1. Las aportaciones sociales al capital social devengarán intereses por la cuantía efectivamente desembolsada cuando así lo determinen los estatutos sociales, la Asamblea General o, en el caso de las voluntarias, el órgano que las acuerde. Los estatutos o los expresados órganos serán, asimismo, respectivamente, los que determinen su cuantía, que en ningún caso será superior a seis puntos por encima del interés legal, en el caso de la persona socia, u ocho puntos por encima de dicho interés, en el caso de la persona inversora.*

*2. El régimen de retribución al capital y, singularmente, la eventual suspensión de su devengo o la preferencia en su abono en función del tipo de aportaciones serán objeto de determinación reglamentaria. En cualquier caso, tratándose de las aportaciones sociales previstas en el art. 60.1 cuyo reembolso pueda rehusarse incondicionalmente por el órgano de administración, su remuneración efectiva se decidirá en cada ejercicio por la Asamblea General.*

## Desarrollo Reglamentario.

### **ARTÍCULO 45. REMUNERACIÓN DE LAS APORTACIONES.**

*1. La remuneración de las aportaciones podrá supeditarse a la existencia de excedentes netos o reservas de libre disposición suficientes. En cualquier caso, se suspenderá el devengo de intereses por acuerdo del órgano de administración, cuando la cooperativa se encuentre en situación de pérdidas, hasta la celebración de la próxima Asamblea General, que deberá pronunciarse sobre este extremo.*

*2. Los importes no reembolsados de las aportaciones que hayan sido rehusadas tendrán preferencia para percibir la remuneración que, en su caso, se establezca, conforme a lo dispuesto en el art. 49.1.d).*

### **Comentario.**

Dos cuestiones se han modificado en la nueva regulación de la remuneración de las aportaciones. Por una lado, mientras que en el artículo 80 de la antigua LSCA los Estatutos sociales eran los únicos que podían fijar si las aportaciones al capital social devengarían o no intereses, en el artículo 57 de la actual LSCA se establece que, además de los Estatutos sociales, también tienen facultad la Asamblea General, y el órgano de administración en el caso de las aportaciones voluntarias, para determinar si las aportaciones al capital devengarán o no intereses. Por otro lado, mientras que en el art. 80 de la antigua LSCA el interés en ningún caso podía ser superior a 3 puntos por encima del interés legal, en el artículo 57.1 de la actual LSCA se ha incrementado el tope máximo de cuantía de los intereses a 6 puntos por encima del interés legal, en el caso de personas socias, y a 8 puntos por encima de dicho interés en el caso de personas inversoras.

Por su parte, el artículo 45 del RSCA introduce dos novedades respecto a la regulación anterior:

1. La posibilidad de supeditar el devengo de intereses de las aportaciones a la existencia de excedentes netos o de reservas de libre disposición suficientes.

2. La obligación del órgano de administración de acordar la suspensión del devengo de intereses cuando la cooperativa se encuentre en situación de pérdidas, hasta la

celebración de la próxima Asamblea General, que deberá pronunciarse sobre ese extremo.

## **ARTÍCULO 58. APORTACIONES DE NUEVO INGRESO.**

*1. La Asamblea General fijará la cuantía de las aportaciones obligatorias del aspirante a socio o socia y las condiciones y plazos para su desembolso, armonizando las necesidades de la sociedad cooperativa con las de las nuevas personas socias.*

*2. El importe de dichas aportaciones no podrá ser inferior al de las aportaciones obligatorias constitutivas a que se refiere el art. 55.3, ni superar las efectuadas con el carácter de obligatorias por las personas socias actuales, incrementadas en la cuantía que resulte de aplicar el índice general de precios al consumo.*

*No obstante, los estatutos sociales podrán prever que las aportaciones de nuevo ingreso se fijen por la Asamblea General en función del activo patrimonial o valor razonable de la empresa.*

*A los efectos de esta ley, se entenderá por valor razonable el que determine un auditor de cuentas independiente designado al efecto por el órgano de administración. El coste de dicha designación correrá a cargo de la sociedad cooperativa. El valor razonable establecido será válido para todas las incorporaciones que tengan lugar dentro del ejercicio económico, sin perjuicio de la nueva valoración que habrá de practicarse de solicitarlo la persona aspirante que discrepe y que corra con su coste con arreglo a lo que se disponga reglamentariamente.*

*3. El órgano de administración, de preverse estatutariamente, podrá autorizar que las personas aspirantes a la condición de socio desembolsen una cantidad inferior a la que les corresponda, e incluso, si la situación económica de la sociedad cooperativa lo permite, a no desembolsar cantidad alguna en el momento de su ingreso, aplazando dicha obligación hasta que se les satisfagan los anticipos o se les hagan efectivos los retornos acordados por dicho órgano, que igualmente podrá decidir su prorrateo.*

*Asimismo, podrá preverse estatutariamente que la persona trabajadora que solicite su ingreso como socio o socia tenga derecho a una deducción de la aportación obligatoria*



*de ingreso equivalente a los beneficios que con su actividad haya contribuido a generar en los dos últimos ejercicios, conforme a módulos que también deberán preverse estatutariamente.*

*4. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación cuando estatutariamente se establezca la libre transmisión de participaciones a la que se refieren los arts. 89, 96.3 y 102.2.*

## **Desarrollo Reglamentario.**

### **ARTÍCULO 46. VALOR RAZONABLE Y DISCREPANCIAS CON SU DETERMINACIÓN**

*1. El coste para sufragar los servicios prestados por el auditor o auditora de cuentas designado al efecto por el órgano de administración para la determinación del valor razonable correrá a cargo de la sociedad cooperativa. El valor razonable establecido será válido para todas las incorporaciones que tengan lugar dentro del ejercicio económico, si bien el órgano de administración podrá mantenerlo vigente hasta un máximo de cuatro ejercicios económicos consecutivos, siempre que se mantengan en lo esencial las circunstancias económicas y contables que le sirvieron de base.*

*No obstante, la persona aspirante a socia que discrepe de la valoración practicada podrá solicitar una nueva valoración, proponiendo al órgano de administración una nueva auditoría independiente y corriendo con los gastos que de esta segunda valoración se deriven.*

*2. En caso de divergencias entre las valoraciones realizadas, las partes podrán establecer de común acuerdo una valoración de la aportación de nuevo ingreso que se sitúe entre ambas.*

*En caso de discrepancias que impidan un consenso entre las partes, la persona aspirante a socia podrá solicitar del Registro de Cooperativas Andalcuzas el nombramiento de una persona auditora independiente, corriendo a cargo de sus honorarios la parte responsable de la valoración más alejada, en términos económicos, a la practicada por aquella.*

## Comentario.

La actual LSCA, tras mantener el régimen anterior respecto a las aportaciones de nuevos socios, introduce tres importantes novedades, cuya aplicación supedita a su inclusión en los estatutos sociales, y que junto con el desarrollo reglamentario de las mismas, se concretan en:

1ª) La posibilidad de que los estatutos sociales prevean que las aportaciones de nuevo ingreso se fijen por la Asamblea General en función del activo patrimonial o del valor razonable de la empresa.

El activo patrimonial de la cooperativa vendrá determinado por la suma del activo circulante o activo corriente, que comprende los elementos del patrimonio que se pretenden vender, consumir o realizar en la explotación ordinaria, y del activo fijo o no corriente que comprende todos los demás elementos.

Por su parte, el valor razonable de la empresa es aquel que determina un auditor de cuentas independiente designado por el órgano de administración. El coste del auditor correrá a cargo de la sociedad cooperativa. El valor razonable fijado por el auditor será válido para las incorporaciones que tengan lugar en ese ejercicio económico y hasta un máximo de cuatro ejercicios más si se mantienen las circunstancias económicas de la sociedad. Si un aspirante a socio o socia discrepa con ese valor pueden solicitar del órgano de administración una nueva auditoría, que correrá de su cargo. Una vez hecha la segunda valoración las partes pueden llegar a un acuerdo sobre la valoración que se sitúe entre ambas. Si aún así no hay acuerdo, la persona aspirante a socia podrá solicitar del Registro de Cooperativas Andaluzas el nombramiento de un auditor independiente cuyos honorarios abonará la parte responsable de la valoración más alejada a la practicada por aquella.

2ª) La posibilidad de que los estatutos prevean que el órgano de administración pueda autorizar a las personas aspirantes a socios a desembolsar una cantidad inferior a la que les corresponda, o incluso, a no desembolsar cantidad alguna en el momento del ingreso, aplazando el desembolso hasta que se satisfagan los anticipos o se hagan efectivos los retornos acordados por el órgano de administración.

3ª) la posibilidad de que los estatutos prevean que la persona trabajadora que solicite su ingreso tenga derecho a una deducción de la aportación obligatoria de ingreso

equivalente a los beneficios que con su actividad haya contribuido a generar en los dos últimos ejercicios conforme a módulos que también deberán preverse en los estatutos.

Si bien el apartado 4 del artículo 58 establece que lo regulado en dicho precepto “no será de aplicación cuando estatutariamente se establezca la libre transmisión de participaciones recogida en los artículos 89, 96.3 y 102.2 de la LSCA”, ello no significa que las cooperativas que opten en sus estatutos por establecer la libre transmisión de participaciones no puedan regular en los mismos el régimen de las aportaciones de nuevo ingreso. Y no solo pueden regular dicho régimen, sino que deben hacerlo, ya que la interpretación contraria equivaldría a afirmar que, en las cooperativas con libre transmisión, solo entrarían nuevas personas socias cuando se produjese la transmisión de las participaciones de alguna de ellas, lo que no es conforme a ley, ya que ello vulneraría el principio de libre adhesión, principio básico cooperativo recogido en el artículo 4 de la LSCA que establece: “*Los principios generales que informan la constitución y funcionamiento de las sociedades cooperativas andaluzas son los siguientes: a) Libre adhesión y baja voluntaria de los socios y socias.*”

## **ARTÍCULO 59. REGULARIZACIÓN DEL BALANCE Y ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.**

*1. El balance de las sociedades cooperativas podrá regularizarse con arreglo a la normativa aplicable, sin perjuicio del destino de la plusvalía resultante establecido en el apartado siguiente.*

*2. Del resultado de la regularización del balance se destinará un cincuenta por ciento al Fondo de Reserva Obligatorio y el resto a una cuenta de pasivo denominada «actualización de aportaciones», a cuyo cargo se realizará la actualización del valor de las aportaciones al capital social. Todo ello, operará sin perjuicio de lo que establezca una ley especial a este respecto.*

*En caso de liquidación o transformación de la cooperativa, el remanente existente en la cuenta de actualización de aportaciones se destinará al Fondo de Reserva Obligatorio.*

*3. Las aportaciones susceptibles de actualización así como sus requisitos y límites serán objeto de regulación reglamentaria*

## Desarrollo Reglamentario.

### **ARTÍCULO 47. ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.**

*1. En cada ejercicio económico, si lo acuerda la Asamblea General, podrán actualizarse las aportaciones desembolsadas y existentes en la fecha del cierre del ejercicio económico, si lo permite la cuenta de actualización de aportaciones a que se refiere el art. 59.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. La actualización no podrá ser superior al índice general de precios al consumo.*

*2. La actualización de aportaciones sólo podrá realizarse, como máximo, respecto a los cinco ejercicios anteriores no actualizados, a aquel en que se aprueben las cuentas por la Asamblea General. Sólo podrán ser actualizadas las aportaciones de las personas socias que pertenezcan a la sociedad en el momento en el que se celebre la Asamblea General que adopte el acuerdo de actualización.*

#### **Comentario.**

En nada difiere la actual regulación de la regularización del balance y la actualización de aportaciones con la contenida en el art. 83 de la derogada Ley de Cooperativas.

La regularización de balances se puede definir como aquel procedimiento que permite adecuar la información ofrecida en el [balance de situación](#) y en la cuenta de pérdidas y ganancias a la realidad, en aquellos casos en los que por distintos motivos esta igualdad no se produce. La [regularización](#) de [balances](#) comprende: la [revalorización](#) de los elementos de [activo fijo](#) que están infravalorados por [efecto](#) de la [inflación](#), la afloración de [activos y pasivos](#) ocultos y la eliminación de [activos y pasivos ficticios](#).

Pues bien, tanto en la regulación anterior como en la actual vemos que del resultado de la regularización del balance, un 50% se ha de destinar al Fondo de Reserva Obligatorio, y el otro 50% a una cuenta de pasivo denominada "actualización de aportaciones" a cuyo cargo se efectuará la actualización de las aportaciones de los socios.

Tanto en la regulación anterior como en la actual se deja al acuerdo de la Asamblea General la posibilidad de actualizar las aportaciones desembolsadas, como máximo, en los cinco ejercicios anteriores no actualizados, y con las siguientes condiciones:

- Solo se permite la actualización de las personas socias que pertenezcan a la

sociedad en el momento en que se celebre la Asamblea General en la que se adopte el acuerdo de actualización.

- Solo se permite la actualización si lo permite la cuenta de actualización de aportaciones antes mencionada.

En opinión de D. Antonio Rivero López, presidente de FAECTA, la opción de actualización de aportaciones regulada en el artículo 59.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en el artículo 47 del Reglamento de la Ley, solo es factible cuando se haya promulgado una Ley de actualización de balances y la cooperativa se haya acogido a dicha opción, en caso contrario no se podría realizar actualización de aportaciones.

Otro asunto distinto será el destino que la Asamblea decida para los retornos cooperativos (art. 54 del Reglamento), que podrá destinarse entre otros a incrementar las aportaciones obligatorias de las personas socias o mediante la incorporación a un fondo de retornos. Esta opción de “capitalización” de los retornos cooperativos, desde un punto de vista financiero, no mejora la posición de las personas socias, ya que en el fondo se está aumentando mi participación en base a un beneficio materializado que por Ley me corresponde.

## **ARTÍCULO 60. REEMBOLSO.**

*1. Las aportaciones sociales confieren a la persona socia que las desembolsa el derecho a su reembolso en caso de baja, salvo que el órgano que las acuerde o emita les prive de este carácter, en cuyo caso, el órgano de administración podrá rehusar su reembolso incondicionalmente, salvo que los estatutos hayan regulado la libre transmisión de aportaciones, conforme a lo previsto en los arts. 89, 96.3 y 102.2.*

*2. La transformación de aportaciones con derecho de reembolso, en caso de baja, en aportaciones cuyo reembolso puede ser rehusado incondicionalmente por el órgano de administración de la cooperativa, o la transformación inversa, requerirá el acuerdo de la Asamblea General.*

*Asimismo, los estatutos podrán prever que, cuando en un ejercicio económico el importe de la devolución de las aportaciones supere el porcentaje de capital social contable que*

*en ellos se establezca, los nuevos reembolsos estén condicionados al acuerdo favorable del órgano de administración.*

*En ambos casos, podrán causar baja, con la consideración de justificada, aquellas personas socias que se ajusten a lo previsto o en quienes concurran las circunstancias establecidas en el art. 23.3, letras b) y c), procediéndose a la devolución de sus aportaciones en el plazo máximo de un año a partir del acuerdo societario.*

*3. El valor de las aportaciones que hayan de reintegrarse será el que refleje el libro registro de personas socias y de aportaciones al capital social a que se refiere el art. 72.1.a), incluyéndose en el cómputo, en su caso, la parte proporcional del Fondo de Retornos.*

*El órgano de administración comunicará a la persona socia que cause baja la liquidación efectuada, que incluirá las deducciones practicadas y el importe a reembolsar, ambos, en su caso, en el plazo de un mes desde la aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio en que se produzca dicha baja.*

*4. Las reglas para efectuar la liquidación, la forma y plazos para realizar el reembolso, así como el régimen jurídico del rehúse, se determinarán reglamentariamente, sin que las eventuales deducciones, una vez detraídas las pérdidas imputables al socio y las acumuladas en la proporción que contablemente le corresponda, puedan superar el cincuenta por ciento de las aportaciones obligatorias, y sin que la posible demora en su devolución pueda superar el plazo de cinco años en casos de exclusión y de baja no justificada, de tres años en caso de baja justificada, y de un año, u otro plazo superior que permita la acreditación del carácter de heredero o legatario de la persona socia fallecida, en el supuesto de baja por defunción.*

*5. De establecerse el reparto parcial del Fondo de Reserva Obligatorio conforme a lo dispuesto en el art. 70.3, el socio o socia que cause baja en la sociedad cooperativa tras una permanencia de al menos cinco años tendrá derecho al reintegro de una parte alícuota del cincuenta por ciento del importe de dicho fondo generado a partir de su ingreso, que se determinará en función de la actividad desarrollada en aquella. En este caso, el importe del citado reintegro se incluirá en la liquidación y se hará efectivo en la forma y plazos que se establezcan reglamentariamente, sin que la parte no reintegrada devengue interés alguno.*

## Desarrollo Reglamentario.

### **ARTÍCULO 48. REEMBOLSO.**

*1. El órgano de administración, en el plazo de un mes desde la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio en el que la persona socia cause baja, comunicará a ésta la cantidad a reembolsar como consecuencia de la liquidación efectuada, las deducciones practicadas, de proceder éstas, y le hará efectivo el reembolso, salvo que en este último caso, y previa audiencia del interesado, el órgano de administración haga uso de la facultad de aplazamiento prevista en el apartado 2.d), cuyo cómputo se iniciará el día de la baja de la persona socia.*

*El socio o socia disconforme con el acuerdo sobre la cantidad a reembolsar podrá impugnarlo por el cauce procesal previsto en el art. 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, pudiendo recurrirlo previamente, de establecerse estatutariamente, ante el Comité Técnico o, en su defecto, ante la Asamblea General, en el plazo de un mes desde la notificación de la cantidad a reembolsar.*

*No obstante, el órgano de administración y el socio o socia, podrán acordar una liquidación provisional, siempre que la baja se produzca en el primer semestre del ejercicio económico, sin perjuicio de practicar, posteriormente, la oportuna liquidación definitiva.*

*2. Los estatutos sociales deberán regular el referido derecho al reembolso con arreglo a las siguientes normas:*

*a) Del importe de las aportaciones, se deducirán, en el momento de la baja, las pérdidas imputables a la persona socia, correspondientes al ejercicio durante el que se haya producido la misma y las acumuladas en la proporción que contablemente le corresponda, que aún estuvieran pendientes de compensar.*

*b) Del importe de las aportaciones obligatorias que resulte de la aplicación de la letra a), el órgano de administración podrá acordar las deducciones que se establezcan estatutariamente, que no podrán ser superiores al treinta por ciento para el supuesto de baja por exclusión, ni al veinte por ciento para el de baja no justificada, con las excepciones previstas en el art. 25.3, no pudiendo exceder, bajo ningún concepto, del cincuenta por ciento del indicado importe.*



*En ningún caso podrán establecerse deducciones sobre las aportaciones voluntarias, ni sobre las obligatorias cuando la baja sea justificada o en caso de defunción.*

*c) Una vez realizados los ajustes señalados en las letras anteriores, se detraerán del importe de las aportaciones sociales las sanciones económicas impuestas al socio o socia que no hubieran sido satisfechas, así como aquellas obligaciones de pago que la persona socia tenga pendientes con la cooperativa derivadas de su relación societaria.*

*d) El órgano de administración podrá aplazar el reembolso de la liquidación en el plazo que señalen los estatutos sociales, que no podrá superar los límites fijados en el art. 60.4 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, a partir de la fecha de baja.*

*A efectos de dicho aplazamiento, la baja voluntaria tendrá lugar al término del plazo de preaviso. La baja obligatoria se entenderá producida, cuando el procedimiento se haya iniciado de oficio, en la fecha fijada en el acuerdo del órgano de administración o, en su caso, de la Asamblea General. Cuando el procedimiento de baja obligatoria se inicie a instancia de parte, se atenderá a la fecha de baja que conste en la comunicación de la persona socia, o en su defecto, a su fecha de presentación, salvo que hubiera sido calificada como no justificada, en cuyo caso se observará la fecha de baja que se establezca en el acuerdo de calificación.*

*En el supuesto de fallecimiento de la persona socia, se atenderá a la fecha en que este se produzca.*

*Las aportaciones voluntarias, en la cuantía que resulte de la liquidación, se reembolsarán en las condiciones que señale el acuerdo de su emisión.*

*e) En el supuesto de que no se hayan actualizado las aportaciones al capital, los estatutos podrán prever que la persona socia que cause baja y haya permanecido, al menos cinco años en la sociedad cooperativa, tenga derecho a su actualización, en los términos establecidos en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en el art. 47.*

*f) El importe de las aportaciones no reembolsadas devengarán el interés legal del dinero, desde la fecha en que se practicó la liquidación, y no podrá ser actualizado.*

*g) Si del importe de la liquidación practicada resultara deudora la persona socia, el órgano de administración fijará un plazo que no podrá ser inferior a tres meses ni*

*superior a un año, para que abone el importe adeudado, con el devengo del interés legal del dinero.*

*3. De establecerse el carácter parcialmente repartible del Fondo de Reserva Obligatorio, de acuerdo con lo previsto en los arts. 60.5 y 70.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, su plazo de reembolso será el que señalen los estatutos sociales sin que el importe no reintegrado devengue interés alguno. El citado plazo estatutario no podrá ser superior a seis años en caso de exclusión y de baja no justificada, a cuatro años en caso de baja justificada, y a un año, u otro plazo superior que permita la acreditación del carácter de heredero o legatario de la persona socia fallecida, en el supuesto de que dicha baja sea por defunción. Todo ello operará sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente, a propósito de las aportaciones rehusables.*

#### **ARTÍCULO 49. RÉGIMEN JURÍDICO DEL REHÚSE DE APORTACIONES.**

*1. A las aportaciones sociales integrantes del capital social, previstas en el art. 60.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, susceptibles de ser rehusadas incondicionalmente por el órgano de administración, les será de aplicación el siguiente régimen:*

*a) La facultad atribuida al órgano de administración conforme a lo dispuesto en los arts. 37.2.h) y 60.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, relativa al rehúse incondicional del reintegro de las aportaciones sociales, que se practicará tras la baja de su titular, tiene carácter discrecional, si bien dicho órgano no podrá incurrir al ejercerla en arbitrariedad alguna.*

*b) La persona socia a la que se le haya rehusado el reembolso de sus aportaciones podrá transmitirlas en las condiciones y con los requisitos que se establecen en los arts. 89, 96.3 y 102.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, así como en los arts. 77 y 98 de este Reglamento, en cualquier momento previo a su eventual reembolso.*

*c) Salvo disposición estatutaria en contra, en el supuesto de que existan aportaciones no exigibles rehusadas, la suscripción de nuevas aportaciones deberá efectuarse mediante la adquisición de las de este tipo, que se liquidarán a sus titulares originarios por orden de antigüedad en función de la fecha de baja en la sociedad cooperativa. Si se producen bajas simultáneas, la adquisición se debe distribuir en proporción al importe de las*

*aportaciones rehusadas.*

*d) La remuneración efectiva de las aportaciones rehusables se decidirá en cada ejercicio económico por la Asamblea General, conforme a lo dispuesto en el art. 57.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. No obstante, en caso de acordarse, la remuneración de las aportaciones cuyo reembolso hubiera sido rehusado por el órgano de administración tendrá preferencia respecto de aquella que corresponda al resto de aportaciones rehusables así como de cualquier otra que establezcan los estatutos o, en su caso, apruebe el órgano social pertinente.*

*e) Si el órgano de administración acuerda la devolución de las aportaciones rehusadas, antes de la disolución, no podrá hacer uso del aplazamiento previsto en el apartado 2.d) del artículo anterior, y el reembolso deberá materializarse en el plazo máximo de dos años desde que se adopte el acuerdo. Los estatutos de la sociedad cooperativa establecerán si la devolución se hará a todas las personas socias a las que se les haya rehusado su aportación por igual o por orden de antigüedad en función de la fecha de baja. En su defecto, la devolución se hará por igual a todas las personas socias cuyas aportaciones hayan sido rehusadas.*

*2. Cuando los estatutos sociales prevean, con arreglo al párrafo segundo del art. 60.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, la rehusabilidad de las aportaciones que excedan, en un ejercicio económico, de un determinado porcentaje del capital social, aquellos no podrán establecer criterios de preferencia en el reembolso de las aportaciones exigibles, dentro de su clase, obligatoria o voluntaria, entre las personas socias de la entidad.*

*3. Si los estatutos no establecieran el rehúse incondicional de las aportaciones por el órgano de administración de la entidad, se entenderá que todas las aportaciones son exigibles, salvo el supuesto de libertad de transmisión de aportaciones establecido en los arts. 89, 96.3 y 102.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

## **Comentario.**

La LSC de 1999 contemplaba la figura del rehúse, pero de forma muy sintética, algo que se repitió en la LSC de 2011, con la diferencia de que esta remitía al Reglamento una regulación más amplia, que es la que lleva a cabo el artículo 49 del RSCA. El rehúse es una institución cooperativa, relativamente moderna, con arreglo a la cual, en caso de baja de un socio, el órgano de administración puede decidir no devolverle su aportación hasta

que la entidad se liquide. Todo ello, con la finalidad de que desde un punto de vista contable, el capital social sea considerado patrimonio neto, con arreglo a las normas dictadas al respecto por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. En este artículo se determinan cuestiones prácticas importantes sobre esta figura para las cooperativas, tales como la compatibilidad de dicha figura con la transmisión de la aportación rehusada a un tercero (figura exclusiva de la LSCA 2011), que el ingreso de un nuevo socio en la entidad se haga mediante la adquisición de aportaciones rehusadas, la preferencia de pago de intereses en el caso de aportaciones rehusadas, que su devolución, caso de acordarse, se haga en plazos inferiores a los previstos con carácter general, o que la rehusabilidad de las aportaciones deberá hacerse sin discriminación entre socios, dentro de su clase<sup>9</sup>.

Tanto la derogada LSCA como la vigente establecen el derecho de las personas socias al reembolso de sus aportaciones en caso de baja en la sociedad, con dos salvedades:

1ª. Que el órgano que las acuerde o emita les prive de ese carácter, en cuyo caso el órgano de administración podrá rehusar su reembolso incondicionalmente.

2ª. Que los estatutos hayan regulado la libre transmisión de participaciones.

Lo que nos lleva a establecer tres tipos de aportaciones al capital:

1 - Las reembolsables.

2 - Las rehusables.

3 - Las que se pueden transmitir libremente a terceros.

Tratándose de aportaciones reembolsables, toda persona socia podrá causar baja, que se entenderá como justificada:

a) Cuando la Asamblea General acuerde la transformación de aportaciones reembolsables en rehusables o viceversa.

b) Cuando los estatutos prevean que el reembolso estará condicionado al acuerdo favorable del órgano de administración si el importe de la devolución de las aportaciones

---

<sup>9</sup> Escuela de Economía Social, FIDES Directivos y Directivas 2015. Pág. 71.

supera un determinado porcentaje del capital social.

El artículo 60 de la LSCA que nos ocupa, y los artículos 48 y 49 del RSCA que lo desarrollan, regulan el régimen jurídico de las aportaciones reembolsables y de las rehusables, que se pueden sintetizar del siguiente modo:

- Régimen jurídico aplicable a las aportaciones Reembolsables:

a) La persona socia que quiera causar baja en una fecha determinada, deberá comunicarlo al órgano de administración con la antelación que fijen lo estatutos.

b) El órgano de administración, en el plazo de un mes desde la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio en el que la persona socia cause baja, le comunicará la liquidación efectuada, las deducciones practicadas y le hará efectivo el reembolso.

c) La liquidación la efectuará el órgano de administración con arreglo a las siguientes reglas:

1º - Deducirá de las aportaciones, en el momento de la baja, las pérdidas imputables a la persona socia del ejercicio en que se haya producido al misma y las acumuladas en la proporción que le correspondan pendientes de compensar.

2º - Salvo que la baja sea justificada o en caso de defunción, del importe de las aportaciones obligatorias resultante, el órgano de administración practicará las deducciones que se hayan establecido estatutariamente y que no podrán ser superiores al 30% en caso de baja por exclusión, ni al 20% en caso de baja no justificada, si bien se podrán incrementar en un porcentaje no superior al 50% en caso de incumplimiento del plazo de permanencia o del plazo de preaviso.

3º- De la cantidad resultante se detraerán las sanciones económicas impuestas al socio o socia que no hubieran sido satisfechas y demás cantidades pendientes de pago a la cooperativa como derivadas de su relación societaria.

d) El órgano de administración podrá aplazar el reembolso de la liquidación en los siguientes plazos máximos desde la baja, que se fijarán en los estatutos, devengando el interés legal el importe de las aportaciones no reembolsadas desde la fecha en que se practicó la liquidación:

-5 años en caso de exclusión y de baja no justificada.

-3 años en caso de baja justificada.

-1 año, u otro plazo superior, que permita la acreditación del carácter de heredero o legatario de la persona socia fallecida en caso de baja por defunción.

e) Las aportaciones voluntarias, en la cuantía que resulte de la liquidación, se reembolsarán en las condiciones que señale el acuerdo de emisión.

f) Si no se hubiesen actualizado las aportaciones al capital, la persona socia que cause baja y hubiese permanecido 5 años en la sociedad cooperativa, tendrá derecho a su actualización siempre que se hubiese previsto en los estatutos.

g) Si como consecuencia de la liquidación la persona socia resultase deudora a la sociedad, el órgano de administración fijará un plazo de entre tres meses y un año para que abone lo adeudado, con el devengo del interés legal del dinero.

h) De establecerse en los estatutos, el reparto parcial del Fondo de Reserva Obligatorio, la persona socia que cause baja tras una permanencia de al menos 5 años en la sociedad tendrá derecho al reintegro de una parte alícuota del 50% del importe de dicho fondo generado a partir de su ingreso en función de la actividad desarrollada en la sociedad. El importe del reintegro se incluirá en la liquidación y su plazo de reembolso no podrá ser superior:

- a 6 años en caso de exclusión y de baja no justificada.

- a 4 años en caso de baja justificada.

- a 1 año u otro plazo superior que permita la acreditación del carácter de heredero o legatario de la persona socia fallecida, en caso de baja por defunción.

#### - Régimen Jurídico de las aportaciones rehusables

a) El órgano de administración podrá rehusar incondicionalmente el reintegro de las aportaciones sociales al socio que cause baja, cuando el órgano que las haya acordado o emitido les haya privado del derecho de reembolso. El rehúse de participaciones está sometido a la discrecionalidad del órgano de administración, que no podrá incurrir en

arbitrariedad al ejercerla.

b) La persona socia a la que se le haya rehusado el reembolso podrá transmitirlas con los siguientes requisitos:

- Entre socios y socias rige la libre transmisión de participaciones, bastando una comunicación al órgano de administración.
- En el supuesto de transmisión a una tercera persona, el órgano de administración debe constatar que la persona aspirante reúne los requisitos objetivos de admisión, sin perjuicio del derecho preferente de adquisición:

De las personas trabajadoras, y después, de la propia sociedad cooperativa en las cooperativas de trabajo.

De la propia sociedad cooperativa en las cooperativas de consumo y de servicios.

- En caso de que existan aportaciones rehusadas, la suscripción de nuevas aportaciones siempre deberá efectuarse mediante la adquisición de éstas, que se liquidarán a sus titulares por orden de antigüedad.
- La remuneración de las aportaciones rehusables se decidirá cada ejercicio económico por la Asamblea General, y tendrá preferencia respecto de la remuneración que corresponda al resto de aportaciones.
- Si el órgano de administración acordase devolver las aportaciones rehusadas, deberá hacer el reembolso en el plazo máximo de dos años desde el acuerdo.
- Si los estatutos no establecieran el rehúse incondicional de las aportaciones por el órgano de administración, se entenderá que todas las aportaciones son exigibles.

## **ARTÍCULO 61. TRANSMISIÓN DE LAS APORTACIONES.**

### *1. Las aportaciones al capital social podrán transmitirse:*

*a) Por actos ínter vivos: las aportaciones serán transmisibles entre las personas socias, de una parte, y entre las inversoras, de otra, de acuerdo con lo establecido en los*



estatutos.

*No obstante, los estatutos podrán prever, asimismo, la libre transmisión de aportaciones entre las personas socias e inversoras, siempre que estas últimas cumplan los requisitos estatutariamente establecidos para adquirir la condición de socio y el órgano de administración proceda a su admisión conforme a lo regulado en el art. 18.*

*Asimismo, los estatutos podrán regular la libre transmisión de las aportaciones a personas ajenas a la entidad, en los supuestos previstos en los arts. 89, 96.3 y 102.2.*

*En todo caso, habrá de respetarse el límite máximo de aportaciones por persona socia establecido en el art. 54.3.*

*b) Por sucesión mortis causa: a la muerte de la persona socia, los derechos y deberes económicos que deriven de sus aportaciones al capital social se transmitirán a sus personas herederas y legatarias, conforme a lo establecido en el art. 60, relativo al reembolso.*

*De no ser personas socias, los citados herederos o legatarios podrán adquirir tal condición solicitando su admisión al órgano de administración con arreglo al procedimiento previsto en el art. 18. En este caso, el órgano de administración podrá autorizar a la persona que de entre ellas designen a adquirir la condición de socio o socia.*

*La nueva persona socia no estará obligada a satisfacer cuotas de ingreso o aportaciones de nuevo ingreso siempre que solicite su admisión en la sociedad cooperativa antes del plazo de seis meses desde que adquiera la condición de heredera o legataria. En el caso de que las aportaciones se transmitan a varias personas herederas o legatarias, aquel o aquella que haya sido autorizado para adquirir la condición de socio o socia deberá desembolsar la diferencia entre la parte alícuota de lo heredado o legado y la aportación efectivamente realizada por su causante.*

*2. Las sociedades cooperativas no podrán adquirir aportaciones sociales de su propio capital, ni aceptarlas a título de prenda, salvo que lo hagan a título gratuito o se haya ejercitado el derecho a la libre transmisión de las aportaciones previsto en el apartado 1, párrafo tercero. A este respecto, las sociedades cooperativas de crédito se regirán por su normativa aplicable.*

*3. Las personas acreedoras de los socios y socias no tendrán derecho sobre sus aportaciones, al ser estas inembargables, sin perjuicio de los derechos que puedan ejercer sobre los reembolsos y retornos satisfechos, o devengados y aún no satisfechos, por el socio o socia.*

## **Comentario.**

Tanto la derogada Ley de Cooperativas como la actual regulan la posibilidad de transmisión de las aportaciones entre personas socias, así como entre personas inversoras, figura esta última que ha venido a sustituir a la de los asociados que recogía el art. 35 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

La actual LSCA introduce también la posibilidad de que los estatutos establezcan la libre transmisión entre personas socias y personas inversoras, siempre que las personas inversoras cumplan los requisitos establecidos para adquirir la condición de persona socia.

Sin embargo, la novedad que más ha llamado la atención de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, ha sido la introducción de la libre transmisión de aportaciones sociales a personas ajenas a la entidad, siempre que esta posibilidad se recoja en los estatutos sociales.

Las reglas a las que se somete esta libre transmisibilidad se recogen:

- Para las Cooperativas de Trabajo: en los artículos 89 de la LSCA y 77 del RSCA.
- Para las Cooperativas de Consumo en los artículos 96 de la LSCA y 92 del RSCA.
- Para las Cooperativas de Servicios en los artículos 102 de la LSCA y 98 del RSCA.

Como medida equilibradora el legislador introduce el límite de que las sociedades cooperativas en funcionamiento que hayan previsto la libre transmisión de sus participaciones sociales, no podrán establecer en sus estatutos el reparto parcial de la reserva legal obligatoria (art. 70.3 párr. segundo). Hemos de retener que este mandato está referido a los socios que causan baja (arts. 60.5 y 70.3), no a la hipótesis de la liquidación social (art. 82.1 letra e). La nueva LSCA establece, asimismo, la incompatibilidad entre las cuotas de ingreso y la admisión estatutaria de la libre transmisión de las participaciones sociales (art. 62.1 párr. final).

La última forma de transmisión de las aportaciones que regula la actual LSCA, y que también hacía la anterior, es la que se lleva a cabo por sucesión mortis causa. Las principales modificaciones y novedades que introduce la actual LSCA a esta forma de transmisión son:

a) En el artículo 85.2 de la derogada LSCA, las aportaciones al capital se reembolsaban a los herederos y legatarios a la muerte del socio, en cambio en el artículo 61.1 b) de la actual LSCA no se habla de reembolso, sino de derechos y deberes económicos que se transmitirán a las personas herederas y legatarias.

b) En el artículo 84.2 c) de la derogada LSCA el plazo para el reembolso era de dos años u otro superior que permitiera la acreditación del carácter de heredero o legatario de la persona socia fallecida, en la actual LSCA el plazo se ha reducido a un año u otro superior, que permita también la acreditación del carácter de heredero o legatario de la persona socia fallecida.

c) En la actual LSCA se regula como novedad que la persona autorizada de entre las personas herederas o legatarias para adquirir la condición de socio o socia, deberá desembolsar la diferencia entre la parte alícuota de lo heredado o legado y la aportación efectivamente realizada por su causante.

## **ARTÍCULO 62. APORTACIONES NO INTEGRADAS EN EL CAPITAL SOCIAL Y OTRAS FORMAS DE FINANCIACIÓN.**

*1. La Asamblea General podrá establecer cuotas de ingreso y periódicas, que no integrarán el capital social ni serán reintegrables, y cuya finalidad será la de satisfacer un requisito de ingreso en la entidad o la que determine la propia Asamblea General, respectivamente.*

*Las cuotas de ingreso y periódicas podrán ser diferentes en función de la clase de socio, de su naturaleza física o jurídica, o del grado de participación en la actividad cooperativizada.*

*Las cuotas de ingreso de las nuevas personas socias no podrán ser superiores al veinticinco por ciento de las aportaciones efectuadas con el carácter de obligatorias por*

*las personas socias existentes, incrementadas en la cuantía que resulte de aplicar el índice general de precios al consumo, conforme a lo establecido en el art. 58.2.*

*Las cuotas de ingreso serán incompatibles con la opción estatutaria prevista en el párrafo segundo del art. 58.2 sobre valoración de las aportaciones en función del activo patrimonial o valor razonable, así como con los regímenes de libre transmisión de participaciones previstos en los arts. 89, 96.3 y 102.2.*

*2. Las entregas que realicen los socios y socias de fondos, productos o materias primas para la gestión cooperativa y, en general, los pagos que satisfagan para la obtención de servicios propios de la entidad no integrarán el capital social y estarán sujetos a las condiciones pactadas con la sociedad cooperativa.*

*3. La Asamblea General podrá acordar la financiación voluntaria por parte de las personas socias, o no socias, bajo cualquier modalidad jurídica y en el plazo y condiciones que se establezcan en el correspondiente acuerdo, sin que la misma integre el capital social.*

*4. Las sociedades cooperativas, previo acuerdo de la Asamblea General, podrán emitir obligaciones, cuyo régimen de emisión se ajustará a lo dispuesto en la legislación aplicable.*

*5. La Asamblea General podrá acordar la emisión de títulos participativos, que podrán tener la consideración de valores mobiliarios y cuyo régimen jurídico se ajustará a la normativa sobre activos financieros.*

*Mediante el título participativo, el suscriptor realizará una aportación económica por un tiempo determinado a cambio de una remuneración que podrá ser fija, variable o mixta, según establezca el acuerdo de emisión, el cual concretará, asimismo, el plazo de amortización de los títulos y garantizará la representación y defensa de los intereses de los suscriptores en la Asamblea General y en el órgano de administración, sin que se les reconozca, en ningún caso, derecho de voto.*

## Comentario.

La actual regulación de las aportaciones que pueden hacer las personas socias, o terceros ajenos, según el caso, como medio de financiación de la sociedad cooperativa no difiere en gran medida de la anterior.

Tanto una como otra regulan los siguientes tipos de aportaciones, que no integran el capital, ni son reintegrables y cuyo fin es la financiación de la sociedad cooperativa:

a) Las cuotas de ingreso y periódicas. No podrán superar el 25% de las aportaciones obligatorias de las personas socias, incrementadas en el IPC. Hay dos supuestos en los que la sociedad cooperativa no puede establecer cuotas de ingreso:

1. Cuando los estatutos prevean que las aportaciones de nuevo ingreso se fijen por la Asamblea General en función del activo patrimonial o valor razonable de la empresa.
2. Cuando los estatutos prevean la libre transmisión de participaciones.

b) Las entregas de las personas socias de fondos, productos y materias primas para la gestión de la cooperativa.

c) Los pagos de las personas socias para la obtención de servicios propios de la entidad.

d) La financiación voluntaria de las personas socias.

e) La emisión de obligaciones.

f) La emisión de títulos participativos.

## **ARTÍCULO 63. PARTICIPACIONES ESPECIALES**

*1. Las participaciones especiales constituyen recursos financieros que tienen la naturaleza de crédito o deuda subordinados, que se caracterizan por disponer de un amplio plazo de vencimiento y que la sociedad cooperativa puede captar tanto de las personas socias como de terceros.*

*2. La Asamblea General podrá acordar su admisión estableciendo libremente su régimen específico en el acuerdo de emisión, sin que en ningún caso puedan formar parte del capital social ni conferir a sus titulares derechos propios de la condición de persona socia.*

*3. Su acreditación, procedimiento de reembolso y régimen de prelación serán objeto de regulación reglamentaria.*

*4. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación a las sociedades cooperativas de crédito y de seguros, sin perjuicio de lo dispuesto en su normativa específica.*

## **Desarrollo Reglamentario.**

### **ARTÍCULO 50. PARTICIPACIONES ESPECIALES.**

*1. Las participaciones especiales se representarán por medio de títulos o anotaciones en cuenta, que podrán tener la consideración de valores mobiliarios si así se prevé en el acuerdo de emisión, en cuyo caso su régimen jurídico se ajustará a la normativa sobre activos financieros*

*2. El reembolso de estas aportaciones no se realizará hasta que transcurran, al menos, cinco años desde su emisión. Sin embargo, podrán reembolsarse, a criterio de la sociedad, siguiendo el procedimiento previsto para la reducción de capital por restitución de aportaciones en la legislación reguladora de las sociedades de responsabilidad limitada.*

*3. Cuando el vencimiento de las participaciones especiales no tenga lugar hasta la aprobación de la liquidación de la cooperativa, a efectos de prelación de créditos, se situarán detrás de todos las personas acreedoras comunes.*

*4. Su emisión en serie requerirá acuerdo de la Asamblea General en el que se fijarán las cláusulas de emisión. La suscripción de, al menos, la mitad de las participaciones especiales deberá ser ofrecida a las personas socias y trabajadores o trabajadoras de la sociedad, con carácter previo a que puedan ser suscritas por terceras personas, debiendo contar dicha oferta con una publicidad equivalente a la establecida para la convocatoria de la Asamblea General.*

## Comentarios.

Estas participaciones son una novedad de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. Su régimen jurídico se puede sintetizar en las siguientes notas:

- Tienen naturaleza de crédito o deuda subordinada.
- No forman parte del capital ni confieren a sus titulares derechos propios de la condición de persona socia.
- Están representadas por títulos o anotaciones en cuenta que podrán tener la consideración de valores mobiliarios.
- No se reembolsan hasta que no transcurran, al menos, 5 años desde su emisión.
- Si el vencimiento se difiere hasta la aprobación de la liquidación de la cooperativa, a efectos de prelación de créditos, se situarán detrás de todos los acreedores comunes.
- Deberá ofrecerse a las personas socias y a las trabajadoras y trabajadores de la sociedad la suscripción de, al menos, la mitad de las participaciones especiales, con carácter previo a que puedan ser suscritas por terceras personas. La oferta a las personas socias se hará de forma equivalente a la establecida para la convocatoria de la Asamblea General.

## **ARTÍCULO 64. EJERCICIO ECONÓMICO.**

*1. El ejercicio económico tendrá una duración de doce meses, salvo en los casos de constitución, extinción o mutaciones estructurales de la sociedad cooperativa, y coincidirá con el año natural, a menos que los estatutos dispongan lo contrario.*

*2. El órgano de administración deberá redactar, dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio económico, las cuentas anuales y demás documentos exigibles conforme a la normativa general contable, con las especialidades que se determinan en esta ley y en la normativa contable de aplicación, ya sea general o específica, así como la propuesta de distribución de resultados positivos o de imputación de pérdidas y, en su*



*caso, la relación de resultados extracooperativos.*

*Dentro del citado plazo de tres meses, el órgano de administración deberá poner las cuentas a disposición de las personas auditoras nombradas, en su caso.*

*3. La valoración de los elementos integrantes de las distintas partidas que figuren en las cuentas anuales se realizará con arreglo a los principios generalmente aceptados en contabilidad, así como a criterios objetivos que garanticen los intereses de terceros y que permitan una ordenada y prudente gestión económica de la sociedad cooperativa.*

## **Desarrollo Reglamentario.**

### **ARTÍCULO 51. FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.**

*1. De conformidad con lo establecido en el art. 47.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, la Dirección, en el supuesto de que exista, deberá elevar al órgano de administración de la sociedad, dentro del plazo de dos meses a contar desde el día de cierre del ejercicio social, las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión.*

*2. El órgano de administración deberá redactar, dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio económico, las cuentas anuales, el informe de gestión, en su caso, y el resto de documentación recogida en el art. 64.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*Dentro del citado plazo de tres meses, el órgano de administración deberá poner las cuentas a disposición de las personas auditoras nombradas, en su caso.*

*3. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, en su caso, y la memoria, debiendo firmarse por las personas que tengan atribuidas las facultades de la Presidencia y de la Secretaría en el órgano de administración.*

*4. La valoración de los elementos integrantes de las distintas partidas que figuren en las cuentas anuales se realizará con arreglo a los principios generalmente aceptados en contabilidad, así como a criterios objetivos que garanticen los intereses de terceros y que permitan una ordenada y prudente gestión económica de la sociedad cooperativa.*

## Comentario.

La regulación del régimen aplicable al ejercicio económico se mantiene en los mismos términos, que se pueden resumir:

a) El ejercicio económico tendrá una duración de 12 meses y coincidirá con el año natural.

b) Dentro de los dos meses siguientes al cierre del ejercicio social, la Dirección, en el supuesto de que exista, deberá elevar al órgano de administración las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión.

c) Dentro de los tres meses mencionados el órgano de administración deberá redactar:

- Las cuentas anuales, que comprenderán: el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, en su caso, y la memoria. Se firmarán por las personas que tengan atribuidas las facultades de la Presidencia y de la Secretaría en el órgano de administración.

- El informe de gestión.

- La propuesta de distribución de resultados positivos o de imputación de pérdidas.

- La relación de resultados extracooperativos. En caso de que la sociedad optase en sus estatutos por no contabilizar separadamente los resultados extracooperativos, del total de los resultados de la cooperativa se dotará: un mínimo del 20% al Fondo de Reserva Obligatorio, hasta que alcance el 50% del capital social; y el 10% al Fondo de Formación y Sostenibilidad sin límite alguno.

## **ARTÍCULO 65. DETERMINACIÓN DE RESULTADOS: INGRESOS.**

*1. La contabilidad de la sociedad cooperativa deberá distinguir entre dos tipos de resultados: cooperativos y extracooperativos.*

*2. Para la determinación de los resultados cooperativos, se considerarán ingresos de esta naturaleza:*

- a) *Los derivados de la actividad cooperativizada realizada con los socios y socias.*
- b) *Respecto a las sociedades cooperativas de trabajo, los derivados de la actividad cooperativizada realizada por las personas trabajadoras no socias, con arreglo a lo establecido en el art. 90.*
- c) *Los ingresos financieros procedentes de la gestión de la tesorería ordinaria necesaria para la realización de la actividad cooperativizada.*
- d) *Los ingresos de naturaleza financiera procedentes de inversiones en sociedades cooperativas, o en empresas participadas mayoritariamente por sociedades cooperativas, cuando se trate de entidades que realicen actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia sociedad.*
- e) *Los intereses devengados y otros rendimientos obtenidos por operaciones en el mercado financiero o con sus socios o socias por las cooperativas de crédito y por las secciones de crédito, en los términos establecidos en la legislación sectorial aplicable.*
- f) *Los derivados de operaciones de intercooperación, así como aquellos que procedan de entidades no cooperativas, cuando estas lleven a cabo actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a la cooperativizada.*
- g) *Las plusvalías obtenidas por la enajenación de los elementos del inmovilizado material destinados al cumplimiento del objeto social, cuando se reinvierta la totalidad de su importe en nuevos elementos del inmovilizado, con idéntico destino, dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial y los tres años posteriores, siempre que permanezcan en su patrimonio, salvo pérdidas justificadas, hasta que finalice su periodo de amortización.*
- h) *Las cuotas periódicas satisfechas por los socios y socias.*
- i) *Las subvenciones corrientes y las de capital imputable al ejercicio económico.*

*3. Para la determinación de los resultados extracooperativos, se considerarán ingresos de esta naturaleza:*

- a) *Los derivados de la actividad cooperativizada llevada a cabo con terceras personas, excepto lo dispuesto por la letra b) del apartado anterior.*

*b) Los resultantes de las inversiones o participaciones financieras en sociedades que no cumplan los requisitos establecidos en las letras d) y f) del apartado anterior, salvo los procedentes de los fondos de inversión.*

*c) Los ingresos extraordinarios y, en especial, los que provengan de la enajenación de los elementos del activo inmovilizado, cuando no puedan considerarse resultados cooperativos, conforme a lo dispuesto en la letra g) del apartado anterior.*

### **Comentario.**

Mientras la derogada LSCA distinguía entre resultados cooperativos o excedentes, resultados de operaciones con terceros no socios y resultados extraordinarios, la actual LSCA reduce los resultados a dos tipos: resultados cooperativos y resultados extracooperativos.

## **ARTÍCULO 66. DETERMINACIÓN DE RESULTADOS: GASTOS.**

*1. A los ingresos cooperativos y extracooperativos obtenidos se imputarán, en proporción al importe de cada uno de ellos, los siguientes gastos:*

*a) Los necesarios para el funcionamiento de la sociedad cooperativa, incluidos aquellos relacionados con las actividades descritas en los apartados 2.b) y 3.a) del art. 65.*

*b) El importe asignado a los bienes y servicios entregados por los socios o socias para la gestión y desarrollo de la actividad cooperativizada.*

*c) El importe de los anticipos societarios de las personas socias trabajadoras así como de los socios y socias de trabajo.*

*d) Las dotaciones para amortizaciones de los diferentes elementos del inmovilizado.*

*e) Los intereses devengados a favor de los socios o socias, por sus aportaciones al capital social o por préstamos hechos a la sociedad cooperativa, así como los devengados por los obligacionistas, y las remuneraciones satisfechas a las personas suscriptoras de títulos participativos o de participaciones especiales.*

*f) La dotación al Fondo de Formación y Sostenibilidad prevista en el art. 71.*

*2. De establecerse estatutariamente, la sociedad cooperativa podrá reconocer, y su Asamblea General concretar, el derecho de sus personas trabajadoras asalariadas a percibir una retribución, con carácter anual, cuya cuantía, considerada como un gasto, se fijará en función de los resultados positivos obtenidos en el ejercicio económico. Esta retribución tendrá carácter salarial y será compensable con el complemento de similar naturaleza establecido, en su caso, en la normativa laboral aplicable, salvo que fuese inferior a dicho complemento, en cuyo caso se aplicará este último.*

## **ARTÍCULO 67. CONTABILIZACIÓN ÚNICA**

*La sociedad cooperativa podrá optar en sus estatutos por la no contabilización separada de los resultados extracooperativos, en cuyo caso la dotación mínima al Fondo de Reserva Obligatorio sobre el total de los resultados de la entidad, así como al Fondo de Formación y Sostenibilidad, y cualquier otro aspecto de este régimen de contabilización, se determinarán reglamentariamente. Todo ello sin perjuicio de lo establecido respecto a la determinación de resultados en los artículos y apartados anteriores.*

### **Desarrollo Reglamentario.**

## **ARTÍCULO 52. CONTABILIZACIÓN NO SEPARADA DE LOS RESULTADOS EXTRACOOPERATIVOS.**

*La sociedad cooperativa podrá optar en sus estatutos por la no contabilización separada de los resultados extracooperativos. En este caso, del total de los resultados de la sociedad cooperativa se dotará, como mínimo, el veinte por ciento al Fondo de Reserva Obligatorio hasta que este alcance un importe igual al cincuenta por ciento del capital social y el diez por ciento al Fondo de Formación y Sostenibilidad, en este caso, sin límite alguno.*

## Comentario.

La nueva LSCA prevé la posibilidad, para las cooperativas que así lo establezcan en sus estatutos, de que los distintos resultados que existen en estas sociedades (cooperativos y extracooperativos) tengan un régimen único a efectos contables.

### **ARTÍCULO 68. APLICACIÓN DE RESULTADOS POSITIVOS.**

*1. El destino de los resultados positivos se acordará por la Asamblea General al cierre de cada ejercicio, de conformidad con las previsiones de este artículo.*

*2. En todo caso habrán de dotarse los fondos sociales obligatorios, una vez deducidas las pérdidas de ejercicios anteriores, y antes de la consideración del Impuesto de Sociedades, con sujeción a las siguientes normas:*

*a) De los resultados cooperativos positivos se destinará, como mínimo, un veinte por ciento al Fondo de Reserva Obligatorio hasta que este alcance un importe igual al cincuenta por ciento del capital social, y, al menos, un cinco por ciento al Fondo de Formación y Sostenibilidad, en este caso, sin límite alguno.*

*b) De los resultados extracooperativos positivos se destinará, como mínimo, un veinticinco por ciento al Fondo de Reserva Obligatorio y otro veinticinco por ciento al Fondo de Formación y Sostenibilidad. No obstante, la Asamblea General podrá acordar que el porcentaje sobre estos resultados destinado a engrosar el Fondo de Reserva Obligatorio, o parte del mismo, se emplee en inversiones productivas, cooperación e integración entre empresas, o en materia de internacionalización, sin necesidad de llegar a integrar el citado fondo. Cuando las inversiones que prevea la sociedad cooperativa excedan de dicho importe, este podrá materializarse en cuentas de ahorro o títulos de deuda pública cuyos rendimientos financieros se aplicarán a dichos instrumentos para las citadas finalidades. Estos depósitos o títulos no podrán ser pignorados ni afectados a préstamos o cuentas de crédito. Transcurridos tres años desde el acuerdo sin que se haya procedido a la inversión, los citados importes se ingresarán en el Fondo de Reserva Obligatorio con carácter inmediato, bajo la responsabilidad del Consejo Rector, impidiéndose un acuerdo de esta naturaleza en los cinco ejercicios posteriores a aquel sobre el que recayó el citado acuerdo.*

3. Si los estatutos sociales hubieran previsto la constitución de algún fondo de reserva voluntario, que tendrá el carácter de irrepartible, salvo en caso de liquidación conforme a lo establecido en el art. 82.1.b), se dotará en la proporción que se acuerde por la Asamblea General dentro de los límites estatutarios.

4. Los resultados obtenidos tras la dotación de los fondos anteriores se aplicarán a retornos cooperativos, que se acreditarán a los socios y socias en proporción a las operaciones, servicios o actividades efectivamente realizadas para la sociedad cooperativa.

5. Los retornos cooperativos se podrán hacer efectivos en las formas que reglamentariamente se establezcan, que podrán incluir un Fondo de Retornos de carácter repartible, debiendo la Asamblea General concretar las que se hayan de adoptar en cada ejercicio en función de las necesidades económico-financieras de la cooperativa.

## **Desarrollo Reglamentario.**

### **ARTÍCULO 53. APLICACIÓN DE RESULTADOS EXTRACOOPERATIVOS POSITIVOS A INVERSIONES.**

*Cuando la Asamblea General de la entidad ejercite la facultad que le atribuye el art. 68.2.b) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, consistente en acordar la reducción del porcentaje que sobre los resultados extracooperativos positivos deba destinarse al Fondo de Reserva Obligatorio, por el importe que en inversiones productivas, cooperación e integración entre empresas, o en materia de internacionalización se haya gastado en el ejercicio del que deriven los referidos resultados o se prevea gastar en los próximos tres ejercicios, se deberán observar las siguientes reglas:*

*a) El importe que, con arreglo a lo previsto en el apartado anterior, dejara de destinarse al Fondo de Reserva Obligatorio se aplicará a una partida de reserva voluntaria que tendrá carácter de irrepartible hasta la materialización efectiva de tales inversiones.*

*Transcurridos tres años desde el acuerdo de la Asamblea General de la sociedad sin que se haya procedido a la inversión, los citados importes tendrán que reclasificarse*



*nuevamente como Fondo de Reserva Obligatorio con carácter inmediato, bajo responsabilidad del órgano de administración, impidiéndose un acuerdo de esta naturaleza en los cinco ejercicios posteriores a aquel en el que recayó el mismo.*

*b) Tendrán la consideración de inversiones productivas aquellas encaminadas a la introducción de un producto, servicio o proceso de producción, nuevo o mejorado, o bien a la aplicación de un nuevo método de comercialización o de organización que mejoren la productividad y la competitividad de la sociedad.*

## **ARTÍCULO 54. RETORNOS COOPERATIVOS.**

*1. Los retornos cooperativos se podrán hacer efectivos en las siguientes formas:*

*a) Mediante su abono a las personas socias, en el plazo de tres meses desde la aprobación de las cuentas anuales.*

*b) Mediante su incorporación al capital social, incrementando las aportaciones obligatorias de las personas socias.*

*c) Mediante su incorporación a un Fondo de Retornos, de carácter repartible, que tendrá como finalidad contribuir a la autofinanciación de la sociedad cooperativa, cuyo régimen de disponibilidad se fijará por la Asamblea General en el acuerdo de constitución de dicho fondo. Hasta tanto no se produzca su distribución entre los socios y socias podrá devengar un interés que, en ningún caso, será superior al tipo de interés legal incrementado en seis puntos, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.d) del artículo siguiente.*

*2. Los estatutos sociales deberán prever todas o alguna de las modalidades de distribución de retornos que se determinan en el apartado anterior, correspondiendo a la Asamblea General la determinación de las que se hayan de adoptar en cada ejercicio, en función de las necesidades económico-financieras de la sociedad cooperativa.*

## Comentario.

Al igual que la actual LSCA ha rebajado a dos los tipos de resultados que se pueden dar en una sociedad cooperativa, la aplicación de los resultados también se ha modificado con arreglo a dicha clasificación, así, una vez deducidas las pérdidas de ejercicios anteriores y antes de considerar el impuesto de sociedades, se efectuarán las siguientes dotaciones:

### a) A Fondos Sociales Obligatorios:

#### a) De los Resultados Cooperativos positivos se destinará:

- Un 20% mínimo al Fondo de Reserva Obligatorio hasta que éste alcance un 50% del capital social.

- Un 5%, al menos, al Fondo de Formación y Sostenibilidad, sin límite alguno.

#### b) De los Resultados Extracooperativos se destinará:

- 25 % al Fondo de Reserva Obligatorio. No obstante, la Asamblea General podrá acordar que parte de este porcentaje o la totalidad se emplee en inversiones productivas, cooperación e integración entre empresas o en materia de internacionalización, con los siguientes requisitos:

- Se destinará a una partida de reservas voluntarias irrepartible hasta la materialización de las inversiones.

- Transcurridos 3 años desde el acuerdo sin que se haya efectuado la inversión el importe se tendrá que destinar al Fondo de Reserva Obligatorio.

- 25% al Fondo de Formación y Sostenibilidad.

### b) A un Fondo de Reserva voluntario, de carácter irrepartible, siempre que se hubiese previsto su constitución en los Estatutos sociales.

### c) A Retornos Cooperativos a los socios y socias en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas para la sociedad cooperativa. Estos retornos cooperativos se podrán hacer efectivos a las personas socias de alguna de las tres

formas que a continuación se señalan y que deben estar previstas, todas o algunas, en los estatutos :

- Mediante su abono en el plazo de 3 meses desde la aprobación de las cuentas anuales.
- Mediante su incorporación al capital social, incrementando las aportaciones obligatorias de las personas socias.
- Mediante su incorporación a un Fondo de Retornos, de carácter repartible, que tendrá como fin contribuir a la autofinanciación de la sociedad cooperativa. Podrá devengar un interés en ningún caso superior al interés legal incrementado en seis puntos.

## **ARTÍCULO 69. IMPUTACIÓN DE PÉRDIDAS.**

*1. Los estatutos fijarán los criterios para la compensación de las pérdidas, pudiendo imputarse a una cuenta especial para su amortización con cargo a futuros resultados positivos dentro del plazo máximo de siete años.*

*2. Las pérdidas se compensarán conforme a los siguientes criterios:*

*a) Cuando la sociedad cooperativa tuviese constituido algún fondo de reserva voluntario, la Asamblea General podrá determinar que todas o parte de las pérdidas se imputen a dicho fondo y, de no cubrirse en su totalidad, las pérdidas sobrantes se imputarán en la forma señalada en las letras b) y c).*

*b) Al Fondo de Reserva Obligatorio podrá imputarse el porcentaje que determine la Asamblea General, sin que el mismo pueda exceder del cincuenta por ciento de las pérdidas. Si como consecuencia de dicha imputación, el fondo quedase reducido a una cifra inferior a la mitad del capital estatutario, la sociedad deberá reponerlo de manera inmediata, con cargo a reservas voluntarias si existiesen y fuesen suficientes, o con el resultado positivo de futuros ejercicios económicos.*

*c) La diferencia resultante, en su caso, se imputará a cada persona socia en proporción a las operaciones, servicios o actividades cooperativizadas efectivamente realizados por cada una de ellas. Si esta actividad fuese inferior a la que estuviese obligada a realizar*

*conforme a lo establecido en los estatutos, la imputación de las pérdidas se efectuará en proporción a esa participación mínima obligatoria fijada estatutariamente.*

*Las pérdidas se imputarán al socio o socia hasta el límite de sus aportaciones al capital social.*

*3. Las pérdidas imputadas a las personas socias se harán efectivas en alguna de las formas que reglamentariamente se determinen.*

*4. Si transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 1 quedaran pérdidas sin compensar, se acordará la emisión de nuevas aportaciones sociales o se instará el procedimiento concursal pertinente.*

## **Desarrollo Reglamentario.**

### **ARTÍCULO 55. IMPUTACIÓN DE PÉRDIDAS.**

*1. Las pérdidas imputadas a las personas socias se harán efectivas en alguna de las formas siguientes:*

*a) En metálico dentro del ejercicio económico siguiente a aquél en que se produjeron las pérdidas.*

*b) Mediante deducciones en cualquier inversión financiera que tenga la persona socia en la sociedad cooperativa que sea susceptible de imputación.*

*c) Mediante deducciones en las aportaciones al capital social. Se realizarán siempre antes sobre las voluntarias que sobre las obligatorias. Si como consecuencia de dichas deducciones, las aportaciones obligatorias quedaran por debajo del mínimo exigible, la persona socia deberá reponerlas en el plazo máximo de un año, o compensarlas con sus aportaciones voluntarias al capital social, en su caso.*

*d) Con cargo a los retornos que puedan corresponder a las personas socias o, en su caso, a las liquidaciones y anticipos societarios a que se refieren, respectivamente, las letras b) y c) del art. 66.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, mediante deducciones sobre dichos importes, con el límite máximo de los cinco ejercicios siguientes a aquel en*

*que se hubieran producido las pérdidas. Si transcurrido este plazo quedasen pérdidas sin compensar, deberán ser satisfechas en metálico por la persona socia en el plazo de un mes desde que se aprueben las cuentas del último de aquellos ejercicios.*

*2. La persona socia podrá optar entre las formas señaladas en las letras a), b) y c) del apartado anterior. Para la utilización de la forma enunciada en la letra d) será necesario que así se acuerde por la Asamblea General que apruebe las cuentas anuales.*

*En caso de que la persona socia no ejerciera, dentro del plazo estatutariamente establecido, la opción prevista en el párrafo anterior, el órgano de administración decidirá sobre la forma en que deberá satisfacer su deuda.*

*3. Los estatutos sociales podrán establecer, con arreglo a lo previsto en el art. 69.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, una cuenta especial para la amortización de pérdidas con cargo a futuros resultados positivos de la sociedad cooperativa, dentro del plazo máximo de siete años siguientes a aquel en que se hubieran producido las pérdidas.*

*Si transcurridos los siete años aún quedaran pérdidas sin amortizar, la entidad tendrá que compensarlas atendiendo a los criterios establecidos en el art. 69.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y, en su caso, las pérdidas imputadas a las personas socias se tendrán que hacer efectivas mediante alguna de las formas señaladas en las letras a), b) y c) del apartado 1, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del citado artículo en caso de que no haya sido posible compensar el importe total de las pérdidas.*

## **Comentario.**

Como principal novedad de la actual LSCA cabe destacar la posibilidad de que los estatutos sociales establezcan una cuenta especial para la amortización de pérdidas con cargo a futuros resultados positivos dentro del plazo máximo de los siete años siguientes a aquel en que se hubieran producido las pérdidas. Por lo demás la regulación es similar a la anterior, pudiéndose compensar las pérdidas conforme a las siguientes reglas:

1º) Con cargo al Fondo de Reserva voluntario.

2º) De no cubrirse en su totalidad con el Fondo de Reserva Voluntario, se podrán imputar hasta el 50% de las pérdidas. Si como consecuencia de ello el Fondo de Reserva

Voluntario quedase por debajo de la mitad del capital social estatutario, la sociedad deberá reponerlo de forma inmediata con cargo a reservas voluntarias o con el resultado positivo de futuros ejercicios económicos.

3º) El resto se imputará a cada persona socia en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas. Las pérdidas imputadas a las personas socias se les harán efectivas en alguna de las siguientes formas, siendo elección de las mismas la opción por alguna de las tres primeras:

- a) En metálico dentro del ejercicio económico siguiente a aquél en que se produjeron.
- b) Mediante deducciones en cualquier inversión de la persona socia en la sociedad.
- c) Mediante deducciones en las aportaciones al capital social. Primero sobre las voluntarias. Si como consecuencia de las deducciones la aportación obligatoria quedase por debajo del mínimo legal exigible, la persona socia deberá reponerla en el plazo de un año o compensarlas con sus aportaciones voluntarias.
- d) Con cargo a los retornos que le correspondan, a las liquidaciones o a los anticipos societarios.

## **ARTÍCULO 70. FONDO DE RESERVA OBLIGATORIO**

*1. El Fondo de Reserva Obligatorio, destinado a la consolidación, desarrollo y garantía de la sociedad cooperativa, se nutrirá con los siguientes importes:*

- a) El porcentaje sobre los resultados cooperativos que en cada ejercicio determine la Asamblea General, conforme a lo previsto en el art. 68.2.a).*
- b) El porcentaje que en cada ejercicio económico acuerde la Asamblea General sobre los resultados extracooperativos, con arreglo a lo previsto en el art. 68.2.b).*
- c) Con el diez por ciento de la diferencia entre el importe que obtenga el socio o socia en los supuestos de libre transmisión previstos en los arts. 89, 96.3 y 102.2, y el que le correspondería en caso de liquidación de sus aportaciones.*

*d) Las deducciones sobre las aportaciones obligatorias en caso de baja del socio o socia.*

*e) Las cuotas de ingreso.*

*f) El cincuenta por ciento del resultado de la regularización del balance, conforme a lo dispuesto en el art. 59.2.*

*2. A partir de que el Fondo de Reserva Obligatorio supere en un cincuenta por ciento el capital social de la empresa, el importe excedente, siempre que no haya pérdidas pendientes de compensar, podrá destinarse a favorecer el acceso de las personas trabajadoras a la condición de socio o socia, conforme a lo establecido en el art. 58.3.*

*3. El Fondo de Reserva Obligatorio tendrá el carácter de irrepartible hasta la transformación o liquidación de la sociedad cooperativa, a menos que los estatutos de la entidad contemplen expresamente su reparto parcial, con arreglo a lo dispuesto en el art. 60.5. El destino de este fondo, en los citados supuestos de transformación y liquidación, será el previsto en los arts. 78.2 y 82.1, respectivamente.*

*Las sociedades cooperativas que establezcan en sus estatutos la libre transmisión de sus participaciones sociales, con arreglo a lo establecido en los arts. 89, 96.3 y 102.2, no podrán contemplar en dichos estatutos el reparto del Fondo de Reserva Obligatorio.*

## **Comentario.**

Tanto la vigente LSCA como la anterior conceptúan este fondo como un fondo destinado a la consolidación, desarrollo y garantía de la sociedad cooperativa. Este fondo se nutre de los siguientes importes:

a) Del porcentaje sobre los resultados cooperativos que en cada ejercicio determine la asamblea general.

b) Del porcentaje sobre los resultados extracooperativos que en cada ejercicio determine la asamblea general.

c) Del 10% de la diferencia entre lo obtenido por el socio por la transmisión de sus aportaciones y el importe que le correspondería por las mismas en caso de liquidación.



- d) De las deducciones sobre las aportaciones en caso de baja de la persona socia.
- e) De las cuotas de ingreso
- f) Del 50% de la regularización del balance.

A partir de que este fondo supere en un 50% el capital social de la sociedad y siempre que no haya pérdidas, el excedente se podrá destinar favorecer el acceso de las personas trabajadoras a socia o socio.

El Fondo de Reserva Obligatorio es irrepartible, salvo que los estatutos hayan previsto que en caso de baja el socio o socia tendrán derecho al reintegro de una parte alícuota del cincuenta por ciento del importe de dicho fondo generado a partir de su ingreso. En cualquier caso, esta previsión no se podrá contemplar en los estatutos si los mismos recogen la libre transmisión de las participaciones sociales.

## **ARTÍCULO 71. FONDO DE FORMACIÓN Y SOSTENIBILIDAD**

- 1. El Fondo de Formación y Sostenibilidad, instrumento al servicio de la responsabilidad social empresarial de las sociedades cooperativas, es inembargable, de conformidad con la legislación estatal aplicable, excepto por deudas contraídas para el cumplimiento de sus fines, y, en todo caso, irrepartible.*
- 2. La dotación correspondiente a dicho fondo, ya sea obligatoria o voluntaria, se imputará al resultado como un gasto, sin perjuicio de que su cuantificación se realice tomando como base el propio resultado del ejercicio en los términos señalados en la ley.*
- 3. A dicho fondo se destinará:*
  - a) El porcentaje sobre los resultados cooperativos positivos que en cada ejercicio determine la Asamblea General, conforme a lo previsto en el art. 68.2.a).*
  - b) El porcentaje sobre los resultados extracooperativos positivos que en cada ejercicio acuerde la Asamblea General, con arreglo a lo previsto en el art. 68.2.b).*
  - c) Las sanciones pecuniarias que la sociedad cooperativa imponga a sus socios o socias como consecuencia de la comisión de infracciones disciplinarias.*

*d) Las subvenciones, así como las donaciones y cualquier otro tipo de ayuda, recibidas de las personas socias o de terceros, para el cumplimiento de los fines propios del fondo.*

*e) Los rendimientos de los bienes y derechos afectos al propio fondo.*

*4. El Fondo de Formación y Sostenibilidad se destinará a actividades que puedan enmarcarse dentro de la responsabilidad social empresarial y, singularmente, a los siguientes fines:*

*a) La formación de los socios o socias y trabajadores o trabajadoras de la sociedad cooperativa en los principios cooperativos, así como en técnicas económicas, empresariales y profesionales.*

*b) La promoción de las relaciones intercooperativas.*

*c) El fomento de una política efectiva de igualdad de género y de sostenibilidad empresarial.*

*d) La difusión del cooperativismo y la promoción cultural, profesional y social del entorno local o de la comunidad en general.*

*e) La realización de actividades de formación y promoción dirigidas a personas socias y trabajadoras con especiales dificultades de integración social o laboral.*

*f) La promoción de actividades orientadas a fomentar la sensibilidad por la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.*

*g) La formación de las personas trabajadoras, sean socias o no, en materia de prevención de riesgos laborales.*

*Dentro del ámbito de dichas actividades y dejando a salvo los porcentajes a que se refiere el apartado 7, las sociedades cooperativas podrán acordar su destino, total o parcialmente, a las federaciones andaluzas de cooperativas de ámbito regional y sus asociaciones, pudiendo igualmente colaborar con otras sociedades o asociaciones cooperativas, instituciones públicas o privadas y con entidades dependientes de las administraciones públicas.*

*5. Las dotaciones al Fondo de Formación y Sostenibilidad, así como sus aplicaciones, se reflejarán separadamente en la contabilidad social en cuentas que expresen claramente su afectación a dicho fondo. Asimismo, figurará en el pasivo del balance con separación de los restantes fondos y del capital social.*

*6. La Asamblea General ordinaria que apruebe las cuentas del ejercicio fijará las líneas básicas de aplicación del fondo para el ejercicio siguiente. En el supuesto de las sociedades cooperativas de crédito, dichas líneas básicas de aplicación deberán ser sometidas a autorización conforme a lo dispuesto en el art. 99.4.*

*Cuando en cumplimiento de las líneas básicas de aplicación fijadas por la Asamblea General no se agote la totalidad de la dotación del Fondo de Formación y Sostenibilidad durante el ejercicio, el importe que no se haya aplicado deberá materializarse, dentro de este, en cuentas de ahorro o en títulos de Deuda Pública cuyos rendimientos financieros se destinarán al propio fondo. Dichos depósitos o títulos no podrán ser pignorados ni afectados a préstamos o cuentas de crédito.*

*7. Reglamentariamente, se establecerán los porcentajes mínimos que de este fondo deberán las sociedades cooperativas destinar a los fines relacionados en el apartado 4.c), y podrán establecerse otros porcentajes relativos a los fines consignados en el resto de las letras de dicho apartado.*

## **Desarrollo Reglamentario**

### **ARTÍCULO 56. DESTINO DEL FONDO DE FORMACIÓN Y SOSTENIBILIDAD.**

*1. Con arreglo a lo establecido en el art. 71.7 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las sociedades cooperativas deberán destinar del Fondo de Formación y Sostenibilidad, un porcentaje mínimo del diez por ciento al fomento de una política efectiva de igualdad de género y un quince por ciento a actividades que contribuyan a la sostenibilidad empresarial.*

*Las sociedades cooperativas podrán acordar, para el cumplimiento de las actividades a que se refiere el art. 71.4 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, su destino, total o parcialmente, a las federaciones andaluzas de cooperativas de ámbito regional y sus*

*asociaciones, pudiendo igualmente colaborar con otras sociedades o asociaciones cooperativas, instituciones públicas o privadas y con entidades dependientes de las administraciones públicas. En este caso, deberá observarse, igualmente, el cumplimiento de los porcentajes relativos a los fines previstos en el párrafo anterior.*

*2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el art. 96 a propósito de las sociedades cooperativas de consumo que revistan la consideración de organización o asociación de consumidores y usuarios.*

## **Comentario.**

Al igual que en la normativa anterior con el llamado Fondo de Educación y Promoción, el actual Fondo de Formación y Sostenibilidad es un fondo inembargable e irrepartible, configurándose como un instrumento al servicio de la responsabilidad social empresarial.

A dicho fondo se destinará:

- El porcentaje que cada ejercicio determine la asamblea general sobre los resultados cooperativos y extracooperativos positivos.
- El importe de las sanciones que la sociedad imponga a sus socios.
- El importe de las subvenciones, donaciones y cualquier otra ayuda recibida de las personas socias para el cumplimiento de los fines propios del fondo.

Entre las novedades de la actual LSCA está la inclusión de tres nuevos fines a los que habrá de destinarse, y que no se recogían en la anterior, estos fines son:

- Al fomento de una política efectiva de igualdad de género, al que habrá de destinar un 10%, y de sostenibilidad empresarial, al que tendrá que destinar un 15%.
- A la realización de actividades de formación y promoción dirigidas a personas socias y trabajadoras con especiales dificultades de integración social o laboral.
- A la formación de personas trabajadoras, sean socias o no, en materia de prevención de riesgos laborales.

Asimismo, las sociedades cooperativas podrán acordar, para el cumplimiento de las actividades a que se refiere el art. 71.4 de la LSCA, que dicho fondo se destine, total

o parcialmente, a las federaciones andaluzas de cooperativas de ámbito regional y a sus asociaciones, pudiendo igualmente colaborar con otras sociedades o asociaciones cooperativas, instituciones públicas o privadas y con entidades dependientes de las administraciones públicas. En este caso, deberá observarse, igualmente, el cumplimiento del destino de los porcentajes mínimos del diez por ciento para el fomento de una política efectiva de igualdad de género y de un quince por ciento a actividades que contribuyan a la sostenibilidad empresarial.

## **CAPITULO VI. LIBROS SOCIALES Y AUDITORÍA DE CUENTAS**

### **ARTÍCULO 72. DOCUMENTACIÓN SOCIAL.**

*1. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes o disposiciones especiales, las sociedades cooperativas deberán llevar, en orden y al día, los siguientes libros, cuyo contenido y forma se determinarán reglamentariamente:*

*a) El libro registro de personas socias y de aportaciones al capital social.*

*b) El libro de actas de la Asamblea General, del órgano de administración y en su caso, de las juntas preparatorias y de otros órganos colegiados. En el supuesto en que la sociedad cooperativa hubiere optado por una Administración Única, bastará con que el citado libro recoja los acuerdos adoptados, así como su fecha y motivación.*

*c) El libro de inventarios y cuentas anuales.*

*d) El libro diario.*

*También se determinarán reglamentariamente los libros correspondientes a los órganos potestativos previstos en los arts. 43 y 44, así como el contenido y forma que deban revestir.*

*2. Los anteriores libros deberán ser presentados ante la unidad competente del Registro de Cooperativas Andaluza, en la forma que se determine reglamentariamente, para su legalización.*

*3. La cooperativa estará obligada a la conservación de la documentación social durante el plazo que reglamentariamente se establezca.*

## **Correlación con el artículo 57 del Reglamento.**

### **ARTÍCULO 57. DOCUMENTACIÓN SOCIAL.**

*1. De acuerdo con lo previsto en el art. 72 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las sociedades cooperativas deberán llevar, en orden y al día, los siguientes libros:*

*a) El libro registro de personas socias y de aportaciones al capital social, que contendrá como mínimo los siguientes grupos de datos:*

*1º De carácter identificativo: si son personas físicas, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de identificación fiscal y domicilio; si son personas jurídicas, nombre o razón social, nacionalidad, código de identificación fiscal y domicilio social. Asimismo, se especificará la clase a la que pertenecen las personas socias y la fecha de su admisión y baja.*

*2º. De carácter socio-económico: naturaleza de las aportaciones, origen, sucesivas transmisiones, su actualización y reembolso.*

*b) El libro de actas de la Asamblea General, del órgano de administración y, en su caso, de las juntas preparatorias y de otros órganos colegiados. Estos libros incorporaran, respectivamente, la transcripción de las actas relativas a dichos órganos. En el supuesto en que la sociedad cooperativa hubiere optado por una Administración Única, bastará con que el citado libro recoja los acuerdos adoptados, así como su fecha y motivación.*

*c) El libro de inventarios y cuentas anuales, que se abrirá con el balance inicial detallado de la sociedad cooperativa, y se transcribirán el inventario de cierre del ejercicio y las cuentas anuales.*

*d) El libro diario, que registrará, día a día, las operaciones relativas al ejercicio económico de la actividad de la sociedad cooperativa. Será válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por periodos no superiores a un mes, a condición de que su detalle aparezca en otros libros o registros concordantes, aunque no estén legalizados, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que se*

*trate.*

*2. En caso de que la sociedad cooperativa cuente, entre sus órganos sociales, con un Comité Técnico o con un órgano de Intervención, junto a la documentación social especificada en el apartado anterior, deberá llevar en orden y al día los libros correspondientes a los citados órganos, en los que se transcribirán sus actas. Dichos libros serán los siguientes:*

*a) Libro de actas del Comité Técnico.*

*b) Libro de actas del órgano de Intervención. Si la Intervención lo integrase una sola persona, este libro quedará sustituido por el libro de informes de la persona Interventora.*

*3. Los anteriores libros después de su uso serán presentados, a través de medios electrónicos, ante la unidad competente del Registro de Cooperativas Andaluzas para su legalización, conforme a lo previsto en la Sección 1ª del Capítulo VI del Título III, relativa a la legalización de libros sociales.*

*4. La sociedad cooperativa estará obligada a conservar los libros y demás documentos sociales durante, al menos, cinco años, desde el último asiento realizado en los mencionados libros, salvo que recojan derechos u obligaciones de la sociedad cooperativa, de las personas socias o de terceros, en cuyo caso, este plazo se computará a partir de la fecha de su extinción.*

*5. Los asientos y anotaciones podrán realizarse a través de procedimientos informáticos u otros procedimientos idóneos que permitan su conservación.*

## **Comentarios.**

### **I. Introducción: el Capítulo VI del Título I de la ley.**

El Capítulo VI del Título I de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas regula una serie de libros o documentos concebidos para registrar aspectos decisivos de la vida de la cooperativa. La obligación de cumplimentar y legalizar estos instrumentos viene determinada por el carácter mercantil de la cooperativa, y, como tal, está sujeta a las obligaciones impuestas no sólo por la LSCA, sino además por la Ley de Sociedades de Capital (LSC), el Código de Comercio (CCom), el Plan



General Contable (PGC), la Ley de Auditoría de Cuentas (LAC), y toda la normativa desarrollada en aplicación de la legislación europea (especialmente, la Ley 16/2007 de adaptación de la legislación mercantil).

El Capítulo VI regula aspectos aparentemente heterogéneos, pero cuyo tratamiento conjunto está justificado en tanto instrumentos necesarios para garantizar el control de la cooperativa y la seguridad del tráfico jurídico: los libros sociales (art. 72 LSCA) y la auditoría de cuentas (art. 73).

Son numerosas las modificaciones introducidas por la LSCA en relación a la legislación anterior. Por señalar las más relevantes:

1º Reducción del articulado legislativo, mayor desarrollo reglamentario y mayor remisión a los estatutos, en desarrollo de los principios auspiciados por la Unión Europea tendentes a simplificar la legislación existente o reducir las cargas administrativas. Como reconoce la propia Exposición de Motivos, la voluntad de permanencia en el tiempo de la ley, permitiendo una más fácil modificación y adaptación normativa a través de su desarrollo reglamentario, ha determinado la aprobación de un texto *“relativamente escueto, al contemplar un desarrollo reglamentario más extenso, y de carácter general, inusual en el caso de normas precedentes sobre la materia”*. Además, la norma contiene *“multitud de remisiones a los estatutos sociales, a fin de permitir el desarrollo autónomo de un buen número de materias con arreglo a las necesidades singulares de cada empresa.”*

Fiel ejemplo de esta voluntad legislativa es la remisión al posterior desarrollo reglamentario en relación a:

- el contenido y la forma de los libros enumerados en el artículo (art. 72.1 LSCA),
- los libros que deban llevar los órganos potestativos (art. 72.1. LSCA),
- la forma de presentación de los libros para su legalización por el Registro de Cooperativas (art. 72.2 LSCA), o
- el plazo de conservación de la documentación social (art. 72.3 LSCA).

2º Reducción de los libros obligatorios y posibilidad de simplificación de la contabilidad. La propia Exposición de Motivos de la ley declara como voluntad legislativa la de *“simplificación societaria y contable de estas sociedades”*. Así:

- Se llevará un único libro (Libro registro de personas socias y de aportaciones al capital) lo que antes era recogido en dos diferenciados (Libro de socios y Libro de aportaciones al capital).
- Se elimina el Libro de Comité de Recursos, por haber suprimido la ley este órgano.
- La posibilidad de llevar una contabilidad única, como analizaremos más adelante.

La reducción de órganos sociales, permitiendo la creación de órganos potestativos (Comité Técnico, por ejemplo), determina que los libros de actas de estos órganos sólo serán obligatorios en caso de que la cooperativa haya acordado su existencia.

3º La legalización a posteriori de los libros: una de las modificaciones más importantes para la práctica cooperativa, en relación a la ley anterior, tiene que ver con la supresión de la legalización a priori de los libros obligatorios. Desde la aprobación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (L 14/2013), se establece el criterio de la legalización a posteriori, es decir, después de su cumplimentación y no antes de ella, como regulaba la ley anterior.

Así, el artículo 57.3 RLSCA, refiere expresamente que los libros sociales serán presentados *“después de su uso”*. Y el artículo 159.2 RLSCA refiere que los libros *“deberán ser legalizados por el Registro de Cooperativas en los siete meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio, debiendo ser presentados, al menos, quince días antes de que transcurra dicho plazo”*.

La modificación introducida por la LAC en este sentido, se ha adelantado al Código de Comercio, que todavía no ha adaptado su regulación y mantiene la legalización de los libros antes de su utilización

4º La cumplimentación electrónica y legalización telemática. Una de las novedades significativas de la presente ley es la introducción de las nuevas tecnologías de la información para la cumplimentación de los libros y la tramitación de los expedientes en el

Registro de Cooperativas; en aplicación de las normas contenidas en la L 14/2013 (de apoyo a los emprendedores y su internacionalización).

Así, el art. 57.5 RLC regula que *“los asientos y anotaciones podrán realizarse a través de procedimientos informáticos u otros procedimientos idóneos que permitan su conservación. Y el art. 160. RLSCA establece que “la legalización de los libros de las sociedades cooperativas se realizará mediante diligencia telemática y sello electrónico o código seguro de verificación del Registro”.*

Ya no será posible legalizar libros en blanco para su utilización posterior, ni la legalización de libros en soporte papel o en soporte electrónico que no sean presentados por vía telemática. Todo ello conlleva la exigencia a la cooperativa de contar con el correspondiente certificado digital o firma electrónica.

5º El plazo de conservación de los documentos sociales. La nueva ley reduce de seis a cinco años el plazo de obligatoria conservación de la documentación social, salvo la excepción recogida en el art. 57.4 RLSCA que luego comentaremos. Tanto la ley anterior como la estatal establecían, con rango de norma legal y no reglamentaria como ahora, el plazo de conservación en seis años. Por su parte, el CCom. fija el plazo de conservación en siete años.

Sobre el contenido del capítulo:

El art. 72 LSCA regulan los instrumentos de seguimiento y control de la vida de la cooperativa en su vertiente formal (los libros) y su vertiente sustantiva (las cuentas); mientras que el art. 73 LSCA regula el control externo de la contabilidad de la entidad (auditoría externa).

## II. Los libros y otros documentos sociales.

Con carácter general, dos son los tipos de documentos que deban llevar las cooperativas: los libros sociales (personas socias y sus aportaciones, libros de actas de los órganos) y los libros de contabilidad (libro de inventarios y cuentas anuales, libro diario).

El primer epígrafe del artículo 72 obliga a las cooperativas, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes o disposiciones a la que iremos haciendo referencia en su momento, a llevar *“en orden y al día”* una serie de documentos o libros en los que se

recoge la documentación social de la entidad, concebidos para registrar aspectos decisivos de la vida societaria, y que vamos a analizar en tres grandes grupos:

1. El libro en el que se registra la titularidad de las aportaciones sociales, es decir, las personas que son socias de la cooperativa y sus respectivas aportaciones al capital social (art. 72.1.a) LSCA).
2. Los libros y documentos en los que se recogen los acuerdos más importantes de los órganos sociales, en donde se incluyen el Libro de Actas de la Asamblea General, el de Actas del órgano de administración y, en su caso, de otros órganos colegiados (art. 72.1.b) LSCA).
3. Los libros contables, en donde se recoge la vida económica y la contabilidad formal de la cooperativa; siendo de carácter obligatorio, como toda entidad mercantil, el Libro de Inventario y cuentas anuales, así como el Libro diario (art. 72.1.c) y d) LSCA).

### III. Enumeración y contenido.

El libro registro de personas socias y de aportaciones al capital social.

Se trata de un libro de obligatoria llevanza para la cooperativa, con la misma importancia que para el resto de las sociedades mercantiles<sup>10</sup>. En él se recogerán los datos de las personas socias, así como sus respectivas aportaciones al capital social. Como señalábamos anteriormente, la ley anterior exigía el registro de estos datos en dos libros separados.

El art. 57.1 recoge los datos mínimos que debe contener este libro:

#### 1º. Datos de carácter identificativo:

- Si son personas físicas: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de identificación fiscal y domicilio.
- Si son personas jurídicas: nombre o razón social, nacionalidad, código de identificación fiscal y domicilio social.

---

<sup>10</sup> La obligatoriedad de su llevanza es tal, que la jurisprudencia ha llegado a exigir la existencia de este libro como condición para la validez de una junta de accionistas (por todas, STS 14-02-1986).

Además, deberá especificarse la clase a la que pertenecen las personas socias, de conformidad con los tipos reconocidos en el Capítulo II del Título I LSCA: común, de trabajo, inactiva, colaboradora.

Igualmente debe recogerse la fecha de admisión y fecha de baja.

Junto a estos contenidos mínimos, la cooperativa puede decidir incluir otros datos que considere relevantes, como por ejemplo el tipo de contrato de trabajo, etc.

Es necesario resaltar la importancia de mantener actualizados los datos esenciales. Especial relevancia en este sentido ha cobrado en la ley actual el domicilio, en la medida en que la publicidad de los acuerdos sociales podrá realizarse mediante notificaciones individuales al domicilio señalado en los libros sociales.

2º. Datos de carácter socio-económico:

- naturaleza de las aportaciones realizadas al capital social: obligatoria o voluntaria, de conformidad con la regulación establecida en art. 55 y sigs. de la LSCA.
- su origen.
- sucesivas transmisiones de las aportaciones al capital social, conforme a lo regulado en el art. 61 LSCA.
- su actualización, conforme se regula en el art. 59 LSCA.
- su reembolso, en las condiciones establecidas en el art. 60 LSCA.

En relación a las aportaciones al capital social nos remitimos a los comentarios realizados en relación al régimen económico de las cooperativas.

Los libros de actas de los órganos sociales.

Al igual que toda sociedad mercantil sometida al Código de Comercio, las cooperativas deben llevar un libro en el que se recojan los acuerdos adoptados por los órganos colegiados de la entidad.

En concreto, se recoge la obligatoriedad de llevar los siguientes:

- Libro de actas de la Asamblea General.
- Libro de actas de su órgano de administración, sea cual sea la opción elegida por la cooperativa de las reguladas en el art. 36 LSCA (Consejo Rector, Administración Única o Administración Solidaria).
- Libro de actas de las juntas preparatorias a las que se refieren los artículos 34 LSCA y 33 RLSCA.

En los mencionados libros se incorporarán la transcripción de las actas relativas a estos órganos colegiados. En la transcripción del acta, habrá de expresarse los datos referentes a la convocatoria, la constitución del órgano colegiado, un resumen de cada uno de los puntos debatidos, las intervenciones de las que se haya solicitado expresamente se dejara constancia, los acuerdos adoptados y los resultados de las votaciones. Salvo en el supuesto en que la cooperativa hubiere optado por una Administración Única; en cuyo caso bastará con que el libro de actas de este órgano recoja: los acuerdos adoptados, la fecha y su motivación.

Si la cooperativa con los órganos potestativos a los que se refieren los artículos 43 y 44 LSCA, es obligatorio llevar en orden y al día los siguientes libros, en los que se transcribirán sus actas:

- Libro de actas del Comité Técnico.
- Libro de actas del órgano de intervención. Ahora bien, si la Intervención estuviera integrada por una sola persona, este libro de actas se sustituye por lo que el reglamento ha denominado “*libro de informes de la persona interventora*”. Entendemos que en este supuesto, este libro deberá tener el mismo contenido que el regulado para el caso de Administración Única.

Los libros contables.

Los últimos libros sociales obligatorios que enumera el art. 72 LSCA se refieren al Libro de inventarios y cuentas anuales y al Libro diario, en los que se recoge la vida económica y la contabilidad formal de la entidad. En definitiva, lo que hace la ley no es sino recoger los instrumentos contables de toda entidad mercantil; y, consecuentemente, su regulación, contenido y criterios para su cumplimentación deberán ser conformes con el

resto de la normativa fiscal y contable aplicable a la empresa, empezando por el Código de Comercio y el Plan General Contable, junto a toda la normativa fiscal (Leyes reguladoras del Impuesto de Sociedades, Impuesto del Valor añadido, etc).

Como señala el CCom (art. 25 y sgs.), todos los empresarios están legalmente obligados a llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de sus empresas, que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. Esta contabilidad puede ser realizada directamente por los empresarios o por las personas en las que deleguen. Ha de ser llevada con claridad, por orden de fecha, sin tachaduras ni interpolaciones ni espacios en blanco.

Los libros obligatorios, que deberán llevarse en soporte electrónico para su posterior legalización ante el Registro de Cooperativas, son:

1. Libro de Inventarios y cuentas anuales: el Reglamento reduce este libro a su apertura con el balance inicial detallado y la transcripción del inventario de cierre del ejercicio y las cuentas anuales (que incluye el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Sin embargo, habrá que estar a los requisitos fiscales y contables en relación a los balances de comprobación de carácter mensual o trimestral en su caso; así como la elaboración de las cuentas anuales.
2. Libro Diario: en él se deben recoger cada día los movimientos u operaciones económicas de la cooperativa. Igual que en la ley anterior, y siguiendo al CCom, se permiten anotaciones conjuntas de totales de las operaciones en períodos superiores al día e inferiores al mes, con una condición: que su detalle aparezca en otros libros o registros concordantes, aunque no estén legalizados, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que se trate.

Señalar por último, que las cooperativas pueden formular su contabilidad en modelo abreviado y que las cooperativas de crédito y seguros deben aplicar su normativa específica contable.

#### IV. Su llevanza y conservación.

El CCom permite la llevanza de los libros por cualquier procedimiento idóneo a sus fines. Por su parte, el art. 57.5 RLSCA establece que los asientos y anotaciones podrán realizarse a través de procedimientos informáticos u otros procedimientos idóneos que



permitan su conservación. Sin embargo, la llevanza de los mismos de forma informatizada casi se impone, al exigir la ley para su posterior legalización ante el Registro que éstos se presenten en soporte electrónico; lo que no excluye la llevanza manual y su posterior tratamiento informático.

Como hemos señalado en los comentarios al capítulo, la LSCA obliga a las cooperativas a la conservación de la documentación social en el plazo establecido reglamentariamente. Así, el art. 57.4 RLSCA exige que se conserven durante al menos cinco años desde el último realizado en los mencionados libros; salvo en el supuesto de que éstos recojan derechos u obligaciones de la sociedad cooperativa, de las personas socias o de terceros, en cuyo caso el plazo de cinco años se computa a partir de la fecha en que los derechos u obligaciones se extingan.

Por su parte, la ley estatal encomienda la custodia de los libros y demás documentos sociales a su Consejo Rector, que debe conservarlos como mínimo siete años desde el último asiento o a la extinción de los derechos y obligaciones que contienen.

#### V. La legalización de los libros sociales.

El art. 72.2 obliga a la legalización de todos los libros sociales, en la forma en que reglamentariamente se regule. En este sentido, como comentábamos al principio, la legalización de los mismos deberá realizarse a través de medios electrónicos y con posterioridad a su cumplimentación (art. 57.3 RLSCA).

La legalización de los libros sociales, se regula en el art. 156 RLSCA, a cuyos comentarios nos remitimos.

### **ARTÍCULO 73. AUDITORÍA DE CUENTAS**

*1. Las sociedades cooperativas deberán someter a auditoría externa, en los términos establecidos por la Ley de Auditoría de Cuentas y sus normas de desarrollo, las cuentas anuales y demás documentos necesarios, conforme a la normativa general contable o cualquier otra disposición de obligado cumplimiento, en los siguientes supuestos:*

*a) Cuando lo prevea la presente ley.*

*b) Cuando así lo exija la Ley de Auditoría de Cuentas, sus normas de desarrollo o cualquier otra norma de aplicación.*

*c) Cuando lo establezcan los estatutos, lo acuerde la Asamblea General o lo solicite el veinte por ciento de los socios y socias en sociedades cooperativas con un número de personas socias comunes superior a diez. En este último caso, los gastos originados por la auditoría solicitada correrán a cargo de las personas solicitantes, salvo que de la contabilidad auditada se desprendan vicios o irregularidades esenciales.*

*d) Cuando la sociedad cooperativa cuente con, al menos, una sección.*

*2. Las personas auditoras serán nombradas por la Asamblea General, debiendo constar dicho extremo como uno de los puntos del orden del día de dicha Asamblea. También podrán ser nombradas por el órgano de administración, en los casos y plazos que reglamentariamente se establezcan.*

*3. El Registro de Cooperativas Andaluzas procederá al nombramiento de una o varias personas auditoras de cuentas para un ejercicio determinado en los supuestos y con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se determinen.*

## **Correlación con el artículo 58 del Reglamento.**

### **ARTÍCULO 58. AUDITORÍA DE CUENTAS.**

*1. Además de los supuestos establecidos en el art. 73.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y conforme a lo previsto en su letra b), las sociedades cooperativas agrarias deberán someter, preceptivamente, a auditoría externa las cuentas anuales y demás documentos necesarios, en los términos fijados en dicho artículo, cuando no dispongan de sección de crédito pero realicen ocasionalmente operaciones de intermediación financiera con sus personas socias. Se entiende que dichas operaciones son ocasionales cuando no excedan de dos al año y su volumen acumulado no supere el tres por ciento de los recursos totales de la cooperativa.*

*Las personas auditoras o las sociedades de auditoría estarán obligadas a comunicar a la Consejería competente en materia de cooperativas, en un plazo máximo de diez días desde su conocimiento, cualesquiera hechos o acuerdos sobre la entidad auditada que puedan suponer regularidad en la realización de operaciones de intermediación*

*financiera de esta con sus personas socias y, por ello, la obligación de la sociedad cooperativa de constituir una sección de crédito.*

*La referida comunicación deberán realizarla simultáneamente a la entidad que, a su vez, contará con un plazo máximo de diez días para trasladarla a la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, junto con todas aquellas alegaciones que estime convenientes para su defensa.*

*2. Los auditores o auditoras de cuentas serán nombrados en la forma prevista en el art. 73.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. En el caso de que la Asamblea General no proceda a nombrar a los responsables de la auditoría dentro del ejercicio económico o en el supuesto de falta de aceptación, renuncia o cualquier otra circunstancia que determine la imposibilidad de que los auditores o auditoras lleven a cabo su cometido, los nombrará, dentro del mes siguiente, el órgano de administración de la sociedad cooperativa, sin que dicho nombramiento pueda exceder de un ejercicio.*

*3. Cuando la sociedad cooperativa no esté obligada a auditar sus cuentas o estando obligada, no lo hiciera, el veinticinco por ciento de las personas socias en sociedades cooperativas de más de mil, el treinta por ciento en las de más de quinientos y el treinta y cinco por ciento en las restantes, podrá solicitar de la unidad competente del Registro de Cooperativas Andaluzas el nombramiento de una o varias personas auditoras de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado ejercicio, siempre que no hubiesen transcurrido tres meses a contar desde la fecha de cierre de dicho ejercicio. Los gastos originados por la auditoría solicitada correrán a cargo de las personas solicitantes, salvo que la sociedad cooperativa tuviera obligación de someterse a auditoría o que de la contabilidad auditada se desprendan vicios o irregularidades esenciales, en cuyo caso se abonarán por la entidad auditada.*

*La solicitud se formulará por escrito, con expresión de la legitimación que ampara la misma y de las causas que la justifiquen. El Registro efectuará el nombramiento de la persona auditora por insaculación entre el listado de auditores y auditoras facilitado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.*

*En cualquier caso, la auditoría no se llevará a efecto sin que previamente se consigne por las personas solicitantes su importe previsto.*

## Comentarios.

La gestión realizada por los órganos de administración de la cooperativa debe ser controlada y revisada. El primer mecanismo de control lo realiza la Asamblea General a través de su aprobación anual, conforme recoge el art. 28.a) LSCA.

Pero, junto a este primer sistema de control, la ley prevé un control externo de las cuentas anuales de la cooperativa para determinados supuestos, a través de su sometimiento a auditoría de cuentas.

En este sentido, debemos recordar que una de las modificaciones de la nueva LSCA, conforme pone de manifiesto su Exposición de Motivos, es la eliminación del carácter obligatorio de una figura histórica del derecho cooperativo como es la de los interventores. Las razones de la supresión del carácter obligatorio de esta figura, queda recogida en el último párrafo del epígrafe V de la Exposición de Motivos de la Ley: *“La aproximación progresiva al derecho general de sociedades y en especial la asunción de la auditoría externa –que la presente ley extiende a más supuestos de los contemplados convencionalmente para las sociedades cooperativas– convierten a este órgano en algo superfluo e incluso extravagante. Además, el carácter altamente especializado de las tareas de fiscalización económica y contable que se les asignaban no se corresponde, en la gran mayoría de los casos, con la preparación de las personas elegidas para su ejercicio; preparación que, por otra parte, y esto es lo relevante, no se requiere para alcanzar un perfil ajustado de excelencia empresarial. Con todo, coherente con su carácter autonomista, la ley permite su asunción estatutaria por aquellas sociedades cooperativas de cierta envergadura que la consideren operativa y cuenten con personas adecuadas para su ejercicio”*.

Con carácter general, auditar las cuentas anuales es una actividad que consiste en verificar y certificar que, de conformidad con los principios y normas de contabilidad aplicables, las cuentas de la cooperativa reflejan la fiel imagen de su patrimonio y de su situación financiera, así como los resultados de sus operaciones, los recursos obtenidos y aplicados en el ejercicio auditado, y la verificación de que el Informe de Gestión concuerda con las cuentas.

La auditoría de las cuentas anuales debe ser realizada necesariamente por auditor o auditora de cuentas, persona experta independiente, quien, mediante la utilización de las

técnicas idóneas, ha de emitir un informe manifestando una opinión cualificada sobre el grado de fiabilidad de los documentos contables auditados.

El primer epígrafe del artículo 73 LSCA remite a las normas específicas en la materia, y, en concreto, al Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y su desarrollo reglamentario, regulado en Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre. Sin embargo, debemos dejar señalado que en estos momentos se está debatiendo en el Parlamento un nuevo Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas, por lo que deberá ser revisada la aplicabilidad de las normas utilizadas ahora al comentar este artículo.

Además, deberá tenerse en cuenta toda la normativa general contable, en concreto, el Plan General de Contabilidad de 2007 (PGC ), aprobado por el [RD 1514/2007](#), y en el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PGC PYMEs), aprobado de forma simultánea y como norma complementaria del PGC mediante [RD 1515/2007](#).

El artículo 73 LSCA se centra en regular los supuestos básicos de la auditoría de cuentas y algunos elementos esenciales de la misma, si bien remite de nuevo al desarrollo reglamentario para su concreción; desarrollo que se realiza en el art. 58 RLSCA.

El control externo de la contabilidad de una entidad mediante su sometimiento a auditoría puede tener carácter legal, cuando una norma determina su obligatoriedad; o voluntario, cuando es la empresa la que voluntariamente decide hacer una auditoría. Ahora bien, con independencia de que ésta sea obligatoria o no, la realización de la misma tiene que cumplir los mismos requisitos, los que prevé la legislación de auditoría de cuentas. No hay diferencia en este sentido, ni metodológicas ni de contenido, tanto si la auditoría deviene de una obligación legal como de una voluntad de la cooperativa.

#### I.- Supuestos que deben someterse obligatoriamente a Auditoría de cuentas:

Obligatoriamente deberá realizarse una auditoría de cuentas en los siguientes supuestos, bajo pena de incurrir en una sanción grave de conformidad con el art. 123.3.c) LSCA:

1º Los supuestos previstos en la LSCA (art. 73.1.c): junto con los supuestos específicos regulados en los demás apartados de este artículo, como es el caso de las cooperativas

que cuenten con al menos una sección (art. 73.1d), hay obligación legal de realizar auditorías de cuentas por imperativo de la LSCA en los siguientes supuestos:

- El propio art. 73.1.d) establece la obligatoriedad de someter a auditoría las cuentas de cualquier cooperativa que cuente con al menos una sección. Esta referencia es novedosa respecto a la ley anterior y se regula en los art. 9.5 y 18 RLSCA.
- Para concretar el valor razonable de la empresa de cara a determinar las aportaciones de para nuevo ingreso, cuando estatutariamente se haya acordado esta posibilidad (art. 58.1 LSCA).
- Las cooperativas de vivienda, estarán obligadas al sometimiento a auditoría, por remisión del art. 98.f) LSCA, cuando durante el ejercicio económico se haya producido alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la sociedad cooperativa tenga en promoción, entre viviendas y locales, un número superior a cincuenta; b) Que la sociedad cooperativa haya otorgado poderes relativos a la gestión empresarial a personas físicas o jurídicas distintas de los miembros del órgano de administración. c) Que, por cualquier circunstancia, se haya acordado por el órgano de administración un incremento en más de un cinco por ciento del precio de las viviendas, locales y/o construcciones complementarias sobre el pactado con las personas socias y d) Que lo solicite al menos el veinte por ciento de las personas socias de la entidad cooperativa o de la sección correspondiente (art. 89 RLSCA).
- Las federaciones y asociaciones de federaciones vendrán obligadas a someter sus cuentas a auditoría, en cuanto resulten beneficiarias de ayudas públicas, de acuerdo con lo previsto en la normativa que regule la auditoría de cuentas (art 113.4 LSCA).

2º Cuando así lo exija la Ley de Auditoría de cuentas, sus normas de desarrollo o cualquier norma de aplicación (art. 73.1.b) LSCA).

El último enunciado de este epígrafe remite a “*cualquier otra norma de aplicación*”, redacción que ha servido para introducir reglamentariamente nuevos supuestos de auditoría externa.

Así el art. 58.1 recoge un *nuevo supuesto de obligado sometimiento de cuentas a auditoría externa, en el caso de cooperativas agrarias que, sin disponer de sección de*

*crédito, realice, de forma eventual, operaciones de intervención financiera con sus personas socias.*<sup>11</sup>

Así las cooperativas agrarias, aunque no cuenten con secciones de crédito, deberán someter, preceptivamente, a auditoría externa las cuentas anuales y demás documentos necesarios, en los términos fijados en el artículo 73 LSCA, cuando no dispongan de sección de crédito pero realicen ocasionalmente operaciones de intermediación financiera con sus personas socias. Se entiende que dichas operaciones son ocasionales cuando no excedan de dos al año y su volumen acumulado no supere el tres por ciento de los recursos totales de la cooperativa (art. 58.1 RLSCA).

En este caso, las personas auditoras o las sociedades de auditoría estarán obligadas a comunicar a la Consejería competente en materia de cooperativas, en un plazo máximo de diez días desde su conocimiento, cualquier hecho o acuerdo sobre la entidad auditada que puedan suponer regularidad en la realización de operaciones de intermediación financiera de esta con sus personas socias y, por ello, la obligación de la sociedad cooperativa de constituir una sección de crédito.

Junto a la comunicación de la Consejería competente, también deberá comunicar esta situación a la propia cooperativa auditada, quien tendrá un plazo máximo de diez días para comunicarla a su vez a la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, junto con todas aquellas alegaciones que estime convenientes para su defensa.

Otros supuestos de auditoría externa regulados en el RLSCA:

- Art. 85: cooperativas de impulso empresarial, en todo caso.
- Art. 89: cooperativas de consumo, en los supuestos regulados reglamentariamente.

Por su parte, de conformidad con la Ley de Auditoría de Cuentas y su Reglamento, están obligadas a someterse a auditoría las cooperativas en las que concurren las siguientes circunstancias:

- Emitan valores admitidos a negociación en mercados regulados o sistemas multilaterales de negociación.

---

<sup>11</sup> CES Directiva 3/2014. pg. 7



- Emitan obligaciones en oferta pública.
- Se dedique de manera habitual a la intermediación financiera y, en todo caso, las entidades de créditos, empresas de servicios de inversión, sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, entidades rectoras de los sistemas de multilaterales de negociación, Sociedad de Sistemas, entidades de contrapartida central, Sociedad de Bolsas, sociedades gestoras de los fondos de garantía de inversiones y demás entidades financieras.
- Tengan por objeto social cualquier actividad sujeta a la normativa reguladora de ordenación y supervisión del seguro privado ([RDLeg 6/2004](#)) y los fondos de pensiones y sus entidades gestoras.
- Reciban subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas o a fondos de la UE, por un importe total acumulado superior a 600.000 euros. La obligación de someter a auditoría las cuentas anuales alcanza a las correspondientes al ejercicio en que se perciban las subvenciones o ayudas, así como de los ejercicios en que se realicen las operaciones o ejecuten las inversiones relativas a las mismas.
- Celebren contratos con el sector público para la realización de obras o prestaciones, o suministro de bienes al Estado y demás organismos públicos, por un importe total acumulado superior a 600.000 euros, y éste represente más del 50% del importe neto de su cifra anual de negocios. La obligación de someter a auditoría las cuentas anuales afecta a dicho ejercicio social y al siguiente.

## II.- Supuestos no obligatorios de sometimiento a auditoría externa:

La propia cooperativa, a través de sus estatutos o mediante acuerdo de Asamblea General, puede decidir los supuestos concretos en los que someterse a una auditoría de cuentas (art. 73.1.c) LSCA).

Pero además, un número determinado de personas socias puede solicitar el sometimiento a esta auditoría. En principio, el artículo 73.1.c) LSCA establece la obligatoriedad de su realización cuando lo solicitaran el veinte por ciento de las personas socias en cooperativas con más de diez personas socias. Lo que planteaba que esta posibilidad no puede darse en cooperativas más pequeñas.

Sin embargo, el artículo 58.3 RLSCA establece que cuando la sociedad cooperativa no esté obligada a auditar sus cuentas o cuando estando obligada, no lo haga, podrán solicitar de la unidad competente del Registro de Cooperativas Andaluza el nombramiento de una o varias personas auditoras de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado ejercicio, siempre que no hayan transcurrido tres meses a contar desde la fecha de cierre de dicho ejercicio.

El número de personas necesarias para formular esta solicitud se determina en función de la totalidad de socios/as de la cooperativa; así, podrán solicitarla:

- el veinticinco por ciento de las personas socias en sociedades cooperativas de más de mil,
- el treinta por ciento en las de más de quinientos y
- el treinta y cinco por ciento en las restantes.

Este último inciso puede generar problemas, en la medida en que la propia LSCA en su art. 73.1.c) dice que será el veinte por ciento en cooperativas de más de diez personas socias, lo que requerirá del necesario proceso de interpretación. Además, es necesario reseñar que esta posibilidad no estaba recogida en la Ley andaluza anterior, pero se han elevado de forma exponencial los porcentajes en relación a la Ley estatal de cooperativas, que en su artículo 62.2 obliga a la realización de la auditoría cuando así lo soliciten el cinco por ciento de las personas socias.

La solicitud se formulará por escrito dirigido al Registro de Cooperativas, con expresión de la legitimación que ampara la misma y de las causas que la justifiquen. El Registro efectuará el nombramiento de la persona auditora por insaculación entre el listado de auditores y auditoras facilitado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Los gastos originados por la auditoría solicitada correrán a cargo de las personas solicitantes, salvo que la cooperativa estuviera obligada a someterse a auditoría y no lo hubiera hecho o que de la contabilidad auditada se pongan en evidencia vicios o irregularidades esenciales, en estos casos la auditoría será abonada por la entidad auditada. En cualquier caso, la auditoría no se llevará a efecto sin que previamente se consigne por las personas solicitantes su importe previsto.

### III. El nombramiento de las personas auditoras.

Con carácter general, será la Asamblea General la que nombre a las personas que vayan a realizar la auditoría de cuentas, debiendo constar dicho extremo como uno de los puntos del orden del día de dicha Asamblea (art.73.2 LSCA) y ha de realizarse dentro del ejercicio.

Cuando la asamblea general no nombre oportunamente a las personas auditoras dentro del ejercicio económico, o en el supuesto de falta de aceptación, renuncia u otros que determinen la imposibilidad de que las personas nombradas lleven a cabo su cometido, el órgano de administración procederá a su nombramiento dentro del mes siguiente, sin que dicho nombramiento pueda exceder de un ejercicio.

El último epígrafe del artículo 73 LSCA recoge la posibilidad de que sea el Registro de Cooperativas Andaluza el que proceda al nombramiento de una o varias personas auditoras de cuentas para un ejercicio determinado; remitiendo al reglamento para regular los supuestos y el procedimiento para ello. El único supuesto regulado reglamentariamente para el nombramiento por parte del Registro de Cooperativas es el ya comentado sobre la posibilidad de que sea un porcentaje de las personas socias las que soliciten por escrito la auditoría.

## **CAPÍTULO VII. MODIFICACIONES ESTATUTARIAS Y ESTRUCTURALES**

### **ARTÍCULO 74. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.**

*1. Los acuerdos sobre modificación de los estatutos sociales deberán adoptarse por la Asamblea General en los términos establecidos en el art. 33, relativo a las mayorías mínimas requeridas, con arreglo a los requisitos que reglamentariamente se determinen. No obstante, para el cambio del domicilio social de la entidad dentro del mismo término municipal, bastará el acuerdo del órgano de administración.*

*2. Cuando la modificación suponga una variación sustancial del objeto social o consista en la previsión del rehúse regulado en el art. 60, podrán causar baja, con la*

*consideración de justificada, aquellas personas socias que se ajusten a lo previsto o en quienes concurran las circunstancias establecidas en el art. 23.3, letras b) y c).*

*3. Cuando la modificación consista en el cambio de tipología de la sociedad cooperativa, se estará a lo que estatutariamente se determine para la consideración de la baja del socio o socia que decida separarse de la entidad y que se halle en alguna de las circunstancias del art. 23.3, letras b) y c). En el caso de que los estatutos guarden silencio al respecto, dicha baja se entenderá justificada.*

## **Concordancia con el artículo 59 del Reglamento de desarrollo.**

### **ARTÍCULO 59. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.**

*1. Las modificaciones estatutarias se regirán por lo dispuesto en el art. 74 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y en el presente Reglamento.*

*2. Cuando la Asamblea General, conforme al orden del día, haya de tratar sobre la modificación de los estatutos, deberá poner de manifiesto, en el domicilio social de la sociedad cooperativa, desde el día de la publicación de la convocatoria hasta el de la celebración de la Asamblea, la documentación correspondiente a la citada modificación. Durante dicho periodo las personas socias podrán examinar la referida documentación y solicitar sobre la misma, por escrito, al órgano de administración las explicaciones o aclaraciones que estimen convenientes, para que sean contestadas en el acto de la Asamblea General. La solicitud deberá presentarse, al menos, con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea.*

*No obstante lo anterior, y dentro de los plazos previstos, cuando alguna persona socia lo solicite, se le facilitará gratuitamente la mencionada documentación, si bien el órgano de administración, atendidas las circunstancias concurrentes, podrá exigir a aquella que retire dicha documentación de la sede social.*

*3. En caso de que la modificación estatutaria implique la adopción de alguno de los acuerdos previstos en el art. 74, apartados 2 y 3, de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, salvo disposición estatutaria en contra respecto al supuesto establecido en ese último apartado, las personas socias disconformes tendrán derecho a separación, cuando concurran las circunstancias establecidas en las letras b) y c) del art. 23.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, mediante escrito dirigido al órgano de administración por el*

*que se solicita la correspondiente baja, que tendrá la consideración de baja justificada.*

Comentarios.

I. Introducción: el Capítulo VII del Título I de la Ley 14/2011.

El Capítulo VII del Título I LSCA regula los procesos de modificación de la sociedad, tanto en lo que se refiere a las modificaciones estatutarias, como a las modificaciones estructurales de la cooperativa (fusión, escisión, cesión global del activo y del pasivo y transformación).

Respecto a la legislación anterior (L 2/1999) es necesario destacar las novedades introducidas por la LSCA:

1º La regulación de dos nuevos procesos de modificación estructural como son la fusión heterogénea, es decir la posibilidad de unión de una cooperativa con otros tipos de entidades, y la cesión global del activo y del pasivo.

En la ley anterior (L 2/1999) no se regulaba la posibilidad de que las cooperativas pudieran fusionarse con sociedades civiles o mercantiles de cualquier clase; posibilidad que sí está recogida en el artículo 67 de la ley estatal (L 27/1999) en términos muy similares a los recogidos en la LSCA.

Por su parte, la ley estatal no recoge la posibilidad de cesión global del activo y del pasivo, y las escasas leyes autonómicas que la regulan no adoptan un criterio uniforme.

2º En relación a los aspectos procedimentales de las modificaciones reguladas en el Capítulo VII del Título I LSCA, la nueva ley contiene importantes novedades respecto a la ley anterior:

- Con carácter general, se han pasado a regulación reglamentaria muchos de los trámites que antes tenían valor legal; así, por ejemplo, la fusión quedaba recogida en cuatro artículos de la ley anterior, ahora se regulan las normas generales en un solo artículo, con un mayor desarrollo reglamentario. La justificación de este descenso de rango normativo hay que buscarla en la voluntad manifestada en la Exposición de Motivos de la ley de favorecer la adaptación de la norma a la realidad de forma fácil y ágil.

- Sobre la publicidad de los acuerdos de modificación estructural: En su desarrollo reglamentario se introduce una importante novedad cuya finalidad tiene que ver con la simplificación de los trámites en relación a los acuerdos en los que se adopten modificaciones de carácter estructural. En la ley anterior, estos acuerdos debían publicarse en el BOJA y en un periódico de los de mayor circulación en la provincia; la nueva ley lo sustituye por la publicación en la sede electrónica de la Consejería competente en materia de cooperativas; e incluso se puede eludir dicha publicación mediante notificaciones individuales, en las condiciones que se regulan.

- Respecto a la formalización de las modificaciones estructurales, la ley anterior exigía siempre su formalización mediante escritura pública. La nueva ley, en su voluntad de reducir, facilitar y agilizar los trámites, permite que las modificaciones se formalicen mediante actas de acuerdo de la Asamblea General; si bien, en determinados supuestos que luego comentaremos, deberá mantenerse la elevación a escritura pública (por ejemplo, cuando la modificación implique la transmisión de bienes inmuebles).

- Sobre el destino de los excedentes: En los supuestos en los que la cooperativa, a raíz de la modificación, se extingue o disuelve sin liquidación, la ley anterior exigía que se pusieran a disposición de la Junta de Andalucía no sólo un porcentaje de los Fondos sociales, sino además el activo excedente del capital social. Ahora este excedente se transmite al patrimonio de la nueva entidad resultante de la modificación.

- La reducción de los trámites administrativos: en la transformación de las cooperativas, la ley anterior exigía con carácter previo la autorización del Consejo Andaluz de Cooperación. Ya no es necesaria la autorización de la Administración para ninguna de las modificaciones reguladas en el Cap. VII de este Título.

En relación a las modificaciones estructurales recogidas en la LSCA, para todo aquello no regulado en la misma deberá acudir de forma supletoria a la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

## II. La modificación de los estatutos.

El artículo 59 LSCA está dedicado a la modificación de los estatutos de la cooperativa, manteniendo en esencia el mismo contenido de la ley anterior (art. 102 L 2/1999); si bien los requisitos y el procedimiento se han derivado en la norma actual para su regulación reglamentaria, en el art. 74 RLSCA.

Cualquier cambio que afecte a las materias determinadas en el art. 11 LSCA debe ser considerada una modificación de estatutos; es decir:

- a) La denominación, el domicilio social, la duración y la actividad o actividades que desarrollarán para el cumplimiento de sus fines sociales.
- b) El ámbito principal de actuación y la fecha de cierre del ejercicio económico.
- c) El capital social estatutario.
- d) La aportación obligatoria inicial para ser persona socia y la parte de la misma que debe desembolsarse en el momento de la suscripción, así como la forma y plazos de desembolso del resto de la aportación.
- e) Los requisitos objetivos para la admisión de socios y socias.
- f) La participación mínima obligatoria de la persona socia en la actividad cooperativizada, conforme a los módulos que se establezcan estatutariamente.
- g) Las normas de disciplina social, el establecimiento de infracciones y sanciones, el procedimiento disciplinario, el régimen de recursos y el régimen de impugnación de actos y acuerdos.
- h) Las garantías y límites de los derechos de los socios y socias.
- i) Las causas de baja justificada, cuando excedan de lo establecido en la presente ley.
- j) La convocatoria, el régimen de funcionamiento y la adopción de acuerdos de la Asamblea General.
- k) El régimen de las secciones que se creen en la cooperativa, en su caso.
- l) La determinación del órgano de administración de la sociedad cooperativa, su composición y la duración del cargo, así como la elección, sustitución y remoción de sus miembros.
- m) El régimen de transmisión, y reembolso o rehúse, de las aportaciones.
- n) Cualquier otra exigida por la normativa vigente.



## Modificación del domicilio social.

El criterio general establecido en el primer epígrafe del art. 74 es que *los acuerdos sobre modificaciones sociales deberán adoptarse por la Asamblea General*; pero bastará el acuerdo del órgano de administración para el cambio de domicilio social dentro del mismo término municipal. Cualquier otra modificación, incluyendo el cambio de domicilio social dentro de la misma provincia, requiere el acuerdo de la Asamblea.

### III. El procedimiento para la modificación de los estatutos.

#### Actos previos.

Cuando en una Asamblea General se vaya a tratar sobre la modificación de los estatutos, el órgano de administración de la cooperativa incluirá este punto en el orden del día con la claridad y la precisión necesario para proporcionar a los socios y socias una información suficiente.

La ley anterior exigía que quienes fueran autores de la propuesta de modificación (que podían ser tanto el Consejo Rector como las propias personas socias) elaboraran un informe justificando la modificación. La ley actual no exige tal informe, si bien, el art. 59.2 RLSCA establece que la documentación correspondiente a la citada modificación, deberá ponerse de manifiesto en el domicilio social, a disposición de las personas socias, desde *“el día de publicación de la convocatoria”* hasta el de la celebración de la Asamblea. Deberemos entender que la publicidad a la que se refiere esta norma debe ser la notificación y el anuncio establecido en los estatutos, conforme reza el art. 29.3. LSCA.

Durante dicho periodo las personas socias podrán examinar la referida documentación y solicitar sobre la misma, por escrito, al órgano de administración las explicaciones o aclaraciones que estimen convenientes, para que sean contestadas en el acto de la Asamblea General. La solicitud deberá presentarse, al menos, con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea.

No obstante lo anterior, y dentro de los plazos previstos, cuando alguna persona socia lo solicite, se le facilitará gratuitamente la mencionada documentación; si bien el órgano de administración, atendidas las circunstancias concurrentes, podrá exigir a aquella que retire dicha documentación de la sede social.

## Acuerdo de modificación de estatutos.

De conformidad con el artículo 33.1.c) LSCA, la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos deberá ser adoptado por mayoría cualificada, es decir, que *“Será necesaria, en primera convocatoria, la emisión de votos favorables en número no inferior a los tres quintos de las personas asistentes, presentes o representadas, y, en segunda convocatoria, en número no inferior a los dos tercios”*. Ahora bien, nada impide que estatutariamente se pueda exigir una mayoría superior para determinadas materias; posibilidad que si bien no recoge la LSCA, sí está regulada por el artículo 28.4 de la Ley estatal de cooperativas.

## Derecho de separación de la persona socia disconforme.

Los apartados 2 y 3 del art. 74 LSCA reconoce a las personas socias la posibilidad de separarse de la cooperativa como consecuencia de las modificaciones estatutarias, e incluso con la posibilidad de que esta baja sea considerada como justificada.

Podrán causar baja cuando la modificación:

1. Suponga una variación sustancial del objeto social.
2. Consista en la previsión del rehusé regulado en el art. 60 LSCA; es decir, cuando el acuerdo pretende rehusar el reembolso de las aportaciones sociales en caso de baja de persona socia.
3. Consista en el cambio de tipología de la sociedad cooperativa.

Con carácter general, la baja solicitada en estos supuestos tendrá la consideración de justificada; salvo en el último supuesto señalado, respecto al cambio de tipología de la cooperativa, en el que sólo será justificada la baja si los estatutos no dicen lo contrario.

Los requisitos que deben concurrir para poder solicitar la baja son los regulados en el 23.3 b) y c) LSCA; en concreto:

- b) Haber hecho constar en acta la oposición a su celebración o el voto en contra del acuerdo, no haber asistido o haber sido privado ilegítimamente del voto.
- c) Que se ajuste al resto de los requisitos establecidos en esta ley y la solicitud de baja

se presente en el plazo y forma que reglamentariamente se determinen.

Para solicitar la baja, la persona socia en la que concurran los requisitos anteriores, será necesario la presentación de una solicitud dirigida al órgano de administración comunicando su voluntad de ejercitar el derecho a separación regulado en el artículo 74 LSCA.

El plazo para presentar esta solicitud es de un mes, el mismo plazo que se otorgaba en la ley anterior. En este sentido, el Comité Económico y Social, en el Dictamen elaborado a la propuesta de la ley señalaba la necesidad de que reglamentariamente se fijara un plazo para que los socios o socias puedan solicitar la baja después de las modificaciones estatutarias; y proponía que este plazo fuera de un mes desde la inscripción del acuerdo de modificación en el Registro de Cooperativas<sup>12</sup>, tal y como se regulaba en la ley anterior. En la redacción final del RLSCA se incluyó el plazo de un mes, pero no la fecha de inicio del cómputo. Por lo que para la determinación de la fecha de inicio del cómputo de este plazo, deberá estarse a los criterios generales recogido en el art. 25.4 RLSCA. Así:

- Si la persona socia hubiera asistido a la Asamblea en la que se adoptó el acuerdo de modificación, empieza a contarse desde la fecha de la celebración de la Asamblea General.
- En caso de no haber estado presente, el plazo del mes contará a partir del día siguiente a aquel en que recibió la notificación del acuerdo.
- Cuando el acuerdo de modificación deba ser objeto de publicación, de conformidad con la LSCA y el RLSCA, el plazo señalado para solicitar la baja se contará a partir del día siguiente a la publicación de dicho acuerdo.

Formalización e inscripción.

El acuerdo de modificación de estatutos se formalizará mediante acta de la Asamblea General en la que se apruebe.

Es obligatorio proceder a la inscripción registral de la modificación acordada (art. 123.b) RLSCA). La inscripción de la modificación de estatutos se regula en el art. 133 RLSCA.

---

<sup>12</sup> CES Dictamen 7/2011 pg 19.

## **ARTÍCULO 75. FUSIÓN.**

*1. Las sociedades cooperativas andaluzas podrán fusionarse mediante la creación de una nueva o mediante la absorción de una o más por otra sociedad cooperativa ya existente. Las cooperativas en liquidación podrán participar en una fusión siempre que no haya comenzado el reembolso de las aportaciones al capital social.*

*2. Las sociedades cooperativas que se fusionen en una nueva o que sean absorbidas por otra ya existente quedarán disueltas, si bien no entrarán en liquidación, y sus patrimonios pasarán a la sociedad nueva o absorbente, que asumirá los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas. Los fondos sociales, obligatorios o voluntarios, de las sociedades disueltas pasarán a integrarse en los correspondientes de la sociedad cooperativa nueva o absorbente.*

*3. Los órganos de administración de las sociedades cooperativas que participen en la fusión habrán de redactar un proyecto de fusión, que deberán suscribir como convenio previo y que contendrá las menciones que reglamentariamente se determinen.*

*Dicho proyecto podrá fijar un periodo de carencia, durante el cual a algunas de las entidades concurrentes se les podrá privar del disfrute de ciertos servicios o relevar del cumplimiento de determinadas obligaciones de carácter económico, en los supuestos y con los requisitos que reglamentariamente se establezcan.*

*4. La Asamblea General de cada una de las sociedades cooperativas que participen en la fusión deberá aprobar, sin modificaciones, el proyecto de fusión.*

*5. El procedimiento que haya de seguirse para llevar a cabo la fusión será objeto de regulación reglamentaria, salvaguardándose en todo caso, los derechos de los acreedores de cualquiera de las sociedades que se fusionan, pudiéndose utilizar como medio de publicidad la sede electrónica de la consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de sociedades cooperativas, garantizando, en todo caso, el derecho de las personas socias a causar baja justificada cuando concurren las circunstancias establecidas en el art. 23.3, letras b) y c).*

*6. Las sociedades cooperativas también podrán fusionarse con sociedades civiles o mercantiles de cualquier clase, siempre que no exista una norma legal que lo prohíba y sin perjuicio de las particularidades que reglamentariamente se determinen.*

*Si la entidad resultante de la fusión no fuese una cooperativa, el destino del Fondo de Formación y Sostenibilidad, del Fondo de Reserva Obligatorio, o la parte irrepartible del mismo en caso de la opción prevista en el art. 70.3, así como de cualquier fondo voluntario previsto estatutariamente que tenga el carácter de irrepartible, será el previsto en el art. 78.2 para el caso de transformación de la cooperativa.*

## **Correspondencia con los artículos 60 a 63 del Reglamento.**

### **ARTÍCULO 60. PROYECTO DE FUSIÓN.**

*1. Los órganos de administración de cada una de las sociedades cooperativas que participen en la fusión habrán de redactar y suscribir un proyecto común de fusión, que deberá contener, al menos, las siguientes menciones:*

*a) La denominación, clase y el domicilio de las sociedades cooperativas que participen en la fusión y de la nueva sociedad cooperativa, en su caso, así como los datos de inscripción de aquellas en el Registro de Cooperativas Andaluas.*

*b) Sistema para fijar la cuantía que se reconoce a cada persona socia o persona inversora, en su caso, de las sociedades disueltas, como aportaciones al capital social de la sociedad cooperativa nueva o absorbente, computándose, cuando existan, las reservas voluntarias de carácter repartible.*

*c) Los derechos y obligaciones que se reconozcan a las personas socias de las sociedades cooperativas extinguidas en la sociedad nueva o absorbente.*

*d) La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades cooperativas que se fusionen habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad cooperativa nueva o absorbente.*

*e) Los derechos que, en su caso, correspondan en la sociedad cooperativa nueva o absorbente a los titulares de títulos participativos, u otros asimilables, de las sociedades cooperativas que se extingan.*

*f) Proyecto de estatutos de la nueva entidad o de las modificaciones de los de la entidad absorbente, en su caso.*

*g) Información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de cada sociedad cooperativa que se transmita a la sociedad resultante.*

*h) Las posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, así como su eventual impacto de género en los órganos de administración y la incidencia, en su caso, en la responsabilidad social empresarial.*

*2. El proyecto de fusión podrá fijar un período de carencia en el que algunas de las entidades concurrentes podrán ser privadas del disfrute de ciertos servicios o relevadas del cumplimiento de determinadas obligaciones de carácter económico, cuando la situación económica o financiera de cualquiera de las sociedades cooperativas, civiles o mercantiles que se fusionan sea netamente desigual y las circunstancias de la fusión así lo aconsejen. El proyecto de fusión establecerá la duración del período de carencia, que en ningún caso sobrepasará el plazo de diez años, prorrogables una sola vez por otros cinco.*

*3. Aprobado el proyecto de fusión, los órganos de administración de las sociedades cooperativas que participen en la misma se abstendrán de realizar cualquier clase de actos o de concluir cualquier contrato que pudiera comprometer la aprobación del proyecto o modificar sustancialmente la proporción de la participación de los socios y socias de las sociedades cooperativas extinguidas en la nueva o absorbente.*

*4. El proyecto de fusión quedará sin efecto en el supuesto de que no hubiera sido aprobado por las Asambleas Generales de las sociedades cooperativas que participen en la fusión dentro de los doce meses desde la fecha de suscripción del proyecto por sus correspondientes órganos de administración.*

## **ARTÍCULO 61. BALANCE DE FUSIÓN.**

*1. El último balance de ejercicio aprobado podrá considerarse balance de fusión, siempre que hubiera sido cerrado dentro de los ocho meses anteriores a la fecha del proyecto de fusión.*

*Si el balance anual no cumpliera con ese requisito, será preciso elaborar un balance*

*cerrado con posterioridad al primer día del tercer mes precedente a la fecha del proyecto de fusión, siguiendo los mismos métodos y criterios de presentación del último balance anual.*

*2. En ambos casos, podrán modificarse las valoraciones contenidas en el último balance en atención a las modificaciones importantes del valor razonable que no aparezcan en los asientos contables.*

*3. La impugnación del balance de fusión se someterá al régimen general de impugnación de los acuerdos sociales si bien no podrá suspender por sí sola la ejecución de la fusión.*

## **ARTÍCULO 62. ACUERDO DE FUSIÓN.**

*1. La Asamblea General de cada entidad cooperativa participante en la fusión, deberá aprobar, sin modificaciones y de forma íntegra, el proyecto de fusión previamente conveniado por sus respectivos órganos de administración. El proyecto de fusión se pondrá a disposición de cada persona socia, en la forma dispuesta en el art. 29.4, relativo a la convocatoria de la Asamblea General, e irá acompañado de la siguiente documentación:*

*a) Un informe del órgano de administración sobre la conveniencia y efectos de la fusión proyectada.*

*b) Las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participen en la fusión, junto con los informes del órgano de intervención, si existiese este órgano y, en su caso, de las personas auditoras, sobre la situación económica y financiera de aquellas, y la previsible de la sociedad cooperativa resultante; además, se acompañará el balance de fusión previsto en el apartado 1 del artículo anterior cuando sea distinto al último balance anual aprobado.*

*c) Un proyecto de estatutos de la nueva sociedad cooperativa o de las modificaciones estatutarias que hayan que introducirse en la sociedad absorbente.*

*d) Los datos identificativos de los miembros del órgano de administración de las sociedades cooperativas disueltas y de los miembros propuestos para el órgano de administración de la sociedad resultante.*



*2. Las modificaciones sustanciales del activo o del pasivo acaecidas en cualquiera de las sociedades cooperativas que se fusionan, entre la fecha de redacción del proyecto de fusión y de la celebración de la Asamblea que haya de aprobarla, habrán de comunicarse a la Asamblea de todas las sociedades cooperativas que se fusionan. A tal efecto, el órgano de administración de la sociedad cooperativa en que se hubieran producido las modificaciones deberá ponerlas en conocimiento de los órganos de administración de las restantes sociedades para que puedan informar a sus respectivas Asambleas.*

*3. El acuerdo de fusión de cada una de las sociedades cooperativas se publicará en la sede electrónica de la Consejería competente en materia de cooperativas, de acuerdo con lo previsto en el art. 75.5 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, pudiendo eludirse dicha publicación en el caso de notificarse individualmente a las personas socias y acreedoras por escrito, a través de un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad cooperativa y en los domicilios que hayan puesto en conocimiento de la sociedad o, en su defecto, en sus domicilios legales, respectivamente.*

*4. La fusión no se podrá realizar antes de que transcurra un mes desde la fecha de la publicación o desde la última notificación individual realizada por escrito.*

*5. Dentro del plazo de un mes establecido en el apartado anterior, podrán oponerse a la fusión las personas acreedoras de cada una de las sociedades cooperativas que se fusionan cuyos créditos hayan nacido antes de la fecha de publicación del proyecto de fusión y no se encuentren adecuadamente garantizados. En los casos en que las personas acreedoras ejerciten su derecho a oponerse a la fusión, ésta no podrá llevarse a efecto hasta que la sociedad cooperativa satisfaga por entero los créditos pendientes, presente garantía suficiente para la satisfacción de los derechos de la persona acreedora o, en otro caso, hasta que les notifique la prestación de fianza solidaria a favor de la sociedad cooperativa por una entidad de crédito debidamente habilitada para prestarla, por la cuantía del crédito de que fuera titular la persona acreedora, y hasta tanto no prescriba la acción para exigir su cumplimiento. Las personas acreedoras no podrán oponerse al pago aunque se trate de créditos no vencidos.*

*6. De conformidad con lo establecido en el art. 75.5 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las personas socias disconformes podrán separarse de la entidad, cuando*

*concurran las circunstancias establecidas en las letras b) y c) del art. 23.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, mediante escrito dirigido al órgano de administración por el que se solicita la correspondiente baja, asumiendo la sociedad cooperativa resultante de la fusión la obligación de liquidación y reembolso de sus aportaciones en la forma regulada en dicha ley y en este Reglamento para el caso de la baja justificada.*

*7. Cada una de las sociedades cooperativas queda obligada a continuar el procedimiento de fusión desde el momento en que el proyecto haya sido aprobado por la Asamblea General de todas ellas. La formalización de la fusión se hará mediante acta única, en la que constará el acuerdo de fusión aprobado por las respectivas Asambleas Generales de las sociedades cooperativas que se fusionen, que habrá de contener el balance de fusión de las sociedades cooperativas que se extingan. Igualmente, deberá acompañarse una relación de las personas socias que hayan hecho uso del derecho de separación y otra de las personas acreedoras, que se hayan opuesto a la fusión y cuyos créditos hayan sido satisfechos o garantizados, o una declaración responsable sobre su inexistencia.*

*Si la fusión se realizara mediante la creación de una nueva sociedad, el acta de fusión deberá contener, además, las menciones exigidas en el art. 6, en cuanto resulten de aplicación, para la constitución de la misma. Si se realizara por absorción, contendrá las modificaciones estatutarias que se hubieran acordado por la sociedad absorbente con motivo de la fusión. El certificado del acta servirá para la cancelación de los asientos de las primeras y la inscripción de la nuevamente constituida o, en su caso, de las modificaciones estatutarias de la absorbente en el Registro de Cooperativas Andaluzas.*

*8. No obstante lo anterior, la fusión se podrá hacer mediante escritura pública en los supuestos en que así se acuerde por las sociedades cooperativas fusionadas y, necesariamente, en los previstos en el art. 5.2.*

*La escritura pública será única, en la que constará la documentación mencionada en el apartado anterior para la formalización de la fusión mediante acta.*

*9. La impugnación de la fusión se regirá por el régimen general de impugnación de acuerdos establecido en el art. 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

## **ARTÍCULO 63. FUSIÓN DE COOPERATIVAS CON OTRAS SOCIEDADES.**

*1. Las sociedades cooperativas podrán fusionarse con todo tipo de sociedades civiles o mercantiles, siempre que no exista una norma legal que lo impida.*

*2. A estas fusiones les será de aplicación la normativa reguladora de la sociedad absorbente o que se constituya como consecuencia de la fusión, pero en cuanto a la adopción del acuerdo y las garantías de los derechos de las personas socias y acreedoras de las sociedades cooperativas participantes, se estará a lo dispuesto en el artículo anterior. No obstante, si la entidad resultante de la fusión no fuese una sociedad cooperativa, la liquidación de sus aportaciones al socio o socia que ejercite el derecho de separación y cuya baja tendrá la consideración de justificada, si concurren las circunstancias establecidas en las letras b) y c) del art. 23.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, deberá tener lugar dentro del mes siguiente a la fecha en que ejercite dicho derecho, sin perjuicio de lo previsto en el art. 48.2.d) del presente Reglamento, relativo a la facultad de aplazamiento que le asiste al órgano de administración. Hasta que no se haya satisfecho esta liquidación, no podrá formalizarse la fusión.*

*Asimismo, cuando la entidad resultante de la fusión no fuese una cooperativa, el destino de los fondos sociales será el previsto en el art. 78.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, para la transformación de sociedades cooperativas, debiendo acreditarse su cumplimiento en la forma prevista en el 141.2 de este Reglamento.*

*3. En caso de que la fusión dé como resultado una sociedad que no sea cooperativa, el certificado del acta de fusión o, en su caso, la escritura pública que recoja dicho acuerdo, deberá presentarse en el Registro de Cooperativas Andaluzas para la cancelación de los asientos relativos a las entidades cooperativas fusionadas e irá acompañada del balance de situación de estas cerrado el día anterior al del acuerdo de fusión, o bien el del último ejercicio si hubiesen transcurrido menos de seis meses desde el cierre del mismo y hubiese sido depositado en el domicilio social, a disposición de las personas socias desde el día de la convocatoria de la Asamblea General.*

*Igualmente, deberá acompañarse una relación de las personas socias que hayan hecho uso del derecho de separación junto con los justificantes acreditativos de haber abonado su liquidación y otra de las personas acreedoras, que se hayan opuesto a la fusión y cuyos créditos hayan sido satisfechos o garantizados, o una declaración responsable*

*sobre su inexistencia, así como el balance final cerrado el día anterior al certificado del acta de la Asamblea General o, en su caso, al otorgamiento de la escritura.*

*Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de la obligación de presentar el certificado del acta de la Asamblea General o la pertinente escritura pública, en su caso, en otros registros públicos, conforme a la normativa aplicable.*

## **Comentarios.**

El art. 75 LSCA recoge el primer supuesto de modificación estructural reconocido para todas las entidades mercantiles, como es la posibilidad de una cooperativa para fusionarse o unirse con otras entidades, ya sean éstas cooperativas como sociedades civiles o mercantiles de cualquier clase.

La Ley regula dos formas de fusión:

- por creación de una entidad nueva, con la consiguiente extinción de las anteriores, ó
- por absorción de una o más cooperativas; en este caso, se extinguen todas las anteriores salvo la entidad absorbente.

Expresamente la ley reconoce la posibilidad de que las cooperativas en liquidación puedan participar en una fusión, siempre y cuando no haya comenzado el reembolso de las aportaciones al capital social.

Para lo no recogido en esta norma, especialmente todo lo que se refiere a los aspectos tributarios y contables, habrá que estar a lo regulado en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

### **I. El procedimiento de fusión.**

Actos previos: proyecto de fusión.

Los órganos de administración de cada una de las sociedades cooperativas que participen en la fusión deben redactar y suscribir un proyecto común de fusión, que tendrá la consideración de convenio previo.

El art. 60 del reglamento, señala cuál deba ser el contenido mínimo de este proyecto de fusión:

- a) La denominación, clase y el domicilio de las sociedades cooperativas que participen en la fusión y sus datos de inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas. En caso de constituirse una nueva cooperativa como resultado de la fusión, el proyecto deberá contener además la denominación, clase y domicilio de la nueva entidad.
- b) Sistema para fijar la cuantía que se reconoce a cada persona socia o persona inversora, en su caso, de las sociedades disueltas, como aportaciones al capital social de la sociedad cooperativa nueva o absorbente, computándose, cuando existan, las reservas voluntarias de carácter repartible.
- c) Los derechos y obligaciones que se reconozcan a las personas socias de las sociedades cooperativas extinguidas en la sociedad nueva o absorbente.
- d) La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades cooperativas que se fusionen habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad cooperativa nueva o absorbente.
- e) Los derechos que, en su caso, correspondan en la sociedad cooperativa nueva o absorbente a los titulares de títulos participativos, u otros asimilables, de las sociedades cooperativas que se extingan.
- f) Proyecto de estatutos de la nueva entidad y si se trata de una absorción, las modificaciones de los de la entidad absorbente. En la ley anterior este documento no formaba parte del proyecto de fusión, sino que se ponían a disposición de las personas socias en la Asamblea General.
- g) Información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de cada sociedad cooperativa que se transmita a la sociedad resultante. Igualmente es novedosa su introducción en el proyecto de fusión respecto a la ley anterior; la L 2/1999 exigía en su artículo 106.1.b) que “*cuentas anuales*”, “*informe de los interventores*” y “*balance de fusión*” se pusieran a disposición de las personas socias en la Asamblea General.
- h) Las posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, así como su eventual impacto de género en los órganos de administración y la incidencia, en su caso, en la

responsabilidad social empresarial. Esta documentación sí es totalmente novedosa, respondiendo al espíritu de la norma recogidos en su Exposición de Motivos.

Como hemos señalado, la LSCA exige la incorporación de tres nuevos documentos al proyecto de fusión, en relación con la legislación anterior: los señalados en los epígrafes f, g y h. La inclusión de esta documentación obedece a la voluntad legal de facilitar la comprensión socio-económica de la fusión proyectada.

Junto a los documentos obligatorios, el art. 74.3 LSCA introduce como novedad la posibilidad de que el proyecto de fusión fije un período de carencia en el que algunas de las entidades concurrentes podrán ser privadas del disfrute de ciertos servicios o relevadas del cumplimiento de determinadas obligaciones de carácter económico. Este periodo de carencia *tiene como finalidad facilitar la fusión de sociedades cooperativas, cuando existan importantes diferencias en la estructura económica de esas entidades, que aconsejen un diferente tratamiento en cuanto al disfrute de servicios o el cumplimiento de obligaciones, según la entidad de que se trate*<sup>13</sup>.

Así, el reglamento prevé que cuando la situación económica o financiera de cualquiera de las sociedades cooperativas, civiles o mercantiles que se fusionan sea netamente desigual y las circunstancias de la fusión así lo aconsejen, el proyecto de fusión podrá fijar un período de carencia en el que algunas de las entidades concurrentes podrán ser privadas del disfrute de ciertos servicios o relevadas del cumplimiento de determinadas obligaciones de carácter económico.

En caso de fijarse período de carencia, el proyecto de fusión establecerá la duración del mismo, que en ningún caso sobrepasará el plazo de diez años, prorrogables una sola vez por otros cinco.

#### Balance de fusión.

Como hemos visto, el proyecto de fusión debe contener “*la información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de cada sociedad cooperativa*”; debemos entender que se refiere al balance de fusión que regula el artículo 61 RLSCA.

El art. 61.1 RLSCA establece que se considerará balance de fusión al último balance aprobado, siempre que éste hubiera sido cerrado dentro de los ocho meses anteriores a

---

<sup>13</sup> Escuela de Economía Social “Estudio sobre los fundamentos...”, pg. 83.

la fecha del proyecto de fusión; entendemos que la fecha a la que se hace referencia debe ser la de la redacción y suscripción por parte del órgano de administración, en la medida en que el proyecto de fusión tiene que estar completo para su aprobación por la Asamblea General.

El reglamento, introduce algunas novedades que comentamos a continuación, justificadas *en la necesidad de que el Balance sea un reflejo fiel de la imagen patrimonial de cada una de las sociedades que se quieren fusionar. De ahí que si el balance anual no está aprobado dentro de los ocho meses al proyecto de fusión deba elaborarse un balance específico*<sup>14</sup>. Las novedades introducidas son:

1º. Si el balance anual se hubiera cerrado ocho meses antes de la fecha del proyecto de fusión, será preciso elaborar un nuevo balance cerrado con posterioridad al primer día del tercer mes precedente a la fecha del proyecto de fusión, siguiendo los mismos métodos y criterios de presentación del último balance anual.

2º. Tanto en el caso de balance anual como en el de balance específico, podrán modificarse las valoraciones contenidas en el último balance en atención a las modificaciones importantes del valor razonable que no aparezcan en los asientos contables.

El balance de fusión puede ser impugnado, de conformidad con el régimen general de impugnación de los acuerdos sociales (art. 35 LSCA). Ahora bien, la impugnación del balance no podrá suspender por sí sola la ejecución de la fusión.

Si entre la fecha de redacción del proyecto de fusión y de la celebración de la Asamblea que haya de aprobarla, se produjeran modificaciones sustanciales del activo o del pasivo acaecidas en cualquiera de las sociedades cooperativas que se fusionan, habrán de comunicarse a la Asamblea de todas las sociedades cooperativas que se fusionan (art. 62.2 RLSCA). A tal efecto, el órgano de administración de la sociedad cooperativa en que se hubieran producido las modificaciones deberá ponerlas en conocimiento de los órganos de administración de las restantes sociedades para que puedan informar a sus respectivas Asambleas.

Acuerdo de fusión.

---

<sup>14</sup> Escuela de Economía Social “Estudio sobre los fundamentos...”, pg. 84.



El proyecto común de fusión deberá ser aprobado por la Asamblea General de cada una de las cooperativas que participen en la fusión dentro de los doce meses desde la fecha de suscripción del proyecto por sus correspondientes órganos de administración.

De no aprobarse por todas las Asambleas en ese plazo, el proyecto de fusión quedará sin efecto (60.4 RLSCA) y, consecuentemente, deberá redactarse y suscribirse uno nuevo por parte de cada uno de los órganos de administración.

La Asamblea General de cada entidad cooperativa participante en la fusión, deberá aprobar, sin modificaciones y de forma íntegra, el proyecto de fusión previamente conveniado por sus respectivos órganos de administración.

El proyecto de fusión se pondrá a disposición de cada persona socia, en la forma dispuesta en el art. 29.4 LSCA, relativo a la convocatoria de la Asamblea General, e irá acompañado de la siguiente documentación:

- a) Un informe del órgano de administración sobre la conveniencia y efectos de la fusión proyectada.
- b) Las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participen en la fusión, junto con los informes del órgano de intervención, si existiese este órgano y, en su caso, de las personas auditoras, sobre la situación económica y financiera de aquellas, y la previsible de la sociedad cooperativa resultante; además, se acompañará el balance de fusión previsto en el art. 61.1 RLSCA.
- c) Un proyecto de estatutos de la nueva sociedad cooperativa o de las modificaciones estatutarias que hayan que introducirse en la sociedad absorbente.
- d) Los datos identificativos de los miembros del órgano de administración de las sociedades cooperativas disueltas y de los miembros propuestos para el órgano de administración de la sociedad resultante.

Durante la Asamblea General se informará de las posibles modificaciones sustanciales del activo o del pasivo acaecido a alguna otra de las cooperativas participantes entre la redacción del proyecto de fusión y la Asamblea.

Fase de pendencia: del acuerdo a la formalización de la fusión.

Cada una de las sociedades cooperativas queda obligada a continuar el procedimiento de fusión desde el momento en que el proyecto haya sido aprobado por la Asamblea General de todas ellas.

Una vez aprobado el proyecto de fusión por parte de cada una de las Asambleas Generales de las cooperativas participantes en el proceso los órganos de administración de las cooperativas participantes en la fusión se abstendrán de realizar cualquier clase de actos o de concluir cualquier contrato que pudiera comprometer la aprobación del proyecto o modificar sustancialmente la proporción de la participación de los socios y socias de las sociedades cooperativas extinguidas en la nueva o absorbente (art. 60.3 RLSCA).

Publicidad del acuerdo de fusión.

En la legislación anterior el acuerdo de fusión debía publicarse en BOJA y en un periódico de gran circulación. El nuevo reglamento recoge dos posibilidades de publicación más sencillas y que generan ahorro de costes y de tiempo. Así, de conformidad con el art. 62.3 RLSCA, el acuerdo de fusión de cada una de las cooperativas podrá hacerse público:

1. Mediante su publicación en la sede electrónica de la Consejería competente en materia de cooperativas , de acuerdo con lo previsto en el art. 75.5 LSCA;
2. Notificándose individualmente a las personas socias y acreedoras por escrito, a través de un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad cooperativa y en defecto, en sus domicilios legales, respectivamente.

Las notificaciones personales a las personas socias y acreedoras, debe ser individual, aunque varias de ellas tengan el mismo domicilio. La comunicación puede realizarse por cualquier medio escrito; ahora bien, al exigir la ley la seguridad de la recepción por todas las personas socias y acreedoras, es aconsejable la utilización de medios que permitan probar y dejar constancia cierta de la fecha en que se recibe la comunicación y su contenido. Así, junto a los medios más seguros como el burofax o el conducto notarial, podría procederse a la entrega personal del documento con copia del mismo en la que conste el acuse de recibo del original, fecha y firma.

Derecho de oposición.

El art. 75.5 LSCA exige salvaguardar los derechos de los acreedores de cualquiera de las cooperativas que se fusionan. Así, el art. 62.5 RLSCA regula el derecho de las personas acreedoras de cada una de las sociedades cooperativas que se fusionan cuyos créditos hayan nacido antes de la fecha de publicación del proyecto de fusión y no se encuentren adecuadamente garantizados, a oponerse a la fusión dentro del plazo de un mes desde el acuerdo de fusión aprobado por cada Asamblea.

En los casos en que las personas acreedoras ejerciten su derecho a oponerse a la fusión, ésta no podrá llevarse a efecto hasta que la sociedad cooperativa satisfaga por entero los créditos pendientes, presente garantía suficiente para la satisfacción de los derechos de la persona acreedora o, en otro caso, hasta que les notifique la prestación de fianza solidaria a favor de la sociedad cooperativa por una entidad de crédito debidamente habilitada para prestarla, por la cuantía del crédito de que fuera titular la persona acreedora, y hasta tanto no prescriba la acción para exigir su cumplimiento.

Las personas acreedoras no podrán oponerse al pago aunque se trate de créditos no vencidos.

Derecho de separación.

Igualmente el art. 75.5 garantiza el derecho de las personas socias a causar baja justificada tras el acuerdo de fusión, cuando estando disconformes presenten en tiempo y forma su solicitud de baja y hubieran hecho constar en acta su voto en contra del acuerdo de fusión, no hubieran asistido a la Asamblea o hubiera sido privado ilegítimamente del voto (circunstancias establecidas en el art. 23.3.b y c LSCA).

La solicitud de baja deberá realizarse por escrito dirigido al órgano de administración, asumiendo la sociedad cooperativa resultante de la fusión la obligación de liquidación y reembolso de sus aportaciones en la forma regulada en la LSCA y en su Reglamento para el caso de la baja justificada. (Art. 62.6 RLSCA).

Formalización del acuerdo de fusión.

La fusión no se podrá realizar antes de que transcurra un mes desde la fecha de la publicación o desde la última notificación individual realizada por escrito.

La formalización de la fusión podrá ser mediante acta única o mediante una única escritura pública. Se realizará mediante documento público en los supuestos en que así se acuerde por las sociedades cooperativas fusionadas y, obligatoriamente, en los previstos en el art. 5.2 LSCA (cuando las aportaciones al capital social consistan en bienes inmuebles, cuando se trate de bienes muebles afectados con cargas reales o cuando se trate de la constitución de una cooperativa de crédito o de seguros).

En ambos casos, acta única o escritura pública deberán contener:

- el acuerdo de fusión aprobado por las respectivas Asambleas Generales de las sociedades cooperativas que se fusionen, que habrá de contener el balance de fusión de las sociedades cooperativas que se extingan.
- deberá acompañarse una relación de las personas socias que hayan hecho uso del derecho de separación y otra de las personas acreedoras, que se hayan opuesto a la fusión y cuyos créditos hayan sido satisfechos o garantizados, o una declaración responsable sobre su inexistencia.
- Si la fusión se realizara mediante la creación de una nueva sociedad, el acta de fusión deberá contener, además, las menciones exigidas en el art. 6 LSCA, en cuanto resulten de aplicación, para la constitución de la misma.
- Si se realizara por absorción, contendrá las modificaciones estatutarias que se hubieran acordado por la sociedad absorbente con motivo de la fusión. El certificado del acta servirá para la cancelación de los asientos de las primeras y la inscripción de la nuevamente constituida o, en su caso, de las modificaciones estatutarias de la absorbente en el Registro de Cooperativas Andaluzas.

Inscripción Registral.

Es obligatorio inscribir el acuerdo de fusión en el Registro de Cooperativas, de conformidad con el art. 123.c) RLSCA.

## II. Efectos de la fusión.

La fusión produce los siguientes efectos:

a) la disolución de las cooperativas que participan en ella, pero sin que esta disolución conlleve la liquidación.

b) una transmisión del patrimonio de las cooperativas fusionadas a la nueva entidad o a la absorbente, que a su vez asume los derechos y obligaciones de las cooperativas disueltas e integra sus fondos sociales. Los fondos sociales, obligatorios o voluntarios, de las sociedades disueltas pasan a integrarse en los correspondientes de la sociedad cooperativa nueva o absorbente.

y c) la integración de las personas socias en la entidad resultante. Igualmente, la fusión conlleva la continuidad de los contratos de trabajo, de conformidad con la jurisprudencia del TS (entre otras, STS de 15-9-89)

### III. Fusión de cooperativas con otras sociedades.

La nueva ley recoge de forma novedosa la denominada “fusión especial” que permite a las cooperativas fusionarse con todo tipo de sociedades civiles o mercantiles, siempre que no exista una norma legal que lo impida. Esta posibilidad no estaba recogida en la ley anterior; aunque sí está reconocida en la ley estatal (art.67 LSC).

Con carácter general, a estas fusiones les será de aplicación la normativa reguladora de la sociedad absorbente o que se constituya como consecuencia de la fusión.

Ahora bien, en cuanto a la adopción del acuerdo y las garantías de los derechos de las personas socias y acreedoras de las sociedades cooperativas participantes, se estará a lo dispuesto en el art. 62 RLSCA.

El último epígrafe del art. 76 LSCA y art. 63 RLSCA regulan las normas específicas para el supuesto en que la entidad resultante de la fusión no sea una cooperativa. Así:

1. No se podrá formalizar la fusión en tanto no hayan sido liquidadas las aportaciones al socio o socia que haya ejercitado el derecho de separación en las condiciones señaladas anteriormente (baja justificada por reunir los requisitos del art. 23.3 b y c LSCA). La liquidación de las aportaciones en este caso deberá tener lugar dentro del mes siguiente a la fecha en que ejercitó dicho derecho; sin perjuicio de lo previsto en el art. 48.2.d) RLSCA, relativo a la facultad de aplazamiento que le asiste al órgano de administración.

2. El destino de los fondos sociales será el previsto en el art. 78.2 LSCA para la transformación de sociedades cooperativas. Habrá de ponerse a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía el cincuenta por ciento del Fondo de Reserva Obligatorio o de cualquier otro fondo de carácter irrepartible y la totalidad del Fondo de Formación y Sostenibilidad. Si los estatutos hubieran establecido el carácter de irrepartible al Fondo de Reserva Obligatorio, éste se pondrá íntegramente a disposición de la Junta de Andalucía. Hasta que no se presente documento acreditativo de este ingreso, no se procederá a la cancelación o modificación de los asientos correspondientes en el Registro de Cooperativas.

3. El certificado del acta de fusión o, en su caso, la escritura pública que recoja dicho acuerdo, deberá presentarse en el Registro de Cooperativas Andaluzas para la cancelación de los asientos relativos a las entidades cooperativas fusionadas e irá acompañada de:

- El balance de situación de las cooperativas fusionadas cerrado el día anterior al del acuerdo de fusión, o bien el del último ejercicio si hubiesen transcurrido menos de seis meses desde el cierre del mismo y hubiese sido depositado en el domicilio social, a disposición de las personas socias desde el día de la convocatoria de la Asamblea General.
- Una relación de las personas socias que hayan hecho uso del derecho de separación junto con los justificantes acreditativos de haber abonado su liquidación y otra de las personas acreedoras, que se hayan opuesto a la fusión y cuyos créditos hayan sido satisfechos o garantizados, o una declaración responsable sobre su inexistencia, así como el balance final cerrado el día anterior al certificado del acta de la Asamblea General o, en su caso, al otorgamiento de la escritura.

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de la obligación de presentar el certificado del acta de la Asamblea General o la pertinente escritura pública, en su caso, en otros registros públicos, conforme a la normativa aplicable.

#### IV. Impugnación de la fusión.

La impugnación de la fusión se regirá por el régimen general de impugnación de acuerdos establecido en el art. 35 LSCA.

## **ARTÍCULO 76. ESCISIÓN.**

*1. La escisión de la sociedad cooperativa puede consistir en la disolución, sin liquidación, mediante la división de su patrimonio y del colectivo de socios o socias en dos o más partes. Cada una de estas se traspasará en bloque a sociedades cooperativas de nueva creación o será absorbida por otras ya existentes o se integrará con las partes escindidas de otras sociedades cooperativas en una de nueva creación. En estos dos últimos casos se denominará escisión-fusión.*

*También podrá consistir en la segregación de una o más partes del patrimonio y del colectivo de socios o socias de una sociedad cooperativa sin la disolución de esta, y el traspaso en bloque o en parte o partes segregadas a otras sociedades cooperativas de nueva constitución o ya existentes.*

*2. Solo podrá acordarse la escisión si las aportaciones al capital de la sociedad cooperativa que se escinde se encuentran íntegramente desembolsadas.*

*3. El proyecto de escisión que deberán suscribir los órganos de administración de las sociedades cooperativas participantes deberá contener una propuesta detallada de la parte del patrimonio, de las personas socias y del importe de los fondos sociales obligatorios que vayan a transferirse a las sociedades cooperativas resultantes o absorbentes. En el caso de estos últimos, dicho importe habrá de ser proporcional al patrimonio que se escinde.*

*4. En defecto de cumplimiento por una sociedad cooperativa beneficiaria de una obligación asumida por ella en virtud de la escisión, responderán solidariamente del cumplimiento de la misma las restantes sociedades cooperativas beneficiarias del activo neto atribuido en la escisión a cada una de ellas, y, si la sociedad cooperativa escindida continúa existiendo tras la escisión, será esta la responsable por la totalidad de la obligación.*

*5. Serán aplicables a las sociedades cooperativas participantes en la escisión las normas reguladoras de la fusión de la presente ley y su normativa de desarrollo, pudiendo los socios y socias, así como las personas acreedoras, ejercer los derechos en ellas reconocidos.*



## Comentario.

El art.76 LSCA regula otra de las modificaciones estructurales que pueden darse en la vida de la cooperativa. Esta norma no cuenta con desarrollo reglamentario en la medida en que, como se señala en su apartado 5, le son aplicables las normas reguladoras de la fusión de cooperativas.

La nueva ley mantiene los modelos de escisión y las reglas generales establecidas ya en la L 2/1999; sin embargo recoge dos novedades, que comentaremos más adelante: la primera novedad responde a la necesidad de asegurar la responsabilidad de las deudas de la cooperativa escindida; y la otra incluye una especificidad en relación al contenido del proyecto de escisión respecto al de fusión.

La escisión de una cooperativa representa el proceso inverso al de la fusión; en lugar de proceder a una concentración de fuerzas, se trata de separar o disgregar total o parcialmente el patrimonio de una o varias cooperativas, transmitiendo, en su conjunto y sin previa liquidación, las masas activas y pasivas resultantes, a otras entidades ya existentes o que se creen con esa finalidad.

La ley regula dos modalidades de escisión:

1. Escisión total con disolución de la cooperativa original: sin proceder a liquidar la entidad, se procede a su disolución, dividiéndose su patrimonio y el colectivo de socios o socias en dos o más partes. A su vez este tipo de escisión puede presentar dos modalidades:
  - a) La escisión en sentido propio o escisión simple: Cuando cada una de las partes se traspasa en bloque a sociedades cooperativas de nueva creación y
  - b) Las modalidades que la propia ley denomina escisión-fusión: cuando cada una de las partes es absorbida por otras ya existentes o se integra con las partes escindidas de otras sociedades cooperativas en una de nueva creación.
2. Segregación o escisión parcial: cuando la cooperativa original no se disuelve, sino que una o más partes de su patrimonio y del colectivo de socios o socia, se traspasa a otras sociedades cooperativas de nueva constitución o ya existentes.

El segundo epígrafe de este artículo establece una norma imperativa, ya recogida en la ley anterior y en la norma estatal: sólo podrá acordarse la escisión si las aportaciones al capital de la sociedad cooperativa que se escinde se encuentran íntegramente desembolsadas.

Como el resto de modificaciones estructurales de las cooperativas, para lo no regulado en la LSCA y su normativa de desarrollo, habrá que estar a lo regulado en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, especialmente en todo lo que se refiere a los aspectos tributarios y contables.

Para los aspectos del proceso de escisión no regulados en este artículo son aplicables a las cooperativas participantes en la escisión las normas reguladoras de la fusión recogidas tanto en la LSCA como en su reglamento; deberán seguirse las mismas fases del proceso y sus personas socias y acreedores podrán ejercer los mismos derechos reconocidos en los procesos de fusión.

Así, las cooperativas que vayan a participar en la escisión deberán realizar los siguientes pasos:

#### I.- Fase de preparación: proyecto de escisión y balance.

Los órganos de administración de las cooperativas participantes en la escisión deberán redactar un proyecto de escisión, al que habrá que aportar el balance de cuentas anuales en los mismos términos en para el supuesto de la fusión de cooperativas y proceder a convocatoria de la Asamblea General.

Como comentábamos al principio, una de las novedades de la presente norma se refiere al contenido del proyecto de escisión. Junto a los contenidos ya exigidos para el proyecto de fusión, el epígrafe 3 de este artículo determina que en el caso de la escisión, el proyecto deberá contener una propuesta detallada de la parte del patrimonio, de las personas socias y del importe de los fondos sociales que vayan a transferirse a las sociedades cooperativas resultantes o absorbentes. En el caso de estos últimos, dicho importe habrá de ser proporcional al patrimonio que se escinde.

#### II. Fase de decisión: acuerdo de escisión, formalización y publicidad.

Las Asambleas Generales de las cooperativas participantes en la escisión deberán aprobar por mayoría cualificada, de conformidad con el art. 33.2.e), en las mismas condiciones que para la fusión.

Para la publicidad del acuerdo de escisión rigen las mismas reglas que para la fusión; pudiéndose realizar o bien mediante publicación en la sede electrónica de la Consejería competente o mediante notificaciones individuales en los términos regulados reglamentariamente para la fusión.

### III.- Fase de pendencia: separación u oposición.

Desde el acuerdo de escisión, la ley otorga el plazo de protección a las personas socias que quieran ejercer su derecho a darse de baja en la cooperativa y de protección igualmente a las personas o entidades acreedoras en las mismas condiciones que en la fusión. Dicho plazo es de un mes a contar desde que su publicación en la sede electrónica de la Consejería competente o desde la última notificación.

Como en el resto de las modificaciones estructurales, las personas socias pueden separarse de la cooperativa, y tendrá esta baja el carácter de justificada, si reúne los requisitos del artículo 23.3. b) y c) LSCA.

Igualmente las personas acreedoras podrán ejercer su derecho a oponerse a la escisión en las mismas condiciones que para la fusión.

### IV.- Fase de ejecución y efectos de la escisión: responsabilidad.

Los requisitos para la formalización y eficacia de la escisión son los mismos que para la fusión, por lo que remitimos a los comentarios realizados al artículo anterior de la LSCA.

Los efectos directos son la disolución y extinción de la cooperativa en el caso de la escisión total; que no en el caso de la segregación, en donde la cooperativa seguirá existiendo.

Lo que se produce en ambos casos es la sucesión patrimonial respecto a la parte del patrimonio que se haya escindido. En este sentido, el epígrafe 4 del artículo 76 LSCA establece un supuesto específico: cuando una cooperativa beneficiaria no cumpla con una obligación asumida por ella en virtud del acuerdo de escisión.

En este caso, responderán del cumplimiento de la misma: en primer lugar, la cooperativa escindida si continuara existiendo, que será responsable por la totalidad de la obligación. En caso de que la sociedad escindida se hubiera disuelto, responderán de forma solidaria las restantes cooperativas beneficiarias del activo neto atribuido en la escisión a cada una de ellas.

La introducción de esta norma sobre responsabilidad viene a dar respuesta a los problemas planteados con la normativa anterior, ante la ausencia de regulación en materia de responsabilidad en los casos de sucesión por escisión. La nueva ley ha venido a asumir los principios establecidos en el art. 68.4 de la ley estatal.

Sin embargo, el art. 77.4 no establece plazo de prescripción de esta responsabilidad solidaria; cosa que sí regula el reglamento en relación a la responsabilidad de las obligaciones cedidas en caso de cesión global de activo y pasivo. Así, el art. 64.9 RLSCA recoge expresamente que la responsabilidad solidaria prescribirá a los cinco años. Debemos entender por analogía que este mismo plazo de prescripción deberá aplicarse a los supuestos de responsabilidad de obligaciones derivadas de la escisión.

## **ARTÍCULO 77. CESIÓN GLOBAL DEL ACTIVO Y DEL PASIVO.**

*1. La Asamblea General podrá acordar la cesión global del activo y del pasivo a una o varias personas socias, a otras sociedades cooperativas o a terceras personas, fijando, en todo caso, las condiciones de la cesión. Para ello, además de ajustarse a los requisitos establecidos en este artículo, deberán observarse los previstos para la modificación de estatutos en el art. 74.*

*2. La Asamblea General designará, por mayoría simple de sus votos, a un experto independiente de la sociedad para que, con carácter previo al acuerdo de cesión, emita un informe sobre la valoración del patrimonio que la entidad se propone ceder.*

*3. En la cesión global del activo y del pasivo, se aplicará a los fondos sociales el mismo tratamiento que el dispensado en el art. 78.2 para la transformación de sociedades cooperativas.*

*4. Reglamentariamente se regulará el procedimiento al que ha de someterse la cesión, garantizando, en todo caso, el derecho de las personas socias a causar baja justificada cuando concurran las circunstancias establecidas en el art. 23.3, letras b) y c).*

**Concordancia con el artículo 64 del Reglamento.**

## **ARTÍCULO 64. PROCEDIMIENTO DE TRANSMISIÓN O CESIÓN GLOBAL DEL ACTIVO Y DEL PASIVO.**

*1. El procedimiento de transmisión o cesión global del activo y del pasivo de la sociedad cooperativa se ajustará a lo previsto en el art. 77 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*2. El órgano de administración de la sociedad habrá de redactar y suscribir un proyecto de cesión global, que contendrá, al menos, las siguientes menciones:*

*a) La denominación, clase y el domicilio de la sociedad cooperativa así como sus datos de inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas y los datos de identificación del cesionario o cesionarios.*

*b) La fecha a partir de la cual la cesión tendrá efectos contables de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad.*

*c) La información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio, la designación y, en su caso, el reparto de los elementos del activo y del pasivo que han de transmitirse a cada cesionario.*

*d) La contraprestación que hayan de recibir la sociedad cooperativa o las personas socias. Cuando la contraprestación se atribuya a las personas socias, se especificará el criterio en que se funde el reparto.*

*e) Las posibles consecuencias de la cesión global sobre el empleo.*

*3. El acuerdo de transmisión o cesión global del activo y del pasivo será adoptado por la Asamblea General, publicándose en la sede electrónica de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, con expresión de la identidad del cesionario o cesionarios. No obstante, no será necesaria dicha publicación cuando el acuerdo se notifique individualmente por escrito a todas las personas socias y acreedoras, a través de un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la*

*documentación de la sociedad cooperativa y en los domicilios que hayan puesto en conocimiento de la sociedad o, en su defecto, en sus domicilios legales, respectivamente. En la publicación o notificación individual se hará constar el derecho de las personas acreedoras de la sociedad cooperativa cedente y de las personas acreedoras del cesionario o cesionarios a obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión así como se expresará su derecho a oponerse por escrito a la cesión en el plazo previsto en el siguiente apartado.*

*4. La cesión no se podrá realizar antes de que transcurra un mes desde la fecha de la publicación o desde la última notificación individual prevista en el anterior apartado.*

*5. Si durante el plazo establecido en el apartado anterior, alguna persona acreedora de la sociedad cooperativa cedente y/o del cesionario o cesionarios se opusiera por escrito a la cesión, ésta no podrá llevarse a efecto sin que se aseguren previamente, o se satisfagan por entero, los derechos de la persona acreedora disconforme, con idénticas condiciones y efectos a los previstos para el caso de fusión en el art. 62.5.*

*6. De conformidad con lo dispuesto en el art. 77.4 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, tendrán derecho a separación las personas socias disconformes, cuando concurren las circunstancias establecidas en las letras b) y c) del art. 23.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, mediante escrito dirigido al órgano de administración por el que se solicita la correspondiente baja, siendo el cesionario o cesionarios quienes asumirán la obligación de liquidación y reembolso de sus aportaciones en la forma regulada en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y en este Reglamento para el caso de baja justificada.*

*7. La eficacia de la cesión quedará supeditada a la inscripción del acuerdo en el Registro de Cooperativas Andaluzas, siendo de aplicación lo previsto en el art. 62 en cuanto a su formalización mediante acta de Asamblea General o mediante escritura pública.*

*8. La impugnación de la cesión global se regirá por el régimen general de impugnación de acuerdos establecido en el art. 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*9. De las obligaciones asumidas por un cesionario que resulten incumplidas responderán solidariamente los demás cesionarios, hasta el límite del activo neto atribuido a cada uno de ellos en la cesión; y, según los casos, las personas socias hasta el límite de lo que hubieran recibido como contraprestación por la cesión, o la propia sociedad que no se*

*hubiera extinguido, por la totalidad de la obligación. La responsabilidad solidaria prescribirá a los cinco años.*

## Comentarios.

El supuesto regulado en el artículo 77 LSCA supone una importante novedad, no sólo respecto a la normativa anterior, sino también en relación a la ley estatal, en la medida en que no recogían este supuesto de modificación estructural de la cooperativa denominado cesión global del activo y del pasivo. Por su parte, el resto de leyes autonómicas no observan un criterio único a este respecto.

Con la regulación de este supuesto, la nueva ley *persigue alternativas distintas a una posible disolución o simplemente el aumento del tamaño de la entidad cesionaria*<sup>15</sup>.

La cesión global del activo y del pasivo es una modificación estructural de la cooperativa mediante la cual una cooperativa (cedente) transmite en bloque todo su patrimonio *a una o varias personas socias, a otras sociedades cooperativas o a terceras personas* (cesionarias) a cambio de una contraprestación. Esta modalidad de modificación estructural es un instrumento jurídico que tiene una evidente función económica: de una forma rápida y sencilla permite sustituir todo el proceso de liquidación de la cooperativa por un acto único de enajenación de todo el patrimonio social antes de su reparto entre las personas socias.

El artículo 77 LSCA y su desarrollo reglamentario se limita a regular algunos de los aspectos del proceso de cesión; por lo que debemos entender que para lo no recogido en esta norma, especialmente todo lo que se refiere a los aspectos tributarios y contables, habrá que estar a lo regulado en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Así, no se recoge en la LSCA ni en su norma de desarrollo, pero entendemos que la cooperativa cedente deberá estar inscrita en el Registro de Cooperativas y que es posible la cesión por parte de una cooperativa en liquidación, siempre que no haya comenzado el reparto del patrimonio entre los socios.

En cuanto a quien pueda ser la cesionaria, la LSCA y su reglamento reconocen que la cesión global de activo y pasivo se puede efectuar a favor de una o varias personas

---

<sup>15</sup> Escuela de Economía Social “Estudio sobre los fundamentos...” pg 90.



socias de la cooperativa cedente o a terceras personas, pudiendo tratarse en uno y otro caso de personas físicas o jurídicas.

El carácter oneroso de la cesión global de activo y pasivo es reconocida en el Reglamento (art. 64.2.d): se trata de una transmisión del patrimonio a cambio de la cual la cooperativa cedente recibe de la o las cesionarias una contraprestación.

En principio, esta contraprestación puede consistir en dinero o cualquier otro tipo de bienes o derechos. La LSCA no establece ningún límite. Sin embargo, entendemos que es directamente aplicable la prohibición expresa recogida en el artículo 81.1 de la L 3/2009: la contraprestación no puede “consistir en acciones, participaciones o cuotas de socio del cesionario”. Tras esta prohibición se encuentra, a juicio de la doctrina (Alonso Ureba), la pretensión de separar o diferenciar expresamente la figura de la cesión global del activo y del pasivo, de la fusión, la escisión o incluso la segregación; impidiéndose que la cesión global pueda ser empleada para la reorganización o creación de un grupo mediante la participación de la sociedad cedente en el capital de la sociedad cesionaria.

Sobre el procedimiento para la cesión global del activo y del pasivo, el artículo 77.1 LSCA establece que deberá ajustarse a los requisitos exigidos por este artículo, así como a los previstos para la modificación de estatutos en el art. 74 LSCA, a cuyos comentarios remitimos.

El procedimiento para la cesión global de activo y pasivo.

I. Actos previos: informe y proyecto de cesión global.

Con carácter previo, la Asamblea General de la cooperativa cedente designará, por mayoría simple de sus votos, a un experto independiente de la sociedad para que emita un informe sobre la valoración del patrimonio que la entidad se propone a ceder.

El órgano de administración de la cooperativa cedente redactará y suscribirá un proyecto de cesión global que debe contener como mínimo:

a) La denominación, clase y el domicilio de la sociedad cooperativa así como sus datos de inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas y los datos de identificación del cesionario o cesionarios.

b) La fecha a partir de la cual la cesión tendrá efectos contables de acuerdo con lo

dispuesto en el Plan General de Contabilidad.

c) La información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio, la designación y, en su caso, el reparto de los elementos del activo y del pasivo que han de transmitirse a cada cesionario.

d) La contraprestación que hayan de recibir la sociedad cooperativa o las personas socias. Según el RLSCA, cuando la contraprestación se atribuya a las personas socias, se deberá especificar el criterio en que se funde el reparto. Sin embargo, la Ley 3/1999, establece como norma general para todas las sociedades mercantiles que, en relación a la contraprestación a percibir por cada persona socia en caso de cesión, deben respetarse las normas aplicables a la cuota de liquidación de cada tipo social (art. 81 L 3/1999).

e) Las posibles consecuencias de la cesión global sobre el empleo.

La convocatoria para la Asamblea General deberá contener expresamente este asunto como uno de los puntos del día. Desde el día de la publicación de la convocatoria toda la documentación referida anteriormente deberá estar a disposición de las personas socias en el domicilio social y, especialmente a disposición de las personas que ostenten la representación de los y las trabajadoras.

## II. Acuerdo de cesión global y publicidad.

El acuerdo de cesión deberá ser aprobado por la Asamblea General por mayoría cualificada, de conformidad con el art. 33.2.d) LSCA.

El acuerdo adoptado deberá publicarse en la sede electrónica de la Consejería competente, con expresión de la identidad de las persona cesionaria o cesionarias.

Igual que sucede con el resto de las modificaciones estructurales reguladas en la LSCA, la publicidad puede realizarse, sin necesidad de publicarse en la sede electrónica de la Consejería, a través de notificación individual por escrito a todas las personas socias y acreedoras; mediante un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad cooperativa y en los domicilios que hayan puesto en conocimiento de la sociedad o, en su defecto, en sus domicilios legales, respectivamente.

Las notificaciones personales a las personas socias y acreedoras, debe ser individual, aunque varias de ellas tengan el mismo domicilio. La comunicación puede realizarse por cualquier medio escrito; ahora bien, al exigir la ley la seguridad de la recepción por todas las personas socias y acreedoras, es aconsejable la utilización de medios que permitan probar y dejar constancia cierta de la fecha en que se recibe la comunicación y su contenido. Así, junto a los medios más seguros como el burofax o el conducto notarial, podría procederse a la entrega personal del documento con copia del mismo en la que conste el acuse de recibo del original, fecha y firma.

En la publicación o notificación individual se hará constar el derecho de las personas acreedoras de la sociedad cooperativa cedente y de las personas acreedoras del cesionario o cesionarios a obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión. Igualmente debe contener de forma expresa su derecho a oponerse por escrito a la cesión en el plazo previsto en el siguiente apartado.

### III. Derechos de separación y oposición.

Al igual que en el resto de las modificaciones estructurales de las cooperativas la ley regula expresamente los derechos de la persona socia a causar baja justificada, así como el derecho de las personas acreedoras a oponerse a la cesión.

Ambos derechos podrán ser ejercidos en el plazo de un mes desde la publicación del acuerdo o desde la última notificación individual.

Las personas socias disconformes con el acuerdo tienen derecho a solicitar la baja, que tendrá el carácter de justificada cuando concurren las circunstancias establecidas en las letras b) y c) del art. 23.3 LSCA; es decir: haberse opuesto a la celebración de la Asamblea o haber hecho constar su voto en contra del acuerdo, no haber asistido a la Asamblea General o haber sido privado ilegítimamente del voto. Para ello deberán solicitar por escrito al órgano de administración su baja en el plazo de un mes. Es la cesionaria o cesionarias quienes asumen la obligación de liquidar y reembolsar sus aportaciones, en los términos que la ley determina para el supuesto de baja justificada.

La comunicación del derecho de oposición a las personas acreedoras, debe hacerse tanto a las de la entidad cedente como de la cesionaria. Sin embargo, la ley no otorga el mismo derecho de oposición a las personas que tengan alguna obligación para con la

cooperativa cedente o cesionaria; de existir, éstas no podrán oponerse a la cesión global de activo y pasivo.

El derecho de oposición lo ostentan las personas acreedoras cuyos créditos cumplan los siguientes requisitos: a) haber nacido como mínimo antes de la publicación en la sede o de la comunicación individual; b) no estén vencidos y c) no estén suficientemente garantizados.

En el caso de que alguna persona acreedora de la sociedad cooperativa cedente y/o del cesionario o cesionarios se opusiera por escrito dentro del plazo del mes otorgado a la cesión, ésta no podrá llevarse a efecto, es decir, no se puede ejecutar, hasta que por la entidad deudora:

- Se satisfaga por entero la deuda pendiente.
- Se aseguren previamente, mediante la prestación de las garantías oportunas a satisfacción de la persona acreedora.
- Se notifique a la acreedora la prestación de fianza solidaria a favor de la cooperativa deudora por una entidad de crédito debidamente habilitada para prestarla.

En estos dos últimos supuestos, la garantía debe prestarse por la cuantía total del crédito y con la duración de la acción de prescripción para exigir su cumplimiento.

Si una persona acreedora hubiera ejercitado su derecho de oposición, no podrá negarse al pago o satisfacción de la deuda, aunque se trate de créditos no vencidos.

En el supuesto que una persona acreedora se hubiera opuesto en tiempo y forma y aún así, a pesar de la expresa prohibición legal, se hubiera procedido a llevar a cabo la cesión sin satisfacer la deuda o sin garantizarla adecuadamente, la persona acreedora disconforme podrá solicitar al Registro de Cooperativas a los efectos del art. 130.3 RLSCA (es decir, que se inscriba nota marginal de la ausencia de legalidad del acto, se requiera su subsanación y se deniegue la inscripción). Caso de haberse producido la notificación al Registro, pero aún así se hubiera procedido a la inscripción de la cesión, la persona acreedora podrá interponer la correspondiente demanda ante el juzgado de lo mercantil contra la sociedad beneficiaria de la cesión, solicitando se preste la obligatoria garantía de pago de la deuda.

#### IV. Formalización de la cesión global.

La formalización de la cesión no se podrá realizar hasta que haya transcurrido un mes desde la publicación o desde la última notificación individual.

Para la formalización del acto, el reglamento remite a lo regulado para el supuesto de fusión. Así, al igual que el resto de las modificaciones estructurales, podrá formalizarse mediante acta única o mediante escritura notarial; si bien, en el supuesto en que exista transmisión de bienes inmuebles, es obligatoria su formalización mediante escritura pública, por así venir exigido expresamente por el art. 119.1 LSCA; igualmente debe revestir esta fórmula cuando se trate de bienes muebles afectados con cargas reales (art. 5.2 LSCA en relación con el art. 62.8 RLSCA).

La regulación recogida en la L 14/2011 difiere de las regla general establecida en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, que condiciona la eficacia de la cesión global a su documentación en escritura pública (art. 89 L 3/2009).

#### V. Inscripción de la transformación en el Registro de Cooperativas.

Tanto el acta única como la escritura pública deberán recoger, además del acuerdo de cesión global aprobado por la Asamblea General de la cooperativa cedente, todos los datos y documentos necesarios para su inscripción, y, especialmente, deberá acompañarse una relación de las personas socias que hayan hecho uso del derecho de separación y otra de las personas acreedoras, que se hayan opuesto a la fusión y cuyos créditos hayan sido satisfechos o garantizados, o una declaración responsable sobre su inexistencia.

Con carácter previo a la obligatoria inscripción en el Registro de Cooperativas, el art. 77.3 LSCA establece que se deberá dar a los fondos sociales el destino regulado en el art. 78.2 LSCA; es decir: habrá de ponerse a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía el cincuenta por ciento del Fondo de Reserva Obligatorio o de cualquier otro fondo de carácter irrepartible y la totalidad del Fondo de Formación y Sostenibilidad. Si los estatutos hubieran establecido el carácter de irrepartible al Fondo de Reserva Obligatorio, éste se pondrá íntegramente a disposición de la Junta de Andalucía. Será necesario acreditar el ingreso correspondiente para poder proceder a la inscripción.

El reglamento condiciona la eficacia de la cesión a la inscripción del acuerdo en el Registro de Cooperativas; así, el art. 119 RLSCA confiere eficacia constitutiva a esta inscripción.

El art. 123.c) RLSCA exige la inscripción de la transformación en el Registro de Cooperativas y el procedimiento específico de inscripción de esta modificación estructural se regula en los art. 141 y 142 RLSCA, a cuyos comentarios remitimos.

## VI. Efectos de la cesión global.

Los efectos de la cesión global de activo y pasivo pueden resumirse en:

- a) Sucesión universal o transmisión en bloque del patrimonio social. En un solo acto jurídico se traspasa a la persona o personas cesionarias: las relaciones reales, las obligaciones, los créditos y responsabilidades de la cooperativa cedente, sin necesidad de un previo consentimiento de las personas acreedoras, siempre que se hayan respetado su derecho de oposición.
- b) La disolución de la cooperativa cedente: en principio, la cesión global no tiene porqué llevar aparejada la extinción de la cooperativa cedente. De hecho, el art. 79 LSCA no lo recoge como un supuesto de disolución. Así, la cooperativa, con la contraprestación obtenida por la cesión, podría decidir su continuidad. Ahora bien, sí se dará la extinción cuando la contraprestación es recibida total y directamente por las personas socias (con lo que el patrimonio contable de la cooperativa quedaría por debajo del capital social, art. 79.1.f) LSCA) y cuando las personas socias decidan abrir el proceso de disolución de la cooperativa.
- c) El destino de los fondos sociales: se estará a lo regulado en el art. 78.2 LSCA para la transformación de la cooperativa, a cuyos comentarios nos remitimos.
- d) La responsabilidad por las obligaciones incumplidas: la ley establece la responsabilidad solidaria cuando la cesionaria o cesionarias incumplan obligaciones asumidas por la cesión. Esta acción de responsabilidad tiene un plazo de prescripción de cinco años. Responden solidariamente de las obligaciones incumplidas, es decir, se puede exigir el cumplimiento de la obligación a:

- los demás cesionarios, hasta el límite del activo neto atribuido a cada uno de ellos en la cesión
- y, según los casos, las personas socias hasta el límite de lo que hubieran percibido como contraprestación por la cesión
- o la propia sociedad cedente que no se haya extinguido.

## VII. Impugnación.

La impugnación de la cesión global del activo y el pasivo se rige por el régimen general de impugnación de acuerdos regulado en el art. 35 LSCA.

## **ARTÍCULO 78. TRANSFORMACIÓN.**

*1. Las sociedades cooperativas podrán transformarse en sociedades civiles, mercantiles, o en cualquier otra entidad de economía social, de acuerdo con lo previsto en la normativa estatal o europea aplicable y a los requisitos establecidos en el presente artículo.*

*2. El cincuenta por ciento del Fondo de Reserva Obligatorio o de cualquier otro fondo de carácter irrepartible, así como la integridad del Fondo de Formación y Sostenibilidad, se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, que lo destinará, exclusivamente, a la promoción de las sociedades cooperativas andaluzas, a menos que se haya establecido estatutariamente la irrepartibilidad del Fondo de Reserva Obligatorio, en cuyo caso, el mismo se pondrá a disposición de la Administración andaluza en su integridad.*

*3. El procedimiento para llevar a cabo la transformación será objeto de regulación reglamentaria, garantizando, en todo caso, el derecho de las personas socias a causar baja justificada, cuando concurran las circunstancias establecidas en el art. 23.3, letras b) y c).*

*La transformación deberá inscribirse, en todo caso, en la unidad correspondiente del Registro de Cooperativas Andaluzas.*



*4. Lo dispuesto en los apartados precedentes operará sin perjuicio de lo que resulte de la naturaleza y régimen de sociedad transformada resultante, de conformidad con la legislación aplicable.*

*5. Las sociedades y agrupaciones de carácter no cooperativo podrán transformarse en sociedades cooperativas, de conformidad con las disposiciones vigentes, mediante la pertinente inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluza en la forma que reglamentariamente se establezca.*

#### **Concordancia con los artículos 65 y 66 del Reglamento.**

### **ARTÍCULO 65. PROCEDIMIENTO DE TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS.**

*1. Las sociedades cooperativas podrán transformarse en sociedades civiles, mercantiles o en cualquier otra entidad de economía social, de acuerdo con lo previsto en la normativa estatal o europea aplicable y conforme a los requisitos establecidos tanto en el art. 78 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre como en el presente artículo.*

*2. Al convocar la Asamblea en que haya de deliberarse sobre el acuerdo de transformación, el órgano de administración deberá poner en el domicilio social, a disposición de las personas socias, que podrán pedir su entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos, los siguientes documentos:*

*a) El informe del órgano de administración que explique y justifique los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, e indique asimismo las consecuencias que tendrá para las personas socias, así como su eventual impacto de género en los órganos de administración e incidencia, en su caso, en la responsabilidad social de la empresa.*

*b) El balance de la sociedad cooperativa que se transforma, que deberá estar cerrado dentro de los ocho meses anteriores a la fecha prevista para la Asamblea, junto con un informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas que hayan podido tener lugar con posterioridad al mismo.*

*c) El informe de la persona auditora de cuentas sobre el balance presentado, cuando la sociedad cooperativa que se transforme esté obligada a someter sus cuentas a*

auditoría.

*d) El proyecto de escritura social o estatutos de la sociedad que resulte de la transformación, así como, en su caso, otros pactos sociales que vayan a constar en documento público.*

*3. El órgano de administración está obligado a informar a la Asamblea General a la que se someta la aprobación de la transformación sobre cualquier modificación importante del activo o del pasivo acaecida entre la fecha del informe justificativo de la transformación y del balance puestos a disposición de las personas socias y la fecha de la celebración de la Asamblea.*

*4. No será precisa la puesta a disposición o envío de la información a que se refiere el apartado 2 cuando el acuerdo de transformación se adopte en Asamblea General de carácter universal y por unanimidad.*

*5. Una vez convocada la Asamblea de la sociedad cooperativa, el procedimiento de transformación será el siguiente:*

*a) Acuerdo expreso de la Asamblea General adoptado conforme a lo establecido para las modificaciones estatutarias.*

*b) Publicación del acuerdo de la Asamblea General en la sede electrónica de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas. No obstante, no será necesaria dicha publicación cuando el acuerdo se notifique individualmente por escrito a todas las personas socias y acreedoras, a través de un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad cooperativa y en los domicilios que hayan puesto en conocimiento de la sociedad o, en su defecto, en sus domicilios legales, respectivamente.*

*La transformación no se podrá realizar antes de que transcurra un mes desde la fecha de la publicación o desde la última notificación individual practicada.*

*c) Elevación del acuerdo a escritura pública cuando sea obligatoria de acuerdo con la normativa aplicable a la nueva entidad transformada, que contendrá todas las menciones exigidas legalmente para la constitución de la nueva entidad respetando lo dispuesto en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y en el presente Reglamento*

*d) El certificado del acta de la Asamblea General o, en su caso, la escritura pública, deberá presentarse en el Registro de Cooperativas Andalcuzas para inscribir la transformación correspondiente y deberá ir acompañada del balance de situación cerrado el día anterior al del acuerdo de transformación, o bien el del último ejercicio si hubiesen transcurrido menos de seis meses desde el cierre del mismo y hubiese sido depositado en el domicilio social, a disposición de las personas socias desde el día de la convocatoria de la Asamblea General.*

*Igualmente, deberá acompañarse una relación de las personas socias que hayan hecho uso del derecho de separación, o una declaración responsable sobre su inexistencia, y el balance final cerrado el día anterior al certificado del acta de la Asamblea General o, en su caso, al otorgamiento de la escritura.*

*Lo dispuesto en esta letra se entenderá sin perjuicio de la obligación de presentar el certificado del acta de la Asamblea General o la pertinente escritura pública, en su caso, en otros registros públicos, conforme a la normativa aplicable.*

*6. De conformidad con lo establecido en el art. 78.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las personas socias disconformes tendrán derecho a separación, cuando concurren las circunstancias establecidas en las letras b) y c) del art. 23.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, mediante escrito dirigido al órgano de administración por el que se solicita la correspondiente baja, que tendrá la consideración de baja justificada.*

*7. La impugnación de la transformación se regirá por el régimen general de impugnación de acuerdos establecido en el art. 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*8. Las personas socias que, en virtud de la transformación, asuman responsabilidad personal e ilimitada por las deudas sociales responderán en la misma forma de las deudas anteriores a la transformación.*

## **ARTÍCULO 66. PROCEDIMIENTO DE TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDADES COOPERATIVAS.**

*1. Las sociedades y agrupaciones de carácter no cooperativo podrán transformarse en sociedades cooperativas, de conformidad con las disposiciones vigentes.*

*2. La transformación en sociedades cooperativas se inscribirá en el Registro de*

*Cooperativas Andaluzas mediante escritura pública cuando sea obligatoria de acuerdo con la normativa aplicable a la entidad transformada o, en su caso, mediante certificado del órgano social competente para la transformación, que contendrá en ambos casos los requisitos previstos en este Reglamento para la constitución de una sociedad cooperativa.*

*3. A la escritura o, en su caso, al certificado del acuerdo del órgano competente para la transformación se acompañará el balance de situación cerrado el día anterior al acuerdo de transformación.*

*4. La transformación en sociedad cooperativa no libera a los socios y socias de su responsabilidad personal por las deudas contraídas con anterioridad al acuerdo, salvo consentimiento expreso a la transformación por las personas acreedoras.*

## **Comentarios.**

La transformación es una forma de modificación estructural de la entidad por la cual la cooperativa deja de ser cooperativa, pasando a conformarse en cualquier otro tipo de entidad civil o mercantil, sin producirse la extinción y manteniendo su personalidad jurídica. La ley anterior hablaba de la posibilidad de transformarse en entidades civiles o mercantiles reconocidas por la legislación estatal. La nueva ley recoge otras posibles formas, concretamente “*cualquier otra entidad de economía social*” y reconoce la aplicabilidad de la legislación europea. Así, junto a la normativa regulada en la LSCA y su reglamento, para las transformaciones en las que esté inmersa una cooperativa, con carácter general, deberá estarse al [Rgto CE/1435/2003](#) y las normas que lo desarrollan.

- Si se tratara de la transformación de cooperativa a cooperativa europea o viceversa, la ley aplicable será la Ley 3/2011 por la que se regula la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España.
- Si se trata de la transformación de sociedades y agrupaciones de carácter no cooperativo en cooperativas, se aplicarán las normas específicas de la entidad de que se trate con las particularidades reseñadas en el art. 66 RLSCA.

### **I. El procedimiento de transformación.**

## **Actos previos.**

En relación a los actos previos al acuerdo de Asamblea, la ley anterior contenía una obligación que la nueva ley ha eliminado: se trataba de obtener obligatoriamente con carácter previo a la transformación, la autorización del Consejo Andaluz de Cooperación.

El derecho de las personas socias a decidir con suficiente información y conocimiento de todo lo referente a la transformación proyectada, implica la obligación establecida al órgano de administración de poner a su disposición en el domicilio social de los documentos que se regulan en el art. 65.2 RLSCA y que son los que sirven de presupuesto a la operación. Las personas socias podrán pedir su entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos.

En relación a esta documentación, la ley anterior remitía a lo regulado para el supuesto de modificación de estatutos. La nueva normativa, recoge reglamentariamente los documentos que deba ponerse a disposición de las personas socias; ahora bien, junto a esta documentación requerida, habrá que estar al cumplimiento de las exigencias normativas que específicamente se determinen para el tipo de entidad en la que pretende transformarse. Concretamente, el reglamento exige:

a) El informe del órgano de administración que explique y justifique los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, e indique asimismo las siguientes indicaciones:

- consecuencias que la transformación tendrá para las personas socias,
- su eventual impacto de género en los órganos de administración,
- en su caso, incidencia de la transformación en la responsabilidad social de la empresa.

b) El balance de la sociedad cooperativa que se transforma, que deberá estar cerrado dentro de los ocho meses anteriores a la fecha prevista para la Asamblea. La exigencia de aportar el balance de cuentas tiene una doble finalidad: 1. informar sobre la situación patrimonial de la cooperativa en el momento del acuerdo de transformación y, 2. asegurar que el patrimonio cubre el capital social exigido por la nueva normativa aplicable a la sociedad resultante de la transformación. Eventualmente, deberá acompañarse al balance:

- un informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas que hayan podido tener

lugar con posterioridad al mismo;

- el informe de la persona auditora de cuentas sobre el balance presentado, cuando la sociedad cooperativa que se transforme esté obligada a someter sus cuentas a auditoría.

c) El proyecto de escritura social o estatutos de la sociedad que resulte de la transformación, así como, en su caso, otros pactos sociales que vayan a constar en documento público. Evidentemente, el contenido de dicho proyecto de estatutos deberá adecuarse a las exigencias normativas aplicables al tipo de entidad que se adoptará como consecuencia de la transformación.

Ahora bien, el epígrafe 4 del artículo 65 RLSCA, elimina la obligación de esta puesta a disposición o envío de toda la información referida anteriormente, cuando el acuerdo de transformación se adopte en Asamblea General de carácter universal y por unanimidad. La eliminación de esta información previa sólo se reconoce para el supuesto de transformación, rompiendo con el criterio general establecido por la ley para el resto de las modificaciones estructurales de las cooperativas.

Acuerdo de transformación.

La competencia para acordar la transformación es exclusiva de la Asamblea General, que deberá adoptarlo por mayoría cualificada, de conformidad con el art. 33.d) LSCA.

En la Asamblea General, el órgano de administración está obligado a informar sobre cualquier modificación importante del activo o del pasivo acaecida entre la fecha del informe justificativo de la transformación y del balance puestos a disposición de las personas socias y la fecha de la celebración de la Asamblea.

El acuerdo deberá ser adoptado conforme a lo establecido para las modificaciones estatutarias, a cuyos comentarios remitimos.

Publicidad del acuerdo de transformación.

El acuerdo adoptado deberá publicarse en la sede electrónica de la Consejería competente, con expresión de la identidad de las persona cesionaria o cesionarias.

Igual que sucede con el resto de las modificaciones estructurales reguladas en la LSCA, la publicidad puede realizarse, sin necesidad de publicarse en la sede electrónica de la

Consejería, a través de notificación individual por escrito a todas las personas socias y acreedoras; mediante un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad cooperativa y en los domicilios que hayan puesto en conocimiento de la sociedad o, en su defecto, en sus domicilios legales, respectivamente.

La notificación individual debe informar del derecho de las personas socias a separarse de la cooperativa en los términos que comentamos más adelante.

Las notificaciones personales a las personas socias y acreedoras, debe ser individual, aunque varias de ellas tengan el mismo domicilio. La comunicación puede realizarse por cualquier medio escrito; ahora bien, al exigir la ley la seguridad de la recepción por todas las personas socias y acreedoras, es aconsejable la utilización de medios que permitan probar y dejar constancia cierta de la fecha en que se recibe la comunicación y su contenido. Así, junto a los medios más seguros como el burofax o el conducto notarial, podría procederse a la entrega personal del documento con copia del mismo en la que conste el acuse de recibo del original, fecha y firma.

Ahora bien, en relación a la publicidad, habrá de estarse a lo regulado expresamente para el tipo de entidad en que la cooperativa pretenda transformarse.

Derecho de separación.

Al igual que en el resto de las modificaciones estructurales de las cooperativas la ley regula expresamente el derechos de la persona socia a separarse de la cooperativa tras el acuerdo de transformación.

Las personas socias disconformes con el acuerdo tienen derecho a solicitar la baja, que tendrá el carácter de justificada cuando concurren las circunstancias establecidas en las letras b) y c) del art. 23.3 LSCA; es decir: haberse opuesto a la celebración de la Asamblea o haber hecho constar su voto en contra del acuerdo, no haber asistido a la Asamblea General o haber sido privado ilegítimamente del voto.

Para ello deberán solicitar por escrito al órgano de administración su baja. Ni la ley ni el reglamento establecen plazo para la presentación de la solicitud. La ley anterior otorgaba un plazo de 40 días desde la publicidad del acuerdo. Sin embargo, entendemos que será de aplicación el mismo plazo establecido en la LSCA para el resto de las modificaciones



estructurales: un mes desde la publicación del acuerdo o desde la última notificación individual. Es la cesionaria o cesionarias quienes asumen la obligación de liquidar y reembolsar sus aportaciones, en los términos que la ley determina para el supuesto de baja justificada.

Formalización de la transformación.

La transformación de la cooperativa no se podrá realizar hasta transcurrido un mes desde la fecha de publicación del acuerdo o desde la última notificación individual practicada. Sin embargo ni la ley ni el reglamento recogen la necesidad de haberse liquidado las aportaciones de las personas socias disconformes que hayan hecho uso de su derecho a darse de baja, con carácter previo a la formalización de la transformación.

El acuerdo de transformación deberá elevarse a escritura pública cuando sea obligatoria de acuerdo con la normativa aplicable a la nueva entidad transformada, que contendrá todas las menciones exigidas legalmente para la constitución de la nueva entidad, respetando lo dispuesto en la LSCA y su normativa de desarrollo. En este sentido, es obligatoria la elevación a escritura pública del acuerdo en el supuesto en que exista transmisión de bienes inmuebles, es obligatoria su formalización mediante escritura pública, por así venir exigido expresamente por el art. 119.1 LSCA; igualmente, entendemos que debe revestir esta fórmula cuando se trate de bienes muebles afectados con cargas reales (art. 5.2 LSCA).

Es obligatoria la inscripción de la transformación en el Registro de Cooperativas, en virtud del segundo párrafo del art. 78.3 LSCA. Para ello habrá de estarse a lo regulado en los art. 141 y 142 del reglamento. Igualmente será obligatorio inscribir la nueva entidad en el Registro obligatorio para el tipo de entidad en que se haya transformado, conforme a su normativa aplicable.

La solicitud de inscripción en el Registro de Cooperativas deberá ir acompañada del balance de situación cerrado el día anterior al del acuerdo de transformación, o bien el del último ejercicio si hubiesen transcurrido menos de seis meses desde el cierre del mismo y hubiese sido depositado en el domicilio social, a disposición de las personas socias desde el día de la convocatoria de la Asamblea General. Igualmente, deberá acompañarse una relación de las personas socias que hayan hecho uso del derecho de separación, o una declaración responsable sobre su inexistencia, y el balance final cerrado el día anterior al

certificado del acta de la Asamblea General o, en su caso, al otorgamiento de la escritura.

## II. Efectos de la transformación.

La transformación de una cooperativa en otro tipo de entidad, produce los siguientes efectos:

1. Mantenimiento de la personalidad jurídica, la entidad continúa subsistiendo bajo el nuevo tipo de entidad, que se subroga en todos los derechos y obligaciones de la cooperativa, y continúa operando en el tráfico jurídico sin interrupción y sin que se paralice su gestión; la transformación no afecta a la vigencia de las relaciones jurídicas existentes. Desde su inscripción en los correspondientes Registros, la nueva entidad se registrará por su normativa aplicable.
2. Extensión de la responsabilidad: Las personas socias que, en virtud de la transformación, asuman responsabilidad personal e ilimitada por las deudas sociales, responderán en la misma forma de las deudas anteriores a la transformación. La introducción de este apartado es novedosa respecto a la ley anterior, respondiendo a la necesidad de asegurar y garantizar frente a terceras personas la responsabilidad de las obligaciones contraídas.
3. En principio, se mantienen las mismas cuotas de participación las personas socias; es decir que su participación en el capital de la nueva entidad será proporcional a la que tenían en la cooperativa. Salvo que alguna persona socia haya causado baja como consecuencia de su derecho de separación o que se hayan adoptado acuerdos sociales en este sentido.
4. Derechos laborales: en virtud de lo establecido en el ET y la L3/1999, si la transformación lleva aparejada cambio de titularidad de la empresa, se produce la subrogación en la relación laboral.
5. El destino de los fondos sociales.

Otro de los efectos que se producen como consecuencia del acuerdo de transformación es el que se refiere al destino de los fondos sociales.

En los procesos de modificación estructural que lleven aparejado de alguna manera la extinción de la cooperativa, la regla general que rige respecto al destino que haya de

darse a los fondos sociales es la regulada en el art. 78.2 LSCA para la transformación de las mismas. Así, esta norma se aplica en caso de fusión cuando el resultado de la misma no sea una cooperativa (art. 63.3 RLSCA), de cesión global de activo y pasivo (art. 77.3 LSCA) y, por supuesto, la transformación de la cooperativa (art. 78.2 LSCA).

De conformidad con este artículo, el destino de los fondos sociales será el siguiente:

1º En caso de existir fondos sociales voluntarios, y estar dotados, éstos se reintegrarán a las personas socias, de conformidad con el art. 82.2 LSCA. Lo que no dice la ley es cómo se hayan de repartir estos fondos voluntarios; entendemos que deberá realizarse de conformidad con los estatutos o del acuerdo adoptado en la Asamblea General.

2º Fondo de Formación y Sostenibilidad: se destinará íntegramente a ponerlo a disposición de la Junta de Andalucía, que lo destinará exclusivamente a la promoción de sociedades cooperativas andaluzas, pero sin señalar explícitamente el órgano que gestionará estos fondos. En la legislación anterior, estaban destinados a ser gestionados por el Consejo Andaluz de Cooperación.

3º En relación al Fondo de Reserva Obligatorio, pueden darse dos supuestos: 1.- Con carácter general, el 50% de estos fondos deberán ponerse a disposición de la Junta de Andalucía para los fines señalados anteriormente. 2.- Si los estatutos regularan expresamente su carácter de irrepartible, deberá ponerse a disposición de la Junta la integridad del Fondo, es decir, el 100%. Entendemos que resulta difícil que los estatutos regulen este supuesto, en la medida en que el Fondo de Reserva Obligatorio tiene por imperativo legal el carácter de irrepartible, salvo que los estatutos contemplen expresamente su reparto parcial (art. 70.3 LSCA). Por otro lado, es necesario señalar que en el caso de la transformación o cesión global, el porcentaje de este Fondo que deba destinarse a la Junta es superior al que debería hacerse en caso de liquidación (art. 82.1.d) LSCA establece que este porcentaje será del treinta por ciento).

4º Cualquier otro fondo que estatutariamente se haya creado con el carácter de irrepartible, deberá ponerse a disposición de la Junta el 50% de los mismos para los fines señalados anteriormente.

### III. Impugnación:

La impugnación de la transformación se regirá por el régimen general de impugnación de acuerdos sociales establecido en el art. 35 LSCA.

#### IV. Procedimiento de transformación en sociedades cooperativas.

Las entidades y sociedades no cooperativas pueden transformarse en cooperativas, mediante su inscripción en el Registro de Cooperativas.

La solicitud de inscripción debe realizarse mediante escritura pública (cuando sea obligatoria de conformidad con la normativa aplicable a la entidad transformada) o mediante certificado del órgano social competente para la transformación.

En cualquier caso, tanto la escritura pública como el certificado, deberá contener los requisitos exigidos por la LSCA y su reglamento para la constitución de una cooperativa, el balance de la entidad transformada cerrado el día anterior al acuerdo de transformación, la relación de personas socias que se integran en la cooperativa y su participación en el capital social.

Salvo consentimiento expreso de la transformación por parte de las personas acreedoras de la entidad transformada, el procedimiento de transformación no libera a las personas socias de la responsabilidad personal que hubieran contraído por deudas anteriores al acuerdo.

## **CAPITULO VIII. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN**

### **ARTÍCULO 79. DISOLUCIÓN.**

*1. Son causas de disolución de la sociedad cooperativa:*

- a) El cumplimiento del plazo fijado en los estatutos sociales.*
- b) La conclusión de su objeto o la imposibilidad de realizar la actividad cooperativizada.*
- c) La ausencia de actividad cooperativizada principal o su realización instrumental o accesoria, en ambos casos, durante dos años consecutivos.*

- d) El acuerdo de la Asamblea General conforme a lo dispuesto en el artículo 33.*
- e) La reducción del número de socios o socias por debajo del mínimo legalmente necesario para constituir la sociedad cooperativa por un periodo superior a doce meses.*
- f) La reducción del patrimonio contable hasta quedar por debajo del capital social estatutario, a no ser que, en el plazo de doce meses, se proceda a su reajuste, y siempre que no deba solicitarse la declaración de concurso.*
- g) La fusión, y la escisión, en su caso.*
- h) La apertura de la fase de liquidación en el concurso de la sociedad, conforme a lo dispuesto en la legislación concursal.*
- i) La inactividad de alguno de los órganos sociales necesarios durante dos años consecutivos.*
- j) Cualquier otra causa establecida en la ley o en los estatutos.*

*2. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de disolución de la sociedad cooperativa y su forma de acceso al Registro de Cooperativas Andaluzas, debiendo utilizarse, en todo caso, la sede electrónica de la consejería competente en materia de sociedades cooperativas a efectos de otorgar publicidad al acuerdo de disolución o a la resolución judicial que la declare.*

*3. El órgano de administración deberá, y cualquier interesado podrá, solicitar la disolución judicial de la sociedad cooperativa en los supuestos que reglamentariamente se determinen.*

*No obstante, el incumplimiento de la obligación de convocar la Asamblea General, de solicitar la disolución judicial o la declaración de concurso determinará la responsabilidad solidaria de los miembros del órgano de administración por todas las deudas sociales generadas a partir del mes siguiente a que se constate la causa que justifica la disolución o declaración de concurso.*

*4. Sin perjuicio de lo establecido en el presente capítulo, y en los supuestos y con las garantías que reglamentariamente se determinen, los acuerdos de disolución y*

*liquidación podrán ser adoptados en una misma Asamblea General, debiendo constar tales extremos en el orden del día de la citada Asamblea.*

## **Concordancia con el artículo 67 del Reglamento de desarrollo.**

### **ARTÍCULO 67. PROCEDIMIENTO DE DISOLUCIÓN.**

*1. Transcurrido el término de duración de la sociedad cooperativa fijado en los estatutos, ésta se disolverá de pleno derecho, a no ser que, con anterioridad, la Asamblea General acuerde su prórroga y quede inscrita en el Registro de Cooperativas Andaluzas. La persona socia disconforme con la prórroga podrá causar baja justificada de la entidad cuando concurren las circunstancias establecidas en las letras b) y c) del artículo 23.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*2. Cuando concurra alguna de las causas de disolución, previstas en el artículo 79.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, salvo las indicadas en las letras d), g) y h), el órgano de administración deberá, en el plazo de treinta días, convocar Asamblea General para que adopte el acuerdo de disolución.*

*Con este fin, cualquier persona socia podrá requerir al órgano de administración para que convoque la Asamblea General, si a su juicio existe alguna de las mencionadas causas de disolución. La Asamblea General adoptará el acuerdo de disolución por la mayoría cualificada establecida en el artículo 33.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, el órgano de administración deberá, y cualquier interesado podrá solicitar la disolución judicial de la sociedad cooperativa en los siguientes casos:*

*a) Si la Asamblea General no fuese convocada.*

*b) Si la Asamblea General no se reuniese en el plazo fijado en los estatutos.*

*c) Si la Asamblea General no pudiese adoptar el acuerdo de disolución.*

*d) Si la Asamblea General adoptase un acuerdo contrario a declarar la disolución.*

*4. El acuerdo de disolución o la resolución judicial, en su caso, se publicará en la sede electrónica de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, en el plazo de treinta días a contar de aquel en que se adoptó el acuerdo o se notificó la resolución judicial.*

*La disolución se inscribirá en el Registro de Cooperativas Andaluzas en el plazo de un mes a contar desde la fecha de su publicación, mediante el testimonio de la resolución judicial que la declare o la certificación del acta en que se acuerde o, en su caso, la escritura pública que la recoja, en la que expresamente deberá constar el nombramiento y aceptación de las personas liquidadoras, así como las facultades que se les hayan conferido.*

*5. La sociedad cooperativa disuelta conservará su personalidad jurídica mientras se realiza la liquidación. Durante este período deberá añadirse a la denominación social la expresión «en liquidación».*

*6. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, los acuerdos de disolución y liquidación podrán ser adoptados en una misma Asamblea, siempre que no existan personas acreedoras sociales o que el importe de su deuda haya sido debidamente garantizado. Para realizar ambos actos en una misma Asamblea se han de observar las siguientes formalidades:*

*a) Presentación por parte del órgano de administración de la propuesta de disolución y liquidación, así como del proyecto de distribución del haber social y del balance final de liquidación en el que no ha de figurar ningún pasivo con persona no socia, salvo que su importe sea debidamente garantizado.*

*b) Celebración de la Asamblea General en que acuerde la disolución-liquidación y, en consecuencia, el proyecto de distribución y el balance final de liquidación. La convocatoria de esta Asamblea será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la sede electrónica de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas. No obstante, no serán necesarias ambas publicaciones cuando la convocatoria se notifique individualmente por escrito a todas las personas socias, a través de un procedimiento que asegure su recepción en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad cooperativa.*



*c) Publicación, en los términos recogidos en el apartado 4, del acuerdo de disolución y liquidación, así como del proyecto de distribución y del balance de liquidación.*

*d) Reparto entre las personas socias del haber social, en su caso, debiendo poner a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la integridad del Fondo de Formación y Sostenibilidad y el treinta por ciento del Fondo de Reserva Obligatorio.*

*e) Solicitud por parte del órgano de administración en el plazo de quince días desde la celebración de la Asamblea, de cancelación de los asientos referentes a la sociedad liquidada en el Registro de Cooperativas Andaluzas, presentando al efecto certificación del acta de la Asamblea celebrada o escritura pública, en su caso, donde constarán el balance final de liquidación y las operaciones de ésta. De igual modo, junto con la solicitud de cancelación se depositarán los libros y documentos relativos al tráfico de la cooperativa, salvo que las personas liquidadoras asuman el deber de conservación de dichos libros y documentos durante un periodo de cinco años desde la fecha del asiento de cancelación, o manifiesten, bajo su responsabilidad, que la sociedad cooperativa carece de ellos.*

### **Comentario del artículo 79 de la LSCA y del artículo 67 del RLSCA.**

En primer lugar, para que la cooperativa pueda iniciar el procedimiento de disolución habrá de darse una de las causas legales para las que está previsto. Y estas son:

- El cumplimiento del plazo fijado en los estatutos sociales. Esta disolución se produce de pleno derecho, a menos que la Asamblea General acuerde la prórroga y sólo si ésta se inscribe en el Registro de Cooperativas Andaluzas. En los supuestos de prórroga, todo socio disconforme podrá causar baja justificada cuando concurren las circunstancias previstas en las letras b) y c) del art. 23.3 de la LSCA, que son: 1) haber hecho constar en acta la oposición a su celebración o el voto en contra del acuerdo, no haber asistido o haber sido privado ilegítimamente del voto; 2) Que se ajuste al resto de los requisitos establecidos en la ley y la solicitud de baja se presente en el plazo y forma que reglamentariamente se determinen.
- Por haber finalizado su objeto o por devenir imposible realizar la actividad cooperativizada. La diferencia de ambos supuestos radica en que el primero

significa que la actividad de la cooperativa ha concluido definitivamente y el segundo implica la imposibilidad de realizar la actividad de la cooperativa.

- Por no existir actividad cooperativizada principal o por no realizar la actividad instrumental o accesoria durante dos años consecutivos. Se trata de una nueva causa introducida por la LSCA.
- Por acuerdo de la Asamblea General.
- Cuando se reduzca el número de socios por debajo del legalmente establecido para constituir una cooperativa<sup>16</sup>, si esta situación dura más de doce meses.
- Cuando se reduzca el patrimonio contable hasta quedar por debajo del capital social estatutario. Sin embargo, no será causa de disolución si en el plazo de doce meses se procede a su reajuste y no resulte obligatoria la solicitud de concurso.
- Por fusión y escisión, en su caso.
- Por apertura de la fase de liquidación en el concurso de la sociedad, conforme a lo dispuesto en la legislación concursal.
- Por inactividad de alguno de los órganos sociales necesarios durante dos años consecutivos.
- Finalmente, la ley dispone que será válida cualquier causa establecida legal o estatutariamente.

En caso de concurrencia de alguna de las causas de disolución previstas en el art. 79.1 de la LSCA, el órgano de administración dispone de un plazo de treinta días para convocar Asamblea General donde se adopte el acuerdo de disolución. Están exceptuadas de esta regla general las causas de disolución previstas en las letras d) (acuerdo de la Asamblea General conforme a lo dispuesto en el artículo 33) g) (la fusión, y la escisión, en su caso) y h) (apertura de la fase de liquidación en el concurso de la sociedad, conforme a lo dispuesto en la legislación concursal). Además, también se prevé la posibilidad de que cualquier persona socia solicite directamente al órgano de

---

<sup>16</sup> “Las cooperativas de primer grado deberán estar integradas, al menos, por tres personas socias comunes, y las cooperativas de segundo grado, por, al menos, dos cooperativas de primer grado. Las cooperativas de grado ulterior estarán integradas por un mínimo de dos sociedades cooperativas de grado inmediatamente anterior” (art. 10 LSCA).

administración que convoque la Asamblea General, cuando a su juicio exista alguna de las causas de disolución anteriormente citadas. En todo caso, el acuerdo de disolución debe ser adoptado por mayoría cualificada y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33.2 de la LSCA.

Asimismo, el órgano de administración tiene la obligación de solicitar la disolución judicial en determinados casos, aunque también podrá solicitarla facultativamente cualquier persona interesada. Los supuestos en los que cabe esta posibilidad son:

- Si la Asamblea General no fuese convocada.
- Si la Asamblea General no se reuniese en el plazo fijado en los estatutos.
- Si la Asamblea General no pudiese adoptar el acuerdo de disolución.
- Si la Asamblea General adoptase un acuerdo contrario a declarar la disolución.

En segundo lugar, es necesaria la publicación del acuerdo de disolución o la resolución judicial en la sede electrónica de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, en el plazo de treinta días desde aquel en que se adoptó el acuerdo o se notificó la resolución respectivamente.

Una vez publicado, el acuerdo debe inscribirse en el Registro de Cooperativas Andaluzas en el plazo de un mes. La inscripción se realizará mediante el testimonio de la resolución judicial que la declare o la certificación del acta en que se acuerde o, en su caso, la escritura. Si bien, en este último caso, deben constar expresamente el nombramiento y aceptación de las personas liquidadoras, así como las facultades que se les hayan conferido.

La sociedad cooperativa disuelta conservará su personalidad jurídica mientras se realiza la liquidación aunque deberá añadir a su denominación la expresión “en liquidación”.

### Disolución y Liquidación en una misma Asamblea: Ventajas

La normativa de sociedades cooperativas prevé la posibilidad de adoptar los acuerdos de disolución y liquidación en una única Asamblea en dos supuestos: cuando no existan personas acreedoras sociales; o cuando el importe de su deuda haya sido debidamente garantizado. Se trata de una novedad significativa con respecto a la normativa anterior. El

legislador ha tratado de simplificar al máximo ambos procedimientos para poder prever esta posibilidad. Si bien, para que sea posible adoptar el acuerdo de disolución y liquidación conjuntamente deben respetarse las siguientes formalidades:

- Presentación por el órgano de administración de la propuesta de disolución y liquidación; del proyecto de distribución del haber social; y del balance final de liquidación.
- Celebración de Asamblea General para adoptar los acuerdos necesarios. Se debe publicar la convocatoria en el BOJA y en la sede electrónica de la Consejería competente cuando la misma no se haya enviado individualmente por escrito a todas las personas socias. En todo caso, los acuerdos de disolución y liquidación adoptados por la Asamblea General deben constar en el orden del día de la misma.
- Publicación del acuerdo de disolución y liquidación, del proyecto de distribución y del balance de liquidación en la sede electrónica de la Consejería Competente.
- Reparto entre socios y socias del haber social. Se debe poner a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la integridad del Fondo de Formación y Sostenibilidad y el treinta por ciento del Fondo de Reserva Obligatorio.
- El órgano de administración deberá solicitar en el plazo de quince días desde la celebración de Asamblea para la disolución y liquidación, la cancelación de asientos referentes a la sociedad liquidada. Junto con esta solicitud se depositarán los libros y documentos relativos al tráfico de la cooperativa, salvo que las personas liquidadoras asuman el deber de conservación de los mismos durante cinco años desde la fecha del asiento de cancelación, o manifiesten, asumiendo toda responsabilidad, que la sociedad cooperativa carece de ellos.

Por último, la normativa analizada prevé un régimen de responsabilidad del órgano de administración en estos casos. Éste responderá solidariamente por todas las deudas sociales que se generen si transcurrido un mes desde que: 1) hubiera tenido constancia de la existencia de causa legal de disolución; 2) o declaración de concurso; no haya convocado la preceptiva Asamblea General, o no haya solicitado disolución judicial o declaración de concurso, según corresponda.

## **ARTÍCULO 80. REACTIVACIÓN.**

*1. Mediante la reactivación, la sociedad cooperativa disuelta y no liquidada podrá volver a realizar la actividad cooperativizada en los términos regulados en este artículo y sus normas de desarrollo.*

*2. La entidad se reactivará mediante acuerdo de su Asamblea General, con la mayoría prevista en el artículo 33, siempre que concurran los siguientes requisitos:*

- a) Que haya desaparecido la causa que motivó la disolución.*
- b) Que el patrimonio contable de la entidad no sea inferior al capital social estatutario.*
- c) Que no haya comenzado el reembolso de las aportaciones a los socios y socias.*

*Una vez adoptado el acuerdo de reactivación, se inscribirá en el Registro de Cooperativas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119.1, en la forma que se determine reglamentariamente.*

*3. Podrán causar baja, con la consideración de justificada, aquellas personas socias que se ajusten a lo previsto o en quienes concurran alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 23.3, letras b) y c).*

### **Comentario del artículo 80 de la LSCA.**

La LSCA prevé la posibilidad de que la sociedad cooperativa disuelta y no liquidada pueda volver a realizar la actividad cooperativizada siempre que se den las siguientes circunstancias:

- Que haya desaparecido la causa que motivó la disolución.
- Que el patrimonio contable de la entidad no sea inferior al capital social estatutario.
- Que no haya comenzado el reembolso de las aportaciones a los socios y socias.

En estos supuestos, se podrá permitir la reactivación mediante acuerdo de la Asamblea General con la mayoría prevista en el art. 33 de la LSCA. Este acuerdo deberá inscribirse en el Registro de Cooperativas para surtir plenos efectos.

Además, este supuesto constituye una causa justificada de baja voluntaria para los socios y socias, siempre y cuando concurren todos los requisitos exigidos en el art. 23 LSCA.

Debe significarse que no existe desarrollo reglamentario de esta materia pese a que la propia ley así lo prevé.

## **ARTÍCULO 81. LIQUIDACIÓN, NOMBRAMIENTO Y ATRIBUCIONES DE LAS PERSONAS LIQUIDADORAS.**

*1. Las personas encargadas de la liquidación, en número impar, salvo en el supuesto de concurso, previsto en la letra h) del artículo 79.1, serán nombradas por la Asamblea General que adopte el acuerdo de disolución, en votación secreta, debiendo aceptar los cargos como requisito de eficacia.*

*Si los estatutos lo prevén, y siempre que exista más de una persona liquidadora, la Asamblea General podrá designar para esta función a personas no socias que, en función de su cualificación profesional, experiencia técnica o empresarial, puedan contribuir al más eficaz cumplimiento de las funciones encomendadas. En ningún caso, las personas liquidadoras no socias podrán superar un tercio del total.*

*2. El diez por ciento de las personas socias en las sociedades cooperativas de más de mil, el quince por ciento en las de más de quinientas y el veinte por ciento en las restantes podrá solicitar del juez competente la designación de uno o varios interventores que fiscalicen las operaciones de liquidación.*

*Reglamentariamente, se regulará la legitimación de la Administración de la Junta de Andalucía, a instancia de la consejería competente en materia de cooperativas, para el ejercicio de la citada acción.*

*3. Los liquidadores efectuarán todas las operaciones tendentes a la liquidación de la entidad, respetando las disposiciones normativas y estatutarias aplicables al régimen de las asambleas generales, a las que deberán rendir cuenta de la marcha de la liquidación y del balance correspondiente para su aprobación.*

*4. A las personas responsables de la liquidación les serán de aplicación las normas sobre elección, incapacidad, revocación, incompatibilidad y responsabilidad de los miembros del órgano de administración.*

**Concordancia con el artículo 68 del Reglamento de desarrollo.**

## **ARTÍCULO 68. RÉGIMEN DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS LIQUIDADORAS E INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN.**

*1. Los liquidadores y liquidadoras, que actuarán de forma colegiada, habrán de efectuar todas las operaciones necesarias para la liquidación de la sociedad cooperativa. Durante el período de la liquidación, deberán observarse las disposiciones legales y estatutarias aplicables sobre el régimen de las Asambleas Generales, a las cuales rendirán cuenta las personas liquidadoras de la marcha de la liquidación y del balance correspondiente para su aprobación.*

*Si la liquidación se prolongase por un plazo superior al previsto para la aprobación de las cuentas anuales, las personas liquidadoras presentarán, para este fin, a la Asamblea General, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, las cuentas anuales de la sociedad y un informe pormenorizado que permitan apreciar con exactitud el estado de la liquidación.*

*2. El diez por ciento de las personas socias en las cooperativas de más de mil, el quince por ciento en las de más de quinientos y el veinte por ciento en las restantes, podrá solicitar del órgano judicial competente la designación de una intervención que fiscalice las operaciones de liquidación.*

*3. La Administración de la Junta de Andalucía, a instancia de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, podrá solicitar del órgano judicial competente la designación de una o varias personas interventoras que fiscalicen las operaciones de liquidación, cuando de manera fundada, considere que no se van a poner los fondos sociales preceptivos, conforme a lo establecido en el artículo 82.1.d) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, a disposición de la Hacienda Pública de la Administración de la Junta de Andalucía.*



## Comentario del artículo 81 de la LSCA y del artículo 68 del RLSCA.

El art. 71 de la LSCA regula el proceso de liquidación. En su párrafo primero establece que el número de personas encargadas de la liquidación habrá de ser impar, a excepción de los casos de concurso. En ambos casos, los liquidadores serán nombrados en votación secreta por la Asamblea General que adopte el acuerdo de disolución.

En los casos en que se prevea estatutariamente y exista más de una persona liquidadora, la Asamblea podrá designar para esta función a personas no socias atendiendo a su cualificación profesional, experiencia técnica o empresarial. Sin embargo, nunca las personas liquidadoras no socias podrán superar un tercio del total.

La LSCA prevé la posibilidad de que un número determinado de socios y socias, concretado en función del tamaño de la cooperativa, pueda solicitar del juez competente la designación de uno o varios interventores que fiscalicen las operaciones de liquidación. Y para que la solicitud sea válida, deberá realizarla el número de socios y socias que porcentualmente se establece a continuación:

- El 10% de las personas socias en las sociedades cooperativas de más de 1.000 socios.
- El 15% de las personas socias en las sociedades cooperativas de más de 500 socios.
- El 20% en el resto de cooperativas.

Cuando concorra el supuesto previsto en el art. 81. 2 de la LSCA<sup>17</sup>, no tendrán validez los actos de las personas liquidadoras efectuados sin participación de los interventores.

Además, la LSCA establece que a todas las personas responsables de la liquidación les serán de aplicación las normas sobre elección, incapacidad, revocación, incompatibilidad y responsabilidad de los miembros del órgano de administración.

---

<sup>17</sup> Cuando el 10% de las personas socias en las cooperativas de más de 1.000, el 15% en las de más de 500 y el 20% en las restantes solicite del juez competente la designación de uno o varios interventores que fiscalicen las operaciones de liquidación. De acuerdo con el art. 68. 3 RLSCA, la Administración de la Junta de Andalucía, a instancia de la Consejería competente en materia de cooperativas, también podrá ejercitar esta acción cuando de manera fundada, considere que no se van a poner los fondos sociales preceptivos.

Las personas liquidadoras efectuarán todas las operaciones de liquidación y deberán rendir cuentas ante la Asamblea General de la marcha de la liquidación y balance correspondiente.

En aquellos supuestos en los que la liquidación se prolongase por un plazo superior al previsto para la aprobación de las cuentas anuales, las personas liquidadoras presentarán ante la Asamblea General y dentro de los seis meses de cada ejercicio, las cuentas anuales de la sociedad y un informe pormenorizado con el que acreditar el estado en que se encuentra la liquidación. La finalidad perseguida por el legislador con esta previsión es la de dar mayor poder a la Asamblea General en los supuestos de liquidación. La Asamblea General es el órgano más democrático dentro de la cooperativa y en el que reside la voluntad de todos los socios y socias, por lo tanto esta previsión resulta acorde con los principios cooperativos de “una persona, un voto”, entre otros. Como podemos observar, el respeto a dichos principios debe mantenerse incólume incluso en las últimas actuaciones de la cooperativa como entidad.

Por último, como novedad también nos encontramos con la posibilidad de que la CEICE (Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Andalucía) pueda instar judicialmente el nombramiento de personas interventoras en los casos en que aquella considere que no se cumple con la puesta a disposición de la Administración de los Fondos Sociales preceptivos. En definitiva, nos encontramos ante un nuevo mecanismo de control de la Administración para evitar el incumplimiento de esa obligación económica.

## **ARTÍCULO 82. ADJUDICACIÓN DEL HABER SOCIAL Y OPERACIONES FINALES.**

*1. En la adjudicación del haber social se respetará íntegramente el Fondo de Formación y Sostenibilidad, y las personas liquidadoras ajustarán sus actuaciones al siguiente orden:*

*a) Se saldarán las deudas sociales.*

*b) Se reintegrará a las personas socias el importe de los fondos sociales voluntarios, de existir estos y estar dotados, comenzando por el Fondo de Retornos.*

*c) Se reintegrarán a dichas personas las aportaciones al capital social, actualizadas o revalorizadas, en su caso, comenzando por aquellas cuyo reembolso haya sido rehusado, conforme a lo previsto en el artículo 60.1, y continuando por las restantes, siendo preferentes, en ambos casos, las voluntarias frente a las obligatorias.*

*d) Efectuadas las operaciones indicadas en los apartados anteriores, el Fondo de Formación y Sostenibilidad y el treinta por ciento del Fondo de Reserva Obligatorio se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, que los destinará de modo exclusivo a la promoción de las sociedades cooperativas.*

*e) Finalmente, el remanente existente del Fondo de Reserva Obligatorio, así como el remanente que pudiera existir en la sociedad cooperativa, se repartirán entre los socios y socias en función del grado de participación en la actividad cooperativizada y del tiempo de permanencia en la entidad.*

*2. Concluidas las operaciones de extinción del pasivo, las personas responsables de la liquidación elaborarán el balance final y el proyecto de distribución del activo para que, tras ser fiscalizados en los supuestos que reglamentariamente se determinen, sean sometidos a la consideración de la Asamblea General. La convocatoria de esta Asamblea se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la sede electrónica de la consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de sociedades cooperativas. No obstante, no serán necesarias tales publicaciones cuando el acuerdo se notifique individualmente a todas las personas socias y acreedoras en la forma que reglamentariamente se determine.*

*3. El procedimiento a seguir en el supuesto de que fuese imposible la celebración de la Asamblea General a que se refiere el apartado anterior, así como el plazo para llevar a cabo las operaciones de liquidación de la sociedad cooperativa y cumplir con las obligaciones registrales que de ella se deriven, serán objeto de regulación reglamentaria.*

*4. En el supuesto de concurrir alguna situación concursal, se estará a lo establecido en la legislación vigente sobre dicha materia.*

## **Concordancia con el artículo 69 del Reglamento de desarrollo.**

### **ARTÍCULO 69. OPERACIONES FINALES.**

*1. El balance final y el proyecto de distribución serán fiscalizados, caso de existir, por la intervención de la sociedad cooperativa y, en su caso, por la intervención a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo anterior y se someterán a la aprobación de la Asamblea General. La convocatoria de esta Asamblea será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la sede electrónica de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas. No obstante, no serán necesarias ambas publicaciones cuando la convocatoria se notifique individualmente por escrito a todas las personas socias y acreedoras, a través de un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad cooperativa y en los domicilios que hayan puesto en conocimiento de la sociedad o, en su defecto, en sus domicilios legales, respectivamente.*

*2. Si fuera imposible la celebración de la Asamblea General prevista en el apartado anterior las personas liquidadoras publicarán el balance final y el proyecto de distribución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la sede electrónica de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, una vez fiscalizados. Transcurridos seis meses desde la última de dichas publicaciones sin que sea impugnados el balance final y el proyecto de distribución ante el órgano judicial competente, se entenderán aprobados.*

*3. La liquidación ha de efectuarse en el plazo máximo de dos años contados a partir del acuerdo de disolución, salvo que lo impida alguna causa de fuerza mayor justificada. Transcurrido este plazo sin que el balance final se haya sometido a la aprobación de la Asamblea General, cualquier persona socia puede solicitar al órgano judicial competente la separación del cargo de las personas encargadas de la liquidación de la sociedad cooperativa y presentar una propuesta de nuevos nombramientos.*

*4. Finalizada la liquidación y la distribución del haber social, las personas liquidadoras deberán solicitar en el plazo de quince días la cancelación de los asientos referentes a la sociedad liquidada en el Registro de Cooperativas Andaluzas, presentando el certificado del acta o la escritura pública, en su caso, donde conste el balance final de la liquidación y las operaciones de ésta. Asimismo, junto con la solicitud de cancelación deberán*

*depositar en dicho Registro, los libros y documentos relativos al tráfico de la sociedad cooperativa, salvo que, expresamente, las personas liquidadoras asuman el deber de conservación de dichos libros y documentos durante el plazo de cinco años a contar desde la fecha del asiento de cancelación de la sociedad, o manifiesten, bajo su responsabilidad, que la sociedad cooperativa carece de ellos.*

*Cuando se depositen los libros y documentos en el Registro de Cooperativas Andaluzas, este deberá conservarlos durante un periodo de cinco años a contar desde la fecha del asiento de cancelación de la sociedad.*

*La responsabilidad personal y solidaria de los miembros del órgano de administración, de la Gerencia y de las personas liquidadoras, subsiste, no obstante, la cancelación de los asientos de la sociedad.*

### **Comentario del artículo 82 de la LSCA y del artículo 69 del RLSCA.**

En la fase final del proceso de liquidación se debe adjudicar el haber social respetando íntegramente el Fondo de Formación y Sostenibilidad. En este trámite las personas liquidadoras tienen las siguientes obligaciones:

- Saldar las deudas sociales.
- Reintegrar a las personas socias el importe de los fondos sociales voluntarios, de existir estos y estar dotados, comenzando por el Fondo de Retornos.
- Reintegrar a dichas personas las aportaciones al capital social, actualizadas o revalorizadas, en su caso, comenzando por aquellas cuyo reembolso haya sido rehusado. Son preferentes, en ambos casos, las voluntarias frente a las obligatorias.
- Poner a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía el Fondo de Formación y Sostenibilidad y el treinta por ciento del Fondo de Reserva Obligatorio que únicamente los podrá destinar a la promoción de las sociedades cooperativas.
- El remanente existente del Fondo de Reserva Obligatorio y el que pueda existir de la propia sociedad se repartirá entre los socios en función del grado de participación en la actividad cooperativizada y del tiempo de permanencia en la entidad.

Terminada la fase de operaciones de extinción del pasivo, se continuará con la elaboración del balance final y el proyecto de distribución del activo. Estos documentos deben someterse a estudio por parte de la Asamblea General.

En los casos de concurso se deberá atender a la normativa concreta reguladora de esta materia (concretamente, todo lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que regula la fase de liquidación en las situaciones de concurso).

El art. 69 del Reglamento establece la obligatoriedad de fiscalizar el balance final y el proyecto de distribución en los siguientes casos: cuando exista intervención de la sociedad cooperativa o intervención a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo anterior<sup>18</sup>. En todo caso la aprobación deberá someterse a votación en la Asamblea General. Si resulta imposible la celebración de Asamblea, el balance final y el proyecto de distribución ya fiscalizados se publicarán en el BOJA y en la sede electrónica de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas. La aprobación se produce por el transcurso de seis meses desde la fecha de su publicación sin que se haya producido impugnación de los mismos.

El plazo máximo del procedimiento de liquidación es de dos años desde que se adoptó el acuerdo de disolución. Si bien, este plazo no será obligatorio para los casos de fuerza mayor justificada. Cuando haya transcurrido el plazo de dos años sin aprobación del balance final en la Asamblea General, cualquier persona socia podrá solicitar al órgano judicial competente la separación del cargo de las personas encargadas de la liquidación de la sociedad cooperativa y presentar una propuesta de nuevos nombramientos. Esta es una novedad introducida por el Reglamento y su finalidad es básicamente la de evitar la eternización de los procesos de liquidación.

La liquidación y distribución del haber finaliza con la solicitud de las personas liquidadoras de la cancelación de los asientos referentes a la sociedad en el Registro de Cooperativas en plazo de quince días desde la fecha de aprobación del balance final y el proyecto de distribución. También deberán depositar en dicho Registro, los libros y documentos relativos al tráfico de la sociedad cooperativa. El Registro tiene el deber de conservarlos durante cinco años desde el asiento de cancelación.

---

<sup>18</sup> Solicitada por las personas socias, siguiendo la regla contenida en el art. 68.2 RLSCA, al órgano judicial; o bien solicitada por la Administración de la Junta de Andalucía, a instancia de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, según dispone el art. 68. 3 RLSCA.

Con la nueva normativa, las personas liquidadoras asumen el deber de conservación de los libros y documentos sociales durante el plazo de cinco años a contar desde la fecha del asiento de cancelación de la sociedad, o cuando manifiesten, asumiendo toda responsabilidad, que la sociedad cooperativa carece de ellos. La actual regulación rebaja el plazo de conservación de 6 años a 5 años. El objetivo es el de flexibilizar dicha obligación de conservación.

La responsabilidad de los miembros del órgano de administración, de la Gerencia y de las personas liquidadoras, será personal y solidaria, subsistiendo incluso cuando se hayan cancelado los asientos de la sociedad.



## **TÍTULO II. TIPOLOGÍA DE COOPERATIVAS**

### **CAPÍTULO I. CLASIFICACIÓN.**

#### **ARTÍCULO 83. CLASIFICACIÓN Y NORMAS GENERALES.**

*1. Las sociedades cooperativas andaluzas se clasifican en:*

*a) Sociedades cooperativas de primer grado, que a su vez se subdividen en:*

*1.º Cooperativas de trabajo.*

*2.º Cooperativas de consumo.*

*3.º Cooperativas de servicios.*

*4.º Cooperativas especiales.*

*b) Sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado, que a su vez se clasifican en:*

*1.º Homogéneas.*

*2.º Heterogéneas.*

*2. Los criterios que determinan la inclusión de cada sociedad cooperativa en uno u otro de los tipos enumerados en el apartado 1 responderán a la cualidad de las personas socias o a la actividad que estas desarrollen en la empresa, en ningún caso, a su objeto social.*

*3. Las sociedades cooperativas podrán realizar cualquier actividad económico-social lícita, rigiéndose, en primer lugar, por las disposiciones específicas de este título que les sean aplicables y por sus normas de desarrollo, y, en lo no previsto en ellas, por las de carácter general establecidas en la presente ley.*

*4. Respecto de las sociedades cooperativas de primer grado descritas en el apartado 1.a), con independencia de los contemplados en el presente título, podrán establecerse, reglamentariamente, otros subtipos especiales, siempre y cuando reúnan unas características singulares que aconsejen la aplicación de un régimen jurídico específico.*

*5. Con independencia de los tipos previstos en el apartado 1, las sociedades cooperativas podrán establecer otras fórmulas de cooperación, con arreglo a lo que se disponga reglamentariamente.*

### **Comentario del artículo 83 de la LSCA.**

La legislación cooperativa suele utilizar distintos criterios de clasificación: a) Por su base social encontramos cooperativas: de primero y segundo grado b) Por la clase de actividad que constituye su objeto social y su estructura socioeconómica encontramos cooperativas: de trabajo, de consumo, de servicios y especiales.

Para la inclusión de una cooperativa dentro de una u otra categoría de las enumeradas en el primer apartado del artículo 83 hay que atender a la actividad desarrollada o a la cualidad de sus personas socias.

Se establece en el apartado tercero de este artículo que las cooperativas podrán desarrollar cualquier actividad económica lícita. Así se evita que una regulación más o menos detallada de las distintas actividades pueda llevar a la conclusión de que es un listado numerus clausus.

La clasificación de los tipos de cooperativas responde a la estructura socioeconómica de sus miembros y algunas subdivisiones por razón de la actividad económica. Si bien, se permite la creación de otro tipo de cooperativas de primer grado distintas a las enumeradas siempre y cuando se establezcan reglamentariamente y reúnan unas características singulares que aconsejen la aplicación de un régimen jurídico específico.

Por último, se deja abierta la posibilidad a la intercooperación<sup>19</sup> entre cooperativas bajo fórmulas distintas a las establecidas en este artículo.

---

<sup>19</sup> Este aspecto será más extensamente desarrollado en su artículo correspondiente.

## **CAPITULO II. SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRIMER GRADO.**

### *Sección 1.ª Cooperativas de trabajo*

#### **ARTÍCULO 84. CONCEPTO Y ÁMBITO.**

*1. Son sociedades cooperativas de trabajo las que agrupan con la cualidad de socios y socias a personas físicas que, mediante su trabajo en común, realizan cualquier actividad económica de producción de bienes o servicios para terceros. La relación de las personas socias trabajadoras con la cooperativa es de carácter societario.*

*2. Podrán ser personas socias trabajadoras aquellas que legalmente tengan capacidad para contratar la prestación de sus servicios.*

*Respecto a las personas extranjeras, se estará a lo dispuesto en su legislación específica.*

*3. Los trabajadores y trabajadoras con contrato laboral por tiempo indefinido con más de un año de antigüedad en la sociedad cooperativa deberán ser admitidos como socias y socios, de solicitarlo conforme al artículo 18. No obstante, estatutariamente, podrá hacerse depender la adquisición de dicha condición a la superación de un periodo de prueba societario, conforme a lo previsto en el artículo siguiente.*

**Concordancia con el artículo 70 y 80 del Reglamento de desarrollo.**

#### **ARTÍCULO 70. CONCEPTO Y ÁMBITO.**

*1. Las sociedades cooperativas de trabajo son las que agrupan con la cualidad de socios y socias a personas físicas que, mediante su trabajo en común, realizan cualquier actividad económica de producción de bienes o servicios para terceros, considerándose esta relación como societaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*2. Podrán ser personas socias trabajadoras:*

*a) Quienes tengan plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el Código Civil.*

*b) Las personas incapacitadas, a quienes su incapacidad no impida realizar la prestación de trabajo en que consista la actividad societaria, rigiéndose el ejercicio de sus derechos en la cooperativa por las reglas del derecho civil, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 48 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, relativo a las incapacidades, prohibiciones e incompatibilidades de los miembros de los órganos sociales.*

*c) Las personas menores de dieciocho y mayores de dieciséis años, que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tengan a su cargo.*

*Si la persona que ejerce la representación legal de otra de capacidad limitada la autoriza expresa o tácitamente para ingresar como persona socia trabajadora, queda ésta también autorizada para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones propias de la condición de persona socia trabajadora.*

*d) Las personas extranjeras, de acuerdo con lo dispuesto en su legislación específica.*

*3. No podrán ser socios o socias trabajadoras las personas menores de dieciséis años.*

*4. La pérdida de la condición de socio o socia provocará el cese definitivo de la prestación de trabajo en la cooperativa, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente.*

## **ARTÍCULO 80. COOPERATIVAS DE TRABAJO NO LUCRATIVAS.**

*1. Las sociedades cooperativas de trabajo, cualquiera que sea su objeto, que carezcan de ánimo de lucro, recogerán expresamente en el apartado estatutario relativo al objeto social su carácter no lucrativo y en el referido al régimen económico lo siguiente:*

*a) La imposibilidad de que las aportaciones al capital social devenguen un interés superior al legal del dinero, sin perjuicio de su posible actualización.*

*b) La retribución de las personas socias trabajadoras y de los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena no excederán del ciento cincuenta por ciento de la que les correspondería en virtud del convenio colectivo u otra disposición laboral aplicable en la zona.*

*c) Los excedentes o beneficios que puedan generarse en un ejercicio económico, en ningún caso se repartirán entre las personas socias e inversoras, en su caso,*

*destinándose a la consolidación de la entidad y a la creación de empleo, una vez cubiertos los porcentajes relativos a los fondos obligatorios, que tendrán carácter irrepartible.*

*2. Las sociedades cooperativas especiales, reguladas en la Sección 4.ª de este Capítulo, serán consideradas sin ánimo de lucro, cuando se adecuen, en lo que les sea de aplicación, a lo previsto en el apartado anterior.*

## **Comentario del artículo 84 de la LSCA y los artículos 70 y 80 del RLSCA.**

### **1. Definición.**

La cooperativa de trabajo es una empresa que se basa en el autoempleo colectivo y que desarrolla su actividad en cualquier ámbito de la economía. Los socios y las socias son al mismo tiempo trabajadores de la misma y la toma de decisiones se realiza de forma democrática. Prototipo de empresa con base social y solidaria, la cooperativa de trabajo constituye la forma más genuina de democratizar la economía, poniendo los recursos al servicio de las personas.

### **2. Relación social.**

La relación entre la persona socia de trabajo y este tipo de cooperativa es societaria. Esto tiene relevancia a la hora de determinar la legislación aplicable a todos los socios y socias. En este sentido, será de aplicación la normativa contenida tanto en la ley como el reglamento de sociedades cooperativas y sólo de modo supletorio se podrá aplicar la legislación laboral. Sin embargo, aunque la relación no sea laboral, Martín Valverde resalta que estamos ante “supuestos de irradiación de la normativa laboral”, “en el sentido de que sus principios y criterios de regulación se reflejan en el contenido de normas que formalmente no cabe calificar de laborales”. Una de las consecuencias de calificar la relación como societaria deriva en la exclusión de aplicación del principio de irrenunciabilidad y de aplicación de la norma más favorable para el trabajador a este tipo de relación. Sin embargo, en todo aquello para lo que no exista regulación excepcional, sí que será de aplicación la normativa laboral vigente.

Únicamente podrán ser socios aquellos con capacidad legal para contratar la prestación de sus servicios. Es decir, el requisito requerido consiste en la posibilidad de que la persona pueda realizar la prestación del servicio en que consista la actividad societaria.

En la nueva ley se eliminan las referencias directas a la capacidad para ser socios de los incapacitados judicialmente, los mayores de dieciséis años y menores de dieciséis años. Sin embargo, se mantiene el precepto dedicado a la capacidad de los extranjeros para ser socios. En este apartado se remite a la legislación específica en la materia. Si acudimos a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, vemos que existe la posibilidad de que los extranjeros sean socios de una cooperativa, si bien al tratarse de una actividad por cuenta ajena deberán obtener previamente el permiso de trabajo conjuntamente con el de residencia.

En el último apartado del artículo se refiere a los trabajadores indefinidos con más de un año de antigüedad con contrato indefinido. Éstos deberán necesariamente ser admitidos si así lo solicitan conforme al artículo 18.

### 3. Novedades en la nueva regulación.

En cuanto a la nueva regulación de las cooperativas de trabajo habría que señalar ciertas novedades en relación a la normativa anterior. En primer lugar, se configura un mecanismo excepcional de flexibilidad en la prestación del trabajo por las personas socias, que podrá activarse en determinados casos, con carácter temporal.<sup>20</sup> La decisión adoptada por el legislador en este sentido resulta congruente con la naturaleza societaria de las personas socias trabajadoras y responde a la necesidad de las cooperativas de hacer frente a situaciones excepcionales que afecten a su régimen económico social. En segundo lugar, se regula la transmisión de participaciones sociales a terceras personas, precisándose el régimen de responsabilidad respecto a las deudas sociales de las personas socias transmitentes así como la inaplicación de los periodos de prueba a las personas adquirentes, salvo previsión estatutaria.<sup>21</sup>

El RLSCA introduce una novedad en relación a las distintos tipos de sociedades cooperativas de trabajo. La nueva regulación permite que cualquier tipo de sociedad cooperativa de trabajo cooperativas pueda, a su vez, ser calificada como cooperativa sin ánimo de lucro. Con la anterior normativa, sólo las cooperativas de interés social podían ser cooperativas sin ánimo de lucro.

Además, se añade un nuevo supuesto respecto al régimen económico para que una cooperativa sea considerada sin ánimo de lucro, aparte de los ya exigidos y es que “los

---

<sup>20</sup> Este régimen será desarrollado con mayor amplitud en su apartado correspondiente.

<sup>21</sup> Este régimen será desarrollado con mayor amplitud en su apartado correspondiente.

excedentes o beneficios que puedan generarse en un ejercicio económico, en ningún caso se repartirán entre las personas socias e inversoras, en su caso, destinándose a la consolidación de la entidad y a la creación de empleo, una vez cubiertos los porcentajes relativos a los fondos obligatorios, que tendrán carácter irrepartible.” Con este nuevo supuesto se trata de asegurar, precisamente, el carácter no lucrativo de estas cooperativas.

Remuneración de aportaciones al capital social.

En el art. 80. 1 a) RLSCA se prevé la imposibilidad de que las aportaciones al capital social devenguen un interés superior al interés legal del dinero, que será el determinado anualmente a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado según dispone la Ley 24/1984, de 29 de junio, sobre modificación del tipo de interés legal del dinero.

Retribuciones de las personas socias.

El límite previsto para las retribuciones de las personas socias y personas asalariadas de este tipo de cooperativas previsto en el art. 80. 1 b) RLSCA tiene su justificación en que esta modalidad cooperativa no pretende el lucro de sus personas socias o asalariadas sino que persigue el objetivo general de recuperación de colectivos a los que pretende auxiliar.

Ausencia de ánimo de lucro.

La característica fundamental de este tipo de sociedades es la ausencia de ánimo de lucro entre sus objetivos. Esto posibilita la asimilación de este tipo de entidades a los efectos fiscales, administrativos y demás procedentes a otro tipo de entidades asistenciales de utilidad pública como pueden ser las asociaciones o las fundaciones.

## **ARTÍCULO 85. PERIODOS DE PRUEBA.**

*1. Con independencia del periodo de prueba laboral, que se regulará por lo establecido en la legislación de este orden, los estatutos podrán prever un periodo de prueba societario, durante el cual pueda la sociedad cooperativa contrastar las condiciones de índole empresarial de la persona trabajadora aspirante a socio o socia, y esta, las condiciones societarias que reúne la empresa a la que aspira a ingresar como persona socia.*



*Durante el periodo de prueba societario, tanto el órgano de administración como la persona aspirante a socio o socia podrán resolver el vínculo societario provisional por decisión unilateral sin que ello obste al mantenimiento de la relación laboral. En el caso del órgano de administración, el acuerdo resolutorio deberá estar motivado en las condiciones a que se refiere el párrafo anterior y notificarse a la persona aspirante a socia o socio. Dicho acuerdo no será recurrible ante la Asamblea General o, en su caso, Comité Técnico, a menos que los estatutos establezcan lo contrario.*

*El periodo de prueba societario podrá ser simultáneo o posterior al laboral y, en ningún caso, tendrá una duración superior a doce meses.*

*2. Reglamentariamente, se regulará el estatuto de derechos y obligaciones de las personas aspirantes a socias o socios durante el periodo de prueba societario, en especial, el relativo a su aportación económica y su régimen de participación en los órganos sociales.*

*3. Ninguno de los periodos de prueba a que se refiere este artículo será de aplicación a la persona aspirante que haya ostentado la condición de socio o socia temporal en la sociedad cooperativa durante un periodo de tiempo igual o superior a un año.*

*A cualquiera de dichos periodos, o a ambos, se podrá renunciar por mutuo acuerdo de las partes.*

**Concordancia con el artículo 71 del Reglamento de desarrollo.**

## **ARTÍCULO 71. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA PERSONA ASPIRANTE A SOCIA.**

*1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, los estatutos podrán prever un periodo de prueba societario en los términos dispuestos en dicho artículo y en el siguiente apartado.*

*2. Durante el periodo de prueba societario, las personas aspirantes a socio o socia, tendrán todos los derechos y obligaciones propios de las personas socias comunes con las siguientes excepciones:*

*a) No serán elegibles para los cargos de los órganos sociales.*

*b) De no superar el periodo de prueba, tendrán derecho a la devolución inmediata del importe de la liquidación correspondiente a su aportación al capital social.*

## **Comentario del artículo 85 de la LSCA y 71 del RLSCA.**

### **1. Periodo de prueba societario.**

En este artículo se establece una clara distinción entre el periodo de prueba laboral<sup>22</sup>, que se regirá por la normativa correspondiente; y el periodo de prueba societario que es el que aquí nos ocupa. En cuanto a éste último, la ley remite a los estatutos sociales la duración del mismo. El periodo de prueba se establece para que tanto la cooperativa como la persona aspirante a ser socia comprueben si efectivamente la una y la otra reúnen las características y condiciones para su perfecto encaje societario.

### **2. Disolución del vínculo societario provisional.**

Durante el periodo de prueba, el vínculo societario provisional podrá ser disuelto de manera unilateral tanto por la persona aspirante como por el órgano de administración. Dicha resolución es independiente de la relación laboral que la persona aspirante mantenga con la cooperativa. Esto quiere decir, que aunque se disuelva la relación social, puede subsistir un contrato de trabajo por cuenta ajena si así lo decide la cooperativa. La resolución que ponga fin al periodo de prueba societario deberá estar motivada y deberá notificarse a la persona aspirante a socia. Tan sólo si los estatutos así lo establecen, se podrá recurrir la decisión ante la Asamblea General o, en su caso, Comité Técnico.

### **3. Duración.**

El periodo de prueba podrá iniciarse simultáneamente con el inicio de relación laboral, o bien, establecerse una vez finalizada la misma. En cualquier caso, su duración no podrá ser superior a doce meses.

### **4. Régimen jurídico.**

El Reglamento se encarga de regular el régimen jurídico de los aspirantes a socios en periodo de prueba. Ninguno de los periodos de prueba a que se refiere este artículo será

---

<sup>22</sup> Es el regulado en el art. 14 del Estatuto de los Trabajadores. Consiste en un pacto entre empresario y trabajador por el cual ambos acuerdan que durante un periodo de tiempo determinado cualquiera de ellos podrá rescindir la relación laboral unilateralmente. El resto de derechos y obligaciones del trabajador en periodo de prueba son idénticos a los disfrutados por los trabajadores de plantilla.

de aplicación a la persona aspirante que haya ostentado la condición de socio o socia temporal durante un año o más. La persona aspirante a socia tendrá idénticos derechos y obligaciones que las personas socias comunes con dos excepciones:

- No podrán ser elegibles para los cargos de los órganos sociales.
- Si no supera el periodo de prueba, la persona aspirante a socia tendrá derecho a la devolución inmediata del importe de la liquidación correspondiente a su aportación al capital social.

## 5. Novedades en la nueva regulación

En definitiva, la nueva regulación asimila todavía más el régimen de las personas aspirantes a socias respecto al de los socios ordinarios, introduciendo que los socios aspirantes harán la correspondiente aportación social de manera obligatoria. De ahí que en el Reglamento se establezca que de no superar el periodo de prueba la persona aspirante a socia, tendrá derecho a la devolución inmediata del importe de la liquidación correspondiente a su aportación al capital social. Se trata de salvaguardar así el principio cooperativo referente a la igualdad de derechos y obligaciones de los socios y socias (art. 4. C LSCA).

## **ARTÍCULO 86. RÉGIMEN DISCIPLINARIO.**

*1. Serán consideradas faltas que motiven la exclusión, además de las que, en su caso, establezcan los estatutos, aquellos incumplimientos graves y culpables de la persona socia trabajadora que, con arreglo a la legislación laboral, autoricen su despido.*

*2. Los estatutos o el reglamento de régimen interior regularán los tipos de faltas en que pueda incurrirse en la prestación del trabajo, así como las sanciones que les correspondan. Si los estatutos lo prevén, el órgano de administración podrá delegar, en personas que tengan encomendadas funciones de dirección o control en la estructura laboral de la empresa, la facultad de sancionar a los socios y socias por faltas cometidas en la prestación de su trabajo.*

*3. Reglamentariamente, se regulará el procedimiento a que habrá de sujetarse el régimen disciplinario, en el que se observarán, en todo caso, las siguientes reglas:*

*a) La sanción consistente en la exclusión de los socios o socias solo podrá ser acordada por el órgano de administración.*

*b) El órgano de administración podrá suspender a la persona socia en su empleo, sin que esta tenga derecho al cobro de la parte proporcional de los retornos correspondientes al periodo de tiempo en que se encuentre suspendida, incluidos los anticipos societarios del expresado periodo, durante la tramitación del expediente contradictorio por infracción muy grave. Dicha suspensión podrá mantenerse o acordarse tras la eventual exclusión de la persona socia hasta tanto esta alcance ejecutividad, en el supuesto de infracción de carácter no laboral.*

*c) Las sanciones que se impongan por una infracción de carácter laboral en ningún caso serán recurribles ante el Comité Técnico ni, en su defecto, ante la Asamblea General, y se tramitarán con arreglo a la legislación procesal laboral.*

**Concordancia con los artículos 72 y 73 del Reglamento de desarrollo.**

## **ARTÍCULO 72. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO POR INFRACCIONES DE CARÁCTER LABORAL.**

*1. Son infracciones de carácter laboral aquellas en las que puedan incurrir las personas socias trabajadoras como consecuencia de la prestación del trabajo y estén previstas en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, en los estatutos sociales o en el reglamento de régimen interior.*

*2. La facultad disciplinaria por infracciones de carácter laboral corresponde al órgano de administración, pudiendo delegar esa facultad, conforme a lo establecido en el artículo 86.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, si los estatutos lo prevén, en personas que tengan encomendadas funciones de dirección o control en la estructura laboral de la empresa.*

*Las sanciones impuestas por las personas que tengan esas funciones de dirección o control en la estructura de la empresa serán ejecutivas y podrán impugnarse ante el órgano de administración en un plazo de cinco días hábiles desde su notificación. El órgano de administración deberá resolver en un plazo máximo de treinta días, transcurrido el cual sin haberse resuelto se entenderá que el recurso ha sido estimado. Si no fuese*

*impugnada la sanción por la persona socia trabajadora, se considerará a todos los efectos como si hubiera sido impuesta por el órgano de administración.*

*La impugnación de la sanción ante el órgano de administración interrumpirá o suspenderá el cómputo de plazos de prescripción o caducidad, respectivamente.*

*3. Será necesaria, en todo caso, la apertura de procedimiento disciplinario contradictorio, pudiendo los estatutos establecer la separación en el procedimiento disciplinario entre una fase instructora y otra sancionadora, con arreglo a lo previsto en el artículo 22.2.*

*Será preceptiva la audiencia previa de la persona socia interesada que podrá hacer alegaciones en el plazo que se fije por los estatutos que no podrá ser inferior a diez días ni superior a quince días hábiles.*

*El acuerdo motivado de la sanción habrá de recaer en el plazo máximo de tres meses desde la iniciación del expediente disciplinario y tendrá que ser comunicado por escrito a la persona socia trabajadora interesada, haciendo figurar los hechos que motivan la sanción con indicación de la fecha en que tendrá efecto la misma.*

*Transcurrido el plazo de tres meses sin que hubiese recaído acuerdo, se entenderá automáticamente sobreseído el expediente.*

*4. No podrán acumularse en un mismo procedimiento disciplinario las infracciones de carácter laboral con las infracciones de naturaleza societaria previstas en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en los artículos 22 y 24 del presente Reglamento, debiendo seguir cauces procedimentales independientes.*

*5. Contra las sanciones impuestas por infracciones de naturaleza laboral no cabrá recurso interno alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 86.3.c) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, salvo lo establecido en el apartado 2 del presente artículo.*

### **ARTÍCULO 73. PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE CARÁCTER LABORAL.**

*1. Las infracciones de carácter laboral leves prescriben al mes, las graves a los dos meses y las muy graves a los tres meses.*

*El plazo de prescripción empezará a contar el día en que el órgano de administración o la persona delegada por este órgano con funciones de dirección o control en la estructura laboral de la empresa tenga conocimiento de la comisión de la infracción y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. El plazo se interrumpirá por la incoación del procedimiento disciplinario, pero sólo en el caso de que en el mismo recayese acuerdo y fuese notificado en el plazo de tres meses desde su iniciación.*

*2. Todas las sanciones impuestas por infracciones de carácter laboral prescribirán a los tres meses, contados a partir del día siguiente a aquel en el que el acuerdo sancionador sea comunicado directamente a la persona socia trabajadora.*

### **Comentario del artículo 86 de la LSCA y los artículos 72 y 73 del RLSCA.**

#### **1. Regulación.**

Las faltas que motivan la exclusión están previstas estatutariamente y en la legislación laboral. En este sentido, será falta que dé lugar a la exclusión todo incumplimiento grave y culpable de la persona socia que, de acuerdo con la normativa laboral, lleve aparejada la sanción de despido.

Los estatutos o el reglamento de régimen interior preverán los tipos de faltas en relación a la prestación de trabajo y las sanciones correspondientes. En algunos casos, si así se establece en los estatutos, el órgano de administración podrá delegar en personas que tengan encomendadas funciones de dirección o control en la estructura laboral de la empresa, la facultad de sancionar a los socios y socias por faltas cometidas en la prestación de su trabajo.

#### **2. Procedimiento sancionador.**

Las reglas que necesariamente debe contener el procedimiento sancionador son las siguientes:

- a) El órgano de administración es el único que tiene potestad para acordar la exclusión de socios o socias.
- b) El órgano de administración podrá suspender a la persona socia en su empleo, sin que esta tenga derecho al cobro de la parte proporcional de los retornos correspondientes al periodo de tiempo en que se encuentre suspendida.

- c) Las sanciones por infracción de carácter laboral se tramitarán con arreglo a la legislación procesal laboral y no serán recurribles ante el Comité Técnico ni ante la Asamblea General.

### 3. Novedades en la nueva regulación

Las novedades destacables con respecto a la anterior regulación son:

- d) Que el plazo de impugnación de la sanción ante el órgano de administración pasa de 8 a 5 días.
- e) Que se regula con mayor intensidad el expediente sancionador, diferenciando según se trate de sanciones leves o graves y muy graves. Todo ello con el fin de otorgar las mayores garantías procedimentales.
- f) Que se prohíbe expresamente que puedan acumularse en un mismo procedimiento disciplinario las infracciones de carácter laboral con las infracciones de naturaleza societaria. Esta separación es acertada por cuanto ambos procedimientos reúnen distintas garantías que deberán respetarse según se trata de relación societaria o de relación laboral exclusivamente. Al tratarse de relaciones jurídicas diferentes, resulta coherente que la nueva regulación proceda a aplicar distintos procedimientos sancionadores a una y a otra.

### 4. Prescripción de las infracciones y sanciones

El Reglamento regula de manera específica para las infracciones y sanciones de carácter laboral el plazo de prescripción correspondiente. El fundamento último del instituto de la prescripción es el principio de seguridad jurídica, es decir, que pasado cierto tiempo se elimine la posibilidad de castigar a la persona infractora.

Las infracciones de carácter laboral leves prescriben al mes, las graves a los dos meses y las muy graves a los tres meses. El plazo de prescripción de las infracciones empieza a contar el día en que el órgano de administración o la persona delegada por éste con funciones de dirección o control en la estructura laboral de la empresa tengan conocimiento de la comisión de la infracción. En caso distinto, el plazo empezará a contar a los seis meses de haberse cometido la infracción. Si el acuerdo de incoación ha sido



notificado dentro de los tres meses siguientes a su adopción el plazo de prescripción se verá interrumpido.

Por otro lado, las sanciones impuestas por infracciones de carácter laboral prescriben a los tres meses contados a partir del día siguiente en que el acuerdo sancionador sea notificado a la persona sancionada.

## **ARTÍCULO 87. RÉGIMEN DE PRESTACIÓN DEL TRABAJO.**

*1. Cualquier materia vinculada a los derechos y obligaciones del socio o socia como persona trabajadora será regulada por los estatutos, por el reglamento de régimen interior o por acuerdo de la Asamblea General, respetando las disposiciones que determinen los derechos y garantías legalmente establecidos en el derecho laboral común con las especificidades que se establezcan reglamentariamente. En cualquier caso, las personas socias trabajadoras tienen derecho a percibir periódicamente, en plazo no superior a un mes, anticipos societarios en la cuantía que establezca la Asamblea General, con arreglo a su participación en la actividad cooperativizada. Dichas percepciones no tienen la consideración de salario.*

*2. Reglamentariamente se regularán el régimen de suspensión temporal de la obligación y el derecho de la persona socia trabajadora a prestar su trabajo, así como otros derechos y obligaciones que perderán o que, por el contrario, mantendrán durante la situación de suspensión. En cualquier caso, las socias y socios suspendidos por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor estarán facultados para solicitar la baja voluntaria de la entidad, que se calificará como justificada.*

*3. Las personas socias trabajadoras de una sociedad cooperativa de trabajo, con al menos dos años de antigüedad en la entidad, podrán disfrutar de situaciones de excedencia voluntaria siempre que lo prevean los estatutos sociales, el reglamento de régimen interno o un acuerdo de la Asamblea General. El procedimiento para conceder a las personas socias la excedencia voluntaria, la duración máxima de esta y el régimen aplicable a los socios y socias durante dicha situación serán objeto de regulación reglamentaria.*

*4. A los centros de trabajo de las sociedades cooperativas de trabajo y a sus personas socias les serán de aplicación la legislación sobre salud laboral y prevención de riesgos laborales y sus normas de desarrollo.*

**Concordancia con los artículos 74, 75 y 76 del Reglamento de desarrollo.**

#### **ARTÍCULO 74. RÉGIMEN DE PRESTACIÓN DEL TRABAJO.**

*1. La relación de las personas socias trabajadoras con la sociedad cooperativa es de carácter societario y, por tanto, los estatutos sociales, el reglamento de régimen interior o, en su defecto, la propia Asamblea General, deberán establecer el estatuto profesional de la persona socia trabajadora, en el que habrá de regularse cualquier materia relacionada con los derechos y obligaciones del socio o socia como persona trabajadora y, en todo caso, la forma de organización de la prestación del trabajo; la movilidad funcional y geográfica; la clasificación profesional; el régimen de fiestas, vacaciones y permisos; la jornada, turnos y descanso semanal así como las causas de suspensión o extinción de la prestación laboral.*

*El referido estatuto profesional habrá de respetar las disposiciones relativas al mismo contenidas en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, así como los derechos y garantías legalmente establecidos en el derecho laboral común, con las especificidades reguladas en el presente Reglamento.*

*2. No obstante lo anterior, los derechos y garantías establecidos en la legislación laboral común podrán limitarse, con carácter excepcional, en todo aquello que afecte a la jornada laboral, turnos y descanso semanal así como al régimen de fiestas, vacaciones y permisos, en los siguientes casos:*

*a) Cuando así lo requiera la viabilidad económica de la sociedad cooperativa, acordado por su Asamblea General mediante la mayoría cualificada exigida en el artículo 33.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. Dicho acuerdo habrá de revisarse, al menos anualmente, por el mismo órgano y quórum.*

*b) Cuando lo exija la acumulación de tareas o exceso de pedidos, correspondiendo al órgano de administración la adopción del acuerdo correspondiente, del que deberá dar cuenta detallada a la Asamblea General siguiente a la adopción de dicho acuerdo, para que esta se pronuncie sobre su idoneidad, lo que no afectará a su validez, a menos que*

*aun esté vigente, en cuyo caso podrá ratificarlo o dejarlo sin efecto. Todo ello, con independencia de las responsabilidades que en la esfera interna de la entidad puedan acordarse.*

*En este supuesto, las citadas limitaciones no podrán extenderse más allá de un plazo de tres meses en el período de dos años.*

*En casos de urgencia, también podrá adoptar dicho acuerdo el Presidente de la entidad, en cuyo caso, deberá convocar inmediatamente al órgano de administración, que ratificará, o no, el acuerdo. Todo ello, sin perjuicio de la información a la Asamblea General establecida en el párrafo primero de esta letra y con los mismos efectos.*

*3. Los socios y socias de las cooperativas de trabajo pueden prestar su trabajo a tiempo completo, parcial o hacerlo con carácter estacional.*

*4. Las personas socias trabajadoras tienen derecho a percibir periódicamente, en plazo no superior a un mes, anticipos societarios en la cuantía que establezca la Asamblea General, con arreglo a su participación en la actividad cooperativizada. Dichas percepciones no tienen la consideración de salario.*

*5. La persona socia trabajadora, previo aviso y justificación, tendrá derecho a ausentarse del trabajo, para realizar funciones de representación en el movimiento cooperativo.*

*6. Serán de aplicación a los centros de trabajo de estas cooperativas y a sus personas socias las normas sobre salud laboral y prevención de riesgos laborales.*

## **ARTÍCULO 75. SUSPENSIÓN.**

*1. En las cooperativas de trabajo se suspenderá temporalmente la obligación y el derecho de la persona socia trabajadora a prestar su trabajo, con pérdida de los derechos y obligaciones económicas de dicha prestación, por las causas siguientes:*

*a) Incapacidad temporal de la persona socia trabajadora.*

*b) Maternidad o paternidad de la persona socia trabajadora, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y adopción o acogimiento tanto preadoptivo como permanente o simple, con los requisitos y en la forma prevista en la legislación laboral común.*

*c) Privación de libertad de la persona socia trabajadora, mientras no exista sentencia condenatoria firme.*

*d) Excedencia forzosa, por designación o elección para un cargo público o en el movimiento cooperativo, que imposibilite la asistencia al trabajo de la persona socia trabajadora.*

*e) Fuerza mayor temporal.*

*f) Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.*

*g) Por razones disciplinarias.*

*h) Por decisión de la socia trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.*

*i) Las consignadas válidamente en los estatutos sociales.*

*2. Al cesar las causas de suspensión, la persona socia trabajadora recobrará la plenitud de sus derechos y obligaciones como persona socia y tendrá derecho a la reincorporación al puesto de trabajo reservado.*

*3. Para la suspensión por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivada de fuerza mayor temporal, la Asamblea General, salvo previsión estatutaria en otro sentido y en votación secreta, deberá declarar la necesidad de que, por alguna de las mencionadas causas, pasen a la situación de suspensión la totalidad o parte de las personas socias trabajadoras que integran la cooperativa, así como el tiempo que ha de durar la suspensión y designar las personas socias trabajadoras concretas que han de quedar en situación de suspensión. Las personas socias suspendidas estarán facultadas para solicitar la baja voluntaria en la entidad, que se calificará como justificada.*

*4. Las personas socias trabajadoras incurso en los supuestos a), b), e), f), g) y h) del apartado 1, mientras estén en situación de suspensión, conservarán el resto de sus derechos y obligaciones como persona socia.*

*Las personas socias trabajadoras incurso en los supuesto c) y d) del citado apartado, mientras estén en situación de suspensión, además de la pérdida de los derechos económicos derivados de dicha suspensión de la actividad cooperativizada, carecerán*

*asimismo del derecho al sufragio activo y pasivo para cargos de órganos sociales de la cooperativa.*

*5. En los supuestos a), b), c), d), g), h) e i) del apartado 1, las cooperativas de trabajo, para sustituir a las personas socias trabajadoras en situación de suspensión, podrán celebrar contratos de trabajo de duración determinada con personas trabajadoras asalariadas en los que conste la persona a la que sustituye y la causa que lo motiva. Estas personas trabajadoras asalariadas no serán computables a efectos del porcentaje a que se refiere el artículo 90.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

## **ARTÍCULO 76. EXCEDENCIA VOLUNTARIA.**

*1. Las personas socias trabajadoras con, al menos, dos años de antigüedad en la sociedad cooperativa, podrán disfrutar de situaciones de excedencia voluntaria siempre que lo prevean los estatutos sociales, el reglamento de régimen interior, o en su defecto, mediante acuerdo de la Asamblea General, por un plazo no menor de cuatro meses y no mayor de cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo socio o socia si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.*

*2. La excedencia será solicitada por la persona socia trabajadora por escrito al órgano de administración con un mes de antelación.*

*3. La situación de las personas socias trabajadoras en situación de excedencia voluntaria se ajustará a las siguientes normas:*

*a) No tendrán derecho a la reserva de su puesto de trabajo, sino únicamente el derecho preferente al reingreso en las vacantes de los puestos de trabajo iguales o similares al suyo, que hubieran o se produjeran en la cooperativa. Cuando la excedencia sea por cuidado de menores a su cargo o de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, conforme a las exigencias previstas para ambos supuestos en la legislación laboral común, se producirá la reserva de puesto de trabajo, al menos, durante el primer año.*

*b) Sus demás derechos y obligaciones serán los establecidos en el párrafo segundo del apartado 4 del artículo anterior para las personas socias trabajadoras incursas en excedencia forzosa.*

*4. Una vez finalizada la excedencia voluntaria, la persona socia trabajadora deberá solicitar, dentro del mes siguiente, su reingreso en la cooperativa por escrito dirigido al órgano de administración. Salvo que exista reserva de puesto, el órgano de administración tendrá la obligación de comunicar por escrito a la persona en excedencia, que haya solicitado su reingreso, la existencia de vacantes de los puestos de trabajos iguales o similares al suyo en la cooperativa. Si la persona en excedencia no se reincorpora cuando sea requerido para ello se procederá a su baja obligatoria.*

*5. Si transcurrido el periodo máximo de excedencia voluntaria de cinco años, la persona en excedencia no solicitara su reingreso se procederá a su baja obligatoria.*

### **Comentario del artículo 87 de la LSCA y los artículos 74, 75 y 76 del RLSCA.**

1. Regulación. El régimen de prestación de trabajo de los socios se regulará en los estatutos sociales, en el reglamento de régimen interior<sup>23</sup> o por acuerdo de la Asamblea General. En todo caso, se deberán respetar los derechos y garantías legalmente establecidos en el derecho laboral común, aunque el Reglamento podrá establecer ciertas especificidades. Uno de los derechos del socio, es el relativo a percibir periódicamente, en plazo no superior a un mes, anticipos societarios<sup>24</sup> en la cuantía que establezca la Asamblea General, con arreglo a su participación en la actividad cooperativizada.

2. Una de las novedades con respecto a la legislación anterior consistente en la configuración de un mecanismo excepcional de flexibilidad en la prestación del trabajo por las personas socias, que podrá activarse en determinados casos, con carácter temporal, y que afectará a los derechos y garantías establecidos en el derecho laboral común. Esos casos son a) cuando así lo requiera la viabilidad económica de la sociedad cooperativa y b) cuando lo exija la acumulación de tareas o exceso de pedidos (art. 74 del Reglamento).

3. Suspensión. El Reglamento se encarga de regular la suspensión temporal de la obligación y el derecho de la persona socia a prestar su trabajo en la cooperativa, así como los derechos que se perderán o mantendrán durante la situación de suspensión. En

---

<sup>23</sup> El RRI es un desarrollo de los estatutos sociales. Su existencia no es obligatoria, y suele contener específicas normas sobre la organización del trabajo.

<sup>24</sup> Los anticipos societarios son percepciones a cuenta de los excedentes de la cooperativa que no tienen la consideración de salario. La cooperativa tiene la obligación de practicar sobre los mismos el porcentaje de retención correspondiente, en función de la retribución bruta anual, las circunstancias familiares y personales del socio, etc.

los supuestos en que por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor se hallen los socios en periodo de suspensión podrán solicitar la baja voluntaria, que en todo caso se calificará como justificada. Durante este periodo la persona socia pierde los derechos y obligaciones económicas por la prestación de trabajo. Sin embargo, mantendrá el resto de derechos y obligaciones inherentes a toda persona socia de trabajo.

4. Excedencia. Los estatutos sociales podrán prever la posibilidad de que la persona socia con dos años de antigüedad pueda disfrutar de situación de excedencia voluntaria.<sup>25</sup> En cuanto al procedimiento de concesión, duración y régimen aplicable a los socios habrá que estar a la previsión reglamentaria.

Las principales características son:

- Para poder disfrutar de una excedencia voluntaria en una cooperativa de trabajo, esta posibilidad debe estar contemplado en los estatutos sociales, en el RRI o debe existir un acuerdo favorable por parte de la Asamblea General.
- La excedencia se puede solicitar por un plazo de entre cuatro meses y cinco años.
- Un mismo socio no podrá disfrutar de más de un periodo de excedencia en un periodo de cuatro años.
- El procedimiento para su concesión se inicia mediante solicitud de la persona socia al órgano de administración realizada con un mes de antelación al periodo de inicio de la situación de excedencia.
- El derecho a la reserva de puesto de trabajo se rige por las mismas normas que las previstas para en la normativa laboral común.

A diferencia de la normativa anterior, que simplemente se limitaba a regular la posibilidad de la existencia de la excelencia voluntaria, con la regulación contenida en el artículo 76 del Reglamento se establece un régimen mucho más completo en el que se intentan

---

<sup>25</sup> El art. 46 del Estatuto de los Trabajadores regula los supuestos de excedencia voluntaria y excedencia forzosa. Son situaciones de suspensión del contrato de trabajo a solicitud del trabajador. La excedencia forzosa es obligatoria para la empresa y comporta la conservación del puesto de trabajo y su período se tiene como trabajado a efectos de cómputo de antigüedad. Las causas que hacen surgir este derecho son: por designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo; por realización de funciones sindicales de ámbito provincial o superior. En cambio, la excedencia voluntaria requiere una antigüedad de un año en la empresa, no conlleva reserva del puesto de trabajo aunque sí derecho preferente de reingreso cuando haya vacante, y su duración será entre cuatro meses y cinco años.



resolver todas aquellas cuestiones que puedan afectar a dicha figura (cuando se puede ejercer este derecho, que tiempo de disfrute existe, órgano al que ha de solicitarse, derechos y obligaciones, etc.).

Los derechos y obligaciones de la persona socia durante el disfrute de una excedencia voluntaria serán los mismos que los previstos para las personas socias trabajadoras incursas en una excedencia forzosa, a saber:

- Carecerán de los derechos económicos derivados de la prestación de trabajo.
- Carecerán del derecho al sufragio activo y pasivo para cargos de órganos sociales de la cooperativa.

5. Salud laboral y prevención riesgos laborales. En materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales habrá que estar a lo previsto en la normativa reguladora de esta materia<sup>26</sup> que le será de aplicación a los centros de trabajo de cooperativas de trabajo y a sus personas socias.

## **ARTÍCULO 88. BAJA OBLIGATORIA POR CAUSAS ECONÓMICAS, TECNOLÓGICAS O DE FUERZA MAYOR.**

*1. Cuando, por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, para mantener la viabilidad empresarial de la sociedad cooperativa, sea preciso, a criterio de la Asamblea General, reducir con carácter definitivo el número de personas socias de la sociedad cooperativa, la Asamblea General, en votación secreta, deberá concretar quiénes deben causar baja en la entidad, la cual tendrá la consideración de baja obligatoria justificada.*

*2. Las expresadas causas serán debidamente constatadas por la autoridad laboral con arreglo a lo dispuesto en el procedimiento establecido en la legislación aplicable.*

*3. Quienes causen baja obligatoria, conforme a lo establecido en el apartado 1, tendrán derecho a la devolución de su aportación social en el plazo de un año, salvo que los estatutos, desde la constitución de la sociedad cooperativa o con una antelación no inferior a dos años a la fecha de las mencionadas bajas obligatorias, hubieran establecido,*

---

<sup>26</sup> Sería de aplicación lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo.

*expresamente, que no sea de aplicación este plazo especial de reembolso de las aportaciones.*

## **Comentario del artículo 88 de la LSCA.**

### **1. Procedimiento.**

Este artículo regula el procedimiento a seguir en caso de existir una causa económica, tecnológica o de fuerza mayor que imposibilite mantener el número de socios existente en una cooperativa de trabajo. La decisión se adoptará en la Asamblea General, mediante una votación secreta de las personas que deben causar baja en la entidad. Las personas que salgan elegidas causarán baja obligatoria que tendrá el calificativo de justificada.

### **2. Causas.**

Sin embargo, el procedimiento anterior no se podrá llevar a cabo si no se ha constatado debidamente por la autoridad laboral con arreglo al procedimiento establecido al efecto que verdaderamente existen las causas que motivan la baja obligatoria de socios.

### **3. Régimen jurídico de los socios.**

Finalmente, aquellos socios que conforme a lo previsto en este artículo causen baja obligatoria tendrán derecho a la devolución de su aportación social en el plazo de un año, aunque estatutariamente se puede prever que no sea de aplicación este plazo especial de reembolso de aportaciones. Para ello, es necesario que se hubiera previsto así desde la constitución de la cooperativa o con antelación mínima de dos años a la fecha en que se produzcan las bajas obligatorias.

## **ARTÍCULO 89. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES.**

*1. Las sociedades cooperativas de trabajo podrán establecer estatutariamente la libre transmisión de participaciones sociales, conforme a las siguientes reglas, que serán objeto de desarrollo reglamentario:*

*a) Entre socios y socias de la entidad regirá la plena libertad de transmisión de participaciones, bastando una mera comunicación al órgano de administración de la transmisión prevista y de la ya realizada.*

*b) En el supuesto de transmisión a una tercera persona, el órgano de administración deberá constatar que quien aspire a persona socia reúne los requisitos objetivos de admisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1. También para este supuesto se establece un derecho de preferente adquisición a favor de las personas trabajadoras de la entidad y de la propia sociedad, en este orden, que en ambos casos gozarán del correspondiente derecho de retracto.*

*c) Si el importe de las participaciones transmitidas supera su eventual valor para el caso de liquidación al socio o socia, un diez por ciento del exceso se destinará al Fondo de Reserva Obligatorio.*

*2. La libre transmisión de participaciones no exonera a quien vaya a ejercitarla de la obligación de preaviso que alcanza a todo socio o socia que pretende causar baja.*

*3. El órgano de administración podrá acordar la devolución de todo o parte de la aportación social a la persona socia que causa baja en la sociedad cooperativa sin lograr transmitirla, tomando en consideración la situación de la entidad y la contribución a esta del socio o socia saliente.*

**Concordancia con el artículo 77 del Reglamento de desarrollo.**

## **ARTÍCULO 77. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES.**

*1. Estatutariamente se podrá establecer la libre transmisión, total o parcial, de participaciones sociales que se regirá por lo establecido en el artículo 89 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y en el presente artículo.*

*En caso de que los estatutos establezcan la libre transmisión parcial de las participaciones, el porcentaje transmisible de las aportaciones sociales deberá ser igual, dentro de su clase, obligatoria o voluntaria, para cada una de las personas socias de la entidad.*

*2. La transmisión de participaciones sociales se realizará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 89.1.b) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, respecto de los derechos de preferente adquisición, conforme a las siguientes normas:*

*a) Cuando una persona titular de participaciones sociales se proponga transmitir la totalidad o parte de dichas participaciones a persona que no ostente la condición de socia deberá comunicarlo por escrito al órgano de administración de la sociedad cooperativa de modo que asegure su recepción, haciendo constar el número de participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente, las cualidades en función de las cuales reuniría los requisitos para ser socio o socia, el precio de adquisición y demás condiciones de la transmisión. El órgano de administración de la sociedad cooperativa, tras constatar que el aspirante a persona socia reúne los requisitos objetivos de admisión, lo notificará a las personas trabajadoras no socias con contrato laboral por tiempo indefinido dentro del plazo de quince días, a contar desde la fecha de recepción de la comunicación. La comunicación de la persona socia tendrá el carácter de oferta irrevocable. Las personas trabajadoras no socias contratadas por tiempo indefinido podrán adquirirlas dentro de los quince días siguientes a la notificación.*

*En caso de falta de ejercicio del derecho de adquisición preferente a que se refiere el párrafo anterior, el órgano de administración notificará la propuesta de transmisión al resto de las personas trabajadoras sin contrato de trabajo por tiempo indefinido, los cuales podrán optar a la compra dentro de los quince días siguientes a la recepción de la notificación.*

*b) Cuando sean varias las personas que ejerciten el derecho de adquisición preferente a que se refiere la letra anterior, las acciones o participaciones sociales se distribuirán entre todos ellos por igual.*

*c) En el caso de que ninguna persona trabajadora haya ejercitado el derecho de adquisición preferente, las participaciones podrán ser adquiridas por la sociedad cooperativa, dentro de los quince días siguientes a contar desde el día en que hubiera finalizado el plazo conferido a las personas trabajadoras sin contrato indefinido.*

*d) En todo caso, transcurridos tres meses a contar desde la comunicación del propósito de transmisión por la persona socia trabajadora sin que nadie hubiera ejercitado sus*

*derechos de adquisición preferente, ni el órgano de administración hubiera denegado la admisión quedará libre aquella para transmitir las participaciones de su titularidad.*

*3. Si en el plazo de seis meses desde su comunicación, la persona socia no hubiese procedido a la transmisión de las participaciones deberá iniciar de nuevo el procedimiento establecido en el apartado anterior.*

*4. Una vez transmitidas las participaciones sociales, las personas transmitente y adquirente deberán comunicar mediante escrito conjunto, dentro de los quince días naturales siguientes, dicha circunstancia al órgano de administración, haciendo constar el número de participaciones transmitidas, la identidad del adquirente, las cualidades en función de las cuales reúne los requisitos para ser socio o socia, el precio de adquisición y demás condiciones de la transmisión.*

*Tanto las personas trabajadoras, previa notificación de la sociedad cooperativa, como la propia entidad dispondrán, en el mismo orden que el previsto en el apartado 2, de un derecho de retracto, para el caso en el que la transmisión no se haya realizado conforme a las condiciones establecidas en la comunicación previa, pudiendo ejercitarlo dentro del mes siguiente a la fecha en que comunicó dicha transmisión.*

*5. Para que la transmisión de participaciones sociales se lleve a efecto, será necesario que, previamente, la persona socia transmitente salde las deudas que, eventualmente, tenga con la sociedad cooperativa.*

*Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 89.1.c) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, si el importe de las participaciones transmitidas supera su eventual valor para el caso de liquidación al socio o socia, corresponderá a dicha persona el abono del diez por ciento del exceso al Fondo de Reserva Obligatorio.*

*6. Salvo previsión estatutaria en contra, no podrá someterse a ninguno de los períodos de prueba, establecidos en el artículo 85 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, a los socios y socias que accedan a esta condición mediante la adquisición de participaciones sociales a que se refiere este artículo.*

*En el supuesto de que los estatutos sociales supediten el acceso a la condición de persona socia a la superación de alguno de dichos períodos de prueba, aquellos deberán regular expresamente el régimen aplicable a la relación entre la persona adquirente de las*

*participaciones y la sociedad cooperativa, en el caso de no superar dichos períodos, en especial, el de carácter económico.*

*7. Las participaciones sociales adquiridas por la sociedad cooperativa mediante el ejercicio de los derechos de adquisición preferente o de retracto previstos en este artículo, no podrán exceder del cinco por ciento del capital social. Estas participaciones deberán ser transmitidas en el plazo de seis meses desde su adquisición y no podrá efectuarse a un precio inferior al satisfecho para obtenerlas. Si las participaciones no fueran transmitidas en el plazo señalado, la sociedad deberá acordar inmediatamente su amortización y la reducción del capital.*

*Asimismo, mientras permanezcan en poder de la sociedad adquirente, quedarán en suspenso todos los derechos correspondientes a las participaciones propias.*

*La sociedad cooperativa no podrá anticipar fondos, conceder créditos o préstamos, prestar garantía, ni facilitar asistencia financiera para la adquisición de sus propias participaciones.*

## **Comentario del artículo 89 de la LSCA y del artículo 77 del RLSCA.**

### **1. Novedad en la nueva regulación.**

Este artículo es una novedad, pues desarrolla una previsión inédita en la normativa anterior, que se recoge por primera vez en el artículo 89 de la Ley. En el artículo 77 del Reglamento se desarrolla la regulación de la transmisión de participaciones sociales a terceras personas, precisándose el régimen de responsabilidad respecto a las deudas sociales de las personas socias transmitentes así como la inaplicación de los periodos de prueba a las personas adquirentes, salvo previsión estatutaria.

### **2. Requisitos para la transmisión de participaciones.**

Las reglas para la transmisión son las siguientes:

- Para transmitir participaciones entre socios se debe comunicar al órgano de administración antes y después.
- En caso de transmisión a persona distinta del socio, el órgano de administración deberá constatar que quien aspire a persona socia reúne los requisitos objetivos de

admisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1. Además, existe el derecho de adquisición preferente a favor de los trabajadores de la entidad y de la propia sociedad con el correspondiente derecho de retracto.

- Cuando el importe de las participaciones transmitidas supere el valor en caso de liquidación de socio, un 10% del exceso se destinará al Fondo de Reserva Obligatorio.

En todo caso, deberá respetarse la obligación de preaviso del socio que quiera causar baja.

Habrán casos en que el órgano de administración acuerde la devolución de todo o parte de la aportación social a la persona socia que causa baja en la sociedad cooperativa sin lograr transmitir sus participaciones. Para ello tendrá presente la situación en que se encuentre la entidad en ese momento y también la contribución hecha por el socio saliente a la misma.

### 3. Procedimiento de transmisión de participaciones.

El procedimiento de transmisión de participaciones es el previsto en el art. 77.2 RLSCA. La persona titular de participaciones sociales deberá comunicar por escrito al órgano de administración de la sociedad cooperativa su intención de transmitir la totalidad o parte de sus participaciones a persona que no ostente la condición de socia. En el referido escrito deberá constar: el número de participaciones a transmitir, la identidad del adquirente, las cualidades en función de las cuales reuniría los requisitos para ser socio o socia, el precio de adquisición y demás condiciones de la transmisión. El órgano de administración de la sociedad cooperativa deberá constatar que la persona aspirante a socia reúne los requisitos objetivos de admisión. En caso de reunirlos, el órgano de administración lo notificará en el plazo de quince días a las personas trabajadoras no socias con contrato laboral por tiempo indefinido. Estas personas podrán adquirir las participaciones en el plazo de quince días desde la notificación. Si no lo hicieran, el órgano de administración notificará la propuesta de transmisión al resto de las personas trabajadoras sin contrato de trabajo por tiempo indefinido, que podrán ejercitar su derecho de adquisición<sup>27</sup> preferente en el plazo de quince días. Si varias personas ejercitan este derecho, las

---

<sup>27</sup> El derecho de adquisición preferente es un derecho real que otorga a su titular la facultad de realizar la adquisición de una cosa excluyendo o desplazando a cualquier otro posible adquirente. El futuro adquirente tiene ya, antes de adquirir la cosa, un derecho real sobre ésta.



acciones o participaciones sociales se distribuirán entre todas ellas por igual. Cuando ninguna persona socia haya ejercitado el derecho de adquisición preferente, las participaciones podrán ser adquiridas por la cooperativa, en un plazo de quince días a contar desde el transcurso de los quince días concedidos a las personas trabajadoras sin contrato indefinido para ejercitar su derecho. Por último, la persona que propuso transmitir sus participaciones podrá hacerlo cuando hayan transcurrido tres meses desde que comunicó dicha intención y nadie haya ejercitado su derecho de adquisición preferente o el órgano de administración no haya denegado la admisión de nueva persona adquirente como persona socia. El plazo para hacerlo es de seis meses desde su comunicación.

En la segunda fase del procedimiento, regulada en el art. 77. 4 RLSCA, se prevé la obligación de la persona transmitente y adquirente de comunicar la transmisión mediante escrito conjunto al órgano de administración. El plazo de presentación del escrito es de quince días naturales desde que se produjo la transmisión y su contenido ha de ser el siguiente: debe constar el número de participaciones transmitidas, la identidad del adquirente, las cualidades en función de las cuales reúne los requisitos para ser socio o socia, el precio de adquisición y demás condiciones de la transmisión. Las personas trabajadoras y la cooperativa tendrán derecho de retracto<sup>28</sup> en los casos en que la transmisión no se haya realizado conforme a las condiciones establecidas en la comunicación previa, pudiendo ejercitarlo dentro del mes siguiente a la fecha en que comunicó dicha transmisión.

En el apartado 5 del art. 77 RLSCA se prevé otra condición a la transmisión de participaciones consistente en la necesidad de saldar todas las deudas que la persona transmitente tenga con la cooperativa antes de proceder a la transmisión.

#### 4. Periodo de prueba.

Cuando la condición de socio sea adquirida en virtud del procedimiento anteriormente expuesto, no se podrá prever la existencia de periodo de prueba salvo que así lo dispongan los estatutos sociales.

#### 5. Adquisición de participaciones por la cooperativa.

---

<sup>28</sup> El derecho de retracto es un tipo de derecho de adquisición preferente regulado en el art. 1507 del Código Civil que consiste en el derecho de una persona a adquirir un bien con preferencia a otra.

En los casos en los que la sociedad cooperativa haya adquirido participaciones sociales mediante su ejercicio del derecho de adquisición preferente o de retracto éstas no podrán superar el 5% del capital social. Además, las participaciones deberán ser transmitidas en el plazo de seis meses desde la adquisición a un precio igual o superior al satisfecho para obtenerlas. Si dicha transmisión no se produjera, la cooperativa está obligada a la amortización de las participaciones y consecuente reducción del capital. En cualquier caso, la cooperativa no podrá anticipar fondos, conceder créditos o préstamos, prestar garantía, ni facilitar asistencia financiera para la adquisición de sus propias participaciones.

## **ARTÍCULO 90. TRABAJO POR CUENTA AJENA Y SUCESIÓN DE EMPRESA.**

*1. El número de jornadas legales realizadas por cuenta ajena no podrá ser superior al cincuenta por ciento del total de las realizadas por las personas socias trabajadoras en cómputo anual. En todo caso, computarán a los efectos del porcentaje anterior las jornadas realizadas por los trabajadores y trabajadoras en situación de prueba societaria.*

*2. Reglamentariamente, se determinarán las jornadas que se excluyen del citado cómputo, al resultar constitutivas de determinadas situaciones o contratos que en atención a sus peculiaridades justifiquen dicha exclusión.*

*3. Entre las jornadas a que se refiere el apartado anterior se incluirán las realizadas por los trabajadores y trabajadoras a los que habiéndoseles ofrecido por parte del órgano de administración acceder a la condición de socio o socia rehúsen expresamente dicho ofrecimiento.*

*4. Cuando una sociedad cooperativa de trabajo cese, por causas no imputables a la misma, en una contrata de servicios o concesión administrativa y un nuevo empresario se hiciere cargo de estas, las personas socias trabajadoras que vinieran desarrollando su actividad en las mismas tendrán los mismos derechos y deberes que les hubieran correspondido, de acuerdo con la normativa vigente, como si hubiesen prestado su trabajo en la sociedad cooperativa en la condición de trabajadores o trabajadoras por cuenta ajena, conforme a la legislación estatal aplicable.*

## **Concordancia con el artículo 78 del Reglamento de desarrollo.**

### **ARTÍCULO 78. TRABAJO POR CUENTA AJENA.**

*1. De conformidad con el artículo 90.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, el número de jornadas legales realizadas por cuenta ajena no podrá ser superior al cincuenta por ciento del total de las realizadas por las personas socias trabajadoras, en cómputo anual. En todo caso, computarán a los efectos del porcentaje anterior las jornadas realizadas por los trabajadores y trabajadoras en situación de prueba societaria.*

*2. No se computarán en el porcentaje anterior las jornadas realizadas por:*

*a) Las personas trabajadoras integradas en la sociedad cooperativa por subrogación legal o convencional.*

*b) Las personas trabajadoras que habiéndosele ofrecido por parte de la sociedad cooperativa acceder a la condición de persona socia rehúsen expresamente dicho ofrecimiento.*

*c) Las personas trabajadoras que sustituyan a personas socias trabajadoras que tengan suspendido temporalmente la obligación y el derecho a prestar su trabajo conforme a lo previsto en el artículo 75.5.*

*d) Las personas trabajadoras contratadas para ser puestas a disposición de empresas usuarias cuando la sociedad cooperativa actúe como empresa de trabajo temporal.*

*e) Las personas con contratos de trabajo en prácticas y para la formación.*

*f) Las personas trabajadoras contratadas en virtud de cualquier disposición de fomento de empleo de personas con discapacidad u otros colectivos con especiales dificultades de inserción laboral.*

*g) Las personas trabajadoras contratadas por periodos no superiores a seis meses para una obra o servicio determinado o por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos.*

*h) Las personas trabajadoras incorporadas como consecuencia de un contrato de la sociedad cooperativa con la Administración o con empresas, consorcios, fundaciones y demás entidades participadas mayoritariamente por las Administraciones Públicas.*

*3. Para poder excluir del cómputo a las personas trabajadoras a que hace referencia la letra b) del apartado anterior, la sociedad cooperativa deberá contar con la documentación acreditativa del rehúse de dichas personas a acceder a la condición de persona socia.*

## **Comentario del artículo 90 de la LSCA y 78 del RLSCA.**

### **1. Novedades en la nueva regulación.**

La Ley aumenta el porcentaje máximo de jornadas legales<sup>29</sup> por cuenta ajena, pasando del 30% al 50%, es decir que en cómputo anual, el número de jornadas legales realizadas por los socios trabajadores no podrá ser inferior a dicho porcentaje. Se trata así de reconocer el principio de libre admisión y de participación de los que prestan su trabajo personal en la actividad cooperativizada. La norma trata de promover que el trabajo se preste desde la condición de socio y no desde la condición de empleado en concordancia con los principios y valores de esta forma societaria. Sin embargo, la nueva regulación permite una mayor flexibilidad en la contratación de trabajadores por cuenta ajena con la finalidad de dar respuesta a los problemas que dan cuando, por ejemplo, una persona asalariada rebase el límite de jornadas legales y no pueda ser admitida objetivamente como socia por no cumplir los requisitos para ello.

### **2. Periodo de prueba societario.**

Se prevé que las jornadas realizadas por los trabajadores y trabajadores en situación de prueba societaria serán computables dentro del porcentaje indicado. Será el Reglamento el que se encargue de regular las jornadas que puedan estar excluidas del cómputo. Sin embargo, la Ley establece que en todo caso se excluirán las realizadas por los trabajadores y trabajadores a los que el órgano de administración les ha ofrecido acceder a la condición de socio o socia y hayan rehusado expresamente el ofrecimiento.

### **3. Supuestos excluidos del cómputo de jornadas legales.**

---

<sup>29</sup> De acuerdo con el art. 34 del Estatuto de los Trabajadores la jornada es el tiempo efectivo de prestación laboral de los trabajadores. La jornada máxima legal de acuerdo con este artículo es de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.

Por lo tanto, la nueva regulación establece nuevos supuestos respecto a la normativa anterior, que se excluyen del cómputo a efectos del porcentaje anterior que son: Las personas trabajadoras que sustituyan a personas socias trabajadoras que tengan suspendido temporalmente la obligación y el derecho a prestar su trabajo conforme a lo previsto en el artículo 75.5; Las personas trabajadoras contratadas para ser puestas a disposición de empresas usuarias cuando la sociedad cooperativa actúe como empresa de trabajo temporal; Las personas trabajadoras incorporadas como consecuencia de un contrato de la sociedad cooperativa con la Administración o con empresas, consorcios, fundaciones y demás entidades participadas mayoritariamente por las Administraciones Públicas.

#### 4. Sucesión.

La cooperativa de trabajo puede cesar por causas no imputables a la misma. En estos casos la cooperativa podrá ser sucedida<sup>30</sup> por una contrata de servicios o concesión administrativa<sup>31</sup> para que un nuevo empresario se hiciere cargo de la misma. En este supuesto, las personas socias trabajadoras tendrán los mismos derechos que si hubiesen prestado su trabajo en la sociedad cooperativa en la condición de trabajadores o trabajadoras por cuenta ajena. En los casos en que la empresa transferida tenga trabajadores no socios, amparados por determinados convenio sectorial o acuerdo plural, con socios trabajadores que no se regían por el mismo, la precisión de las condiciones del “nuevo” trabajador subrogado, antes socio, deberá realizarse mediante el correspondiente juicio de equidad.

### **ARTÍCULO 91. SOCIOS Y SOCIAS TEMPORALES.**

*1. En las sociedades cooperativas de trabajo podrán integrarse personas socias con el carácter de temporales cuando aquellas vayan a realizar o estén realizando una actividad*

---

<sup>30</sup> La sucesión de empresa está regulada en el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores y consiste en “El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente.”

<sup>31</sup> La concesión administrativa es un negocio jurídico público que supone la atribución por una Administración pública a uno o más sujetos de determinadas facultades, derechos o deberes de los que anteriormente carecía.

*sensiblemente superior a la que venían desarrollando, con origen en un encargo o contrato de duración determinada, igual o superior a seis meses.*

*2. La sociedad cooperativa llevará un libro específico para estas socias y socios en el que constarán, además de las menciones que, con carácter general, se exijan reglamentariamente, la causa específica a la que se anuda la condición de persona socia.*

*El estatuto jurídico de estos socios y socias se determinará reglamentariamente, tomando en consideración el carácter temporal de su relación con la entidad, sin que puedan pertenecer a la entidad bajo este título por un plazo superior a seis años y sin que el conjunto de sus votos pueda representar más de un tercio de la suma de los correspondientes a las personas socias trabajadoras.*

**Concordancia con el artículo 79 del Reglamento de desarrollo.**

## **ARTÍCULO 79. ESTATUTO JURÍDICO DE LOS SOCIOS Y SOCIAS TEMPORALES.**

*1. Las personas socias temporales tendrán en la cooperativa en la que se integren el mismo estatuto jurídico que las personas socias comunes, con las siguientes particularidades:*

*a) Una vez finalizado o resuelto el encargo o contrato y, en su caso, las sucesivas prórrogas que motivaron la integración de estos socios y socias, perderán dicha condición siéndoles de aplicación lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, sobre las personas socias que dejan de reunir las cualidades objetivas para mantener su condición.*

*En cualquier caso, nadie podrá pertenecer a una cooperativa a título de socio o socia temporal por un plazo acumulado superior a seis años, a cuyo término causará baja en la entidad, mediante acuerdo del órgano de administración, en las condiciones establecidas en el párrafo anterior o, en su defecto, devendrá socio o socia común.*

*b) Sólo podrá exigirse a las personas socias temporales que realicen aportaciones al capital social en el supuesto de que el contrato que motive su incorporación se extienda, al menos, a dos años.*

*En dicho supuesto, el valor de la aportación exigible a la persona socia temporal no superará en ningún caso el cincuenta por ciento del importe de la exigible como aportación obligatoria a la persona socia común.*

*El plazo de devolución de dichas aportaciones no excederá de un año desde que se produzca la baja en la entidad.*

*c) Las personas socias temporales tendrán, en todo caso, derecho a percibir con carácter mensual anticipos laborales, que no tendrán la consideración de salarios, en cuantía no inferior a la establecida en el convenio vigente en la zona para los trabajadores por cuenta ajena de la misma actividad y categoría.*

*d) Las personas socias temporales tendrán derecho, en sus respectivas cooperativas al sufragio activo y pasivo para la elección de los órganos sociales, siempre que, en el momento de proceder a la renovación del órgano de que se trate, la duración que reste del encargo o contrato origen de su incorporación sea igual o superior a la del mandato de dicho órgano.*

*e) Los estatutos sociales o el acuerdo social de incorporación podrán establecer reglas de ponderación del voto entre las personas socias temporales y las personas socias comunes. Cuando las expresadas reglas las establezca el órgano de administración, deberán ser ratificadas o modificadas, en su caso, por la primera Asamblea General, provocando la modificación estatutaria correspondiente.*

*En cualquier caso, el conjunto de votos de las personas socias temporales no podrá representar más de un tercio de la suma de los correspondientes a las personas socias trabajadoras.*

*2. La sociedad cooperativa llevará un libro específico para estos socios y socias en el que constarán, además de las menciones exigidas, con carácter general, en el artículo 57.1.a) respecto al libro registro de personas socias y de aportaciones al capital social, la causa específica a la que se anuda la condición de persona socia.*

## **Comentario del artículo 91 de la LSCA y del artículo 79 del RLSCA.**

1. Definición y fundamento. La figura del socio temporal está prevista para aquellos casos en los que la cooperativa vaya a realizar o esté realizando una actividad



sensiblemente superior a la que venía desarrollando. La justificación objetiva de este aumento de actividad puede venir derivada de un encargo o contrato de duración determinada. En cualquier caso, estos socios podrán integrarse con una duración igual o superior a seis meses. La sociedad cooperativa tiene la obligación de llevar un libro específico para estos socios en el que entre otros aspectos conste la causa o motivo del que derive la condición de persona socia temporal.

2. Estatuto jurídico de la persona socia temporal. La ley remite a un posterior desarrollo reglamentario la regulación del estatuto jurídico de estos socios o socias. El art. 79 del RLSCA establece que las personas socias temporales tendrán el mismo estatuto jurídico que las personas socias comunes con una serie de particularidades. La primera de ellas es que una vez finalizado o resuelto el encargo o contrato que motivó la integración como socio temporal perderán esta condición y deberán causar baja obligatoria conforme al art. 24 LSCA. Cuando una persona socia temporal lo haya sido por un plazo superior a seis años tendrá dos opciones: causar baja en la entidad o convertirse en socio o socia común. Éste último caso se dará cuando el órgano de administración no adopte acuerdo en el que decida causar baja del socio o socia temporal.

3. Régimen de aportaciones al capital social. En segundo lugar, el régimen de aportaciones al capital social de las personas socias temporales también presenta particularidad por cuanto que podrá exigirse su aportación cuando su contrato por el que se incorporó se extienda como mínimo dos años. El valor de la aportación social en estos supuestos no superará nunca el 50% del importe de la aportación obligatoria del socio común. Si se produce la baja del socio temporal tendrá derecho a la devolución de su aportación en el plazo de un año.

4. Remuneración. En tercer lugar, la remuneración de los socios y socias temporales se realizará mediante anticipos<sup>32</sup> laborales mensuales, cuya cuantía no podrá ser inferior a la establecida en el convenio vigente en la zona para los trabajadores por cuenta ajena de la misma actividad y categoría.

---

<sup>32</sup> El anticipo laboral es la retribución mensual que percibe el socio por su prestación de trabajo como adelanto a cuenta de los resultados de la cooperativa. El art. 29 del Estatuto de los Trabajadores prevé la figura del anticipo a cuenta del trabajo ya realizado, es decir, por la prestación laboral efectivamente realizada. Por lo tanto, la diferencia entre ambos radica en que mientras el primero se trata de un anticipo a cuenta de los resultados de la cooperativa, el segundo lo es a cuenta de la prestación laboral ya realizada.

5. Sufragio activo y pasivo. La cuarta peculiaridad es que las personas socias temporales tendrán derecho a sufragio activo y pasivo para la elección de los órganos sociales con una limitación: que en el momento de proceder a la renovación del órgano la duración que reste del encargo o contrato origen de su incorporación sea igual o superior a la del mandato de dicho órgano. Por último, se prevé reglamentariamente la posibilidad de que los estatutos sociales o el acuerdo social de incorporación puedan establecer reglas de ponderación del voto<sup>33</sup> entre las personas socias temporales y las personas socias comunes. Esta regla viene a dar cumplimiento a la previsión legal contenida en el art. 91.2 LSCA in fine que prevé que *“sin que sus votos [de los socios temporales] pueda representar más de un tercio de la suma de los correspondientes a las personas socias trabajadoras.”*

6. Duración. El art. 79.1 a) del Reglamento reduce el plazo máximo en que un socio temporal podrá estar con esta condición. Se pasa de 10 años ininterrumpidos a 6 años acumulados. Esta reducción tiene sentido como contrapeso respecto a las múltiples medidas liberalizadoras que se han adoptado respecto al trabajo por cuenta ajena.

## **ARTÍCULO 92. CUESTIONES LITIGIOSAS Y SEGURIDAD SOCIAL.**

*1. Las cuestiones contenciosas que se susciten entre la sociedad cooperativa y sus personas socias trabajadoras por su condición de tales se someterán a la jurisdicción del orden social, de conformidad con la legislación estatal aplicable.*

*2. Las personas socias trabajadoras disfrutarán de los beneficios de la Seguridad Social, pudiendo optar la sociedad cooperativa entre las modalidades siguientes:*

*a) Como asimilados a personas trabajadoras por cuenta ajena. Dichas sociedades cooperativas quedarán integradas en el Régimen General o en alguno de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social, según proceda, de acuerdo con su actividad.*

*b) Como personas trabajadoras autónomas en el Régimen Especial correspondiente.*

---

<sup>33</sup> Los votos se asignarán por porcentajes entre las distintas clases de socios en la cooperativa. No se altera la regla de “una persona, un voto”, sino que las categorías de personas socias no podrán superar los límites establecidos al efecto. En consecuencia, la regla de ponderación del voto limita la existencia de personas socias en la sociedad cooperativa.

*Las sociedades cooperativas ejercerán la opción en los estatutos y solo podrán cambiarla en los supuestos y condiciones que el Gobierno del Estado establezca. Todo ello, de conformidad con la normativa estatal aplicable.*

## **Comentario del artículo 92 de la LSCA.**

### **1. Jurisdicción.**

Cualquier conflicto entre la cooperativa y sus socios en relación a la prestación de sus servicios se resolverá ante la jurisdicción del orden social.<sup>34</sup> Por otro lado, la Ley General de Cooperativas en su art. 87 prevé que las cuestiones contenciosas que se susciten entre la cooperativa y sus personas socias habrán de resolverse preferentemente según lo dispuesto en dicha ley, en los estatutos y en el reglamento de régimen interno, los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la cooperativa y los principios cooperativos. Y prevé que tales cuestiones sean sometidas ante la Jurisdicción del Orden Social de acuerdo con el art. 2. C) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. La remisión a este orden social lo será de todos sus órganos jurisdiccionales y en todos sus grados, de cuantas cuestiones se susciten entre la cooperativa y el socio o socia trabajador relacionadas con los derechos y obligaciones derivados de la actividad cooperativizada. Los conflictos que no tengan relación alguna con la prestación de trabajo o la realización de la actividad cooperativizada por parte del socio en la cooperativa estarán sometidos al Orden Jurisdiccional Civil. El planteamiento de cualquier demanda por parte de un socio en las cuestiones descritas en el apartado 1 del art. 87 requerirá que se agote la vía cooperativa previa, que en cualquier caso dará lugar a la suspensión de los plazos para plantear acciones ante los órganos jurisdiccionales correspondientes.

### **2. Seguridad Social.**

Una de las características principales de las personas socias de una cooperativa de trabajo es que estas pueden decidir en qué régimen de la Seguridad Social desean integrarse y las opciones son:

- Como asimilados a los trabajadores por cuenta ajena por lo que quedarán integradas en el Régimen General o en alguno de los Regímenes Especiales de la

---

<sup>34</sup> Art. 2. C) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Seguridad Social<sup>35</sup>, teniendo en cuenta su actividad.

- Como personas trabajadoras autónomas en el Régimen Especial correspondiente.

Las opciones mencionadas deberán constar en los estatutos sociales y sólo podrán cambiarse en los supuestos y condiciones que el Gobierno del Estado establezca.

Hay que recordar en este apartado que es competencia exclusiva del Estado la legislación laboral, art. 149.1.7 CE, de la que forma parte la legislación de Seguridad Social, donde los poderes públicos mantendrán un régimen público para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad (art. 41 CE).

En las cooperativas de trabajo los trabajadores no socios o socias deberán estar acogidos al Régimen General o al especial que en su caso corresponda. Sin embargo, los socios y socias pueden estar integrados en el anterior régimen como asimilados al trabajador por cuenta ajena o bien integrarse en el régimen de trabajadores autónomos. La LSCA exige que la opción la realice la sociedad a través de los Estatutos.

En esta materia será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, regulador del Reglamento general sobre Inscripciones de empresas y altas y bajas en la Seguridad Social (Art.8), que en respuesta legal a determinada sentencia del TC precedente, estableció las normas sobre condiciones e incorporación al Sistema de la Seguridad Social de los socios de cooperativas de trabajo. Son las que siguen:

1. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, previa opción de la cooperativa, serán dados de alta, como asimilados a trabajadores por cuenta ajena o como trabajadores autónomos de la Seguridad Social, en el Régimen General o Especial que, por razón de la actividad de aquéllas, corresponda.

La opción previa de la cooperativa de trabajo asociado deberá alcanzar a todos los socios trabajadores de la misma y ejercitarse en sus Estatutos.

2. Una vez producida la opción a que se refiere el número anterior, únicamente podrá modificarse por el procedimiento y con los requisitos siguientes:

---

<sup>35</sup> Éstos son: trabajadores por cuenta propia o autónomos; trabajadores del mar; funcionarios públicos, civiles y militares; estudiantes; y los demás que determine el Ministerio de Trabajo e Inmigración (art. 10 LGSS).

1º. La nueva opción deberá realizarse mediante la correspondiente modificación de los Estatutos de la cooperativa.

2º. La nueva opción deberá afectar asimismo a todos los socios trabajadores de la cooperativa.

3º. Será preciso que haya transcurrido un plazo de cinco años desde la fecha en que se ejercitó la opción anterior.

3. Cuando la cooperativa de trabajo asociado haya optado por la asimilación de sus socios trabajadores a trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial correspondiente a la actividad de la misma, la cooperativa responderá solidariamente de la obligación de cotización de aquéllos.

4. Una vez efectuada la opción, los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado serán dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda a la actividad de la cooperativa, siéndoles de aplicación en su integridad las normas reguladoras del correspondiente Régimen respecto de la inscripción, en su caso, así como en orden a la afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores, en iguales términos y condiciones que los aplicables al común de los colectivos que formen parte del campo de aplicación de dicho Régimen.

En todo caso, la iniciación en la prestación de trabajo personal del socio trabajador de la cooperativa será la que determine el nacimiento de las relaciones de afiliación y alta conforme a las normas del Régimen de la Seguridad Social en el que tales socios queden encuadrados.

### **ARTÍCULO 93. COOPERATIVAS DE IMPULSO EMPRESARIAL.**

*1. Son sociedades cooperativas de impulso empresarial las que tienen como objeto social prioritario canalizar, en el ámbito de su organización, la iniciativa emprendedora de sus socios y socias, mediante la orientación profesional, la provisión de habilidades empresariales precisas para el desarrollo de cada una de sus actividades, la tutorización de dichas actividades en los primeros años de su ejercicio o la prestación de*

*determinados servicios comunes a las personas socias que les proporcione un ámbito donde desempeñar regularmente su actividad profesional.*

*2. En estas entidades pueden coexistir dos tipos de personas socias: las que prestan orientación, formación, tutoría o servicios complementarios, en cuyo caso, su condición societaria se ajustará a los requisitos establecidos, con carácter general, en el artículo 13.1, y quienes resultan beneficiarias de dichas prestaciones, que habrán de ser personas físicas. Ambas condiciones podrán recaer, según los casos, en cualquiera de los socios o socias, prevaleciendo a estos efectos, la condición de persona física.*

*3. Reglamentariamente, se regularán determinados aspectos de esta modalidad cooperativa, especialmente en lo relativo a su objeto, duración de la prestación de trabajo, estatuto de la persona socia y ejercicio de derechos y deberes sociales.*

**Concordancia con los artículos 81, 82, 83, 84, 85 y 86 del Reglamento de desarrollo.**

## **ARTÍCULO 81. DENOMINACIÓN Y OBJETO SOCIAL.**

*1. En la denominación de este tipo de cooperativas deberá aparecer la expresión «de impulso empresarial».*

*Las cooperativas de impulso empresarial podrán tener el carácter de interés social, en cuyo caso deberán incluir en su denominación la expresión «de impulso empresarial e interés social».*

*2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 93.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, con el fin de canalizar la iniciativa emprendedora de las personas socias, la actividad de las sociedades cooperativas de impulso empresarial consistirá en la orientación, formación, tutoría o prestación de servicios a sus socios y socias o en la realización de tareas de intermediación entre éstos y las terceras personas a las que prestan sus servicios.*

*Los estatutos sociales de estas cooperativas especificarán en el apartado relativo a su objeto social el desarrollo de una actividad u otra, o la realización de ambas.*

*La orientación, formación, tutoría o prestación de servicios que la cooperativa proporciona a sus personas socias podrá adoptar un carácter temporal, relacionadas con el lanzamiento de determinados proyectos empresariales, o un carácter estable, unidas al*

*acompañamiento duradero de la actividad emprendedora; pudiendo asimismo la entidad armonizar ambas modalidades.*

## **ARTÍCULO 82. PERSONA SOCIA DE ESTRUCTURA Y PERSONA SOCIA USUARIA.**

*1. En las cooperativas de impulso empresarial podrán existir dos tipos de personas socias, las prestadoras de orientación, formación, tutoría o servicios complementarios, que se denominan socios y socias de estructura, y las beneficiarias de dichas prestaciones, que reciben la calificación de socios y socias usuarios.*

*Si los estatutos sociales así lo prevén y hasta el porcentaje máximo que respecto a este tipo de personas socias se establezca, los socios y socias usuarios podrán tener un carácter intermitente cuando desarrollen la actividad cooperativizada de manera esporádica.*

*2. A las personas socias de estructura les corresponderá el porcentaje de votos que estatutariamente se determine, sin que, en ningún caso, pueda superar el cincuenta y uno por ciento de los votos sociales, siendo necesario para la adopción de acuerdos en todas aquellas materias previstas en el artículo 33.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, sin perjuicio de la mayoría cualificada exigida en dicho artículo para todos los socios y socias, el voto favorable de, al menos, los tres quintos de las personas socias usuarias asistentes, presentes o representadas.*

*Cuando haya en la sociedad cooperativa personas socias que reúnen la doble condición de socio o socia de estructura y usuario, con arreglo a lo establecido en el artículo 93.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en el apartado 3.a) de este artículo, ejercerán, exclusivamente, el derecho al voto de aquella clase que proporcionalmente resulte mayor.*

*3. Las sociedades cooperativas de impulso empresarial deberán regular en el reglamento de régimen interior, al menos, los siguientes extremos:*

*a) Supuestos en que se podrá compatibilizar la condición de persona socia de estructura y persona socia usuaria, según lo previsto en el artículo 93.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*b) Fijación, en su caso, de un estatuto económico diferenciado para ambas clases de personas socias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84.3.*



*c) Trabajos que las personas socias de estructura deben prestar a los socios y socias usuarios, identificando, como mínimo, cuáles son, en qué consisten, las condiciones técnicas de su prestación y su grado de permanencia.*

*d) Determinación del periodo de duración del acompañamiento a la actividad emprendedora.*

*e) Características específicas que deberán establecerse en los convenios de acompañamiento que, en su caso, suscriba la sociedad cooperativa con cada persona socia usuaria.*

### **ARTÍCULO 83. EXCLUSIÓN.**

*Las cooperativas de impulso empresarial podrán establecer estatutariamente como causa específica de exclusión de las personas socias usuarias no alcanzar durante tres meses consecutivos, o durante cinco meses en cómputo anual, un volumen de facturación igual o superior al salario mínimo interprofesional, correspondiente a dichos períodos.*

*No obstante, los estatutos de la entidad podrán disponer la consideración de las personas socias usuarias que no alcancen tales márgenes de facturación como socios y socias usuarios de carácter intermitente conforme a lo dispuesto en el artículo 82.1.*

### **ARTÍCULO 84. RÉGIMEN ECONÓMICO.**

*1. Para crear una sociedad cooperativa de impulso empresarial será necesario la constitución de una garantía de, al menos, sesenta mil euros, que podrá revestir alguna de las siguientes modalidades:*

*a) Depósito en dinero efectivo o en valores públicos en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales.*

*b) Aval o fianza de carácter solidario prestado por un Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito, Sociedad de Garantía Recíproca o mediante póliza de seguros contratada al efecto.*

*La cooperativa de impulso empresarial deberá actualizar, anualmente, esta garantía financiera hasta alcanzar, al menos, el diez por ciento del importe correspondiente a la totalidad de los anticipos societarios percibidos por las personas socias usuarias en el*

*ejercicio económico inmediato anterior, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior a la cuantía establecida en el primer párrafo.*

*La garantía constituida responderá, con carácter subsidiario al fondo regulado en el apartado 2, frente a las personas socias usuarias de las deudas vinculadas a anticipos societarios, con la Seguridad Social así como de las indemnizaciones derivadas de obligaciones relativas a la prestación de trabajo en la sociedad cooperativa.*

*La entidad podrá cancelar la garantía cuando cese en su actividad y no tenga obligaciones pendientes relativas a dichos conceptos.*

*2. Las sociedades cooperativas de impulso empresarial deberán constituir, asimismo, un fondo específico destinado a asegurar a las personas socias usuarias el cobro de los anticipos societarios y la satisfacción de las obligaciones que exige la legislación reguladora de su prestación de trabajo.*

*Dicho fondo, que tendrá carácter irrepartible, salvo en caso de liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 82.1.b) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre para los fondos sociales voluntarios, se dotará con, al menos, el uno por ciento de los ingresos derivados de la actividad cooperativizada.*

*3. En las sociedades cooperativas de impulso empresarial podrá establecerse un estatuto económico distinto para las socios y socias de estructura y para las personas socias usuarias.*

*Asimismo, podrán suscribirse entre el órgano de administración y la persona socia usuaria convenios de acompañamiento que establezcan determinadas peculiaridades en relación con la forma de prestar los servicios por una y otra parte, siempre que se respeten los principios cooperativos regulados en el artículo 4 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*No obstante lo anterior, la relación económica con las terceras personas y, especialmente, la facturación se realizará, en todo caso, por cuenta de la sociedad cooperativa.*

*4. Sin perjuicio de la sujeción general de este tipo de sociedades al régimen previsto para el reembolso de aportaciones sociales en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y en este Reglamento, los plazos de reembolso de dichas aportaciones en el caso de las personas*

*socias usuarias de las cooperativas de impulso empresarial no podrán exceder de la mitad de los fijados en el artículo 60.4 de la citada Ley.*

## **ARTÍCULO 85. AUDITORÍA DE CUENTAS.**

*Las sociedades cooperativas de impulso empresarial deberán someter a auditoría externa, en los términos establecidos por la Ley de Auditoría de Cuentas y sus normas de desarrollo, sus cuentas anuales y demás documentos necesarios conforme a la normativa general contable o cualquier otra disposición de obligado cumplimiento.*

## **ARTÍCULO 86. CARTA DE SERVICIOS.**

*1. Las cooperativas de impulso empresarial deberán disponer de una Carta de Servicios que habrá de estar permanentemente actualizada y en la que se informará tanto a las personas usuarias no socias como a los ciudadanos y ciudadanas, en general, sobre los servicios que proporcionan, los derechos que asisten a las citadas personas usuarias y los compromisos de calidad que asumen en su prestación.*

*2. La Carta de Servicios figurará en un lugar perfectamente accesible para su consulta y conocimiento por el público, debiendo exponerse, en todo caso, tanto en la zona de atención al ciudadano ubicada en las dependencias de la cooperativa como, cuando exista, en su página web.*

## **Comentario del artículo 93 de la LSCA y artículos 81 al 86 del RLSCA.**

### Cooperativas de impulso empresarial.

La LSCA introduce en el artículo 93 LSCA una nueva tipología de cooperativa. Estas cooperativas tienen las siguientes características:

- Es una cooperativa de trabajo en la que un grupo de personas físicas ponen en común su trabajo para producir bienes o servicios para terceros.
- Asocia a personas físicas o jurídicas, titulares de algún derecho que lleve aparejado el uso o disfrute de explotaciones industriales o de servicios y a profesionales que ejercen su actividad por cuenta propia y tienen por objeto la realización de operaciones encaminadas al mejoramiento económico y

técnico de las actividades profesionales o de las explotaciones de sus socios.

Tienen una doble naturaleza:

- La Tutorización de proyectos empresariales
- La cobertura Estructural y Mutualización de medios para personas que realizan actividades económicas afines.
- Se trata de una empresa que en las que los socios intermitentes tienen en la cooperativa de impulso empresarial toda la estructura empresarial necesaria para ejercer su actividad: la cooperativa les da de alta, factura, anticipa el pago de sus servicios, etc.

La doble naturaleza puede estar en el seno de una misma cooperativa de impulso empresarial.

Estas cooperativas para cumplir su función precisan de muchos socios, ya que sino no es viable económicamente.

Objeto.

La finalidad de este tipo de entidades es que los beneficios generados por su actividad se reinviertan en la organización con el fin de ofrecer más y mejores servicios a los socios cooperativistas.

De acuerdo con la Exposición de Motivos del Reglamento este nuevo modelo, que tanto la Administración de la Junta de Andalucía como las estructuras asociativas del sector pretenden impulsar con la creación de entidades de cierta envergadura desde las que se dé soporte técnico, jurídico y económico a colectivos que mediante su asociación bajo la fórmula cooperativa, obtengan un valor añadido a las actividades que realizan individualmente, reciban formación de carácter empresarial y, eventualmente, les permita el afloramiento de todo o parte de su actividad. Para ello, además de las medidas específicamente reguladas, se diseña un modelo cuya más completa configuración necesitaría de modificaciones en la normativa estatal sobre determinadas materias conexas. En congruencia con la importancia y dimensión de esta figura se fijan requisitos

de carácter técnico y económico que exceden de los establecidos con carácter general para otro tipo de cooperativas.

### Tipos de socios.

En este tipo de cooperativas pueden coexistir dos tipos de socios: los que prestan orientación, formación, tutoría o servicios complementarios, en cuyo caso, deberá respetar los requisitos establecidos en el artículo 13.1 y los beneficiarios de dichas prestaciones, que deberán ser personas físicas.

### Régimen jurídico.

El Reglamento regula en profundidad todo lo relativo a su objeto, duración de la prestación de trabajo, estatuto de la persona socia y ejercicio de derechos y deberes sociales.

### Cooperativas de integración social e interés social.

Así, en el art. 81 del Reglamento se prevé la posibilidad de que las cooperativas de impulso empresarial puedan, además, tener un interés social y se exige que se especifique exactamente el objeto social en los estatutos en función de las posibles actividades que pueden desarrollar este tipo de cooperativas. Este rasgo diferenciador significa que el objetivo perseguido por la entidad va más allá del asesoramiento de sus propios socios o el de las personas a las que presten sus servicios, abarcando también una actividad asistencial que implica prestar sus servicios a colectivos que de otro modo no tendría acceso a los mismos. En este sentido, parece que el legislador ha querido incluir aquí una subcategoría de cooperativa de interés social, con un rasgo diferenciador del resto, constituido por la actividad que constituye su objeto social. En todo caso, la denominación de este tipo de cooperativas deberá incluir necesariamente la expresión “de impulso empresarial e interés social”.

### Objeto social.

El rasgo diferenciador de este tipo social con otras modalidades cooperativas previstas en la LSCA es el relativo a su objeto social. Aunque se trata de una cooperativa de trabajo, la doble naturaleza de su objeto social la asemeja también a las cooperativas de servicios, especialmente porque su finalidad puede consistir en: 1) ofrecer un servicio completo de

orientación, formación, tutoría o prestación de servicios a sus socios y socias; 2) la realización de tareas de intermediación entre éstos y las terceras personas a las que prestan sus servicios. La primera actividad mencionada podrá tener el carácter de temporal y estará relacionada con el lanzamiento de determinados proyectos empresariales. O por el contrario, podrá ostentar el carácter de estable, y en este caso formará parte del objeto social de la cooperativa durante toda la vida de ésta. Estatutariamente se regulará cuál de estas dos actividades constituirá el objeto social de la cooperativa, o en su caso, si éste está constituido por ambos.

Tipos de personas socias.

El art. 82 del RLSCA prevé la existencia de dos tipos de personas socias: 1) las personas socias de estructura, es decir, las prestadoras de orientación, formación, tutoría o servicios complementarios; 2) las personas socias usuarias, aquellas beneficiarias de las anteriores prestaciones. Asimismo, los estatutos sociales podrán regular el carácter intermitente de los socios y socias usuarios cuando desarrollen la actividad cooperativizada de forma esporádica, pero estableciéndose siempre un porcentaje máximo de este tipo de personas socias.

Los socios de estructura no puedan tener un porcentaje de votos superior al 51%. Además, para la adopción de acuerdos en las materias reguladas en el art. 33.2 de la LSCA se necesitaría, además de la mayoría cualificada exigida, el voto favorable de al menos tres quintos de las personas socias usuarias asistentes, presentes o representadas. Otra particularidad derivada de este tipo social de doble naturaleza (trabajo y servicios) fundamenta que en aquellos casos en que una persona socia reúna doble condición de socio o socia de estructura y usuario, sólo ejercerá el derecho al voto de aquella clase que proporcionalmente resulte mayor.

Mediante el reglamento de régimen interior se deberán regular los siguientes aspectos:

- La compatibilización de la condición de persona socia de estructura y persona socia usuaria.
- El estatuto jurídico diferenciado de ambas figuras.
- El tipo de prestación de trabajo que las personas socias de estructura deberán prestar a los socios y socias usuarios.

- El periodo de duración del acompañamiento a la actividad emprendedora.
- Las características específicas a establecer en el convenio de acompañamiento que la cooperativa podrá suscribir con la persona socia usuaria. Se abre así la posibilidad a ambas partes de regular su propio régimen jurídico, a excepción de determinados aspectos que serán necesariamente regulados por el reglamento de régimen interior.

Con el objetivo de asegurar la pervivencia de la suficiencia presupuestaria de la sociedad cooperativa, las cooperativas de impulso empresarial podrán regular en sus estatutos sociales una serie de requisitos de permanencia de las personas socias usuarias, por la especial posición que ésta tienen en este tipo de cooperativas. Concretamente, se podrá prever la posibilidad de excluir a aquellos socios o socias usuarios que no alcancen durante tres meses consecutivos, o durante cinco meses en cómputo anual, un volumen de facturación igual o superior al salario mínimo interprofesional, correspondiente a dichos períodos. Asimismo, para los casos en que se den este tipo de supuestos, los estatutos también podrán regular que este tipo de persona socia pasen a ser persona socia usuaria intermitente a la que le sea de aplicación el régimen particular de esta figura. La cooperativa de impulso empresarial trata de ofrecer, principalmente, asesoramiento a sus socios y socias usuarias. Por este motivo, aunque la suficiencia económica sea una necesidad para el sustento y supervivencia de la propia entidad, flexibilizar los requisitos de permanencia de sus socios aunque no cumplan los requisitos de facturación exigidos, permite realizar efectivamente con una de las actividades constitutivas de su objeto social: la de prestar orientación, formación, tutoría a las personas socias usuarias.

#### Régimen económico.

El art. 84 RLSCA regula el régimen económico específico de la sociedad cooperativa de impulso empresarial. A diferencia de otras cooperativas de trabajo, este tipo cooperativo deberá prestar una garantía de al menos sesenta mil euros para su constitución. La garantía podrá consistir en: 1) un depósito en dinero efectivo o en valores públicos en la Caja General de Depósitos<sup>36</sup> o en sus sucursales; 2) un aval o fianza de carácter solidario

<sup>36</sup> La Caja General de Depósitos es un organismo encargado de la recepción, custodia y devolución de depósitos y garantías que constituyen los servicios centrales y las sucursales de las Delegaciones de Economía y Hacienda. Para la Constitución de Depósitos y Garantías en Efectivo se debe acudir a la Caja General de Depósitos. La Central está en Madrid, Paseo del Prado 4. En las restantes provincias las sucursales de la Caja están en las Delegaciones de Economía y Hacienda. Es necesario que quien va a constituir la garantía o el depósito conozca, para poder cumplimentarlos, los siguientes datos que han de



prestado por un Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito, Sociedad de Garantía Recíproca<sup>37</sup> o mediante póliza de seguros contratada al efecto<sup>38</sup>. La garantía financiera habrá de actualizarse anualmente hasta alcanzar, al menos, el diez por ciento del importe correspondiente a la totalidad de los anticipos societarios percibidos por las personas socias usuarias en el ejercicio económico inmediato anterior. En todo caso, deberá actualizarse para garantizar la garantía igual o superior de sesenta mil euros.

La garantía constituida responderá subsidiariamente al fondo regulado en el art. 84. 2 RLSCA, frente a las personas socias usuarias de las deudas vinculadas a anticipos societarios, con la Seguridad Social y de las indemnizaciones derivadas de obligaciones relativas a la prestación de trabajo en la sociedad cooperativa (por ejemplo, indemnizaciones por despido de trabajadores asalariados).

La cancelación de la garantía podrá realizarse cuando se cumplan dos requisitos: 1) la cooperativa cese su actividad; 2) no tenga obligaciones pendientes relativas a los conceptos señalados en el párrafo anterior.

#### Fondo específico.

figurar en el resguardo de constitución: Nombre o razón social del constituyente o garantizado, domicilio y NIF. Si es la primera vez que van a constituir una garantía o depósito deberán aportar el DNI si son personas físicas o tarjeta de identificación fiscal si son personas jurídicas, documentación no necesaria en la constitución de posteriores garantías o depósitos, salvo que se hayan producido modificaciones (cuando el constituyente o garantizado sea persona física y no se presentara personalmente en las dependencias de la Caja General de Depósitos o alguna de sus sucursales, deberá aportar, o bien, la autorización para consultar el sistema de verificación de datos de identidad en la constitución o devolución de depósitos o garantías, o bien, fotocopia del DNI; artículo único del Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, BOE nº 110, de 9 de mayo). Norma que impone la obligación de constituir el depósito o garantía, finalidad para la que se constituye y Autoridad a cuya disposición se constituye incluyendo necesariamente el NIF (si desconocen estos datos deberán de recabar los de quien le haya solicitado la constitución del depósito o garantía). La Caja General de Depósitos expedirá y entregará al interesado los documentos de constitución del depósito o garantía (Modelo 060). El pago se realizará mediante ingreso en Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito, en los que no es preciso tener cuenta abierta. El ingreso habrá de realizarse en dinero de curso legal. La admisión de cualquier otro medio de pago queda a discreción y riesgo de la Entidad.

<sup>37</sup> Es el afianzamiento que presta una entidad de crédito bancaria a su cliente garantizando ante el acreedor de éste el cumplimiento de la obligación pendiente. Como regla general, este afianzamiento es solidario, comprometiéndose el banco a pagar al acreedor tan pronto éste se lo reclame (fianza a primera demanda). Si la obligación asumida por el deudor es la entrega de una mercadería o la prestación de un servicio, el aval bancario se concretará en una obligación de pago de la cantidad que reemplazaría la prestación específica. Es un afianzamiento siempre oneroso (Arts. 439-442 Código de Comercio).

<sup>38</sup> En esta modalidad de la fianza el fiador renuncia al beneficio o derecho de excusión. Por tanto, en caso de incumplir el deudor fiado, el acreedor podrá reclamar el total debido al deudor fiado, o al fiador solidario, o a ambos a la vez, sin necesidad de acreditar la insolvencia, total o parcial, del deudor principal. Por lo tanto, a efectos externos o de la relación entre acreedor por una parte, y deudor y fiador por la otra, este último es un deudor más y de carácter solidario con el deudor principal. A efectos internos, o entre deudor y fiador, el único deudor es el fiado. Por ello, si el fiador paga podrá repetir contra el fiado, que es quien en definitiva es el obligado a pagar (Arts. 1822 y ss Código Civil).

Otra de las obligaciones previstas únicamente para las sociedades cooperativas de impulso empresarial en la nueva regulación, consiste en la constitución de un fondo específico con el que poder asegurar a las personas socias usuarias el cobro de los anticipos societarios y la satisfacción de las obligaciones que exige la legislación reguladora de su prestación de trabajo. La peculiar actividad cooperativizada en este tipo de sociedades hace necesario establecer mecanismos con la finalidad de asegurar la estabilidad presupuestaria de la cooperativa y su continuidad en el tiempo y este es el sentido de esta previsión reglamentaria. Salvo caso de disolución, este fondo no podrá repartirse entre los socios y socias. Su dotación se realizará con el 1% de los ingresos derivados de la actividad cooperativizada.

Estatuto económico de las personas socias.

También se prevén particularidades en la regulación del estatuto económico de las personas socias, haciendo posible la distinción entre personas socias usuarias y personas socias de estructura. Esta posibilidad, es acorde con la también diferente prestación de trabajo que se puede establecer para los socios y socias usuarios en convenios de acompañamiento suscritos por éstos y el órgano de administración de la sociedad. En todo caso, a pesar de establecer particularidades, este tipo de convenios deberá respetar los principios cooperativos del art. 4 LSCA. Sin embargo, el apartado tercero del art. 84 RLSCA in fine establece que la relación económica con terceras personas y la facturación se deberá hacer en todo caso por cuenta de la sociedad cooperativa. Con esta previsión se pretende evitar prácticas contrarias a los principios inspiradores del cooperativismo, como por ejemplo, el de horizontalidad en la prestación de trabajo y en los derechos y obligaciones de todas las personas socias, entre otros.

Auditoría de cuentas.

Las sociedades cooperativas de impulso empresarial tiene también el deber de someter a auditoría externa<sup>39</sup> sus cuentas anuales y demás documentos necesarios conforme a la normativa general contable o cualquier otra disposición de obligado cumplimiento. Se

---

<sup>39</sup> “Se entenderá por auditoría de cuentas la actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros” (art. 1. 2 LAC). El objetivo de la auditoría de cuentas es “verificar dichas cuentas a efectos de dictaminar si expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación; también comprenderá, en su caso, la verificación de la concordancia del informe de gestión con dichas cuentas” (art. 1. 3 LAC).

prevé así una nueva particularidad de este tipo de cooperativas con respecto al resto de cooperativas de trabajo donde la auditoría sólo deberá realizarse en tres supuestos: si así lo establecen los estatutos sociales, cuando lo acuerde la Asamblea General, o si lo acuerda el órgano de administración cumplimentando una serie de requisitos reglamentarios; cuando lo exija la Ley de Auditoría de Cuentas, sus normas de desarrollo o cualquier otra norma de aplicación; o cuando así lo exija la propia LSCA. La auditoría deberá realizarse conforme a lo dispuesto en la Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y su normativa de desarrollo.

#### Carta de Servicios.

Una obligación más prevista en el RLSCA para este tipo de sociedades cooperativas, es la de disponer de una Carta de Servicios permanentemente actualizada. El objetivo principal de la Carta de Servicios es mantener informadas a las personas usuarias no socias y a los ciudadanos y ciudadanas, sobre: 1) los servicios que proporcionan; 2) los derechos que asisten a las citadas personas usuarias; y 3) los compromisos de calidad que asumen en su prestación. Esta previsión reglamentaria viene a dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 8. D) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en relación a los derechos de los consumidores y usuarios. Además, la mencionada Carta de Servicios tendrá que ubicarse en un lugar perfectamente accesible para su consulta y conocimiento por el público, deberá exponerse en la zona de atención al ciudadano ubicada en las dependencias de la cooperativa y, cuando exista, en su página web. Se trata con esta previsión del art. 86. 2 RLSCA que no quede vacío de contenido el derecho a la información de los usuarios que se trata de salvaguardar con la previsión del apartado primero del artículo.

### **ARTÍCULO 94. COOPERATIVAS DE INTERÉS SOCIAL.**

*1. Son sociedades cooperativas de interés social aquellas que tienen como finalidad la promoción y plena integración sociolaboral de determinados sectores de la ciudadanía. Sus estatutos sociales determinarán la existencia o no de ánimo de lucro en el artículo relativo al objeto social.*

*Si la sociedad cooperativa carece de ánimo de lucro, habrá de especificar, en el apartado estatutario relativo al régimen económico, las menciones que reglamentariamente se determinen.*

*2. La actividad de estas sociedades estará constituida por la prestación de servicios relacionados con la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, con la protección de la infancia y la juventud, con la asistencia a personas mayores, inmigrantes, con discapacidad, refugiadas, asiladas, ex reclusas, con problemas de adicción, víctimas de violencia de género o de terrorismo, pertenecientes a minorías étnicas y cualquier otro colectivo con dificultades de integración social o desarraigo.*

*3. En la denominación de estas sociedades cooperativas deberá aparecer la expresión «interés social».*

### **Comentario del artículo 94 de la LSCA.**

Las cooperativas reguladas en este artículo son aquellas cuya prestación de servicios será la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas dependientes. También aquellas con especial promoción de la protección de la infancia y la juventud, con la asistencia a personas mayores, inmigrantes, con discapacidad, refugiadas, asiladas, ex reclusas, con problemas de adicción, víctimas de violencia de género o de terrorismo, pertenecientes a minorías étnicas. En definitiva, cualquier colectivo con dificultades de integración social o desarraigo.

Entre sus particularidades se encuentra el hecho de que sus estatutos serán los que determinen si existe o no ánimo de lucro. Otra característica es que en la denominación de estas sociedades deberá aparecer obligatoriamente la expresión “interés social”.

### **ARTÍCULO 95. COOPERATIVAS DE TRANSPORTE.**

*1. Son sociedades cooperativas de transporte aquellas que agrupan como socios y socias a profesionales del transporte que, mediante su trabajo en común, ejercen la actividad de transporte de mercancías o de personas, o cualquier otra para la que se encuentren*

*expresamente facultadas por la ley, con vehículos adquiridos por la sociedad cooperativa o aportados por las personas socias.*

*2. Los estatutos sociales podrán establecer que todas o parte de las aportaciones, tanto obligatorias como voluntarias, deban consistir en uno o más vehículos de las características que fije la sociedad cooperativa.*

*En este caso, estatutariamente podrá disponerse que tanto ingresos como gastos se imputen al vehículo que los haya originado, generando así una unidad de explotación en cada vehículo, susceptible de ser adscrita a la persona socia que lo haya aportado.*

*De optar los estatutos por esta posibilidad, el reembolso de las aportaciones se hará, preferentemente, mediante la devolución del vehículo o vehículos aportados por la persona socia, teniendo en cuenta el eventual fondo de amortización a él aplicado.*

### **Comentario del artículo 95 de la LSCA.**

Son cooperativas que asocian a profesionales del transporte o profesionales que puedan ejercer en cualquier ámbito, incluso el local, la actividad de transportistas, de personas, cosas o cualquier otra para la que se encuentren expresamente facultadas por la ley. Realizan su actividad con vehículos adquiridos por la cooperativa o aportados por sus socios.

En los estatutos sociales se podrá establecer que todas o sólo parte de las aportaciones, tanto obligatorias como voluntarias, deban consistir en uno o más vehículos de las características que fije la sociedad cooperativa.

Tanto los ingresos como los gastos podrán imputarse al vehículo que los haya originado, por lo que cada uno será una unidad de explotación que podrá ser adscrita a la persona socia que lo haya aportado. Sin embargo, esta opción habrá de establecerse por vía estatutaria. Si así se hiciera, el reembolso de las aportaciones se hará mediante la devolución del vehículo o vehículos aportados pero siempre teniendo en cuenta el fondo de amortización a él aplicado.

## Sección 2ª. Cooperativas de consumo

### **ARTÍCULO 96. CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO.**

*1. Son sociedades cooperativas de consumo aquellas que tienen por objeto procurar, en las mejores condiciones de calidad, información y precio, bienes y servicios para el consumo, uso o disfrute de sus socios y socias y de quienes con ellos convivan habitualmente.*

*Igualmente, podrán realizar actividades dirigidas a la defensa, información y promoción de los derechos de las personas consumidoras, de conformidad con la legislación vigente.*

*2. Las sociedades cooperativas de consumo podrán adquirir, utilizar o disfrutar de los bienes y servicios de terceros o producirlos por sí mismas, así como, de establecerse estatutariamente, procurarlos a terceros.*

*3. Si los estatutos sociales lo prevén, los socios y socias que causen baja podrán transmitir sus participaciones, conforme al procedimiento previsto en el artículo 102.2 para las sociedades cooperativas de servicios.*

*4. El Fondo de Formación y Sostenibilidad se destinará, en el porcentaje que se establezca reglamentariamente, a la defensa de los derechos de las personas consumidoras, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71, regulador de dicho fondo.*

*5. Se entenderá que en el suministro de bienes y servicios de la sociedad cooperativa a las personas socias no concurre transmisión patrimonial alguna y que son los propios socios y socias quienes, como consumidores directos, los adquieren conjuntamente de terceros.*

*6. Las sociedades cooperativas de consumo podrán adoptar cualquier modalidad, siempre que desarrollen su actividad conforme a lo previsto en el apartado 1.*

## **Concordancia con el artículo 96 del Reglamento de desarrollo.**

### **ARTÍCULO 96. COOPERATIVAS DE CONSUMO COMO ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.**

*Cuando las cooperativas de consumo ostenten la consideración de organización o asociación de consumidores y usuarios a los efectos de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, prevalecerán los preceptos establecidos al respecto por la citada norma.*

#### **Comentario del artículo 96 de la LSCA y 96 del RLSCA.**

Son aquellas que tienen por objeto el suministro de bienes y servicios adquiridos a terceros o producidos por sí mismas, para uso o consumo de los socios y de quienes con ellos conviven, así como la educación, formación y defensa de los derechos de sus socios en particular y de los consumidores y usuarios en general. El intercambio de bienes y servicios para el consumo, uso o disfrute de los socios se habrá de procurar en las mejores condiciones de calidad, información y precio puesto que ahí radica la diferencia fundamental con otro tipo de empresa.

Cuando los estatutos lo prevean, los socios que causen baja podrán transmitir sus participaciones conforme al procedimiento previsto en el artículo 102.2.

En este tipo de cooperativas el Fondo de Formación y Sostenibilidad destina el porcentaje que reglamentariamente se determine a la defensa de los derechos de las personas consumidoras.

En el suministro de bienes y servicios de la sociedad cooperativa a las personas socias no concurre transmisión patrimonial alguna sino que son los propios socios y socias quienes, como consumidores directos, adquieren conjuntamente de terceros.

La modalidad jurídica que deben adoptar está abierta siempre que la actividad se desarrolle conforme a lo previsto en el primer apartado del artículo 96.



## **ARTÍCULO 97. COOPERATIVAS DE VIVIENDAS. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES.**

*1. Son sociedades cooperativas de viviendas aquellas que tienen por objeto procurar viviendas a precio de coste, exclusivamente a sus socios y socias. También podrán tener como objeto el de procurarles garajes, trasteros y otras construcciones complementarias, así como su rehabilitación y la de las propias viviendas, sin perjuicio de lo establecido en el siguiente apartado.*

*2. Las sociedades cooperativas de viviendas que tengan por objeto único procurar locales comerciales a precio de coste, exclusivamente, a sus socios y socias tendrán la consideración de sociedades cooperativas de locales de negocio.*

*Estas sociedades podrán optar estatutariamente entre su sujeción al régimen general de cooperativas de consumo, previsto en la subsección 1.ª, o al régimen específico de cooperativas de viviendas, en este último caso, con las excepciones expresamente previstas para sociedades cooperativas de locales de negocio. De no mediar disposición estatutaria al respecto, les será aplicable el régimen general de las sociedades cooperativas de consumo.*

*3. Los estatutos sociales podrán prever, mediante cualquier título admitido en derecho, la transmisión de la propiedad de las viviendas, locales y construcciones complementarias a los socios y socias, o, simplemente, la cesión de su uso y disfrute, manteniéndose la titularidad de la propiedad por parte de la sociedad cooperativa, incluido el alquiler con opción a compra. Ambos regímenes podrán coexistir en una misma sociedad cooperativa, de establecerse estatutariamente.*

*Cuando la sociedad cooperativa mantenga la titularidad de la propiedad, podrán los estatutos prever y regular la posibilidad de cesión o permuta del derecho de uso y disfrute con los socios y socias de otras sociedades cooperativas de viviendas que tengan establecida la misma modalidad.*

*4. El derecho sobre la vivienda podrá adquirirse con carácter de residencia habitual; para descanso o vacaciones; como residencia de personas mayores, discapacitadas o dependientes; para facilitar el acceso de jóvenes y/o grupos de población con especiales dificultades de acceso a la vivienda, o para cualquier otro de análogas características, con*

*los límites establecidos en la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre vivienda protegida.*

*5. Las sociedades cooperativas de viviendas podrán adquirir, parcelar y urbanizar terrenos y, en general, desarrollar cuantas actividades y trabajos sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social.*

*6. Los estatutos sociales, la Asamblea General, o la Junta de personas socias, en su caso, que establezcan las normas de cada promoción de viviendas, deberán prever las reglas y preferencias para la adjudicación a las socias y socios de los derechos sobre las viviendas, locales y construcciones complementarias, velando, en todo caso, por el acceso igualitario a la vivienda. Asimismo, establecerán los derechos y obligaciones de las personas socias y de la sociedad cooperativa y, en particular, las reglas para el uso y disfrute de las viviendas por los socios y socias.*

#### **Comentario del artículo 97 de la LSCA.**

Son cooperativas que asocian a personas que precisan alojamiento y/o locales para sí y las personas que con ellas convivan. También pueden tener por objeto procurar edificaciones e instalaciones complementarias para el uso de viviendas y locales de los socios, la conservación y administración de viviendas y locales, elementos, zonas o edificaciones comunes y la creación y suministros de servicios complementarios, así como la rehabilitación de viviendas, locales y edificaciones e instalaciones complementarias. Son cooperativas formadas por usuarios de la vivienda.

Cuando las cooperativas de viviendas tengan como objeto exclusivo procurar locales comerciales a precio de coste a sus socios serán consideradas cooperativas de locales de negocio. En este supuesto, la cooperativa podrá optar entre el régimen de cooperativa de consumo o el régimen de cooperativa de vivienda, si bien en este caso con excepciones. Si no se prevé la opción estatutariamente, les será de aplicación el régimen general de las sociedades cooperativas de consumo.

Los estatutos se encargarán de regular la transmisión de la propiedad de las viviendas, locales y construcciones complementarias a los socios mediante cualquier título admitido en derecho. También será posible ceder el uso y disfrute, manteniendo la titularidad de la propiedad por parte de la sociedad cooperativa, así como alquilar la propiedad con opción

a compra. Los dos tipos de regímenes podrán coexistir si así lo prevén los estatutos sociales.

Para aquellos casos en que la cooperativa mantenga la titularidad de la propiedad, los estatutos podrán prever y regular la posibilidad de cesión o permuta del derecho de uso y disfrute con los socios de otras sociedades cooperativas de viviendas que tengan establecida la misma modalidad.

En cuanto al fin que se le debe dar a la vivienda nos encontramos con la posibilidad de adquisición de esta con carácter de residencia habitual, para descanso o vacaciones, como residencia de personas mayores, discapacitados o dependientes, para facilitar el acceso de jóvenes y/o grupos de población con especiales dificultades de acceso a la vivienda o para cualquier otro de análogas características. Los límites a todo lo anterior vendrán establecidos en la ley de sociedades cooperativas andaluzas, siempre teniendo presente lo dispuesto en la legislación sobre vivienda protegida.

Las cooperativas de viviendas, tienen entre otras facultades las siguientes: adquirir, parcelar y urbanizar terrenos y, en general, desarrollar cuantas actividades y trabajos sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social.

Las reglas y preferencias para la adjudicación a los socios de los derechos sobre las viviendas, locales y construcciones complementarias vendrán reguladas por los estatutos sociales, la Asamblea General o la Junta de personas socias que establezcan las normas de cada promoción de viviendas. También se establecerán los derechos y obligaciones de las personas socias y de la sociedad cooperativa y, en particular, las reglas para el uso y disfrute de las viviendas por los socios y socias.

Los derechos y obligaciones de las personas socias y de la sociedad cooperativa también se establecerán estatutariamente.

En la nueva regulación se prevé la disminución del porcentaje necesario de personas socias comunes respecto a las viviendas promovidas para constituir una sociedad cooperativa de viviendas, debido a la necesidad de adecuar la legislación a las circunstancias actuales de mercado y teniendo en cuenta el recurso que estas mismas cooperativas tendrán para acudir al Registro de personas solicitantes de vivienda en régimen cooperativo respecto de aquellas viviendas no adjudicadas. Por otra parte, el registro se configura como uno de los elementos más novedosos de la regulación de este

tipo de cooperativas, viniendo a sustituir el régimen de autorización administrativa anteriormente existente y facilitando, además, la búsqueda de terceros que, mediante este mecanismo quieran acceder a la condición de persona socia.

## **ARTÍCULO 98. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDAS.**

*El régimen de estas entidades se regulará reglamentariamente con arreglo a las siguientes bases:*

- a) Ninguna persona física podrá ser titular de derechos sobre más de dos viviendas en el ámbito geográfico que se determine, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre vivienda protegida.*
- b) Deberá existir la relación que cuantitativamente se determine entre el número de personas socias y las viviendas en promoción.*
- c) Podrán estar integradas por personas jurídicas en los términos que se determinen, que garantizarán, en todo caso, que los usuarios efectivos de las viviendas sean personas físicas.*
- d) Se establecerán causas de baja justificada de carácter específico, entre las que se contemplarán, en todo caso, el cambio de centro o lugar de trabajo, la situación de desempleo, el aumento del importe de las cantidades para financiar las viviendas en el porcentaje que se determine, el retraso en su entrega, así como la modificación sustancial de las condiciones del contrato de adjudicación.*
- e) Se constituirán secciones cuando la entidad desarrolle más de una fase o promoción, con autonomía de gestión e independencia patrimonial.*
- f) Se establecerán supuestos específicos de sometimiento de las cuentas de la entidad a auditoría.*
- g) Se establecerán supuestos específicos de incompatibilidad con personas que integren las eventuales gestoras de estas entidades.*

*h) En el supuesto de adelanto de cantidades para financiar las viviendas, locales u otras construcciones complementarias, se efectuarán a través de una entidad de crédito, garantizándose mediante seguro otorgado con entidad aseguradora inscrita y autorizada o mediante aval solidario prestado por la entidad de crédito, de conformidad con la disposición adicional primera de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.*

*i) La transmisión de derechos sobre las viviendas, locales o construcciones por parte de las personas socias, así como las operaciones con terceras personas, se someterán a un régimen de prelación que contemplará, de crearse por la consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de sociedades cooperativas, el listado de personas solicitantes de vivienda.*

*j) Las sociedades cooperativas de viviendas no podrán disolverse hasta que transcurra un plazo de cinco años desde su ocupación efectiva, u otro superior, fijado en los estatutos sociales o en los convenios suscritos con entidades públicas o privadas, del cual habrá de informarse a los socios y socias.*

**Concordancia con el artículo 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95 del Reglamento de desarrollo.**

## **ARTÍCULO 87. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS PERSONAS SOCIAS.**

*1. Las personas socias de las sociedades cooperativas de viviendas deberán ser personas físicas. Sin embargo, podrán ser también socias las personas jurídicas, cuando, por razón de trabajo, función o condición personal, precisen alojamiento, locales o construcciones complementarias para las personas físicas que las integren o presten sus servicios por cuenta de ellas.*

*2. Para constituir una sociedad cooperativa de viviendas, será preciso que el número de personas socias comunes que la constituyan sea igual o superior al veinticinco por ciento de las viviendas promovidas por la entidad, supeditándose el aumento del número de viviendas en promoción, con posterioridad a la constitución, al mantenimiento de dicha proporción.*

*Si la cooperativa desarrolla más de una fase o promoción, la anterior exigencia se reputará de cada una de las secciones.*

*3. Ninguna persona física podrá ser simultáneamente en una misma provincia titular de derechos sobre más de dos viviendas de promoción cooperativa.*

*4. Cuando la sociedad cooperativa obtenga de las personas socias cantidades dinerarias anticipadas para la construcción de las viviendas o locales, deberá recibirlas y garantizarlas en la forma prevista en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, comprometiéndose a su devolución con los correspondientes intereses legales, en caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por cualquier causa en el plazo y forma convenidos.*

*5. Son causas de baja justificada de carácter específico para las personas socias de las sociedades cooperativas de viviendas las siguientes:*

*a) El cambio de centro o lugar de trabajo durante más de doce meses y a una distancia de más de cincuenta kilómetros.*

*b) La situación legal de desempleo de larga duración, enfermedad grave u otra circunstancia familiar, personal o económica que impida hacer efectivas las aportaciones comprometidas en la promoción, incluida la denegación del crédito hipotecario por causa no imputable al socio o socia.*

*c) Aumento de la cuantía total de las cantidades anticipadas para financiar las viviendas en más de un cinco por ciento.*

*d) El retraso en la entrega en más de un año desde la fecha o plazo previsto en el proyecto de obra, salvo fuerza mayor no imputable a la entidad cooperativa o el transcurso de cinco años desde que la persona socia se inscribió en la sociedad cooperativa o en la promoción, sin que se le haya adjudicado vivienda, en ambos casos, siempre que no se establezcan estatutariamente otros plazos.*

*e) La modificación sustancial de las condiciones del contrato de adjudicación.*

*6. En caso de baja no justificada de la persona socia, si los estatutos lo prevén, podrán aplicarse a las cantidades entregadas por la misma para financiar el pago de las construcciones, las deducciones a que se refiere el artículo 60.4 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y el artículo 48.2.b) de este Reglamento, hasta el máximo del veinte por ciento de los porcentajes que este último prevé.*

*El reembolso de dichas cantidades, así como de las aportaciones al capital social, se efectuará en el momento en que el socio o socia que causó baja sea sustituido, en sus derechos y obligaciones, por una nueva persona socia o en los plazos establecidos con carácter general en el artículo 60.4 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de cumplirse éstos con anterioridad. En caso de sustitución, cuando existan varias personas a la espera de recibir el correspondiente reembolso, los estatutos sociales deberán fijar, con arreglo a criterios de igualdad y no discriminación, el orden de prelación aplicable a estas.*

## **ARTÍCULO 88. DESARROLLO POR FASES O PROMOCIONES.**

*1. En las sociedades cooperativas de vivienda se constituirán secciones cuando la entidad desarrolle más de promoción o una misma promoción lo fuera en varias fases, que gozarán de autonomía de gestión e independencia patrimonial. Existirán tantas secciones como promociones o fases, constituyéndose necesariamente una Junta de personas socias por sección.*

*2. Cada una de las secciones deberá estar suficientemente individualizada en todos los aspectos: gestión de la documentación social y contable, patrimonio, denominación, administración, contratación con terceras personas y registros públicos.*

*En la contratación con terceras personas, deberá hacerse constar expresamente dicha individualización.*

*3. El patrimonio debidamente individualizado de cada una de las secciones no responderá, en ningún caso, de las deudas de las restantes secciones de la cooperativa.*

## **ARTÍCULO 89. AUDITORÍA EXTERNA.**

*En las sociedades cooperativas de viviendas, el órgano de administración, antes de presentar las cuentas anuales a la Asamblea General para su aprobación, deberá someterlas a auditoría externa, además de en los casos previstos en el artículo 73 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, cuando durante el ejercicio económico se haya producido alguna de las siguientes circunstancias:*

*a) Que la sociedad cooperativa tenga en promoción, entre viviendas y locales, un número superior a cincuenta.*



*b) Que la sociedad cooperativa haya otorgado poderes relativos a la gestión empresarial a personas físicas o jurídicas distintas de los miembros del órgano de administración.*

*c) Que, por cualquier circunstancia, se haya acordado por el órgano de administración un incremento en más de un cinco por ciento del precio de las viviendas, locales y/o construcciones complementarias sobre el pactado con las personas socias.*

*d) Que lo solicite al menos el veinte por ciento de las personas socias de la entidad cooperativa o de la sección correspondiente. En este caso, los gastos originados por la auditoría solicitada correrán a cargo de las personas solicitantes, salvo que de la contabilidad auditada se desprendan vicios o irregularidades esenciales.*

## **ARTÍCULO 90. NORMAS ESPECIALES SOBRE EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.**

*1. Los miembros del órgano de administración no podrán ostentar simultáneamente dicha condición en más de una sociedad cooperativa de viviendas.*

*2. Las sociedades cooperativas de viviendas no podrán otorgar poderes relativos a la gestión empresarial a personas físicas que tengan una relación laboral o de servicios o sean familiares de los miembros del órgano de administración hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sean cónyuges o parejas de hecho de los mismos. Esta prohibición se extiende a aquellas personas jurídicas en relación a las cuales un miembro del órgano de administración, su cónyuge, pareja de hecho o un familiar de éstos comprendido en los grados antes mencionados, sea partícipe, laboralmente dependiente o tenga relación de servicios.*

## **ARTÍCULO 91. OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS.**

*1. Las sociedades cooperativas de viviendas podrán realizar operaciones con terceras personas, respecto de las construcciones complementarias a aquellas que constituyan su objeto social, siempre que los estatutos no lo impidan de forma expresa. Estas operaciones tendrán el carácter de actividad instrumental.*

*2. Cuando alguna de las viviendas o locales, que constituyan el objeto de la sociedad cooperativa, quedase sin asignar tras llevar a cabo las correspondientes adjudicaciones, el órgano de administración deberá ofrecerla a las personas socias expectantes, por*

*orden de antigüedad, en el plazo de un mes desde la última adjudicación a las personas socias.*

*Tendrá la consideración de persona socia expectante aquella que, habiendo efectuado la suscripción de su aportación obligatoria al capital social de la sociedad cooperativa de viviendas, no es aún adjudicataria, por cualquier título, de los derechos de cuantas viviendas o locales haya expresado la voluntad de adquirir, quedando en espera de que eventualmente tal circunstancia se produzca. De no mediar expresión al respecto, se entenderá que sólo está interesada en una vivienda o local.*

*Las personas socias expectantes figurarán inscritas, con tal carácter, en el libro registro de personas socias y de aportaciones al capital social, determinando los estatutos sociales sus derechos y obligaciones, sin que se les pueda exigir la entrega de cantidades para financiar el pago de los derechos de las viviendas, locales y construcciones complementarias, ni se les reconozca el derecho de sufragio activo ni pasivo en las Asambleas Generales.*

*3. La Consejería competente en materia de sociedades cooperativas elaborará un listado de personas solicitantes de viviendas o locales en régimen cooperativo, al que la entidad deberá acudir si transcurrido un mes desde el último ofrecimiento, ningún socio o socia expectante ha hecho uso de su derecho de preferente adquisición. Todo ello, sin perjuicio de lo previsto por la normativa reguladora de viviendas de protección oficial.*

*De entre estas personas solicitantes y por orden de antigüedad en la inscripción, se seleccionarán, en la forma prevista en el artículo 93, regulador del Registro de personas solicitantes de vivienda en régimen cooperativo, aquéllas cuya solicitud coincida con las características de la vivienda o local del que se pretende la transmisión de derechos y que cumplan, en su caso, los requisitos específicos de adjudicación.*

*4. Podrá efectuarse la enajenación, cesión de su uso y disfrute o arrendamiento a terceras personas cuando, cumplidos los anteriores requisitos y en el plazo de un mes desde el último ofrecimiento del listado, queden aún viviendas o locales por asignar, en un máximo de un cincuenta por ciento del total de viviendas o locales promovidos por la cooperativa o la sección.*

*5. Si la sociedad cooperativa realizara operaciones con terceras personas prescindiendo de lo previsto en los apartados anteriores, cualquier socio o socia expectante o, en su*

*defecto, incluida en el listado de personas solicitantes de vivienda o locales en régimen cooperativo, podrá ejercitar el derecho de retracto, debiendo reembolsar a la persona compradora la cantidad desembolsada incrementada con la revalorización que haya experimentado, conforme al índice de precios al consumo, durante el período comprendido entre las fechas de los distintos desembolsos parciales y la fecha de la transmisión de los derechos sobre la vivienda o local, además de los gastos a que se refiere el número segundo del artículo 1518 del Código Civil. El reembolso a la persona compradora de los gastos a que se refiere el número primero del mencionado artículo del Código Civil corresponderá a la sociedad cooperativa.*

*El mencionado derecho podrá ejercitarse dentro del plazo de tres meses desde que su titular haya tenido conocimiento de la operación y, en todo caso, en el plazo de un año desde que la misma se inscribiera en el Registro de la Propiedad.*

*6. Los ingresos obtenidos de operaciones con terceras personas se destinarán, en un diez por ciento, al Fondo de Reserva Obligatorio y el resto a disminuir el precio de las viviendas o locales o a sufragar gastos comunes de mantenimiento, conservación o mejora de éstas.*

*Si se previera estatutariamente, los citados ingresos podrán destinarse, en la parte que exceda del diez por ciento, a la financiación de futuras promociones o al mantenimiento o mejora de las ya adjudicadas.*

## **ARTÍCULO 92. TRANSMISIÓN DE DERECHOS.**

*1. En las sociedades cooperativas de viviendas, la persona socia que pretenda transmitir inter vivos sus derechos sobre la vivienda o local, antes de haber transcurrido cinco años u otro plazo superior fijado por los estatutos sociales o por los convenios con entidades públicas o privadas, desde la fecha en que pudo ser ocupado efectivamente la vivienda o local, deberá ofrecerlo, en la forma y plazos previstos para las operaciones con terceras personas, a los socios y socias expectantes o, en su defecto, acudir al listado de personas solicitantes de vivienda o locales en régimen cooperativo previsto en el artículo siguiente.*

*2. Si ninguna de las personas socias expectantes hubiera hecho uso de su derecho de preferente adquisición y no se hallaran solicitantes en el citado listado en el plazo de un mes desde el último ofrecimiento del listado, la persona socia podrá transmitir libremente sus derechos a terceras personas, si bien deberá poner a disposición del órgano de*

*administración de la entidad el diez por ciento del eventual incremento entre el precio de adquisición y el acordado con terceras personas.*

*El órgano de administración acordará imputar dicho importe al Fondo de Reserva Obligatorio o a la disminución del precio de las viviendas o locales, a menos que los estatutos reserven esta facultad a la Asamblea General.*

*3. Si el socio o socia transmitiera a terceras personas sus derechos sobre la vivienda o local, sin cumplir lo previsto en los anteriores apartados, se estará a lo dispuesto en el apartado 5 del anterior artículo respecto de las operaciones con terceras personas, salvo en lo relativo al reembolso a la persona compradora de los gastos a que se refiere el número primero del artículo 1518 del Código Civil que corresponderá al socio o socia que incumplió lo establecido en este artículo.*

*4. Lo establecido en los apartados anteriores de este artículo no será aplicable cuando la persona socia transmita sus derechos a su cónyuge o pareja de hecho, ascendientes o descendientes de hasta segundo grado, en cuyo caso, prevalecerán estos sobre personas socias expectantes y personas solicitantes de vivienda cooperativa inscritas en el listado administrativo correspondiente.*

### **ARTÍCULO 93. REGISTRO DE PERSONAS SOLICITANTES DE VIVIENDA EN RÉGIMEN COOPERATIVO.**

*1. A los efectos señalados en el artículo 98.i) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en los artículos 91 y 92 de este Reglamento, la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas pondrá en funcionamiento un Registro de personas solicitantes de vivienda en régimen cooperativo, de ámbito provincial, que estará adscrito a cada una de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de sociedades cooperativas, quienes asumen las funciones de gestión del mismo.*

*El citado Registro se coordinará con los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y dispondrá de los instrumentos necesarios para que la tramitación de sus actuaciones se pueda realizar a través de medios electrónicos.*

*2. Para la inscripción en el citado Registro, la persona interesada deberá presentar la correspondiente solicitud, conforme al modelo de formulario que apruebe la Consejería*

*competente en materia de sociedades cooperativas, que se podrá obtener y cumplimentar en la sede electrónica de esa Consejería.*

*La tramitación del procedimiento de inscripción se realizará conforme a lo dispuesto, con carácter general, en el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativo a las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y en el Capítulo III del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, relativo al régimen jurídico de los actos y del procedimiento administrativo.*

*La inscripción se practicará dentro del mes siguiente a la recepción de la solicitud. Cuando la persona solicitante figure en una inscripción anterior se denegará la inscripción de la nueva solicitud en tanto no se modifique la inicial.*

*La inscripción tendrá una duración de cinco años desde que ésta se produzca o desde su última modificación, en caso de existir.*

*3. La inscripción no determina por sí sola la asignación de derecho alguno sobre una vivienda o local en régimen cooperativo, debiendo la persona inscrita cumplir los requisitos exigidos para el ingreso como persona socia en la sociedad cooperativa de que se trate y ser admitida en la misma.*

*4. Las personas inscritas tendrán acceso en cualquier momento a los datos que figuren en su inscripción y a su rectificación, conforme a lo previsto en la normativa reguladora de protección de datos. La modificación de las circunstancias declaradas por la persona inscrita deberá comunicarse al Registro cuando puedan afectar a su inclusión en el mismo.*

*5. Para la selección de personas solicitantes, la sociedad cooperativa promotora solicitará al Registro, según modelo aprobado por la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, la correspondiente relación de aquellas que se ajusten a la promoción.*

*El Registro remitirá dicha relación en el plazo de un mes, por orden de antigüedad y en número de demandantes igual al doble del de viviendas o locales a adjudicar.*

*Transcurrido el periodo de adjudicación, la sociedad cooperativa promotora comunicará al Registro su resultado, asimismo, en el plazo máximo de un mes.*

*6. La inscripción permanecerá en tanto la persona inscrita no resulte adjudicataria de derechos sobre una vivienda o local en régimen cooperativo, procediéndose a su cancelación cuando lo resulte o cuando el demandante solicite la misma.*

*7. En el caso de sociedades cooperativas que promuevan viviendas protegidas, para la selección de adjudicatarios se estará a lo previsto por su normativa específica.*

#### **ARTÍCULO 94. GESTIÓN EXTERNA.**

*1. Cuando la cooperativa sea gestionada en lo esencial de forma externa será preceptiva la inscripción de la persona física o jurídica que la realice en el Registro de Cooperativas Andaluzas.*

*2. La Consejería competente en materia de sociedades cooperativas promoverá la gestión responsable, de calidad y basada en los principios cooperativos de estas entidades, cuando se realice externamente.*

#### **ARTÍCULO 95. DISOLUCIÓN.**

*Las sociedades cooperativas de vivienda no podrán disolverse hasta que transcurra un plazo de cinco años desde la ocupación efectiva de las viviendas o locales, u otro superior, fijado en los estatutos sociales o en los convenios suscritos con entidades públicas o privadas, del cual habrá de informarse a los socios y socias.*

*A estos efectos, se entenderá que se produce dicha ocupación desde la fecha de concesión de la licencia de primera ocupación de la vivienda o local, o del documento que legalmente le sustituya, y de no existir, desde la entrega de la posesión.*

#### **ARTÍCULO 96. COOPERATIVAS DE CONSUMO COMO ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.**

*Cuando las cooperativas de consumo ostenten la consideración de organización o asociación de consumidores y usuarios a los efectos de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, prevalecerán los preceptos establecidos al respecto por la citada norma.*



## **Comentario del artículo 98 de la LSCA y los artículos 87 al 96 del RLSCA.**

Según el art. 87.1 del Reglamento podrán ser personas socias, no solo las personas físicas sino también las personas jurídicas, cuando, por razón de trabajo, función o condición personal, precisen alojamiento, locales o construcciones complementarias para las personas físicas que las integren o presten sus servicios por cuenta de ellas. Se trata de una ampliación lógica atendiendo al supuesto específico que atiende, además de permitir que las cooperativas de viviendas puedan ampliar su captación dada la actual situación delicada del mercado de la vivienda.

Se reduce el porcentaje de socios comunes en relación con las viviendas promovidas, que pasa del 50% al 25 %. Se trata de una exigencia del sector cooperativo de viviendas, para no imposibilitar desde el principio la constitución de cooperativas de viviendas.

Se establece que ninguna persona física podrá ser simultáneamente en una misma provincia titular de derechos sobre más de dos viviendas de promoción cooperativa. Se trata de una medida que garantiza el principio de igualdad en el acceso a este tipo de viviendas y se evitan efectos indeseables.

El art. 87.5 del Reglamento establece causas específicas de baja justificada de la persona socia con respecto a la cooperativa. Antes no se establecían, por lo que cualquier salida de la cooperativa era penalizada aunque fuera justificada. Por otro lado, el art. 87.6 aumenta el porcentaje de deducciones complementarias de un 10 a un 20 % en caso de baja no justificada. Es la contrapartida a lo previsto en el apartado 5 en el que se prevén las causas de baja justificada.

El art. 91 del Reglamento introduce una novedad importante respecto al régimen anterior de las operaciones con terceros. Se sustituye la autorización administrativa por un Registro de personas solicitantes de vivienda en régimen cooperativo respecto de aquellas viviendas no adjudicadas. Este registro se configura como uno de los elementos más novedosos de la regulación de este tipo de cooperativas, viniendo a sustituir el régimen de autorización administrativa anteriormente existente y facilitando, además, la búsqueda de terceros que, mediante este mecanismo, quieran acceder a la condición de persona socia. Y en línea con todo ello, el art. 92 respecto al Registro de personas solicitantes de vivienda en régimen cooperativo, introduce dentro del derecho de



adquisición preferente tanto a las personas socias expectantes como a aquellas que integran el listado que ha de facilitar el indicado Registro.

El art. 93 del Reglamento articula el mecanismo para sustituir la autorización administrativa que antes se exigía, a saber, el Registro de personas solicitantes de vivienda en régimen cooperativo. Aquí se determina su carácter provincial, su adscripción a las distintas Delegaciones, la manera de inscribirse y el proceder de dicho Registro a la hora de seleccionar a las personas inscritas.

En el art. 96 se introduce una previsión necesaria, pues existe regulación en materia de consumo que afecta al régimen de la sociedad cooperativa, debiendo, en dicho caso, para no entrar en contradicción, adecuarse dicho régimen a las exigencias legales de esa materia.

## **ARTÍCULO 99. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO.**

*1. Son sociedades cooperativas de crédito aquellas que tienen por objeto servir a las necesidades financieras activas y pasivas de sus socios y socias y, en la medida que la normativa específica aplicable lo autorice, de terceros, mediante el ejercicio de actividades y servicios propios de las entidades de crédito.*

*2. Las sociedades cooperativas de crédito cuya actividad principal consista en la prestación de servicios financieros en el medio rural podrán adoptar la denominación de «caja rural».*

*3. Las normas especiales de este artículo se aplicarán sin perjuicio de las normas básicas del Estado y las autonómicas que les sean de aplicación.*

*En todo caso, estas entidades estarán sometidas a las disposiciones legales de las autoridades de orden económico y cooperativo de la Administración de la Junta de Andalucía respecto de las facultades de ordenación, control, inspección y disciplina, sin perjuicio de lo que se establezca al respecto en la legislación estatal.*

*4. Respecto a su constitución y operaciones con terceras personas, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal.*

## **Comentario del artículo 99 de la LSCA.**

Son cooperativas que tienen por objeto servir a las necesidades financieras de sus socios y de terceros, mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito. Se trata de cooperativas formadas por usuarios de servicios financieros.

Cuando la cooperativa de crédito tenga como actividad principal la prestación de servicios financieros en el medio rural podrá adoptar la denominación “caja rural”.

El régimen jurídico aplicable a este tipo de cooperativa viene previsto en la nueva ley de cooperativas andaluzas así como en normas básicas del Estado y autonómicas que les sean de aplicación. Necesariamente estarán sometidas a las disposiciones legales de las autoridades de orden económico y cooperativo de la Administración de la Junta de Andalucía en relación a las facultades de ordenación, control, inspección y disciplina.

Tanto los aspectos relativos a la constitución y como las operaciones que ésta realice con terceras personas, se regirán por lo dispuesto en la legislación estatal sobre esta materia.

## **ARTÍCULO 100. COOPERATIVAS DE SEGUROS.**

*Son sociedades cooperativas de seguros las que tienen por objeto el ejercicio de la actividad aseguradora para sus socios y socias en cualquiera de las formas admitidas en derecho. Estas sociedades cooperativas se regirán por la presente ley, en el reglamento que la desarrolle y en lo previsto en sus correspondientes estatutos, en cuanto no se oponga a lo previsto en la normativa vigente sobre el seguro privado.*

## **Comentario del artículo 100 de la LSCA.**

Son cooperativas que ejercen la actividad aseguradora a favor de sus socios. Sus socios son tomadores del seguro, por tanto, consumidores o usuarios de estos servicios.

Su régimen jurídico ha sido desarrollado reglamentariamente.

## **ARTÍCULO 101. CONCEPTO Y OBJETO.**

*1. Son sociedades cooperativas de servicios las que integran a personas susceptibles de ser socias conforme al artículo 13.1, titulares de derechos que lleven aparejado el uso o disfrute de explotaciones industriales, de servicios, y a profesionales que ejerzan su actividad por cuenta propia y tengan por objeto la prestación de servicios y la realización de operaciones encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las actividades profesionales o de las explotaciones de sus socios y socias.*

*2. No podrá ser clasificada como sociedad cooperativa de servicios aquella en la que la actividad cooperativizada realizada por las personas socias permita su clasificación conforme a lo establecido en otra de las secciones de este capítulo. Cuando su objeto social sea el transporte, se denominarán sociedades cooperativas de transportistas.*

*3. Para el cumplimiento de su objeto, las sociedades cooperativas de servicios podrán desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:*

*a) Adquirir, elaborar, producir, fabricar, reparar y mantener instrumentos, maquinaria, instalaciones y cualesquiera materiales, productos y elementos necesarios o convenientes para la sociedad cooperativa y para las actividades profesionales o de las explotaciones de sus socios y socias.*

*b) Ejercer industrias auxiliares o complementarias de las de los socios y socias, así como realizar operaciones preliminares o ultimar transformaciones que favorezcan la actividad profesional o de las explotaciones de las personas socias.*

*c) Transportar, distribuir y comercializar los servicios y productos procedentes de la sociedad cooperativa y de la actividad profesional o de las explotaciones de los socios y socias.*

**Concordancia con los artículos 97 y 98 del Reglamento de desarrollo.**

## **ARTÍCULO 97. VOTO PLURAL.**

*1. Los estatutos de las sociedades cooperativas de servicios podrán regular, conforme a lo establecido en el artículo 102.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, el establecimiento de un voto plural ponderado de cada persona socia en la Asamblea*

*General, en proporción al volumen de la actividad cooperativizada de la persona socia, que se registrá por las siguientes reglas:*

*a) Cada persona socia dispondrá de, al menos, un voto.*

*b) Ninguna persona socia podrá disponer de un número superior a siete votos sociales.*

*c) Los estatutos sociales deberán fijar claramente los criterios que garanticen el carácter proporcional y equitativo del reparto del voto entre las personas socias. De no hacerlo, cada voto se asignará en función del cociente resultante de la división entre la mayor aportación realizada a la actividad cooperativizada por cualquiera de los socios o socias y el número máximo de votos del que pueda disponer una persona socia, que se haya fijado estatutariamente. A cada socio o socia le corresponderá un número de votos equivalente a tantas veces como su aportación represente el citado cociente. Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.*

*d) En las sociedades cooperativas con un número de personas socias igual o inferior a veinticinco, el diez por ciento, o menos, de estas no podrá disponer de más del veinticinco por ciento de los votos sociales.*

*El voto plural nunca se establecerá tomando en consideración el capital aportado.*

*2. Con antelación a la convocatoria de la primera Asamblea General de cada ejercicio económico, el órgano de administración elaborará anualmente una relación en la que se establecerá el número de votos sociales que corresponda a cada persona socia, tomando para ello como base los datos de la actividad cooperativizada de cada socio o socia, referidos a los tres últimos ejercicios económicos.*

*3. El órgano de administración deberá poner de manifiesto, en la forma prevista estatutariamente, desde el día de la publicación de la convocatoria hasta el de la celebración de la Asamblea, la relación del número de votos sociales que se asigna a cada socio o socia con detalle de la actividad cooperativizada en virtud de la cual se efectúe dicha asignación.*

*Las personas socias podrán examinar la referida documentación y solicitar por escrito al órgano de administración las correcciones que consideren procedentes. Dicha solicitud*

*deberá presentarse, al menos, con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea.*

*La relación definitiva de los votos sociales que correspondan a cada persona socia, estará a disposición de todos los socios y socias en la forma que se establezca estatutariamente, como mínimo, el mismo día de la celebración de la Asamblea.*

*En todo caso, la persona socia disconforme con la asignación definitiva de votos sociales podrá impugnarla de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

## **ARTÍCULO 98. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES.**

*1. Estatutariamente se podrá establecer la libre transmisión, total o parcial, de participaciones sociales que se regirá por lo establecido en el artículo 102.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en el presente artículo.*

*En caso de que los estatutos establezcan la libre transmisión parcial de las participaciones, el porcentaje transmisible de las aportaciones sociales deberá ser igual, dentro de su clase, obligatoria o voluntaria para cada una de las personas socias de la entidad o de las secciones que la integren, en este último caso, de existir y preverse estatutariamente y siempre que existan motivos técnicos o económicos fundados que lo justifique.*

*2. Cuando una persona titular de participaciones sociales se proponga transmitir la totalidad o parte de dichas participaciones a persona que no ostente la condición de socia deberá comunicarlo por escrito al órgano de administración de la cooperativa de modo que asegure su recepción, haciendo constar el número de participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente, las cualidades en función de las cuales reuniría los requisitos para ser socio o socia, el precio de adquisición y demás condiciones de la transmisión. El órgano de administración de la cooperativa, tras constatar que el aspirante a persona socia reúne los requisitos objetivos de admisión, podrá ejercitar el derecho de preferente adquisición a favor de la sociedad cooperativa adquiriendo las participaciones dentro de los quince días siguientes a contar desde el día en que se hubiera comunicado.*

*3. En todo caso, transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que la sociedad cooperativa hubiera ejercitado su derecho de adquisición preferente ni el órgano de*

*administración hubiera denegado la admisión, quedará libre la persona socia para transmitir las participaciones de su titularidad.*

*Si en el plazo de tres meses desde su comunicación, el socio o socia no hubiese procedido a la transmisión de las participaciones deberá iniciar de nuevo el procedimiento establecido en el apartado anterior.*

*4. Una vez transmitidas las participaciones sociales, las personas transmitente y adquirente deberán comunicar mediante escrito conjunto, dentro de los quince días naturales siguientes, dicha circunstancia al órgano de administración, haciendo constar el número de participaciones transmitidas, la identidad del adquirente, las cualidades en función de las cuales reúne los requisitos para ser socio o socia, el precio de adquisición y demás condiciones de la transmisión.*

*La cooperativa dispondrá de un derecho de retracto, para el caso en el que la transmisión no se haya realizado conforme a las condiciones establecidas en la comunicación previa, pudiendo ejercitarlo dentro del mes siguiente a la fecha en que comunicó dicha transmisión.*

*5. Para que la transmisión de participaciones sociales se lleve a efecto, será necesario que, previamente, la persona socia transmitente salde las deudas que, eventualmente, tenga con la sociedad cooperativa.*

*Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 102.2.c) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, si el importe de las participaciones transmitidas supera su eventual valor para el caso de liquidación al socio o socia, corresponderá a dicha persona el abono del diez por ciento del exceso al Fondo de Reserva Obligatorio.*

*6. El órgano de administración podrá acordar, si así se prevé en los estatutos sociales, la devolución de todo o parte de la aportación social a la persona socia que causa baja en la sociedad cooperativa sin lograr transmitirla, tomando en consideración la situación de la entidad y la contribución a esta del socio o socia saliente.*

*7. Las participaciones sociales adquiridas por la sociedad cooperativa mediante el ejercicio de los derechos de adquisición preferente o de retracto previstos en este artículo, no podrán exceder del cinco por ciento del capital social. Estas participaciones deberán ser transmitidas en el plazo de seis meses desde su adquisición y no podrá efectuarse a*

*un precio inferior al satisfecho para obtenerlas. Si las participaciones no fueran transmitidas en el plazo señalado, la sociedad deberá acordar inmediatamente su amortización y la reducción del capital.*

*Asimismo, mientras permanezcan en poder de la sociedad adquirente, quedarán en suspenso todos los derechos correspondientes a las participaciones propias.*

*La sociedad cooperativa no podrá anticipar fondos, conceder créditos o préstamos, prestar garantía, ni facilitar asistencia financiera para la adquisición de sus propias participaciones.*

### **Comentario de los artículos 101 de la LSCA y de los artículos 97 y 98 del RLSCA.**

Son aquellas que asocian a titulares de explotaciones industriales o de servicios y a profesionales o artistas que ejerzan su actividad por cuenta propia, y tienen por objeto la prestación de suministros y servicios, o la producción de bienes y la realización de operaciones encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las actividades profesionales o de las explotaciones de sus socios. Integran a personas susceptibles de ser socias conforme al artículo 13.1.

Si en función de la actividad cooperativizada la cooperativa puede ser susceptible de encuadrarse dentro del régimen de otro tipo de cooperativa de las presentes en las diferentes secciones del capítulo II no podrá ser calificada como cooperativa de servicios.

Las cooperativas de servicios tienen las siguientes facultades:

- Podrán adquirir, elaborar, producir, fabricar, reparar y mantener instrumentos, maquinaria, instalaciones y cualesquiera materiales, productos y elementos necesarios o convenientes para la sociedad cooperativa y para las actividades profesionales o de las explotaciones de sus socios y socias.
- Podrán ejercer industrias auxiliares o complementarias de las de los socios y socias y también realizar operaciones para transformar la actividad profesional o de la explotación de los socios.
- Transportar, distribuir y comercializar los servicios y productos procedentes de la sociedad cooperativa y de la actividad profesional o de las explotaciones de los socios y socias.



En el artículo 98 del Reglamento se desarrolla la regulación de la transmisión de participaciones sociales a terceras personas, estableciéndose un derecho de adquisición preferente y otro de retracto, todo ello dentro de un sistema de prelación y precisando el régimen de responsabilidad respecto a las deudas sociales de las personas socias transmitentes, así como estableciendo la posibilidad de que la cooperativa disponga de autocartera durante un tiempo breve y sometido a importantes condicionantes.

## **ARTÍCULO 102. RÉGIMEN JURÍDICO.**

*1. En las sociedades cooperativas de servicios, estatutariamente, se podrá regular un voto plural, proporcional a la totalidad de la actividad cooperativizada, con arreglo a las siguientes bases:*

- a) Cada persona socia dispondrá de, al menos, un voto.*
- b) Ningún socio o socia podrá disponer de un número superior a siete votos sociales.*
- c) Reglamentariamente se establecerán los requisitos precisos para garantizar el carácter proporcional y equitativo del reparto del voto entre las personas socias.*

*El voto plural nunca se establecerá tomando en consideración el capital aportado.*

*2. También, mediante previsión estatutaria, podrá preverse la libre transmisión de participaciones sociales, conforme a las siguientes reglas, que serán objeto de desarrollo reglamentario:*

- a) Entre socios y socias de la entidad regirá la plena libertad de transmisión de participaciones sociales, bastando una mera comunicación al órgano de administración de la transmisión prevista y de la ya realizada.*
- b) En el supuesto de transmisión a un tercero, el órgano de administración deberá constatar que la persona aspirante a socia reúne los requisitos objetivos de admisión referidos en el artículo 18.1. También para este supuesto se establece un derecho de preferente adquisición a favor de la sociedad cooperativa, con el correspondiente derecho de retracto.*

*c) De superar el importe de las participaciones transmitidas su eventual valor para el caso de liquidación al socio o socia, un diez por ciento del exceso se destinará al Fondo de Reserva Obligatorio.*

*d) La libre transmisión de participaciones no exonera a quien vaya a ejercitarla de la obligación de preaviso que alcanza a todo socio o socia que pretende causar baja.*

*3. Cuando la titularidad del derecho a que hace referencia el artículo 101.1 recaiga sobre una comunidad de bienes y derechos, las personas cotitulares elegirán a una persona de entre ellas para que las represente y ejercite sus derechos, incluido el derecho de voto.*

*4. Las sociedades cooperativas de servicios podrán realizar con terceras personas cualesquiera actividades de las que constituyen su objeto social hasta un máximo del cincuenta por ciento en cada ejercicio económico, computándose dicho porcentaje con carácter general para todas las actividades realizadas.*

*No obstante, por motivos extraordinarios, que deberán reflejarse en el acuerdo de la Asamblea General inmediatamente posterior a su realización, podrán efectuarse operaciones por encima del citado porcentaje, siempre que se compensen con las realizadas en los tres ejercicios siguientes.*

### **Comentario del artículo 102 de la LSCA.**

En las cooperativas de servicios se podrá establecer el voto plural, proporcional a la totalidad de la actividad cooperativizada si así lo prevén los estatutos. Las normas que deben regir para ello son:

gg) Cada socio tendrá como mínimo un voto

hh) El máximo que un socio puede tener son siete votos

Por otro lado, el reglamento se encarga de establecer los requisitos precisos para garantizar el carácter proporcional y equitativo del reparto del voto entre los socios. En cualquier caso, no podrá regularse el voto plural conforme al capital aportado.

También se podrá prever en los estatutos la libre transmisión de participaciones sociales siguiendo las reglas establecidas en el apartado 2 del artículo 102 de la ley.

Si el voto plural recae sobre una comunidad de bienes y derechos, las personas cotitulares elegirán a una persona entre ellas para que las represente y ejercite sus derechos, incluido el derecho de voto.

Las cooperativas de servicios podrán realizar con terceras personas como máximo el cincuenta por ciento de su actividad en cada ejercicio económico. Sin embargo, extraordinariamente podrá efectuar un volumen mayor de actividad con terceros siempre que compensen con las realizadas en los tres ejercicios siguientes. El motivo extraordinario que permita esta regla excepcional habrá de quedar reflejada en el acuerdo de la Asamblea General.

### **ARTÍCULO 103. COOPERATIVAS AGRARIAS. CONCEPTO Y OBJETO.**

*1. Son sociedades cooperativas agrarias las que integran a personas, susceptibles de ser socias conforme el artículo 13.1, titulares de algún derecho que lleve aparejado el uso o disfrute de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, y que tienen por objeto la realización de todo tipo de actividades y operaciones encaminadas al mejor aprovechamiento de las explotaciones de sus socios y socias, de sus elementos o componentes, de la sociedad cooperativa y a la mejora de la población agraria y del desarrollo del mundo rural, así como a atender a cualquier otro fin o servicio propio de la actividad agrícola, ganadera, forestal o que esté directamente relacionado con ellas.*

*2. Para el cumplimiento de su objeto, las sociedades cooperativas agrarias podrán desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:*

*a) Adquirir, elaborar, producir y fabricar por cualquier procedimiento, para la sociedad cooperativa o para las explotaciones de sus socios y socias, elementos necesarios o convenientes para la producción y el fomento agrario.*

*b) Conservar, tipificar, transformar, transportar, distribuir, comercializar, incluso directamente a la persona consumidora, los productos procedentes de las explotaciones de la sociedad cooperativa y de sus socios y socias, adoptando, cuando proceda, el estatuto de organización de productores agrarios.*

*c) Adquirir, parcelar y mejorar terrenos destinados a la agricultura, ganadería o explotación forestal, incluso su distribución entre los socios y socias, o el mantenimiento en común de la explotación y de otros bienes susceptibles de uso y explotación agraria, ganadera o forestal, así como la construcción y explotación de obras e instalaciones necesarias para estos fines.*

*d) Promover el desarrollo y el aprovechamiento sostenible del medio rural mediante la prestación de todo tipo de servicios, así como el fomento de la diversificación de actividades agrarias u otras encaminadas a la promoción y mejora del entorno rural.*

*e) Fomentar y gestionar el crédito agrario y los seguros, especialmente a través de cajas rurales, secciones de crédito y otras entidades especializadas.*

*f) Cualquier otra necesaria, conveniente o que facilite el mejoramiento económico, técnico, laboral o ecológico de la sociedad cooperativa o de las explotaciones de las personas socias. A este respecto, la sociedad cooperativa podrá contratar personas trabajadoras que presten labores agrícolas, ganaderas o forestales u otras encaminadas a lograr dicho mejoramiento, incluso en las explotaciones de sus socios y socias.*

*3. La adopción del acuerdo en virtud del cual se decida la participación de una sociedad cooperativa agraria en cualquier otra sociedad cooperativa, así como en empresas no cooperativas cuyo objeto consista en la comercialización de la producción de la primera, corresponderá a su Asamblea General.*

*4. Se asimilarán a operaciones con personas socias aquellas que se realicen entre sociedades cooperativas agrarias o con otras de segundo o ulterior grado constituidas mayoritariamente por sociedades cooperativas agrarias.*

## **ARTÍCULO 104. RÉGIMEN DE LAS PERSONAS SOCIAS EN LAS COOPERATIVAS AGRARIAS.**

*1. Con carácter previo a la presentación de su candidatura para formar parte de cualquier órgano de la sociedad, toda persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes y derechos, o cualquier otro ente sin personalidad jurídica, deberá acreditar a la persona física que ostentará su representación. De resultar elegida, esta ostentará el cargo durante todo el periodo, a menos que cese por causa ajena a la voluntad de la entidad proponente, en cuyo caso, quedará vacante dicho cargo o se sustituirá con arreglo a lo*

*que se disponga reglamentariamente en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 39.7. En ningún caso dicha persona podrá ser sustituida por la entidad proponente sin el acuerdo de la Asamblea General.*

*2. Los estatutos modularán la obligación de utilizar los servicios de la sociedad cooperativa que asuman los socios y socias, pudiendo establecer y regular el principio de exclusividad, conforme al cual, estarán obligados a entregar a la sociedad cooperativa la totalidad de su producción o a realizar todas las adquisiciones a la misma.*

*En el supuesto contemplado en el párrafo anterior, el carácter de persona socia colaboradora podrá venir determinado por la realización de una actividad en un porcentaje inferior al requerido por el citado principio, aun cuando se trate de la actividad o las actividades principales de la entidad. En el caso de que todas las personas socias colaboradoras respondan a la expresada característica, no será necesario deslindar, estatutariamente o mediante el reglamento de régimen interior, las actividades principales de las accesorias, tal como establece el artículo 17.1.*

*3. Podrá preverse, estatutariamente, que las aportaciones obligatorias suscritas por las personas socias determinen y cuantifiquen los servicios a los que estas puedan acceder.*

*4. El plazo de preaviso para causar baja voluntaria en la entidad, que habrá de quedar reflejado estatutariamente, no podrá exceder de un año.*

### **Comentario de los artículos 103 y 104 de la LSCA.**

Son aquellas que asocian a titulares de explotaciones agrarias, ganaderas o forestales, que tienen como objeto la realización de todo tipo de actividades y operaciones encaminadas al mejor aprovechamiento de las explotaciones de sus socios. Sus socios pueden ser tanto proveedores de bienes y servicios como consumidores, y ambas funciones en la misma persona. También tienen como finalidad la mejora de la población agraria y el desarrollo del mundo rural. Las actividades que toda cooperativa agraria está facultada para realizar vienen enumeradas en el artículo 103. 2 de la ley.

La cooperativa agraria puede participar en cualquier otra cooperativa así como en empresas no cooperativas cuyo objeto consista en la comercialización de la producción de la primera, pero para ello deberá adoptarse el correspondiente acuerdo en la Asamblea General.

Se regularán como operaciones entre socios aquellas que se realicen entre cooperativas agrarias o con otras de segundo o ulterior grado constituidas mayoritariamente por cooperativas agrarias.

## **ARTÍCULO 105. COOPERATIVAS MARÍTIMAS, FLUVIALES O LACUSTRES.**

*1. Son sociedades cooperativas marítimas, fluviales o lacustres las que integran personas, susceptibles de ser socias conforme al artículo 13.1, titulares de explotaciones dedicadas a actividades pesqueras, de industrias relacionadas con la pesca o sus derivadas, en sus distintas modalidades del mar, ríos, lagos, lagunas, que tienen como objeto cualquier tipo de actividades y operaciones encaminadas a la mejora económica y técnica de las explotaciones de los socios y socias, de sus elementos o componentes y de la sociedad cooperativa, así como cualquier otro servicio propio de estas actividades, incluida la acuicultura, o directamente relacionado con ellas.*

*2. Las sociedades cooperativas marítimas, fluviales o lacustres pueden realizar cualquier actividad de interés para los socios y las socias, así como para la promoción y el desarrollo sostenible de su entorno.*

### **Comentario del artículo 105 de la LSCA.**

Son aquellas que asocian a pescadores, armadores de embarcaciones, cofradías, organizaciones de productores pesqueros, titulares de viveros de algas, de cetáceas, mariscadores y familias marisqueras, concesionarios de explotaciones de pesca y de acuicultura y, en general, a personas titulares de explotaciones dedicadas a actividades pesqueras o de industrias marítimo-pesqueras y derivadas, en sus diferentes modalidades del mar, rías y lagunas marítimas, y a profesionales por cuenta propia de dichas actividades, y tienen por objeto la prestación de suministros y servicios y la realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las actividades profesionales o de las explotaciones de sus socios. Al igual que las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, en estas cooperativas podemos encontrar todo tipo de socios: proveedores, consumidores y usuarios.

## Sección 4ª. Cooperativas especiales

### **ARTÍCULO 106. COOPERATIVAS MIXTAS.**

*1. Son sociedades cooperativas mixtas aquellas en cuya actividad cooperativizada concurren características propias de las distintas clases a que se refiere el artículo 83.1.a), de conformidad con lo establecido en sus estatutos, los cuales fijarán los criterios de relación equitativa y proporcional entre los socios y socias que desarrollen cada una de las actividades, determinando, en su caso, los derechos y obligaciones de cada clase.*

*2. En los órganos sociales de estas entidades deberá existir una representación de cada una de las actividades cooperativizadas integradas en la sociedad y, estatutariamente, se podrán reservar la Presidencia y Vicepresidencia a los socios y socias que desarrollen una determinada actividad.*

### **Concordancia con el artículo 99 del Reglamento de desarrollo.**

### **ARTÍCULO 99. COOPERATIVAS MIXTAS.**

*1. Conforme a lo previsto en el artículo 106 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, son sociedades cooperativas mixtas aquellas en cuya actividad cooperativizada concurren características propias de las distintas clases de sociedades cooperativas a que se refiere el artículo 83.1.a) de la citada Ley, de conformidad con lo establecido en sus estatutos.*

*2. Este tipo de sociedades realizará más de una actividad cooperativizada, conforme a lo acordado en sus estatutos, cumpliendo las finalidades propias de diferentes clases de sociedades cooperativas en una sola cooperativa de primer grado. Cada actividad cooperativizada realizada por la entidad se regulará por la normativa específica prevista para su clase.*

*3. En los estatutos sociales constarán, en su caso, específicamente los derechos y obligaciones, tanto políticos como económicos, correspondientes a las diferentes clases de personas socias, atendiendo a su cualidad y a la actividad que desarrollan en la empresa, debiendo ajustarse a unos criterios de relación equitativa y proporcional entre los socios y socias que desarrollen cada una de dichas actividades, que serán fijados, asimismo, estatutariamente.*



## **Comentario del artículo 106 de la LSCA y del artículo 99 del RLSCA.**

Son aquellas que con independencia de su clase, su actividad cooperativizada es doble o plural, cumpliendo las finalidades propias de diferentes clases de cooperativas en una misma sociedad. Las cooperativas integrales o mixtas permiten agrupar en una misma cooperativa lo que podrían ser objetivos de distintas clases de cooperativas. Pueden coexistir distintas actividades en socios de la misma naturaleza: cooperativa de consumo y de viviendas; o bien, pueden coexistir en una misma actividad socios de distinta naturaleza: cooperativa de trabajo asociado (socios proveedores) y cooperativa de viviendas (socios consumidores).

El art. 99 del Reglamento regula de manera detallada en qué consiste este tipo de cooperativas, cual es su estructura, el régimen que se le aplica dependiendo de la actividad cooperativizada y los derechos y obligaciones que corresponden a sus personas socias teniendo en cuenta la actividad que desarrollan, pero aplicando de manera horizontal el principio de igualdad a todas ellas.

## **ARTÍCULO 107. OTRAS FÓRMULAS COOPERATIVAS.**

*Reglamentariamente, podrán regularse otros tipos de sociedades cooperativas de primer grado que no se ajusten a los criterios establecidos en el Capítulo II de este título. No obstante, de entre estos, serán objeto de regulación reglamentaria, en todo caso, las sociedades cooperativas de integración social, las de servicios públicos y las de explotación comunitaria de la tierra.*

## **Concordancia con los artículos 100 a 105 del Reglamento de desarrollo.**

## **ARTÍCULO 100. COOPERATIVAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL.**

*1. Son sociedades cooperativas de integración social aquellas que agrupan, mayoritariamente, a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, u otros colectivos con especiales dificultades de integración en la sociedad, y cuya finalidad consista en su inserción social.*

*2. En estas cooperativas podrán integrarse como socios y socias los progenitores, las personas que ostenten la tutela y quienes ostenten un interés legítimo en relación al*

*objeto social de la cooperativa, en cuyo caso, los estatutos sociales deberán prever y regular esta circunstancia.*

*Asimismo, podrán ser personas socias de estas cooperativas las Administraciones y entidades públicas, y las entidades privadas cuya normativa o estatutos prevean o permitan la financiación u otra forma de colaboración en el desarrollo de las actividades de tales cooperativas. Estas personas socias designarán un representante, cuya función consistirá en prestar un trabajo de asistencia técnica, profesional y social a la cooperativa y asistirá a las reuniones de los órganos sociales de los que la entidad pública o privada forme parte, ejerciendo el resto de derechos inherentes a la condición de persona socia, en nombre de la entidad a la que representa.*

*3. El objeto de estas sociedades cooperativas podrá consistir en la prestación de cualquiera de las siguientes actividades:*

*a) Proporcionar a sus personas socias bienes y servicios de consumo general o específico, para su subsistencia, desarrollo, asistencia e integración social, en cuyo caso deberán adoptar la forma de cooperativas de consumo.*

*b) Organizar, canalizar, promover y comercializar la producción de los productos o servicios del trabajo de los socios y socias, adoptando la forma de cooperativas de trabajo.*

*4. Los progenitores y las personas que ostenten la tutela podrán formar parte de los órganos sociales de la cooperativa supliendo la incapacidad de las personas con discapacidad psíquica, sin integrarse como personas socias en la entidad, de conformidad con lo que determine la sentencia de incapacitación.*

*5. Las sociedades cooperativas de integración social podrán tener el carácter de sociedades cooperativas de interés social, debiendo incluir la expresión «interés social» en su denominación, siéndole de aplicación lo previsto en el artículo 94 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

## **ARTÍCULO 101. COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.**

*1. La Administración de la Junta de Andalucía así como las Administraciones locales andaluzas, a fin de asegurar la existencia de servicios públicos de calidad, podrán proveer*

*que la prestación directa de éstos se haga mediante la constitución de sociedades cooperativas de servicios públicos.*

*2. En estas sociedades cooperativas participarán como personas socias promotoras la entidad o entidades públicas competentes y, en su caso, entidades privadas con experiencia demostrada en el sector; asimismo, podrán participar las personas usuarias de los servicios que sean objeto de la sociedad cooperativa así como las personas socias trabajadoras que presten su trabajo personal en la sociedad, en este último caso hasta alcanzar el veinticinco por ciento del capital de la misma. No obstante, las entidades públicas promotoras conservarán el control en cuanto a las condiciones de prestación de los servicios públicos.*

*Cuando la Administración de la Junta de Andalucía participe como persona socia en este tipo de cooperativas, dicha participación deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en especial a la regulación de las organizaciones personificadas de gestión contenida en su artículo 12.*

*3. Se excluye, en todo caso, la prestación de servicios públicos que exijan el ejercicio de autoridad pública, como los de orden público y protección civil.*

*4. Será de aplicación a estas sociedades cooperativas el régimen previsto en el artículo 106 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en el artículo 99 de este Reglamento para las sociedades cooperativas mixtas.*

*5. En todo caso, las sociedades cooperativas de servicios públicos deberán someter a auditoría externa, en los términos establecidos por la Ley de Auditoría de Cuentas y sus normas de desarrollo, sus cuentas anuales y demás documentos necesarios conforme a la normativa general contable o cualquier otra disposición de obligado cumplimiento.*

*Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra.*

## **ARTÍCULO 102. CONCEPTO Y OBJETO.**

*1. Son sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra las que asocian a titulares de algún derecho que lleve aparejado el uso o disfrute de tierras y otros bienes inmuebles, susceptibles de explotación agraria, que ceden dichos derechos a la sociedad cooperativa y que prestan o no su trabajo en la misma, pudiendo asociar también a otras*

*personas físicas que, sin ceder a la cooperativa derechos de disfrute sobre bienes, prestan su trabajo en la misma para la explotación en común de los bienes cedidos por los socios y socias y de los demás que posea la cooperativa por cualquier título.*

*En ningún caso podrá constituirse una sociedad cooperativa de explotación comunitaria de la tierra formada exclusivamente por personas socias que aporten únicamente derechos de uso o disfrute sobre explotaciones agrarias.*

*2. Estas sociedades cooperativas podrán desarrollar cualquier actividad dirigida al cumplimiento de su objeto social, tanto las dedicadas directamente a la obtención de los productos agrarios como las preparatorias de las mismas y, en general, cuantas sean propias de la actividad agraria o sean antecedentes, complemento o consecuencia directa de las mismas.*

*No obstante, también podrán desarrollar las actividades de conservación, tipificación, manipulación, transformación, transporte, distribución y comercialización, incluso directamente al consumidor, de productos que no procedan de la explotación de la sociedad cooperativa, hasta un cinco por ciento, en cada ejercicio económico, computándose dicho porcentaje con carácter general para todas las actividades en que la sociedad cooperativa utilice productos de terceras personas.*

### **ARTÍCULO 103. RÉGIMEN SOCIAL.**

*1. Pueden ser personas socias de las sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra:*

*a) Las personas físicas titulares de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles susceptibles de explotación agraria que cedan dichos derechos a la sociedad cooperativa, prestando o no su trabajo a la misma y que, en consecuencia, tendrán simultáneamente la condición de personas socias cedentes del goce de bienes a la sociedad cooperativa y de personas socias trabajadoras, o únicamente la primera. Cuando la titularidad del derecho a que se refiere este apartado recaiga sobre una comunidad de bienes y derechos, las personas cotitulares elegirán a una de ellas para que las represente y ejercite los derechos propios de la persona socia en su nombre, incluido el derecho de voto, que será único para todas las personas comuneras.*

*b) Las personas físicas que sin ceder a la cooperativa derechos de disfrute sobre bienes, prestan su trabajo en la misma y que tendrán únicamente la condición de personas socias trabajadoras.*

*c) También pueden ser personas socias en la condición de cedentes de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles susceptibles de aprovechamiento agrario, los entes públicos y las sociedades en cuyo capital social los entes públicos participen mayoritariamente.*

*2. A cada persona socia le corresponderá un solo voto, con independencia de que simultanee o no la condición de persona socia trabajadora con la de cedente del goce de bienes a la cooperativa.*

*3. Será de aplicación a las personas socias trabajadoras, sean o no simultáneamente cedentes del goce a la sociedad cooperativa, las normas establecidas en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y en este Reglamento para las personas socias trabajadoras de las sociedades cooperativas de trabajo, con las excepciones contenidas en este artículo.*

*4. El número de jornadas legales realizadas por personas trabajadoras por cuenta ajena no podrá ser superior al treinta por ciento de las realizadas por los socios y socias trabajadores, en cómputo anual.*

*5. Siempre que se prevea estatutariamente, la persona socia que pretenda causar baja, podrá transmitir sus participaciones conforme al procedimiento previsto en el artículo 89 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y el artículo 77 de este Reglamento.*

#### **ARTÍCULO 104. CESIÓN DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES.**

*1. Los estatutos deberán establecer el tiempo mínimo de permanencia en la cooperativa de explotación comunitaria de la tierra de las personas socias en su condición de cedentes del uso y aprovechamiento de bienes, que no podrá ser superior a quince años.*

*Cumplido el plazo de permanencia a que se refiere el párrafo anterior, si los estatutos lo prevén, podrán establecerse nuevos períodos sucesivos de permanencia obligatoria, por plazos no superiores a cinco años.*

*Estos plazos se aplicarán automáticamente, salvo que la persona socia comunique su decisión de causar baja, con una anticipación mínima de seis meses a la finalización del respectivo plazo de permanencia obligatoria.*

*En todo caso, el plazo para el reembolso de las aportaciones al capital social comenzará a computarse desde la fecha en que termine el último plazo de permanencia obligatoria.*

*2. Aunque, por cualquier causa, la persona socia cese en la cooperativa en su condición de cedente del goce de bienes, la sociedad cooperativa podrá conservar los derechos de uso y aprovechamiento que fueron cedidos por la persona socia, por el tiempo que falte para terminar el período de permanencia obligatoria de ésta en la sociedad cooperativa, la cual, si hace uso de dicha facultad, en compensación, abonará al socio o socia cesante la renta media de la zona de los referidos bienes.*

*3. La persona arrendataria y demás titulares de un derecho de goce podrán ceder el uso y aprovechamiento de los bienes por el plazo máximo de duración de su contrato o título jurídico, sin que por ello sea causa de desahucio o resolución del mismo de conformidad con la legislación estatal vigente. En este supuesto, la sociedad cooperativa podrá dispensar del cumplimiento del plazo estatutario de permanencia obligatoria, siempre que la persona titular de los derechos de uso y aprovechamiento se comprometa a cederlos por el tiempo a que alcance su título jurídico.*

*4. Los estatutos señalarán el procedimiento para obtener la valoración de los bienes susceptibles de explotación en común y podrán regular el régimen de obras, mejoras y servidumbres que puedan afectar a los bienes cuyo goce haya sido cedido y que sean consecuencia del plan de explotación comunitaria de los mismos.*

*Los estatutos también podrán establecer normas sobre la transmisión de los bienes cuyos titulares hayan cedido sobre los mismos los derechos de uso y aprovechamiento a la sociedad cooperativa, durante el tiempo de permanencia obligatoria como persona socia en la misma.*

*5. La persona socia que, en su condición de cedente del goce de bienes, cause baja obligatoria o voluntaria en la sociedad cooperativa podrá transmitir sus aportaciones al capital social, además de en los supuestos y términos previstos en el artículo 61 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, a su cónyuge, pareja de hecho, ascendientes y*

*descendientes si estos adquieren la condición de persona socia en el plazo de tres meses desde la baja de aquélla.*

## **ARTÍCULO 105. RÉGIMEN ECONÓMICO.**

*1. Los estatutos fijarán la aportación obligatoria inicial al capital social para ser persona socia, distinguiendo la que ha de realizar en su condición de cedente del goce de bienes y en la de persona socia trabajadora.*

*2. La persona socia que, teniendo la doble condición de cedente del goce de bienes y de persona socia trabajadora, cesase en una de ellas tendrá derecho al reembolso de las aportaciones realizadas en función de la condición en que cesa en la cooperativa, sea ésta la de cedente de bienes o la de persona socia trabajadora.*

*3. Los retornos se acreditarán a las personas socias de acuerdo con las siguientes normas:*

*a) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes incluidos en la explotación por título distinto a la cesión a la sociedad cooperativa del goce de los mismos por las personas socias se imputarán a quienes tengan la condición de persona socia trabajadora de acuerdo con las normas establecidas para las sociedades cooperativas de trabajo.*

*b) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes cuyo goce ha sido cedido por las personas socias a la sociedad cooperativa se imputarán a las personas socias en proporción a su respectiva actividad cooperativizada, valorándose como módulo la renta usual en la zona para fincas análogas si la actividad consiste en la cesión a favor de la cooperativa del goce de las fincas o conforme al salario de la zona correspondiente a la actividad desarrollada aunque hubiese percibido anticipos societarios de cuantía distinta si la actividad consiste en la prestación de trabajo por la persona socia.*

*4. La imputación de pérdidas se realizará conforme a las normas establecidas en el apartado anterior.*



## **Comentario del artículo 107 de la LSCA y los artículos 99 a 105 del RLSCA.**

En definitiva, en la Sección. 4ª se regula el régimen de determinadas cooperativas, que debido a sus características específicas no se pueden insertar en ninguna de las clases de cooperativas ordenadas en las anteriores secciones.

El art. 100 del Reglamento introduce como posibles nuevos socios de las cooperativas de integración a las entidades públicas e, incluso, entidades privadas que tengan previsto en sus normas este tipo de colaboración social. Se trata de una ampliación del régimen social que resulta lógica teniendo en cuenta la aportación que pueden realizar estas entidades a la cooperativa.

El art. 103.3 del Reglamento responde a la calificación de estas cooperativas como especiales y no de trabajo (como se establecía anteriormente). Esto redundará positivamente en la actividad cooperativizada que pueden realizar, ya que se amplía y se diversifica, pudiendo realizar una actividad cooperativizada típica de consumo o de trabajo, aplicándosele la normativa correspondiente.

El art. 101 del Reglamento regula una de las nuevas formas tipológicas de sociedades cooperativas introducidas por la Ley. Con ella se pretende cubrir un ámbito de actuación muy específico, cual es la de prestar servicios públicos, y cuya implementación es novedosa. Es una nueva fórmula cooperativa que permite la gestión pública privada en la prestación de servicios públicos y en la que pueden incluso participar sus usuarios. Es una nueva concepción en la prestación de servicios públicos, que garantiza la prestación de servicios públicos bajo los principios cooperativos.

El art. 103 del Reglamento prevé un aumento del porcentaje máximo de jornadas legales por cuenta ajena, pasando del 20% al 30%, así como la figura de la transmisión de participaciones sociales. Todo ello se debe a la necesidad de responder a las exigencias de liberalización que en esta materia ha introducido la Ley.

El art. 104 recoge una ampliación del plazo de permanencia de 12 a 15 años, mientras que la prórroga se reduce de 6 a 5 años. Con esta modificación se pretende otorgar mayor estabilidad a la cooperativa, ya que la actividad de esta consiste en explotar los bienes que se ceden a ella.

## **CAPÍTULO III. SOCIEDADES COOPERATIVAS DE SEGUNDO O ULTERIOR GRADO Y OTRAS FORMAS DE INTEGRACIÓN.**

### **ARTÍCULO 108. COOPERATIVAS DE SEGUNDO O ULTERIOR GRADO.**

*1. Son sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado las que agrupan, al menos, a dos sociedades cooperativas de grado inmediatamente inferior, para el cumplimiento y desarrollo de fines comunes de orden económico.*

*2. Las sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado se clasifican en:*

*a) Homogéneas, formadas por sociedades cooperativas, si bien también podrán integrarlas los socios y socias de trabajo a que hace referencia el artículo 15, sociedades agrarias de transformación y personas empresarias individuales.*

*b) Heterogéneas, integradas, además de por sociedades cooperativas, por personas susceptibles de ser socias conforme al artículo 13.1.*

*En ambos casos, tratándose de personas socias que no tengan la condición de cooperativa, ha de existir la necesaria convergencia de intereses de naturaleza económica. Asimismo, la mayoría de personas socias, a excepción de los socios y socias de trabajo, y la mayoría de los votos sociales deben corresponder a las sociedades cooperativas.*

*3. El importe total de las aportaciones de cada persona socia al capital social de estas entidades no podrá exceder del setenta y cinco por ciento del mismo, debiendo pertenecer, al menos, el cincuenta y uno por ciento de dicho capital, a sociedades cooperativas.*

*4. Las condiciones para causar baja en la entidad se determinarán reglamentariamente, si bien, el plazo de preaviso será de, al menos, un año, salvo que la normativa comunitaria prevea un plazo inferior, en cuyo caso, podrá establecerse estatutariamente uno congruente con dicha normativa.*

*Asimismo, serán objeto de desarrollo reglamentario el régimen de constitución, organización y funcionamiento de los órganos sociales, incluido el voto de las personas socias; las condiciones de admisión y baja de los socios y socias, y las normas supletorias aplicables a este tipo de sociedades cooperativas.*

*5. En caso de disolución de la sociedad cooperativa de segundo o ulterior grado, el haber líquido resultante se distribuirá entre los socios y socias en proporción al importe del retorno percibido en los últimos cinco años o, en su defecto, desde la constitución de aquella. En el caso de las sociedades cooperativas socias, se destinará siempre al Fondo de Reserva Obligatorio de cada una de ellas.*

*6. Los retornos que reciban las cooperativas socias de las de segundo o ulterior grado, los intereses que se devenguen por sus aportaciones al capital social, así como los rendimientos derivados de la financiación voluntaria a que hace referencia el apartado 3 del artículo 62, tendrán la consideración de resultados cooperativos.*

**Concordancia con el artículo 106 del Reglamento de desarrollo.**

#### **ARTÍCULO 106. COOPERATIVAS DE SEGUNDO O ULTERIOR GRADO.**

*1. Las sociedades cooperativas y, en su caso, las demás personas jurídicas que integren la cooperativa de segundo o ulterior grado nombrarán a una persona representante de las citadas entidades socias en la Asamblea General.*

*El derecho de voto de las personas jurídicas podrá ser proporcional a la participación de las mismas en la actividad cooperativizada de la sociedad cooperativa de segundo o ulterior grado o a su número de personas socias.*

*2. Las personas integrantes del órgano de administración, de los demás órganos colegiados que se constituyan y las personas liquidadoras de las cooperativas de segundo o ulterior grado serán elegidas por la Asamblea General entre sus socios o socias o miembros de entidades socias componentes de la misma, mediante la presentación de candidaturas presentadas por las respectivas entidades o personas asociadas. No obstante, los estatutos podrán prever que formen parte del órgano de administración personas cualificadas y expertas que no sean socias, ni miembros de entidades socias, hasta un tercio del total. Igual previsión estatutaria podrá existir respecto a las personas encargadas de la liquidación.*

*La persona elegida, aceptado el nombramiento, actuará como si lo fuera en nombre propio y ostentará el cargo durante todo el período. No obstante, cesará en su cargo si perdiese la confianza o la condición de socio o socia de la sociedad cooperativa de origen, o cuando la entidad de la que es miembro dejara de pertenecer a la sociedad cooperativa de segundo grado.*

*3. La admisión de cualquier persona socia que no sea cooperativa requerirá acuerdo favorable del órgano de administración por mayoría de, al menos, dos tercios de los votos presentes y representados, salvo previsión estatutaria en contra.*

*La persona socia que pretenda darse de baja habrá de cursar un preaviso de, al menos, un año, salvo que la normativa comunitaria prevea un plazo inferior, en cuyo caso, podrá establecerse estatutariamente uno congruente con dicha normativa, y estará obligada a cumplir las obligaciones contraídas con la cooperativa de segundo o ulterior grado, o a resarcirla económicamente si así lo decide el órgano de administración de ésta.*

*4. Las cooperativas de segundo o ulterior grado, independientemente del número de personas socias que las integren, podrán establecer, en sus estatutos sociales, la existencia de un órgano de intervención, que se ajustará en cuanto a su organización, competencia y funcionamiento a lo previsto, con carácter general, en el artículo 44 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en el artículo 41 de este Reglamento.*

*5. Las cooperativas de segundo o ulterior grado se regirán por el artículo 108 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y por este artículo.*

*En lo no previsto en estos artículos, en cuanto lo permita la específica función y naturaleza de las cooperativas de segundo o ulterior grado, se estará a las normas especiales de aquel tipo de cooperativas que resulten mayoritarias en la entidad de segundo o ulterior grado y, en su defecto, por las normas generales de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y este Reglamento.*

## **Comentario del artículo 108 de la LSCA y del artículo 106 del RLSCA.**

### **1. Naturaleza jurídica.**

Quando dos o más sociedades cooperativas de primer grado se agrupan nos encontramos ante una cooperativa de segundo grado que tiene como objetivo

cumplimentar y desarrollar los fines económicos comunes de ambas cooperativas. También podrán agruparse cooperativas de segundo o ulterior grado. La posibilidad de agrupación de distintas cooperativas responde al principio cooperativo de integración que fue formulado expresamente en el Congreso de Viena de 1966 en los siguientes términos: *“Las cooperativas, para servir mejor a los intereses de sus miembros y sus comunidades, deben colaborar por todos los medios con otras Cooperativas a los niveles local, nacional e internacional.”* Las agrupaciones persiguen el ejercicio de una acción o defensa de intereses distintos a los estrictamente económicos de cada uno de sus miembros.

## 2. Objetivo.

Las cooperativas de segundo grado persiguen un objetivo tanto de colaboración económica como de desarrollo del principio de integración. El régimen específico de estas sociedades cooperativas es el previsto en el art. 106 del RLSCA.

## 3. Miembros de los órganos sociales.

La cooperativa de segundo o ulterior grado tendrá una persona representante en la Asamblea General. Se prevé que la misma sea elegida por las sociedades cooperativas y demás personas jurídicas que integren la sociedad de segundo o ulterior grado. En estos casos, el derecho al voto se ejercerá de forma proporcional según la participación de cada una de las entidades en la actividad cooperativizada de la sociedad cooperativa de segundo o ulterior grado o a su número de personas socias. En segundo lugar, el órgano de administración y demás órganos colegiados que se constituyan y las personas liquidadoras de las cooperativas de este tipo de cooperativas deberán ser elegidas por la Asamblea General, entre sus socios o socias o miembros de entidades socias. Para ello, se presentarán candidaturas por las respectivas entidades o personas asociadas. En otro caso, los estatutos podrán prever que el órgano de administración se forme por personas cualificadas y expertas que no sean socias, ni miembros de entidades socias con una limitación: que no supongan más de un tercio del total de miembros. Se trata así de profesionalizar al máximo este tipo de órganos de máxima dirección. Si el órgano de administración se forma por elección de los socios y socias, la persona elegida, tras aceptar el nombramiento, deberá actuar como si lo fuera en nombre propio y ostentará el cargo durante todo el periodo. Sin embargo, deberá cesar en su cargo en los siguientes casos: 1) si pierde la confianza o condición de socio o socia de la sociedad cooperativa de

origen; 2) cuando la entidad de la que es miembro dejara de pertenecer a la sociedad cooperativa de segundo grado.

#### 4. Admisión de socios y socias.

Para la admisión de personas socia que no sea cooperativa deberá adoptarse, el órgano de administración deberá adoptar acuerdo favorable con mayoría de al menos dos tercios de los votos presentes y representados, salvo que los estatutos prevean una regla distinta. Se trata de un mecanismo de control para evitar que se desnaturalice esta figura, garantizando con esta mayoría la necesaria convergencia de intereses para la admisión de sociedades no cooperativas. De igual modo, para la baja de una persona socia se habrá de realizar conforme a las siguientes reglas:

- La persona socia preavisará con al menos un año de antelación, salvo que la normativa comunitaria prevea plazo inferior.
- La persona socia deberá cumplir las obligaciones contraídas con la cooperativa de segundo o ulterior grado o, si lo acuerda el órgano de administración, a resarcirla económicamente.

#### 5. Órgano de intervención.

Asimismo, los estatutos sociales podrán prever la existencia de un órgano de intervención de acuerdo que se regulará conforme a los arts. 44 LSCA y 41 RLSCA.

#### 6. Normativa reguladora.

Por último, se podrán regular las relaciones de este tipo de cooperativas por las normas que resulten mayoritarias en la entidad de segundo o ulterior grado y, si no las hubiera, por las normas generales de la LSCA y el RLSCA. Esta previsión trata de dar una respuesta aquellas situaciones en que

#### 7. Clasificación.

La clasificación que dispone el art. 108. 2 de las cooperativas de segundo o ulterior grado consiste en diferenciarlas según se agrupen por cooperativas únicamente (homogéneas) o por cooperativas y personas susceptibles de ser socias conforme al art. 13.1 (heterogéneas). Cuando la persona socia no sea una cooperativa, deben existir intereses

económicos coincidentes. En cualquier caso, la mayoría de personas socias (excepto las socias de trabajo) deben corresponder a las sociedades cooperativas.

#### 8. Aportaciones al capital social.

Cada persona socia aportará al capital social de estas entidades como máximo el setenta y cinco por ciento del mismo. Y de ese porcentaje, el 51% deberá ser aportado por sociedades cooperativas exclusivamente.

#### 9. Disolución.

Cuando la sociedad cooperativa de segundo o ulterior grado se disuelva el haber líquido resultante se deberá distribuir entre sus socios en proporción al importe del retorno percibido en los últimos cinco años, o desde la constitución de aquella. Se excepcionan así las reglas de liquidación propias del resto de cooperativas porque parte del presupuesto de que todos sus miembros son cooperativas. Por ello, se realiza el reparto del haber líquido entre sus miembros. Al no existir cuota de parte de cada entidad en la cooperativa, se utiliza el criterio de reparto y se hace referencia al importe del retorno percibido en los últimos cinco años o desde la constitución. En el caso de sociedades cooperativas socias, este haber se destinará al Fondo de Reserva Obligatorio de cada una de ellas. Los retornos cooperativos son tratados como excedentes cooperativos.

### **ARTÍCULO 109. GRUPO COOPERATIVO.**

*1. Las sociedades cooperativas podrán asociarse entre sí y con otras entidades, formando un grupo cooperativo, que podrá ser propio o impropio. En todo caso, el grupo cooperativo deberá ajustar su funcionamiento a los principios establecidos en el artículo 4.*

*Se entiende por grupo cooperativo propio aquel en el que existe una sociedad cabeza de grupo que ejercita facultades o emite instrucciones de obligado cumplimiento para el grupo. Dicha sociedad cabeza de grupo podrá tener naturaleza cooperativa o no, si bien, en este último caso, los miembros del grupo habrán de ser sociedades cooperativas en su mayoría.*



*Se entiende por grupo cooperativo impropio aquel en el que sus miembros, que habrán de ser sociedades cooperativas en su mayoría, se articulan en un plano de igualdad, funcionando sobre la base de un principio de coordinación.*

*2. Las condiciones para ostentar la cualidad de sociedad cabeza de grupo, el alcance de sus facultades o las instrucciones que pueda impartir, el procedimiento de incorporación al grupo cooperativo y el de separación, voluntaria u obligatoria, del mismo, así como el acceso al Registro de Cooperativas Andaluzas de los acuerdos de integración y de separación, se determinarán reglamentariamente.*

*3. La responsabilidad derivada de las operaciones que realicen las entidades miembros del grupo cooperativo directamente con terceros no se extenderá al grupo ni al resto de sus integrantes.*

**Concordancia con el artículo 107 del Reglamento de desarrollo.**

#### **ARTÍCULO 107. GRUPO COOPERATIVO.**

*1. Para ostentar la cualidad de sociedad cabeza de grupo en el grupo cooperativo propio se exigirá que la entidad elegida lleve, al menos, dos años constituida, con arreglo a la legislación que le sea aplicable, y funcionando con solvencia, salvo que se constituya expresamente para este cometido por las entidades fundadoras, en cuyo caso, deberá dotársela de un capital no inferior a seis mil euros.*

*Cuando la sociedad cabeza de grupo no sea una sociedad cooperativa, deberá estar participada mayoritariamente por sociedades cooperativas.*

*2. La emisión de instrucciones de la sociedad cabeza de grupo podrá afectar a cualquier ámbito, ya sea societario o económico, de las entidades asociadas y serán de obligado cumplimiento para todas ellas.*

*Entre dichas facultades se incluirá la de establecer normas organizativas de carácter común.*

*3. Los compromisos generales asumidos ante el grupo deberán formalizarse por escrito, mediante documento contractual que necesariamente deberá incluir la duración del mismo, caso de ser limitada, el procedimiento para su modificación, el procedimiento para*

*la separación de una entidad miembro y, en su caso, las facultades cuyo ejercicio se acuerda atribuir a la entidad cabeza de grupo.*

*Cuando se trate de un grupo cooperativo impropio, deberán hacerse constar igualmente en dichos compromisos el régimen de adopción de acuerdos, debiendo garantizarse que las sociedades cooperativas, en el caso de que se integren entidades que no lo sean, dispondrán de la mayoría de los votos del grupo.*

*La modificación, ampliación o resolución de los compromisos indicados requerirá el acuerdo del número de entidades que se establezca en el documento contractual y, en su defecto, por las tres cuartas partes de las sociedades integrantes en el supuesto de que el grupo cooperativo sea impropio.*

*4. La incorporación al grupo cooperativo precisará de la correspondiente solicitud que se presentará ante la entidad cabeza de grupo, o ante la entidad que se determine en el documento contractual constitutivo a que se refiere el apartado anterior. En ambos casos, el acuerdo de admisión se adoptará por la mayoría establecida en el citado documento y, en su defecto, por las tres cuartas partes de las entidades integrantes. También podrá establecerse la atribución de dicha facultad a la entidad cabeza de grupo.*

*La entidad ante la que se presentó la solicitud, con arreglo a lo acordado por el grupo en el párrafo anterior, notificará a la entidad solicitante el acuerdo adoptado en el plazo máximo de tres meses a contar desde la recepción de la solicitud, considerándose admitida en caso de no pronunciarse el grupo en dicho plazo.*

*La separación voluntaria del grupo se efectuará mediante notificación a la entidad competente para recibir la solicitud de incorporación, pudiendo establecer el documento contractual constitutivo los plazos de preaviso y las responsabilidades que se estimen procedentes.*

*También se podrá establecer en el citado documento las causas obligatorias de separación. En cualquier caso, constituirá dicha causa la pérdida de los requisitos objetivos que hayan podido establecerse para la incorporación al grupo.*

## Comentario del artículo 109 de la LSCA y del artículo 107 del RLSCA.

### 1. Nuevo mecanismo de integración cooperativa.

La Exposición de Motivos del RLSCA este tipo de integración cooperativa como “integración blanda” ya que supone una asociación entre sociedades cooperativas y de cualquier otro tipo para actuar en común sin llegar nunca a vincularse en una entidad con personalidad jurídica independiente. Asimismo, en la Exposición de Motivos de la LGC se prevé esta figura de integración como una forma de atender al *“reto de tener que operar en mercados cada vez más globalizados”*.

### 2. Naturaleza jurídica.

La figura del grupo cooperativo permite a las cooperativas asociarse entre sí y con otras entidades en cualquier momento. Por un lado, tendrá el calificativo de grupo cooperativo propio cuando exista una sociedad cabeza de grupo que ejercite facultades o emita instrucciones de obligado cumplimiento para el grupo, con independencia de que dicha entidad sea cooperativa o no. Por otro lado, se calificará de grupo cooperativo impropio aquel en el que sus miembros se articulan en plano de igualdad, funcionando sobre la base del principio de coordinación.

Para poder ser entidad cabeza de grupo, la sociedad deberá llevar constituida, al menos, dos años funcionando con solvencia. También podrá constituirse por las entidades fundadoras del grupo para este fin específico, para lo que habrá de estar dotada de un capital mínimo de seis mil euros. En los casos en que la entidad cabeza de grupo no es una cooperativa, los miembros del grupo tendrán que ser cooperativas en su mayoría. La sociedad cabeza de grupo emitirá instrucciones en cualquier ámbito y las entidades asociadas deberán acatarlas en su totalidad.

Mediante documento contractual se adoptaran los compromisos generales asumidos por el grupo, que en todo caso deberá incluir: la duración del mismo; el procedimiento para su modificación; el procedimiento para la separación de una entidad miembro; y, en su caso, las facultades cuyo ejercicio se acuerda atribuir a la entidad cabeza de grupo. En los supuestos de grupo impropio, deberán hacerse constar igualmente en dichos compromisos el régimen de adopción de los acuerdos garantizando siempre que las cooperativas (en caso de que existan distintas entidades) dispondrán de la mayoría de los votos del grupo.

Para la modificación, ampliación o resolución de los compromisos se requerirá un acuerdo de todas las entidades que se indiquen en el documento contractual. O por las tres cuartas partes de las sociedades integrantes si se trata de grupo cooperativo impropio.

### 3. Procedimiento integración.

Para la incorporación al grupo cooperativo se deberá presentar una solicitud ante la entidad cabeza de grupo, o ante la entidad que se determine en el documento contractual constitutivo.

El acuerdo de admisión será adoptado según las mayorías establecidas en el documento contractual constitutivo. En su defecto, por las tres cuartas partes de las entidades integrantes. En un último supuesto, podrá atribuirse esta facultad a la entidad cabeza de grupo.

A la entidad solicitante se le dará notificación del acuerdo adoptado en el plazo máximo de tres meses a contar desde la recepción de la solicitud. El silencio será positivo a todos los efectos.

### 4. Procedimiento separación.

Se inicia mediante notificación a la entidad competente, atendiendo a los plazos y responsabilidades que se hayan previsto en el documento contractual constitutivo. En cualquier caso, este documento podrá también prever los casos de separación obligatoria. El RLSCA prevé que siempre será una de las causas de separación la pérdida de los requisitos objetivos que hayan podido establecerse para la incorporación al grupo.

### 5. Responsabilidad.

La responsabilidad de las operaciones realizadas por las entidades integradas del grupo directamente con terceros no se extenderá al grupo ni al resto de sus integrantes.

## **ARTÍCULO 110. OTRAS FORMAS DE VINCULACIÓN.**

*1. Las sociedades cooperativas de cualquier clase o tipo podrán constituir sociedades, asociaciones, agrupaciones, consorcios y uniones de empresas, de cualquier modalidad, entre sí o con otras personas de las descritas en el artículo 13.1, y formalizar convenios o acuerdos para el mejor cumplimiento de su objeto social y para la defensa de sus intereses sin que, en ningún caso, se desvirtúe su naturaleza cooperativa.*

*Asimismo, las sociedades cooperativas podrán poseer participaciones en cualquiera de las entidades citadas en el párrafo anterior, para el mejor cumplimiento, desarrollo o garantía de su objeto social, sin desvirtuar la referida naturaleza.*

*2. En el caso de las sociedades cooperativas de seguros y de crédito se estará a lo dispuesto en su normativa específica en todo lo relativo a las operaciones previstas en el presente artículo.*

*3. Las sociedades cooperativas podrán suscribir acuerdos intercooperativos orientados al cumplimiento de sus objetos sociales. Con arreglo a los mismos, tanto la cooperativa como sus socios y socias podrán realizar operaciones de suministro, entregas de productos o servicios con las demás cooperativas firmantes del acuerdo, teniendo dicha actividad la consideración de operaciones cooperativizadas con las propias personas socias.*

### **Comentario del artículo 110 de la LSCA.**

#### **1. Otras formas de vinculación.**

Con el fin de cumplir con su objeto social, las sociedades cooperativas podrán constituir sociedades, asociaciones<sup>40</sup>, agrupaciones<sup>41</sup>, consorcios<sup>42</sup> y uniones de

---

<sup>40</sup> “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos” (art. 2. 1 LO 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación).

<sup>41</sup> “La finalidad de la Agrupación de Interés Económico es facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la actividad de sus socios” (art. 2. 1 Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico).

<sup>42</sup> Consorcio es un término que admite varias definiciones. Por un lado, un consorcio es una asociación económica en la que una serie de empresas buscan desarrollar una actividad conjunta mediante la creación de una nueva sociedad. en Derecho administrativo un consorcio es una organización de derecho público entre una o más entidades públicas -Administración- y uno o más sujetos u organizaciones de Derecho Privado (art. 7 LRJPAC).

empresas<sup>43</sup>, de cualquier modalidad, entre sí o con otras personas, y formalizar convenios o acuerdos y podrán poseer participaciones de cualquiera de estas entidades. Este artículo es más amplio que el correspondiente en la normativa anterior (art. 160 antigua Ley). En cualquier caso, esta previsión legal responde a los principios generales de capacidad de obrar de las cooperativas que permiten a éstas entablar negocios jurídicos conforme al derecho privado. Sin embargo, se hace referencia en ambos párrafos del art. 110. 1 LSCA al respeto a la naturaleza propia de la sociedad cooperativa. Como ya venimos advirtiendo desde el inicio, los principios inspiradores de este tipo de sociedades han de ser respetados en todo momento, ya que de otro modo dejaría de tener sentido la existencia de este tipo societario en nuestro mercado actual, donde ya existen suficientes opciones que permiten entablar negocios jurídicos de toda índole. Se hace especial hincapié en este apartado al respeto a la naturaleza cooperativa en la celebración de este tipo de contratos de colaboración, pues es quizá el supuesto donde mayores riesgos existen de que la naturaleza mutualista y los principios cooperativos queden diluidos ante las diferentes formas societarias que se unen para emprender un negocio comercial.

Se elimina la referencia al preceptivo acuerdo asambleario, ya que limitaba en gran medida la capacidad de representación de las cooperativas en detrimento de su participación en el tráfico jurídico.

## 2. Acuerdos intercooperativos.

Por último, este artículo prevé la posibilidad de que las cooperativas suscriban acuerdos intercooperativos para realizar operaciones de suministro, entregas de productos o servicios con las demás cooperativas firmantes del acuerdo, teniendo dicha actividad la consideración de operaciones cooperativizadas con las propias personas socias. Este último aspecto es el más relevante a efectos fiscales, pues como afirma la Profesora María Pilar Aguacil Marí: *“Las operaciones con los socios son genuinas en las cooperativas y entran dentro del curso normal del negocio, no guardando relación con las operaciones vinculadas, que persiguen disminuir la tributación. El precio utilizado en las operaciones con socios de cooperativas, por tanto, normalmente difiere del de mercado, ya que éste es normalmente, el objetivo específico de la cooperativa.”* La consecuencia

---

<sup>43</sup> *“Tendrán la consideración de Unión Temporal de Empresas el sistema de colaboración entre empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro”* (art. 7. 1 Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Regional).

directa de todo ello, es que las operaciones cooperativizadas con las personas socias se rigen por unas condiciones específicas distintas a las del mercado que justifican la no aplicación de las mismas reglas de valoración que a las operaciones vinculadas.



## TÍTULO III. ASOCIACIONISMO COOPERATIVO

### **ARTÍCULO 111. PRINCIPIOS GENERALES.**

*1. Las sociedades cooperativas, para la defensa y promoción de sus intereses, podrán constituir federaciones, y estas podrán, a su vez, asociarse libremente, sin perjuicio de poder acogerse a otra fórmula asociativa conforme al derecho de asociación.*

*2. Las sociedades agrarias de transformación y las organizaciones y agrupaciones de productores agrarios que no tengan la condición de sociedades cooperativas podrán integrarse en las federaciones de cooperativas agrarias, siempre que no resulten mayoritarias en estas. Para ello, dichas sociedades deberán estar formadas únicamente por personas socias titulares de algún derecho que lleve aparejado el uso o disfrute de explotaciones agrarias o por trabajadores y trabajadoras del campo, o por ambos.*

#### **Comentario.**

Como ya se ha expresado anteriormente, el artículo 2 de la LSCA tiene por objeto no solo las sociedades cooperativas andaluzas, sino también sus federaciones y el de las asociaciones en las que éstas se integran. La primera parte del artículo no hace sino recoger y reflejar una situación histórica que se ha estado produciendo en toda Andalucía y en España, como es la unión o agrupaciones de sociedades cooperativas del mismo o distinto ámbito geográfico y/o funcional y de la misma o distinta clase, para la defensa y promoción de intereses comunes mediante la representación conjunta de todas ellas, el fomento de los valores cooperativos y la asistencia y/o asesoramiento a sus asociados y asociadas. Es decir proclama el principio de libertad de asociación siempre que esté recogida en una norma legal dicha posibilidad, y con el objetivo, tan amplio si cabe, como es la defensa de sus intereses, sea cual sea la tipología de la cooperativa. Sigue siendo un acierto del legislador no poner puertas al campo, en el sentido que sigue sin intentar regular la definición de las diferentes fórmulas asociativas y sus condicionantes, dejándolo en unos conceptos tan flexibles, abiertos e indeterminados precisamente con el objetivo de promover este asociacionismo cooperativo. Asociacionismo cooperativo que se ha demostrado eficaz y necesario en los tiempos de bonanza y por supuesto en los

momentos de crisis coyunturales o estructurales del sistema económico capitalista en el Sur de Europa. Gracias a la flexibilidad e innovación que permite estas fórmulas jurídicas, la destrucción de empleo está por debajo que en el resto de empresas mercantiles. Además, su impacto laboral destaca tanto en cantidad, como en calidad, ya que se fomentan importantes aspectos como la gestión democrática, la conciliación de la vida laboral con la familiar o la estabilidad en el puesto de trabajo. El modelo cooperativo se caracteriza por el aprovechamiento de los recursos endógenos, por la generación de empleo en las zonas en las que se ubican y por la distribución equitativa de la riqueza. Como dato exponer que en Europa la economía social emplea a más de 14 millones de personas en la UE, el 6,5% del empleo total, siendo en España el porcentaje algo mayor a la media europea.

La segunda parte del articulado también refleja lo que ha sido la realidad del medio rural andaluz, cual es la constitución de sociedades agrarias y agrupaciones de productores que aún no teniendo la consideración jurídica de sociedad cooperativa, han venido funcionando con unos fines semejantes e iguales en algunos casos a ellas, así como una interconexión entre estos entes y las federaciones y cooperativas del medio rural. Por eso el legislador vuelve a recoger esa realidad de Andalucía y la reconoce jurídicamente, permitiendo su integración en las federaciones de cooperativas agrarias con únicamente dos condiciones. La primera es que no sean mayoritarias dentro de la federación, la segunda es que dichas sociedades deben estar constituidas o por trabajadores y trabajadoras, o por personas socias titulares de algún derecho que lleve aparejado el uso o disfrute de explotaciones agrarias, o por ambas. Condiciones totalmente acordes no ya con la LSCA, sino con los principios básicos de cualquier forma de cooperativismo formal.

El promover y favorecer el asociacionismo y la intercooperación, y el favorecimiento para la creación de redes entre las cooperativas asociadas son principios fundamentales en el cooperativismo. Aunque resultan obvias nunca está de más recordar que la fortaleza y la seña de identidad más clara del cooperativismo es precisamente la colaboración, formal o informal, de las distintas sociedades cooperativas. La propia ley, como se verá más adelante, contempla todas estas situaciones, de tal forma que a fin de reconocer estas relaciones cooperativas informales y beneficiar su regularización la nueva normativa establece diferentes niveles de mecanismo de regulación:

1. Cooperativas de segundo grado reguladas en el art. 108 de la LSCA creadas para regularizar las relaciones económicas y de cooperación que se den entre distintas

sociedades cooperativas, con plenas consecuencias jurídicas.

2. Grupos cooperativos regulados en el artículo 109 de la LSCA diseñadas para regularizar las relaciones económicas y de cooperación que se den entre sociedades cooperativas y otro tipo de sociedades mercantiles, con carácter flexible y sin llegar a constituir una personalidad jurídica independiente.
3. Reconocimiento de otras formas de vinculación cooperativa reguladas en el artículo 110 de la LSCA, indiferentemente del tipo de vínculo jurídico formal o informal que una a estas sociedades las relaciones se consideran relaciones cooperativas y no relaciones con terceros.
4. Por último se destaca la facilitación para fusiones de sociedades cooperativas como mecanismo para propiciar la regularización de las relaciones cooperativas informales. Con este fin la nueva normativa facilita los trámites de inscripción de las fusiones y amplía el plazo hasta 10 años para el régimen intermedio hasta consolidar la fusión.

## **ARTÍCULO 112. OBJETO.**

*1. Corresponden a las federaciones de cooperativas y sus asociaciones:*

*a) Representar y defender los intereses de los miembros que asocian, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos.*

*b) Promover y favorecer el asociacionismo cooperativo.*

*c) Ejercer la conciliación en los conflictos surgidos entre las sociedades cooperativas que asocien o entre estas y sus socios y socias, cuando así lo soliciten ambas partes voluntariamente.*

*d) Organizar servicios de asesoramiento, formación, auditoría, asistencia jurídica o técnica y cuantos otros sean convenientes para los intereses de las entidades asociadas.*

*e) Promover la intercooperación entre las entidades asociadas.*

*f) Favorecer la creación de redes entre las cooperativas asociadas que contribuyan a optimizar su conocimiento y a fortalecer su posicionamiento social y/o económico.*

*g) Fomentar la promoción y formación cooperativa.*

*h) Participar a instancias de la Administración pública andaluza en sus instituciones y entidades instrumentales, así como actuar como interlocutores frente a esta en aquellos asuntos relacionados con la economía social, en general, y con las entidades cooperativas, en particular.*

*i) Ejercer cualquier otra actividad de naturaleza análoga.*

### **Comentario.**

Este artículo en consonancia con el principio de flexibilidad, enumera a modo de ejemplo, es decir sin pretender cerrarlas, algunas funciones o competencias de este asociacionismo cooperativo. La mayoría de las funciones ya estaban recogidas en el articulado de la LSCA anterior, como por ejemplo las de representación y defensa de los miembros, el ejercicio de la conciliación en los conflictos surgidos, la organización de servicios de asesoramiento, auditoría...etc. Se acaba con una cláusula abierta que permite incluir muchísimas otras finalidades acordes con las realidades particulares de cada una.

### **ARTÍCULO 113. RÉGIMEN.**

*1. Para la constitución de una federación, asociación de federaciones o adhesión a una u otra ya existente, se requerirá acuerdo de la Asamblea General de la entidad que se federe o asocie.*

*2. El porcentaje mínimo de sociedades cooperativas para constituir una federación de ámbito regional es del treinta por ciento de las sociedades cooperativas activas en el sector de que se trate, con la presencia además de, al menos, la mitad más una de las provincias en que se pueda desarrollar la actividad en cuestión.*

*El porcentaje mínimo de sociedades cooperativas para constituir una federación de ámbito inferior al regional es del cincuenta por ciento de las sociedades cooperativas activas en dicho ámbito y en el sector de que se trate.*

*3. Para que una federación pueda incluir en su denominación términos que hagan referencia a un determinado ámbito territorial o a una concreta actividad o sector, deberá integrar, al menos, al treinta por ciento de las sociedades cooperativas andaluzas activas en dicho ámbito geográfico, actividad o sector.*

*4. Las federaciones y asociaciones de federaciones vendrán obligadas a someter sus cuentas a auditoría, en cuanto resulten beneficiarias de ayudas públicas, de acuerdo con lo previsto en la normativa que regule la auditoría de cuentas.*

*5. Serán de aplicación a las federaciones y sus asociaciones los preceptos de este título y con carácter subsidiario, en cuanto proceda de acuerdo con su naturaleza, el contenido general de esta Ley. No les será de aplicación lo establecido en el Capítulo III del Título IV, relativo a infracciones y sanciones.*

*6. Las federaciones de cooperativas y sus asociaciones deberán comunicar al Registro de Cooperativas las altas y bajas de sus asociados y asociadas en los términos que se establezcan reglamentariamente, así como colaborar con la consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de sociedades cooperativas en tareas de índole registral y de inspección.*

*7. Las federaciones de cooperativas y sus asociaciones procurarán la presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de dirección.*

## **Comentario.**

El presente artículo establece los requisitos y el régimen por el cual se reconocerá jurídicamente la existencia de federaciones y asociaciones de cooperativas. Este artículo, tal y como se establece en el apartado quinto del mismo, será de aplicación directa a las federaciones o asociaciones, estableciéndose el resto del articulado de la LSCA con carácter subsidiario en todo lo que no esté previsto en el mismo. Se permite una libertad de regulación para estas figuras, que deberán necesariamente regular sus estatutos,

permitiendo una flexibilidad en su organización, tipología de las cooperativas, y en su funcionamiento<sup>44</sup>.

Si se establece una limitación al anterior carácter subsidiario de la LSCA, y es que no podrán aplicarse las infracciones y sanciones previstas en el Capítulo III del Título IV. Por tanto serán los estatutos que se doten dichos entes los que regulen las mismas de acuerdo con el artículo 11g) de la LSCA<sup>45</sup>.

Para la constitución de las federaciones y asociaciones de cooperativas únicamente se exige como requisito para la constitución o adhesión a las mismas un acuerdo de la Asamblea General de las entidades que se federen o asocien. Evidentemente estos acuerdos deben tomarse en cada ente jurídico de acuerdo a sus estatutos y ser conforme a lo establecido en la LSCA. El legislador una vez más reduce, para no dificultar, el trámite burocrático y así fomentar y promover este tipo de figuras simplificándolo al acuerdo de las cooperativas o entes que la quieran crear o adherirse. A diferencia de la LSCA anterior, la actual introduce el requisito de que las sociedades cooperativas sea activas, es decir, sigan ejerciendo la actividad propia de la cooperativa.

Sin embargo sí se establecen dos límites en cuanto al ámbito geográfico y al ámbito de la denominación. Estos límites sí determinarán la válida constitución de las federaciones o asociaciones. En cuanto al ámbito geográfico se establece un límite para la constitución de federaciones de ámbito andaluz y para federaciones de ámbito inferior al anterior. Para la federaciones de ámbito andaluz se constituye un porcentaje mínimo del treinta por ciento de las sociedad activas en el sector de que se trate y con presencia en al menos la mitad más una de las provincias en que se pueda desarrollar la actividad que se desarrolle la misma. Es decir la LSCA aunque no contempla un número mínimo de cooperativas para la creación de una federación de ámbito andaluz, si establece un elemento cuantitativo (el treinta por ciento de de las sociedades activas en el sector), y un elemento cualitativo como es que ese porcentaje de cooperativas tengan implantación geográfica en la mayoría de las provincias en que se desarrolla la actividad de la que se trate. Este último requisito se justifica en base a la extensión territorial de Andalucía y también al intento de promocionar y extender la vertebración territorial de nuestra tierra.

---

<sup>44</sup> Si estos entes son los comprendidos en el artículo 111.2 de la LSCA tienen la limitación cuantitativa comprendida en el mismo para integrarse en una federación

<sup>45</sup> Artículo 11. Estatutos sociales g) Las normas de disciplina social, el establecimiento de infracciones y sanciones, el procedimiento disciplinario, el régimen de recursos y el régimen de impugnación de actos y acuerdos.

En cuanto a las federaciones de ámbito inferior al andaluz el porcentaje mínimo se establece en un cincuenta por ciento de las sociedades cooperativas activas en dicho ámbito.

*Especialidad en cuanto a las Auditorias y Comunicaciones al Registro de Cooperativas.*

### **Concordancia Reglamentaria.**

### **AUDITORIAS: ARTÍCULO 155. OTRAS OPERACIONES REGISTRALES.**

*Las federaciones cooperativas y sus asociaciones legalizarán sus libros con arreglo a lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo siguiente. Asimismo, se someterán a auditoría externa en los términos señalados en el artículo 113.4 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, e informarán al Registro de Cooperativas sobre su estructura social, de conformidad con lo establecido en el artículo 113.6 de la citada Ley y en el artículo 147.1.f) de este Reglamento, debiendo aportar para ello los datos relativos a ésta en una hoja estadística, según modelo aprobado por la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, junto con el resto de documentación prevista para el depósito de cuentas.*

### **Comentario.**

El apartado 4 de la LSCA establece que las federaciones y asociaciones de federaciones, en cuanto sean destinatarias de ayudas públicas estarán obligadas a auditar sus cuentas. El RLSCA desarrolla en su artículo ciento cincuenta y cinco cómo tienen que hacerlo y la documentación que tienen que aportar ante el Registro de Cooperativas remitiendo al artículo ciento trece apartado seis y ciento cuarenta y siete apartado uno efe. Se mantiene así la regulación anterior pero introduciendo el concepto de “ayuda pública” frente al anterior que únicamente se refería a subvenciones, para así establecer este tipo de control por parte de la administración de cualquier fondo de naturaleza público que recaiga en dichos entes, para así poder justificar los mismos y evitar los fraudes en dichas ayudas.



## *Comunicaciones al Registro de Cooperativas*

### **ARTÍCULO 109. COMPETENCIAS.**

#### *1. Corresponde a la Unidad Central del Registro de Cooperativas Andaluzas:*

*a) La calificación, inscripción y certificación de los actos a que se refiere el artículo 123, en relación con las cooperativas de crédito y de seguros, cooperativas de segundo y ulterior grado, grupos cooperativos, así como de las federaciones de cooperativas y sus asociaciones.*

#### **Comentario.**

El apartado 6 de la LSCA establece que la obligación de comunicar al Registro de Cooperativas las altas y bajas de sus asociados y asociadas en los términos establecidos reglamentariamente. En consecuencia el RLSCA establece la obligación para las federaciones y asociaciones de comunicar a la Unidad Central del Registro de Cooperativas la calificación, inscripción y certificación. También se establece que estos entes deberán colaborar en tareas de índole registral (como se verá en el artículo siguiente objeto de análisis) y de inspección (Capítulo II). En el siguiente artículo se detallarán algunos de los procedimientos registrales en cuanto a su constitución y requisitos.

### **ARTÍCULO 114. PROCEDIMIENTO REGISTRAL DE CONSTITUCIÓN.**

*1. Las federaciones de cooperativas y sus asociaciones constituidas al amparo de esta ley deberán depositar en el Registro de Cooperativas Andaluzas, para adquirir personalidad jurídica, acta constitutiva que habrá de contener, al menos, los siguientes extremos:*

*a) Relación de entidades promotoras.*

*b) Certificado del acuerdo de asociación de la Asamblea General de cada entidad.*

*c) Composición de los órganos sociales de la entidad.*

*d) Certificado que acredite la inexistencia de otra entidad con denominación coincidente.*

*e) Los estatutos sociales.*

*2. Los estatutos sociales regularán, como mínimo, las materias recogidas en el artículo 11 para las sociedades cooperativas, en lo que les sea de aplicación, con las particularidades que reglamentariamente se determinen.*

*3. El Registro de Cooperativas Andaluzas dispondrá la publicidad del depósito en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, adquiriendo la entidad personalidad jurídica y plena capacidad de obrar en el momento de dicha publicación.*

*Reglamentariamente, se establecerán las peculiaridades del acceso al Registro de Cooperativas Andaluzas de los actos de las federaciones de cooperativas y sus asociaciones, incluida la publicidad del depósito.*

**Concordancia Reglamentaria.**

**CAPÍTULO V.**

*Inscripción de las federaciones de cooperativas, sus asociaciones y sus actos*

**ARTÍCULO 152. PRINCIPIOS GENERALES.**

*1. Las federaciones de cooperativas y sus asociaciones se registrarán registralmente por las normas particulares de este Capítulo y por las de carácter general del presente Título, con las peculiaridades que resulten de su especial naturaleza.*

*2. Los actos de las entidades citadas en el apartado anterior que, con arreglo a lo dispuesto en la [Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#) y en el presente Reglamento, tengan acceso al Registro de Cooperativas serán inscritos en el libro correspondiente de la Unidad Central del Registro.*

**ARTÍCULO 153. ACTOS INSCRIBIBLES Y SU FORMA.**

*1. Son inscribibles, con carácter obligatorio, los siguientes actos de las federaciones de cooperativas y sus asociaciones:*

*a) Constitución.*

*b) Modificaciones estatutarias.*

c) *Fusión, escisión, transmisión o cesión global del activo y del pasivo, transformación, disolución, reactivación y declaración de haber finalizado el proceso liquidatorio.*

d) *Nombramiento y cese de las personas miembros de los órganos sociales.*

e) *El depósito de cuentas anuales.*

2. *Para la inscripción de la constitución de federaciones de cooperativas y sus asociaciones, así como para las modificaciones estatutarias de las citadas entidades, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente.*

*Los restantes actos expresados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Cooperativas en la forma establecida en el Capítulo IV de este Título para las sociedades cooperativas, sin perjuicio de las especialidades que se deriven de la naturaleza asociativa de aquellas entidades.*

## **ARTÍCULO 154. CONSTITUCIÓN.**

1. *Las federaciones de cooperativas andaluzas y sus asociaciones se constituirán con arreglo al procedimiento establecido en el [artículo 114 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#), presentando a tal efecto ante la Unidad Central del Registro de Cooperativas Andaluzas la siguiente documentación:*

a) *Solicitud de inscripción dirigida a la Unidad Central del Registro de Cooperativas firmada por quienes resulten designados por la Asamblea constituyente para gestionar la entidad hasta la adquisición definitiva de personalidad jurídica.*

b) *Acta de la Asamblea constituyente de la entidad de nueva creación, que necesariamente deberá contener:*

*1.º Relación de las entidades promotoras, con la expresión de su denominación social, código de identificación fiscal y domicilio social; así como el nombre, apellidos, domicilio y número de identificación fiscal de sus representantes legales.*

*2.º Voluntad de constituir una federación o asociación de las entidades promotoras expresadas a través de sus representantes legales y con mención expresa al carácter y legitimación con la que actúan estos.*

*3.º Aprobación de los estatutos sociales que regirán la futura entidad y que tendrán el contenido establecido en el apartado 3, acompañándose el texto de los mismos.*

*4.º Designación de quienes actuarán provisionalmente como gestores de la entidad hasta la adquisición de personalidad jurídica de ésta, así como de quienes a partir de entonces integrarán los órganos sociales.*

*5.º Certificación del acuerdo de la Asamblea General de cada una de las entidades promotoras de constitución de la federación o asociación.*

*6.º Declaración de que no existe otra entidad, con denominación coincidente o semejante, conforme al certificado de denominación no coincidente, expedido por el Registro de Cooperativas Andaluza en la forma determinada en el artículo 163.*

*7.º Certificación literal de asientos vigentes expedida por el organismo correspondiente, respecto de las sociedades agrarias de transformación y las organizaciones y agrupaciones de productores agrarios que no tengan la condición de sociedades cooperativas.*

*2. También podrá solicitarse directamente el depósito de la escritura pública de constitución, cuyo contenido deberá contemplar los requisitos exigidos en la letra b) del apartado anterior para el acta de la Asamblea constituyente.*

*3. De conformidad con lo previsto en el [artículo 114.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#), los estatutos sociales contendrán, al menos:*

*a) La denominación.*

*b) El domicilio social y el ámbito territorial y funcional de actuación de la entidad.*

- c) Los órganos sociales, su funcionamiento, así como el régimen de provisión electiva de sus cargos.*
- d) La regulación del derecho de voto, debiendo establecer limitaciones al voto plural, de existir éste.*
- e) Los requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de entidad asociada.*
- f) El régimen de modificación de estatutos, fusión, disolución y liquidación de la entidad.*
- g) El régimen económico de la entidad, que deberá establecer el carácter, procedencia y destino de sus recursos, así como los medios que permitan a las entidades asociadas conocer la situación económica de la federación o asociación.*

*4. El Registro de Cooperativas dispondrá, en el plazo de treinta días, la publicidad del depósito o el requerimiento a sus promotores, por una sola vez, para que en el plazo de otros treinta días subsanen los defectos observados.*

*Transcurrido este plazo, el Registro de Cooperativas dispondrá la publicidad o rechazará el depósito mediante resolución fundada exclusivamente en la carencia de alguno de los requisitos mínimos a que se refiere el presente artículo o en defectos en la documentación presentada.*

*En la misma resolución en la que disponga el Registro de Cooperativas la publicidad del depósito al que hace referencia el [artículo 114.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#), se dispondrá la inscripción de la entidad en el libro correspondiente, sin perjuicio de que ésta adquiera personalidad jurídica desde el momento de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.*

*5. Será de aplicación el [artículo 9 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#), a las federaciones cooperativas y a sus asociaciones en período de constitución y a quienes las gestionen provisionalmente, hasta que adquieran personalidad jurídica.*

*6. La modificación de los estatutos de las federaciones y asociaciones de federaciones cooperativas se ajustará al procedimiento para la constitución regulado en este artículo.*

## **ARTÍCULO 155. OTRAS OPERACIONES REGISTRALES.**

*Las federaciones cooperativas y sus asociaciones legalizarán sus libros con arreglo a lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo siguiente.*

*Asimismo, se someterán a auditoría externa en los términos señalados en el [artículo 113.4 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#), e informarán al Registro de Cooperativas sobre su estructura social, de conformidad con lo establecido en el artículo 113.6 de la citada Ley y en el artículo 147.1.f) de este Reglamento, debiendo aportar para ello los datos relativos a ésta en una hoja estadística, según modelo aprobado por la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, junto con el resto de documentación prevista para el depósito de cuentas.*

### **Comentario.**

La inscripción de las federaciones o asociaciones en el Registro de Cooperativas Andaluzas es, junto con la asamblea constitutiva, el acto más importante de la vida del ente cooperativo, ya que dicha inscripción le va a otorgar la personalidad jurídica al mismo, acto imprescindible para poder continuar con el objeto social y los fines de cualquier ente, generando efectos ante terceros. Esta primera inscripción ante la Unidad Central del Registro de Cooperativas debe ir amparada por un acta constitutiva, al igual que en las sociedades cooperativas, pero con un contenido mínimo regulado por la LSCA y el RLSCA. El procedimiento ante la Unidad Central del Registro de Cooperativas es sencillo, y se realizará de la siguiente forma:

- ii) Se realizará una Asamblea Constituyente<sup>46</sup> de la que se recogerá un Acta. Dicha acta debe recoger como mínimo los siguientes extremos: relación de las entidades promotoras, con la expresión de su denominación

---

<sup>46</sup> Las federaciones o asociaciones podrán iniciar la actividad en que consista su objeto social desde el momento en que celebren la asamblea constituyente, si bien hasta su inscripción registral, que deberán solicitar en el plazo máximo de seis meses desde la celebración de la citada asamblea, deberán acompañar en sus relaciones con terceros, la expresión "en constitución" y durante este período, la responsabilidad de las personas socias por la actividad desplegada será ilimitada y solidaria.

social, código de identificación fiscal y domicilio social; así como el nombre, apellidos, domicilio y número de identificación fiscal de sus representantes legales, la voluntad de constituir una federación o asociación de las entidades promotoras expresadas a través de sus representantes legales y con mención expresa al carácter y legitimación con la que actúan estos, la aprobación de los estatutos sociales que regirán la futura entidad y que tendrán el contenido establecido en el apartado 3, acompañándose el texto de los mismos, la designación de quienes actuarán provisionalmente como gestores de la entidad hasta la adquisición de personalidad jurídica de ésta<sup>47</sup>, así como de quienes a partir de entonces integrarán los órganos sociales, certificación del acuerdo de la Asamblea General de cada una de las entidades promotoras de constitución de la federación o asociación, la declaración de que no existe otra entidad, con denominación coincidente o semejante, conforme al certificado de denominación no coincidente, expedido por el Registro de Cooperativas Andaluza en la forma determinada en el artículo 163 del RLSCA, la certificación literal de asientos vigentes expedida por el organismo correspondiente, respecto de las sociedades agrarias de transformación y las organizaciones y agrupaciones de productores agrarios que no tengan la condición de sociedades cooperativas.

jj) Se elaborarán unos Estatutos Sociales para el nuevo ente. Dichos Estatutos regularán como mínimo la denominación, el domicilio social y el ámbito territorial y funcional de actuación de la entidad, los órganos sociales, su funcionamiento, así como el régimen de provisión electiva de sus cargos, la regulación del derecho de voto, debiendo establecer limitaciones al voto plural, de existir éste, los requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de entidad asociada, el régimen de modificación de estatutos, fusión, disolución y liquidación de la entidad, el régimen económico de la entidad, que deberá establecer el carácter, procedencia y destino de sus recursos, así como los medios que permitan a las entidades asociadas conocer la situación económica de la

---

<sup>47</sup> Estos gestores provisionales se regirán por el artículo 9 de la Ley 14/2011 hasta que adquieran personalidad jurídica.



federación o asociación. También contempla la LSCA que por la peculiaridad de cada federación en cuanto al ámbito funcional podrán exigirse cualquier otro contenido que sea obligatoria y sea exigido por la normativa vigente.

kk) Se rellenará la solicitud de inscripción firmada por quienes resulten designados por la Asamblea Constituyente para gestionar hasta que se obtenga la personalidad jurídica definitiva.

ll) Una vez entregada la documentación anterior el Registro de Cooperativas dispone de treinta días (hábiles) para la publicidad del depósito o el requerimiento a los promotores, por una sola vez, para que subsanen los defectos que se hayan observado. Estos defectos pueden venir motivados por la inobservancia de los requisitos mínimos anteriores o por defectos en la documentación presentada.

mm) Realizada mediante resolución la publicidad del depósito, el nuevo ente se inscribirá en el libro correspondiente sin perjuicio de que adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad para obrar conforme a sus fines y su actividad, cuando se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

nn) Cualquier modificación posterior de los Estatutos se ajustará al procedimiento expuesto en los cinco puntos anteriores.

oo) Se contempla un procedimiento específico a los efectos de legalización de libros y de auditoría externa<sup>48</sup>, asimismo informarán al Registro de Cooperativas sobre su estructura social<sup>49</sup>. Lo anterior se realizará conforme a una hoja estadística, junto al resto de documentación prevista para el depósito de cuentas. Este asunto se estudiará con más profundidad en el Capítulo II de la LSCA que contiene la regulación específica del Registro de Cooperativas Andaluzas.

---

<sup>48</sup> Como se estudió en el artículo 113.4 de la Ley 14/2011.

<sup>49</sup> Artículo 113.6 de la Ley 14/2011.

## **TÍTULO IV. LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y LA ADMINISTRACIÓN**

### **CAPÍTULO I. FOMENTO Y PROMOCIÓN COOPERATIVA**

#### **ARTÍCULO 115. INTERÉS PÚBLICO DE LA COOPERACIÓN. PRINCIPIOS GENERALES.**

1. *La Junta de Andalucía asume como tarea de interés público la promoción, desarrollo y estímulo de las sociedades cooperativas andaluzas, por su carácter de empresas generadoras de democracia económica, así como por su contribución a la vertebración territorial, considerándolas, asimismo, un instrumento privilegiado en orden a canalizar en el ámbito empresarial la actividad emprendedora de la población andaluza. Asimismo, la Junta de Andalucía asume como tarea de interés público el fortalecimiento de las estructuras de integración económica y representativa de dichas empresas.*

2. *La Administración de la Junta de Andalucía actuará en el orden cooperativo, con carácter general, a través de la consejería competente en materia de sociedades cooperativas, sin perjuicio de las facultades de otras consejerías en relación con la actividad empresarial que desarrollen estas entidades para el cumplimiento de su objeto social.*

3. *La Junta de Andalucía fomentará la formación en las sociedades cooperativas, y con este fin:*

- a. Formulará programas de formación, promoviendo la participación en ellos de las propias sociedades cooperativas, tanto en lo que atañe a su gestión como en lo referente a su eventual financiación, a través de los respectivos fondos de*

*formación y sostenibilidad.*

- b. Supervisará las actividades de formación cooperativa realizadas con cargo a su presupuesto.*
- c. Incluirá la enseñanza del cooperativismo en el sistema educativo en sus distintas clases y niveles y fomentará la creación de cooperativas orientadas a la enseñanza.*

*4. Serán objeto de especial promoción aquellas sociedades cooperativas que incorporen a su actividad la innovación, contribuyan a la cooperación e integración empresarial o desarrollen su labor con arreglo a principios de sostenibilidad empresarial y mejora medioambiental, conciliación de la vida laboral y familiar, e igualdad de género.*

*También se prestará especial atención a las empresas cooperativas incluidas en los sectores de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, socio sanitario, de interés social, del medio natural, agrario, educacional, cultural y en vías de transformación, pudiendo ampliarse dichos sectores mediante disposición reglamentaria. Se valorará, singularmente, la capacidad de las sociedades cooperativas de generar empleo estable y de calidad y de contribuir al desarrollo equilibrado del territorio, así como de contribuir a la formación de sus socios y socias, y se promoverá la creación de aquellas que fomenten la ocupación en sectores de población con especiales dificultades para el acceso al mercado laboral. Asimismo, se promoverá la creación y consolidación de sociedades cooperativas cuya actividad consista en la prestación de servicios que satisfagan un interés público o social.*

*5. Serán objeto de especial promoción aquellas entidades cooperativas, ya sean empresas, o sus asociaciones, que establezcan mecanismos que aseguren efectivamente la presencia equilibrada de socios y socias en sus órganos de dirección.*

## Comentario.

El fomento y la promoción cooperativa se establece, tal y como se describe en la Exposición de Motivos de la LSCA, por mandato tanto de la Constitución Española como por el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Como hemos señalado anteriormente en general las cooperativas y demás entidades de economía social son consideradas objeto de atención preferente en las políticas públicas conforme a lo establecido en el artículo 172.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía<sup>50</sup>.

En concreto vienen recogidas en el apartado de modernización económica, con lo que ya se apunta en la norma de más alto nivel, a la aspiración de un cambio en el modelo productivo andaluz, en el que se mandata al legislador en que el motor de cambio debe ser la economía social. El Estatuto de Autonomía no hace sino reflejar la importancia de este sector en la economía andaluza y el empleo y también como herramienta de vertebración territorial en Andalucía. En concreto el artículo 163.2 establece que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma fomentarán las sociedades cooperativas y otras formas jurídicas de economía social, mediante la legislación adecuada, haciendo un repaso en el artículo anterior de todos los sectores prioritarios y en el apartado posterior remitiendo al mandato constitucional del artículo 129.2 de la Constitución que establece que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas y establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores y trabajadoras a la propiedad de los medios de producción.

---

<sup>50</sup> El Acuerdo por la Economía Social Andaluza, firmado en 2013 por Junta de Andalucía, CEPES, CCOO y UGT recogía esta importancia de las cooperativas como motor de la economía en Andalucía, al resaltar que *“La economía social andaluza la constituyen en la actualidad más de 7.000 empresas, que generan más de 67.500 empleos directos y vincula, aproximadamente, a 400.000 personas con el carácter de socias, cifras que sitúan a Andalucía en la primera posición del ranking nacional de este tipo de entidades. Las formas empresariales más relevantes que configuran este tejido productivo en Andalucía son las sociedades cooperativas y las sociedades laborales”*.

Hay que tener en cuenta que aunque este mandato venga desarrollado particularmente en los artículos 115 a 117 de la LSCA, es un mandato transversal que debe atravesar todas las políticas económicas de la Junta de Andalucía. Este carácter transversal es tal que, aunque las competencias de economía social estén agrupadas en una única consejería, las demás deben tener en cuenta este principio en cuanto afecten a la misma. Es decir se plantean unas verdaderas políticas integrales en relación a las sociedades cooperativas que pueden afectar, como se verá más adelante, a competencias de educación, trabajo, igualdad, cultura, medioambiente..etc. En este sentido, RAMIREZ DE ARELLANO afirma que este mandato de la ley es, al margen de algunas consideraciones concretas de aplicación inmediata e indubitada (a título de ejemplo, la preferencia en caso de empate, en la adjudicación de contratos con las administraciones públicas andaluzas) un desiderátum que debe ponerse en relación con los pactos por la economía social donde están representados todos los sujetos de la economía social. El IV pacto por la economía social persigue aplicar de una manera trasversal estos principios, además de a las sociedades cooperativas, a otras formas de sociedades reconocidas como modelos societarios de economía social.

La concreción de lo anterior o el cómo hacerlo viene establecida en el apartado tres del artículo 115, que mediante el mandato establecido por el legislador, la Junta de Andalucía fomentará la formación de la sociedad andaluza en las sociedades cooperativas mediante tres herramientas fundamentales: programas de formación, supervisión de la misma, y su inclusión como eje dentro del sistema educativo andaluz. Así en los programas de formación establecidos por las políticas públicas se prevé la participación de las propias sociedades cooperativas tanto en su financiación como en los fondos de formación y sostenibilidad.

Pero sin duda el aspecto más importante es la creación y el impulso de la “cultura cooperativa” y la apuesta porque este sector de la economía social sea la apuesta prioritaria de los poderes públicos a medio y largo plazo. Y evidentemente únicamente se podrá conseguir dicho objetivo si se incluyen en

los diferentes grados y niveles educativos, desde temprana edad, el conocimiento y fomento del cooperativismo.

El apartado cuatro, establece dentro de la economía cooperativa, cuáles van a ser los sectores productivos prioritarios en las políticas públicas de la Junta de Andalucía, pudiendo ser objeto de discriminación positiva o ventajas frente a otras, por ejemplo en un procedimiento, concurso o subvención pública. El Estatuto de Autonomía para Andalucía incorpora como novedad un bloque normativo de orden finalista muy parecido al que establece la Constitución Española. Así el artículo 37 del Estatuto establece los principios rectores de las políticas públicas, introduciendo un marcado mandato de carácter transversal a los poderes públicos en Andalucía. Por tanto estos ejes se verán reflejados en los sectores priorizados en la LSCA. Así lo ejes rectores establecidos en el artículo 37 del Estatuto como son entre otros, la prestación de unos servicios públicos de calidad, el empleo de calidad, la equiparación laboral entre mujeres y hombres, el acceso a la sociedad del conocimiento con el impulso y de la formación y el fomento en la utilización de infraestructuras tecnológicas, el libre acceso de todos a la cultura, el respeto al medioambiente, etc... tienen su reflejo en este apartado de la LSCA. En virtud de lo anterior este apartado cuarto establece que será objeto de especial promoción (por parte de los poderes públicos) aquellas cooperativas que aunque ya estén constituidas y no sea su actividad principal, incorporen a su actividad la innovación, la integración y sostenibilidad, la mejora ambiental la conciliación de la vida laboral y familiar y la igualdad de género. Asimismo las cooperativas que estén incluidas en los sectores de nuevas tecnologías, socio-sanitario, de interés social, del medio rural, agrario, educativo y cultural serán objeto de especial atención. Por último y en atención al principio rector del artículo 37.9 y 10 del Estatuto, los poderes públicos valorarán especialmente las cooperativas que generen empleo estable y fomenten la ocupación de sectores de población con dificultades para acceder al mercado laboral. También se establece esta especial promoción, consistente en la creación y promoción, de cooperativas que satisfagan un interés público y social, siendo coherente con las nuevas figuras de sociedades cooperativas que se crean y desarrollan en la LSCA, como las cooperativas de servicios públicos.

Por último el apartado cinco vuelve a insistir en que se promocionará a las entidades cooperativas que promuevan una igualdad de género tanto en los órganos de gobierno como en los socios y socias que la conformen, en consonancia con el mandato los artículos 10.2, 37.1.2º y 11º (principios rectores), 168 (conciliación de la vida laboral y familiar) y 174 (contratación y subvenciones públicas) del Estatuto de Autonomía que establecen que la Comunidad propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer, promoviendo la democracia paritaria la plena incorporación de aquélla en la vida social, evitando cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o social.

En resumen tal y como afirma RAMIREZ ARELLANO, esta nueva normativa está encaminada a afianzar el carácter competitivo y flexible de las empresas cooperativas, sin merma de sus principios inspiradores, eludiendo los controles y cargas burocráticos que la anterior normativa imponía a estas sociedades, y que se utilizaban como pretexto para optar por otros modelos mercantiles más livianos en cuanto a su constitución y funcionamiento. Cabría resaltar como ejemplo el órgano social preceptivo de los interventores que imponía la antigua legislación con escasa utilidad práctica puesto que buena parte de las sociedades cooperativas están obligadas a auditorías externas, lo que convertía a los interventores en una figura protocolaria sin función real. Por tanto el único fin de asemejar las sociedades cooperativas andaluzas a otros modelos mercantiles convencionales ha sido en cuanto a cuestiones de la vida práctica empresarial y no en la equiparación de principios inspiradores. Dichos principios, no solo no se restringen o limitan, sino que resultan incrementados con algunos otros, que forman parte de la llamada “responsabilidad social empresarial”, tan afín a este tipo de empresas, tales como el fomento del empleo estable y de calidad, la sostenibilidad empresarial y medioambiental, o la igualdad de género.



## **ARTÍCULO 116. MEDIDAS ESPECIALES DE PROMOCIÓN COOPERATIVA.**

*1. Las sociedades cooperativas que concentren sus empresas por fusión o por constitución de otras sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado, así como mediante uniones de empresarios o agrupaciones de interés económico, disfrutarán de todos los beneficios otorgados por la normativa autonómica relacionada con la agrupación y concentración de empresas en su grado máximo.*

*2. Las sociedades cooperativas gozarán de preferencia, en caso de empate, en la adjudicación de contratos de las administraciones públicas andaluzas.*

*3. Las sociedades cooperativas de viviendas de promoción social tendrán derecho a adquirir terrenos de gestión pública, por los procedimientos de adquisición directa contemplados en la normativa de aplicación, para el cumplimiento de sus fines específicos.*

*4. Las sociedades cooperativas tendrán en la distribución o en la venta de sus productos la condición de mayoristas, pudiendo no obstante, vender al por menor y distribuir como minoristas, con independencia de la calificación que les corresponda a efectos fiscales. La entrega de bienes y la prestación de servicios realizados por las sociedades cooperativas a sus socios y socias, ya sean generadas por la entidad, por sus socios y socias, o adquiridas a terceros para el cumplimiento de sus fines sociales, no tendrán la consideración de venta, con independencia de la calificación que les corresponda a efectos fiscales.*

*5. Se consideran actividades cooperativas internas, y tendrán carácter de operaciones de transformación primaria, las que realicen las sociedades cooperativas agrarias y las de explotación comunitaria de la tierra, así como las sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado que las agrupen, con productos o materias que estén destinados, exclusivamente, a las explotaciones de sus socias y socios.*

*6. Las sociedades cooperativas que participen en los procedimientos de contratación o contraten efectivamente con las administraciones públicas andaluzas, en el supuesto de exigirse la constitución de garantías, solo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de su importe.*

### **Comentario.**

En este artículo se concretan las medidas de promoción o de discriminación positiva por parte de la Junta de Andalucía, a las sociedades cooperativas, y que tendrán que tener su reflejo en las diferentes normativas de aplicación en la Comunidad. Al igual que en la anterior normativa de cooperativas se sigue incentivando la concentración, unión y agrupaciones de sociedades cooperativas a las cuales se les aplicarán todos los beneficios, dentro de las competencias autonómica, que se contemplan a las agrupaciones y uniones de empresa en su grado máximo. No es asunto baladí, ya que la desburocratización y flexibilidad que regula la actual LSCA permite, mediante trámites administrativos sencillos, la intercooperación entre sociedades cooperativas a distintos niveles, equiparándolas al nivel de máxima complejidad del resto de sociedades mercantiles. La intercooperación favorece la agrupación y la organización de alianzas entre las cooperativas, lo que brinda a estas empresas la posibilidad de acceder a nuevas oportunidades de negocio, acometer proyectos conjuntos y ser más competitivas. También se mantiene respecto a la normativa anterior, pero ampliándolas a cualquier tipo de sociedad cooperativa y no solo a las de trabajo, que las mismas gozarán de preferencia, en caso de empate, en la adjudicación de contratos de las administraciones públicas andaluzas.

Asimismo, se sigue manteniendo la el derecho de las cooperativas de vivienda al derecho a la adquisición pública de terrenos por el sistema de adjudicación directa para el cumplimiento de sus fines específicos, aunque el régimen de este tipo de cooperativas sea equidistante con la anterior LSCA ya derogada.

También se mantiene la especialidad en determinadas actividades de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria como es la consideración a

todos los efectos, como actividades cooperativas internas y manteniendo el carácter de operaciones de transformación primaria las que realicen las misma con productos o materias, incluso suministradas por terceros, siempre que estén destinadas exclusivamente a las explotaciones de sus socios y socias

Como novedad se amplían a todas las sociedades cooperativas la condición de mayoristas por la que se le aplicarán los precios y tarifas que correspondan, siempre más ventajosas, y también tendrán a todos los efectos la condición de consumidores directos, para abastecerse o suministrarse de terceros de productos o servicios que les sean necesarios para el cumplimiento de sus fines sociales.

Por último se mantiene en los procedimientos de contratación en los que participen cooperativas y haya que depositar una garantía, que en todo caso tendrán derecho a una reducción del veinticinco por ciento del total a constituir. Sin embargo es de destacar que desaparece, respecto a la legislación anterior, la referencia a que sean sociedades cooperativas andaluzas y a que esta obligación está dirigida a las administraciones públicas radicadas en Andalucía. El legislador ha previsto una posible incompatibilidad con la legislación europea en materia de competencia y de contratación pública, permitiendo que puedan acceder a este derecho cualquier cooperativa de cualquier territorio. Asimismo mientras abre el abanico a cualquier cooperativa sea cual sea su domicilio social, estrecha el margen y únicamente obliga a la administración andaluza y no a la radicada en Andalucía (excluyendo así a procedimientos públicos dependientes del Estado o de la UE, a los que a priori, podría no ser de aplicación).

## **ARTÍCULO 117. INFORMACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN.**

*Para el mejor cumplimiento de la actividad de fomento, las entidades cooperativas facilitarán a la consejería competente en materia de sociedades cooperativas, además de los datos que se les soliciten de forma expresa,*

*aquellos otros que reglamentariamente se determinen sobre su estructura social y económica.*

## **Concordancia Reglamentaria**

### **ARTÍCULO 18. INFORMACIÓN Y AUDITORÍA.**

*1. De conformidad con lo previsto en el [artículo 117 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#), las sociedades cooperativas con sección de crédito deberán remitir semestralmente a la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas información de carácter económico y financiero de la sección de crédito. A este fin, la citada Consejería establecerá mediante orden los datos que deberán facilitarse y aprobará los modelos de formularios necesarios para su cumplimentación.*

*Asimismo, las sociedades cooperativas con sección de crédito estarán obligadas a remitir a la Consejería competente en materia de cooperativas toda aquella información sobre su actividad y gestión, relacionada con la sección de crédito, que ésta les solicite expresamente.*

### **ARTÍCULO 145. GRUPOS COOPERATIVOS.**

*2. El Registro de Cooperativas resolverá sobre la inscripción del documento contractual constitutivo, o de la escritura de constitución, en su caso, con arreglo a lo establecido en el artículo 130, incluyéndose a tal efecto la constitución del grupo en la Sección correspondiente de las referidas en el artículo 117.1.a).*

*3. Los datos que deberán aparecer en la hoja de inscripción son los siguientes: fecha de constitución, número de inscripción, entidades iniciales que forman parte y, si procede, fecha de baja del grupo cooperativo*

## *Sección 8.ª Depósito y publicidad de las cuentas anuales.*

### **ARTÍCULO 146. OBLIGACIÓN DE DEPOSITAR LAS CUENTAS ANUALES.**

*Las sociedades cooperativas andaluzas depositarán las cuentas anuales dentro del mes siguiente al de su aprobación, junto con el informe de gestión y el de auditoría de cuentas, en su caso, en la unidad registral que resulte competente conforme a las reglas establecidas en el artículo 109.*

*Igualmente, efectuarán dicho depósito las sociedades cooperativas que se encuentren en período de liquidación, salvo que esta se produzca antes de la finalización del plazo fijado para la aprobación de las cuentas anuales.*

### **ARTÍCULO 147. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.**

*1. Para depositar las cuentas anuales, deberán presentarse los siguientes documentos:*

- α) Solicitud firmada por quien deposite las cuentas en nombre de la sociedad cooperativa en la que hará mención expresa a la legitimación con la que actúa.*
- β) Certificación expedida por persona legitimada relativa al acuerdo asambleario de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado. Si alguno o varios de los documentos que integran las cuentas anuales se hubieran formulado en forma abreviada, se hará constar así con expresión de la causa. Dicha certificación expresará, bajo responsabilidad de la persona certificante, que las cuentas anuales y el informe de gestión, en su caso, están firmados debidamente conforme al artículo 51, indicando la causa, en caso contrario.*

*Asimismo, en dicha certificación deberá constar que los fondos sociales obligatorios han sido dotados o, en caso contrario, la expresión de la causa legal por la que no corresponde realizar dicha dotación y cuando*

*proceda, con arreglo a la normativa vigente, que las cuentas depositadas se corresponden con las auditadas o intervenidas.*

- χ) Un ejemplar de las cuentas anuales debidamente firmado, que deberá identificarse en la certificación a la que se refiere la letra anterior.*
- δ) El informe de gestión. Su presentación no será necesaria cuando la entidad formule el balance y el estado de cambios en el patrimonio neto de forma abreviada.*
- ε) El informe de auditoría en los supuestos legalmente establecidos, o en su defecto, el de las personas interventoras, si este órgano existiera.*
- φ) Una hoja estadística mediante la que se facilitarán datos e información propios de su estructura social y económica, según modelo aprobado por la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, de conformidad con lo establecido en el [artículo 117 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre](#), de Sociedades Cooperativas Andaluzas.*
- γ) Aquella otra documentación que sea exigible por la normativa contable.*

*2. Los documentos expresados en el apartado anterior deberán presentarse en soporte electrónico y a través de los procedimientos telemáticos aprobados por la Consejería competente en materia de cooperativas.*

### **Comentario.**

El legislador establece la obligación de información a la Administración en la actividad de fomento realizada (se entiende que mediante fondos públicos) por las sociedades cooperativas. Establece para ello un doble control en el articulado de la LSCA con el objetivo de maximizar y conseguir el éxito en las políticas de fomento. Por un lado establece una cláusula abierta mediante la cual la consejería competente en materia de sociedades cooperativas tienen la

obligación de facilitar los datos necesarios que se les requieran. Por otro lado establece que también tienen la obligación de facilitar los datos que se establecen en el RLSCA sobre su estructura social y económica. Con esto se intenta conseguir un doble objetivo por un lado que en los procedimientos públicos para el fomento del cooperativismo se consigan maximizar los principios de mérito y capacidad, y por otro evitar la posibilidad de fraude a través de control de la estructura económica y societaria de la cooperativa, incluyendo algunos controles adicionales a determinadas cooperativas, como por ejemplo, las de vivienda que por sus fines, objeto y actividad en relación a la protección especial cual es un derecho recogido en el Estatuto de Autonomía (derecho a la vivienda), que requiere un especial énfasis o control de la administración que sobre todo eviten situaciones en que se puedan poner en peligro dicho derecho por una mala gestión o incapacidad en la misma. Situaciones que podrían generar una alarma social y generar desconfianza en el sector de las cooperativas andaluzas.

## **CAPÍTULO II. REGISTRO DE COOPERATIVAS ANDALUZAS**

### **ARTÍCULO 118. CARACTERÍSTICAS GENERALES.**

- 1. El Registro de Cooperativas Andaluas reviste carácter público y se rige por los principios de legalidad, publicidad material y formal, legitimación, prioridad y tracto sucesivo.*
- 2. Dicho registro quedará adscrito a la consejería de la Junta de Andalucía que tenga atribuida la competencia en materia de cooperativas.*
- 3. El Registro de Cooperativas Andaluas dispondrá de los dispositivos necesarios para la realización de las actividades registrales a través de medios y técnicas telemáticos.*



## **ARTÍCULO 119. FUNCIONAMIENTO Y CONTENIDO.**

1. *La inscripción de los actos de constitución, modificación de estatutos sociales, fusión, escisión, transmisión, cesión global del activo y del pasivo, transformación, disolución y reactivación de las sociedades cooperativas tendrá eficacia constitutiva. La inscripción de los demás actos tendrá efectos declarativos, no produciendo dichos actos efecto alguno frente a terceros de buena fe hasta su acceso al Registro de Cooperativas Andaluzas. La intervención notarial de la documentación que haya de presentarse al Registro de Cooperativas tendrá carácter potestativo, salvo cuando se aporten bienes inmuebles al capital de la entidad, o en aquellos otros supuestos que puedan establecerse reglamentariamente.*

2. *La calificación, y la inscripción, en su caso, por parte del Registro de Cooperativas Andaluzas, se efectuará en el plazo, nunca superior a un mes, que se determine reglamentariamente, a contar desde la fecha en que la solicitud de inscripción haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. El vencimiento de dicho plazo, sin que se haya notificado resolución expresa, legitima al interesado que hubiera deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo en todos los casos, a excepción de la relativa al depósito de cuentas.*

*Tratándose de la constitución de estas sociedades, y siempre que se ajusten a los modelos oficiales que se determinen reglamentariamente, el plazo para calificar e inscribir será como máximo de cinco días hábiles, en los términos y con los efectos referidos en el párrafo anterior.*

3. *Transcurrido un año desde el cierre del ejercicio social sin que se haya cumplido el deber de depositar las cuentas en el Registro de Cooperativas Andaluzas, no se practicará la inscripción de ningún documento presentado con posterioridad a aquella fecha, con las excepciones que reglamentariamente se determinen.*

4. *La estructura y funcionamiento del Registro de Cooperativas Andaluzas, el procedimiento, la forma que hayan de revestir los actos inscribibles, el tracto*

*sucesivo para inscribir o anotar actos por los que se declaren, modifiquen o extingan los asientos contenidos en el Registro de Cooperativas Andaluzas, así como cualquier otra circunstancia relativa a dicho registro, se determinarán reglamentariamente.*

## **Concordancia Reglamentaria.**

*Organización y competencias del Registro de Cooperativas Andaluzas*

### **ARTÍCULO 108. ORGANIZACIÓN REGISTRAL.**

*El Registro de Cooperativas Andaluzas se estructura en una Unidad Central y ocho Unidades Provinciales, adscritas respectivamente a la persona titular de la Dirección General y de la Delegación Provincial o Territorial competentes en materia de sociedades cooperativas, quienes asumen las funciones de encargado del Registro en las unidades correspondientes. Cada una de dichas unidades quedará integrada en el Servicio que corresponda.*

### **ARTÍCULO 109. COMPETENCIAS.**

*1. Corresponde a la Unidad Central del Registro de Cooperativas Andaluzas:*

*a) La calificación, inscripción y certificación de los actos a que se refiere el artículo 123, en relación con las cooperativas de crédito y de seguros, cooperativas de segundo y ulterior grado, grupos cooperativos, así como de las federaciones de cooperativas y sus asociativas expresadas en la letra a) del presente apartado.*

*c) El depósito de las cuentas anuales de las entidades expresadas en la letra a) del presente apartado.*

*d) La expedición de la certificación de denominación no coincidente.*

*e) La centralización y difusión de la información registral.*

*f) La coordinación de la actuación de las Unidades Provinciales del Registro de Cooperativas Andaluzas, así como la emisión, en su caso, de dictámenes de*

*obligado cumplimiento para estas, y la definición de criterios de interpretación de la legalidad vigente.*

*g) La realización de los estudios estadísticos que se consideren convenientes o que vengan exigidos por la normativa de aplicación.*

*h) El estudio y propuesta de cuantas medidas puedan contribuir al eficaz funcionamiento del Registro de Cooperativas Andaluzas.*

*i) La gestión de las autorizaciones, comunicaciones y demás relaciones con los Registros Oficiales del Banco de España u otras unidades registrales ajenas al Registro de Cooperativas Andaluzas.*

*j) La implantación, desarrollo y supervisión de los dispositivos informáticos, telemáticos y demás herramientas para la gestión del Registro de Cooperativas Andaluzas.*

*k) Cualquier otra función que le atribuya la normativa vigente.*

*2. Corresponde a las respectivas Unidades Provinciales del Registro de Cooperativas Andaluzas:*

*a) La calificación, inscripción y certificación de los actos relacionados en el artículo 123, respecto de las sociedades cooperativas de primer grado que tengan su domicilio social en la provincia, con excepción de las de crédito y seguros.*

*b) La legalización de los libros sociales de las sociedades cooperativas a que se refiere la letra a) de este apartado.*

*c) El depósito de las cuentas anuales de las entidades citadas en la letra a) de este apartado.*

*d) El estudio y propuesta de cuantas medidas puedan contribuir al mejor y más eficaz funcionamiento del Registro de Cooperativas Andaluzas.*

*e) Cualquier otra función que le atribuya la normativa vigente.*

## **CAPÍTULO II.**

### *Principios y eficacia registral*

#### **ARTÍCULO 110. PRINCIPIOS REGISTRALES.**

*El Registro de Cooperativas Andaluzas se rige por los principios de legalidad, publicidad material y formal, legitimación, prioridad y tracto sucesivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 118 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

#### **ARTÍCULO 111. LEGALIDAD.**

*Las personas encargadas del Registro calificarán la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicita la inscripción, así como la capacidad y legitimación de los que los otorguen o suscriban y la validez de su contenido. Dicha calificación se realizará con base en lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro, a fin de que a los libros del Registro sólo accedan los títulos que hayan cumplido los preceptos legales y estatutarios de carácter imperativo.*

#### **ARTÍCULO 112. PUBLICIDAD FORMAL Y MATERIAL.**

*1. El Registro es público y el acceso al mismo, en todo lo que no se encuentre recogido en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y el presente Reglamento, se regirá por lo previsto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el artículo 86 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y demás disposiciones concordantes.*

*2. La publicidad se hará efectiva mediante cualesquiera de las siguientes formas:*

*a) Manifestación de los libros y de documentos integrantes del archivo o expedientes a que hagan referencia los asientos registrales, cualquiera que sea el soporte de unos y otros.*

*b) Certificación de todos o alguno de los datos contenidos en el asiento respectivo, expedida por la persona encargada del Registro.*

*3. La certificación será el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del Registro. Las certificaciones se extenderán conforme a lo interesado por los peticionarios, debiendo tener carácter literal cuando así se solicite. Éstas se solicitarán por escrito, pudiendo tramitarse de forma electrónica a través de los medios telemáticos aprobados por la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, y se expedirán dentro del plazo de un mes desde que tuviera entrada la solicitud.*

*4. Los actos sujetos a inscripción sólo serán oponibles a terceros de buena fe desde la fecha de su inscripción. Se presume el conocimiento del contenido de los asientos del Registro, sin que pueda alegarse su ignorancia.*

#### **ARTÍCULO 113. LEGITIMACIÓN.**

*1. El contenido del Registro se presume exacto y válido. Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Jueces y Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad, que no podrá perjudicar los derechos de terceros de buena fe adquiridos conforme al contenido del Registro.*

*2. La inscripción no convalida los actos y contratos que sean nulos con arreglo a las Leyes.*

*3. Cuando por sentencia judicial o resolución administrativa firme se cancele una inscripción, tal cancelación determinará la de las inscripciones posteriores que resulten contradictorias con aquélla.*

#### **ARTÍCULO 114. PRIORIDAD.**

*1. Inscrito o anotado preventivamente en el Registro cualquier acto, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con él.*

*2. El documento que acceda en primer lugar al Registro será preferente sobre los que accedan con posterioridad, debiendo la persona registradora practicar las operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación.*

### **ARTÍCULO 115. TRACTO SUCESIVO.**

*1. Para inscribir o anotar actos por los que se declaren, modifiquen o extingan los asientos contenidos en el Registro de Cooperativas Andaluas, deberá constar previamente en el Registro la condición que legitima a la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los documentos que contengan los actos referidos.*

*2. Para inscribir actos relativos a un sujeto inscribible será precisa la previa inscripción de éste.*

*3. Para inscribir actos modificativos o extintivos de otros otorgados con anterioridad, será precisa la previa inscripción de éstos.*

*4. La inscripción del cese y nombramiento de los miembros de los órganos de la cooperativa, así como el de otros sujetos inscribibles, requerirá de la previa inscripción de los anteriores que se hubieran producido. La reanudación del tracto sucesivo se efectuará mediante acta notarial de notoriedad o mediante testimonio de la resolución judicial que lo acuerde, cuando no se pueda llevar a cabo mediante certificación del acta o, en su caso, escritura pública, que recoja el correspondiente acuerdo, conforme a lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 124.*

### **ARTÍCULO 116. CARÁCTER Y EFICACIA DE LAS INSCRIPCIONES.**

*1. La inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluas tendrá carácter obligatorio en relación con aquellos actos en que la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y el presente Reglamento así lo prevean, teniendo carácter constitutivo los previstos en el artículo 119.1 de la citada Ley, y declarativo, todos los demás.*

*2. Los actos cuya inscripción registral tenga carácter constitutivo no podrán ser aplicados válidamente hasta tanto no se practique aquella.*

*Se exceptúan de lo anterior los acuerdos de modificación de estatutos relativos a la composición de órganos sociales, que podrán ser aplicados para la renovación de dichos órganos en la misma asamblea en la que se adopten.*

### **CAPÍTULO III. Contenido del Registro**

#### **Sección 1.ª Libros de Registro**

#### **ARTÍCULO 117. DISPOSICIONES GENERALES.**

*1. En la Unidad Central del Registro de Cooperativas Andaluzas se llevarán los siguientes libros:*

*a) Libro de inscripción de sociedades cooperativas, con las siguientes Secciones:*

*1.ª Sección de Cooperativas de Crédito.*

*2.ª Sección de Cooperativas de Seguros.*

*3.ª Sección de Cooperativas de Segundo y ulterior grado*

*a) Subsección: Cooperativas homogéneas.*

*b) Subsección: Cooperativas heterogéneas.*

*4.ª Sección de Grupos cooperativos.*

*b) Libro de inscripción de federaciones y asociaciones cooperativas.*

*2. En las Unidades Provinciales del Registro de Cooperativas Andaluzas se llevarán los libros de inscripción de sociedades cooperativas, con las siguientes Secciones:*

*a) Sección de Sociedades Cooperativas de Trabajo.*



*1.ª Subsección: Cooperativas de trabajo.*

*2.ª Subsección: Cooperativas de impulso empresarial.*

*3.ª Subsección: Cooperativas de interés social.*

*4.ª Subsección: Cooperativas de transporte.*

*b) Sección de Sociedades Cooperativas de Consumo.*

*1.ª Subsección: Cooperativas de consumo.*

*2.ª Subsección: Cooperativas de viviendas.*

*c) Sección de Sociedades Cooperativas de Servicios.*

*1.ª Subsección: Cooperativas de servicios.*

*2.ª Subsección: Cooperativas agrarias.*

*3.ª Subsección: Cooperativas marítimas, fluviales y lacustres.*

*4.ª Subsección: Cooperativas de transportistas.*

*d) Sección de Sociedades Cooperativas Especiales.*

*1.ª Subsección: Cooperativas mixtas.*

*2.ª Subsección: Cooperativas de integración social.*

*3.ª Subsección: Cooperativas de servicios públicos.*

*4.ª Subsección: Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra.*

## **ARTÍCULO 118. LIBROS DE INSCRIPCIONES.**

*1. En los libros de inscripciones de sociedades cooperativas y de federaciones y asociaciones cooperativas, se inscribirán aquellos actos previstos en la*

*Sección 1.ª del Capítulo IV del presente Título, sin perjuicio de que otros actos no previstos en dicho sección puedan acceder al Registro de Cooperativas a través de cualquier otro asiento de los enumerados en el artículo siguiente.*

*2. En el libro de inscripción de sociedades cooperativas se harán constar en la parte superior de cada hoja los siguientes datos:*

- a) Denominación de la sociedad a la que corresponda.*
- b) Domicilio social.*
- c) Clase y subclase de la cooperativa.*
- d) Número inicial de personas socias y su sexo.*
- e) Capital social con el que se constituye.*
- f) Secciones de las que conste, en su caso, así como su fecha de creación, de inicio de actividad en el caso de las de crédito y, si procede, de extinción.*
- g) Número de inscripción registral de la cooperativa, junto con una clave expresiva de la unidad registral a la que pertenezca y, en su caso, el número con el que estaba inscrita en otra unidad registral. Igualmente, de encontrarse la sociedad disuelta o en período de liquidación deberán constar dichas circunstancias.*

*3. En la hoja abierta en el libro de inscripción a cada federación o asociación cooperativa figurarán los datos contemplados en el apartado anterior, a excepción del capital social, así como la clase y subclase.*

*Sección 2.ª Asientos*

## **ARTÍCULO 119. CLASES DE ASIENTOS.**

*1. En el libro de inscripción se practicarán las siguientes clases de asientos: inscripciones, anotaciones preventivas, cancelaciones y notas marginales.*

*2. Las inscripciones, las anotaciones preventivas y las cancelaciones son asientos principales. La nota marginal es un asiento accesorio de otro principal.*

*3. La inscripción es un asiento definitivo y positivo, la anotación preventiva es provisional y positivo y la cancelación definitiva y con efectos extintivos.*

## **ARTÍCULO 120. MODO DE PRACTICAR LOS ASIENTOS.**

*1. Los asientos que se practiquen en cualquiera de los libros se extenderán por medios electrónicos, debiendo quedar asegurado, en todo caso, el carácter indeleble de lo escrito.*

*2. Los asientos serán extendidos en forma concisa, con remisión al archivo en el que conste el documento que contenga el acto que se asienta, y serán autorizados por la persona funcionaria correspondiente, con su firma electrónica.*

*3. Los asientos que deban incluir fechas, cantidades y números podrán expresarlos en guarismos, excepto aquellos que se refieran a la determinación del capital social y el número y valor de los títulos representativos de las aportaciones de las personas socias que, obligatoriamente, deberán consignarse en letra.*

## **ARTÍCULO 121. ASIENTOS EN EL LIBRO DE INSCRIPCIÓN.**

*1. Las inscripciones, anotaciones preventivas y cancelaciones deberán contener los siguientes datos, salvo que exista alguna disposición legal en sentido contrario:*

*a) Naturaleza y clase de documento.*

*b) Lugar y fecha del documento.*

*c) Datos de autorización o expedición del documento, con indicación del notario que lo autoriza, en su caso, del órgano jurisdiccional o administrativo que lo*

*expida o, tratándose de documento privado, de las personas que lo certifiquen o suscriban.*

*d) Fecha del asiento y firma electrónica de la persona funcionaria que corresponda.*

*2. Las inscripciones y las cancelaciones tendrán una numeración correlativa, que se consignará en guarismos en una misma columna. Las anotaciones preventivas y su cancelación se identificarán mediante letras por orden alfabético. Las notas marginales no serán identificadas mediante ninguna letra o número.*

*3. El primer asiento de inscripción será, según se trate, el de constitución de la sociedad cooperativa o de la federación o asociación cooperativa, salvo que una modificación estatutaria determinara la competencia en favor de otra unidad registral, en cuyo caso el primer asiento que practique la nueva unidad competente será el de la inscripción de los antecedentes registrales de la entidad.*

*Asimismo, en el caso de transformación de una sociedad o agrupación de carácter no cooperativo en una sociedad cooperativa, el primer asiento de inscripción será dicha transformación.*

*4. El último asiento será de cancelación de todos los anteriores y en él se hará constar, cuando se trate de la liquidación de la sociedad cooperativa, el depósito en el Registro de toda la documentación social, que las personas liquidadoras asumen el deber de conservación de dicha documentación o que, según declaración responsable de dichas personas, la sociedad cooperativa carece de la misma. En caso de modificación estatutaria que altere la competencia administrativa respecto de la unidad registral, en el asiento de cancelación deberá constar la unidad registral o el registro a que hayan sido trasladados los datos registrales de la entidad.*

*5. Mediante anotación preventiva se asentarán en los libros de inscripción de sociedades cooperativas y de federaciones y asociaciones cooperativas los siguientes actos:*

*a) Demandas de impugnación de acuerdos sociales y de disolución judicial, cuya inscripción se ordene por resolución judicial, previa solicitud del demandante, al amparo del artículo 727 y concordantes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.*

*La anotación preventiva de la demanda de impugnación de acuerdos sociales y de la suspensión de éstos se cancelará mediante testimonio judicial cuando la demanda de impugnación resulte desestimada por resolución judicial firme; también deberá cancelarse, en virtud del correspondiente mandamiento, cuando la persona demandante desista o haya caducado la instancia.*

*El testimonio judicial de la resolución firme que declare la nulidad de todos o algunos de los acuerdos impugnados será título suficiente para cancelar la anotación preventiva y cualquier tipo de asiento registral que contenga dichos acuerdos, o sea contradictorio con la resolución judicial.*

*La cancelación de la anotación preventiva de la demanda de disolución judicial se realizará en los mismos términos previstos para la de impugnación de acuerdos sociales.*

*b) Las resoluciones administrativas de descalificación, hasta que adquieran firmeza.*

*c) El cierre provisional de la hoja de la cooperativa en el supuesto de transformación en sociedad civil o mercantil.*

*d) El cierre provisional de la hoja de la cooperativa cuando una modificación estatutaria determine la competencia de otra unidad registral o de otro Registro.*

*e) La suspensión de la inscripción, en tanto se subsanen los defectos.*

*f) Resoluciones judiciales que determinen la suspensión de acuerdos inscritos o inscribibles cuando el Registro constate su existencia. Dicha anotación se cancelará en los mismos casos y formas que los establecidos en la letra a).*

*g) Las situaciones de concurso de acreedores, en tanto la resolución judicial correspondiente no adquiera firmeza.*

*h) Cualquier otro acto previsto en la legislación aplicable.*

*6. Mediante nota marginal se realizarán aquéllas anotaciones que deban acceder al libro de inscripción y que no tengan señalado otra forma de asiento.*

## **ARTÍCULO 122. RECTIFICACIÓN DE ERRORES DE LOS ASIENTOS.**

*1. La rectificación de los errores materiales, de hecho o aritméticos cometidos en las inscripciones, cancelaciones, anotaciones preventivas y notas marginales se realizará mediante la extensión de un nuevo asiento al que se otorgará, según corresponda, un número o letra nuevos y en el que se hará constar lo siguiente:*

*a) La referencia al número o letra del asiento y la línea del mismo en que se cometió el error u omisión.*

*b) Las palabras erróneas.*

*c) Los términos que sustituyan a los erróneos o que suplan la omisión.*

*d) La declaración de quedar rectificado el asiento primitivo.*

*e) Fecha y firma electrónica de la persona funcionaria que corresponda.*

*2. Al margen del asiento rectificado se extenderá una remisión al nuevo asiento.*

*La rectificación de las notas marginales se extenderá lo más cerca posible de las rectificadas, efectuándose, asimismo, en la rectificada la remisión a la nueva nota marginal.*

## Comentario.

### 1.- Concepto de Registro de Cooperativas Andaluzas.

Al igual que en la anterior LSCA no se define el Registro de Cooperativas, limitándose a definir sus características esenciales, su finalidad, su funcionamiento y su contenido. Estamos ante un Registro Público que es un Registro Administrativo, ya que depende directamente de la Administración de la Junta de Andalucía. Una de las novedades más importantes es que este Registro no será únicamente una oficina abierta al público en la que se desarrolla la actividad general (registro administrativo general) y específica otorgada por la funciones y competencia que le otorga la LSCA, sino que se contempla una Oficina Registral Virtual para la realización de las actividades que tiene encomendadas. Este carácter virtual fue prontamente desarrollado por la Orden de 26 de julio de 2012, por la que se regula la tramitación telemática de los procedimientos de inscripción y de certificación relativos al Registro de Cooperativas de Andalucía y al Registro de Sociedades Laborales de Andalucía. Esta previsión del carácter telemático del Registro es consecuencia de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas, con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica. Todo ello, en consonancia con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Este Registro Telemático Único tiene las mismas garantías en base al principio de no discriminación, que el Registro de Cooperativas presencial, adscrito a la Consejería que tenga atribuida las competencias en materia de cooperativas. Sin embargo, según RAMIREZ DE ARELLANO, en la realidad práctica la actividad administrativa y técnica se ha alejado de los órganos sociales y suele



estar profesionalizada externamente. Esta realidad, lamentablemente, sigue siendo así a pesar de la digitalización de los trámites de registro. Podría apuntarse que incluso el trámite digitalizado, al exigir la firma del presidente de la sociedad, hace que algunos trámites tengan que pasar necesariamente su gestión por los órganos sociales y no sean asumidos en su totalidad por gestores profesionales externos.

Destacaríamos en estos artículos respecto al Registro que:

- ☐ Realiza la Inscripción y Legalización de los actos societarios que legalmente lo necesiten.
- ☐ El Depósito Anual de Cuentas se realiza en los siete meses siguientes al cierre de cada Ejercicio.
- ☐ La inscripción de los actos de constitución, modificación de estatutos sociales, fusión, escisión, transmisión, cesión global de activo y del pasivo, transformación, disolución y reactivación de las sociedades cooperativas tendrá eficacia constitutiva. La inscripción del resto de actos tendrá eficacia declarativa.
- ☐ No es necesaria la intervención notarial en la documentación que se presente en el Registro de Cooperativas, salvo cuando se aporten bienes inmuebles al capital social o en los supuestos que se determinen reglamentariamente.
- ☐ El Tracto Sucesivo es muy importante y consiste en que no se pueden inscribir actos societarios sin respetar los anteriormente inscritos por ese concepto. Caso por ejemplo de la renovación de los cargos sociales.
- ☐ Representa la facultad inspectora. Existen una Inspección Central (en Sevilla) y otras tantas provinciales.
- ☐ El Registro de Cooperativas se cierra para inscripción a las Cooperativas que no efectúen el depósito anual de sus cuentas transcurrido un año desde el

cierre del Ejercicio Social al que corresponden, con las excepciones que reglamentariamente se determinen

## 2.- Principios Registrales.

El Registro de Cooperativas Andaluza y todos los procedimientos registrales a que se sometan están sujetos y vinculados obligatoriamente a una serie de principios dogmáticos que se enuncian en la LSCA y se desarrollan en el RLSCA. Se denominan así a las reglas más generales que ordenan el funcionamiento del registro. Además la Disposición final segunda del RLSCA establece que en todas aquellas materias no reguladas expresamente en el Título III del RLSCA, relativo al Registro de Cooperativas Andaluza, será de aplicación la normativa mercantil, en especial la reguladora del Registro Mercantil, siempre que no se oponga a las normas del procedimiento administrativo común y sean acordes con la naturaleza jurídica de este tipo de sociedades y las características específicas del Registro de Cooperativas Andaluza. En último término, y con idénticos requisitos, también será de aplicación con carácter supletorio la normativa registral hipotecaria.

Los principios registrales son los siguientes

### a) Principio de Legalidad

El principio de legalidad debe entenderse en sentido amplio, como sometimiento pleno a la ley y al Derecho (arts. 9.1 y 103.1 C E). Las Administraciones públicas no solo deben respetar las disposiciones normativas con rango de ley, sino también el entero ordenamiento jurídico, del que forman parte, cuando menos, las llamadas normas escritas, la costumbre y los principios generales del Derecho. De este modo las personas que se encarguen de dicho Registro serán las encargadas de velar porque se cumpla la legalidad en los documentos de toda clase para los que se solicita la inscripción en el Registro deben ser válidos y perfectos tanto en su aspecto externo y formal, como en el interno y material. De este acto vendrá la posterior calificación, asegurándose que al Registro solo accedan los títulos que hayan cumplido con los preceptos de obligado cumplimiento.

## b) Principio de Publicidad formal y material

Este principio proclama el carácter público del Registro de Cooperativas. Asimismo contempla el carácter supletorio del artículo 37 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, del artículo 86 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre y resto de artículos concordantes en las cuales los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación, entre otras la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Por otro lado para hacer efectiva la publicidad, ésta se realizará mediante dos formas: una formal como es la manifestación y el contenido de los libros y documentos a que hagan referencia los asientos registrales, y otra a través de la Certificación, realizada por la persona encargada del Registro, de los datos contenidos en el asiento respectivo, siempre conforme a lo solicitado por su peticionario. Esta Certificación se expedirá en el plazo de un mes desde la solicitud, al objeto de facilitar otros procedimientos administrativos que dependan de dicha Certificación, agilizando pues los trámites administrativos.

## c) Principio de Legitimación

Este principio está íntimamente ligado al principio de publicidad. Es el principio registral en cuya virtud los asientos del Registro se presumen exactos, y, como consecuencia de ello, se considera legitimado al titular registral para actuar, tanto judicial como extrajudicialmente, en la forma que el propio asiento determina. Esta presunción es por un lado *iuris tantum* (con posibilidad de prueba en contrario) y por otro se establece a todos los efectos legales (es decir, en todos los campos o ramas del Derecho, y tanto a favor como en contra del titular registral). Respecto a la LSCA anterior, la actual recoge la declaración, propia de los registros no administrativos como el mercantil o el de la propiedad, de que los asientos registrales estarán bajo la salvaguarda de los Jueces y Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la

declaración judicial de su inexactitud o nulidad. En ningún caso los terceros que adquieran de buena fe conforme al Registro no podrán ser perjudicados mientras no se inscriban los actos anteriores. Este tercero de buena fe, es decir aquella persona física o jurídica, pública o privada tiene que cumplir una serie de condiciones para que pueda operar dicha protección. En primer lugar debe haber confiado en la apariencia registral, en segundo lugar el tercero debe haber realizado alguna adquisición a título oneroso a la sociedad, es decir solo queda protegido si ha intervenido en el tráfico jurídico, judicial o extrajudicial, adquiriendo un derecho, en tercer lugar el tercero debe ser de buena fe, es decir que se produzca una ignorancia o desconocimiento si realiza un negocio jurídico confiando en la apariencia registral.

Por último y en base al principio de seguridad jurídica y de simplificación administrativa, en el caso de que una sentencia judicial o resolución firme cancele una inscripción la misma determinará las inscripciones posteriores siempre que resulten contradictorias con la cancelada.

#### d) Principio de prioridad

Este es un principio en relación con el orden de inscripción o de anotación preventiva de los actos, de forma que cuando haya de inscribirse alguno que haga referencia a otros susceptibles de inscripción en el Registro, es requisito imprescindible la previa inscripción de estos últimos. No es posible inscribir actos de fecha igual o anterior a otros ya inscritos cuando contengan acuerdos contrarios o incompatibilidades con éstos.

#### e) Principio de Tracto sucesivo

El tracto sucesivo viene a ser considerado – por la doctrina y jurisprudencia-, como uno de los principios más relevante del sistema registral de publicidad. La finalidad principal del mismo es contribuir a una mejor formación del contenido registral con una doble exigencia: demandar la identidad personal y real en la correlación entre el título inscribible y el Registro y ordenar sucesivamente los asientos de cada folio sobre la base de un nexo causal entre la titularidad registral del transferente y la del adquirente que inscribe. Según afirma LOPEZ

GALLARDO: De forma descriptiva, podemos definir el principio de tracto sucesivo como aquella técnica operativa del sistema de folio real, cuya finalidad es establecer un orden entre los asientos, mediante el encadenamiento sucesivo de los títulos inscribibles, sobre la base de la previa inscripción del título del transferente en el momento de la inscripción del título del adquirente, aunque el acto dispositivo sea anterior, como presupuesto estructural para la producción de los efectos esenciales del sistema.

Lo que pretende en definitiva es resolver una situación muy común en muchas sociedades cual es que con relativa frecuencia, algún acto no se inscriba, originando con ello una discordancia entre el Registro y la realidad jurídica extra-registral que supone una quiebra del principio del tracto sucesivo. A esta ruptura se la conoce como interrupción del tracto sucesivo, que se convierte en un obstáculo para la inscripción de actos posteriores por falta de inscripción del derecho del otorgante. Ciertamente lo que se pretende es favorecer la seguridad jurídica y así el RLSCA recoge que el tracto sucesivo en asiento no solo en el encadenamiento de los actos que facultan para otorgar los que se pretenden inscribir, sino el de los propios actos que se inscriben. De ahí que el artículo 115 del RLSCA recoja dichos extremos.

Asimismo para atender a las dificultades que pudiera conllevar por ejemplo que un Secretario o Presidente se negara a certificar acuerdos de la Asamblea General por diferentes motivos, o no se hubiese podido elevar a escritura pública si fuere obligatorio y, por tanto, no pudiera reanudarse el tracto sucesivo, se contempla que se pueda efectuar por acta notarial de notoriedad o mediante testimonio de la resolución judicial que lo acuerde.

#### f) Principio de Inscripción

Aunque es un principio fundamental en el derecho registral español, sin embargo no viene recogido expresamente como tal ni en la LSCA ni en el RLSCA de desarrollo. Aún así rige este principio ya que debemos tener en cuenta que la Disposición final segunda establece como Derecho supletorio que en todas aquellas materias no reguladas expresamente en el Título III del

RLSCA que se aprueba mediante este Decreto, relativo al Registro de Cooperativas Andaluzas, será de aplicación la normativa mercantil, en especial la reguladora del Registro Mercantil, siempre que no se oponga a las normas del procedimiento administrativo común y sean acordes con la naturaleza jurídica de este tipo de sociedades y las características específicas del Registro de Cooperativas Andaluzas. En último término, y con idénticos requisitos, también será de aplicación con carácter supletorio la normativa registral hipotecaria.

Sin embargo el artículo 116 del RLSCA establece las inscripciones obligatorias/potestativas y las declarativas/constitutivas.

Asimismo el artículo 119.1 establece que la intervención notarial de la documentación que se presente en el Registro tendrá carácter potestativo, salvo cuando se aporten bienes inmuebles al capital de la entidad lo cual tal y como se describe en la Exposición de Motivos es la gran novedad de la LSCA ya que establece la posibilidad de constituir una sociedad cooperativa andaluza sin necesidad de escritura notarial, con alguna excepción, siguiendo los principios auspiciados por la Unión Europea sobre la pequeña y mediana empresa relativos a simplificar la legislación existente o reducir las cargas administrativas que pesan sobre las empresas. Aunque, en principio, pudiera parecer que esta decisión resta garantías al proceso constitutivo, la configuración de un registro público, altamente especializado e íntegramente telemático, está en condiciones de asegurar garantías similares a las que presta la intervención de un fedatario público que, salvo en algún caso, se configura como opcional.

Así se establecen que será obligatoria la inscripción en aquellos actos que así se recoja expresamente en la LSCA y el RLSCA:

- a) La constitución de la sociedad cooperativa.
- b) La modificación de los estatutos sociales

- c) La fusión, escisión, transmisión o cesión global del activo y el pasivo y la transformación de sociedades cooperativas o en sociedades cooperativas.
- d) La disolución, reactivación y declaración de haber finalizado el proceso liquidatorio y de estar aprobado el balance final.
- e) El nombramiento y cese de los miembros titulares y suplentes, en su caso, del órgano de administración, de los miembros del órgano de Intervención y del Comité Técnico si procede, de las personas liquidadoras y de las personas responsables de la auditoría.
- f) La designación, de entre los miembros del Consejo Rector, de las personas Consejeras Delegadas y de los miembros de la Comisión Ejecutiva, las facultades permanentes que les hayan sido conferidas, su sustitución, modificación o revocación.
- g) El otorgamiento de poderes de gestión y administración con carácter permanente, su modificación y revocación.
- h) El nombramiento y cese de los miembros de la Dirección, a que se refiere el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, los poderes y facultades conferidos, su modificación y revocación.
- i) La creación de secciones en la sociedad cooperativa, su extinción y, en el caso de las de crédito, el inicio de su actividad.
- j) El nombramiento y cese de los miembros del Consejo de sección o la Dirección de sección, cuando esta sea de crédito.
- k) La constitución y disolución de un grupo
- l) El depósito de cuentas anuales
- m) La resolución firme de descalificación de la cooperativa.



- n) Los demás actos cuya inscripción prevean las leyes o este Reglamento.

Tendrán carácter potestativo todos los demás que no estén expresamente contemplados en la Ley y el RLSCA.

En cuanto a los actos constitutivos serán los establecidos en el artículo 119.1 del RLSCA: la constitución, modificación de estatutos sociales, fusión, escisión, transmisión, cesión global del activo y del pasivo, transformación, disolución y reactivación de las sociedades cooperativas.

Por otro lado los actos cuya inscripción registral tenga carácter constitutivo no podrán ser aplicados hasta que no se practique dicha inscripción exceptuando los acuerdos que modifiquen los estatutos en relación a los órganos sociales que podrán ser aplicados para la renovación de dichos órganos en la misma asamblea que se adoptaron, garantizando la simplificación administrativa y efectiva en la vida cotidiana de la sociedad cooperativa.

### 3.- Estructura, organización, funcionamiento y contenido del Registro de Cooperativas

#### a) Estructura, organización y funcionamiento

La LSCA, en su artículo 119.4, remite al desarrollo reglamentario la estructura y funcionamiento del Registro de Cooperativas. El RLSCA lo desarrolla en sus artículos 108 y 109 que regulan la organización y las competencias del Registro.

Así el Registro de Cooperativas Andaluzas se estructura en una Unidad Central y en ocho Unidades Provinciales, adscritas a la Dirección General (Unidad Central) y Delegación Provincial o Territorial (Unidades Provinciales) competente en materia de cooperativas, estando estas unidades integradas en el Servicio que corresponda. Se corresponde esta estructura con la de la Administración de la Junta de Andalucía y la descentralización por provincial de acuerdo a la estructura territorial de la Comunidad, dejando abierto la

posibilidad que se creen unidades de carácter territorial y que podría no coincidir con la división provincial actual, atendiendo si se quiere, por criterios de oportunidad política, a la constitución de registros comarcales o metropolitanos.

Las competencias de cada uno de los Registros vienen recogidas expresamente en el artículo 109 del RLSCA. Así la Unidad Central se encargará de la calificación, inscripción y certificación de los actos a que se refiere el artículo 123 del RLSCA pero en relación únicamente con cooperativas de créditos y seguros y cooperativas de segundo y ulterior grado, grupos cooperativos y federaciones y asociaciones en relación con la legalización de libros, depósitos de cuentas y expediciones de certificados de denominación no coincidentes. A parte de tener la competencia en este tipo de cooperativas también es un órgano que coordina la actuación de las Unidades Provinciales de Registros e interpreta la normativa. Esta es una labor extremadamente importante en el día a día de una cooperativa, ya que la Unidad Central puede dictar instrucciones específicas y de obligado cumplimiento, para la unificación de las prácticas administrativas y para la interpretación de extremos que sin ellas, podrían dar lugar a una amplia discrecionalidad e inseguridad jurídica por parte del personal de los Registros Provinciales.

Las Unidades Provinciales del Registro de Cooperativas tendrán las mismas competencias en la calificación, inscripción, legalización de libros, depósitos de cuentas, y certificación de los actos contemplados en el artículo 123 del RLSCA, pero únicamente respecto a las sociedades cooperativas de primer grado que tengan su domicilio social en la provincia (criterio territorial) y con excepción de las de créditos y seguros (criterio funcional).

Una pregunta recurrente es si con esta nueva regulación los registros están teniendo unidad en los criterios o siguen existiendo diferencias provinciales en cuanto a la inscripción de las cooperativas e incluso contenidos en los estatutos. Como afirma RAMIREZ DE ARELLANO, el modelo de organización autónoma de los registros provinciales impide una unificación absoluta en cuanto el funcionamiento registral. No obstante existe un constante esfuerzo

desde los servicios centrales (Unidad Central del Registro de Cooperativas) para unificar los criterios registrales. La nueva normativa posibilita que los servicios centrales puedan emitir instrucciones vinculantes para los registros con el fin de unificar criterios. Además ha de mencionarse la reforma administrativa interna de la Consejería de Economía y Conocimiento, donde se incardinan estos registros, que posibilita que los recursos planteados ante los registros provinciales se conozcan por los servicios centrales y no directamente por el servicio de legislación que conocían anteriormente, consigue que los servicios centrales tengan un contacto directo con la realidad práctica de cada registro provincial y pueda encaminar mejor sus instrucciones a fin de homogenizar criterios.

#### b) Contenido del Registro de Cooperativas

Para el desarrollo efectivo de las competencias citadas anteriormente el Registro de Cooperativas, a través de sus Unidades, utiliza el Libro de Inscripción como herramienta. Libro en el que se anotarán los asientos que correspondan al acto que se pretenda (inscripción, anotación preventiva, cancelación y notas marginales). Cada Unidad llevará los Libros que le correspondan conforme a las competencias que ejercen.

1.- Los Libros de Inscripción: Así la Unidad Central del Registro llevará dos tipos. Por un lado el Libro de inscripción de sociedades cooperativas dividido a su vez en determinadas Secciones (cooperativas de crédito, de seguros de segundo y ulterior grado, y Grupos cooperativos). Por otro lado el Libro de inscripción de federaciones y asociaciones deportivas.

Las Unidades Territoriales llevarán los Libros de Inscripción de sociedades cooperativas a través de Secciones y Subsecciones

El contenido de estos Libros de inscripciones de sociedades cooperativas harán constar la denominación, el domicilio social, la clase y subclase de la cooperativa, el número inicial de personas socias y su sexo, el capital social las secciones de las que conste, así como su fecha de

creación, de inicio de actividad (cooperativas de crédito) y de extinción, el número de inscripción registral.

2.- Los Asientos: En cuanto a los Asientos el RLSCA los divide en su artículo 119 en las siguientes clases: inscripciones, anotaciones preventivas, cancelaciones (asientos principales) y notas marginales (asientos accesorios que dependen de otro principal). A su vez divide los asientos definitivos y positivos (inscripciones), provisionales y positivos (anotaciones preventivas) y definitivos y extintivos (cancelaciones). Se introduce la novedad de poder practicar dichos Asientos por medios electrónicos, en cualquiera de los libros. En cuanto a los Asientos en el libro de inscripción deberán contener al menos los siguientes datos: naturaleza y clase de documento (ya que deben remitir a ellos), lugar y fecha del documento, fecha del asiento y firma electrónica de la persona funcionaria que corresponda y los datos de autorización o expedición del documento público (en cuyo caso se indicará el notario o órganos jurisdiccional o administrativo que lo autoriza) o documento privado (datos de las personas que los certifiquen o suscriban). Los Asientos tendrán una numeración correlativa que se consignarán en guarismos

Los Asientos de inscripción y cancelación tendrán una numeración correlativa expresada en guarismos y los Asientos de anotaciones preventivas y su cancelación se identificarán por letras por orden alfabético. Las notas marginales no estarán identificadas con ninguna letra o número.

Asimismo se establece que el primer Asiento de Inscripción será el de la constitución de la sociedad o de la federación o asociación cooperativa, salvo que en los estatutos se determine que tenga que inscribirse anteriormente en otra unidad registral, en cuyo caso se hará constar los antecedentes registrales.

El último Asiento, como es lógico, será el de cancelación de todos los anteriores. Al igual que en el caso anterior si los estatutos de la sociedad contemplen otra unidad registral, este último Asiento deberá constar los datos de esta unidad registral.

Cualquier corrección en un Asiento que provenga de errores materiales, de hecho o aritméticos cometidos en las inscripciones, cancelaciones, anotaciones preventivas y notas marginales se hará mediante un nuevo Asiento.

3.- Las Anotaciones Preventivas que son asientos provisionales que se hacen en los Registros Públicos para asegurar el cumplimiento de los fallos judiciales o la eficacia de cualquier derecho que aún no puede ser inscrito en forma definitiva, se establecen que se asentarán en los libros los siguientes:

- i. Demandas de impugnación de acuerdos sociales y de disolución judicial, ordenados por resolución judicial al amparo del artículo 727 y concordantes de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil<sup>51</sup>, que serán

---

<sup>51</sup> *Artículo 727 Medidas cautelares específicas.*

Conforme a lo establecido en el artículo anterior, podrán acordarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

1. El embargo preventivo de bienes, para asegurar la ejecución de sentencias de condena a la entrega de cantidades de dinero o de frutos, rentas y cosas fungibles computables a metálico por aplicación de precios ciertos.

Fuera de los casos del párrafo anterior, también será procedente el embargo preventivo si resultare medida idónea y no sustituible por otra de igual o superior eficacia y menor onerosidad para el demandado.

2. La intervención o la administración judiciales de bienes productivos, cuando se pretenda sentencia de condena a entregarlos a título de dueño, usufructuario o cualquier otro que comporte interés legítimo en mantener o mejorar la productividad o cuando la garantía de ésta sea de primordial interés para la efectividad de la condena que pudiese recaer.

3. El depósito de cosa mueble, cuando la demanda pretenda la condena a entregarla y se encuentre en posesión del demandado.

4. La formación de inventarios de bienes, en las condiciones que el tribunal disponga.

5. La anotación preventiva de demanda, cuando ésta se refiera a bienes o derechos susceptibles de inscripción en Registros públicos.

6. Otras anotaciones registrales, en casos en que la publicidad registral sea útil para el buen fin de la ejecución.

7. La orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad; la de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta; o la prohibición temporal de interrumpir o de cesar en la realización de una prestación que viniera llevándose a cabo.

8. La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda en la demanda, así como la consignación o depósito de las cantidades que se reclamen en concepto de remuneración de la propiedad intelectual.

9. El depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial, así como el depósito del material empleado para su producción.

canceladas mediante testimonio de sentencia firme.

- a. Las resoluciones administrativas hasta que adquieran firmeza
  - b. El cierre provisional de la hoja de la cooperativa por transformación de la misma
  - c. La suspensión de la inscripción hasta que se subsanen los defectos.
  - d. Resoluciones judiciales que acuerden suspender acuerdos inscritos o inscribibles, hasta sentencia firme
  - e. Situaciones de concurso de acreedores
6. La Notas Marginales se utilizarán para aquellas anotaciones que deban acceder al Libro de inscripción y no tengan señalado otra forma de asiento. O sea para todas que no estén contempladas en la LSCA y el RLSCA, un verdadero cajón desastre que sin embargo ayuda a no complejizar la labor de un Registro para garantizar su eficiencia y su eficacia.

#### c) La Inscripción de las Sociedades Cooperativas y de sus actos

Ya nos referimos antes a los actos inscribibles cuando se analizó el principio de inscripción. Se estudiará la inscripción de la constitución de la cooperativa, la modificación de sus estatutos, el nombramiento y cese de personas miembros de los órganos sociales, la inscripción de las transformaciones societarias, y el depósito y publicidad de las cuentas anuales. Está regulado en los artículos 123 a 151 del RLSCA.

---

10. La suspensión de acuerdos sociales impugnados, cuando el demandante o demandantes representen, al menos, el 1 o el 5 por 100 del capital social, según que la sociedad demandada hubiere o no emitido valores que, en el momento de la impugnación, estuvieren admitidos a negociación en mercado secundario oficial.

11. Aquellas otras medidas que, para la protección de ciertos derechos, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiese otorgarse en la sentencia estimatoria que recayere en el juicio.

- Procedimiento común a toda inscripción registral (artículos 128 a 130 del RLSCA). Únicamente podrán presentar la solicitud en la Consejería competente la persona habilitada por la cooperativa para dicho fin o que ostente los poderes suficientes para ello. Junto a dicha solicitud deberá entregar los documentos que la acompañen y los obligatorios dependiendo de la naturaleza de la sociedad cooperativa. Dichas personas responderán del contenido de dichos documentos y de las obligaciones de su presentación. Las sociedades cooperativas deben inscribir los títulos que deban acceder al Registro, es decir los obligatorios, dentro del mes siguiente al de la aprobación de dichos acuerdos, ampliándose a dos meses si se eleva a escritura pública. De cualquier forma la Unidad Registral efectuará la inscripción sin perjuicio de terceros afectados por incumplimientos que pudieran derivarse del tráfico jurídico privado.

En cuanto a la tramitación se establece como regla general el silencio administrativo positivo, excepto en el depósito de cuentas, conforme al artículo 119.2. Y también se establece vía RLSCA (artículo 130) una flexibilidad en cuanto a los plazos de subsanación de las solicitudes y documentación presentada que sin duda facilita la vida cotidiana de las sociedades cooperativas en sus operaciones de tráfico jurídico y económico, evitando las trabas burocráticas de otros tiempos.

Así si un título contiene varios acuerdos o actos independientes unos de otros los defectos de unos no impedirán la inscripción de los otros, y estableciendo unos plazos diferenciados entre los defectos subsanables y los subsanables.

- Inscripción de la constitución (artículo 131 y 132 del RLSCA). El único requisito para la constitución de la sociedad cooperativa, será la celebración de una Asamblea Constituyente con los requisitos del artículo 6 del RLSCA de la que se levante el correspondiente acta, o en caso de elevarlo a escritura pública se puede prescindir de dicha asamblea (artículo 7.3 RLSCA). En el momento de la inscripción ante el Registro de Cooperativas, será cuando adquieran personalidad



jurídica, o en su caso desde la elevación a escritura pública.

La inscripción puede realizarse por cualquiera de las personas promotoras de la sociedad cooperativa o de las designadas por la Asamblea constituyente, o las que figuren en la escritura pública. Para ello presentarán la siguiente documentación, teniendo siempre presente las indicaciones de la Orden de 26 de julio de 2012, por la que se regula la tramitación telemática de los procedimientos de inscripción y de certificación relativos al Registro de Cooperativas de Andalucía y al Registro de Sociedades Laborales de Andalucía<sup>52</sup>:

- Solicitud de Inscripción
- Acta constituyente o escritura pública
- Resguardo del Modelo 600: Liquidación del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (como tienen bonificación fiscal, su liquidación es cero).
- Documentos propios y específicos en función de la naturaleza de la cooperativa.

Una vez realizada la inscripción dará lugar a la clasificación de la sociedad cooperativa conforme al artículo 83.2 de la LSCA, y conforme a sus estatutos sociales, incluyéndose en la Sección correspondiente de las referidas en el artículo 117 del RLSCA.

- Inscripción de la modificación de estatutos (artículos 133 y 134 del RLSCA).

Para la modificación de los estatutos de una sociedad será necesaria la

---

<sup>52</sup> Las solicitudes se realizarán en todo caso telemáticamente, con certificado de firma digital tal y como se prevé en la Orden 26 de julio de 2012, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo por la que se regula la tramitación telemática de los procedimientos de inscripción y de certificación relativos al Registro de Cooperativas de Andalucía y al Registro de Sociedades Laborales de Andalucía, para ello los ciudadanos accederán a través del enlace al portal telemático:  
<http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/oficinavirtual/>

certificación del acta o escritura pública que deberá contener la nueva redacción dada a los artículos que se modifican o adicionan, así como, si procede, la expresión de los que se derogan o sustituyen. En el caso de que sea un cambio de domicilio de la sociedad dentro del mismo término municipal bastará con la certificación del acuerdo del órgano competente.

- Nombramiento y cese de las personas miembros de los órganos sociales

Se encuentra regulado en los artículos 135 a 140 del RLSCA. En cuanto al nombramiento el certificado del acta que se presente o la escritura pública en su caso que recoja el acuerdo que nombre o designe a los miembros de los órganos sociales deberá constar la aceptación de las dichas personas, junto a una declaración de no hallarse incursos en los supuestos del artículo 48 de la LSCA en cuanto a incapacidad, prohibición e incompatibilidad. En cuanto al cese se recogen varios supuestos:

- Destitución por incapacidad, prohibición o incompatibilidad: el certificado del acta que se presente o la escritura pública en su caso que recoja la destitución deberán expresar la causa concreta por la que se destituye a dicha persona y la aseveración de que se ha seguido el procedimiento del artículo 48.2 de la LSCA. Si es por incapacidad deberá constar la referencia a la sentencia de incapacitación.
- Renuncia: el certificado del acta que se presente o la escritura pública en su caso que recoja la renuncia contendrá la renuncia expresa y su fecha realizada ante el órgano que nombró, y la aceptación de dicha renuncia por el órganos que debe realizarse en el plazo de un mes desde que se tuviera constancia de dicha renuncia.
- Otras causas de cese: cuando se produce el cese por causas distintas a las anteriores se inscribirán en el Registro mediante certificación del acta o escritura pública que contenga el

acuerdo del órgano y la causa del mismo. Dicho acuerdo deberá adoptarse en el plazo de un mes desde que se tenga constancia de dicho cese.

- Suplentes: si los estatutos de la sociedad cooperativa contemplaran la figura del suplente para el órgano que se trate, el Registro no admitirá la inscripción de la renovación de dicho órgano sin que conste la elección de los correspondientes suplentes.
- Elección simultánea de órganos: el Registro no inscribirá los nombramientos de las personas miembros del órgano de administración, junto a los de la Intervención y del Comité Técnico realizado en una misma Asamblea a menos que se elijan para períodos de mandato diferentes. Cuando sea denegado por el Registro pueden inscribirse a alguno de los órganos siempre que se solicite expresamente.
- Inscripción de transformaciones societarias.

El Registro de Cooperativas, recabará la documentación a la que se refiere el artículo 65.5 d) del RLSCA, es decir, el certificado del acta de la Asamblea General o, en su caso, la escritura pública, que se deberá presentar en el Registro de Cooperativas Andaluza para inscribir la transformación correspondiente y deberá ir acompañada del balance de situación cerrado el día anterior al del acuerdo de transformación, o bien el del último ejercicio si hubiesen transcurrido menos de seis meses desde el cierre del mismo y hubiese sido depositado en el domicilio social, a disposición de las personas socias desde el día de la convocatoria de la Asamblea General.

Los asientos de la sociedad en transformación no se cancelarán hasta que no se acredite haber cumplido con la obligación relativa a la puesta a disposición de la Administración de los fondos contemplados en el artículo 78.2 de la LSCA. Dichos Fondos son el cincuenta por ciento del Fondo de Reserva Obligatorio o de cualquier otro fondo de carácter ir repartible, así como la

integridad del Fondo de Formación y Sostenibilidad, a menos que se haya establecido estatutariamente la imposibilidad de reparto del Fondo de Reserva Obligatorio, en cuyo caso, el mismo se pondrá a disposición de la Administración andaluza en su integridad.

La inscripción de transformación de cualquier tipo de sociedades mercantiles en sociedades cooperativas, se inscribirán en el Registro mediante el certificado del órgano social competente o escritura pública, así como balance de situación cerrado el día anterior al acuerdo de transformación. Ambas contendrán los requisitos previstos para la constitución de una sociedad cooperativa.

- Disposiciones particulares relativas a otros actos registrales (artículos 143 a 145 del RLSCA de desarrollo). Se contemplan especialidades en tres casos: el concurso de acreedores, la liquidación y los grupos cooperativos.
  - Concurso de acreedores: se inscribirá en el Registro la resolución judicial teniendo por solicitado el concurso y todas las resoluciones que se dicten durante el mismo. Mientras no sean resoluciones firmes se asentarán como anotaciones preventivas, inscribiéndose cuando sean firmes. La cancelación de los asientos también se practicarán mediante mandato judicial.
  - Liquidación: una vez que se haya finalizado la liquidación y la distribución del haber social con arreglo a los artículos 67.6e) y 69.4 del RLSCA, las personas liquidadoras deberán solicitar en el plazo de quince días la cancelación de los asientos referentes a la sociedad liquidada. Para ello presentarán el certificado del acta o escritura pública en la que debe contar el balance final de la liquidación y las operaciones de ésta. Además deberán depositar en el Registro los libros y documentos relativos al tráfico de la

sociedad, salvo que dichas personas asuman el deber de conservación. Por supuesto el Registro no realizará los asientos sin que la sociedad cooperativa acredite haber cumplido con la obligación establecida consistente en la puesta a disposición de la Administración del Fondo de Formación y Sostenibilidad y del treinta por ciento del Fondo de Reserva Obligatorio. O en caso contrario la acreditación de que en el balance final no existe sobrante y no hay dotación para dichas partidas, conforme al artículo 82.1 d) de la LSCA.

- Grupos cooperativos: la persona que ostente la Presidencia del órgano de administración de la sociedad cabeza de grupo o de la entidad fundadora que se determine contractualmente es la encargada de solicitar en el plazo de tres meses desde la asamblea constituyente o el otorgamiento de escritura pública, a la Unidad Central del Registro, competente en este tipo de grupos, la inscripción de dicha constitución. Deberá presentar para la misma la solicitud de inscripción y si no hay otorgamiento de escritura pública, documento que declare la responsabilidad de que el documento está firmado por todas las entidades. En segundo lugar deberá acompañar un ejemplar del documento contractual constitutivo con el acuerdo y con las certificaciones emitidas por los respectivos órganos de administración de las entidades, declaración de que no existe otra entidad con igual o semejante denominación, o en caso de escritura pública copia simple o autorizada de la misma. El Registro tramitará conforme a las reglas del artículo 130 de RLSCA, incluyéndola en algunas de las Secciones del artículo 117.1.a), debiendo constar en la hoja de inscripción la fecha de constitución, número de inscripción, entidades

iniciales que forman parte y fecha de baja del grupo si procediera.

- Depósito y Publicidad de las cuentas anuales (artículo 119.3 de la LSCA y en los artículos 146 a 151 del RLSCA). Una de las funciones del Registro de Cooperativas es la del depósito de cuentas. Efectivamente las sociedades cooperativas tienen la obligación de depositar sus cuentas anuales dentro del mes siguiente a su aprobación, junto con el informe de gestión y el de auditoría, si están obligadas a ello, en la Unidad que le corresponda conforme al reparto competencial del artículo 109 del RLSCA. El artículo 147 del RLSCA establece la documentación que deberá acompañarse a dicho depósito, y una vez presentada el Registro calificará favorablemente el depósito, lo tendrá por efectuado y lo inscribirá en la hoja de la entidad, en caso de ser negativa se estará a lo dispuesto en la Sección 2º del Capítulo IV del RLSCA (Procedimientos de inscripción registral: Disposiciones Comunes). En este caso rige el silencio negativo, en cuanto que si en el plazo de un mes no existe resolución expresa de la calificación deberá entenderse desestimado el depósito de cuentas. Evidentemente esta regla del silencio negativo en un asunto tan importante como la calificación de las cuentas de la sociedad, resulta favorable ya que asegura una revisión pormenorizada por parte del personal al servicio de la administración de dichas cuentas. Labor que resulta imprescindible para garantizar la seguridad jurídica en las sociedades cooperativas en cuanto a la publicidad de las cuentas y documentos contables.

En cuanto a la publicidad se establece en el artículo 149 del RLSCA que se hará efectiva mediante la manifestación de los libros y de los documentos del archivo a que hagan referencia los asientos.

Se prevé que para el caso que no se haya cumplido con el deber de depositar las cuentas en el Registro, transcurrido un año desde el cierre del ejercicio social, no se practicará la inscripción de ningún documento presentado con

posterioridad, exceptuando los encaminado a la disolución de la sociedad, cese o dimisión de los miembros del órgano de administración, nombramiento de personas liquidadoras, o los asientos ordenados por orden judicial o administrativas, entre otros. Si no se ha cumplido con este deber por no poderse aprobar dichas cuentas en la Asamblea General deberá acreditarse esta circunstancia para evitar el cierre registral. Es decir el legislador no encuentra una causa normal del tráfico económico en la vida de una sociedad que justifique su no presentación de las cuentas anuales, facilitando únicamente en este caso los actos que promuevan la solución a este problema, incluida la disolución o liquidación de la sociedad. Será, por tanto, muy complicado el desarrollo de las actividades habituales de la sociedad al no tener éstas acceso al Registro, ya que no gozarán de esa efectividad frente a terceros ni de los demás beneficios y consecuencias que la publicidad registral comporta. De este modo se limita la actuación de la propia sociedad de manera insostenible, lo que hará, sin duda, que se terminen depositando las cuentas en el Registro, salvo aquellas ocasiones en las que a la sociedad le sea más ventajoso, por razones del todo sospechosas, la no presentación y consecuente cierre del Registro.

### **CAPÍTULO III. RÉGIMEN SANCIONADOR**

#### *Sección 1.ª Disposiciones generales*

#### **ARTÍCULO 120. INSPECCIÓN.**

*1. Corresponde a la consejería competente en materia de cooperativas la función inspectora sobre las sociedades cooperativas andaluzas, en lo que respecta al cumplimiento de la presente ley y de sus normas de desarrollo.*

*2. El personal funcionario al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que tenga asignadas las funciones de control e inspección en cuanto*



*al cumplimiento de la legislación cooperativa tendrá, a todos los efectos, la consideración de agente de la autoridad y, en el ejercicio de sus funciones, estará facultado para acceder a los locales de las sociedades cooperativas, así como para requerir las actuaciones y examinar los documentos que considere precisos para el cumplimiento de su misión.*

*3. Las personas representantes legales de las sociedades cooperativas y el personal que dirija o gestione su actividad en el momento de la inspección estarán obligados a facilitar a los inspectores e inspectoras el acceso a los locales, así como el examen de los libros, registros y documentos que les soliciten para el ejercicio de su función.*

*La persona inspectora que realice su función mediante visita a la entidad, finalizada esta, levantará acta de inspección en la que dejará constancia de la actuación y reflejará, en su caso, la existencia de hechos tipificados como infracciones en esta ley o la obstrucción a su labor, pudiendo, asimismo, formular advertencias o recomendaciones encaminadas al efectivo cumplimiento de las disposiciones cuyo control tiene encomendado. Del acta de inspección extendida, dejará una copia en la entidad.*

*4. De conformidad con lo establecido en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común<sup>53</sup>, los hechos constatados por*

---

<sup>53</sup> Este artículo es el equivalente del artículo 77 de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Artículo 77. Medios y período de prueba.

*1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.*

*2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días.*

*3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.*

*funcionarios, a los que se reconoce la condición de autoridad, que tengan asignadas las funciones de inspección y control en materia de cooperativas, y que se formalicen en actas de inspección, observando los requisitos que reglamentariamente se establezcan, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar las personas interesadas.*

*5. La forma en que haya de realizarse la inspección a las sociedades cooperativas a que se refiere este artículo, así como el procedimiento a seguir en casos de concurrencia con el orden jurisdiccional penal y administrativo, serán objeto de desarrollo reglamentario, respetando, en todo caso, los principios comunes informadores de la potestad sancionadora de las administraciones públicas.*

## **ARTÍCULO 121. SUJETOS RESPONSABLES.**

*Son sujetos responsables de las infracciones reguladas en la presente ley las sociedades cooperativas y, en su caso, los miembros del órgano de administración, las personas liquidadoras, o los integrantes de otros órganos sociales no necesarios, cuando aquellas les sean personalmente imputables.*

## **ARTÍCULO 122. ÓRGANOS COMPETENTES Y PROCEDIMIENTO.**

*1. Las infracciones en materia cooperativa podrán ser objeto de las correspondientes sanciones, previa instrucción del oportuno expediente*

---

*4. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.*

*5. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.*

*6. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo.*

*7. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.*

*tramitado con arreglo a lo dispuesto en la presente ley y en sus normas de desarrollo.*

*2. El órgano competente para resolver podrá adoptar, en cualquier momento y mediante acuerdo motivado, las siguientes medidas de carácter provisional para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer:*

*a) Designar una o más personas con la facultad de convocar la Asamblea General, establecer su orden del día y presidirla.*

*b) Acordar el sometimiento de las cuentas de la sociedad cooperativa a informe de personas expertas e independientes, designando a las que hayan de realizarlo.*

*c) Suspender el abono de las subvenciones que la sociedad cooperativa tuviese concedidas o, en su caso, la tramitación de los procedimientos para su concesión cuando fuesen de su competencia. Asimismo, podrá poner en conocimiento de otros órganos de la Administración que tramiten subvenciones la iniciación del procedimiento sancionador, facultándose a estos por la presente ley para que, en su caso, procedan a la expresada suspensión, debiendo poner dicha medida en conocimiento del órgano competente para resolver.*

*Una vez recaída resolución sancionadora y que esta sea firme, el órgano que hubiese adoptado la medida provisional a que se refiere el párrafo anterior quedará facultado, en función de las circunstancias concurrentes y de la gravedad de los hechos imputados, para denegar la concesión de la subvención solicitada o solicitar el reintegro de la parte de la misma que se hubiere abonado. A este fin, el órgano competente para resolver deberá, en su caso, poner en conocimiento del órgano que suspendió el abono o tramitación de la subvención la resolución sancionadora, una vez firme.*

*De no recaer resolución en plazo, se levantará la suspensión comunicándose también, en su caso, dicha circunstancia al órgano que suspendió el abono o tramitación de la subvención.*

*3. Los órganos competentes para la iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores en materia de cooperativas se determinarán reglamentariamente, debiendo atribuirse a órganos distintos las fases de instrucción y resolución del procedimiento.*

## *Sección 2. Infracciones y sanciones*

### **ARTÍCULO 123. INFRACCIONES.**

*1. Las infracciones en materia cooperativa se clasifican en leves, graves o muy graves.*

*2. Son infracciones leves:*

*a) No convocar el órgano de administración a la Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, con un retraso superior a los tres meses o un mes, respectivamente, siguientes a la finalización de los plazos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 29, relativo a la convocatoria de este órgano.*

*b) No renovar o cubrir los cargos sociales con un retraso superior a los tres meses siguientes a la finalización de los plazos estatutariamente establecidos.*

*c) No facilitar a la Administración los datos relativos a su estructura social y económica dentro de los plazos establecidos reglamentariamente, o negarse a suministrar aquellos que le sean requeridos por esta puntualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 117.*

*3. Son infracciones graves:*

*a) No figurar las dotaciones al Fondo de Reserva Obligatorio o al Fondo de Formación y Sostenibilidad de forma diferenciada en la contabilidad.*

*b) Carecer de los libros sociales o contables obligatorios o llevarlos con un retraso igual o superior a seis meses.*

*c) No someter las cuentas a auditoría externa cuando ello sea preceptivo conforme a lo establecido en el artículo 73.*

*d) No depositar las cuentas anuales en el Registro de Cooperativas Andaluzas durante tres o más ejercicios económicos consecutivos.*

*e) En las sociedades cooperativas de servicios, realizar operaciones con terceras personas vulnerando los límites que al respecto establece el artículo 102.4.*

*f) Obstruir por cualquier medio la labor inspectora.*

*4. Son infracciones muy graves:*

*a) Transgredir los derechos de las personas socias en materia de información, como electoras y elegibles para los cargos de los órganos sociales, o el derecho a participar en la actividad de la sociedad cooperativa sin discriminación.*

*b) No dotar el Fondo de Reserva Obligatorio o el Fondo de Formación y Sostenibilidad con los porcentajes previstos legalmente, o destinar su importe a finalidades distintas de las establecidas por esta ley y su reglamento de desarrollo.*

*c) Acreditar retornos cooperativos a quienes no sean socios o socias, o acreditarlos en función de criterios distintos de las operaciones, servicios o actividades realizados con la sociedad cooperativa, a excepción del supuesto previsto en el artículo 25 para la persona inversora, así como imputar pérdidas en forma distinta de la prevista en esta ley.*

*d) En las sociedades cooperativas de trabajo, no ofrecer o impedir a los trabajadores y trabajadoras el acceso a la condición de persona socia cuando reúnan los requisitos para ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 91.*

*e) En las sociedades cooperativas de viviendas, contar con un número de socios y socias inferior al porcentaje que reglamentariamente se determine de las viviendas promovidas por la entidad, no constituir secciones cuando dichas entidades tengan más de una fase o promoción, o no llevarlas debidamente individualizadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 98, así como no*

*garantizar las cantidades dinerarias anticipadas para la construcción de las viviendas o locales, mediante contrato de seguro, en la forma que reglamentariamente se determine.*

*f) En las sociedades cooperativas de servicios, ejercer el voto plural fuera de los límites establecidos en el artículo 102.1.*

*g) Utilizar la sociedad cooperativa para encubrir finalidades ajenas a este tipo de entidades o de forma manifiestamente contraria a los principios cooperativos contemplados en el artículo 4.*

## **ARTÍCULO 124. SANCIONES Y SU GRADUACIÓN**

*1. Las sanciones se graduarán en función de los siguientes criterios:*

*a) El grado de intencionalidad del sujeto responsable de la infracción.*

*b) La reincidencia, por comisión, en el término de un año, de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así se haya declarado por resolución firme.*

*c) El número de personas socias afectadas por la infracción, así como el perjuicio económico causado a estas o a la sociedad.*

*Reglamentariamente se modulará la relación entre los citados criterios y la graduación de las sanciones.*

*2. Las sanciones se impondrán en las siguientes cuantías:*

*a) Las faltas leves, con multa de 300 a 1.000 euros.*

*b) Las faltas graves, con multa de 1.001 a 3.500 euros.*

*c) Las faltas muy graves, con multa de 3.501 a 30.000 euros o, en virtud de lo establecido en el artículo 126, con la descalificación de la sociedad cooperativa.*

*Si el beneficio obtenido o el perjuicio irrogado por la comisión de la infracción supera los citados importes, la sanción podrá ascender hasta la cantidad que uno u otro alcance, debiendo acreditarse en la resolución que la imponga.*

## **ARTÍCULO 125. PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES**

*1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los dos años, y las muy graves a los tres años, contados a partir del día en que la infracción se hubiera cometido, interrumpiéndose el citado plazo cuando se inicie, con conocimiento del sujeto interesado, el procedimiento sancionador. El cómputo del plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al sujeto presuntamente responsable de la infracción.*

*2. Las sanciones por infracciones leves prescribirán al año; las sanciones por infracciones graves, a los dos años, y por infracciones muy graves, a los tres años, contados a partir del día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución por la que se impongan. Dicho plazo se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del sujeto interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel estuviese paralizado durante más de un mes por causa no imputable al sujeto responsable de la infracción.*

## **CAPÍTULO IV. DESCALIFICACIÓN**

### **ARTÍCULO 126. CAUSAS Y PROCEDIMIENTO.**

*1. Mediante la descalificación, la Administración priva, a una sociedad de las reguladas en la presente ley, de su carácter cooperativo, por las causas que a continuación se señalan, con arreglo al procedimiento establecido por este artículo y sus normas de desarrollo.*



## *2. Podrán ser causas de descalificación de una sociedad cooperativa:*

*a) Las señaladas en el artículo 79, a excepción de las previstas en las letras a) y d), cuando concurriendo la sociedad cooperativa no se disolviera voluntariamente.*

*b) Cualquiera de las conductas tipificadas en el artículo 123 que sean susceptibles de provocar graves perjuicios económicos o sociales, o concurra reincidencia.*

*3. El procedimiento para la descalificación se ajustará a las normas del procedimiento administrativo sancionador, con las particularidades que reglamentariamente se determinen, si bien, la competencia para resolver se atribuye a la persona titular de la consejería competente en materia de sociedades cooperativas.*

*η) La resolución de descalificación se anotará preventivamente y, una vez firme, se inscribirá en el Registro de Cooperativas, con arreglo a lo establecido en el artículo 119 y su desarrollo reglamentario, suponiendo la disolución de la sociedad cooperativa o su transformación en otra entidad, en los términos que reglamentariamente se determinen.*

## **Concordancia Reglamentaria.**

### *TÍTULO IV. Régimen sancionador y descalificación*

#### *CAPÍTULO I. Disposiciones generales*

### **ARTÍCULO 167. GARANTÍAS Y PRINCIPIOS.**

*Para la imposición de sanciones a los posibles sujetos responsables o para la descalificación de una sociedad cooperativa será precisa la instrucción de un procedimiento administrativo previo, así como la observancia de los principios de transparencia, legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad e interdicción de la concurrencia de sanciones.*

## **ARTÍCULO 168. SUJETOS RESPONSABLES.**

*Conforme al artículo 121 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, son sujetos responsables de las infracciones previstas en el artículo 123 de la citada Ley, las sociedades cooperativas y, en su caso, los miembros del órgano de administración, las personas liquidadoras o los integrantes de otros órganos sociales no necesarios, cuando aquellas les sean personalmente imputables.*

## **ARTÍCULO 169. CONCURRENCIA DE SANCIONES Y VINCULACIÓN CON EL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL.**

*1. En los supuestos en que la comisión de alguno de los hechos constitutivos de las infracciones previstas en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, pudieran ser constitutivos de ilícito penal, la Administración pondrá los hechos en conocimiento del órgano judicial competente o del Ministerio Fiscal y se abstendrá de continuar el procedimiento sancionador.*

*Asimismo, deberá suspenderse la tramitación del procedimiento sancionador y, en su caso, la eficacia del acto administrativo por el que se hubiera impuesto una sanción, cuando se tenga conocimiento de la instrucción de causa penal en la que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.*

*2. El procedimiento sancionador continuará cuando recaiga resolución judicial que finalice definitivamente el procedimiento en el orden penal, sin que se haya apreciado la existencia de ilícito penal.*

*También se reanudará el procedimiento sancionador cuando en la resolución judicial que declare la existencia de un ilícito penal no se aprecie identidad de sujeto, hecho o fundamento entre la infracción administrativa y la infracción penal.*

*En ambos casos, los hechos que los jueces y tribunales hayan declarado probados por resolución judicial firme vincularán a los órganos administrativos respecto del procedimiento sancionador que substancien.*

3. *En los supuestos anteriores, subsistirán las medidas provisionales que hubieran sido adoptadas para salvaguardar los derechos de las personas socias, de la propia Administración o de terceros.*

4. *En ningún caso se impondrá una doble sanción administrativa cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.*

### **ARTÍCULO 170. SANCIONES Y SU GRADUACIÓN.**

1. *De conformidad con lo previsto en el artículo 124.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las sanciones se graduarán en función de los siguientes criterios:*

- a) El grado de intencionalidad del sujeto responsable de la infracción.*
- b) La reincidencia, por comisión, en el término de un año, de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así se haya declarado por resolución firme.*
- c) El número de personas socias afectadas por la infracción, así como el perjuicio económico causado a estas o a la sociedad.*

*Cuando no se consideren relevantes las circunstancias enumeradas en las letras a) y c) y no concurra la prevista en la letra b), la sanción se impondrá en la cuantía correspondiente al grado mínimo.*

2. *Las sanciones, fijadas en el artículo 124.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, podrán imponerse en los grados mínimo, medio y máximo, en atención a las circunstancias enumeradas en el apartado anterior:*

- a) Las faltas leves se sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 300 a 450 euros; en su grado medio, de 451 a 700 euros, y, en su grado máximo, de 701 a 1.000 euros.*
- b) Las faltas graves se sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 1.001 a 1.500 euros; en su grado medio, de 1.501 a 2.500 euros, y, en su grado máximo, de 2.501 a 3.500 euros.*

*c) Las faltas muy graves se sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 3.501 a 6.000 euros; en su grado medio, de 6.001 a 10.000 euros, y, en su grado máximo, de 10.001 a 30.000 euros.*

*d) También podrá imponerse como sanción la descalificación de la sociedad cooperativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*Conforme a lo previsto en el artículo 124.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, si el beneficio obtenido o el perjuicio irrogado por la comisión de la infracción supera los citados importes, la sanción podrá ascender hasta la cantidad que uno u otro alcance, debiendo acreditarse en la resolución que la imponga.*

## **ARTÍCULO 171. PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.**

*1. De acuerdo con el artículo 125.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los dos años, y las muy graves a los tres años, contados a partir del día en que la infracción se hubiera cometido, interrumpiéndose el citado plazo cuando se inicie, con conocimiento del sujeto interesado, el procedimiento sancionador. El cómputo del plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al sujeto presuntamente responsable de la infracción.*

*2. La advertencia o recomendación realizada tras la constatación de un hecho constitutivo de infracción por la que se confiera un plazo al sujeto responsable para reparar la legalidad conculcada interrumpirá, asimismo, la prescripción por el tiempo a que se extienda dicho plazo, asimilando dicho acto, a estos solos efectos, a la iniciación del procedimiento sancionador.*

*3. El inicio de un procedimiento de descalificación con conocimiento de la persona interesada, que en el curso de su tramitación se reconduzca a la verificación de posibles infracciones en materia cooperativa, con arreglo a lo establecido en el artículo 195, también interrumpirá la prescripción, siempre*

*que los hechos constitutivos de las eventuales infracciones constituyeran la base del procedimiento de descalificación iniciado.*

*El cómputo del plazo de prescripción se reanudará en los términos previstos en el apartado 1.*

*4. La comunicación trasladando el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal, cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, interrumpe la prescripción de la infracción hasta que se notifique a la Administración la firmeza de la resolución judicial que se dicte o hasta que el Ministerio Fiscal comunique su decisión de no ejercitar la acción penal.*

*5. Conforme al artículo 125.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las sanciones por infracciones leves prescribirán al año; las sanciones por infracciones graves, a los dos años, y por infracciones muy graves, a los tres años, contados a partir del día siguiente a aquél en que adquiriera firmeza en vía administrativa la resolución por la que se impongan. Dicho plazo se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél estuviese paralizado durante más de un mes por causa no imputable al sujeto responsable de la infracción.*

*También interrumpirá dicho plazo la suspensión de la eficacia del acto a que se refiere el párrafo segundo del artículo 169.1.*

## **ARTÍCULO 172. PLAZO DE RESOLUCIÓN.**

*La duración del procedimiento sancionador en materia de cooperativas, así como la de descalificación, no podrá exceder de seis meses, sin perjuicio de la interrupción de su cómputo por causa imputable a la persona interesada o de la suspensión del procedimiento por causa de concurrencia de sanciones en el orden jurisdiccional penal y el administrativo, a que se refiere el artículo 169.*

*Transcurrido dicho plazo desde el acuerdo de inicio sin que recaiga y se notifique la resolución, se producirá la caducidad del mismo. En este caso, la*

*resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.*

## **CAPÍTULO II. Inspección**

### **ARTÍCULO 173. LA INSPECCIÓN COOPERATIVA.**

*Corresponde a la Consejería competente en materia de cooperativas la función inspectora sobre las sociedades cooperativas andaluzas, en lo que respecta al cumplimiento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y de sus normas de desarrollo y aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 120.1 de la citada Ley.*

### **ARTÍCULO 174. ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES DE CONTROL E INSPECCIÓN.**

*1. Se atribuyen las funciones de inspección y control de la legalidad cooperativa al personal funcionario dependiente de la Dirección General competente en materia de sociedades cooperativas andaluzas adscrito al Servicio encargado de la inspección y control de dichas entidades, con título de grado medio o superior, así como al personal funcionario dependiente de las correspondientes Delegaciones Provinciales o Territoriales de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas andaluzas adscrito a los respectivos Servicios encargados de la inspección y control de cooperativas, que cuenten con la expresada titulación.*

*El personal funcionario adscrito a las Delegaciones de la citada Consejería podrá ejercitar las mencionadas funciones de control e inspección con respecto a las sociedades cooperativas domiciliadas en la provincia de la Delegación correspondiente, mientras que el personal funcionario perteneciente a la Dirección General competente en materia de sociedades cooperativas andaluzas podrá ejercitar dichas funciones respecto de cualquier sociedad cooperativa andaluza, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 177.1.*

*2. Excepcionalmente, mediante resolución de los titulares de los órganos citados en el apartado anterior, y en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán atribuirse las funciones de inspección y control a personal funcionario dependiente de la misma Consejería distinto del citado en el apartado anterior. En dicho supuesto, la resolución expresará los motivos de su atribución y el plazo al que se extienda.*

### **ARTÍCULO 175. CARÁCTER DE LA INSPECCIÓN COOPERATIVA.**

*El personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que tenga asignadas las funciones de control e inspección en cuanto al cumplimiento de la legislación cooperativa tendrá, a todos los efectos, la consideración de agentes de la autoridad y, en el ejercicio de sus funciones, estará facultado para acceder a los locales de las sociedades cooperativas, así como para requerir las actuaciones y examinar los documentos que considere precisos para el cumplimiento de su misión, de conformidad con el artículo 120.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

### **ARTÍCULO 176. OBJETO DE LA ACTIVIDAD INSPECTORA.**

*A los efectos del presente Reglamento, se entiende por actividad inspectora el conjunto de actuaciones realizadas por el personal que tiene atribuidas funciones de inspección y control, destinadas a comprobar la observancia de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre así como de sus normas de desarrollo y aplicación.*

*Dicha actividad se orientará, singularmente, a determinar con la mayor precisión posible los hechos susceptibles de constituir una infracción a la normativa cooperativa, a identificar los presuntos sujetos responsables, así como a constatar cualquier otra circunstancia que concurra en aquéllos o en éstos que incida sobre una eventual responsabilidad, todo ello sin perjuicio del carácter preventivo que debe informar la citada actividad inspectora.*



## **ARTÍCULO 177. FORMAS DE INICIACIÓN.**

*1. La actividad inspectora se iniciará siempre de oficio y por orden del órgano competente para iniciar el posible procedimiento sancionador, conforme a lo dispuesto en el artículo 183.1, como consecuencia de la propia iniciativa de dicho órgano, de petición razonada de otro órgano o de denuncia.*

*No obstante, la persona titular de la Dirección General competente en materia de sociedades cooperativas andaluzas, cuando las especiales circunstancias concurrentes o exigencias del servicio así lo aconsejen, podrá ordenar dicha actividad inspectora antes de que se lleve a efecto en los términos expresados en el párrafo anterior, comunicándolo inmediatamente a la Delegación Provincial o Territorial de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas correspondiente a la provincia donde radique el domicilio de la sociedad cooperativa que deba inspeccionarse, a fin de que dicha Delegación se abstenga de ordenar o realizar dicha actividad.*

*2. Las denuncias deberán expresar, además de la identidad de las personas que las presenten y su firma, el relato de los hechos que puedan constituir la infracción así como la fecha y lugar de su acaecimiento y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos o presuntas responsables.*

*La persona denunciante no tendrá la condición de interesada en la fase de la actividad inspectora, sin perjuicio de que, en su caso, revista tal condición en los términos previstos por el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, una vez se inicie el procedimiento sancionador.*

*No obstante, a la persona denunciante se le comunicará si se tramita o no su denuncia, con sucinta motivación en este último caso.*

## **ARTÍCULO 178. FORMAS Y EXTENSIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN COOPERATIVA.**

*1. La actividad inspectora podrá materializarse en:*

*a) Visita a la sede social de la sociedad cooperativa o a cualquiera de sus centros de trabajo o lugares donde se realice la actividad cooperativizada.*

*b) Requerimiento a la entidad inspeccionada o a cualquiera de los miembros pertenecientes a sus órganos que pudieran resultar responsables, para que comparezcan ante el centro directivo del que dependa el inspector o inspectora actuante o aporten documentos o informes necesarios para el esclarecimiento de los hechos inspeccionados.*

*c) Comprobación del expediente administrativo o la verificación de datos o antecedentes que obren en las Administraciones Públicas, de los que se infiera la existencia de los hechos constitutivos de la presunta infracción.*

*d) Cualquier otro medio legalmente admitido en Derecho que se considere idóneo para la comprobación de los hechos constitutivos de la presunta infracción.*

*2. Con arreglo a lo previsto en el párrafo primero del artículo 120.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las personas representantes legales de las sociedades cooperativas y el personal que dirija o gestione su actividad en el momento de la inspección estarán obligados a facilitar a los inspectores e inspectoras el acceso a los locales, así como el examen de los libros, registros y documentos que les soliciten para el ejercicio de su función.*

*3. Tales actuaciones comprobatorias no se dilatarán por espacio de más de seis meses desde la orden de inicio de la actividad inspectora, salvo que la dilación sea por causa imputable al sujeto inspeccionado o personas dependientes del mismo; asimismo, no se podrán interrumpir por tiempo superior a tres meses,*

## **ARTÍCULO 179. RESULTADO DE LA ACTIVIDAD INSPECTORA.**

*1. Conforme al párrafo segundo del artículo 120.3, la persona inspectora que realice su función mediante visita a la entidad, finalizada esta, levantará acta de inspección en la que dejará constancia de la actuación y reflejará, en su caso,*

*la existencia de hechos tipificados como infracciones en el artículo 123 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre o la obstrucción a su labor, pudiendo, asimismo, formular advertencias o recomendaciones en los términos regulados en el siguiente artículo. Del acta de inspección extendida, dejará una copia en la entidad.*

*2. El acta de inspección se remitirá, en el plazo de cinco días desde su extensión, al órgano competente para iniciar, en su caso, el procedimiento sancionador.*

### **ARTÍCULO 180. ADVERTENCIA O RECOMENDACIÓN.**

*1. Además de extender la correspondiente acta de inspección, el inspector o inspectora actuante podrá formular advertencias o recomendaciones cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen, valorando especialmente que no medie denuncia por parte de sujetos perjudicados, la ausencia de reincidencia, así como la disponibilidad del sujeto infractor a restituir la legalidad conculcada.*

*2. La advertencia o recomendación se comunicará por escrito al presunto sujeto infractor, indicándole los hechos vulneradores de la legalidad con base en los cuales se le advierte o recomienda, con indicación del plazo que tiene para su subsanación, bajo apercibimiento de que de no repararse dentro del mismo, se procederá a iniciar expediente sancionador.*

*3. En el plazo de cinco días, el inspector o inspectora actuante comunicará al órgano del que dependa la advertencia o recomendación formulada. Cuando éste sea distinto a aquel al que correspondería iniciar el procedimiento sancionador, también se lo comunicará a este último en dicho plazo.*

### **ARTÍCULO 181. CONTENIDO DEL ACTA DE INSPECCIÓN.**

*1. El acta de inspección tendrá el siguiente contenido mínimo:*

*a) Identificación de la entidad inspeccionada.*

*b) Relación de los hechos que motivan su extensión.*

*c) La infracción o infracciones presuntamente cometidas, en su caso, con expresión de la letra y apartado del artículo 123 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre en que se hallen tipificadas.*

*d) Identificación de la entidad o personas presuntamente responsables, cuando se aprecie la existencia de hechos tipificados como infracción, conforme a lo previsto en la letra anterior.*

*e) Sanción o sanciones que pudieran corresponder, en el caso de observarse infracción, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en el artículo 170 de este Reglamento.*

*f) Consignación de la modalidad que ha adoptado la actividad inspectora, a que se refiere el artículo 178.1.*

*g) Identificación de la persona inspectora que extiende el acta y su firma.*

*h) Fecha del acta de inspección.*

*2. Además del contenido mínimo enumerado en el apartado anterior se recogerán, asimismo, todas aquellas circunstancias que se consideren relevantes.*

*Asimismo, cuando la persona inspectora actuante estimase que resulta conveniente la adopción de alguna de las medidas provisionales relacionadas en el artículo 186, propondrá su establecimiento al órgano competente para resolver.*

*3. Las circunstancias expresadas en las letras b), c) y e) del apartado 1 se entenderán sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.*

## **ARTÍCULO 182. VINCULACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSPECTORA RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.**

*1. Una vez recibida por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador el acta de inspección que aprecie la existencia de presuntas*

*infracciones tipificadas en el artículo 123 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, éste acordará dicho inicio a menos que, a su juicio, los hechos relacionados en el acta no constituyan infracción alguna en materia cooperativa o no resulten imputables al sujeto también referido en la misma. En cualquiera de estos casos, se acordará motivadamente el archivo de las actuaciones inspectoras, notificándose dicha circunstancia a la persona interesada y sin perjuicio de la realización de una nueva inspección sobre sujetos o hechos distintos.*

*2. Si el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador no considerara adecuada la calificación de la infracción o la determinación de la sanción, lo hará así constar en el acuerdo de inicio, sustituyéndolas por las que considere más ajustadas a Derecho.*

*3. Si el expresado órgano estimara que el acta no está completa, contiene algún defecto o su contenido precisa alguna aclaración, la devolverá a la persona inspectora actuante para que la corrija y la remita una vez completada o subsanada en el plazo de diez días.*

*4. Una vez recibida por el órgano al que compete iniciar el procedimiento el acta de inspección que no aprecie la existencia de hechos tipificados como infracciones en el artículo 123 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, éste archivará las actuaciones sin más trámite, poniéndolo en conocimiento de la persona interesada y de la persona denunciante, en su caso, con arreglo a lo dispuesto para esta última en el artículo 177.2 de este Reglamento. Todo ello, sin perjuicio de la realización de una nueva inspección sobre sujetos o hechos distintos.*

### **CAPÍTULO III. Procedimiento sancionador**

#### **ARTÍCULO 183. ÓRGANOS COMPETENTES.**

*1. Tendrán competencia para iniciar los procedimientos sancionadores por infracciones de naturaleza cooperativa las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales de la Consejería competente en*

*materia de sociedades cooperativas andaluzas con respecto a las sociedades cooperativas andaluzas que tengan su domicilio social en la respectiva provincia, correspondiendo su tramitación al Servicio encargado de la inspección y control de cooperativas de las citadas Delegaciones.*

*2. Tendrán competencia para resolver los mencionados procedimientos:*

*a) La persona titular de la Delegación Provincial o Territorial correspondiente, de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas andaluzas cuando se trate de infracciones leves.*

*b) La persona titular de la Dirección General competente en materia de sociedades cooperativas andaluzas cuando se trate de infracciones graves o muy graves.*

*c) La persona titular de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas andaluzas, cuando se trate de la sanción de descalificación.*

*3. Cuando de un mismo procedimiento pudiera derivarse la imposición de diversas sanciones de distinta gravedad, tendrá competencia para resolverlo la persona titular de la Dirección General competente en materia de sociedades cooperativas andaluzas.*

## **ARTÍCULO 184. INICIACIÓN.**

*1. El acuerdo de inicio del procedimiento sancionador incorporará el acta de inspección y contendrá, además, los siguientes extremos:*

*a) La persona instructora del procedimiento con mención de su nombre y apellidos y con expresa indicación del régimen de recusación de la misma.*

*b) El órgano competente para la resolución del procedimiento, así como la norma que le atribuya la competencia, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.*

*c) Expresa indicación de la posibilidad de que el presunto o presunta responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad a los efectos previstos en el artículo siguiente.*

*d) Expresión del plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución, así como la expresa mención de que el transcurso de dicho plazo sin que recaiga y se notifique resolución produce la caducidad del expediente, con arreglo a lo establecido en el artículo 172.*

*2. Cuando se den las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 182 se hará constar así en el acuerdo de inicio, sustituyendo los elementos del acta relacionados en las letras c) y e) del artículo 181.1 por aquellos que se consideren más ajustados a Derecho.*

*3. El acuerdo de inicio con el acta de inspección incorporada se comunicará a la persona instructora del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a la persona interesada, entendiéndose, en todo caso, por tal al presunto sujeto responsable.*

*En la notificación se advertirá a las personas interesadas que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de inicio en el plazo previsto en el artículo 187.1, dicho acuerdo podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.*

*4. Asimismo, cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento estime conveniente la adopción de algunas de las medidas a las que se refiere el artículo 186, lo propondrá al órgano competente para su adopción al tiempo de dictar el acuerdo de inicio.*

## **ARTÍCULO 185. RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD.**

*Iniciado un procedimiento sancionador, si el sujeto infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el expediente con la imposición de la sanción que corresponda.*



## **ARTÍCULO 186. MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL.**

*1. Conforme al artículo 122.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, el órgano competente para resolver podrá adoptar, en cualquier momento y mediante acuerdo motivado, las siguientes medidas de carácter provisional para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer:*

*a) Designar una o más personas con la facultad de convocar la Asamblea General, establecer su orden del día y presidirla.*

*b) Acordar el sometimiento de las cuentas de la sociedad cooperativa a informe de personas expertas e independientes, designando a las que hayan de realizarlo.*

*c) Suspender el abono de las subvenciones que la sociedad cooperativa tuviese concedidas o, en su caso, la tramitación de los procedimientos para su concesión cuando fuesen de su competencia. Asimismo, podrá poner en conocimiento de otros órganos de la Administración que tramiten subvenciones la iniciación del procedimiento sancionador, para que, si estos lo deciden, procedan a la expresada suspensión, debiendo poner dicha medida en conocimiento del órgano competente para resolver.*

*2. Las referidas medidas se adoptarán siempre de oficio una vez iniciado el procedimiento sancionador, y tendrán un carácter excepcional.*

*3. Los gastos que se generen como consecuencia de la convocatoria de la Asamblea General a que se refiere la letra a) del apartado 1 o la realización de la auditoria prevista en la letra b) del mismo apartado, correrán de cuenta de la sociedad, sin perjuicio de que, en su caso, puedan adelantarse por la Administración.*

## **ARTÍCULO 187. ALEGACIONES Y ACTUACIONES.**

*1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las personas interesadas dispondrán de un plazo de quince días a contar desde el siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de inicio, para*

*aducir cuantas alegaciones o aportar cuantos documentos u otros elementos de juicio estimen convenientes, así como, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse.*

*2. Cursada la notificación a que se refiere el artículo 184.3, la persona instructora del procedimiento realizará de oficio cuantas actuaciones considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos o para la determinación de responsabilidades susceptibles de sanción.*

*3. Si como consecuencia de la instrucción realizada resultasen modificados los hechos, su posible calificación o las sanciones que pudieran corresponder, tal como quedaron determinados en el acuerdo de inicio, todo ello se reflejará y notificará al interesado en la propuesta de resolución.*

#### **ARTÍCULO 188. PRUEBA.**

*1. Recibidas las alegaciones, documentos o informaciones a que se refiere el artículo anterior o transcurrido el plazo también señalado en dicho artículo, el órgano instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba, de conformidad con lo previsto en los artículos 80 y 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.*

*2. De proponer prueba las personas interesadas, ésta podrá declararse improcedente si por su relación con los hechos no pueda alterar la resolución final a favor del presunto responsable, conforme a lo dispuesto en el artículo 137.4 de la expresada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.*

*3. La práctica de las pruebas estimadas procedentes se realizará conforme a lo establecido en el artículo 81 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de los documentos que las personas interesadas puedan aportar en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.*

*4. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo o entidad pública, y sea admitida a trámite, se entenderá que tiene carácter preceptivo, y se podrá entender, motivadamente, que tiene*

*carácter determinante para la resolución del procedimiento, con los efectos previstos en el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.*

*5. De conformidad con lo establecido en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 120.4 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, los hechos constatados por personas funcionarias, a las que se reconoce la condición de autoridad, que tengan asignadas las funciones de inspección y control en*

*materia de cooperativas, y que se formalicen en actas de inspección, observando los requisitos establecidos en el artículo 181 del presente Reglamento, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar las personas interesadas.*

#### **ARTÍCULO 189. AUDIENCIA A LA PERSONA INTERESADA.**

*1. Concluida la instrucción a que hacen referencia los artículos precedentes, se formulará por la persona instructora propuesta de resolución en la que se fijarán los extremos a que se refiere el artículo 191.3 a propósito de la resolución y se notificará a las personas interesadas indicándoles la puesta de manifiesto del expediente para que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo de quince días.*

*2. Si antes del vencimiento del plazo establecido en el apartado anterior, las personas interesadas manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.*

*3. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidas en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por la persona interesada, a excepción del supuesto previsto en el párrafo segundo del artículo 184.3.*

*4. La propuesta de resolución se cursará al órgano competente para resolver el expediente inmediatamente después de concluido el trámite de audiencia, junto con toda la documentación obrante en el mismo.*

#### **ARTÍCULO 190. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.**

*1. El órgano competente para resolver podrá decidir mediante acuerdo motivado la realización de diligencias complementarias que considere necesarias para dictar la resolución, que deberán practicarse en un plazo no superior a quince días.*

*2. Si como consecuencia de la práctica de las expresadas diligencias debieran modificarse los hechos recogidos en la propuesta de resolución o considerarse que la infracción reviste más gravedad que la indicada en aquélla, dichas circunstancias se notificarán a la persona interesada para que aporte cuantas alegaciones o documentos estime convenientes en un plazo de quince días.*

#### **ARTÍCULO 191. RESOLUCIÓN.**

*1. El órgano competente para resolver dictará resolución, que será motivada y decidirá todas las cuestiones suscitadas por las personas interesadas y aquellas otras derivadas del procedimiento.*

*2. La resolución no podrá contener hechos distintos a los determinados en la fase de instrucción del procedimiento, salvo lo dispuesto en el artículo 190.2.*

*3. La resolución deberá contener además de los elementos previstos en el artículo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la identificación de las personas o entidades responsables, la relación de hechos que se consideren probados incluyendo la valoración de las pruebas practicadas, su calificación jurídica determinando la infracción o infracciones que constituyan y la sanción o sanciones que se imponen, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y 170 de este Reglamento, o bien, la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.*

*4. La resolución se notificará a las personas interesadas. Si la actividad inspectora previa al procedimiento se hubiera iniciado como consecuencia de la iniciativa o la petición razonada de un órgano distinto al resolutorio, se comunicará también al mismo.*

## **ARTÍCULO 192. EJECUTIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN.**

*1. La resolución dictada en materia de infracción cooperativa que ponga fin a la vía administrativa será inmediatamente ejecutiva. Si no pone fin a dicha vía no será ejecutiva en tanto no haya recaído resolución del recurso de alzada o transcurra el plazo para su interposición sin que se haya producido.*

*2. La resolución de un recurso interpuesto por la persona sancionada no podrá suponer la imposición de una sanción más grave que la recurrida.*

*3. La resolución podrá adoptar las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva con arreglo a lo dispuesto en el artículo 138.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con sujeción a las limitaciones previstas en el artículo 72 de la mencionada Ley para las medidas de carácter provisional.*

*4. Una vez recaída resolución sancionadora y que ésta sea firme, el órgano que hubiese adoptado la medida provisional a que se refiere el artículo 186.1.c) quedará facultado, en función de las circunstancias concurrentes y de la gravedad de los hechos imputados, para denegar la concesión de la subvención solicitada o solicitar el reintegro de la parte de la misma que se hubiere abonado. A este fin, el órgano competente para resolver deberá, en su caso, poner en conocimiento del órgano que suspendió el abono o tramitación de la subvención la resolución sancionadora, una vez firme.*

*De no recaer resolución en plazo o de no derivarse responsabilidad alguna de su contenido, se levantará la suspensión a que hace referencia el artículo citado en el párrafo anterior, comunicándose también, en su caso, dicha circunstancia al órgano que suspendió el abono o la tramitación de la subvención.*

## **ARTÍCULO 193. ACTIVIDAD INSPECTORA.**

*1. La descalificación de una sociedad cooperativa se iniciará con arreglo a las normas del Capítulo II de este Título, que se aplicarán conforme a la naturaleza de esta medida.*

*2. Singularmente, en el acta que levante, en su caso, la persona inspectora actuante, hará constar, con carácter previo a cualquier otra circunstancia, la causa de la descalificación con referencia a las letras a) y b) del artículo 126.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*En el supuesto de que las causas de descalificación de la sociedad cooperativa se encuadren en alguna de las indicadas en la letra a) del artículo 126.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, en el acta de inspección el contenido referido a la infracción presuntamente cometida y a la sanción que pudiera corresponder se sustituirá por la expresión de las causas de disolución concurrentes. Asimismo, el contenido referido a la identificación de la entidad o personas presuntamente responsables se modificará en el sentido de identificar la entidad susceptible de ser descalificada, en base a la existencia de dichas causas.*

## **ARTÍCULO 194. PROCEDIMIENTO DE DESCALIFICACIÓN.**

*1. El procedimiento para descalificar una sociedad cooperativa se ajustará a las normas del procedimiento sancionador reguladas en el Capítulo III del presente Título, tomando en consideración la peculiar naturaleza de esta medida.*

*Singularmente, el supuesto de reconocimiento de responsabilidad previsto en el artículo 185 de este Reglamento no será de aplicación cuando la descalificación tenga su causa en el artículo 126.2.a) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.*

*Asimismo, el trámite de audiencia a la sociedad se realizará con su órgano de administración o, en su defecto, con un número de personas socias no inferior a tres, salvo en el caso de la cooperativa de segundo o ulterior grado, en el que*

*bastarán dos personas socias. Cuando tampoco fuese posible cumplimentar dicho trámite en los términos expuestos, se entenderá realizado, publicando el correspondiente aviso en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la sede electrónica de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas.*

*2. Tendrán competencia para iniciar los expedientes de descalificación las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas con respecto a las sociedades cooperativas andaluzas que tengan su domicilio social en la respectiva provincia, correspondiendo su tramitación a los Servicios encargados de la inspección y control de cooperativas de las citadas Delegaciones. Tendrá competencia para acordar la descalificación de una sociedad cooperativa la persona titular de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas andaluzas. Cuando se trate de cooperativas de crédito, será preciso, informe previo de la Consejería competente en materia de política financiera.*

*3. El informe a que se refiere el apartado anterior se solicitará por el órgano competente para resolver tras recibir la propuesta de resolución junto con la documentación obrante en el expediente, pudiendo suspender el plazo para dictar y notificar la resolución conforme a lo establecido en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.*

*La Consejería competente en materia de política financiera evacuará el referido informe en el plazo de un mes.*

*4. La resolución administrativa de descalificación agota la vía administrativa, y no será ejecutiva hasta que no adquiera firmeza.*

*5. La descalificación se anotará preventivamente, de oficio, en el Registro de Cooperativas. Una vez firme la resolución que la declare, se inscribirá en el citado Registro, con arreglo a lo establecido en el artículo 124.5, e implicará la disolución de la cooperativa transcurridos dos meses sin que ésta inicie los trámites para su transformación en otra entidad, o seis meses sin que*



*efectivamente se hubiera transformado, a menos que, en este último supuesto, concorra una causa obstativa ajena a la cooperativa.*

## **ARTÍCULO 195. CONSERVACIÓN DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.**

*1. En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución y siempre que la tramitación realizada así lo demande, los actos y trámites realizados en el cauce de un procedimiento sancionador o en las actuaciones previas al mismo podrán servir de base a la descalificación de una sociedad cooperativa y viceversa.*

*2. En estos supuestos, los actos y trámites que resten hasta la resolución se realizarán conforme a las modalidades procedimentales orientadas a la nueva finalidad, debiendo completarse, en su caso, aquellas diligencias ya cumplimentadas que lo precisen.*

### **Comentarios.**

#### **1.- Garantías y principios del régimen Sancionador.**

El ejercicio de la potestad sancionadora, es un elemento esencial para conseguir la eficacia excepcional de la legislación. Viene definido por el artículo 134 de la LRJPAC, que expone que se requerirá la tramitación del procedimiento legal o reglamentariamente establecido, es decir conforme a las leyes o reglamentos que lo desarrollen, en nuestro caso los artículos 120 a 126 de la LSCA y los artículos 167 a 195 del RLSCA.

El artículo 167 del RLSCA enuncia las garantías administrativas que deben regir a todo procedimiento administrativo para la imposición de sanciones o para la descalificación de una sociedad cooperativa.

**a) Principio de transparencia:** La transparencia es otro de los principios que deben informar la actuación de la Administración. De acuerdo con el art. 3.5 LRJPAC, "en sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación. En el seno del procedimiento administrativo,

este principio supone la garantía del acceso al expediente, en todo momento, en favor del interesado en el mismo, o, en los términos del art. 35.a) LPAC<sup>54</sup>, el derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de persona interesada, y obtener copias de documentos contenidos en ellos. Son también expresiones de este principio el trámite de información pública previsto en el art. 86 LPAC<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Artículo equivalente al artículo 13 de la nueva Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo.

Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo

<sup>55</sup> Equivalencia al artículo 83 de la Ley 39/15 de Procedimiento Administrativo.

*Artículo 83. Información pública.*

*1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública.*

*2. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde.*

que tiene como finalidad el que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se acuerde o el establecimiento de sistemas adecuados de comunicación de las decisiones administrativas (la publicación sustituye a la notificación, ex art. 59.6 LPAC, en los casos en los que la decisión tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. Una vez finalizado el procedimiento administrativo, el principio de transparencia informa el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos y expedientes administrativos, de acuerdo con los requisitos y límites establecidos en el art. 37 LPAC<sup>56</sup>.

**b) Principio de legalidad:** Descrito en el art. 25.1 CE y reiterado por el art. 127.1 LRJAP, supone que “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”, lo cual significa, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la necesaria cobertura de la potestad sancionadora administrativa por una norma de rango legal, que no excluye remisiones por parte de la ley a normas reglamentarias, siempre que ello se haga de forma subordinada a la primera.

---

*El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.*

*3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.*

*La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.*

*4. Conforme a lo dispuesto en las leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación de las personas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento en el que se dictan los actos administrativos.*

<sup>56</sup> Equivalencia artículo 13 de la nueva Ley 39/15 de Procedimiento Administrativo.

**c) Principio de irretroactividad:** Este principio es una consecuencia del principio penal de tipicidad y legalidad que, al igual que otros principios informadores del Derecho Penal, es aplicable, al Derecho sancionador. El [art. 9.3](#) de la [Constitución Española \(CE\)](#) señala que la Constitución la garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. El [art. 25, CE](#) establece que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

**d) Principio de tipicidad:** Este principio se encuentra recogido en el art. 129 de la LRJPAC, tanto por lo que respecta a la infracción como a la sanción. Respecto de la primera, el número 1 del referido artículo dice que “sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley”, la cual, además las deberá clasificar en leves, graves y muy graves, y respecto de la segunda, en su número 2 se dice que “únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley”.

**e) Principio de proporcionalidad.** Este principio demanda la adecuación de los medios empleados a los fines perseguidos y es de trascendental importancia en el Derecho Administrativo sancionador, por cuanto lo normal aquí es que éste regule las sanciones de forma flexible, otorgando un cierto margen de apreciación la Administración para la graduación de la sanción a la entidad de la infracción y de sus efectos. La LRJPAC recoge este principio en el artículo 131.3 al disponer que “en la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones públicas se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar.

**f) Principio de responsabilidad:** El principio de responsabilidad personal o subjetiva, que es básica en el Derecho penal, también rige en el Derecho Administrativo sancionador (STC 219/1988 y 76/1990), si bien en este último no impide la responsabilidad directa de las personas jurídicas, es decir, la capacidad infractora de éstas (inexistente en el Derecho penal). En consecuencia, queda excluida constitucionalmente toda responsabilidad estrictamente objetiva. Este principio ha sido recogido en el artículo 130.1 de la LRJPAC, cuando dispone que “sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia”, entendiendo así que la culpabilidad en Derecho Administrativo no se exige sólo por dolo o culpa, sino también por omisión de la diligencia exigible en el cumplimiento de la normativa administrativa. A juicio de PAREJO LUCIANO, esta última exigencia debe entenderse legítima siempre que se contemple en relación con sujetos sobre los que pese, por su función, un específico deber de conocimiento y aplicación de la normativa infringida.

**g) Interdicción de la concurrencia de sanciones:** El contenido del principio incluye dos aspectos: de un lado, la no duplicidad de sanciones administrativas y penales siempre que se cumpla la triple identidad de sujeto, hechos y fundamento; y de otro que cuando exista previsión legal de dos procedimientos punitivos (penal y administrativo) sobre los mismos hechos, tenga preferencia el primero, de manera que sólo cuando la calificación penal de los hechos no conduzca a la imposición de una pena podría producirse – respetando los hechos declarados probados en la sentencia penal- una sanción administrativa por los mismos hechos (STC 77/1983), doctrina hoy día recogida como derecho positivo en los artículos 133 y 137.2 de la LRJPAC. Doctrina por otro lado que se refleja en el artículo 120.5 de la LSCA al evocar que en estos casos serán de aplicación los principios comunes informadores de la potestad sancionadora de las administraciones públicas, desarrollado en el artículo 169 del RLSCA.

## 2.- La Inspección.

Esta figura está regulada en el artículo 120 de la LSCA y en los artículos 173 a 183 del RLSCA. La detección de infracciones y la imputación efectiva de responsabilidad por su comisión requieren un aparato orgánico y un procedimiento capaces de permitir llevar a término tales operaciones. El RLSCA en su artículo 174 establece inspectores de dos tipos con competencias funcionales diferentes. Por un lado el personal funcionario de la Junta de Andalucía que pueden depender de la Dirección General competente en materia de sociedades cooperativas andaluzas, o personal funcionario dependiente de las Delegaciones Provinciales o Territoriales de la Consejería competente adscritos a los respectivos Servicios encargados de la inspección y control de cooperativas, que cuenten con dicha titulación. También se prevé que existan por un plazo concreto y por unos motivos razonados, que dichas funciones de inspección sean atribuidas a personal funcionario dependiente de la misma Consejería.

**a) Funciones:** El personal funcionario adscrito a la Dirección provincial competente podrá ejercitar las funciones de control e inspección con respecto a las sociedades cooperativas domiciliadas en la provincia de la Delegación, mientras que el personal funcionario adscrito a la Dirección General competente lo ejercerá respecto de cualquier sociedad cooperativa andaluza.

Estas funciones se ejercerán a través de las visitas a las sedes sociales ya que en el ejercicio de sus funciones tienen el carácter de agente de la autoridad<sup>57</sup> y están autorizados para poder entrar libremente en cualquier momento en los locales de las sociedades cooperativas así como para requerir las actuaciones y examinar los documentos que considere preciso para el cumplimiento de su misión. No obstante se entiende que al efectuar una visita de inspección debe proceder a la comunicación de su presencia, pudiendo efectuarse esta a inicio de la visita o con posterioridad, si así conviene para evitar perjudicar el éxito de las actuaciones de comprobación. También las ejercerán a través del

---

<sup>57</sup> Por tanto la desobediencia o la obstrucción a su labor pueden ser considerados como un delito de desobediencia contemplado en el artículo 556 del Código Penal.

requerimiento a la entidad inspeccionada o a cualquiera de los miembros que pertenezcan a sus órganos para que comparezcan ante la inspección, la comprobación del expediente administrativo o datos que obren en las administraciones públicas, y cualquier otro medio admitido en derecho acorde con la labor investigadora que efectúe.

**b) Objeto y Sujetos responsables:** El objeto de la actividad inspectora viene definido en el artículo 176 del RLSCA como el conjunto de actuaciones realizadas por el personal que tiene atribuidas las funciones de inspección y control, destinadas a observar la Ley 14/2011 de 23 de diciembre así como sus normas de desarrollo. La actividad se orientará a precisar los hechos que pueden constituir infracción a la normativa de cooperativas andaluzas, a identificar los sujetos responsables y sus circunstancias particulares y a prevenir las conductas anteriores. Frente a un modelo generalista de inspección, se apuesta por un modelo de especialización con el objetivo de atender las peculiaridades propias del campo del cooperativismo.

Los Sujetos responsables de las infracciones previstas en la LSCA y RLSCA y que surjan como consecuencia de la actividad inspectora son las sociedades cooperativas, y en su caso los miembros del órgano de administración, las personas liquidadoras, o los integrantes de otros órganos sociales no obligatorios, cuando les sean personalmente imputables. El aspecto personal de estas infracciones, relativo al sujeto infractor, delimita su campo de aplicación, y así la identificación responde a la necesidad de garantizar el principio de seguridad jurídica en materia sancionadora, de forma que sólo los mencionados en el artículo 121 de la LSCA y no otros, serán sancionados como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones en que hayan incurrido como consecuencia de la actividad inspectora, garantizando que dichas conductas no quedan impunes o amparadas por la limitación de la responsabilidad de las personas jurídicas únicamente.

**c) Iniciación y Resultado de la actividad inspectora:** La actividad inspectora se iniciará siempre de oficio y por orden del órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador (delegaciones provinciales o Consejería).



También se prevé que el titular de la Dirección General competente en materia de sociedades cooperativas pueda ordenar dicha actividad inspectora comunicándolo a los anteriores órganos.

Una vez realizada la función el inspector o inspectora actuante levantará un acta de inspección en la que dejará constancia de la actuación y si existieren reflejará los hechos tipificados como infracciones del artículo 123 de la LSCA, los sujetos responsables, la posible sanción y cualesquiera hechos que considere relevantes, pudiendo incluso proponer cualquiera de las medidas provisionales del artículo 186 del RLSCA. En caso de que se contemple una infracción se elevarán al órgano competente para resolver (Delegación o Consejería). Dicho órgano podrá considerar que no existe infracción o sujetos responsables conforme a los hechos reflejados en el acta, archivando el procedimiento, o podrá acordar el inicio del procedimiento sancionador.

Además de lo anterior los inspectores e inspectoras podrán formular advertencias o recomendaciones si se ha vulnerado la legalidad. Así el legislador recoge parcialmente las previsiones recogidas en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo número 81 artículo 17.2 y número 129 artículos 22.2. Pero es de extrañar que no amplíe estas recomendaciones a cuando incluso no se detecten hechos constitutivos de infracción, pero que a su juicio sea aconsejable el uso de determinadas medidas para el más adecuado cumplimiento de las disposiciones legales.

### **3.- Infracciones y Sanciones.**

Están recogidas en los artículos 123 a 125 de la LSCA y los artículos 170 a 172 del RLSCA.

**a) Infracciones:** La LSCA clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, reduciendo las infracciones en que pueden incurrir estas sociedades, circunscribiéndolas a aquellas que tienen naturaleza cooperativa y se relacionan con aspecto fundamentales de la misma. Es de resaltar que también algunas conductas que conllevan infracciones son más graves que en la anterior LSCA, y la inclusión de otras infracciones nuevas acordes con la

nueva realidad cooperativa que crea la LSCA y desarrolla el RLSCA. Así la transgresión de los derechos de las personas socias en materia de información como electoras y elegibles, para los cargos d los órganos sociales, o el derecho a participar en la actividad de la sociedad cooperativa sin discriminación pasa de ser grave a una infracción muy grave. También se crean infracciones muy graves nuevas como no ofrecer o impedir a los trabajadores y trabajadoras el acceso a la condición de persona socia o utilizar la sociedad cooperativa para encubrir otras finalidades ajenas a los principios cooperativos, aprovechándose de las ventajas de ésta.

**b) Sanciones:** Las sanciones pueden ser de dos tipos la de carácter económico y las que conlleven la descalificación de la cooperativa de acuerdo con el artículo 126 de la LSCA. De conformidad con el artículo 124 de la LSCA y 170 del RLSCA las sanciones se graduarán en base al grado de intencionalidad, la reincidencia, el número de personas socias afectadas y el perjuicio económico. En caso de que no concurra ninguna de estas circunstancias la sanción se impondría en el grado mínimo previsto. Se establecen tres grados para la imposición de la sanción. Así las faltas leves se sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 300 a 450 euros; en su grado medio, de 451 a 700 euros, y, en su grado máximo, de 701 a 1.000 euros. Las faltas graves se sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 1.001 a 1.500 euros; en su grado medio, de 1.501 a 2.500 euros, y, en su grado máximo, de 2.501 a 3.500 euros. Y por último las faltas muy graves se sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 3.501 a 6.000 euros; en su grado medio, de 6.001 a 10.000 euros, y, en su grado máximo, de 10.001 a 30.000 euros.

**c) Prescripción:** Una de las causas de extinción de la responsabilidad prevista legalmente se produce cuando no se ejercita la acción para descubrir y sancionar la infracción que se pudiera haber cometido, de modo que la prescripción de la infracción supone el transcurso de un plazo determinado tras la comisión de la misma sin que ésta haya sido perseguida. Es decir la potestad sancionadora solamente puede ejercerse válidamente dentro del límite temporal fijado por la ley, de manera que si la Administración impone una sanción cuando ya ha prescrito la infracción, la resolución administrativa estaría

viciada de nulidad en lo que viene a ser una importante garantía del administrado frente a la pasividad de la Administración.

Se prevé tanto la prescripción de las infracciones como de las sanciones que pudieran recaer sobre la sociedad cooperativa. Están recogidas en el artículo 125 de la LSCA y en los artículos 171 y 172 del RLSCA.

En cuanto a las infracciones, de acuerdo con el artículo 125.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los dos años, y las muy graves a los tres años, contados a partir del día en que la infracción se hubiera cometido, interrumpiéndose el citado plazo cuando se inicie, con conocimiento del sujeto interesado, el procedimiento sancionador. El cómputo del plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al sujeto presuntamente responsable de la infracción. Asimismo si la infracción pudiera revestir el carácter de delito o falta, la comunicación al órgano judicial o Ministerio Fiscal, en los términos del artículo 169 del RLSCA, interrumpiría la prescripción hasta que se notifique a la Administración la firmeza de la resolución judicial o hasta que el Ministerio Fiscal comunique su decisión de no ejercitar la acción penal. Es de extrañar en este caso que únicamente se refiera al Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción, olvidando el legislador la existencia procesal de otras figuras acusadoras en el proceso penal, como son la acusación particular y la acusación popular, las cuales pueden ejercer dicha acción de manera independiente a la del Ministerio Fiscal.

En cuanto a las sanciones e acuerdo con el artículo 125.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre las sanciones por infracciones leves prescribirán al año; las sanciones por infracciones graves, a los dos años, y por infracciones muy graves, a los tres años, contados a partir del día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución por la que se impongan. Dicho plazo se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del sujeto interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel estuviese paralizado durante más de un mes por causa no imputable al

sujeto responsable de la infracción. También se interrumpirá dicho plazo en los términos del artículo 169.2 del RLSCA.

Asimismo el plazo máximo de resolución del procedimiento sancionador y de la descalificación de las cooperativas no podrá exceder de seis meses, produciéndose la caducidad del mismo si no ha recaído y notificado la resolución, conforme al artículo 92 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y el artículo 172 del RLSCA.

#### **4.- Procedimiento Sancionador.**

En tanto en cuanto a la Administración, por medio de la Inspección, se encomienda el control coactivo del cumplimiento de las normas cooperativas por parte de los sujetos obligados a ello, no cabe perder de vista que el acto sancionatorio de la Administración debe ir precedido por un procedimiento administrativo reglado que de garantías al administrado. Se trata de establecer y conocer cómo los órganos administrativos que han de actuar ante la posible comisión de una infracción administrativa, con los consiguientes efectos anulatorios que su inobservancia llevaría aparejados sobre la eventual imposición de una sanción, aunque la Administración llevara razón sobre el fondo de la cuestión. Los artículos 120.4 y 5 remiten al desarrollo reglamentario el procedimiento a seguir en este tipo de casos, respetando siempre los principios informadores de la potestad sancionadora de las administraciones públicas. El RLSCA lo regula y desarrolla en los artículos 183 a 192.

**a) Órganos competentes para la instrucción:** El ejercicio de la potestad sancionadora, dice el artículo 134 de la LRJPAC, requerirá la tramitación del procedimiento legal o reglamentariamente establecido. Asimismo los procedimientos que regulen el ejercicio de esta potestad deberán establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendados a órganos distintos. Serán por tanto, diferentes en cuanto al inicio y a la resolución del procedimiento. Así lo recoge expresamente el artículo 183 del RLSCA, en cuanto que otorga la competencia para iniciar el procedimiento sancionador a la persona titular de la Delegación Provincial o

Territorial de la Consejería donde tenga el domicilio social la sociedad cooperativa, correspondiendo su tramitación al Servicio encargado de la inspección y control de la Delegación. En cuanto a la competencia para resolver dependerá del tipo de infracción. Así para las infracciones leves será la Delegación, y para las graves o muy graves se otorga la competencia a la Dirección General. Si la sanción consiste en la descalificación sería la Consejería la encargada de resolver. Por último si del mismo procedimiento se derivaran distintas sanciones de distinta gravedad será la Dirección General competente la que tendrá la competencia para resolver.

## **b) Estructura del procedimiento sancionador:**

### ***1- Iniciación.***

El acuerdo de inicio del procedimiento sancionador, además de incorporar el acta de inspección, deberá tener el siguiente contenido mínimo:

- a) Identificación de la persona instructora del procedimiento al objeto de garantizar el derecho a recusar de la misma.
- b) Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad.
- c) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se pueden adoptar durante el mismo. Estas medidas están establecidas en el artículo 122.2 de la LSCA y en el 186 del RLSCA: designar una o más personas con la facultad de convocar asamblea general, establecer su orden del día y presidirla, acordar el sometimiento de las cuentas de la sociedad cooperativa a informe de personas expertas e independientes, designando a las que hayan de realizarlo y suspender el abono de las subvenciones que la sociedad cooperativa tuviese concedidas o, en su caso, la tramitación de los procedimientos para su concesión cuando fuesen

de su competencia. Asimismo, podrá poner en conocimiento de otros órganos de la Administración que tramiten subvenciones la iniciación del procedimiento sancionador, para que, si estos lo deciden, procedan a la expresada suspensión, debiendo poner dicha medida en conocimiento del órgano competente para resolver.

- d) Indicación del derecho a formular alegaciones sobre el contenido y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como el plazo máximo para resolver.

El acuerdo de iniciación debe trasladarse al instructor, junto con las actuaciones realizadas, y también se notificará al denunciante y a los inculpados. En la notificación se advertirá a los inculpados que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo de 15 días que se concede para alegaciones, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

## ***2.- Instrucción: alegaciones, pruebas, propuesta de resolución y audiencia a las partes.***

Dentro de la fase de instrucción, y al igual que sucede en el procedimiento administrativo común, se comprenden las siguientes fases: alegaciones, prueba, propuesta de resolución y audiencia.

### **a) Alegaciones**

A partir de la notificación de la iniciación del procedimiento, las personas interesadas disponen de un plazo de 15 días para la formulación de alegaciones, aportación de documentos o informaciones y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que intente valerse.

Por su parte, el instructor podrá realizar de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones

que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción.

Si como consecuencia de la instrucción del procedimiento resultase modificada la determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponibles o de las responsabilidades susceptibles de sanción, se notificará todo ello al inculpado en la propuesta de resolución.

#### b) Prueba

Desarrollada en el artículo 188 del RLSCA. Concluido el trámite de alegaciones, y recibidas las mismas, el instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez conforme a los artículos 80 y 137.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. La práctica de las declaradas pertinentes debe realizarse en los términos previstos en el artículo 81 de la LRJPAC para el procedimiento ordinario<sup>58</sup> (equivalentes a los artículos 77 y 78 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

#### c) Propuesta de resolución.

Concluida, en su caso, la prueba, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución, la cual deberá contener al menos:

- Fijación de los hechos, especificándose los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica y valoración de la prueba.

---

<sup>58</sup> Artículo 81. *Práctica de prueba*

1. La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas.

2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan.

3. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.



- Determinación de la infracción que dichos hechos constituyan.
- Personas o entidades responsables.
- Sanción que se propone, medidas provisionales que se hubieran adoptado o bien declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la LSCA y artículo 170 del RLSCA.

Además de lo anterior, cuando como consecuencia de la instrucción del procedimiento resultase modificado alguno de los hechos, sanciones o responsabilidades contenidos en la iniciación del procedimiento, esta circunstancia se deberá incluir en la propuesta de resolución. Igualmente, cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible en la evaluación de los hechos, esta circunstancia también habrá de incluirse en la propuesta de resolución.

#### d) Audiencia.

La propuesta de resolución se notificará a los interesados, acompañando a la misma una relación de los documentos obrantes en el procedimiento, concediéndoles un plazo de quince días para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes.

Se podrá prescindir de este trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, salvo que el escrito de iniciación del expediente se hubiese transformado en propuesta de resolución cuando concurren los requisitos exigidos para ello en el párrafo segundo del artículo 184.3 del RLSCA.

### **3.- Resolución.**

El órgano competente para resolver puede acordar, motivadamente, la realización de las actuaciones complementarias que considere indispensables

para su resolución. En este caso, el acuerdo se deberá notificar a los interesados, concediéndoles un plazo de quince días para formular alegaciones. Estas actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince días, quedando suspendido, en este caso, el plazo para resolver el procedimiento.

En la Resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de instrucción del procedimiento, salvo lo que pueda derivarse de las actuaciones complementarias, sin perjuicio de su posible diferente valoración jurídica, en cuyo caso y de ser más grave la sanción, se le deberá notificar este extremo al interesado para alegaciones por un nuevo plazo de quince días.

La resolución del procedimiento sancionador, además de los requisitos generales que para las resoluciones se contienen en el artículo 89.3 de la LRJPAC, incluirán la valoración de las pruebas practicadas, especialmente de aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, las personas o entidades responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.

En el supuesto de que no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la iniciación, excluidos los supuestos de interrupción por causas imputables a los interesados o de suspensión o ante el orden jurisdiccional penal, se deberá declarar la caducidad del expediente.

La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador, será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. Si no pone fin a dicha vía no será efectiva en tanto no haya recaído resolución del recurso de alzada o haya recluso el plazo para interponerlo sin hacerlo.

Cuando la Resolución no sea ejecutiva, en la misma se podrán adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia hasta que sea ejecutiva con arreglo al artículo 138.3 de la Ley 30/1992 con sujeción a las

limitaciones del artículo 72 de la mencionada Ley<sup>59</sup>. Si la medida provisional fuera la que se refiere el artículo 186.1 del RLSCA, una vez recaída a resolución sancionadora y fuera firme el órgano podrá denegar la subvención solicitada o solicitar el reintegro de las partes abonadas.

### **c) La descalificación de las sociedades cooperativas**

Está regulada en el artículo 126 de la LSCA y 193 a 195 del RLSCA. Es una de las posibles sanciones que le pueden afectar a una sociedad cooperativa, pero por sus especialidades y gravedad en la vida de la sociedad merece un estudio separado del resto de sanciones.

La descalificación de una cooperativa es la medida más grave que se puede tomar a causa de una infracción. Supone la disolución forzosa de la cooperativa o posteriormente su transformación. Como hemos indicado es una medida muy grave y compleja que ha sido objeto de debate doctrinal. La

---

<sup>59</sup> *Artículo 72. Medidas provisionales*

1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello.

2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos expresamente por una norma de rango de Ley. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

3. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

4. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.

En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

adopta la Administración con consecuencias muy serias, puesto que trae consigo la disolución forzosa y en algunos casos, como veremos, la transformación de la cooperativa una vez que la resolución administrativa es firme.

### **1) Causas.**

En primer lugar las señaladas en el artículo 79, a excepción de las previstas en las letras a) y d), cuando concurriendo la sociedad cooperativa no se disolviera voluntariamente. Es decir la conclusión de su objeto o la imposibilidad de realizar la actividad cooperativizada, el acuerdo de la Asamblea General conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la LSCA, la reducción del número de socios o socias por debajo del mínimo legalmente necesario para constituir la sociedad cooperativa por un periodo superior a doce meses, la reducción del patrimonio contable hasta quedar por debajo del capital social estatutario, a no ser que, en el plazo de doce meses, se proceda a su reajuste, y siempre que no deba solicitarse la declaración de concurso, la fusión, y la escisión, en su caso, la apertura de la fase de liquidación en el concurso de la sociedad, conforme a lo dispuesto en la legislación concursal, la inactividad de alguno de los órganos sociales necesarios durante dos años consecutivos, y cualquier otra causa establecida en la ley o en los estatutos.

En segundo lugar cualquier de las conductas tipificadas en el artículo 123 de la LSCA, es decir infracciones muy graves, siempre que sean susceptibles de provocar graves perjuicios económicos o sociales, o concurra reincidencia.

### **2) Procedimiento.**

En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución los actos y trámites realizados en el procedimiento sancionador podrán servir de base a la descalificación de una sociedad cooperativa y viceversa. Aunque se prevé de aplicación el procedimiento sancionador previsto en el RLSCA y regulado en el Capítulo III del mismo, contempla algunas particularidades.

Así en el supuesto de reconocimiento de responsabilidad contemplado en el artículo 185 del RLSCA no será de aplicación cuando la descalificación tenga su causa en el artículo 126.2a) de la LSCA y reseñadas anteriormente. Asimismo en el trámite de audiencia a la sociedad se realizará con su órgano de administración o un número de personas socias no inferior a tres, salvo en los casos de cooperativas de segundo grado que serán dos. Si no es posible cumplimentar el anterior trámite se publicará en el BOJA y en la sede electrónica de la Consejería competente, dándose por realizado. En cuanto a la competencia para descalificar está atribuida al titular de la Consejería que tenga asignadas competencias en materia de cooperativas y en el caso de que se traten de Sociedades Cooperativas de Crédito, será preciso además informe previo de la Consejería competente en materia de Economía.

La descalificación se anotará preventivamente, de oficio, en el Registro de Cooperativas. Una vez firme la resolución que la declare, se inscribirá en el citado Registro, con arreglo a lo establecido en el artículo 124.5 del RLSCA, es decir mediante testimonio de la resolución administrativa que así lo acuerde, una vez que esta adquiera firmeza, e implicará la disolución de la cooperativa transcurridos dos meses sin que ésta inicie los trámites para su transformación en otra entidad, o seis meses sin que efectivamente se hubiera transformado, a menos que, en este último supuesto, concurra una causa obstativa ajena a la cooperativa.

## **DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS Y FINALES**

### **DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. APLICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.**

El contenido de los estatutos de las sociedades cooperativas andaluzas, cualquiera que sea su clase o fecha de constitución, no podrá ser aplicado en contradicción con lo dispuesto en la presente ley y su desarrollo reglamentario, reputándose carente de valor y efectos en cuanto se oponga a sus normas imperativas o prohibitivas.

### **DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. PROCEDIMIENTOS EN TRAMITACIÓN.**

A los procedimientos que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentren iniciados, les será de aplicación la normativa vigente en el momento de su inicio.

### **DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. RÉGIMEN PROVISIONAL.**

En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de esta ley, continuarán en vigor todas aquellas disposiciones de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas que no se opongan o contradigan lo dispuesto en aquella.

### **DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. DEROGACIÓN NORMATIVA**

Quedan derogadas la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas EDL 1999/61271; el Decreto 367/1986, de 19 de noviembre, de organización y funcionamiento del Consejo Andaluz de Cooperación; la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 9 de junio de 2003, por la que se establece la composición del Consejo

Andaluz de Cooperación, y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

## **DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. ADAPTACIÓN DE ESTATUTOS.**

1. Las sociedades cooperativas andaluzas constituidas conforme a la legislación anterior, así como las federaciones de cooperativas y sus asociaciones, deberán adaptar sus estatutos sociales a las disposiciones de la presente ley, mediante acuerdo de su Asamblea General adoptado por, al menos, la mayoría simple de los votos válidamente emitidos. Dicha mayoría se exigirá para la adaptación tanto a las disposiciones de índole imperativa como a las de carácter facultativo.

2. La consejería competente en materia de cooperativas, mediante orden, establecerá el procedimiento y el calendario de adaptación de los estatutos de las entidades referidas en el apartado anterior, las cuales quedarán disueltas de pleno derecho y entrarán en periodo de liquidación si no adaptan sus estatutos y solicitan del Registro de Cooperativas Andaluzas su inscripción, dentro de los dieciocho meses siguientes a la publicación del citado calendario, sin perjuicio de que, tratándose, exclusivamente, de sociedades cooperativas, puedan incurrir en infracción grave con arreglo a lo establecido en el art. 123 de no hacerlo dentro de los periodos que al efecto se establezcan en el citado calendario.

3. Aquellas entidades que hayan quedado disueltas por falta de adaptación de sus estatutos podrán reactivarse con arreglo a lo dispuesto en el art. 80, si bien dicha reactivación exigirá la mayoría establecida en el art. 33.2.

## **DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. DESARROLLO REGLAMENTARIO.**

El desarrollo reglamentario de esta ley se llevará a efecto en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.



## **DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. ENTRADA EN VIGOR.**

Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

## ÍNDICE ANALÍTICO

### A

acreedores .....	250, 254, 263, 291, 337, 350, 356, 542, 556, 561
acta de la asamblea constituyente .....	34, 39, 511
acta notarial .....	131, 139, 140, 535, 548
activo .....	10, 11, 54, 65, 112, 119, 153, 156, 236, 270, 272, 274, 288, 289, 295, 331, 332, 339, 341, 345, 346, 347, 348, 354, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 367, 368, 370, 374, 378, 392, 395, 415, 418, 431, 433, 461, 511, 530, 544, 550, 551
actualización de aportaciones .....	273
acuerdo .....	14, 18, 19, 26, 29, 30, 31, 34, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 59, 62, 67, 68, 69, 70, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 104, 106, 107, 116, 118, 119, 122, 123, 127, 130, 139, 140, 144, 145, 153, 154, 155, 161, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 178, 179, 187, 200, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 216, 221, 228, 230, 232, 235, 239, 246, 249, 250, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 288, 290, 297, 298, 299, 300, 311, 319, 325, 326, 327, 329, 332, 334, 335, 336, 341, 342, 343, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 392, 393, 395, 399, 400, 404, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 420, 421, 424, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 437, 438, 442, 447, 471, 475, 476, 477, 478, 487, 491, 493, 496, 498, 499, 500, 504, 505, 506, 507, 509, 512, 515, 527, 535, 551, 559, 560, 561, 562, 565, 567, 575, 576, 577, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 593, 594, 595, 601, 602, 604, 605, 608, 609, 610, 613
admisión .....	67
adopción de acuerdos .....	47, 71, 75, 111, 133, 153, 154, 161, 218, 226, 333, 438, 444, 496
adopción de acuerdos .....	152, 223, 229
anulabilidad .....	166
aplicación de resultados positivos .....	297
apoderamiento .....	231, 233, 234, 235
aportaciones de nuevo ingreso .....	270
aportaciones no dinerarias .....	35, 39, 259, 261, 262, 265
aportaciones obligatorias .....	9, 66, 67, 68, 91, 99, 100, 112, 118, 153, 155, 260, 263, 265, 266, 267, 268, 270, 275, 276, 277, 282, 289, 299, 301, 302, 305, 478
aportaciones reembolsables .....	282
aportaciones rehusables .....	279, 280, 283, 284
aportaciones voluntarias .....	66, 67, 267, 268, 269, 278, 283, 302, 304
asamblea constituyente .....	33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 258, 261, 511, 512, 558
asamblea general .....	8, 24, 40, 43, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111,

	112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 147, 148, 149, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 189, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 235, 236, 238, 239, 245, 246, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 274, 275, 277, 278, 280, 281, 284, 287, 288, 289, 290, 291, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 306, 308, 310, 311, 316, 318, 321, 322, 323, 327, 329, 330, 332, 333, 334, 336, 337, 340, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 353, 356, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 366, 370, 371, 374, 375, 376, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 404, 405, 407, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 431, 448, 454, 455, 459, 463, 470, 475, 476, 477, 478, 490, 492, 505, 507, 509, 512, 515, 548, 560, 564, 567, 568, 586, 610, 613
asientos .....	312, 315, 319, 340, 342, 343, 347, 351, 353, 383, 386, 393, 394, 395, 396, 512, 515, 531, 533, 534, 535, 538, 539, 542, 546, 547, 553, 554, 555, 560, 561, 563, 564
asociacionismo cooperativo .....	502
auditoría de cuentas .....	57, 313, 320, 321, 322, 324, 326, 328, 441, 448, 483

## B

baja obligatoria .....	94, 418
baja obligatoria .....	93
baja voluntaria .....	90
beneficio .....	15, 24, 26, 27, 115, 164, 167, 168, 208, 209, 275, 446, 571, 575
buena fe .....	114, 158, 163, 256, 257, 530, 534, 547

## C

caducidad .....	165, 166, 167, 169, 170, 408, 576, 585, 603, 608
capital social .....	7, 9, 23, 24, 34, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 66, 67, 73, 76, 81, 85, 93, 97, 99, 100, 101, 112, 117, 118, 173, 178, 181, 182, 185, 186, 206, 232, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 273, 275, 276, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 287, 288, 290, 293, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 308, 310, 311, 316, 317, 332, 333, 337, 338, 344, 345, 351, 367, 373, 379, 380, 384, 387, 392, 394, 400, 403, 405, 406, 423, 426, 430, 431, 432, 459, 461, 472, 485, 486, 487, 489, 490, 494, 538, 539, 544, 553, 556, 610
capital social .....	259, 287
cesión global del activo y del pasivo .....	358
clases de asientos .....	538
comité técnico.....	9, 68, 69, 70, 82, 83, 85, 86, 87, 101, 102, 103, 111, 114, 115, 116, 120, 122, 124, 125, 128, 129, 140, 158, 162, 191, 195, 199, 200, 202, 211, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 237, 238, 239, 246, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 256, 277, 312, 314, 318, 404, 405, 407, 410, 550, 560
concurso de acreedores .....	561

conflicto de intereses .....	255
consejo rector .....	8, 51, 66, 67, 70, 78, 80, 102, 110, 120, 125, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 219, 231, 232, 233, 234, 235, 248, 297, 318, 320, 334, 550
constitución .....	33, 397
contabilización .....	11, 137, 296
convocatoria .....	8, 47, 73, 105, 107, 108, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 136, 140, 153, 155, 157, 159, 160, 180, 182, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 211, 212, 217, 219, 223, 235, 239, 247, 290, 291, 318, 330, 333, 334, 335, 340, 343, 348, 353, 356, 363, 371, 376, 382, 386, 392, 393, 470, 560, 568, 586
cónyuge .....	148, 149, 218, 224, 238, 246, 460, 463, 486
cooperación empresarial .....	22, 25
cooperativas agrarias .....	476, 537
cooperativas de consumo .....	397, 451, 452, 465, 537
cooperativas de crédito .....	467
cooperativas de explotación comunitaria de la tierra .....	483
cooperativas de impulso empresarial .....	436, 441, 537
cooperativas de integración social .....	443, 481, 537
cooperativas de interés social .....	448, 537
cooperativas de primer grado .....	24, 46, 62, 63, 64, 106, 141, 259, 264, 384, 397, 398, 481, 491, 532, 552
cooperativas de segundo o ulterior grado .....	489, 490
cooperativas de seguros .....	468
cooperativas de servicios .....	14, 106, 141, 142, 143, 443, 451, 469, 473, 474, 475, 476, 483, 521, 569, 570
cooperativas de servicios públicos .....	482, 537
cooperativas de trabajo .....	397, 400, 537
cooperativas de trabajo .....	399
cooperativas de transporte .....	449, 537
cooperativas de viviendas .....	453, 537
cooperativas especiales .....	397
cooperativas marítimas, fluviales o lacustres .....	479
cooperativas mixtas .....	480, 537
cooperativismo .....	5, 14, 15, 19, 20, 25, 26, 27, 251, 307, 447, 503, 518, 521, 529, 599
cooperativista .....	80
cuentas anuales .....	57, 73, 77, 104, 110, 111, 113, 123, 129, 177, 225, 226, 229, 237, 277, 282, 291, 292, 293, 299, 301, 303, 310, 311, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 326, 327, 328, 340, 345, 348, 356, 389, 391, 441, 447, 459, 483, 511, 527, 528, 531, 532, 550, 556, 563, 564, 569
cuentas sociales .....	8
cumplimentación electrónica .....	314
cuota de ingreso .....	68, 70
cuotas periódicas .....	294

## D

defunción .....	276, 278, 279, 282, 283
-----------------	-------------------------

delito .....	241, 242, 243, 576, 595, 596, 598, 602
denominación .....	10, 12, 13, 27, 28, 29, 34, 35, 39, 46, 52, 99, 123, 127, 230, 241, 243, 333, 338, 345, 359, 362, 382, 385, 437, 443, 449, 459, 467, 468, 482, 506, 507, 509, 511, 512, 514, 515, 531, 552, 553, 562
depósito de cuentas .....	511, 516, 530, 550, 557, 563
derecho de separación .....	335, 350, 375
derecho de voto .....	141
derecho supletorio .....	548
derechos de los socios y socias .....	71
derogación .....	612
descalificación .....	571, 590
dietas .....	249
disolución .....	379
documentación social .....	311
domicilio social .....	29, 30, 31, 34, 42, 46, 73, 74, 77, 132, 135, 192, 196, 311, 316, 329, 330, 333, 334, 343, 353, 363, 369, 371, 373, 376, 511, 512, 515, 525, 532, 552, 553, 560, 584, 592, 604

## E

economía social .....	5, 19, 27, 55, 258, 368, 369, 372, 503, 505, 519, 520
ejercicio económico .....	46, 48, 90, 91, 95, 103, 108, 109, 110, 120, 124, 125, 177, 270, 271, 272, 274, 275, 277, 280, 284, 291, 292, 293, 294, 296, 302, 304, 311, 322, 325, 329, 333, 400, 403, 440, 446, 459, 470, 475, 476, 484
escisión .....	354
escritura pública .....	33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 177, 208, 233, 235, 236, 332, 342, 343, 344, 351, 353, 360, 366, 370, 371, 372, 376, 379, 382, 383, 393, 512, 535, 548, 557, 558, 559, 560, 561, 562
estatutos .....	6, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 147, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 199, 202, 204, 206, 208, 209, 211, 213, 215, 216, 219, 220, 222, 224, 225, 227, 228, 230, 233, 235, 239, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 257, 266, 268, 270, 272, 273, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289, 291, 293, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 305, 306, 313, 321, 327, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 340, 345, 348, 353, 358, 362, 366, 370, 373, 374, 378, 379, 380, 381, 383, 385, 388, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 422, 425, 431, 433, 434, 435, 437, 438, 439, 443, 444, 445, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 468, 469, 470, 471, 472, 475, 478, 480, 482, 485, 486, 487, 490, 491, 492, 493, 504, 506, 507, 510, 512, 513, 515, 530, 536, 544, 549, 551, 552, 554, 556, 558, 560, 610, 612, 613
excedencia voluntaria .....	415
exclusión .....	87

## F

federaciones de cooperativas .....	502, 503, 504, 506, 509, 510, 511, 531, 613
fomento y promoción cooperativa .....	517
fondo de formación y sostenibilidad .....	306
fondo de reserva obligatorio .....	304
fusión .....	337

## G

gastos .....	33, 38, 54, 248, 271, 295, 321, 322, 328, 450, 460, 462, 463, 586, 606
gestión .....	8, 18, 22, 23, 29, 30, 31, 48, 51, 55, 57, 59, 73, 77, 103, 110, 111, 113, 117, 118, 120, 125, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 206, 210, 213, 216, 219, 221, 222, 226, 227, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 246, 250, 252, 288, 289, 292, 293, 294, 295, 323, 325, 377, 447, 456, 459, 460, 463, 465, 483, 488, 503, 517, 523, 526, 527, 528, 529, 532, 544, 550, 563
grupo cooperativo .....	495
grupos cooperativos .....	504, 526, 536, 553, 562

## I

igualdad .....	22, 24, 26, 53
impugnación de acuerdos .....	162, 164, 208
imputación de pérdidas .....	301
incapacidad .....	217, 223, 239, 240, 241, 246, 389, 390, 400, 482, 529, 559
incapacidades, prohibiciones e incompatibilidades .....	237
infracciones y sanciones .....	568
ingresos .....	11, 54, 293, 294, 295, 440, 447, 450, 462, 555
inscripción registral .....	31, 40, 171, 336, 514, 536, 538, 551, 554, 557, 563
inspección .....	13, 16, 18, 145, 544, 564, 577, 578, 579, 598, 603
inspección cooperativa .....	16, 18, 577, 578, 579
intervención .....	101, 102, 103, 111, 114, 115, 116, 129, 158, 162, 191, 195, 218, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 237, 238, 239, 246, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 256, 312, 318, 550, 560

## L

la dirección .....	126, 233, 235
legalización telemática .....	314
libre adhesión .....	22, 23, 273
libro registro de personas socias .....	73, 76, 276, 310, 311, 316, 431, 461
libros contables .....	316, 318
libros sociales .....	310
liquidación .....	379, 388
los libros de actas de los órganos sociales .....	317

## M

memoria .....	229, 237, 292, 293
---------------	--------------------

modificación de estatutos .....	329
---------------------------------	-----

## O

objeto social .....	24, 26, 30, 31, 40, 42, 43, 45, 46, 49, 59, 63, 66, 67, 79, 111, 113, 115, 117, 147, 176, 294, 327, 329, 335, 397, 398, 400, 436, 437, 443, 445, 448, 454, 455, 460, 469, 475, 482, 484, 499, 514, 517
obligaciones .....	8, 22, 24, 26, 31, 42, 44, 49, 50, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 88, 89, 90, 93, 95, 97, 98, 100, 112, 118, 142, 153, 155, 172, 212, 220, 236, 237, 240, 255, 257, 278, 288, 289, 312, 320, 327, 337, 338, 339, 345, 346, 352, 358, 360, 367, 377, 392, 394, 400, 404, 405, 406, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 429, 434, 440, 446, 447, 454, 455, 459, 461, 480, 481, 491, 493, 557, 594, 599
obligaciones de los socios y socias .....	78
operaciones con terceras personas .....	31
operaciones finales .....	391
orden del día .....	49, 51, 69, 74, 75, 77, 83, 88, 104, 110, 116, 118, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 138, 139, 140, 148, 152, 158, 174, 178, 182, 186, 197, 198, 199, 200, 204, 206, 212, 214, 215, 232, 233, 235, 250, 253, 255, 321, 329, 330, 334, 381, 386, 567, 586, 604
órgano de administración .....	101
órgano de administración .....	102, 110, 116, 170, 171

## P

pareja de hecho .....	218, 224, 238, 246, 460, 463, 486
parentesco .....	56, 148, 150, 218, 224, 246
participaciones especiales .....	10, 289, 290, 291, 295
pasivo .....	11, 112, 119, 153, 156, 199, 236, 273, 274, 308, 331, 339, 341, 345, 346, 347, 348, 358, 359, 361, 362, 363, 365, 367, 368, 370, 374, 378, 382, 392, 395, 415, 418, 431, 433, 461, 511, 530, 544, 550, 551
patrimonio .....	28, 40, 42, 43, 45, 48, 59, 112, 117, 119, 153, 156, 173, 175, 177, 178, 206, 232, 233, 236, 237, 238, 241, 242, 251, 254, 255, 257, 258, 272, 281, 292, 293, 294, 323, 332, 339, 345, 346, 352, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 367, 373, 380, 384, 387, 447, 459, 528, 610
periodo de prueba .....	6, 12, 23, 399, 403, 404, 405, 406, 425
persona física .....	23, 62, 150, 151, 176, 181, 184, 244, 437, 446, 456, 458, 465, 466, 477, 547, 594, 595
persona inversora .....	23, 24, 98, 99, 100, 101, 268, 338, 345, 569
persona inversora .....	97
persona jurídica .....	30, 141, 146, 148, 151, 176, 181, 184, 243, 477
persona liquidadora .....	388, 390
persona no socia .....	227, 382
persona socia colaboradora .....	66
persona socia de trabajo .....	63
persona socia inactiva .....	64
personalidad jurídica .....	40
personas administradoras .....	210
personas socias .....	8, 11, 13, 14, 22, 24, 25, 26, 35, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110,



	112, 118, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 170, 171, 172, 174, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 193, 200, 207, 208, 209, 210, 213, 218, 220, 221, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 238, 239, 246, 247, 249, 251, 252, 257, 258, 259, 263, 264, 265, 267, 269, 270, 273, 274, 275, 276, 280, 281, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 295, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 307, 309, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 334, 335, 337, 338, 341, 342, 343, 345, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 406, 407, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 420, 423, 426, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 437, 438, 439, 440, 441, 444, 445, 446, 447, 450, 451, 452, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 466, 467, 469, 470, 471, 474, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 489, 490, 491, 492, 494, 499, 500, 502, 503, 514, 538, 539, 553, 560, 569, 570, 574, 591, 601, 611
plazos .....	15, 47, 73, 83, 91, 99, 100, 109, 120, 123, 130, 164, 195, 201, 210, 261, 265, 266, 267, 270, 276, 281, 282, 321, 330, 333, 334, 408, 434, 440, 458, 459, 462, 485, 486, 496, 498, 557, 568, 605
prescripción de infracciones y sanciones .....	84, 408, 571, 575
principios .....	22
principios registrales .....	533
procedimiento disciplinario .....	82, 407
procedimiento registral .....	509
procedimiento sancionador .....	409, 583
proporcionalidad .....	572, 596
prueba .....	12, 80, 89, 139, 168, 169, 402, 403, 404, 405, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 546, 565, 566, 587, 605, 606
publicación .....	69, 92, 96, 122, 123, 128, 129, 157, 244, 263, 264, 330, 332, 334, 336, 341, 349, 350, 357, 359, 360, 363, 364, 365, 366, 370, 376, 382, 385, 395, 470, 510, 513, 595, 613, 614
publicidad .....	29, 349, 374, 533, 546, 563

## Q

quorum .....	107, 114, 134, 138
--------------	--------------------

## R

reactivación .....	387
reducción .....	37, 262, 313, 314
reembolso .....	47, 69, 90, 99, 100, 174, 179, 207, 268, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 290, 311, 317, 333, 335, 337, 342, 344, 350, 360, 387, 392, 394, 419, 440, 450, 459, 462, 463, 486, 487
reembolso .....	275
régimen de prestación del trabajo .....	411, 412
régimen disciplinario .....	81
régimen interno .....	72, 73, 76, 114, 411, 434
régimen sancionador .....	564, 572
régimen social .....	7, 8, 16, 17, 38, 488

registro de cooperativas .....	15, 16, 18, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 72, 114, 164, 166, 169, 173, 177, 183, 187, 202, 205, 208, 216, 221, 225, 228, 231, 233, 258, 260, 262, 265, 271, 272, 310, 312, 313, 314, 315, 319, 321, 322, 328, 329, 336, 338, 342, 343, 345, 351, 353, 359, 360, 361, 362, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 376, 379, 380, 381, 382, 383, 385, 387, 393, 394, 395, 465, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 526, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 538, 543, 544, 545, 546, 549, 551, 552, 553, 557, 558, 560, 563, 569, 572, 592, 611, 613
registro de cooperativas andaluzas .....	15, 16, 18, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 72, 164, 166, 169, 183, 187, 205, 216, 225, 231, 260, 262, 265, 271, 272, 310, 312, 321, 322, 328, 329, 338, 342, 343, 345, 351, 353, 359, 360, 362, 368, 369, 371, 372, 380, 381, 382, 383, 385, 393, 394, 465, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 516, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 543, 545, 549, 551, 560, 569, 613
registro mercantil .....	184, 545, 549
regularización del balance .....	273
rehúse de aportaciones .....	48, 279
remuneración de las aportaciones .....	268, 269
representación .....	147, 148, 149, 150
responsabilidad .....	40, 257
responsabilidad social .....	249
retornos cooperativos .....	24, 299
retribución .....	248

## S

secciones .....	48
seguridad social .....	44, 243, 429, 433, 434, 435, 436, 440, 446
sociedad cooperativa irregular .....	41
sociedad mercantil .....	120, 247, 317
sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado .....	397
socios y socias temporales .....	429
sostenibilidad empresarial y medioambiental .....	22, 26
sucesión de empresa .....	426, 429

## T

telemático .....	7, 38, 72, 76, 121, 124, 127, 128, 130, 190, 191, 195, 543, 549, 558
tercero de buena fe .....	547
transformación .....	368
transmisión de las aportaciones .....	284
transmisión de participaciones .....	419, 420, 471

## V

voto .....	6, 8, 14, 23, 71, 75, 88, 90, 95, 97, 106, 131, 133, 136, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 195, 197, 205, 207, 208, 209, 210, 220, 227, 234, 237, 256, 288, 335, 350, 364, 375, 383, 391, 431, 433, 438, 444, 469, 470, 474, 475, 476, 484, 485, 490, 492, 513, 515, 570
------------	--

## BIBLIOGRAFÍA

**ALCHIAN, ARMEN.; DEMSETZ, HAROLD.** "Production, information costs and economic organization". *American Economic Review*", 62, nº 5. 1972.

**ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL.** "La Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional sobre la Identidad cooperativa: un informe". *Anuario de Estudios Cooperativos* 1995. Bilbao. Universidad de Deusto.

**ÁLVAREZ LÓPEZ, JOSÉ.** La contabilidad de dirección estratégica como apoyo a la excelencia empresarial.

**BAREA, JOSÉ Y MONZÓN, JOSÉ LUIS.** La economía social en España en el año 2000, Ciriec - España edl., Valencia.

**BORJABAD GONZALO, PRIMITIVO.** "El registro general de cooperativas de Cataluña".

**CABALLERO REAL, JOSÉ MIGUEL.** Asociacionismo cooperativo. Comentarios a la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas. Biblioteca de la Economía Social Andaluza. CEPES. Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Dirección General de Economía Social. 2002.

**CÁMARA BOTÍA, ALBERTO.** "La potestad sancionadora de la Administración en el orden social: cuestiones generales", en AA.VV (Cavas Martínez, F. y Luján Alcaraz, J., Dirs.): *Infracciones y sanciones en el orden social. Régimen jurídico*, Murcia (Laborum), 2009, p. 21.

**CES ANDALUCÍA.** Dictamen 3/2014 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas,. 2014.

**CHAVES, RAFAEL, MONZÓN, JOSÉ LUIS.** Economía Social y empleo en la Unión Europea, Ciriec-España edl., Valencia.

**CUADRADO SERRÁN, MARIO y CIRUELA LORENZO, ANTONIO MANUEL.** "Las sociedades cooperativas y sociedades laborales como motor de desarrollo económico y social: análisis de su impacto socioeconómico en la región de Andalucía". *Revesco. Revista de Estudios Cooperativos* 2014.

**DEFOURNY, JACQUES Y MONZÓN, JOSÉ LUIS.** (dir), 1992, Economía Social. Entre economía capitalista y economía pública, Ciriec-España edl, Valencia.

**DICTAMEN 3/2014 DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA** sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, Dictamen 3/2014-CES Andalucía.

**DOMENECH PASCUAL, GABRIEL.** “El principio de legalidad y las potestades administrativas”.  
<http://www.uv.es/gadopas/2014.principio.legalidad.potestades.administrativas.pdf>

**ELORZA DEL RÍO, AFRICA.** Guía Práctica sobre la incapacidad judicial y otras actuaciones en beneficio de las personas discapacitadas. Fundación Tutelar de La Rioja. 2004.

**ESCUELA DE ECONOMÍA SOCIAL, FIDES DIRECTIVOS Y DIRECTIVAS 2015.** Estudio sobre los fundamentos del Nuevo Reglamento (Decreto 123/2014). 2015.

**ESTUDIO SOBRE LOS FUNDAMENTOS DEL NUEVO REGLAMENTO (DECRETO 123/2014).** Escuela de Economía Social, FIDES Directivos y Directivas 2015.

**FAJARDO GARCÍA, ISABEL GEMMA.** Cooperativas: régimen jurídico y fiscal, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011.

**FAYOS FEBRER, JUAN BAUTISTA.** Comentando la LSC (39): El ámbito subjetivo del conflicto de intereses en la SL. ST del TS de 26 de diciembre de 2012.  
<http://mercantiljbfayos.blogspot.com.es/2013/03/comentando-la-lsc-39-el-ambito.html>

**FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, CARLOS RUBÉN.** La economía Social y las personas con discapacidad. CIRIEC, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. 2003.

**FERNÁNDEZ SESSAREGO, CARLOS.** “Derecho de las Personas”- 6ª Edición. Editorial Grijley – Lima. 1996.

**FLORES PÉREZ, ALFREDO.** Infracciones y Sanciones. Comentarios a la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas. Biblioteca de la Economía Social Andaluza. CEPES. Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Dirección General de Economía Social. 2002.

**GARCÍA MARTÍ, ELIA Y ARANDA OGAYAR, MANUEL.** Problemas existentes en la profesionalización de la gestión en la sociedad cooperativa, investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa vol. 7, nº 3, 2001, pp 139-154. Universidad de Jaén.

**GARCÍA-VILLARUBIA BERNABÉ, MANUEL.** La competencia Objetiva de los Juzgados de lo Mercantil. <http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1609/documento/art04.pdf?id=2162>.

**GONZÁLEZ-SANTIAGO GRAGERA, EDUARDO.** Registro de Cooperativas Andaluzas. Comentarios a la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas. Biblioteca de la Economía Social Andaluza. CEPES. Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Dirección General de Economía Social. 2002.

**GUILLÉN SERRANO, MARÍA AUXILIADORA.** Promoción cooperativa. Comentarios a la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas. Biblioteca de la Economía Social Andaluza. CEPES. Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Dirección General de Economía Social. 2002.

**INTERVENCIÓN DE FAECTA EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA ANTE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA** con motivo de la tramitación del proyecto de Ley 8-11/pl-000008, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, 2011.

**LÓPEZ GALLARDO, JOSÉ RAMÓN.** Excepciones en la aplicación del principio del tracto sucesivo. <http://www.iuriscivilis.com/2011/06/excepciones-en-la-aplicacion-del.html>. 2011.

**MARTÍN ROMERO, JUAN CARLOS.** “Constitución de la cooperativa. Modificación de estatutos, fusión escisión y transformación. Disolución y liquidación. Comentarios a la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas. Biblioteca de la Economía Social Andaluza. CEPES. Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico”. Dirección General de Economía Social. 2002.

**MARTÍNEZ MANEIRO, BEGOÑA.** “Estudio del régimen de inspección y sanción en la ley de sociedades cooperativas de Euskadi y comparativa con la regulación de esta materia en el resto de leyes cooperativas autonómicas vigentes y la ley estatal”. Revista Vasca de Economía Social. 2011.

**MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO.** El principio non bis in idem y la subordinación de la potestad sancionadora administrativa al orden jurisdiccional penal. Noticias Jurídicas. 2011.

**MEINI MÉNDEZ, IVÁN.** “La Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas”. Fondo Editorial de la PUCP- Lima. 1999.

**MUÑOZ CONDE, FRANCISCO.** “Derecho Penal-Parte General y Especial”, Editorial Tirant lo Blanch - 8º y 19ª Edición, Valencia- 2010 y 2013.

**PALACIO PIMENTEL, HÉCTOR GUSTAVO.** “Manual De Derecho Civil-Tomo I”-3ª Edición. Editorial Huallaga – Lima. 2000.

**PANIAGUA ZURERA, MANUEL.** Notas críticas a la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, CIRIEC-España, Revista Jurídica Nº 24/2013.

**PERALTA ARCO, RAFAEL.** “La competitividad de las cooperativas oleícolas ante el nuevo marco jurídico”. Economista. Revista MERCACEI. Mayo 2013.

**PERALTA ARCO, RAFAEL.** “Régimen económico. Aportaciones al capital social” Jornadas de la ley de cooperativas y adaptaciones estatutarias. Málaga 2014.

**PERALTA ARCO, RAFAEL.** “La necesaria adaptación estatutaria en las Cooperativas Andaluzas”. Revista Mercacei nº 84. Mayo 2015.

**PERALTA ARCO, RAFAEL,** “La Reforma Jurídica de las Sociedades Cooperativas. Retos y oportunidades para su desarrollo” Jornadas Cooperativismo agroalimentario: cambios y retos. Enero de 2016.

**RAMÍREZ DE ARELLANO ESPADERO, LUCIANO.** “Jornadas sobre Cooperativismo Andaluz” Colegio titulares Mercantiles de Málaga. Noviembre de 2015.

**RAMÍREZ DE ARELLANO ESPADERO, LUCIANO.** Artículo: “La Nueva Legalidad Cooperativa Andaluza” Revista Andalucía Económica. 2015.

**RIVERO LÓPEZ, ANTONIO.** Entrevista en Radios Comunitarias sobre la nueva Ley de Cooperativas <http://www.emartv.es/2015/06/19/antonio-rivero-6/> 2015.

**RODRÍGUEZ ESCANSIANO, SUSANA.** La potestad sancionadora de la Administración en el ámbito laboral. Revista On line del Instituto Nacional de Administración Pública.

**ROMERO CANDAU, PEDRO.** Parte Especial. Comentarios a la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas. Biblioteca de la Economía Social Andaluza. CEPES. Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Dirección General de Economía Social. 2002.

**SACRISTÁN BERGIA, FERNANDO.** El riesgo de responsabilidad del Órgano de administración de las cooperativas en situaciones de insolvencia, y de pérdidas patrimoniales.

<http://pendientedemigracion.ucm.es/info/revesco/txt/REVESCO%20N%2089.5%20Fernando%20SACRISTAN%20BERGIA.htm>

**SÁNCHEZ, ANA MARÍA.** Intervención de CEPES Andalucía en el parlamento andaluz ante la comisión de economía, innovación y ciencia con motivo de la tramitación del proyecto de Ley 8-11/pl-000008, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, 2011.

**SANJUÁN JURADO, LOLA.** Intervención de Amecoop - Andalucía en el Parlamento de Andalucía ante la Comisión de Economía, Innovación y Ciencia con motivo de la tramitación del proyecto de Ley 8-11/pl-000008, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, 2011.

**SEDA HERMOSÍN, MANUEL.** Órganos Sociales. Libros y Contabilidad. Comentarios a la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas. Biblioteca de la Economía Social Andaluza. CEPES. Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Dirección General de Economía Social. 2002.

**SUÁREZ PALOMERARES, EUGENIO.** Parte General. Comentarios a la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas. Biblioteca de la Economía Social Andaluza. CEPES. Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Dirección General de Economía Social. 2002.

**TOMÁS CARPI, JUAN ANTONIO Y MONZÓN, JOSÉ LUIS.** Libro blanco de la economía social en la Comunidad Valenciana, Ciriec-España edl. Valencia. 1998.

**VIENNEY, CLAUDE.** L'économie sociale, Paris, La Découverte. 1994.

**VIGERA REVUELTA, RODRIGO.** El Derecho de reembolso en las sociedades cooperativas, Salamanca, Tirant lo Blanch, 2015.

**VIVES ANTON, TOMÁS.** "Fundamentos Del Sistema Penal", Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 1996.

**ZAMBONINO PULITO, MARÍA.** "Apuntes de Derecho Administrativo". Universidad de Cádiz, 2014.

**ZUGALDIA ESPINAR, JOSÉ MIGUEL.** "La Responsabilidad Criminal De Las Personas Jurídicas en El Derecho Penal Español".





JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO



***faecta***

FEDERACIÓN ANDALUZA DE EMPRESAS  
COOPERATIVAS DE TRABAJO

# FAECTA SEDE CENTRAL

Alameda de Hércules, 32-33  
41002 Sevilla  
T: 954 90 29 66  
F: 954 90 29 58  
[www.faecta.coop](http://www.faecta.coop)  
[faecta@faecta.es](mailto:faecta@faecta.es)

## RED TERRITORIAL

.....

FAECTA en ALMERÍA  
C/ Gregorio Marañón, 43. Local 5 y 6  
04005 Almería  
T. 950 22 48 16  
[almeria@faecta.coop](mailto:almeria@faecta.coop)

FAECTA en CÁDIZ  
C/ Ecuador, 2. Local C  
11007 Cádiz  
T. 956 25 16 21  
[cadiz@faecta.coop](mailto:cadiz@faecta.coop)

FAECTA en CÓRDOBA  
Edificio de la Economía Social  
C/ María Montessori s/n  
14011 Córdoba  
T. 957 01 34 50  
[cordoba@faecta.coop](mailto:cordoba@faecta.coop)

FAECTA en GRANADA  
C/ Buen Suceso, 26-bajo.  
18002 Granada  
T. 958 26 23 05  
[granada@faecta.coop](mailto:granada@faecta.coop)

FAECTA en HUELVA  
C/ Duque de Ahumada, 4, bajo B.  
21004 Huelva  
T. 959 25 72 78  
[huelva@faecta.coop](mailto:huelva@faecta.coop)

FAECTA en JAÉN  
C/ San Clemente, 3, 4ª pta.  
23001 Jaén  
T. 953 23 00 12  
[jaen@faecta.coop](mailto:jaen@faecta.coop)

FAECTA en MÁLAGA  
C/ Ivan Pavlov, Bloque 3, oficina F  
PTA. 29590 Campanillas  
(Málaga)  
T. 952 02 05 44 // 45  
[malaga@faecta.coop](mailto:malaga@faecta.coop)

FAECTA en SEVILLA  
Ronda de Capuchinos, 4 bloque 5  
1 planta local derecho  
41003 Sevilla  
T. 954 987 928  
[sevilla@faecta.coop](mailto:sevilla@faecta.coop)



[www.faecta.coop](http://www.faecta.coop)



Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo  
Facebook: [facebook.com/faecta](https://facebook.com/faecta) | Twitter: [@faecta\\_](https://twitter.com/faecta_)



[www.faecta.coop](http://www.faecta.coop)



[geodirectorio.cooperativasandaluzas.es](http://geodirectorio.cooperativasandaluzas.es)



[lacentral.coop](http://lacentral.coop)